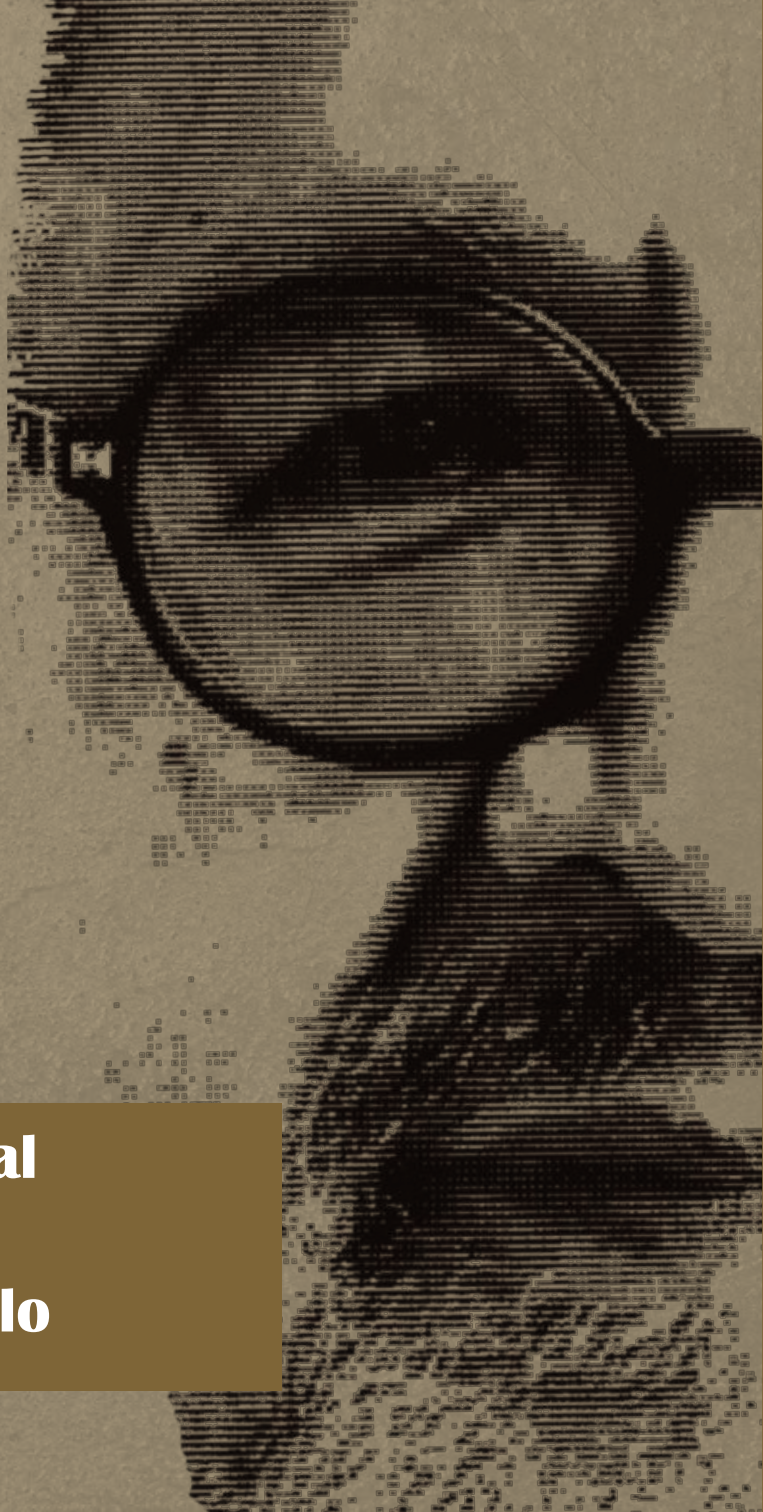
OEP
Órgano Electoral Plurinacional
Bolivia
DEMOCRACIAS EN EJERCICIO



Antología Esencial

Fernando Calderón G.

La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo

TOMO II

La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo

Colección **Pensamiento Político y Demodiversidad**

Fernando Calderón Gutiérrez

La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo

Antología esencial

Tomo II

Política y movimientos socioculturales

OEP
Órgano Electoral Plurinacional
Bolivia
DEMOCRACIAS EN EJERCICIO

CLACSO

La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo: antología esencial.

Fernando Calderón Gutiérrez

Colección Pensamiento Político y Demodiversidad

© Órgano Electoral Plurinacional (OEP)
Tribunal Supremo Electoral - Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE)

Av. Sánchez Lima N° 2482, Sopocachi
Teléfonos: (+591) 2424221 - 2422338
www.oep.org.bo
La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Secretaría Ejecutiva

Estados Unidos 1168 - C1023AAB
Teléfonos: (+54 11) 43049145
www.clacso.org
Buenos Aires, Argentina

Primera edición digital, CLACSO, marzo de 2017
Primera edición impresa, diciembre de 2017
Tiraje: 700 ejemplares
Depósito legal: 4-1-610-17 P.O.
ISBN Obra completa: 978-99905-928-6-3
ISBN Tomo II: 978-99905-928-8-7
Impresión: Editora Presencia

Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada
(CC BY-NC-ND)
Se autoriza la reproducción en cualquier medio sujeta a la mención de la fuente.

Impreso en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

Distribución gratuita

Índice

Presentación 7
José Luis Exeni Rodríguez

TOMO II
Política y movimientos socioculturales

"Disculpe la molestia, estamos cambiando el país". Politicidad y protestas: los jóvenes en Chile, México y Brasil (2014) 13
Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler

Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina (2012) 23

Movimientos culturales y la emergencia de una nueva politicidad (2011) 63

La revelación de los bordes o repensando la portada de San Lorenzo (2010) 81

Ciudadanía y desarrollo humano (2007) 89

La participación local como factor estratégico de la reforma del Estado (2005) 127

Ciudadanía activa y desarrollo sostenible (2004) 139
Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler

Cultura de igualdad, deliberación y desarrollo humano (2004) 179

América Latina en la era de la información. Cambio estructural, crisis, actores sociales, procesos de transformación (2003) 241
Fernando Calderón G. y Manuel Castells

Entre el gobierno de los Diablos y el gobierno de los Ángeles (2002) 321

Bolivia. Un siglo de luchas sociales (1999) 333

Muralismo y revolución nacional (1998) 361

Diversidad cultural y ciudadanía (1997) 375

¿Todo lo que se termina se acaba? La sociedad y el ciclo estado-nación (1995) 383
Fernando Calderón G. y Mario R. dos Santos

Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas
y un corolario de cierre (1991) 413
Fernando Calderón G. y Mario R. dos Santos

"Esa hoja verde y divina la coca es" (1989) 451

Los movimientos sociales frente a la crisis (1986) 461

Presentación

José Luis Exeni Rodríguez
Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral

Fernando Calderón Gutiérrez es, sin duda, uno de los más lúcidos y prolíficos intelectuales bolivianos. Leer la realidad nacional y regional a través de su obra es recorrer los meandros de las múltiples formas que adquieren la conflictividad, los movimientos sociales, la acción colectiva y la institucionalidad democrática en nuestra Latinoamérica.

Por ello hemos querido inaugurar la colección "Pensamiento Político y Demodiversidad" recogiendo parte fundamental de su obra, que se expresa en la presente *Antología esencial*. Y es que esta colección quiere irradiar las ideas y trabajos de pensadores y pensadoras contemporáneos, cuyas obras y aportes epistemológicos y teóricos constituyen una contribución fundamental para comprender las problemáticas que hacen al ejercicio de los derechos políticos y a la vida democrática en Bolivia y América Latina desde una perspectiva integral, crítica e interdisciplinaria.

Con esta colección, el Órgano Electoral Plurinacional pretende contribuir al desarrollo del pensamiento político boliviano en el marco de la construcción del Estado Plurinacional y de la Democracia Intercultural y Paritaria; con sociedades que fortalezcan los mecanismos democráticos y de diálogo permanente sobre procesos de (alternativas al) desarrollo con inclusión e igualdad social, con pluralismo y diversidad, con interculturalidad y paridad democrática, con horizonte emancipatorio.

La *Antología esencial* de Fernando Calderón está dividida en dos tomos: el primero enfocado en los desafíos de la *política y el desarrollo*, y el segundo enfocado a la *política y los movimientos socioculturales*; en ambos casos se recoge la reflexión intelectual de cuatro décadas, que oscila entre lo global, lo nacional y lo regional. Son dos volúmenes que, en sus letras, no reconocen frontera, y que construyen una semblanza de lo global –algo en lo que Cal-

derón fue precursor– antes incluso de que esta forma de aprehender la realidad fuera, o nos pareciera, una necesidad.

El primer tomo, con doce ensayos, aborda desafíos tremendamente actuales y/o persistentes, como, paradójicamente, es *el cambio*. Así, Calderón articula, por ejemplo, sobre la gestión de la información en tiempos de *posverdad*, los alcances del cambio político en Latinoamérica, la construcción de liderazgos en un contexto de inflexión histórica y los desafíos latinoamericanos frente a un desgastado neoliberalismo.

El segundo tomo, con diecisiete ensayos, incluso desde la lontananza y con claridad estratégica, reflexiona acerca de temas que marcaron y aún marcan la agenda pública, como la hoja de coca y los movimientos sociales y su potencial transformador. Y en sus ensayos más actuales, hilvana y deshilvana las distintas formas que adquiere el conflicto social en América Latina, el rol de las jóvenes y los jóvenes en la transformación de la realidad y, con ellos, la emergencia de una nueva politicidad, con hincapié en hitos bolivianos que contribuyen a la reflexión crítica del pensamiento político regional.

De los 29 ensayos que hoy tenemos el gusto de presentar, muchos son reflexiones individuales y, otro tanto, reflexiones con Alicia Szmukler, Caterina Colombo, Daniel Moreno, Ernesto Ottone, Mario R. dos Santos, Manuel Castells, Martín Hopenhayn y Norbert Lechner, siguiendo una de las principales características de la construcción del pensamiento de Calderón: tejer en diálogo constante, en diálogo crítico, haciendo lectura de lecturas y con otras lecturas.

Es importante recordar que la presente publicación, que inaugura esta serie editorial, es fruto de un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) –del que Calderón fue Secretario Ejecutivo entre 1984 y 1991– para desarrollar y promover la difusión del debate y el pensamiento crítico regional. Materializar dicho acuerdo con el libro *La Construcción Social de los Derechos y la Cuestión Social del Desarrollo* de Fernando Calderón no es casual. Es un reconocimiento, un homenaje.

Que sea esta, entonces, parada obligatoria para quien quiera explorar el pensamiento nacional desde una perspectiva global, así como para quien busque explorar el pensamiento regional desde una perspectiva nacional. Que sea esta, pues, invitación ineludible para alentar el diálogo plural y la deliberación pública en nuestras democracias en ejercicio.

Segunda Parte

POLÍTICA Y MOVIMIENTOS SOCIOCULTURALES

"Disculpe la molestia, estamos cambiando el país"

Politicidad y protestas: los jóvenes en Chile, México y Brasil*

Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler**

Hace años, el antropólogo y voluntario internacional de la guerra de España John Murray, conversando sobre el sentido de cambio en el mundo andino, nos decía que el cambio era continuo, que no se podía evitar. La cuestión era qué clase de cambio se experimentaba y en qué profundidad. "El cambio no me preocupa —decía él—, lo que me preocupa es la pérdida del logro andino". Pierdes el chuño y ésta es una pérdida fundamental, pues se reemplaza con un pan cualquiera, hecho con una harina cualquiera. El cambio es inevitable, el asunto es juzgar cuál es el cambio que nos conviene más. El sentido del cambio que aquí interesa resaltar está asociado con el bienestar cultural perseguido por los actores de la transformación y ciertamente con sus posibilidades.

Sociedades en cambio

Las sociedades latinoamericanas son cada vez más pluricéntricas y vienen experimentando cambios que aumentan su complejidad, tanto en términos de su diferenciación sociocultural como de la multiplicación y a la vez fragmentación de conflictos. Hay un desigual dinamismo de economías incorporadas de manera limitada pero más interdependiente en los procesos de crisis y transformación global. Se cambió con el neoliberalismo, en general para peor. Se cambia con las experiencias neo-desarrollistas y neo-populistas, a veces con importantes avances, como el reconocimiento de los pueblos originarios, la disminución de la pobreza y la recuperación de la dignidad, pero los proble-

* Este trabajo fue publicado originalmente en el *dossier* del periódico español *Vanguardia* Nº50 (2014).

** Agradecemos los comentarios de Dulci Medeiros y Sergio Zermeño.

mas y las protestas por la desigualdad son centrales en todas las sociedades del continente y estamos lejos de experimentar mutaciones que den nuevos sentidos a la vida colectiva y personal. Los sistemas de partidos cada vez están más obsoletos y los mecanismos de representación y delegación institucional no alcanzan a representar la complejidad sociocultural de estos países. Solo la fuerza de líderes carismáticos en regímenes fuertemente presidencialistas puede vincular temporalmente el Estado con la sociedad.

Se ha avanzado en bienestar social y la democracia electoral está consolidada, pero el pluralismo político ha mermado. Los procesos de modernización tecno-económica y cultural que la mayoría de los países de la región ha experimentado tienden también a generar malestar e insatisfacción. La inseguridad, el miedo y la urbanización caótica erosionan los tejidos sociales. Se vive un tiempo de incertidumbres y conflictos fuertemente asociados, cuando no producidos, por la "Era de la información", en el que ya todos son parte de nuevas relaciones de poder en sociedades en redes, economías informatizadas y mercados de consumo cada vez más globales e individualizados. Las sociedades y las economías se transformaron, pero el desarrollo humano aún no se consolidó y no hay garantías, prácticamente en ningún país, para una gobernabilidad en el largo plazo.

La argumentación que venimos trabajando en varios estudios empíricos realizados es que dadas las características de las condiciones mencionadas y las subjetividades en estas sociedades, es posible pensar que un nuevo tipo de politicidad está emergiendo como respuesta al malestar. Politicidad entendida como la búsqueda de un nuevo sentido de la vida y la política, que potencialmente puede renovar la idea de cambio y las formas de acción social más cercanas a una deliberación democrática que a un mero incrementalismo en la participación social.

Sociabilidad y politicidad de los jóvenes en la sociedad red

Identificamos a la generación actual de jóvenes como la "generación de la tecno-sociabilidad". Lo que la distingue de otras son sus experiencias vitales no sólo en relación con la democracia, el desarrollo, la violencia, la exclusión y la diferenciación social, sino muy especialmente con la expansión de una cultura comunicacional, tanto en el plano real

como en el imaginario. Hoy existen usos socialmente incluyentes y por cierto motivantes de las TICs: estar en la red es parte de la vida con otros. La tecno-sociabilidad es vista como experiencia cotidiana y recurrente de comunicación e inter-subjetividad asociada al uso de los medios horizontales de comunicación de masas (Internet y celulares, con sus múltiples utilizaciones y aplicaciones y constantes actualizaciones) y está modificando los patrones de conocimiento y de aprendizaje. Ello se expresa en las diversas dimensiones de la cotidianidad: trabajo, estudios, hogar, sexo, entretenimiento, protestas. Las TICs no son herramientas o fines en sí mismos, sino ámbitos que permiten nuevas formas de ser, donde se ponen en juego valores, se construyen identidades y se expresan sensibilidades culturales, sociales, ecológicas, estéticas, políticas. Por otra parte, esta tecno-sociabilidad no se produce en el vacío, sino sobre las experiencias y tradiciones socioculturales, nacionales y locales de los jóvenes. Tampoco es exclusiva de ellos, pero ellos son sus principales constructores.

Al respecto, la red se ha convertido en el lugar donde se expresan y se desarrollan las nuevas formas de conflicto y poder. La cultura de la tecno-sociabilidad no sólo cambia la vida cotidiana de las personas y las comunidades, sino también la política. En cuanto a los conflictos sociales, la política mediática juega un papel relevante, puesto que realizar una protesta o una marcha en donde no estén presentes los medios de comunicación verticales (televisión, radio y periódicos) u horizontales (Internet y celulares) se traduce en una baja repercusión de la demanda y menores probabilidades de que ésta tenga una respuesta positiva. La comunicación es cada vez más una comunicación pública. Las personas se juntan en las calles y en las redes.

Las nuevas formas de comunicarse promueven un uso intensivo de las TICs en el espacio público. Éste se entiende como un lugar de "encuentro", donde las ideas y los valores se forman, transmiten, intercambian, respaldan y combaten. Las TICs permiten una interacción más ágil, flexible y espontánea entre los actores, quienes gracias a ellas pueden participar más activamente en política. Así, se amplían las posibilidades de acción colectiva debido al fácil acceso y a los bajos costos de Internet y de la telefonía móvil[1]. Participar en una red social

1 Entre 2002 y 2010, gran parte de los países de la región duplicó el nivel de uso de Internet (Latinobarómetro, 2010). Cerca del 80% de los latinoamericanos posee y

está más al alcance que otras formas de participación política.

Las protestas cada vez más se caracterizan por nacer en las redes, donde una demanda, un reclamo o un malestar, se expresan, discuten y transmiten muy rápida y espontáneamente a miles de personas en corto tiempo. En las redes, las personas pueden organizarse frente al conflicto e intercambiar información. El "ciberactivismo", que promueve deliberación y acción concertada en la red y en las calles, ya es un dato de la realidad política latinoamericana y mundial[2].

La globalización no solo ha producido concentración de poder, también ha traído como consecuencia el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas en las que prima la espontaneidad, el voluntarismo del activismo político y la auto-organización. Ello lleva a repensar individualmente los proyectos colectivos en la red, los cuales a su vez pueden revalorizar la libertad y la dignidad de las personas. Asimismo, la red viabiliza un tipo de politicidad en el que las relaciones directas y horizontales entre ciudadanos, sin intermediación de estructuras partidarias o institucionales formales, es posible, pues allí no existe la rigidez de normas o jerarquías que restrinjan una participación más amplia. Son espacios más abiertos, que permiten la espontaneidad y la expresión individual y un tipo de comunicación más "democrática" a la cual los jóvenes de hoy están "acostumbrados", dado que felizmente crecieron en condiciones políticas también más democráticas en nuestros países[3]. Asimismo, es interesante cómo pasan de la red a la calle y viceversa. En este contexto, sobresalen las protestas de los jóvenes chilenos, mexicanos y brasileros.

utiliza un teléfono celular.

2 Con base en datos provenientes de la encuesta LAPOP, reelaborados por Moreno (2013: 11), se encontró que hay una relación positiva entre ser usuario frecuente de Internet y participar en protestas políticas, "pero es el hecho específico de ser políticamente activo en la red el que tiene un efecto más importante sobre la participación en protestas y manifestaciones". Internet es una opción que incrementa la participación, pero no un espacio que nuclea sólo a quienes se sienten excluidos de la política tradicional.

3 También se comprobó que el uso frecuente de Internet está asociado positivamente con el respeto de las diferencias, la tolerancia y la aceptación de opiniones diversas, es decir con menor autoritarismo (*Ibid.*, 13).

Movimientos de jóvenes en Chile, México y Brasil

Los *jóvenes chilenos*, recuperando la memoria de Allende en la Alameda ("Se siente, se siente, Allende está presente"), están proyectando un nuevo tipo de vida: sus múltiples demandas se centran, ni más ni menos, en el papel estratégico que tiene para una sociedad emancipada y democrática una educación inclusiva y de calidad.

En mayo de 2011, jóvenes estudiantes universitarios comenzaron a manifestarse por una educación pública de calidad y gratuita. Sus demandas puntuales eran el pago de las becas estudiantiles y un aumento de las mismas; la disminución de los intereses de los préstamos para la educación; la participación estudiantil en el diseño y en la gestión de las políticas educativas y en las universidades; un mayor control del Estado con respecto a las universidades privadas.

Aunque el movimiento se centraba en el ámbito educativo, generó reflexión y debate en la sociedad y fue ganando legitimidad (el 85% de los ciudadanos lo apoyó). Ello hizo que se empezaran a cuestionar otros ámbitos de la esfera pública (el sistema de salud, los problemas de vivienda, el sistema de pensiones), articulándolos en torno a un nuevo modo de vida más "latinoamericano", que rechaza la perspectiva neoliberal en relación con las políticas públicas y busca inclusión y justicia social, ampliación de la participación ciudadana y profundización de la democracia en términos de extensión y reconocimiento de derechos (por ejemplo, cuestiona el accionar del Estado en relación a las minorías étnicas, especialmente a los mapuches; pero también critica el deterioro del medioambiente, el racismo y el sexismo presentes en la sociedad chilena). Asimismo, la participación que generó el movimiento rebasó los límites del sistema de partidos y también lo cuestionó.

El movimiento se inició en las redes sociales, pero luego fue ganando espacio en las calles y comenzó un proceso de negociación con el gobierno. De composición ideológica diversa, incluye corrientes de izquierda (comunistas, anarquistas), así como estudiantes independientes que quieren participar en la construcción de otro tipo de universidad y de una sociedad distinta de la pautada por los mercados. El carácter democrático del movimiento se observa en los debates públicos y en las decisiones que se toman mayoritariamente en asambleas.

Si bien el movimiento aún no ha logrado sus metas, los cambios generados en la agenda política y cultural chilena son evidentes. ¿Podrá

integrar el sistema de partidos estas demandas? ¿Podrán hacerlo el liderazgo carismático de la probable presidenta Bachelet? ¿O las protestas se reiniciarán construyendo una nueva dinámica del conflicto y el cambio?

En el contexto de las elecciones nacionales en 2012 en México, el *Movimiento YoSoy132* surge como respuesta de un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, cuando en mayo de ese año, luego de una conferencia brindada allí por el entonces candidato a la presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto, se producen incidentes a raíz de que justificara la represión de una manifestación de jóvenes ocurrida en 2006 cuando era gobernador del estado de México. Esos incidentes fueron grabados en celulares y difundidos por Internet.

Tras estos hechos, que implicaron que Peña Nieto tuviera que salir de la universidad bajo un operativo de seguridad, medios de comunicación y autoridades universitarias descalificaron lo sucedido diciendo que no era una expresión genuina ni representaba la opinión de los estudiantes y que los incidentes habrían sido promovidos por personas ajenas a la universidad.

Ante estas expresiones, estudiantes de la misma suben a Internet un video en el que asumen su participación en los incidentes y reafirman su posición; lo firman como "131 estudiantes", e incluyen nombre y apellido, número de matrícula y Facultad a la que pertenecen. Inmediatamente el video es reproducido por miles de personas en YouTube y se vuelve un tema en las redes sociales, en las cuales se coloca la etiqueta "YoSoy132" para manifestar el apoyo al grupo de jóvenes universitarios[4].

Días después, el movimiento gestado en las redes virtuales se manifiesta en movilizaciones callejeras y en múltiples asambleas. Las demandas principales son la profundización democrática, la transparencia y la defensa de la libertad de expresión, mostrando un gran descontento hacia la clase política y la corrupción y cuestionando la manipulación de la información en los medios masivos de comunicación. El movimiento se define como estudiantil, apartidista, plural, laico, anti-neoliberal, de oposición a Peña Nieto, pacífico y con orientación social, política y humanista[5]. Surge en una universidad privada y luego tiende puentes con estudiantes de las universida-

4 Un análisis sobre el movimiento puede verse en Monteverde, Carrillo y Esteve del Valle (2013).

5 <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/09/11/yo-soy-132movimiento-del-siglo-xxi/>.

des públicas, lo que refleja el creciente malestar de los jóvenes con el sistema político mexicano. Es un movimiento creado por una nueva generación de jóvenes que cuestionan a la vez la cultura política liderada por los clásicos partidos en México y a los dos monopolios televisivos del país, Televisa y Televisión Azteca, y que buscan nuevos caminos para participar y defender sus derechos humanos y ciudadanos. No se sabe cuál es el futuro de esta movilización, lo que sí se sabe es que tuvo una importante recepción en la juventud y en los centros educativos de sectores medios y populares y en gran medida esta aceptación los empuja a incorporar medidas más amplias.

En Brasil, a inicios de junio de 2013 comenzaron las *protestas contra el incremento de la tarifa del transporte público*, que fueron en aumento hasta el día 14 cuando la policía las reprimió de manera violenta. En la ciudad de San Pablo, las manifestaciones, convocadas inicialmente a través de las redes sociales, bloquearon las principales avenidas. Ellas fueron encabezadas, entre otras organizaciones, por el "Movimento Passe Livre", que desde hace 8 años lucha por la disminución del costo del transporte público y que se organiza en las redes sociales. El movimiento está integrado por partidos políticos de izquierda, anarquistas y maoístas, jóvenes independientes, en su mayoría estudiantes universitarios, y sectores profesionales; también participan sectores populares de la periferia. El movimiento se organiza de manera descentralizada y en red y tiene carácter horizontal.

Si bien el germen de las manifestaciones fue el aumento en las tarifas del transporte público, que tiene un impacto importante en los sectores medios y bajos, las demandas se multiplicaron luego en las calles, sobre todo aquellas que se oponen a los costos que implica que Brasil sea sede de megaeventos deportivos (Copa FIFA Confederaciones 2013, Mundial de Fútbol 2014, Juegos Olímpicos 2016), mientras los servicios públicos son ineficientes y caros. Pero también se reclamó mayor acceso a salud y educación, transparencia de las instituciones públicas, lucha contra la corrupción, el fin de la militarización de la policía y se reivindicaron derechos de los pueblos indígenas. Se plantearon demandas de ampliación del rol del Estado en el ámbito público y de participación ciudadana y, sobre todo, que la sociedad sea escuchada por fuera del sistema político tradicional, lo que también constituye un cuestionamiento al mismo.

Las protestas iniciales, que comenzaron en las redes sociales donde hoy se continúa debatiendo, lograron el objetivo de detener el au-

mento de tarifas. Nuevas demandas y reivindicaciones ciudadanas se fueron generando en estos meses, aunque más fragmentadas y sectoriales.

Sin embargo, los incidentes registrados durante algunas movilizaciones —represión policial, por un lado, y saqueos y depredación de patrimonio por una minoría radicalizada, por otro— divide a la opinión pública y afecta la legitimidad del movimiento. La gran mayoría de la población se opone a la violencia.

Algunos analistas sostienen que estas protestas constituyen una revalorización de la vida política y de la calle como lugar de expresión política y espacio público, desde donde se pueden lograr resultados concretos. Asimismo, pareciera que lo que se está cuestionando es un modelo económico y social que, a pesar de los avances en disminución de la pobreza en los últimos 10 años, no logró dar respuesta a las múltiples demandas que fueron en aumento junto con las mejoras logradas. Es decir, hay una insatisfacción general, sobre todo en las clases medias que tienen que hacer muchos esfuerzos para mantenerse como tal. Otros ven un cuestionamiento al ejercicio del poder político: detrás de las reivindicaciones concretas habría una demanda de cambios sustantivos en términos de participación política en la toma de decisiones y ampliación del sistema político, de mayor ciudadanía. Ello fue reconocido incluso en el discurso de la presidenta Dilma Roussef.

Estos movimientos en las calles, que combinan reclamos puntuales y demandas de ampliación ciudadana, muestran que hay muchos que no comparten la "privatización" de las ciudades, ni su segmentación. Hacen pensar en nuevos modelos de desarrollo y convivencia urbana y dejan en evidencia la exclusión o la inclusión parcial de amplios sectores que viven en las ciudades y sus alrededores y que quieren también ser parte de ellas, para darles sentidos diferentes al del consumo promovido por la economía de mercado. Había carteles en las manifestaciones que decían: "Disculpe la molestia, estamos cambiando el país". El sentido principal parece ser la búsqueda de un cambio a partir del descontento generado por el devenir de la vida urbana y sus costos inequitativos.

Interrogantes

No se sabe a ciencia cierta la evolución de estas protestas. Es posible que sean absorbidas por fuerzas partidarias o por líderes carismáticos;

también pueden radicalizarse, quizás empujados por una brutal represión policial, instalándose una lógica amigo-enemigo que los debilite hasta hacerlos desaparecer. Pero también es posible que su lucha, sus demandas y sus modos de expresión den un sentido emancipatorio al cambio, instalando en la sociedad de la información una suerte de fuerza que de significados diferentes a la vida, la democracia y el desarrollo.

Durante el siglo XX los jóvenes fueron un factor fundamental de cambio en diferentes momentos en las sociedades latinoamericanas. Hoy, como lo demuestran los casos mencionados, también. Pero el futuro, ni hoy ni entonces, se supo de antemano.

Bibliografía

Barahona, M., García, C., Gloor, P. y Parraguez, P. 2012 "Tracking the 2011 Student-Led Movement in Chile through Social Media Use". Ponencia presentada en Collective Intelligence conference. Disponible en: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1204/1204.3939.pdf

Calderón, F., Coord. 2013 *La protesta social en América Latina* (Buenos Aires: Siglo XXI/PAPEP/Fundación Unir).

da Silva, Luiz Ignacio 2013 "The Message of Brazil's Youth" en *The New York Times*. Disponible en: http://www.nytimes.com/2013/07/17/opinion/global/lula-da-silva-the-message-of-brazils-youth.html?_r=2&

Jackson, G. 2013 *El país que soñamos* (Santiago de Chile: Editorial Debate).

Maricato, E. 2013 "Quando novíssimos atores entram em cena, conquistas inesperadas acontecem". Disponible en: http://blogdaboitempo.com.br/2013/09/05/quando-novissimos-atores-entram-em-cena-conquistas-inesperadas-acontecem/

Monteverde, A., Carrillo, R. y Esteve del Valle, M. 2013 "#YoSoy132: ¿Un nuevo paradigma en la política mexicana?". Ponencia presentada en el Congreso LASA, Washington, DC, mayo.

Moreno, D. 2013 "Uso de TICs y actitudes políticas entre los latinoamericanos. Pistas sobre la construcción de nuevos sentidos para la política". Ponencia presentada en Congreso LASA, Washington DC, mayo 2013.

Nogueira Cunha, G. 2013 "O Estado contra a sociedade". Disponible en: http://www.revistadehistoria. com.br/secao/reportagem/o-estado-contra-a-sociedade.

Peregil, F., 2013 “Nuestros 20 céntimos son el parque de Estambul” en *El País*. (Madrid) 18/06/13.

Revista de História s/f. “Somos a rede social”. Disponible en: http://www.revistadehistoria.com.br/ secao/reportagem/somos-a-rede-social.

Rocha de Oliveira, P. 2013 “A classe média vai ao protesto”. Disponible en: http://blogdaboitempo.com.br /2013/06/26/a-classe-media-vai-ao-protesto/.

Salgado, A. 2013 “Os limites da liberdade”. Disponible en: http://www.revistadehistoria.com.br /secao/reportagem/repressao-x-liberdade.

Somma, N. 2012 “The Chilean Student Movement of 2011-2012: Challenging the Marketization of Education” enInterface. *A Journal for and About Social Movements Event Analysis*, Volume 4 (2): 296–309, Noviembre. Disponible en: http://www.interfacejournal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Interface-4-2-Somma.pdf.

Souto Maior, J. 2013 “Violência silenciosa do Estado (Social) e o grito das manifestações de junho”. Disponible en: http://blogdaboitempo.com.br/2013/08/22/violencia-silenciosa-do-estado-social-e-o-grito-das-manifestacoes-de-junho/.

Vera, H. 2012 “Epistemologías comunicacionales para comprender el movimiento estudiantil 2011 en Chile” en *Razón y palabra* Nº79, mayo. http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/24_Vera_V79.pdf.

Vainer, C. 2013 “Mega-eventos, mega-negocios, mega-protestos”. Disponible en: http://blogdaboitempo. com.br/2013/09/02/mega-eventos-mega-negocios-mega-protestos/.

Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina*

I. El contexto

El mundo de hoy vive un momento crucial, porque en él se condensan al mismo tiempo varias y diferentes crisis, así como transformaciones y opciones de tipo financiero, multicultural, de carácter ecológico y político. Lo inédito es que se asiste y se está en medio de una manifestación de cambios con características múltiples.

Algunos rasgos de la globalización están experimentando una transformación trascendental y hay una recomposición profunda del poder económico y de las fuentes para el crecimiento económico del planeta. Un nuevo multilateralismo se está instalando. Las nuevas economías emergentes asumen modelos "heterodoxos" de capitalismo o de economía de mercado, vinculados a orientaciones políticas con discursos ideológicos divergentes: reformismo práctico, nacional/popular[1], "neodesarrollismo indigenista" y modernización conservadora (Calderón, 2008).

En América Latina la economía creció, se logró disminuir la pobreza y se avanzó en algunos efectos distributivos (CEPAL, 2010a; PNUD, 2009). La región ha mostrado singulares capacidades políticas y de gestión para enfrentar la crisis global. Además, sus proyecciones de crecimiento son relativamente favorables (Aranibar, Vázquez y Garzón, 2011).

Sin embargo, la transformación productiva y el salto hacia una economía del conocimiento no parecerían estar produciéndose con el dinamismo requerido para avanzar en la solución de los graves problemas de pobreza y desigualdad en la región. La innovación e inclusión social son todavía una ecuación pendiente. En igual sentido, han mejorado varios

* Este trabajo fue publicado originalmente en la *Revista de la CEPAL* Nº107, en Agosto de 2012.

1 El pueblo se identifica con la nación y el Estado. Véase Calderón (2008).

indicadores de legitimidad política; sin embargo, los avances hacia una democracia de ciudadanos son insuficientes (PNUD, 2004).

El problema es: ¿Cómo avanzar en ese sentido? ¿Qué capacidades políticas supone? ¿Cómo combinar hábilmente crecimiento, redistribución y sostenibilidad ambiental? ¿Cómo asociar el ciclo político que vive la región con un ciclo de transformaciones en las matrices económico-productivas? ¿Cómo persistir en la construcción de institucionalidad y pluralismo cultural de manera adecuada a un cambio económico innovador? Precisamente, un tema central en todos estos procesos es el del conflicto social y de sus formas de abordarlo en una perspectiva en que la democracia se entiende como un orden conflictivo. Justamente en este ámbito es donde se sitúa el presente trabajo. Las tesis que se presentan a continuación requieren ser miradas desde una triple perspectiva: histórica, conceptual y como parte del proceso de cambios a escala global.

En la mayoría de los países de la región, el rasgo histórico, central y común en la dinámica contemporánea de los conflictos se refiere a la aparición temprana del Estado como actor social, que no solo refleja la conflictividad social y política de las sociedades, sino que también actúa en la conformación de los sistemas de intereses económicos y de actores políticos que definen la dinámica del conflicto.

La formación de un Estado-nación autónomo, la industrialización y el desarrollo de un proceso de modernización inclusivo, alimentado por una sólida cultura nacional/popular[2], fueron las metas y los ejes de organización de los conflictos en el ciclo del primer populismo que experimentó la región (Touraine, 1988).

Bajo las dictaduras, los conflictos que produjeron los actores sociales se centraban en una acción puramente defensiva, ya que los autoritarismos "resolvían" con represión cualquier expresión de naturaleza conflictiva. En ese marco se desarrollaron con creciente intensidad luchas y demandas por los derechos humanos y la democratización política (Ansaldi, 1986).

La democratización dio paso a nuevos campos de conflictividad, y a la revitalización y/o emergencia de nuevos movimientos sociales. Esta temática se encuentra analizada en la se-

2 Una cultura nacional popular es aquella en que se procura la hegemonía política, la centralización del Estado en la organización del desarrollo y la democracia, la movilización de masas y un liderazgo carismático.

rie de estudios nacionales *Los movimientos sociales ante la crisis* (Calderón, 1986). En ese estudio, un primer campo de conflicto se refirió a la defensa de la condición obrera. Un segundo campo aludió a las demandas de calidad de la vida urbana, el consumo colectivo y la descentralización. Un tercer campo vinculó a los conflictos campesinos en relación con la tierra, el mercado y el reconocimiento étnico. Los derechos humanos y la búsqueda de relaciones de género equitativas fueron otro campo significativo en dicho período.

Luego de las reformas estructurales, el conflicto fue en defensa de las condiciones de vida y a causa del malestar introducido por la cosificación del mercado. A fines de los años noventa, como parte de una inflexión histórica tanto en términos de democracia como de desarrollo, emergió un nuevo tipo de conflicto con una mayor complejidad social y rasgos multifacéticos, multiplicándose tanto los conflictos como los actores. En este contexto, sobresalen los conflictos vinculados al multiculturalismo y los planteamientos relacionados con nuevas formas de calidad de vida, la ciudadanía y la dignidad (PAPEP-PNUD, 2011).

Conceptualmente se puede afirmar que en los conflictos en la región se enlazan demandas de libertad real y libertad cultural. La primera, entendida como un conjunto de demandas destinadas a satisfacer necesidades de una vida digna y desde allí poder desarrollar capacidades y optar por el tipo de vida que se desea llevar, de acuerdo con valores y aspiraciones propias. La segunda, entendida como el reconocimiento de las identidades y los derechos de las personas y las comunidades culturales, en relación con el derecho de asumir y de cambiar identidades (Sen, 1999; PNUD, 2004).

En el enfoque conceptual del artículo se considera a la política constructivista como la mejor forma de procesar los conflictos[3]. El constructivismo político asume las realidades

3 El constructivismo político se asienta en la capacidad política de los actores para producir un orden conflictivo resultado de la interacción y el reconocimiento entre diferentes u opuestos, lo que supone comprender la libertad y la identidad del otro. La política constructiva podrá ser entendida como el arte de lo mejor posible. La modalidad de hacer política es la de un intercambio de reconocimientos recíprocos (PAPEP-PNUD, 2011, cap. 1). Metodológicamente, para explicar este tipo de acción resulta fundamental determinar los datos estructurales e institucionales sobre los que descansa la acción, como también los efectos de la socialización a la que están vinculados los actores (Boudon y Bourricaud, 1982, p. 308).

socioeconómicas y los juegos de poder procurando fortalecer la democracia y parte del reconocimiento de una pluralidad sociocultural para construir un orden común, sin desconocer que tal orden es el resultado de un proceso conflictivo. El conflicto no es sinónimo de guerra, es más bien el orden conflictivo de la diversidad y la interculturalidad el que supone la democracia y la paz. En este enfoque, la política y los actores sociales se hacen y rehacen constantemente en el conflicto y este se alimenta de relaciones desiguales de poder que también son reales e históricas. Por esto, los actores se forman en la política donde todos están sometidos a relaciones de poder. En el texto se sintetiza una visión normativa de la política, como una política orientada por valores. Como decía Gianni Vattimo, no es cuando tenemos la verdad que nos ponemos de acuerdo; es más bien cuando nos ponemos de acuerdo que encontramos la verdad (Vattimo, 2006).

Aquí no se argumenta en favor o en contra de un tipo de sociedad determinada; se argumenta, sobre todo, por una forma político-institucional de convivir entre diferentes, que permita construir metas compartidas sin negar el poder, ni el conflicto o la discrepancia en numerosos planos. La política, en este sentido, no sería un instrumento de negociación, sino un ejercicio de comprensión de la memoria y de la libertad del otro.

En esta perspectiva se plantea que una sociedad que produce conflictos y cambios que son procesados constructiva e institucionalmente, será más fecunda en democracia y desarrollo, mientras que si la sociedad produce conflictos y sus instituciones son débiles en el procesamiento de estos, los resultados en términos de democracia y desarrollo serán problemáticos, como también si la sociedad muestra debilidad en producir conflictos y cambios y sus instituciones son fuertes, pero no saben procesar los conflictos democráticamente. En situaciones donde la sociedad, el Estado y sus instituciones son débiles, como se verá más adelante, predominarían sistemas informales de intermediación y control en la reproducción del orden social. Para América Latina las ideas clásicas de Marcel Mauss son aún importantes.

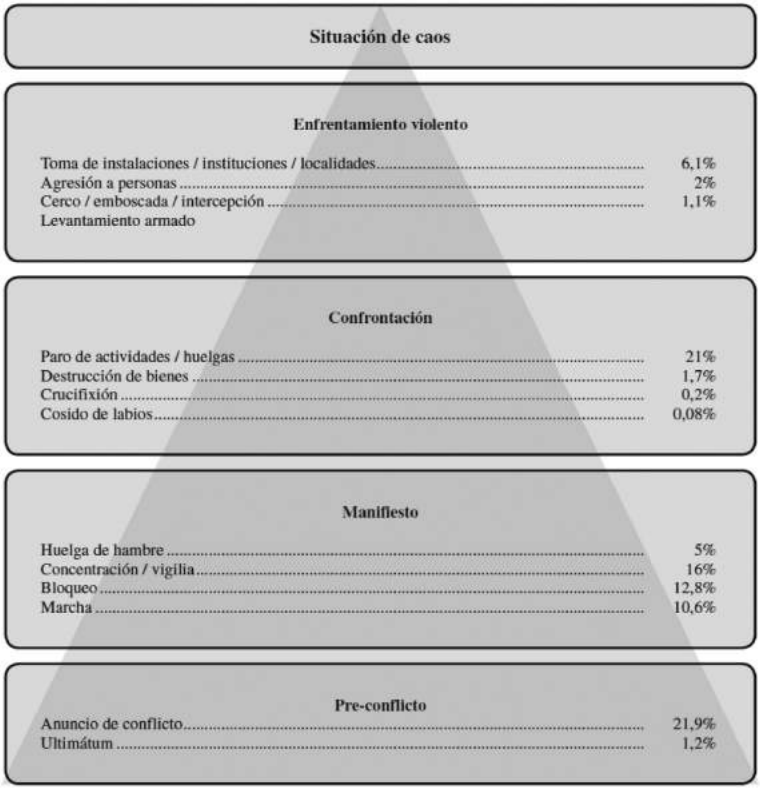
En definitiva, ¿cómo afectan los conflictos a las opciones de democracia y desarrollo? Responder a esta inquietud es precisamente el propósito del presente artículo.

Metodológicamente, los conflictos encontrados e interpretados en el estudio han sido el resultado de las narraciones elabo-

radas durante un año por 54 periódicos en 17 países de la región. Estos medios representan diversas orientaciones ideológicas, tienen importantes mercados de información y son en buena medida componentes de complejas redes a escala global y local, que funcionan a partir del uso y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En este sentido, es muy importante subrayar que la base empírica de este trabajo son los conflictos sobre los que publicaron los periódicos seleccionados. Si bien estos contribuyeron, junto con otros medios, a formar la opinión pública respecto de aquellos hechos, no abordaron los conflictos existentes que son más numerosos que los publicados. Desde luego, esto representa una seria limitación para este tipo de estudios, donde además es frecuente confundir lo publicado con la realidad. Sin embargo, se realizaron pruebas de consistencia por medio de otras fuentes estadísticas sobre casos nacionales y sectoriales y se encontraron tendencias cualitativas similares. No obstante, debe quedar claro que la información es insuficiente. Aquí principalmente se estudiaron los conflictos en el espacio público comunicacional basado en la prensa escrita.

En términos cuantitativos, América Latina se confirma como una región con una conflictividad significativa. Empero, el tiempo de estudio correspondió a un período de "salida" de la crisis global y de relativa estabilidad sociopolítica. Se trata de un lapso en que el casillero en que aparecen una alta radicalidad y un gran número de conflictos está vacío. No hubo crisis serias de gobernabilidad en la región, a excepción del golpe de Estado en Honduras. En el análisis se detectaron —entre octubre de 2009 y septiembre de 2010— 2.318 conflictos y 4.724 episodios conflictivos. En términos generales, los países que registran el mayor número de conflictos son la Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia y Perú, con un total de conflictos superior a los 200. Los países con menos conflictos de la región son Chile, Costa Rica y El Salvador, con un promedio de 58 conflictos. Los países con mayor radicalidad de los conflictos son Chile, la República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de), y con menor radicalidad Costa Rica, Panamá y Perú. En el Gráfico 1 sobre la radicalización de los conflictos se registra su intensidad. Y con esto se abre la caja de Pandora.

Gráfico 1. Pirámide de radicalización



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

II. Las tesis

En las tesis que se presentan a continuación se acentúan las características más frecuentes, los rasgos comunes y los desafíos compartidos que enfrentan las diferentes sociedades latinoamericanas.

Tesis 1

Los rasgos que asume la compleja desigualdad en América Latina se vinculan no solo a significativos niveles de diferenciación social y altos niveles de concentración de ingresos y riqueza, sino también al malestar y el cuestionamiento por parte de los ciudadanos a tales niveles de desigualdad. Este es el motivo por el cual la desigualdad constituye la base sobre la que se desarrollan la mayoría de los conflictos y protestas sociales en la región.

América Latina ha disfrutado de un entorno económico favorable, que se ha visto reforzado por una macroeconomía sana, alto crecimiento y cierto grado de redistribución por la vía de políticas sociales; sin embargo, en la región se mantiene la desigualdad como un problema estructural. En el *Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe del PNUD 2010* se mencionan tres rasgos característicos de la desigualdad en América Latina y el Caribe: es alta, persistente y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica. Asimismo, se destaca que los países de la región se encuentran entre los más desiguales del mundo en ingreso per cápita de los hogares: 10 de los 15 países más desiguales del mundo son latinoamericanos. Así, el coeficiente de Gini del ingreso de América Latina y el Caribe es "65% más alto que en los países de ingresos altos, 36% más elevado que en los países de Asia oriental y 18% superior al del África" (PNUD, 2010).

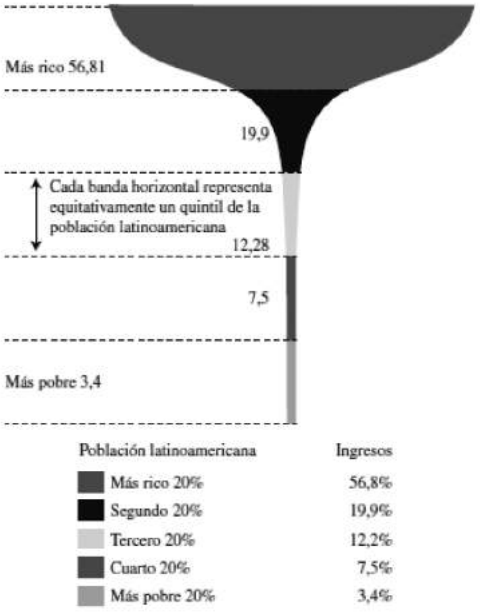
En el Gráfico 2 se muestran los altos niveles de concentración en la distribución del ingreso en la región, donde el 20% más rico de la población posee el 56,81% de los ingresos y el 20% más pobre solamente el 3,4%. Según la revista *Forbes*, los más ricos de América Latina acumulan 332 mil millones de dólares, 17 veces más que el producto interno bruto (PIB) del Estado Plurinacional de Bolivia y 19 veces más que el PIB de Paraguay (*Forbes*, 2011).

Los ciudadanos perciben como injustos estos niveles de desigualdad y hay una demanda instalada de cambio que explica la fuerza de los conflictos sociales, incluso en situaciones de importantes avances en la disminución de la pobreza que ha tenido América Latina[4] (véase

4 Según el *Panorama social de América Latina*, en 2010 la cantidad de personas pobres disminuyó un 5% retomando la tendencia regional a la reducción de la pobreza, que comenzó en 2003 (CEPAL, 2010c).

el Gráfico 3). Según datos del *Informe Latinobarómetro* 2010, el 79% de los latinoamericanos consideran injusta la distribución del ingreso.

Gráfico 2. Distribución del ingreso. Copa de champagne (en porcentaje)



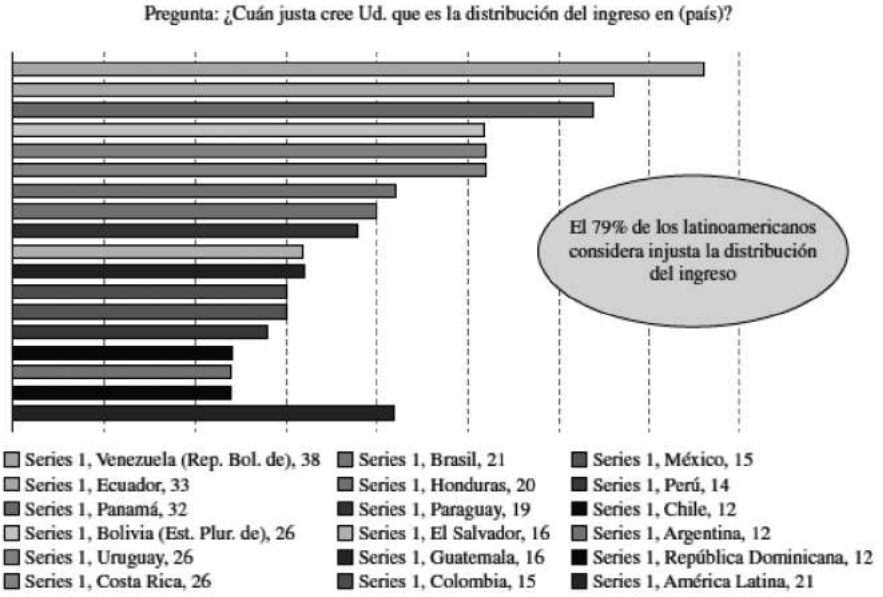
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "CEPALSTAT. Estadísticas de América Latina y el Caribe", 2009.

Tesis 2

El espacio público mediático es el lugar donde se expresan crecientemente los conflictos sociales y donde se construyen los relatos sobre estos. Está relacionado con la expansión y multiplicación masiva de las nuevas TIC. Los actores en conflicto necesitan a los medios y los medios necesitan los conflictos en una lógica mediática del conflicto y el poder.

Los medios constituyen fuentes de poder, son instituciones y empresas que construyen significados e imaginarios públicos sobre el conflicto, socializando a las personas. Así como los medios necesitan de los conflictos, los conflictos necesitan de los medios, que son espacios públicos en que se reflejan, crean y disputan las relaciones de poder, y donde se reconocen los conflictos entre los actores en pugna. Los medios no son neutrales, pero tampoco instrumentos mecánicos de poder; constituyen el lugar donde se expresan los intereses políticos y sociales, y donde confluyen las distintas miradas periodísticas. Y son también negocios. Sus características dependerán del mercado y del juego de intereses y presiones de los actores.

Gráfico 3. Cuán justa es la distribución de la riqueza en América Latina 2010 (percepción de la distribución de la riqueza)



Fuente: Corporación Latinobarómetro, *Informe Latinobarómetro 2010,* Santiago de Chile, 2010, en <http:// www.latinobarometro.org/latino/LATDatos.jsp>.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación se ve reflejada en los tipos de conglomerados mediáticos latinoamericanos. Se ha detectado que en la región conviven tres tipos o tamaños de conglomerados mediáticos. El primero, que podría denominarse "grande", posee propiedades en diversa medida en las cuatro plataformas comunicacionales clave del mercado global (prensa escrita, medios audiovisuales, plataformas web y multimedia móvil) a nivel regional; también debe considerarse aquel que, a pesar de no participar en los cuatro segmentos, concentra en alguno de ellos una gran cantidad de medios considerados relevantes en niveles locales. El segundo grupo, o categoría denominada "mediana", se refiere a aquellas corporaciones que no poseen medios fuera del ámbito nacional, pero que operan en tres o cuatro de los niveles comunicacionales de su ámbito local. Finalmente, existe un grupo o conglomerado "pequeño", en su mayoría de empresas editoriales, que poseen cada vez mayores capacidades de ofrecer productos en distintas plataformas orientadas a diversas audiencias, que no poseen más de un par de medios de prensa escrita, no ostentan plataformas complejas de distribución, ni participan de grandes redes de información y comunicación a escala regional o global. En el Cuadro 1 se ejemplifican los rasgos de los grupos mencionados.

En la dialéctica medios/sociedad no solo hay una relación complementaria entre los medios y los actores en conflicto. Desde una perspectiva constructivista, los medios construyen realidad, contribuyendo a dibujar narrativas e imaginarios que acaban repercutiendo en el mundo real, es decir, en el sistema político, en el proceso de toma de decisiones y en las agencias de los actores sociales.

Cuadro 1. Tipos de conglomerados mediáticos

Grupo mediático "Grande"	
Periódico	*Grupo multimedia*
El País (Uruguay)	Grupo de Diarios de América
O Globo (Brasil)	Organizaçães Globo/GDA Grupo de Diarios de América
El Mercurio (Chile)	GDA Grupo de Diarios de América
La Tercera (Chile)	Grupo Copesa S.A./Consorcio Periodístico de Chile

Periódico	*Grupo multimedia*
Reforma (México)	Grupo Reforma
La Prensa (Argentina)	Multimedios la Capital
Grupo mediático "Mediano"	
Periódico	*Grupo multimedia*
El Tiempo (Colombia)	Grupo Planeta
El Comercio (Perú)	GDA Grupo de Diarios de América
El Periódico (Guatemala)	Media Development Loan Fund (MDLF)
El Universal (México)	GDA Grupo de Diarios de América
El Panamá América (Panamá)	Grupo Epasa
El Nacional (República Dominicana)	Grupo Corripio
El Colombiano (Colombia)	Periódicos Asociados Latinoamericanos
Ultimas Noticias (Venezuela)	Cadena Capriles
La Nación (Costa Rica)	GDA Grupo de Diarios de América
La Prensa Gráfica (El Salvador)	Grupo Dutriz
Diario Libre (República Dominicana)	OMNIMEDIA Grupo Multimedia
Periódicos asociados latinoamericanos	
La Nación (Paraguay)	Grupo Nación de Comunicaciones
La República (Uruguay)	Grupo ICK
El Espectador (Colombia)	Grupo Bavaria
La Prensa (Honduras)	Grupo OPSA (Organización Publicitaria Sociedad Anónima)
La Jornada (México)	—
El Día (República Dominicana)	Grupo Corripio
Jornal de Brasilia (Brasil)	Grupo Jornal de Brasilia
O Estado de São Paulo (Brasil)	Grupo Estado
El Deber (Bolivia)	Grupo Líder
Los Tiempos (Bolivia)	Grupo Líder

Periódico	*Grupo multimedia*
La Razón (Bolivia)	Grupo Líder
El Heraldo (Honduras)	Grupo OPSA (Organización Publicitaria Sociedad Anónima)
La Nación (Argentina)	La Nación S.A.
Grupo mediático "Pequeño"	
Periódico	*Grupo multimedia*
ABC Color (Paraguay)	Editorial Azeta S.A.
El Universo (Ecuador)	Grupo El Universo
El Universal (Venezuela)	Periódicos Asociados Latinoamericanos
El Diario de Hoy (El Salvador)	América Interactiva
La Tribuna (Honduras)	Carlos Roberto Flores Facussé
El Mercurio (Ecuador)	Grupo Merchán
Expreso (Perú)	Diario Expreso S.A.
Prensa Libre (Guatemala)	Casa Editorial Prensa Libre S.A.
La Nación (Chile)	Empresa Periodística La Nación S.A./Estado chileno
Correo (Perú)	Empresa Periodística Nacional S.A. (EPENSA)
Crónica (Paraguay)	Grupo Nacional de Comunicaciones
Expreso (Ecuador)	Grupo Granasa (Gráficos Nacionales S.A.)
La República (Costa Rica)	República Media Group (RMG)
El Mundo (El Salvador)	Grupo Mundo Multimedia
La Hora (Guatemala)	Familia Marroquín
La Prensa (Panamá)	Corporación La Prensa S.A. (Corprensa)
Página 12 (Argentina)	Editorial La Página S.A.
Jornal do Brasil (Brasil)	Nelson Tanure/Editora Jornal do Brasil

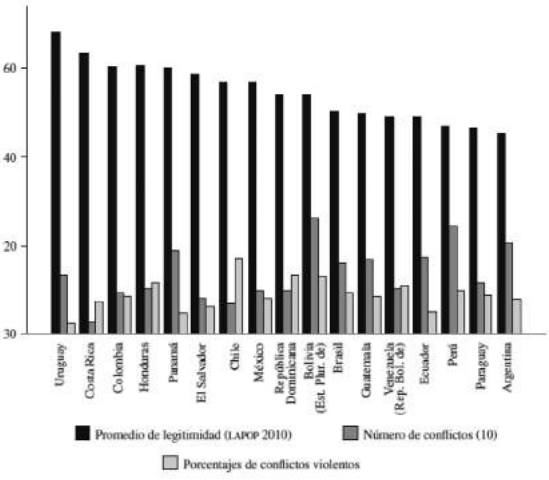
Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

TESIS 3

Los conflictos tienen racionalidades complejas e intensidades distintas. Su frecuencia es diferente a su radicalidad y ambas están desigualmente relacionadas con los niveles de institucionalidad y las brechas sociales. Así, a mayores brechas sociales y menores niveles de legitimidad institucional, mayor cantidad de conflictos. Asimismo, cuanto mayor sea el apoyo al régimen político institucional, menor será la cantidad de conflictos que lleguen a niveles de enfrentamientos violentos.

Uno de los patrones de la conflictividad social en la región encontrados en el presente estudio es la asincronía del conflicto, es decir, conflictos con distinta dirección, intensidad y sentido, vinculados a la búsqueda de niveles de vida básicos, con demandas (sobre todo al Estado) de gestión institucional eficaz y legítima y con estrategias de cambios en las dinámicas de convivencia intercultural. Al mismo tiempo, uno de los hallazgos centrales del estudio se refiere a la complejidad de la asincronía del conflicto, puesto que —como ya se dijo— brechas sociales más profundas y menor legitimidad del régimen institucional se traducirán en un mayor número de conflictos (véase el Gráfico 4).

Gráfico 4. Relación entre apoyo al régimen institucional y número de conflictos/promedio de radicalización, 2010*



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

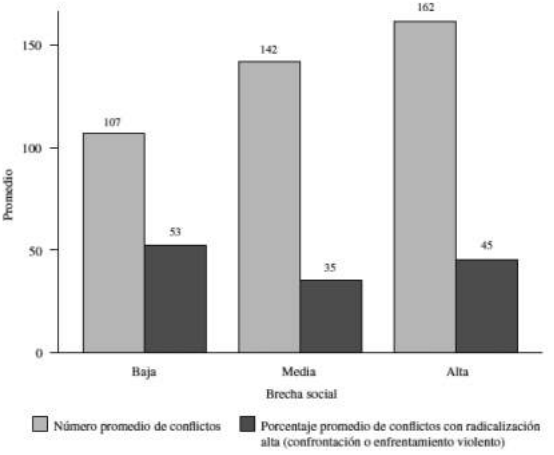
* No existe una correlación significativa ni relevante entre niveles de legitimidad institucional y radicalización de los conflictos; la lectura del gráfico permite afirmar que no existe una relación evidente entre legitimidad e intensidad del conflicto en la región. Parece existir, por otra parte, una relación entre la cantidad de conflictos y el nivel de legitimidad institucional: países con niveles de

legitimidad institucional más bajos parecerían ser más propensos al conflicto social, pese a que esta relación no sea concluyente y solo marginalmente significativa en términos estadísticos.

Por otra parte, la relación entre radicalidad de los conflictos, legitimidad institucional, brechas sociales y número de conflictos es muy importante, pero más compleja. Como se señaló anteriormente, del nivel de apoyo al régimen institucional dependerá si los conflictos llegan o no a desembocar en enfrentamientos violentos (véase el Gráfico 5).

La relación que tienen las brechas sociales con la radicalización no es lineal, sino que dibuja una "U" en la que los países con brechas medias presentan menos casos de violencia y enfrentamientos que los países con brechas amplias y los países con brechas bajas. Esto obedecería a las diferentes formas de interacción entre sociedad, Estado y conflictos, a la capacidad de procesamiento de estos y, en general, a la cultura política y la trayectoria histórica de los países. A todo esto, una buena noticia se ha instalado en la región, pues existe un "casillero vacío" que favorece a la democracia y al desarrollo: la conflictividad social en los países latinoamericanos no es muy alta ni muy radicalizada.

Gráfico 5. Relación entre brechas sociales y número de conflictos/porcentaje de conflictos radicalizados



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

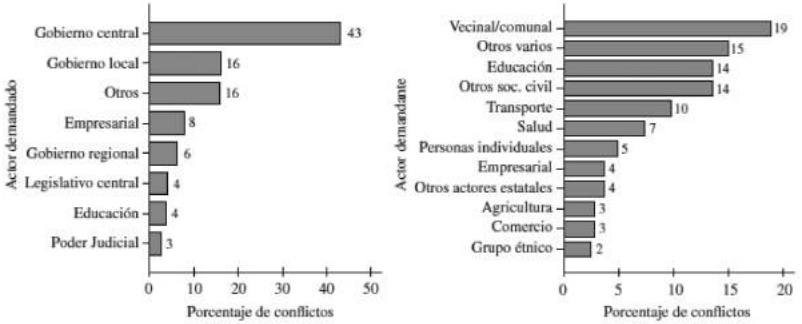
Tesis 4

El Estado es un actor central en los juegos de poder y de conflicto, pero tiene limitada capacidad de gestionarlos y resolverlos con un

sentido de cohesión social y expansión democrática. Este factor conduce a una paradoja, ya que los Estados catalizan las demandas sociales, pero no tienen la capacidad suficiente para gestionarlas.

Como se demuestra en el Gráfico 6, por una parte, en América Latina el principal actor demandado es el Estado en el 70% de los casos, es decir, la instancia hacia la que se dirige el malestar social en la búsqueda de la satisfacción de una demanda o la consecución de un objetivo. Por otra parte, la sociedad está experimentando un proceso de progresiva fragmentación de los actores colectivos y de sus identidades, lo que se refleja en una tendencia a la multiplicación de las demandas fuera de los marcos clásicos e institucionalizados de los conflictos.

Gráfico 6. *Actores demandados y demandantes*



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

Los principales actores del conflicto son: Vecinal/comunal (19%) y Otros varios (15%), entre los que se encuentran actores circunstanciales, grupos irregulares, grupos vinculados a actividades productivas sectoriales y gremiales tales como hidrocarburos, financieras, mineras, coordinadoras, sindicatos, asociaciones, uniones y educacionales (14%).

III. Fragmentación

Los actores demandantes a nivel regional ponen de relieve una tendencia opuesta: el predominio de una fragmentación de los protagonistas de los conflictos. Los actores más importantes son las organizaciones vecinales (19%), y es también significativo que el 5% de los conflictos sea protagonizado por actores circunstanciales[5], esto es, por agrupaciones de individuos que luchan por demandas y necesidades coyunturales y cuya organización se disuelve en cuanto se resuelven esos temas concretos. En este sector es donde más se refleja la tendencia a la espontaneidad de la acción colectiva, encarnando en términos de conflictos esa "modernidad líquida" a la que se refiere Bauman (1999 y 2005). Todo esto permite plantear la hipótesis de que se está frente a una situación en que predominan Estados con debilidad institucional y sociedades policéntricas.

IV. Centralidad

A pesar de la centralidad de las demandas al Estado, se experimentan sin embargo situaciones muy variadas, desde países con mayor capacidad estatal (Uruguay) y por ende con mayor capacidad de procesamiento de conflictos, hasta países en los que estas capacidades son menores, como el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y Ecuador.

Desde una perspectiva general, prácticamente en toda la región el Estado es percibido como el único actor capaz de dar solución a problemas macroestructurales y a sus manifestaciones a nivel local. Hay una tendencia a la centralización de las demandas sociales que confirma un patrón regional histórico donde el Estado ha jugado y juega un papel protagónico. No hay una distribución equilibrada de los conflictos entre los distintos espacios sociales, y lo más común es que las demandas adquieran una connotación política. Como ya señalaban Calderón y Dos Santos (1987: 15), en América Latina "la carencia de tecnologías constitucionales capaces de institucionalizar el manejo del conflicto" se suma a "las tendencias socialmente excluyentes del orden".

Permanece la paradoja de un Estado débil como principal referente de las intensas demandas sociales: se sigue apelando a un aparato estatal en general pobre e incapaz de dar respuestas institucionales y negociadas, atrapado en las ineficiencias de su burocracia, la inefec-

5 Son actores colectivos que aparecen en el momento del conflicto y luego desaparecen.

tividad de su sistema legal, la escasa credibilidad de sus gobiernos y problemas crónicos de corrupción y otorgamiento de prebendas. Al mismo tiempo, el proceso de centralización en el imaginario colectivo llega a los niveles más altos, donde el gobierno central es el Estado y, más aún, el presidente es el Estado, en una trayectoria histórico-cultural en la que el personalismo casi nunca dejó de jugar un papel central en la política latinoamericana.

Finalmente, hay que destacar la importancia del marco normativo e institucional para entender las dinámicas de los conflictos sociales. Ello puede tener gran relevancia para canalizar las tensiones y mantener bajo control potenciales brotes de violencia, organizar las demandas sociales, ofrecer espacios de reconocimiento y expresión a los actores y promover formas políticas y dialogadas de toma de decisiones. Se considera aquí el valor de la democracia en cuanto sistema que establece reglas del juego político capaces de procesar los conflictos (Lechner, 1986). En este sentido, en lo que se refiere al cambio social, parece ser insoslayable la dimensión institucional, como tampoco es posible alcanzar la satisfacción perdurable tanto de las demandas de ciudadanía social como de la participación en la toma de decisiones si no se han superado las limitaciones institucionales (Calderón y Dos Santos, 1987: 17). Asimismo, disfunciones profundas y evidentes de los sistemas institucionales están en la raíz de ejes de conflictividad específicos y, al mismo tiempo, dificultan el manejo de tensiones sociales de distinta naturaleza (tanto por la reproducción social como de tipo cultural y político-ideológico).

Tesis 5

Existe una tendencia a la descentralización de los conflictos y a la emergencia de experiencias locales de procesamiento democrático de estos. Esta tendencia conduce al desarrollo de una nueva política centrada en relaciones constructivas entre los actores y las gestiones municipales que se caracterizan por ser legítimas y eficaces, poseen agencia ciudadana en los procesos y resultados, y en definitiva construyen una democracia de ciudadanía a escala local.

A pesar de la lógica centralista o de descentralización sin desconcentración de recursos, existen tendencias actuales e históricas a la descentralización de los conflictos en favor del Estado territorial, municipal o regional. Como se ilustra en el Gráfico 6, del total de conflictos registrados en el período de estudio, el 16% corresponden a demandas dirigi-

das hacia el Estado local y un 6% a los gobiernos regionales.

Esta tendencia se relaciona en casos relevantes con la emergencia de actores socioculturales y políticos, que buscarían la expansión de una política constructivista. Como se aprecia en el Cuadro 2, los casos de las ciudades de Porto Alegre, Rosario, Bogotá, La Paz y Villa El Salvador, entre otras, son notables ejemplos de aplicación de políticas públicas para procesar conflictos sociales en favor de una democracia plural y sustantiva, capaz de enfrentar mejor los problemas de la desigualdad y el desarrollo.

Estas experiencias y otras similares muestran que es posible encontrar y quizá propagar experiencias en que se procura convertir los conflictos, o parte de ellos, en acuerdos que se transformen en metas y resultados concretos.

Cuadro 2. Casos paradigmáticos de procesos de descentralización en América Latina

País	Ciudad	Proceso
Brasil	Porto Alegre	Descentralización y democratización local
Bolivia (Est. Plur. de)	La Paz	Descentralización y participación popular
Argentina	Rosario	Descentralización y democratización local
Uruguay	Montevideo	Descentralización participativa
Perú	Villa El Salvador	Planeamiento del Desarrollo Participativo y Sistema de Presupuesto
Colombia	Bogotá	Descentralización administrativa

Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

Tesis 6

En una lógica desigual y combinada, se desarrollan tres campos de conflicto vinculados a la reproducción social, la lógica institucional y la dinámica cultural. La reproducción social se organiza en una lógica práctica y es un fin en sí misma, pues constituye una referencia ética para la política y la cultura: la dignidad humana.

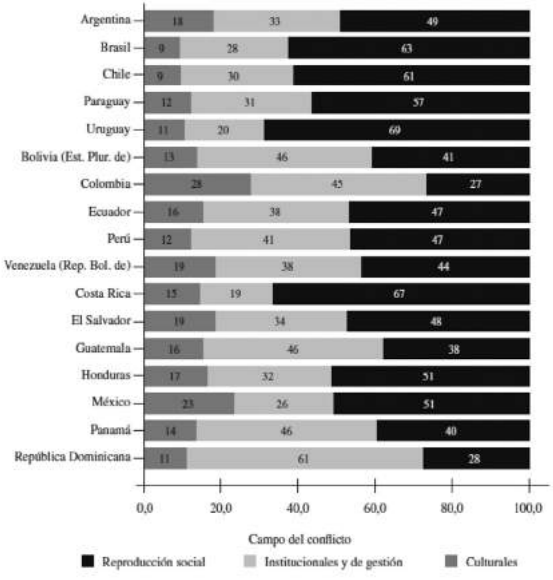
Con el objetivo de tener una visión regional de las orientaciones de la acción colectiva, en el estudio se identifican tres grandes campos de conflictividad en América Latina, en los que se encuentran subsumidas las diferentes demandas que son la base de las movilizaciones colectivas: i) demandas por la reproducción social; ii) demandas institucionales; y iii) demandas culturales. Los tres campos tienen una racionalidad parcialmente distinta: 1) los conflictos de reproducción social incluyen principalmente las demandas para satisfacer necesidades básicas de bienestar social referidas a un mínimo de vida digna, que permitan la reproducción de los individuos y las colectividades humanas; su lógica es esencialmente práctica; 2) los conflictos institucionales procuran mayor eficacia y legitimidad de las instituciones del Estado; 3) los conflictos culturales tienen como objetivo el cambio de los modos de vida (y en este sentido —como se verá— son conflictos estratégicos).

En el Gráfico 7 se muestra el porcentaje de cada campo de conflicto por país y por subregión, pudiendo apreciarse que en la gran mayoría de los países los conflictos por la reproducción social son los más numerosos, con la excepción del Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Guatemala, Panamá y la República Dominicana, donde pesan más los conflictos institucionales. A su vez, Colombia y México son los países con mayor número de conflictos culturales.

La reproducción social se refiere a las capacidades de una sociedad para reproducirse y cambiar a lo largo del tiempo y se relaciona tanto con umbrales básicos de reproducción (alimentación, salud, educación, empleo, entre otros) como con umbrales ampliados referidos a la calidad de vida en general, y a los conceptos de bienestar y de vida digna en cuanto condición para la libertad real (Sen, 1999). Es en este campo de conflictividad donde se hace más evidente la lógica práctica de la movilización social. La gente sale a la calle para pedir mejoras de sus condiciones de vida y para exigir ciertas garantías en el proceso de reproducción, ya sea en términos de mejores condiciones salariales y de empleo, como de asistencia

en temas de salud y educación, o en contra de medidas económicas que se perciben como desestabilizadoras de la situación presente.

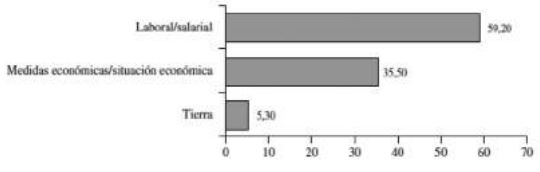
Gráfico 7. Campos de conflicto por país (En porcentaje)



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

La mayoría de los conflictos por reproducción social surgen por cuestiones socioeconómicas, en particular laborales y salariales, de consumo colectivo, pero también en rechazo de ciertas medidas políticas o sociales que se perciben como amenazadoras del *statu quo* laboral, y asimismo para impulsar normas que podrían mejorar la situación actual, o por cuestiones relacionadas con la propiedad y el aprovechamiento de la tierra (véase el Gráfico 8). Más de la mitad de los conflictos por reproducción social radican en demandas de tipo laboral/salarial (59,20%). La importancia relativa de los conflictos laborales, en particular, demuestra el papel estratégico que cumple el trabajo en la vida de nuestras sociedades, tanto en términos de inserción en las relaciones laborales como de la calidad de la vida social.

Gráfico 8. Tipología de los conflictos (En porcentaje)



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

Además, los datos sobre los conflictos por reproducción social refuerzan los datos estructurales, en el sentido de que la acción colectiva parece ser consistente con los problemas socioeconómicos reales percibidos a nivel regional. Los conflictos por la reproducción social representan el 47,3% del total de conflictos a nivel latinoamericano, y su importancia relativa aumenta si se considera que en 12 de los 17 países de la región estos conflictos son los más numerosos, mientras que en 9 de ellos las cuestiones laborales/salariales y la situación económica se hallan en la raíz de más del 50% de los conflictos.

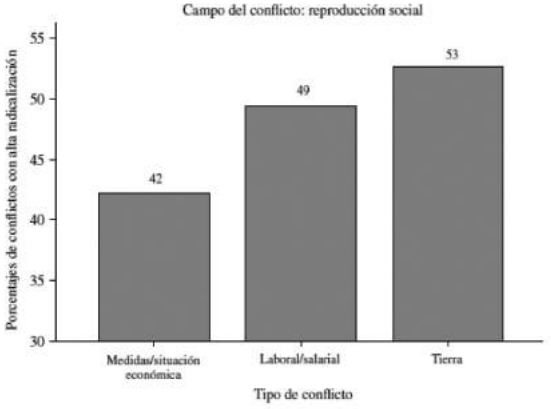
A nivel de subregiones, los países andinos y Centroamérica tienen niveles parecidos de conflictividad por reproducción social —que representa cerca del 42% del total de los conflictos en estas regiones—, mientras que en el Cono Sur se observa una cantidad de conflictos relativamente más alta (58,7%), véase el Gráfico 9.

En este campo de conflictividad, los conflictos que tienden a alcanzar un nivel de radicalización significativa obedecen a problemas de tierra (53%), cuestiones laborales/ salariales (49%) y protestas en contra de medidas económicas (42%), véase el Gráfico 10.

Gráfico 9. Los conflictos por la reproducción social (En porcentaje)

Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

Gráfico 10. Niveles de radicalización



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

Los datos concernientes a promedios confirman que los conflictos más radicalizados son los de tierra. Si bien se trata de conflictos menos relevantes en términos de cantidad, presentan una mayor tendencia a la violencia con respecto a otros casos. Esto hace suponer que, por una parte, existe una carencia de espacios institucionales donde encarar estas demandas y, por otra, estos conflictos tienden a combinarse con otros factores, como el tema de las identidades en el caso de los grupos étnicos, o los intereses económicos y políticos a nivel local, lo que aumenta su carga ideológica centrífuga. Además, la cuestión agraria sigue siendo un punto pendiente en la agenda de las reformas de muchos países latinoamericanos y permanecen vigentes las consecuencias sociales de un sistema latifundista "neofeudal", fuertemente arraigado en la región.

Tesis 7

Los conflictos institucionales reclaman la eficacia y la eficiencia de las instituciones. Un rasgo generalizado en la región es la fuerza de una cultura del conflicto de carácter "parainstitucional".

El conflicto institucional es el resultado de la inconsistencia entre las demandas de la gente y la incapacidad de las políticas y las instituciones del Estado para satisfacer tales demandas.

En particular, emerge una conflictividad cuyo énfasis está puesto en el funcionamiento institucional o estatal y no tanto en el cuestionamiento al sistema que, por cierto, constituye en algunos casos un sustrato discursivo general.

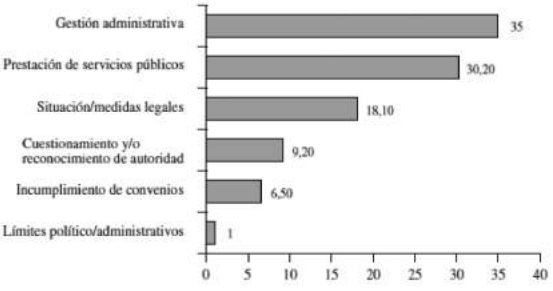
Los conflictos que entran en esta categoría se basan en la necesidad de un mejoramiento

de la institucionalidad, entendida en sus aspectos más prácticos como gestión administrativa, prestación de servicios públicos, problemas legales y judiciales y legitimidad de las autoridades públicas. Las luchas surgen tanto debido a la falta de institucionalidad como a la demanda de institucionalización de los actores sociales.

Muchos de los conflictos que caracterizan a América Latina se derivan de las debilidades de aplicación de las normas y de las ineficiencias del Estado, más que de una ausencia de normas e instituciones. El Estado, en este sentido, es un importante generador de conflictividad.

La conflictividad institucional es el segundo campo cuantitativamente más relevante (representa el 37,7% del total de conflictos) e incluye demandas generadas principalmente por fallas en la gestión administrativa (35%) y por prestación de servicios públicos (30,2%), véase el Gráfico 11. Las primeras comprenden demandas generadas por observaciones o desacuerdos respecto de la manera en que se realiza la gestión institucional, tanto en el ámbito público como en el privado; mientras que las segundas se refieren a todo conflicto provocado por falta o deficiencia en las obras públicas (caminos, escuelas, hospitales y otros) en una determinada zona, así como por las limitaciones del Estado para cumplir con el otorgamiento de servicios básicos.

Gráfico 11. Tipología (En porcentaje)



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

En cuanto a la distribución de los conflictos institucionales en las subregiones, el área donde se concentra la mayor cantidad de estos conflictos es la de los países andinos (41,2% del total), especialmente en el Estado Plurinacional de Bolivia y Colombia. Del total de los conflictos en Centroamérica, México y la República Dominicana, los temas institucionales ocupan el 41% del total. En esta subregión destacan dos grupos de países: por una parte, Panamá, Guatemala y la República Dominicana, donde los conflictos institucionales

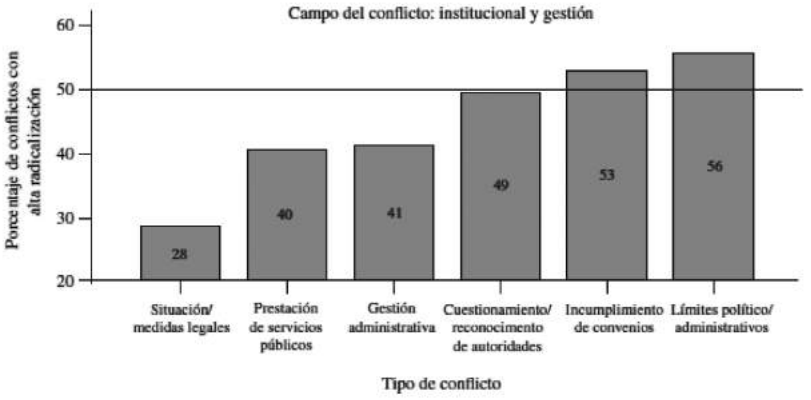
constituyen el campo de conflictividad más relevante; por otra, Honduras, el Salvador, México y Costa Rica con niveles medio/bajos de conflictividad institucional. Finalmente, el Cono Sur presenta el 28,7% de los conflictos institucionales, con niveles por lo general medios (la excepción es Uruguay, donde solo el 20% es representado por esta categoría), véase el Gráfico 12.

Los conflictos que más a menudo tienden a alcanzar un nivel de radicalización importante obedecen a problemas de límites político-administrativos (56%), cuestionamiento o reconocimiento de autoridad (49%), gestión administrativa (41%), incumplimiento de convenios (53%), prestación de servicios públicos (40%) y situación/medidas legales (28%), véase el Gráfico 13. Por otra parte, el promedio de radicalización es más alto en el caso de los conflictos debidos a incumplimiento de convenios y relativamente más bajo en las luchas sobre límites administrativos y medidas legales. La cantidad de conflictos institucionales y por temas de gestión administrativa que llegan a niveles altos de radicalización revela la existencia de causas estructurales que están en la base de la debilidad crónica de los mecanismos de gobernabilidad e institucionales.

Gráfico 12. Los conflictos institucionales
(En porcentaje)

Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

Gráfico 13. Niveles de radicalización



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

América Latina se caracteriza por la relevancia en muchos contextos de una dimensión "parainstitucional" del conflicto. Existiría una gramática de relaciones entre Estado y grupos sociales que se mueve entre lo formal y lo informal. Se trata de sistemas sincréticos que conservan rasgos organizativos y culturales "precapitalistas" y "predemocráticos", combinados con instituciones modernas. En este sentido, las redes personales y las jerarquías informales, encarnadas en los fenómenos del clientelismo y del personalismo, funcionan como mecanismos cotidianos para regular las relaciones sociales entre individuos y con las instituciones formales. En este ámbito "parainstitucional" es donde precisamente se mueven los actores sociales en conflicto[6].

6 Donzelot define el "arte de la negociación" brasileña como esa forma de resolver los conflictos a través de mecanismos informales de arbitraje y negociación,

Por último, independientemente de la orientación política y con algunas variaciones según los casos, en América Latina existe un problema estructural acerca del procesamiento de los conflictos que tiende a degenerar debido a la incapacidad político-institucional y estatal de atender las demandas e identificar las necesidades y urgencias de la población. Ello produce una gobernabilidad que tiende a la precariedad.

Tesis 8

Los conflictos culturales buscan nuevas formas de buena convivencia, tienen efecto sistémico y global, pero son más fragmentados que el resto de los conflictos sociales. Son en gran medida conflictos estratégicos.

La región latinoamericana, como hemos visto, tiene debilidades institucionales crónicas y niveles de desigualdad socioeconómica sobresalientes, siendo en este sentido un terreno fértil para la reproducción de mecanismos de desigualdad cultural también fuertes.

Sobre este tejido de desigualdad compleja se articulan las nuevas necesidades y demandas en la multifacética agenda de movilización cultural de América Latina, en la que sobresalen los conflictos ideológicos y políticos y los de seguridad ciudadana.

A pesar de que los conflictos culturales en todas sus variantes son relativamente menos numerosos con respecto a otros campos de conflictividad, poseen una repercusión sistémica muy alta, gracias al papel que la cultura está teniendo en el nuevo contexto globalizado latinoamericano. Por eso se trataría de conflictos estratégicos a la hora de entender su impacto en la globalización, la gobernabilidad y la democracia.

En este campo se incluyen aquellos conflictos cuyo fundamento estriba en una definición de cultura en sentido amplio, con un marcado acento en la vida cotidiana, las subjetividades y las identidades múltiples, así como en la industria y el mercado cultural. Estos conflictos son relativamente pocos en comparación con los demás campos (representan el 15% del total de conflictos); sin embargo, constituyen una categoría cardinal para entender las di-

---

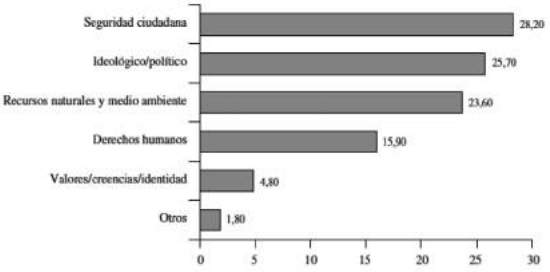
en una práctica en la que se combinan la libre interpretación de los principios legales, la transgresión consentida de las normas y la producción de una legalidad informal con una jurisdicción propia y localizada, libre de las amarras jurídicas y burocráticas del Estado, que dislocan y subvierten la supuesta centralidad y unicidad del derecho formal como regla ordenadora de la vida social (Donzelot, 1994).

námicas sociales actuales y la gramática de la nueva conflictividad.

En general, las demandas culturales se vinculan al reconocimiento o el fortalecimiento de las identidades de las personas y los actores y a ciertos niveles de calidad de vida, apuntando en abstracto a los derechos de tercera generación y al concepto de ciudadanía cultural. En estos conflictos se expresa la necesidad de afirmar una sociabilización, tanto subjetiva como colectivista, de redefinición de las relaciones sociales y condiciones de seguridad aceptables.

Las demandas por seguridad ciudadana generan poco más de un 28% de los conflictos culturales. Se refieren por lo general a reclamos relacionados con la falta de protección de la población ante hechos delictivos. El segundo tipo de demandas según su importancia lo constituyen aquellas relacionadas con luchas ideológico-políticas (cerca del 25,7%, con un total de 89 conflictos). Se trata de pugnas entre facciones —generalmente entre partidos políticos, grupos internos que los conforman o sectores afines— en torno de visiones ideológicas contrapuestas llevadas al plano del enfrentamiento. Cerca del 24% de los conflictos culturales son suscitados por problemas en el uso de los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental debido a acciones específicas efectuadas por instancias públicas, privadas o ambas (véase el Gráfico 14). Estas demandas, dependiendo de los casos, conciernen más a referentes ecologistas o a una perspectiva instrumental de control de los recursos naturales. El éxito de estos movimientos podría deberse en parte a su capacidad de involucrar a lo particular en lo universal, enfatizando el patrón actual de desarrollo y algunos valores globalizados difíciles de cuestionar, como la protección del ecosistema global.

Gráfico 14. Tipología de los conflictos culturales (En porcentaje)



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

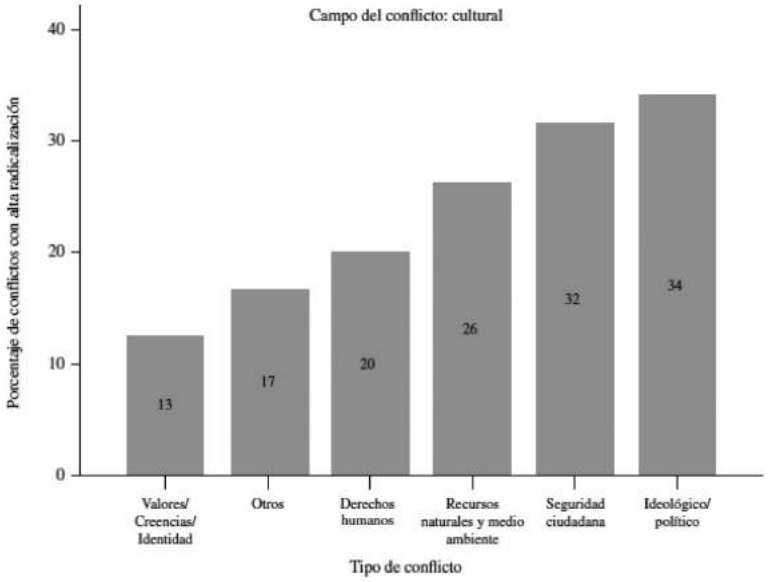
A nivel de subregiones, la de Centroamérica, México y la República Dominicana muestra un 16,3% de conflictos culturales sobre el total de conflictos; los países andinos, un 15,5% y el Cono Sur, un 12,6%. En los Andes septentrionales es donde se hallan algunos de los países con más conflictos: Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. En el Cono Sur se observa un patrón por lo general medio, con dos tendencias: por una parte, la Argentina, con el mayor número de conflictos culturales en términos absolutos y, por otra, Brasil y Chile. Finalmente, en Centroamérica y América del Norte destacan El Salvador y México con altos niveles de conflictividad, lo que puede explicarse parcialmente por la diversidad étnica y, sobre todo, los altos niveles de inseguridad y violación de derechos humanos que se están registrando en estos países (véase el Gráfico 15).

Los conflictos que más se radicalizan en términos porcentuales son los ideológico-políticos (34%), seguidos de los que atañen a la seguridad ciudadana (32%), las luchas por temas medioambientales (26%), las disputas por los derechos humanos (20%) y, finalmente, aquellos relativos a valores, creencias e identidades (13%), véase el Gráfico 16. En cuanto a los promedios de radicalización de los conflictos culturales, las luchas ideológico-políticas o por temas de seguridad ciudadana son las que tienden a ser más violentas. La categoría que alude a otros conflictos registra un 17%.

Gráfico 15. Los conflictos culturales (En porcentaje)

Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

Gráfico 16. Niveles de radicalización de los conflictos culturales



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

En general, la radicalización política e ideológica parece ser un factor que afecta seriamente a la gobernabilidad y la convivencia democrática, debido al riesgo de degenerar en niveles de confrontación y enfrentamiento violento. En este sentido, parece fundamental la definición de acuerdos para la convivencia político-ideológica en espacios democráticos compartidos.

Por último, en el ámbito de los conflictos culturales, los jóvenes parecen tener un papel funda-

mental como sujetos de la movilización y productores de nuevas demandas sociales. La tendencia a la movilización ha sido enfatizada también debido a una considerable frustración de expectativas entre los jóvenes, causada por el saldo socioeconómico negativo del período anterior, la desconfianza institucional y la rápida incorporación en la cultura "informacional". Esa frustración es uno de los motores de los conflictos, junto con la percepción de inseguridad y exclusión, como factores inherentes a la vida cotidiana, un proceso de ruptura de los imaginarios y las tensiones entre lo colectivo y lo individual. Los jóvenes son un sector crucial de la sociedad, como portadores de grandes potencialidades de cambio y nuevas propuestas, y al mismo tiempo una caja de Pandora que puede llegar a generar caos si no se logra canalizar sus demandas, expectativas y frustraciones. En este sentido, los jóvenes son como los conflictos: potencialmente peligrosos y al mismo tiempo renovadores del orden social. Las mujeres también son actrices fundamentales en los conflictos culturales. Si bien las tensiones relativas al género se expresan y reconocen poco en el espacio público mediático, poseen un potencial de cambio cultural y estratégico para las sociedades modernas, especialmente debido al papel propositivo que la mujer puede cumplir en la política y en la sociedad como promotora de cambio y de justicia.

Tesis 9

Existe una tendencia creciente de los conflictos y de los actores clásicos y nuevos a desplazarse hacia las redes de información y comunicación.

La región se inserta en un nuevo sistema global constituido por redes de intercambio y flujos de comunicación en tiempo real. Estas nuevas formas de comunicación, de conocimiento y de estilo de vida incorporadas por la sociedad dan lugar a lo que Castells denomina la "sociedad red" (Castells, 1997).

La red se ha convertido en el lugar donde se expresan y desarrollan las nuevas formas de conflicto y poder. La cultura de la "tecnosociabilidad" no solo cambia la vida cotidiana de las personas y las comunidades, sino también la política. En cuanto a los conflictos sociales, la política mediática cumple un papel relevante, puesto que realizar una protesta o una marcha en que no estén presentes los medios de comunicación verticales (televisión, radio y periódicos) u horizontales (Internet y teléfonos celulares) se traduce en una baja repercusión de la demanda y menores probabilidades de que esta sea satisfecha.

Las nuevas formas de comunicarse han determinado la utilización intensiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones

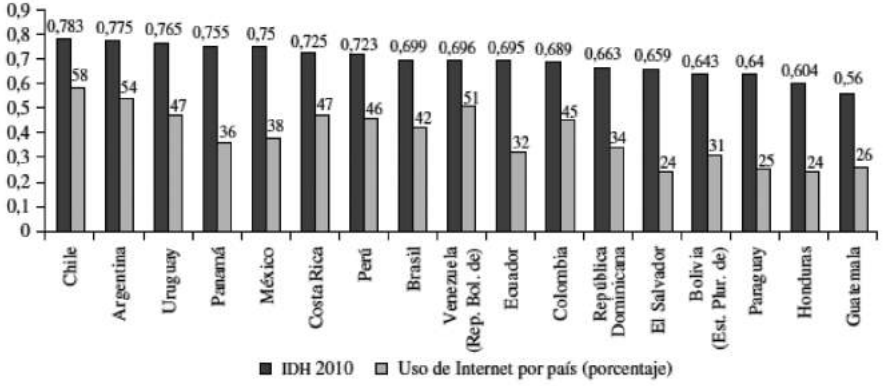
(TIC) en el espacio público. Este se entiende como el lugar de "encuentro", donde las ideas y los valores se forman, se transmiten, se respaldan y combaten (Castells, 2009). Las TIC permiten una manera de interactuar más ágil, flexible y espontánea entre los actores, quienes gracias a ellas pueden ejercer una participación más activa en la política. De esta forma se amplían las posibilidades de acción colectiva debido al fácil acceso y a los bajos costos de uso tanto de Internet como de la telefonía móvil[7]. Participar en un foro, un blog o un grupo dentro de una red social está más al alcance que otras formas de participación política. No obstante, en la sociedad de la información se reproducen las brechas sociales estructurales de la sociedad latinoamericana. Y si los países de la región continúan con la lógica "informacionalista" sin dar un salto hacia el modelo que caracteriza a la sociedad de la información, no se logrará la capacidad económica para integrar a la población en un proceso de desarrollo incluyente (Calderón, 2003).

Como se puede observar en el Gráfico 17, existe una relación directa entre el índice de desarrollo humano (IDH) y el porcentaje de uso de Internet. Países como la Argentina y Chile son los que, según los datos, lideran ambos indicadores, mientras que Paraguay, Honduras y Guatemala se encuentran en el otro extremo.

Estos datos se pueden interpretar como la existencia de un proceso de retroalimentación (*feedback loop*) entre las dos variables. Es decir, el acceso a las TIC y sobre todo a Internet se podría considerar un factor que favorece directa e indirectamente a los índices de desarrollo, pues se trata de herramientas que pueden mejorar el grado de información y participación social y política de las personas, así como sus condiciones básicas de vida en términos de alimentación, salud y educación; aunque también pueden ser recursos de dominación. En tal sentido, "la tecnología es un instrumento del crecimiento y el desarrollo" (PNUD, 2001: 29-30). América Latina se enfrenta a un importante desafío: reducir la brecha digital y lograr insertarse en el modelo de crecimiento que se desarrolla en torno de las nuevas tecnologías. Para ello, es relevante facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a toda la sociedad, en especial a los jóvenes, y reformar estructuralmente el sistema educativo de modo que en él se adopten las TIC (Calderón, 2003).

7 En el período 2002-2010, gran parte de los países de la región han duplicado el nivel de uso de Internet (*Informe Latinobarómetro*, 2010) y alrededor del 80% de los latinoamericanos poseen y utilizan un teléfono celular (International Telecommunications Union, ITU).

Gráfico 17. Índice de desarrollo humano (IDH) y uso porcentual de Internet



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

V. Los actores en la red

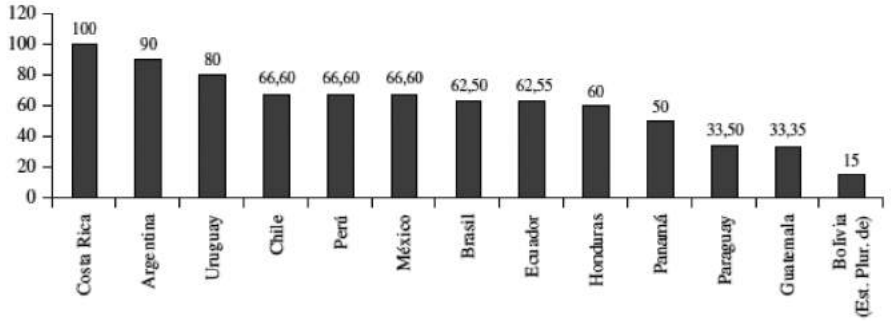
a. Actores clásicos

Gran parte de los actores y movimientos socioculturales clásicos latinoamericanos utilizan las páginas web para posicionarse a nivel nacional o internacional. Mediante esta vía difunden sus valores e ideas, aumentando las posibilidades de promover un cambio político o cultural e influenciando la opinión de la gente. Además, el uso de las TIC, en particular de Internet, permite a los movimientos interactuar y coordinar actividades tanto internamente como con otras redes y organizaciones, socializando experiencias.

En el Gráfico 18 se muestra que tanto el nivel de desarrollo como el porcentaje de

uso de Internet inciden en la cantidad de actores con presencia en la red. Por una parte, países como Costa Rica, la Argentina, Uruguay y Chile presentan niveles altos de IDH y mayor uso de Internet, y cuentan con un amplio porcentaje de actores representados en la red. En el otro extremo se encuentran Paraguay, Guatemala y el Estado Plurinacional de Bolivia, los países con menor desarrollo en la región y menor uso de Internet, y en donde existe un porcentaje muy bajo de actores sociales que cuentan con páginas web, blogs o redes sociales para difundir sus demandas.

Gráfico 18. Porcentaje de los principales actores con presencia en la red por país*



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

* Solo se consideraron los actores que tuvieron más de cinco episodios conflictivos en un determinado conflicto en el período de estudio.

b. Actores espontáneos[8]

Estos se caracterizan por emerger a partir de la red, ya que cuando se presenta un malestar o una demanda generalizada esta es transmitida espontáneamente por miles de personas —en un período de tiempo relativamente corto— a través de redes sociales, blogs, foros, cadenas de e-mails o mensajes de texto. Mediante estos instrumentos, los ciudadanos pueden organizarse frente al conflicto y propagar información. De Ugarte (2010) denomina a este fenómeno "ciberactivismo", entendido como una estrategia que busca producir el cambio en la agenda pública difundiendo un mensaje determinado y promoviendo su propagación mediante la transmisión boca en boca, que es multiplicada por los medios de comunicación y publicación electrónica personal. En los últimos años ha habido experiencias en las que el cambio en la agenda pública se ha llegado a concretar exitosamente. Existen dos fases dentro del ciberactivismo: una deliberativa, en que por medio de los blogs y los foros se inicia el debate, y otra de movilización, donde mediante e-mails y mensajes de texto vía celular la gente sale a la calle.

La globalización ha traído como consecuencia el fortalecimiento de las capacidades individuales, en las que prima la espontaneidad, el voluntarismo del activismo político y la autoorganización (Beck y Beck-Gernsheim, 2002); por tanto, se hace indispensable redefinir los proyectos colectivos en la red. "La cuestión es cómo lo individual es resultado de

8 Ejemplos de actores espontáneos en América Latina son: i) los estudiantes "pingüinos" en Chile; ii) el caso de Internet necesario en México, un movimiento generado en Twitter; y iii) un millón de voces contra las FARC iniciado en Colombia. El caso i) se produce en el año 2006 ante las demandas de los estudiantes chilenos por una mejora en la calidad de la educación. El éxito del "movimiento pingüino" fue posible gracias a la organización de los estudiantes que se mantuvieron coordinados mediante el uso de las TIC a lo largo del conflicto. El caso ii) nace en octubre de 2009 en México a través de la red social Twitter, a raíz del malestar de miles de usuarios ante la aprobación en la Cámara de Diputados del aumento en un 3% del costo de las telecomunicaciones a partir del año 2010. La reacción de los usuarios fue inmediata: "Internet no es un lujo" reclamaban por Twitter, provocando una ciberprotesta entre las 22:00 horas del 19 octubre y las 5:00 horas del 20 de octubre. En el caso iii) se trata de una acción producida en la red social Facebook en enero de 2008 en Colombia, con el objetivo de organizar una marcha masiva a nivel nacional en contra de la violencia. Llegó a contar con 300.000 adherentes (Neumayer y Raffl, 2008) y repercutió no solo en la red social, sino también en los medios de comunicación y en el espacio público real.

un compromiso colectivo, y cómo lo colectivo puede ser pensado desde la agencia individual" (PNUD, 2009).

Tesis 10

Una política constructivista produce o mejora una sociedad democrática y constituye un recurso formidable para enfrentar los conflictos y los climas sociales adversos. Los escenarios nacionales son diversos y están vinculados al clima social que se experimenta, así como a la capacidad político-institucional para procesar los conflictos.

La argumentación de esta tesis es esencialmente hipotética y de carácter prospectivo. En ella la pregunta es: ¿Qué condiciones o qué clima social inciden en la dinámica de los conflictos?, y además: ¿Existe la capacidad política e institucional para procesarlos?

El clima social se refiere al conjunto de condiciones objetivas y subjetivas en las que se producen los conflictos, sobre todo aquellas relacionadas con la equidad, la institucionalidad y el multiculturalismo que existen en un país determinado.

La capacidad de procesamiento del conflicto se refiere a la capacidad de trascender hacia un equilibrio caracterizado por un Estado legítimo, con instrumentos y espacios institucionales amplios y eficaces para procesar positivamente los conflictos y, al mismo tiempo, una sociedad activa y caracterizada por una fuerte participación ciudadana en la vida pública y una dinámica de acción colectiva creativa.

En otras palabras, se necesitarían sociedades con actores que no solo protesten, sino que interactúen con otros actores y con el Estado, proyectándose como sujetos autónomos y deliberantes del desarrollo y la democracia.

Los Estados latinoamericanos gestionan, en términos generales, un promedio de 11 conflictos nuevos por mes; los países que registran el número más alto de conflictos son Estado Plurinacional de Bolivia, Perú y la Argentina, con un total de conflictos superior a los 200. Por otra parte, los países con menos conflictos de la región son Costa Rica, Chile y El Salvador, con un promedio de 59 conflictos.

Los datos demuestran la existencia de una sociedad latinoamericana con una significativa capacidad de acción social, pero también con importantes asimetrías en las capacidades de movilización: mientras que en un extremo se ubica el Estado Plurinacional de Bolivia con un promedio de 21,8 conflictos nuevos por mes, en el otro está Costa Rica, con un promedio de 2,3 conflictos por mes (la relación entre ambos

promedios es de 9 a 1). Todo esto sin calificar luchas y movimientos sociales específicos.

Ahora bien, no solo se trata de analizar la capacidad que tiene una sociedad de movilizarse o actuar colectivamente, sino que se debe considerar también la capacidad política y social de procesar los conflictos existentes, sean estos pocos o muchos, y el conjunto de imaginarios colectivos sobre el conflicto instalado en una sociedad. Así, un contexto caracterizado por una sociedad y un ambiente político capaces de asumir el conflicto como una oportunidad para la modificación de ciertas condiciones, más que como un perjuicio o un freno para el desarrollo, dispone de mayores capacidades para procesar el conflicto y avanzar democráticamente. En este mismo sentido, una sociedad que se moviliza, pero asume su movilización y el conflicto como una oportunidad para buscar y generar acuerdos (o condiciones para acuerdos) y no como una forma de imponer una visión o una agenda, es una sociedad con capacidad de procesamiento del conflicto.

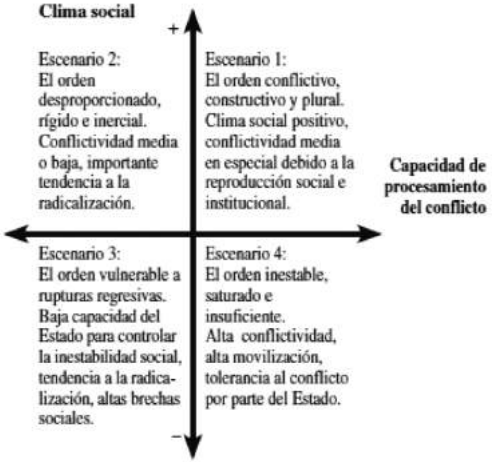
Entonces, en lo que respecta a la sociedad, la capacidad de procesamiento del conflicto sería, por una parte, la capacidad que esta tiene de actuar como colectivo, de movilizarse y protestar; y por otra, la capacidad de dotar de legitimidad a estos procesos a partir tanto de la socialización de la información, como de la participación de los propios actores bajo una lógica constructivista. Desde el Estado, la capacidad de procesamiento de los conflictos estaría dada tanto por las capacidades institucionales y partidarias para gestionarlos, como por la forma en que el Estado tiende a abordarlos. De tal forma que existen Estados con capacidades de gestión de los conflictos mediante una institucionalidad sólida, como también Estados que gestionan los conflictos a través de medios no formales.

Sobre la base de estas variables, se determinaron cuatro escenarios dinámicos (véase el Gráfico 19):

- El de países en los que prima la distensión social y se tiende a un orden conflictivo, constructivo y plural (Escenario 1).
- El de países que guardan un orden institucional rígido o desproporcionado, y cuyo abordaje del conflicto tiende a ser represivo o se tiende a negar el conflicto (Escenario 2).
- El de países con alta vulnerabilidad a rupturas e importantes limitaciones en la predisposición constructiva hacia el conflicto (Escenario 3).

– El de países que mantienen un orden inestable debido a sus bajas capacidades de procesamiento del conflicto, y que enfrentan dificultades para gestionar un malestar social generalizado (Escenario 4).

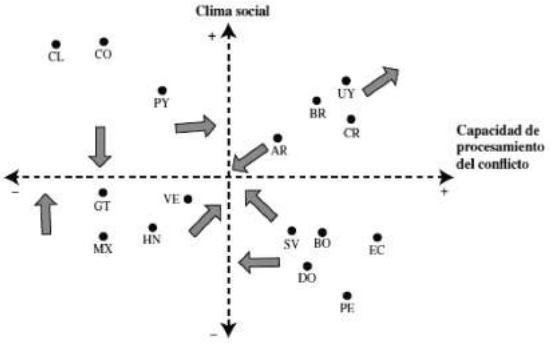
Gráfico 19. Escenarios del conflicto



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz, 2011.

A partir de estos escenarios se construyó una tipología dinámica de la situación y las perspectivas de los distintos países, donde se muestra tanto a países con una considerable capacidad de procesamiento de conflictos y un clima de bienestar social (como Costa Rica y Uruguay), como a otros con serios problemas de clima social y notorias dificultades para procesar conflictos (como Honduras o Guatemala). En todos los casos se detectaron escenarios de mejoramiento de las dos variables en juego. En el Gráfico 20 se ilustran las situaciones y las probables trayectorias históricas en la región.

Gráfico 20. Tendencias regionales



Fuente: Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PAPEP-PNUD), *Los conflictos sociales en América Latina,* La Paz, 2011.

Para finalizar, y en síntesis, los países de América Latina comparten rasgos comunes en términos de conflictividad: plataformas de exclusión y desigualdades crónicas mayoritariamente cuestionadas por la ciudadanía, conflictos complejos que relacionan tales desigualdades con el número de conflictos y su intensidad, combinación de protestas sociales que se expresan tanto en el plano social y nacional como en el plano cultural/global, racionalidades prácticas en los conflictos por la reproducción social, que conviven con demandas de mayor eficacia y eficiencia institucional y con conflictos culturales de carácter sistémico. Asimismo, Estados omnipresentes en todas las esferas de los conflictos, con serias limitaciones para procesarlos, y sociedades con conflictos cada vez más fragmentados, nuevos espacios públicos vinculados con sistemas de comunicación donde se representan de manera contradictoria los conflictos, y conflictos que tienden a desplazarse crecientemente hacia las redes de información y comunicación con efectos multiplicadores en los nuevos escenarios de poder. En suma, existe una mayor complejidad social vinculada a sistemas políticos y Estados con relativas y limitadas capacidades de gestionarla. Las situaciones y los escenarios prospectivos son diversos y sus opciones abiertas.

Bibliografía

Ansaldi, W. (comp.) 1986 *La ética de la democracia. Los derechos humanos como límite frente a la arbitrariedad* (Buenos Aires: CLACSO).

Aranibar, A.; F. Vázquez y J. C. Garzón 2011 *Los caminos diferenciados de la democracia en América Latina. Lecciones aprendidas de la gestión política de la crisis económica internacional* (La Paz: Organización de los Estados Americanos/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Bauman, Z. 2005 *Identidad* (Madrid: Losada).

_____ 1999 *Modernidad líquida* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Beck, U. y E. Beck-Gernsheim 2002 *La individualización: El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas* (Barcelona: Paidós).

Boudon, Raymond y François Bourricaud 1982 *Dictionnaire critique de la sociologie* (París: PUF).

Calderón, F. 2008 "Una inflexión histórica. Cambio político y situación socioinstitucional en América Latina", en *Revista de la CEPAL*, Nº 96 (LC/G. 2396-P), Santiago de Chile.

_____ 2003 *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
_____ 1986 *Los movimientos sociales ante la crisis* (Buenos Aires: Universidad de las Naciones Unidas-UNU/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO/Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-IISUNAM).
Calderón, F. y M. Dos Santos (comps.) 1987 *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden* (Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales-ILET).
Castells, M. 2009 *Poder y comunicación* (Madrid: Alianza).
_____ 1997 "Economía, sociedad y cultura", *La era de la información*, tomo 1 (Madrid: Alianza).
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 2010a *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir* (LC/G. 2432-SES.33/3), Santiago de Chile.
_____ 2010b *América Latina frente al espejo: Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar de la región* (LC/G. 2419), Santiago de Chile.
_____ 2010c *Panorama social de América Latina 2010*, Santiago de Chile.
_____ 2009 CEPALSTAT. Estadísticas de América Latina y el Caribe, en <http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp>.
Corporación Latinobarómetro 2010 *Informe Latinobarómetro 2010*, Santiago de Chile, en <http://www.latinobarometro.org/latino/LATDatos.jsp>.
De Ugarte, D. 2010 "El ciberactivismo, la nueva revolución de la militancia política. Internet y los celulares son sus armas", *La Nación*, en <http://www.lanación.com.ar/nota.asp?nota_id=1049795>.
Donzelot, J. 1994 *L'invention du social: essai sur le declin des passions politiques* (París: Seuil).
Forbes 2011 "The world's most powerful people", Nueva York.
Lechner, N. 1986 *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado* (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas).
Neumayer, Ch. y C. Raffl 2008 "Facebook for protest? The value of social software for political activism in the anti Farc rallies", Salzburg, Universidad de Salzburgo, en

<http://www.digiactive.org/wp-content/uploads/ research1_neumayerra.pdf>.

PAPEP-PNUD/Fundación UNIR Bolivia (Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2011 *Los conflictos sociales en América Latina*, La Paz.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2010 *Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2010. Actuar sobre el futuro: Romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad*, Nueva York.

_____ 2009 *Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010* (Buenos Aires: Libros del Zorzal).

_____ 2004 *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas* (Buenos Aires: Alfaguara).

_____ 2001 *Informe sobre desarrollo humano: Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano*, Nueva York.

Sen, A. K. 1999 *Development as Freedom* (Nueva York: Knopf).

Touraine, A. 1988 *La parole et le sang* (París: Odile Jacob).

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 2009 "World Telecommunication Indicators Database", Ginebra, en <http://www.itu.int/itud/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/CellularSubscribersPublic&ReportFormat=HTML4.0&RP_intYear=2009RP_intLanguageID=1&RP_bitLiveData=False>.

Vattimo, G. 2006 "Conferencia en La Moneda", Santiago de Chile.

Vega, J. E. 2004 "Diversidad, igualdad y exclusión, multiculturalismo y democracia: promesas y problemas", en *Multiculturalismo y democracia* (La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD).

Movimientos culturales y la emergencia de una nueva politicidad*

A partir de la década del ochenta, ante la crisis económica y la reemergencia de la democracia en la región, la sociedad generó espacios novedosos de acción colectiva a través de movimientos y organizaciones sociales diversas que —aunque fragmentados— expresaron demandas puntuales al tiempo que crearon nuevos espacios de discusión de propuestas, que aspiraban a mejorar la calidad democrática y a lograr mayor inclusión social en los procesos de desarrollo.

Estos movimientos sociales surgieron con demandas más vinculadas a la revalorización de la democracia en la vida cotidiana que a la consecución de grandes proyectos históricos. Entre ellos es posible destacar movimientos feministas, de derechos humanos y de ética en la política, de orientaciones democráticas y participativas del movimiento obrero, movimientos de comunitarismo urbano como las comunidades Eclesiales de Base, de jóvenes, étnicos y religiosos, entre tantos otros[1]. Más allá de las distintas orientaciones de estos movimientos, en definitiva todos pugnaban por un cambio y, muchas veces, sus demandas se superponían. Como dijimos con Elizabeth Jelin, "en general, los movimientos sociales no tienen fines predeterminados, los redefinen en el propio conflicto" (Calderón y Jelin, 1987: 25)[2].

Cabe mencionar que estos nuevos campos conflictivos, quizás, ya remitían al problema de la construcción de un nuevo orden societal:

> Una característica propia de América Latina es que no existen movimientos sociales puros o cla-

* Texto inédito extraído del libro *Tiempos de cambio: consideraciones sociológicas sobre el desarrollo y la democracia en América Latina* 2012 (Buenos Aires: Teseo/FLACSO/).

1 Para un análisis compartido de dichos movimientos en Sudamérica, ver Calderón (1986 y 1995); Scherer-Warren y Krischke (1987); y Grzybowski (2004b).

2 Ver especialmente Touraine (1999).

> ramente definidos, dada la multidimensionalidad no sólo de las relaciones sociales, sino también de los mismos sentidos de la acción colectiva. Por ejemplo, un movimiento de orientación clasista probablemente esté acompañado por sentidos étnicos y de género que lo diferencian y asimilan a otros movimientos de orientación culturalista con contenidos clasistas. Así, los movimientos sociales se ven nutridos por múltiples energías que incluyen en su constitución desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural, hasta modos de transformación y participación cotidiana de autoproducción societal (Calderón, 1986).

Sin embargo, el panorama cambiaría en la década siguiente. Debido a las derrotas políticas de varios gobiernos progresistas, al impacto de las reformas económicas y a la hipervalorización del mercado generado por las políticas neoconservadoras. Estos movimientos se debilitaron, especialmente en los países en donde las reformas estructurales se aplicaron de manera más ortodoxa. En esos años en los que el consumo pasó a ser un referente fundamental en el imaginario social y en los que se expandió una cultura individualista basada en una ideología de ganadores y perdedores, la sociedad y sus actores perdieron fuerza para intervenir en las opciones del desarrollo y de la democracia. En este sentido, quizás el fenómeno más dramático fue el de los mineros y sus sindicatos en Bolivia que, de constituir un referente de transformación social, pasaron a sucumbir bajo el poder político, produciendo consecuencias nefastas para los propios trabajadores y para el conjunto de la sociedad.

Finalmente, en la primera década del nuevo milenio, los Foros Sociales regionales primero y los globales después, promovidos desde la experiencia de Porto Alegre, fueron importantes reflejos de un cambio que volvía a percibirse en la región. Así, a partir del año 2000, empezaron a expandirse acciones colectivas de nuevo tipo, como el movimiento indigenista en Ecuador, las protestas sociales en Argentina y Bolivia o los movimientos zapatistas en México, entre otros. Estos casos constituyen nuevas acciones colectivas con una clara impronta cultural que, al tiempo que cuestionan los nefastos resultados de exclusión producidos por las reformas estructurales, plantean nuevas demandas de reconocimiento cultural y manifiestan el surgimiento de una nueva politicidad en la región, sobre todo en los movimientos de jóvenes. Esta politicidad está relacionada con nuevas formas de hacer política que combinan la dinámica de la fuerza cultural y el creciente uso de las nuevas tecnologías de comunicación, no como me-

ros instrumentos, sino como espacios renovados de intercambio y de socialización en la red, que resultan tan importantes que estos cambios serían impensables sin ellos.

Para entender el surgimiento de esta nueva politicidad es indispensable volver a mencionar que la expansión de la industria cultural trajo aparejada una enorme exposición de los cambios globales a escala local, sobre todo en el plano de la identidad cultural. En la década del noventa, los conflictos culturales, como afirma el IDH de 1994, pasaron a ser predominantes a escala global, hecho que se reflejó como nunca en los medios y en la vida cotidiana de las personas. Así, el mundo vio cómo se desmoronó la Unión Soviética, cómo se expandieron nuevas y viejas religiones y nacionalidades, o pudo ser testigo de que Chiapas nunca estuvo más cerca de Cochabamba y los obreros de las automotrices brasileñas de sus pares sindicales japoneses. En definitiva, con la comunicación global y con la exposición de las nuevas protestas a escala global, todo cambió, entre otras cosas los incipientes movimientos antiglobalizadores que dieron lugar a francos movimientos alter globalización que comunicaban una explosión cultural experimentada prácticamente en todas partes: migrantes africanos en Europa plantearon los problemas de otredad de una manera completamente nueva que las democracias europeas aún no pueden resolver, el islamismo emergió como una cuestión global y los problemas surgidos por el cambio climático empezaron a ser evidentes para todos por los desastres ambientales reflejados al mismo tiempo en las pantallas de todo el mundo.

En este contexto hay un hecho particularmente importante referido a la multiplicación de ONGs en el conjunto de la región. Ellas participan de un proceso de expansión de las libertades y opciones sociales pero también arrastran nuevas formas de poder y dependencia social. Son una suerte de organizaciones con carácter paraestatal, principalmente en sociedades con Estados débiles y baja cohesión social. Las ONGs son un resultado del nuevo orden global emergente. Muchas veces estas organizaciones de la sociedad civil "semiestatal" buscan y logran reemplazar a los actores sociales y políticos, conformando una nueva forma de poder civil que está presente como un factor crucial de la realidad política y económica de la región[3].

En este mundo globalizado, un hecho singular parece tener crucial importancia: un mayor

3 Ver Sorj (2007).

espacio de libertad personal se traduce en múltiples demandas colectivas en función de valores de autonomía personal. Como dije hace un tiempo: "Los latinoamericanos ya no están parados frente al progreso, están parados en medio de un laberinto. Son más libres, pero están más solos"[4]. De este modo, quizás por primera vez en la región, las orientaciones colectivas de los actores, principalmente las de los jóvenes, empiezan a valorar la construcción de la autonomía personal como un bien colectivo, y viceversa: las orientaciones y valores colectivos también empiezan a valorar la autonomía de los actores individuales.

Así ocurre que hoy en día las demandas se extienden a los ámbitos culturales más variados ante la facilidad para darse a conocer que los medios y la sociedad de la información otorgan. Y sin embargo, estos actores muchas veces no logran construir una respuesta efectiva a la crisis global ni a la crisis de la política, pues su desarticulación y singularidad les impide juntar la fuerza necesaria tanto para plantear una visión más integral de las sociedades en el mundo actual, como para asumir la profundidad de los cambios. De ahí la importancia crucial y estratégica de la coordinación y el intercambio cultural que supone una auténtica democracia deliberativa.

Por supuesto, existen peculiaridades, como el movimiento alter globalización, o el caso del PT en Brasil y el del MAS en Bolivia[5]. Estos partidos, constituidos gracias a la coordinación de diversos movimientos sociales que buscaron institucionalizarse y que actualmente gobiernan sus países, plantean una serie de temas referidos tanto a la vinculación entre transformaciones sociales y al cambio democrático, como a la autonomía de tales movimientos frente al poder estatal: ¿Es posible articular cambio democrático con cambios en las estructuras sociales de poder? ¿Es posible una diferenciación entre la dinámica de la acción colectiva, la partidaria y la estatal? A nuestro entender, la lógica de la diferenciación funcional y social suponen también en estos casos nuevas formas de coordinación y deliberación democráticas.

4 Fernando Calderón, *Institucionalidad democrática y movimientos sociales en los ochenta.*

5 Quizás pueda mencionarse como una particularidad en este aspecto al movimiento anti-globalización expresado en el Foro de Porto Alegre, Grzybowski (2004). Más puntualmente los casos del PT y del MAS en Bolivia. Se trataría, en el caso boliviano, de un proceso en el que movimientos etnoculturales buscan institucionalizarse en el poder del Estado.

Son tan variados estos movimientos que es difícil recorrerlos todos aquí. Tampoco es esa la intención: se optó en cambio por seleccionar algunos ejemplos que representan distintos reclamos que difieren en su composición y en el origen de sus demandas pero que, sin embargo, tienen algo en común: son voces emergentes que se escuchan con cada vez más fuerza y que plantean nuevas formas de sociabilidad y de cambio político.

1. Movimientos de participación femenina

Incluir a los movimientos feministas dentro de los "nuevos movimientos socioculturales" esconde una paradoja, ya que es un movimiento que responde a la dominación estructural y milenaria de las mujeres por parte de un poder patriarcal. En este sentido, es necesario recordar que el patriarcado como orden de género es anterior a la conquista y, en ese sentido, anterior a los movimientos indígenas, e incluso al capitalismo que dio origen al movimiento obrero. Por otro lado, sin embargo, se trata de un movimiento que al menos en los tiempos modernos fue capaz de renovarse ante cada nuevo ciclo histórico. Eso parece ser lo que ocurre hoy en nuestra región (Montaño & Sanz, 2009).

De acuerdo a la CEPAL (2007), las mujeres en América Latina son las protagonistas de uno de los mayores cambios culturales de la historia. La igualdad ha avanzado a paso lento por lo que, a pesar de los drásticos y probablemente irreversibles cambios producidos en las familias, el mundo del trabajo y la vida política; el malestar de las mujeres en la región ha puesto al descubierto la brecha entre su aporte a la sociedad y el reconocimiento que por ello reciben.

En nuestra región las mujeres no sólo tienen un estatus socioeconómico menor que los hombres, sino que tampoco tienen las mismas oportunidades; esto, para el que quiera verlo, es un hecho evidente. A pesar de los avances registrados en materia de políticas públicas y participación política, la equidad de género se encuentra lejos todavía de constituirse en una característica en las sociedades latinoamericanas. Y aquí es necesario considerar que este no es un asunto que concierne exclusivamente a las mujeres: la equidad de género es un indicador fundamental del grado de democracia de un sistema político y es, ante todo, una muestra de las desigualdades que persisten hacia el interior de nuestras sociedades.

La igualdad en la diferencia involucra la calidad de la democracia en cuanto a su capacidad para reducir la brecha entre el discurso sobre la igualdad de derechos y la capacidad real de alcanzar la igualdad de opciones para los ciudadanos y las ciudadanas de un país. Tomando como referencia tan sólo el tema de la paridad de género en la política, la evidencia empírica nos muestra que, si bien la participación política de la mujer en la región se ha incrementado, aún sigue siendo muy baja. Si bien en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú se han establecido cuotas que determinan un nivel mínimo de representación para las mujeres en las listas partidarias de elecciones legislativas (de entre 20% y 40%), sólo en Argentina la participación relativa de la mujer en el Parlamento es superior al 30%. En los demás países, mientras tanto, este porcentaje oscila entre 23% (México) y 6% (Honduras) (CEPAL, 2006). (Aunque vale la pena recordar que actualmente una "presidenta" gobierna Argentina y, hasta enero de 2010, lo mismo ocurría en Chile).

Claro que no es fácil avanzar en este sentido. Para alcanzar una mejor distribución en las decisiones políticas las mujeres y los movimientos de género deben superar múltiples y complejas barreras, barreras sobre todo culturales que tienen que ver con la vida cotidiana y que muestran desigualdades establecidas desde el surgimiento de nuestras sociedades, con fuertes culturas machistas y patriarcales arraigadas en el alma misma latinoamericana.

Por ejemplo, un obstáculo importante para el desarrollo político de las mujeres radica en que muchas de ellas son jefas de hogar o siguen siendo las principales responsables por el cuidado del hogar y de los hijos. En este sentido, mientras en los hogares no exista una distribución más equitativa de las responsabilidades domésticas y no se implementen políticas públicas a favor de la familia, los costos de lograr una carrera política y cumplir con las responsabilidades familiares seguirán siendo excesivamente altos para muchas mujeres (Buvinic & Roza, 2004).

Otro problema clave que concierne a la vida cotidiana es el de la violencia de género. "La violencia de género constituye una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos de las mujeres, así como un impedimento al desarrollo económico, social y democrático en todos los países", según afirma la ONU (2006). Precisamente este tema quizá se haya convertido en la principal demanda de las mujeres de origen popular, y se ha expandido como preocupación a toda la sociedad.

En agosto de 2006 se sancionó en Brasil la Ley Maria da Penha[6], ícono de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esta ley constituye un gran avance en la lucha de las mujeres y la sociedad por el derecho a una vida libre de violencia. La norma determina que el Estado debe crear mecanismos para inhibir la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Establece cambios tanto en la definición de los crímenes de violencia contra la mujer como en los procedimientos judiciales y de la autoridad policial. Define la violencia doméstica como una de las formas de violación de los derechos humanos, modifica el Código Penal y permite que los agresores sean detenidos en delito flagrante, debiendo cumplir prisión preventiva cuando amenacen la integridad física de la mujer, así como asistir a programas de recuperación y reeducación. Además, prevé inéditas medidas de protección para la mujer y sus hijos si sus vidas están en riesgo, como el alejamiento del agresor del domicilio y la prohibición de aproximarse a él (Montaño Virreira y Sanz Ardaya, 2009).

Sin embargo, a mi entender, la dinámica más avanzada de estos movimientos se encuentra en aquellos que no sólo buscan alcanzar la paridad, sino también cambiar un patrón de poder cultural que coloca el acento en la mutación cultural de una forma de vivir. "El papel central, en consecuencia, del movimiento feminista es la redefinición o resignificación de la realidad, es decir, la subversión de los códigos culturales dominantes como una de sus prácticas fundamentales" (Montaño Virreira y Sanz Ardaya, 2009)

En este contexto, sobresale la capacidad de acción de las mujeres jóvenes que a pesar de experimentar una serie de discriminaciones en el plano del trabajo y las remuneraciones —y sobre todo en los mundos subjetivos regidos por patrones culturales machistas—, están expandiendo sus capacidades de acción tanto a nivel colectivo como individual. Un reciente estudio sobre jóvenes en el Mercosur demostró que las mujeres jóvenes tienen una mayor capacidad que los hombres para reaccionar ante la percepción de injusticias y desajustes entre aspiraciones y logros, como también tendrían una mayor capacidad para vincular metas y problemas con resultados. Es decir, parecería que las mujeres están expandiendo, indepen-

6 La ley lleva el nombre en honor a la protagonista de un caso emblemático de violencia doméstica y familiar contra la mujer, que luchó diecinueve años para que la Justicia condenara a su ex marido, que intentó asesinarla en dos oportunidades, en <http://www.reddejusticia.org.co/documentos/adital_combate_ violencia_mujer_febrero_ 2007.pdf>.

dientemente o a pesar de sus condiciones socioeconómicas, su capacidad de acción tanto en el plano individual como en el colectivo. Sorprende también que su capacidad de ejercicio de una ciudadanía activa, que combina demandas de reconocimiento y de distribución, sea relativamente mayor. De este modo podemos decir que la fuerza más novedosa y creativa de la acción colectiva se estaría generando, al menos en el Mercosur, entre las mujeres jóvenes. Por ello es necesario recordar que los actores jóvenes tendrían entre las actrices su principal capital de renovación y cambio cultural (PNUD, 2009c).

2. Movimientos ecologistas

Los primeros grupos ecologistas aparecieron en los años setenta en las ciudades más industrializadas y tecnologizadas pues es precisamente allí donde más se ha sentido la necesidad de revisar un progreso basado en la destrucción del ecosistema global[7]. Más recientemente, en los países en desarrollo ha crecido el debate en torno a este tema y, especialmente, en torno a cómo revertir el vínculo perverso entre pobreza y degradación ambiental. Ejemplos de esta preocupación son la Conferencia de Río de 1992 y la Agenda 21, eventos en los que se vinculó la crisis del ecosistema global a las inequidades de un mundo en el que coexisten altos niveles de pobreza con patrones de consumo excesivos basados en la depredación del ambiente.

En la primera década de este milenio se viene escuchando cada vez con más fuerza el surgimiento de una suerte de "conciencia ambiental". La reciente y fallida cumbre de Copenhague fue seguida por millones de personas en todo el mundo, el documental "Una verdad incómoda" del ex candidato presidencial estadounidense Al Gore sobre el cambio climático, expuso los problemas del cambio climático que, catástrofes ambientales median-

7 "Todo retorno a la naturaleza había sido percibido en la historia occidental moderna como irracional, utópico, en contradicción con las evoluciones 'progresivas'. De hecho, la aspiración a la naturaleza no remite solamente al mito de un pasado natural perdido; remite también a los seres que se sienten oprimidos en un mundo artificial y abstracto. La reivindicación de la naturaleza es una de las reivindicaciones más personales y más profundas que nace y se desarrolla en los medios urbanos más industrializados, tecnologizados, burocratizados, cronometrados" (Morin, 1990: 180). Traducción del autor.

te, ya son claramente visibles a nivel mundial. Así, el tema ecológico ha pasado a estar entre las principales preocupaciones de hoy en día a nivel global, no sólo por los problemas ecológicos específicos sino especialmente porque este tema expone como pocos los conflictos derivados de la cara oscura de la globalización, es decir, de la desigualdad.

En este sentido, los movimientos ecologistas son particularmente interesantes porque tienen intrínsecamente una carga anti-sistémica, ya que apuntan al centro del capitalismo, es decir, al patrón consumista como estilo de vida, responsabilizando por ello en mayor medida a los países desarrollados por la destrucción progresiva del ecosistema global. Roberto Guimaraes apunta que las responsabilidades no son globales y equitativas para todos:

> los países desarrollados deberían asumir una mayor responsabilidad pues ellos han dañado más fuertemente el ecosistema global, aunque sean ahora quienes desean distribuir "equitativamente" los costos de ese desarrollo del cual disfrutan. Los datos son contundentes: mientras que los países desarrollados con el 20% de la población mundial se apropian del 80% de los recursos naturales y son responsables del 75% del total de emisiones contaminantes; los países en vías de desarrollo, con el 80% de la población mundial, se apropian del 20% de los recursos y son responsables del 20% de la contaminación (Guimaraes, 1996: 61)[8].

Reforzando esta idea, mientras que los países desarrollados tienen la posibilidad —por su propio nivel de desarrollo— de aliviar problemas ambientales, los países en vías de desarrollo, especialmente los más pobres, están agotando sus recursos naturales por una cuestión de supervivencia, perjudicándose de esta manera enormemente en el largo plazo. Es por esto que la relación entre pobreza y daño ambiental constituye uno de los puntos centrales de las preocupaciones de la crisis del ecosistema global, pues se trata de un círculo vicioso que genera más pobreza y deterioro ambiental, en el cual el uso indiscriminado de los recursos naturales sobre los cuales la población empobrecida ejerce presión por cuestiones de supervivencia hace que dichos recursos disminuyan para las próximas generaciones, lo que a su vez hace aumentar la pobreza. En este contexto, si bien América Latina participa de manera marginal en el deterioro ambiental, vive los efectos del mismo de manera contundente[9].

8 Ver también IDH 2008.

9 "Sólo para dar un ejemplo sobre la capa de ozono, se estima que el 15% de ella ha sido destruida por la

Por otra parte, otro hecho que hace a estos movimientos particularmente interesantes es que los conflictos que los atañen muchas veces no se restringen a un país, ya que el ecosistema es un sistema global basado en la interrelación, conflictiva pero también solidaria e interdependiente, entre los seres vivos. Por ello es allí donde radicaría el éxito de estos movimientos: en su capacidad de vincular lo particular con lo universal desde una perspectiva no instrumental, opuesta en este sentido a los puros procesos de modernización.

Tomar conciencia de la actual crisis ecológica implica entonces cuestionar todo un sistema de desarrollo inequitativo orientado a satisfacer estilos de vida extremadamente consumistas del que se beneficia sólo una parte de la población mundial frente a un gran número de países y regiones, de millones de personas, que se ven forzadas a deteriorar sus ecosistemas para sobrevivir. Más profundamente, lo que se cuestiona es un estilo de vida basado en un sinsentido en cuanto a las metas de progreso que las sociedades se han puesto, metas consumistas que excluyen a la mayoría de la población y cercenan las posibilidades de desarrollo futuro para todos. El mundo, dadas las realidades del consumo de Occidente, no podrá ser nunca un mundo occidental. Esto coloca en el horizonte nuevamente la necesidad de una modernidad pensada a partir de las realidades del Sur y de su pluralismo constitutivo.

El reciente conflicto en la ciudad argentina de Gualeguaychú, generado por la instalación de la pastera finlandesa Botnia en la orilla uruguaya, es un buen ejemplo de los conflictos ecológicos que emergen entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo y, más que nada, del accionar de los nuevos movimientos socioculturales. El tema es analizado en los cuadernos de gobernabilidad democrática Nº 4 del PNUD:

> Desde los "abrazos al puente" hasta la quema de banderas finlandesas, el caso de Gualeguaychú,

producción principalmente de gases de carbono, pero también de otros compuestos químicos. Si bien es cierto que es un problema global la destrucción de este 15%, las investigaciones más recientes muestran que el 70% de esa destrucción está en el cono sur de América Latina, en ese caso específico, no contribuye ni siquiera con el 3% de la producción de gases de carbono. Por lo tanto, el 97% del problema de destrucción de la capa de ozono no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, tenemos el 70% del hoyo que está sobre Argentina, Chile, Paraguay y el sur de Brasil con las consecuencias que se derivan para la actividad pecuaria y para la salud humana" (Guimaraes, 1996: 62).

> evidencia la fuerza de la internacionalización de la política, la intensidad con que el Estado nacional es replicado desde lo global y lo local, y las luces y sombras del papel que los movimientos sociales pueden desempeñar en procesos que conjugan lo productivo y lo ambiental. En el así llamado conflicto de las "papeleras", la cultura fue y es una dimensión central, porque una comunidad local dotada de un modelo de desenvolvimiento, o al menos de una percepción de sus señas de identidad, colisionó con un proceso productivo nacional y global al que juzgó mortíferamente amenazante (Palermo, Aboud & Musseri, 2009).

El caso nos muestra la forma en la que el movimiento actuó en relación con la política y el Estado, utilizando los medios de comunicación. En este sentido es un ejemplo de redistribución del poder con una dirección fuertemente local pero proyectada a todo el país gracias al uso de los medios de comunicación. Por otro lado, muestra las dificultades que los Estados tienen para enfrentar ciertas demandas y, al mismo tiempo, ilustra claramente las dificultades principales que enfrenta la política ante una sociedad policéntrica. "Los asambleístas han fundado su propia legitimidad y tienen mil referentes que entran y salen de su discurso con fugacidad, porque no han precisado de ninguno en particular para fundarse. Esta autonomía en su legitimidad representa un obstáculo más para la política convencional, que en cierta medida no supo qué hacer con ellos, ni cómo interpelarlos. Por otra parte, analizamos un caso en el que, a lo largo del tiempo transcurrido, el proceso de constitución de su propia subjetividad ha tenido una importancia de primer orden." Y esto es tan válido para la política argentina como para la uruguaya.

A pesar de estas dificultades, los autores del artículo creen que el margen del que la política dispone para hacer frente a tales desafíos ha sido subestimado. Es en este sentido que sostienen que la capacidad de los liderazgos políticos son esenciales para evitar caer en acciones hiperrepresentativas, como muchos creen que ocurrió en el caso de Gualeguaychú. Allí, ante el vacío en la representatividad, las respuestas más fáciles fueron aquellas que sobreactuaron las demandas, con lo cual se elevó el grado del conflicto. Ante este escenario, continúan diciendo, resultaría fundamental un liderazgo político que actué como respuesta a las nuevas relaciones entre sociedad, cultura y política, para evitar de esta manera la profundización de los conflictos. "La necesidad de prevenir como ejercicio de liderazgo proviene de asumir esta condición como punto de partida indispensa-

ble para llegar a acuerdos y establecer escenarios cooperativos […] Si las demandas colisionan en un espacio desprovisto de coordinación y prevención, la posibilidad de acuerdos y transacciones tiende a reducirse a cero."

En el caso de Gualeguaychú los liderazgos políticos actuaron de manera equívoca: o bien estuvieron ausentes, o se comprometieron más de lo conveniente, transformando la causa en un asunto de "interés nacional", elevando así el nivel del conflicto. Con todo, más allá de los graves problemas de representación que el conflicto de Gualeguaychú planteó, cabe destacar allí la aparición de un nuevo sujeto colectivo que, aunque de futuro incierto, abrió nuevas formas de acción colectiva y nuevos actores en la escena nacional y regional. Por esto, resulta un buen ejemplo de los nuevos desafíos que el sistema político enfrenta.

Para terminar esta sección es interesante mencionar el concepto de *pensamiento ecologizado* de Morin. Este autor reflexiona, partiendo de la necesidad de que el sujeto se piense como parte del medio y no como algo externo a él, acerca de las chances de una ciudadanía internacionalizada desde nuestro propio contexto y patrimonio cultural, pues si bien la actual crisis ecológica impacta a nivel global, se traduce localmente en problemas concretos. En este sentido, puede contribuir a la definición de una ciudadanía más universal, pues si bien el sujeto hoy se construiría a partir de la comprensión de los problemas globales que afectan a la humanidad, ésta ya no se comprendería desde una noción abstracta sino desde lo concreto que es la cotidianidad degradada.

3. La nueva politicidad de los jóvenes[10]

Los jóvenes que viven los tiempos de la inflexión han sido denominados como "la generación de la tecno-sociabilidad". Ellos son una buena muestra de los nuevos rasgos que la sociedad adquiere ya que, naturalmente, son los que mejor los encarnan. Por lo tanto, resulta interesante observar ciertas características comunes entre ellos, teniendo en cuenta que, con el inevitable paso de los años, se irán convirtiendo en los actores principales de la renovación y el cambio de la democracia y la sociedad de la información en la región.

Esta generación ha sido llamada la generación de la tecnosociabilidad por el impacto

10 Basado en Calderón y Hopenhayn (2008) y en Calderón (2009).

fundamental que los nuevos medios de comunicación tienen entre ellos. La juventud utiliza cada vez nuevos medios para relacionarse, formar grupos que comparten intereses y, al mismo tiempo, plasmar sus puntos de vista y sus demandas de cambio. Por mencionar sólo algunos: los mensajes de texto, el correo electrónico, el chat, Facebook, Twitter, Myspace, Linkedin y una larga lista de etcéteras que crece constantemente. Ellos encuentran allí una nueva forma de sociabilidad. Curiosamente, la gran intensidad de los flujos de comunicación parece producir un doble efecto: por un lado, como es de esperarse, aumenta la conectividad entre ellos pero, por otro lado, el mismo uso los separa del resto de la sociedad, acostumbrada a utilizar otras formas de comunicación.

Sin haber producido una ruptura total con las generaciones previas sino más bien construyendo a partir de las experiencias de los mayores, pareciera que los jóvenes se han vuelto parte de una nueva "arena social". Una característica clave parece radicar en que los mecanismos consagrados de socialización por medio de los cuáles una generación se hace adulta y autónoma se han erosionado[11]. Por ejemplo, el clásico tránsito de la educación al empleo se ha vuelto difuso, ya que la juventud tiene más capital humano que los adultos (salud, educación, etc.) pero, al mismo tiempo, más dificultades para ingresar en el mercado laboral. De la misma forma, el paso de la vida en familia a la vida independiente se hace más difícil, por lo que los jóvenes tienden a dilatar el momento en el que dejan el hogar de los padres. Y, relacionado con estos fenómenos pero en otro nivel, quizás el rasgo más distintivo sea que existe una menor influencia de los patrones clásicos de socialización (familia, escuela, barrio, etc.), vacío que hoy es llenado en buena medida por los medios de comunicación, generándose así una cultura que está transformando las formas de conocer, sentir y aprehender, y que también modifica la vida cotidiana. Hoy vemos que se redefinen las identidades y la subjetividad de los jóvenes se construye en gran parte mediante el uso de las tecnologías de comunicación. La vida diaria de los jóvenes está poblada de la tecno-sociabilidad (Castells, 2006) que mencionamos y, probablemente, este fenómeno irá en aumento.

Si consideramos estas características no es extraño que se produzca una fuerte ruptura de imaginarios en los jóvenes que plantea incertidumbre con respecto a la reproducción cul-

11 Para mayor detalle véase Tedesco (2007).

tural de la sociedad; poniendo en duda el vínculo trabajo-progreso, el rol del Estado como protector de la sociedad, la relación esfuerzo-gratificación, los proyectos de familia, la relación presente-futuro y la relación entre socialización e individuación. En este último aspecto, uno de los patrones que se pueden ver hoy en día es un gran debilitamiento de los proyectos colectivos de progreso, reemplazados por una mayor valorización de la autodeterminación personal. Este patrón parece claro pero es interesante mencionar que se percibe una fisura en el mismo: da la impresión de que mientras los jóvenes incluidos siguen ese patrón, entre los excluidos predomina una lógica más colectiva. En cualquier caso, esta realidad plantea una pregunta que va más allá de los jóvenes, ya que abarca a toda la sociedad: ¿cómo puede la necesidad de autodeterminación personal articularse con la necesidad de construir una comunidad ciudadana compartida?

En este punto resulta interesante analizar de qué manera se relacionan con la política. Existe una característica común y ampliamente conocida: los jóvenes son los que más descreen de las formas tradicionales de la política. En una serie de entrevistas (PNUD, 2009c), en promedio un 80% de ellos dijo no tener confianza en los partidos políticos, los sindicatos, la justicia ni las fuerzas de seguridad. Ahora bien, esto no quiere decir que no estén interesados en la política, sino más bien que buscan una "nueva politicidad". Los jóvenes no han renunciado a la acción colectiva sino que actúan de manera distinta, revalorizan la idea de que actuar localmente, en pequeños grupos, puede generar en el largo plazo modificaciones globales de relevancia. Quizás por esto los asuntos que priorizan apuntan generalmente a aquellas dimensiones en las cuales sienten que pueden incidir directamente: los datos muestran que las dos injusticias percibidas como más graves son las agresiones hacia el medioambiente y el maltrato de la policía hacia ellos; y sin embargo, mientras la mayoría cree que es posible hacer algo para influir en la cuestión del medioambiente, muy pocos creen que se pueda modificar la violencia ejercida por la policía.

El Informe de desarrollo humano del Mercosur detectó tres orientaciones de acción colectiva entre los jóvenes. En primer lugar, una referida a la afirmación de identidades colectivas como indígenas, afrodescendientes, feministas o religiosas. Entre éstas sobresalen los grupos de jóvenes de las murgas en Montevideo, el movimiento "grafitero" en Brasil y los movimientos indigenistas en la Argentina. En segundo lugar aparecen los movimientos

ecologistas o de defensa del medioambiente, muy a menudo vinculado a ONGs ambientalistas. Aquí cabe destacar que existe una suerte de capital público ecológico para el desarrollo de estos movimientos que se apoya en la disponibilidad de la opinión pública juvenil para participar y actuar a favor del medioambiente. Por eso, seguramente, éste será un dinamismo creciente. Finalmente, una tercera orientación está referida a la participación en movimientos y/o acciones alter globalizadoras en la región, como los encuentros que se organizaron en el Foro Social Mundial. Allí predominan críticas de fondo a la globalización, el consumismo y las políticas conservadoras. Más allá de las distintas orientaciones, en el conjunto estos movimientos usan y reproducen relaciones en el campo de las tecnologías de la información. El citado informe menciona además que "La ampliación de cierta conciencia ciudadana en materia de derechos culturales y socioeconómicos, las posibilidades organizativas abiertas por las tecnologías de la información y comunicación, y la diseminación de una 'opción ambiental' son los rasgos culturales básicos de la movilización juvenil" (PNUD, 2009c: 31).

En términos generales, los jóvenes muestran importantes disposiciones a la acción solidaria y voluntaria local, ligadas especialmente a la comunidad inmediata y a los resultados concretos. Perciben de manera intensa el aumento de la vulnerabilidad en la vida cotidiana, y ven afectada su vida por los crecientes niveles de violencia social. Sin embargo, no se percibe entre ellos la nostalgia de una época míticamente segura, sino que tienden más bien a enfrentar el problema desde la acción práctica, generando estrategias colectivas de protección en pequeños grupos, basados en las facilidades de las nuevas tecnologías en muchos casos, y defendiendo sus derechos al uso y disfrute de los espacios públicos urbanos. Este es un punto importante: los jóvenes no renuncian al espacio público, ya que si bien admiten que en algunos aspectos puede ser violento u hostil, también ven allí un campo abierto de enorme potencial y oportunidades para sus proyectos de futuro.

COROLARIO: HACIA UNA SOCIEDAD DE DIFERENTES

Con o sin éxito, lo que estos nuevos actores y prácticas demuestran es el peso de la acción cultural, colectiva e individual, que los partidos, la política y el Estado podrían recuperar para lograr tanto mayor cohesión social como

reformas políticas. Y en todo caso, si muchas veces estos movimientos no han logrado convertirse en actores importantes, es precisamente allí donde los partidos y el resto de los actores políticos tradicionales deberían actuar y ajustarse para potenciar una práctica política autónoma que integre proyectos fragmentados y logre de esa forma incidir en los asuntos de carácter nacional y global.

Cabe aclarar que, al preguntar por el reconocimiento institucional de los movimientos sociales, no sólo estamos hablando de las posibilidades de una democracia que impulse una lógica más progresiva, es decir, una democracia que promueva lo plural, que posea mayor capacidad de reconocimiento a un mayor número de actores abriéndoles un lugar en el sistema de toma de decisiones, y más sustantiva, que promueva la plasmación de valores consensuales y se oriente a una redistribución material más equitativa; sino también, y muy especialmente, nos preguntamos por las posibilidades de que este campo institucional contribuya a la reconstitución de los sujetos políticos.

Llegado este punto es necesario remarcar que, más allá de los novedosas acciones que estos movimientos llevan a cabo, sus demandas y propuestas también varían al alejarse de las viejas búsquedas de proyectos únicos de poder acercándose, en cambio, a la conformación de espacios públicos que abarcan la diversidad social y cultural y que permiten un reconocimiento de la alteridad entre diferentes. Quizá sea precisamente esta posibilidad de articulación entre diversos actores en un espacio público compartido el principal recurso político para el ejercicio de la democracia en sociedades policéntricas, en donde las demandas de inclusión ciudadana se cruzan cada vez más con el tema de la afirmación de la diferencia y con las políticas de reconocimiento y promoción de la diversidad; en donde grupos ecológicos, étnicos y de género —entre tantos otros— claman por ser reconocidos en su singularidad, por contar con derechos específicos y por la aplicación a su caso de los derechos universales que otros grupos ya conocen. Discriminación positiva, derecho al autogobierno y políticas diferenciadas en educación son sólo algunos ejemplos que emanan de este fenómeno.

La acción de estos movimientos no hace más que dejar en claro que la sociedad se repiensa y actúa ya no entre iguales sino entre diferentes. “Quizá sea hora de repensar los movimientos sociales desde otra perspectiva: no se trataría solamente de nuevas formas de hacer política, sino de nuevas formas de relaciones y de orga-

nización social; lo que se estaría transformando o engendrando es una sociedad, más que una política, nueva." (Calderón y Jelin, 1987: 26). Por lo que, si el sistema político no logra incluir estas demandas, la fuerza de estos movimientos acumulada durante años de silencio les permitirá de todas maneras aparecer por otros medios. Así, cualquier proyecto que intente obviar esta realidad y busque presentarse como un referente único al que se debe seguir con los ojos cerrados, al mirar para atrás se encontrará ante un vacío democrático.

Bibliografía

Buvinic, M. & Roza, V. s/f *Women, Politics and democratic Prospects in Latin America. Sustainable Development Departament Technical Papers series*, WID 108, en <www.iadb.org/sds/docwomen.pdf>.

Calderón, F. 1986 *Los movimientos sociales ante la crisis* (Buenos Aires: CLACSO).

_____ 1988 *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).

_____ 2009 "Young people's new politicity". Ponencia presentada en el Congreso Mundial de Ciencia Política, Santiago de Chile.

Calderón, F. & Hopenhayn, M. 2008 *Notas para el desarrollo humano en el Mercosur* (Buenos Aires), inédito.

Calderón, F. & Jelin, E. 1987 *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades* (Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad).

Castells, M. 2006 *Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva global* (Barcelona: Editorial Ariel).

CEPAL 2006 *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2005* (Santiago de Chile: PNUD).

CEPAL 2007 *Panorama social de América Latina 2006*.

Grzybowski, C. 2004a "Lições de Mumbai", en *Informativo mensal do Instituto Ação Empresarial pela Cidadania*-PE, Río de Janeiro.

_____ 2004b "Democracia sociedad civil y política en América Latina", en *La democracia en América Latina, Contribuciones al debate* (Buenos Aires: PNUD).

Guimaraes, R. 1996 *El desarrollo sostenible: ¿propuesta alternativa o retorica neoliberal?* (Santiago de Chile: CEPAL), en <http:/www.reddejusticia.org.co/

documentos/adital_combate_violencia_mujer_febrero_2007.pdf>.

_____ 2003 "Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe entre las Conferencias de Río de Janeiro y Johannesburgo: avances, retrocesos y nuevos retos institucionales", en Calderón, F., *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Tomo 1* (Santiago de Chile: PNUD-FCE).

Montaño Virreira , Sonia y Sanz Ardaya, Mariana 2009 "Movimientos sociales de mujeres. El feminismo" en Calderón, Fernando (comp.) 2009 *Movimientos socioculturales en América Latina. Ambientalismo, feminismo, pueblos originarios y poder empresarial. Cuaderno de Gobernabilidad Democrática 4* (Buenos Aires: PNUD/Siglo XXI).

Morin, E. 1990 *El paradigma de la complejidad. Fragmento de Introducción al pensamiento complejo* (Barcelona: Gedisa).

ONU 2006 "Fin de la violencia contra la mujer: hechos, no palabras. Informe del Secretario General sobre la violencia contra la mujer", Nueva York, octubre.

Palermo, V.; Aboud, L. & Musseri, A. 2009b "El gobernador pasó en helicóptero. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en el conflicto por las papeleras", en PNUD.

PNUD 1994 *Informe de Desarrollo Humano* (Ediciones Mundi-Prensa).

PNUD 2007/2008 *Informe Nacional de Desarrollo Humano. La lucha contra el cambio climático* (Barcelona: Mundi-Prensa).

PNUD 2009b *Movimientos Socioculturales en América Latina. Cuadernos de Gobernabilidad democrática 4* (Buenos Aires: Siglo XXI).

PNUD 2009c *Informe sobre Desarrollo Humano para Mercosur 2009-2010* (Buenos Aires: Libros Del Zorzal).

Sherer-Warren, I. & Krischke, P. 1987 *Uma revolucao no cotidiano?* (Brasiliense).

Sorj, B. 2007 "Sociedad civil y política en Brasil", en Sorj y Darcy de Oliveira, *Sociedad civil y democracia en América Latina* (San Pablo: IFHC/Centro Edelstein de políticas sociales).

Tedesco, J. 2007 "Inclusión social, nuevos procesos de socialización y ciudadanía social en América Latina", en PNUD-PAPEP, *Ciudadanía y desarrollo humano*, *Cuadernos de gobernabilidad democrática Vol. 1* (Buenos Aires: Siglo XXI).

Touraine, A. 1989 *América Latina. Política y sociedad* (Madrid: Espasa Calpe).

La revelación de los bordes o repensando la portada de San Lorenzo*

¿Cuánto de lo que vivimos hoy día y de lo que podemos hacer mañana ya estaba predeterminado por nuestro pasado, por nuestros valores y nuestras experiencias, por nuestros deseos, sueños y dolores, en suma por nuestro *ethos* cultural?

¿Y cuánto de lo que vivimos y viviremos será el resultado de nuestra capacidad creativa y libertaria de hacernos a nosotros mismos en relación con otras creaciones y libertades? Y, más aún, ¿cuánto será sólo el resultado del azar, de los efectos inesperados y de la incertidumbre propia de la vida moderna?

Desde la perspectiva de la modernidad entendida como proyecto cultural y societal emancipatorio, el sujeto portador de libertad supone un deseo de actuar y de ser reconocido como actor, como actor consciente y crítico, como sujeto que busca, en relación con otros actores, comprender y desarrollar esa libertad. Empero no actúa desde la nada, actúa desde lo vivido, con sus "dimes" y con sus "diretes", con el peso tremendo de toda una cultura sobre las espaldas. Por todo esto bajo la modernidad nadie es totalmente libre ni nada está totalmente determinado.

En un pasado no muy lejano, los latinoamericanos, como muchos otros, pensamos que el progreso estaba asociado con la razón, apostamos por una vida social organizada en torno de una idea de racionalidad progresiva y estatal que hoy día aparentemente se ha agotado. Y los latinoamericanos, y los andinos en particular, aprendimos la desilusión a fuerza de pedradas y silencios.

En los países andinos el cansado Sísifo vuelve una vez más a empezar.

Por todo esto y más, es importante pensar si un proyecto de modernidad es posible y si desde lo ya vivido y lo experimentado es recreable.

* Conferencia dictada en la Universidad de Cornell en abril de 2001.

Ello supone mirar el momento actual como un momento de redefinición de rumbos, pero también como un momento de revelación que busca encontrar una complicidad profunda entre la historia y la modernidad, de *jetzteit* como le gustaba decir a Walter Benjamin.

Ello supone, empero, enfrentar un problema crónico de nuestras sociedades: el del difícil encuentro entre nuestras culturas andinas y las diversas variaciones occidentales de la cultura de nuestras elites. O, en otras palabras, preguntarse si podrá el mundo andino superar la cultura de la negación del otro y tejer el inter-culturalismo preexistente bajo un proyecto plural de modernidad.

La relación con el otro en el mundo andino ha sido una relación histórica de constante negación. Nace en la conquista y se metamorfosea en la república. Tiene muchas caras. En una cara las elites andinas diferencian radicalmente el otro de sí mismas y enseguida lo desvalorizan proyectándolo como inferior: indio, mujer, mestizo, obrero o "maestrito". En la otra cara, el otro es también el extranjero o el boliviano extranjerizado llamado en fútbol legionario, que es visto o percibido como algo amenazador, algo que amenaza el propio poder desde afuera. Paradójicamente, además de negarlo o discriminarlo se han identificado con él de manera acrítica y emuladora, especialmente si el otro *es hecho* el europeo, el argentino o el gringo.

Desde el lado del negado -sea indio, negro, mestizo, marginal o pobre-, la negación también se vive con más de una cara. A veces ellos se identifican con la negación y cercenan su propia identidad y navegan por una orfandad interminable como Sebastián Mamani, ese personaje anodino de la película "La Nación Clandestina" de Jorge Sanjinés, que para recuperar su identidad tiene que danzar hasta morir.

En ocasiones se vive la negación como una asimilación deseada pero siempre frustrada por el poder que domina. A veces, también, ella es vivida de manera ambigua, como un *chenko* o una confusión paralizante. También está la identidad de los "oprimidos pero no vencidos", los que se resisten de múltiples maneras a la exclusión en el arte, en las costumbres, en la comunidad y sobre todo en la lengua. Gran parte de los movimientos étnicos han nacido de esta constatación.

Leída en código de modernidad, la negación del otro conlleva un rechazo brutal de la misma modernidad. Esta negación de la modernidad ha sido elaborada desde distintas perspectivas analíticas y prácticas. Así, por ejemplo, están aquellos que asumen valores universalis-

tas y de integración al mundo moderno pero no los vinculan con las identidades vernaculares de nuestros pueblos, sino más bien las niegan; existe pues en ellos un patético deseo de construir un futuro sin memoria. En el polo opuesto están los que sólo conciben a la modernidad como una amenaza a la identidad y a la memoria; ellos se refugian en ideologías ultra comunitaristas que niegan el intercambio global. Existe pues un círculo perverso de la negación del otro donde la mirada de unos niega lo de "adentro" mientras que la mirada de los otros quiere negar el "afuera". Y la cuestión consiste más bien en el encuentro, en la comunicación, en una alternabilidad superadora de unos y de otros.

Esta negación de la diferencia, a pesar de no pocos avances y no pocos retrocesos, es el principal límite de la modernidad, pues impide no sólo el reconocimiento del sujeto sino la tarea colectiva de poder enfrentar y compartir con otros distintos de uno, los avatares de la razón moderna; por eso la modernidad en Los Andes fue casi siempre limitada y trunca.

La construcción de un sujeto moderno supone la aceptación plena de nuestras propias diversidades y de nuestros propios tejidos interculturales. El mundo andino desde sus orígenes fue una región culturalmente plural, una región donde se combinaron múltiples corrientes culturales de manera específica. En ellas se combinaron lo moderno del renacimiento con un pasado complejo. Nos hemos hecho en relación con Europa pero somos distintos de los europeos; asumir esta relación y esta especificidad constituye nuestro principal desafío y esto es válido tanto para el aymara "puro" que ha logrado defender su identidad recreando sus raíces milenarias, como para el reciente migrante coreano o el descendiente del italiano de la esquina. Cada uno carga, en su especificidad, la interacción con los otros. Sus particulares acervos culturales se han hecho en relación con otros distintos de ellos.

A todo esto, un dilema subyace en el horizonte: ¿se inclinarán nuestras sociedades por lograr al fin una occidentalización exhaustiva superando mestizajes culturales o daremos la espalda al elemento de la modernidad que más se relaciona con nosotros mismos: la capacidad de integrar la diversidad, respetando la especificidad, en un producto cultural compartido? Lo moderno en los países andinos anida cabalmente en poder asumir nuestras pluralidades constitutivas. En el momento en que las sociedades actuales fueron constituidas, se abrieron al mundo como un tejido cultural vivo en constante mutación.

Precisamente es en este momento de cambio y de crisis de modernidad que se plantea la posibilidad de asumir estos tejidos diversos como una fuerza de futuro. El tejido intercultural andino ha sido y es nuestra forma de ser modernos y de resistir a la modernidad al mismo tiempo, la cuestión reside en que la sociedad pueda asumir colectivamente esa condición cultural para convertirla en una fuerza propia en un mundo que también busca la marca de una diversidad progresiva.

La modernidad buscada sería pues el resultado de este entrecruzamiento intercultural y de su capacidad de enfrentar los cambios producidos por la modernización. En pocas palabras todos tienen que asumir un pluralismo que nos constituye.

Si esto es así, ¿qué mejor ejercicio que volver la mirada a lo mejor de nuestro pasado y buscar un sendero de reencuentro con lo clásico de nuestra historia para poder recrear así un proyecto de futuro?

La idea que deseo trabajar ahora es que la modernidad que estamos defendiendo estuvo íntimamente ligada al desarrollo del arte barroco, pues él nos plantea temas de producción y de transmisión de una tradición intercultural que se puede proyectar en la modernidad. Quiero expandir estas ideas a través de un notable acto estético: la Portada de la Iglesia de San Lorenzo en Potosí.

La portada fue construida entre 1728 y 1744, es decir, en el comienzo de lo mejor del arte colonial y en el inicio de la decadencia de la economía de la plata. Comenzaban también las primeras rebeliones indígenas y ya se discutía la legitimidad de la mita.

Se trató de una parroquia de indios, pedida y demandada por indios a indios. A indios ilustrados o, mejor aún, a indios preocupados por la ilustración. Se supone que el principal escultor, según Diego Arzans, fue "Luis Niño, indio ladino, segundo Ceuxis, Apeles o Timantes y es caso de anotar, prosigue Arzans, que estando embriagado pinta y esculpe con primor"[1].

Sin embargo, la cuestión es que un indio o un grupo de escultores indios están preocupados por el renacimiento y la ilustración y por ser reconocidos y aceptados como iguales en su especificidad, aún más, ser reconocidos como constructores y renovadores críticos y burlones de la misma ilustración a partir de un

1 Gisbert, Teresa (1999), "Luis Niño y San Lorenzo de Potosí". En: *Revista de la Fundación Cultural*, Año III Nº 7/abril-junio 1999. Banco Central de Bolivia: La Paz. Pág. 17.

proyecto genuino que supo trascender su circunstancia y convertirse en un acto verdaderamente clásico.

Se trata de una obra que busca tejer y combinar lo mejor del mundo occidental con lo mejor del andino: allí hay un encuentro racional y una yuxtaposición lúdica entre el renacimiento europeo y símbolos, dioses e ideas andinos.

La puerta de entrada a la casa de dios, a la representación de la eternidad: el templo para indios; es un portal flanqueado por el dios Hermes, en su forma hermafrodita, situado a ambos costados de la puerta. Sin embargo, el conjunto de la portada descansa en dos cariátides o indiápides que, como parte de las columnas centrales, sostienen el conjunto del monumento. Gracias a ellas y al formidable tejido barroco que las acompañan, se pueden asentar y pueden actuar las sirenas, los ángeles músicos y los mismos dioses andinos del sol y de la luna, San Lorenzo, el mártir quemado, y el mismo San Miguel, arcángel mestizo, que con la espada desenvainada y con un furioso rictus protege el edificio mirando de frente el Cerro Rico de Potosí.

La cosmología es central y los rasgos antropomorfos que organizan la portada son evidentes como quizás también lo es la representación musical que tiene lugar en dicha portada: las sirenas con sus charangos, San Lorenzo y los ángeles con arpas, los Hermes y las cariátides en posiciones de danza en medio de una voluptuosidad barroca que no deja lugar a vacío alguno. Da la impresión de que estamos frente a un tremendo espectáculo creado por una suerte de Platón andino o, mejor dicho, de gentes de los andes que piensan al Platón griego, al de la República o al del Timenon, desde su propia realidad. No se trata entonces de una copia del renacimiento europeo, como algunos imaginan, donde un señor o un cura ilustrado pide al "maestrito" de la época que le pinte dos sirenas una a la derecha bajo una luna y otra a la izquierda bajo el sol, sino de una reinterpretación creativa y una síntesis cultural propia con elementos de crítica, picardía y de imaginación.

Digo Platón porque este autor, usando la música y figuras o símbolos como las sirenas y la música, trata los temas del movimiento de las esferas del universo, de la fuerza del cosmos y del caos, es decir, de las fuerzas degenerativas y regeneradoras del espacio. En este caso, uno podría interpretar que las indiápides o las cariátides, vamos los indios que trabajan en Potosí y sufren como San Lorenzo, están sosteniendo el movimiento de una de las esferas de Platón: el mundo.

Ciertamente, esta mirada es tan sólo una atrevida conjetura que invita a meditar sobre el tipo de relaciones posibles entre los mundos de vida que conviven en nuestras sociedades. En este sentido, la portada de la Iglesia de San Lorenzo, así como varias otras obras de la época citadas por distintos autores, parece mostrar una reinterpretación, por parte de un grupo de indígenas, de uno de los autores más lúcidos de la cultura occidental y del renacimiento europeo, planteando, a partir de esa reinterpretación y en ese pasado lejano que fue el barroco andino, salidas estético-culturales que todavía no nos atrevemos a reelaborar.

En gran medida, este tipo de hipótesis se sustenta en indicios de la época, para empezar, en los motivos de la misma portada (sirenas, cielo y música que llevan a pensar en las categorías de espacio y tiempo que Platón utiliza en La República y en el Timenón), pero también en el ambiente de "renacimiento tardío" que se vivía en todo el mundo andino, particularmente en el Sur del Perú y en el occidente boliviano actual. Una serie de portadas y pinturas del Barroco, como relata por ejemplo Leopoldo Castedo en su Historia del Arte Iberoamericano[2], muestran también figuras y símbolos renacentistas greco-romanos. Asimismo, si bien varios cronistas nos muestran el peso del pensamiento de Aristóteles en la época, no resulta extraño que también se haya leído un autor prohibido pero más flexible y quizás más afín con la cosmología andina como fue Platón. E incluso podría pensarse que esa relectura de Platón era parte de una resistencia, no sin contradicciones, a aceptar la ideología institucionalizada de la Iglesia y del poder del imperio.

Claro está, por otra parte y más allá de esta lectura tentativa, que la genialidad de los autores de la portada radica en dar motivo a sus lectores en el tiempo, como yo, de interpretar una vez más su representación, y esto no es ni más ni menos que un acto de trascendencia temporal, de unión entre la historia y la modernidad.

Como corolario, creo que se plantean tres cuestiones centrales. En primer lugar, desde el lado del negado, de los indios, la apropiación de elementos culturales ajenos a la propia identidad se hace desde la propia identidad; de allí una lectura creativa que asume "lo otro" (en este caso, lo europeo) desde una reinterpretación a partir de la identidad indígena que le otorga un sentido diferente. Este constituye un tema fundamental hoy, y

2 Castedo, Leopoldo (1988), *Historia del Arte Iberoamericano*. Andrés Bello-Alianza Editorial: Madrid.

un antecedente histórico, cuando se habla una homogeneidad cultural irreal a partir de los procesos de globalización. En segundo lugar, la relectura indígena de la cultura occidental se hace desde la resistencia (quizás Platón fue mejor reelaborado que Aristóteles porque permitía una cierta expresión de lo diferente).

Finalmente, el asumir una identidad cultural a partir de una reelaboración desde la propia identidad, como lo hicieron los indígenas del barroco andino, muestra al occidente que la integración puede darse sin dominación ni aniquilamiento; y es entonces un ejemplo de respeto por el otro diferente, lo que el mundo occidental nunca asumió por el propio eurocentrismo que signó permanentemente su acción. Así, si bien esto no implica que un proyecto estético-cultural pueda ampliar su significación a los ámbitos político y económico, constituye una enseñanza de la llamada "periferia" al llamado "centro". De ahí que los bordes también sean luminosos, aunque no se los reconozca.

CIUDADANÍA Y DESARROLLO HUMANO*

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, la región ha experimentado importantes cambios que modificaron su perfil. Las nuevas realidades exigen repensar los enfoques de la democracia y el desarrollo.

Los cambios son diversos, y las situaciones y los resultados nacionales, distintos. Sin embargo, resulta fácil constatar que se ha perdido peso en la economía mundial, que se ha mantenido y complejizado la desigualdad y que la pobreza —a pesar de algunos avances— continúa siendo una amenaza estructural. La democracia ha avanzado en varios planos, pero los problemas políticos e institucionales persisten y la desconfianza en los sistemas de representación política crece en todas partes. Estamos frente a un horizonte abierto, con nuevas limitaciones y oportunidades. En el centro se encuentran los cambios experimentados por la sociedad y las posibilidades de gestión política.

En el plano analítico, los enfoques centrados exclusivamente en el mercado o en la economía parecen insuficientes para enfrentar los nuevos problemas y oportunidades generados por el cambio global. Desde una perspectiva diferente, el enfoque de desarrollo humano que viene promoviendo el PNUD coloca el acento en las capacidades de las personas, más que en el mercado o el Estado, como ejes del desarrollo. En el mismo sentido, el informe *La democracia en América Latina* plantea la necesidad de promover una democracia de ciudadanos y pone el énfasis en el fortalecimiento de las capacidades políticas de la sociedad. Es probable que ambos planteamientos constituyan referentes importantes para reorientar los enfoques del desarrollo y la democracia.

---

* Este trabajo fue publicado originalmente como introducción del libro *Ciudadanía y desarrollo humano: cuaderno de gobernabilidad democrática* 2007 (Buenos Aires: PNUD/Siglo XXI).

En el presente libro se aspira a indagar conceptualmente la cuestión a partir de una visión que pretende articular ciudadanía y desarrollo humano en el contexto de las nuevas condiciones sociales ya producidas por la globalización.

Esta visión supone que la sociedad y las personas que la conforman constituyen el centro de toda reflexión sobre el desarrollo humano. Por encima de cualquier factor, interesa el ser humano devenido actor, es decir, el ser humano abierto a la acción creativa y dotado de voluntad y capacidad para transformar su relación con los otros, con su entorno y consigo mismo. En los regímenes democráticos, esta comprensión del ser humano como actor se asocia estrechamente a la noción de ciudadanía.

Ser ciudadano implica estar incluido en una red de relaciones sociales que permitan actuar, reproducirse y cambiar. Supone también formar parte de una colectividad de ciudadanos. Se trata, entonces, de ser parte de un tejido social y cultural para poder actuar como ciudadano. En una perspectiva democrática, la inclusión social y el reconocimiento deben entenderse como partes de un proceso relacional de construcción de una "comunidad de ciudadanos".[1] Para poder actuar e incidir en su vida, los grupos excluidos tendrán que transformar sus necesidades y derechos en demandas institucionales y en pautas de acción y desarrollo.

El desarrollo humano es, pues, una óptica que busca el incremento de las capacidades de los actores (ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales, etc.) para que construyan su libertad y decidan, en función de sus valores y aspiraciones, el tipo de vida que desean tener. Precisamente por esto la inclusión y la exclusión en sociedades diversas como las actuales son temas cruciales para el desarrollo de las personas y sus sociedades. La inclusión supone reconocer las diferencias en muchos planos (culturales, sociales, económicos, etc.), pero también construir un plano de igualdad política y jurídica en el que las distintas libertades se puedan desarrollar. Es decir, supone el ejer-

1 En el informe *La democracia en América Latina* se afirma: "Se trata de discutir cómo se puede avanzar hacia una ciudadanía integral, lo que supone poner en el centro a la política como forma de que el ciudadano, y más precisamente la comunidad de ciudadanos, pueda participar en decisiones sustanciales. La globalización es un dato, pero no se trata pura y exclusivamente de admitir que todo lo que ocurre como consecuencia de la transformación tecnológica y de la expansión de los mercados debe aceptarse sin reflexión y sin acción" (PNUD-PRODDAL, 2004: 195). Para una teoría de la "comunidad de ciudadanos", véase Schnapper (1994).

cicio político, social y civil del ciudadano. Por eso, bajo regímenes democráticos, el ciudadano es el sujeto y el objeto del desarrollo y de la misma democracia.

Los cambios vinculados a la globalización, no sólo las "reformas estructurales" sino especialmente las transformaciones en los campos de la tecnoeconomía, la comunicación y el informacionalismo, generaron nuevos problemas en torno a la matriz social, tanto a nivel de desarrollo humano como de la ciudadanía. Cambiaron las conformaciones nacionales y estatales, y también las estructuras sociales en términos de sus patrones de inclusión y cohesión social, de reproducción cultural y de estructuras de socialización. Las sociedades latinoamericanas ya no son lo que eran hace veinte años: hoy resultan más complejas y cada país enfrenta desafíos específicos. Estamos, pues, frente a nuevos interrogantes para la política y sus vinculaciones con un nuevo tipo de desarrollo, que es fundamental estudiar y comprender.

Hoy, los enfoques sobre la ciudadanía y el desarrollo humano tienen que responder de manera específica —y con nuevos códigos— a estos cambios, y orientarse adecuadamente para aprovecharlos, según la dirección, la intensidad y la pertinencia que tengan a escala nacional y regional. El presente texto propone un análisis de las características de estos problemas, tanto en los campos temáticos específicos como en las experiencias relevantes de los casos nacionales.

En síntesis, se busca: 1) plantear las nuevas condiciones sociales de la ciudadanía y el desarrollo en la globalización; 2) analizar el rol del espacio público y sus vinculaciones con la ciudadanía y el desarrollo; 3) proponer la necesidad de horizontes normativos y finalmente; 4) desarrollar nuevos temas y experiencias nacionales de cambio.

1. LAS NUEVAS CONDICIONES SOCIALES DE LA CIUDADANÍA Y DEL DESARROLLO HUMANO EN LA GLOBALIZACIÓN

El mundo vive la transición de una sociedad centrada en el trabajo y la industria hacia otra centrada en el conocimiento y la información.[2]

Como consecuencia de estos procesos de transformación histórica hay una creciente complejización y diferenciación de las sociedades, tanto en el interior de sus relaciones como

2 Para mayor detalle véanse Castells (1996-1997); UNDP (1999) y Touraine (2003).

en las relaciones entre sociedades desarrolladas y sociedades en vías de desarrollo. Además, el Estado perdió poder frente a la constitución de actores supranacionales, y capacidad política a favor de los mercados abiertos, a los que le resultó prácticamente imposible regular. Dadas las características de los mercados, esta pérdida de capacidad política estatal provocó que no pudiesen garantizarse niveles mínimos de equidad e inclusión social.

Sin embargo, no todas las sociedades y sus Estados se vinculan de la misma manera a los procesos de cambio y globalización; de modo tal que pueden distinguirse al menos dos formas: o se da una vinculación pasiva con tendencia a la descomposición social, o una vinculación más proactiva que estimula el desarrollo de capacidades para incidir en esos procesos desde las particularidades históricas. Así, parece que cuanto mayor sea la capacidad de una sociedad para manejar los códigos modernos, mejor será la calidad de su matriz socioeconómica interna y más sólidas sus instituciones democráticas, por lo que tendrá mejores condiciones para enfrentar los procesos de cambio mencionados (y viceversa, es decir, mientras menor sea su capacidad de manejar los códigos modernos, más baja será la calidad de su matriz socioeconómica interna y más débiles sus instituciones democráticas, por lo cual las condiciones para enfrentar los cambios en curso serán más desfavorables).[3]

La pregunta para los países de América Latina, que, como la mayoría de las regiones del mundo, vive también esta transición, es con qué bagaje cuentan para desempeñar un papel activo en ella. ¿Qué capacidades de ciudadanía y desarrollo tienen para enfrentar el conjunto de desafíos que plantea hoy la globalización? ¿Es sostenible la globalización?

1.1. La globalización y el surgimiento de la sociedad de la información

En el mundo globalizado en que vivimos, los intereses del capital, los recursos tecnológicos y científicos —el desarrollo de conocimientos en ciencia y tecnología y la capacidad de obtener y procesar información— y las capacidades políticas de los Estados nacionales se vuelven fundamentales para acceder a los beneficios que éste brinda.[4] En este nuevo marco, la inter-

3 Para mayor detalle véase Calderón y Castells (2003).

4 Sin embargo, los Estados nacionales, precisamente debido a los procesos de globalización y frente al poder cada vez mayor de los actores supranacionales, fueron perdiendo capacidad de ejercer soberanía nacional,

dependencia entre países y regiones aumentó y la desigualdad es un problema central.[5]

El impulso básico de los procesos de globalización viene dado por la tecnoeconomía, pero abarca también los ámbitos cultural, político, jurídico y ético.[6] Su rasgo central es que implica una interconexión simultánea entre diferentes sectores considerados económicamente valiosos, de distintos países y regiones. Esto es posible gracias a las nuevas tecnologías de información que permiten concebir el espacio sin límites y el tiempo como único para todos los habitantes del planeta.[7] Pero, en sus mismos orígenes, pone de manifiesto la desigualdad que supone tanto en las relaciones entre las distintas sociedades como al interior de ellas mismas, donde un núcleo está conectado globalmente y puede actuar en el mundo, mientras que la mayoría vive su inserción de manera precaria y pasiva, y sobre todo experimenta las consecuencias negativas de estos procesos.

Este nuevo tipo de sociedad, que Castells denomina "sociedad-red" o "informacional", se construye en torno a los avances en la tecnología de la información, que posibilita la flexibilización de la gestión del capital y la descentralización e interconexión de las empresas. Otros rasgos de esta sociedad-red son el aumento del poder del capital con respecto al del trabajo, que implica un cambio profundo en las relaciones laborales y en la regulación de los mercados de trabajo; la desregulación de los mercados con una intervención mínima, cuando no inexistente, de los Estados; la intensificación de la competencia económica global en un contexto de diferenciación cultural; la globali-

pero no campo de acción. El Estado parece haberse colocado del lado de los mercados y alejarse de la sociedad, cuestión que hoy se está revisando política y académicamente. Para una discusión sobre este tema véanse, entre otros, Beck (1998); Habermas (1998) y O'Donnell (2006).

5 La globalización ha incrementado la desigualdad global. Esto se ve reflejado en los documentos de Cukrowski (2006) y Mehrotra (2006). Véase también Banco Mundial (2006).

6 Véase Kliksberg (2002).

7 Rocher hace una diferenciación entre internacionalización, mundialización y globalización. La primera se refiere a los intercambios (económicos, políticos y culturales) entre las naciones; la segunda, a la ampliación de esos intercambios por el mundo gracias a los avances en el transporte y las comunicaciones; y la tercera, al surgimiento de un sistemamundo como un referente en sí mismo, posible por la simultaneidad en la interconexión, que hace que las sociedades puedan funcionar como un todo. Véase Rocher (2001).

zación del sistema financiero y la creación de nuevos bloques económicos.[8]

Como la globalización incluye únicamente a los sectores considerados económicamente valiosos de los distintos países, regiones o ciudades, produjo una gran desigualdad, y en un mismo país o región conviven zonas incorporadas a ella y otras que permanecen en la miseria y la exclusión. Entonces, aunque estos procesos abren nuevas oportunidades, las desigualdades aparentemente crecen, pues la apertura de los mercados depende de las capacidades de los países, las empresas y el capital humano. Si bien, en teoría, el acceso a los mercados es libre y las normas que rigen la competencia son laxas, los países desarrollados limitan de hecho la entrada de bienes y servicios a sus mercados según su conveniencia, mientras que los países en vías de desarrollo no pueden hacerlo, lo que deja en evidencia que las "reglas" de la globalización no son iguales para todos. Lo mismo ocurre en relación con el mercado cultural, liderado por empresas de comunicación internacionales con base en los países desarrollados —especialmente Estados Unidos— que tienen un alcance global y determinan qué se consume culturalmente.

Además, aunque los mercados globalizados pueden ser eficientes, no son equitativos. Según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2005, "la distribución mundial del ingreso se parece a una copa de *champagne*. En la parte de arriba, donde la copa es más ancha, el 20% más rico de la población obtiene tres cuartas partes del ingreso mundial. En la parte inferior del pie […], el 40% más pobre contiene sólo 5% del ingreso mundial y el 20% más pobre, sólo el 1,5%".[9] Estos datos reflejan el problema de la desigualdad entre países y al interior de los mismos. A esto hay que agregar que hoy los países compiten con empresas transnacionales cuyos beneficios y ganancias superan en diversos casos el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos de ellos.

La globalización tecnoeconómica no generó un mayor nivel de empleo ni la expansión de trabajos más calificados. Por el contrario, incrementó la flexibilización de los mercados laborales, generando inestabilidad e inseguridad laboral. Además, como la velocidad de los avances tecnológicos es mayor que la de la ca-

8 Véanse Castells (1996, 2001 y 2006).

9 PNUD (2005: 41).

pacitación de la fuerza laboral, los trabajadores que no pueden seguir el ritmo van perdiendo habilidades a medida que avanza la tecnología. Este factor del empleo también redunda en mayor inequidad. La intensificación de los movimientos migratorios tiene que ver con estos procesos, y si bien las fronteras se han "abierto" en sentido comercial, no ocurrió lo mismo para los inmigrantes que, en su mayoría por cuestiones económicas vinculadas a la falta de empleo o de políticas, se ven expulsados de sus lugares de origen, muchas veces incluso para trabajar en condiciones indignas.

Éstos son los aspectos inequitativos de la globalización que producen una gran exclusión socioeconómica, mayor pobreza y menores niveles de participación social y política. Como consecuencia, se debilitan las condiciones de la ciudadanía y el mismo régimen democrático, que pierde legitimidad al no poder responderle de manera eficaz a la gente, que se enfrenta a los procesos descritos.

Los gobiernos de los países en vías de desarrollo tomaron medidas para insertarse en la economía global que afectaron significativamente a la mayoría de la población, pues disminuyeron su seguridad social por la reestructuración de la economía (principalmente por la privatización de empresas nacionales y la liberalización de los mercados).[10] El Estado dejó de asegurar y gestionar el bienestar social al abandonar o disminuir sus responsabilidades sociales.

En el plano de la política, la globalización y la visión economicista que la acompañó pusieron de manifiesto sus límites.[11] La política, en general, no logra orientar y dirigir estos nuevos procesos. Entre los cambios que se viven en este campo se destacan: la ampliación del espacio en el que actúa la política —que desde lo nacional se extiende a lo regional y global— y un debilitamiento de la representación política nacional cuando ésta deja de responder a las aspiraciones y demandas de la gente frente a la nueva situación, en la que unos pocos sectores privilegiados participan activamente en la globalización mientras aumentan, al mismo

10 Este proceso no se dio de igual manera en todos los países, aunque siguió más o menos esta norma en los latinoamericanos. En el sudeste asiático el proceso de modernización e inserción en la globalización fue, contrariamente a lo dicho, liderado por Estados fuertes. En América Latina, Chile y en menor medida Costa Rica muestran experiencias diferentes de las del resto de los países. Véase Ohno (1996). Para el caso de Chile, véase Castells (2005).

11 Para mayor detalle véanse Ocampo (2005) y Birdsall y Menezes (2005).

tiempo, las distancias sociales. Además, la noción del tiempo en general y del tiempo político en particular se modificó: las experiencias pasadas ya no son útiles para afrontar los tiempos que corren y el futuro, que era la apuesta de la política, aparece difuso luego de la crisis de los grandes relatos histórico-políticos. Esto provoca que la política se centre sólo en el presente y pierda perspectiva de largo alcance, lo cual afecta la toma de decisiones y la misma gobernabilidad.

Los actores sociales y políticos clásicos han sido incapaces de dar respuesta a la nueva situación; nuevos movimientos sociales, desde los años ochenta, han planteado críticas puntuales al nuevo patrón económico y han demostrado la debilidad de los clásicos movimientos sociales como los sindicatos que, en la reestructuración, perdieron fuerza y poder. Esos movimientos se vinculan más a la vida cotidiana, a las discriminaciones de género, al daño ecológico, al rescate de identidades comunitarias que refuerzan el lazo social, que a la política. Sin embargo, tampoco han sido una respuesta efectiva a su crisis, porque la falta de articulación entre ellos y la puntualidad de sus demandas los debilita, e impide que tengan una visión más global y profunda de los cambios. Con todo, el nuevo movimiento antiglobalización y, sobre todo, los denominados de "alterglobalización", que demandan un nuevo tipo de globalización, expresan el malestar y la crítica frente a estos procesos y constituyen una nueva forma, global, de hacer política.[12]

12 Wiewiorka desagrega en dos grandes grupos a los nuevos movimientos sociales que han emergido a partir de fines de la década del '70: i) Movimientos globales y ii) Movimientos antisociales, que a su vez pueden clasificarse en: Antimovimientos globales, Terrorismo global y Antisemitismo global. Para mayor detalle, véase Wiewiorka (2005). Por su parte, Castells sostiene que este movimiento democrático, compuesto por múltiples actores a través de una red de relaciones complejas, no es "anti" sino por una globalización distinta: "propugna un mecanismo y un debate sobre los contenidos de la globalización, replantea el control social y político de la economía y la tecnología a partir de la sociedad y la política. Pero, como no es un actor en sí, necesita la mediación política. […] En cierto modo es el embrión de una sociedad civil global. […] Es un movimiento social red, intentando conectar nodos del Estado-red que emerge en la sociedad red y en un contexto de redes globales de riqueza, información y poder. Así pues, parece que la configuración concreta de actores sociales parte de actores locales y nacionales, tanto reivindicativos como identitarios, específicos de cada país, que después van conectándose y superando sus estrechos límites en ese movimiento alternativo por una globalización que generaliza sus proyectos y les proporciona alcance operativo en el nivel en donde se decide hoy por hoy la suerte de las sociedades, el nivel global".

Todas estas cuestiones presentes en el mundo globalizado modifican las relaciones entre Estado, sociedad y economía, y entre Estados nacionales y organismos transnacionales. Mientras los Estados pierden soberanía, aunque no posición estratégica en la globalización, las economías refuerzan una dependencia asimétrica (donde las más débiles están a expensas de las más fuertes) y las sociedades generan nuevos vínculos de atracción y rechazo cultural entre unas y otras.[13] En este contexto, se crean condiciones para que, desde religiones e ideologías fundamentalistas, se rechace a través de la violencia una globalización que excluye a muchos, y se refuercen identidades primarias étnicas, territoriales o nacionales en oposición a estos procesos de globalización.

Véanse Chiriboga (2003) y Loayza (2003). Para mayor detalle sobre estos temas véanse, también, Wiewiorka (2005); Calderón (coord.) (2003) y Grzybowski (2004).

13 Hoy en día, las sociedades están más abiertas a las oportunidades de conocer nuevas culturas, pero en un contexto homogeneizador dado por los medios masivos. Esto no suprime, sin embargo, la tensión entre esa tendencia unificadora de los gustos e interpretaciones culturales y la fragmentación de públicos y la posibilidad de expresar la diversidad cultural como nunca antes. Véanse Hopenhayn (2003) y Fajnzylber (2003).

1.2. AMÉRICA LATINA EN LA GLOBALIZACIÓN

En los últimos treinta años la región vivió un doble proceso de cambio asociado tanto a la globalización como a los rasgos específicos de las economías y los procesos políticos nacionales. Por un lado, se pasó de economías desarrollistas —centradas en la creación del mercado interno y en la sustitución de importaciones— a economías basadas en la apertura de los mercados; por el otro, se experimentaron transformaciones políticas vinculadas a la transición de regímenes autoritarios a democráticos. Las nuevas dinámicas sociales generadas por estos cambios condicionan el futuro.

Si bien en cada país los resultados de estos procesos fueron diferentes, en general la región como un todo avanzó en términos de logros democráticos, pero los saldos económicos y sociales condicionan el desarrollo y la misma democracia. La desigualdad, la pobreza y los límites de la legitimidad institucional siguen siendo tareas pendientes.[14] Además, en este período, a pesar de los esfuerzos realizados, América

14 De acuerdo con datos de la CEPAL, en 2005 el 38,9% de los latinoamericanos se encontraba por debajo de la línea de pobreza.

Latina perdió relativamente importancia en la economía mundial y en el sistema multilateral de toma de decisiones.[15]

En algunos países de la región —los menos—, cuando se mantuvo cierta coherencia entre comportamiento y propuestas de los actores sociopolíticos, cuando se aplicaron las reformas de manera más o menos heterodoxa y las condiciones económicas lo permitieron, se pudo enfrentar mejor las crisis, y los resultados en términos de desarrollo y democracia fueron diversos. El caso paradigmático es Chile. En cambio, en los países con matrices sociopolíticas inestables, recursos económicos insuficientes y una aplicación más o menos ortodoxa de las reformas estructurales, los resultados en términos de democracia y desarrollo no sólo fueron precarios sino que provocaron crisis institucionales muy graves. Ésta es la situación de la mayoría de los países de la región y ello condiciona los ritmos de la evolución de la política y la democracia en el futuro.

La situación actual de América Latina frente a la globalización requiere actores políticos y sociales que sean capaces de orientar los nuevos procesos en un contexto tan difícil como el esbozado. Actores que puedan construir un desarrollo humano con inclusión. Para ello como vienen sugiriendo los informes nacionales de desarrollo humano, se precisa fortalecer la democracia, expandir la ciudadanía, reformar la educación, dar transparencia y eficacia a la burocracia estatal, lograr legitimidad estatal y promover un modelo de desarrollo humano con un enfoque económico informacional, dinámico y sostenible.[16]

En condiciones sociales y económicas limitadas, como se pregunta el informe *La democracia en América Latina*, ¿qué elección sobre cuestiones sustantivas pueden hacer los ciudadanos?[17] Al respecto señala algunas

15 Por ejemplo, de acuerdo con datos del Banco Mundial, América Latina en 1990 concentraba el 6,3% del PIB mundial, mientras que en 2005 ese porcentaje se redujo a 5,6%.

16 Para mayor detalle véanse los siguientes informes nacionales de desarrollo humano: PNUD Bolivia (2002), PNUD Chile (1998) y PNUD México (2002) entre otros. Véase también Calderón (2003).

17 PNUD (2004: 192). El Informe sostiene que la globalización deja al descubierto "la contradicción entre la necesidad de la diversidad —que demanda un importante grado de autonomía de los países y un sistema mundial basado en normas claras y compartidas— y un mundo homogeneizado por relaciones de poder que dejan a los actores nacionales la capacidad de regulación normativa sólo en cuestiones relativamente margina-

reflexiones a partir de repensar la relación entre globalización y desarrollo democrático PNUD (2004: 192-195): sostiene que si bien la globalización fomentó la democracia, también limitó a los Estados, afectando su legitimidad. Hoy se cuestionan los roles limitados del Estado en la orientación del desarrollo de la sociedad y en la promoción de ciudadanía. El Estado tendría que seguir velando por la inclusión social, aunque con menos herramientas, ya que un requerimiento para insertarse en la globalización (por parte de los organismos internacionales de financiamiento y por la movilidad del capital financiero) es precisamente que el Estado intervenga menos en la regulación de las economías nacionales. Esto no significa que deba aceptarse la pasividad estatal, sino que se trataría más bien de generar mayor autonomía para enfrentar estos procesos fortaleciendo ámbitos de negociación a nivel regional.

La democracia adquiere así significación real en los procesos nacionales, puesto que la ciudadanía se expresa dentro de los límites nacionales. El logro de mayor desarrollo democrático requiere representación y participación de los distintos actores en la toma de decisiones, y que éstas incidan en el desarrollo de sus sociedades. Desde los ámbitos donde se genera política democrática debería ser posible contrarrestar los efectos excluyentes de la globalización; esos ámbitos, además, deberían fortalecer la democracia.

Un asunto de importancia al respecto es que, como muchas decisiones en la actualidad se toman fuera de los ámbitos democráticos, e incluso desde afuera, los ciudadanos tienden a restarle lealtad y valor a la democracia. Esta cuestión es de particular cuidado y el informe la plantea con gran preocupación.

La generación de espacios con mayor autonomía, donde se asuman los problemas sociales y de desarrollo, es clave tanto en términos nacionales como regionales. No se trata de crear nuevas instancias, sino de que los Estados estén dispuestos a tratar políticamente estos temas. Se trataría de reconstruir la nación y la región de manera tal que se fortalezcan y complementen. Ello requiere un marco respetuoso de la diversidad entre los distintos países y al interior de ellos mismos.[18]

les". En este sentido, adquiere significado la pregunta referida más arriba.

18 PNUD (2004: 192-195).

Si se desea promover un desarrollo sustentable en América Latina se necesita una suerte de cambio sustancial en el denominado "desarrollo informacional"; o, en otras palabras, una "explosión de conocimiento basada en la ciencia, en la tecnología y en la educación, [pues] mientras las sociedades latinoamericanas aseguren que la próxima generación de niños estará equipada con educación y destrezas para ser productiva en una economía mundial de alta tecnología, la región puede esperar amplias mejoras en el bienestar material en los años que se avecinan".[19]

Una relación positiva entre nuevas tecnologías y desarrollo humano requiere una amplia difusión del progreso técnico en la sociedad para dinamizar las sinergias y complementariedades entre conocimiento, producción y equidad.[20] Es decir, desarrollar capacidades informacionales y técnicas de manera que incidan en las opciones del desarrollo cultural que se persigue.[21]

En este sentido, el primer *Informe de Desarrollo Humano* del milenio planteó la necesidad de realizar una reflexión sobre la vinculación entre el progreso técnico, expresado en las nuevas tecnologías, y el desarrollo humano. Según este informe, el progreso técnico ha sido y debe ser una herramienta esencial para el desarrollo de las naciones. Sin embargo, la desigual capacidad de creación, difusión y utilización de las nuevas tecnologías ("la brecha tecnológica"), el desfase entre las prioridades de la agenda mundial de innovación y desarrollo y las necesidades vitales de la población mundial (la "brecha de prioridades"), así como los posibles riesgos socioeconómicos, ecológicos y sanitarios de su aplicación intensiva, plantean un reto global: *las innovaciones tecnológicas deben ir acompañadas de innovaciones en materia de políticas públicas para acercar la tecnología a las personas y para que ésta sea un instrumento efectivo de reducción de la pobreza.*

Ya en 1987, Fajnzylber planteaba la necesidad de modificar el patrón de desarrollo de

19 Sachs (1999).

20 El Informe de Desarrollo Humano de 2001 hace referencia principalmente a los últimos progresos en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, así como a la biotecnología. Su principal hipótesis es que la mundialización y las nuevas tecnologías pueden constituir una oportunidad para el desarrollo humano (UNDP, 2001).

21 Para una tentativa de vinculación específica entre cultura e informacionalismo véase PNUD Bolivia (2004).

América Latina, cuya modernización se caracterizaba por una asimetría creciente entre el elevado componente de imitación y el componente marginal de innovación económico-social, política y cultural. El patrón de desarrollo regional, según su enfoque, fue más resultado de un proceso imitativo que de una reflexión sobre carencias y potencialidades internas.[22] La escasa incorporación de progreso técnico y el débil aporte de reflexión original serían las causas por las que el crecimiento económico de nuestros países no se asoció a la consecución de mayores niveles de equidad. El "casillero vacío" del crecimiento con equidad sería entonces el reto pendiente del desarrollo humano en Latinoamérica, fenómeno que estaría vinculado a la incapacidad de las sociedades para abrir la "caja negra" del progreso técnico.

La causa de este problema radicaría en "el origen mismo de las formaciones latinoamericanas, su institucionalidad, el contexto cultural y un conjunto de factores económicos estructurales cuya vinculación con lo sociopolítico es compleja pero indiscutible".[23] En el plano económico, una atención exclusiva a la necesidad de abrir los mercados internos habría intensificado la "modernidad de escaparate", debilitado la frágil base empresarial y acentuado la inserción vía los recursos naturales. *Es preciso, por tanto, avanzar simultáneamente hacia la articulación económica social interna y la inserción sólida en la economía internacional.* Para Fajnzylber, pretender la inserción internacional por la vía de la exclusión parcial de sectores sociales y regiones resulta ilusorio, como resulta frágil una propuesta de articulación interna sin una reflexión profunda sobre la necesidad de insertarse en la globalización.

Las reflexiones de Fajnzylber mantienen vigencia casi veinte años después de la publicación de su artículo, pues la inserción latinoamericana en los procesos de cambio tecnológico y de globalización siguió un patrón que parece intensificar esa "modernidad de escaparate".

Repensar el papel que juega el progreso técnico en el "crecimiento con equidad" reclamado por Fajnzylber, o en el "desarrollo humano" conceptualizado por Sen y retomado por el PNUD, plantea el reto de reconsiderar esos factores institucionales, sociales, culturales, económicos y políticos que impiden abrir la "caja negra" del progreso técnico y que confi-

22 Fajnzylber entendía la reflexión como la agregación de valor intelectual a los recursos humanos y naturales disponibles (Fajnzylber, 1987).

23 Fajnzylber (1987).

guran el escenario del subdesarrollo en nuestros países.[24]

En esta perspectiva, parece clave entender una dinámica relativamente nueva de inclusión/exclusión que hoy está en el centro del devenir tanto de la democracia como del desarrollo humano en la región. Quienes están incluidos en el mundo formal de la economía y de la política están subordinados a relaciones dependientes e inciertas, pues en el contexto de la transformación productiva están a expensas de los vaivenes de la economía de mercado. Precisamente por ello, su capacidad de acción colectiva tiende a debilitarse, ya que el tipo de inserción refuerza comportamientos particularistas que logran fortalecerse cuando se defiende de una individualización en función del mercado del trabajo y del consumo. Por su parte, quienes están excluidos constituyen un grupo cada vez más heterogéneo; ellos, como nunca antes en la historia del capitalismo, se han vuelto prescindibles en el mercado de trabajo, pugnan por integrarse de alguna manera, aunque más no sea en los márgenes del sistema, y se refugian en identidades comunitarias de diverso tipo, pero también crean nuevas estrategias de vida y subsistencia que les permiten enfrentar su propia reproducción con creatividad y valentía. Son los que patentizan con más fuerza la necesidad de un Estado de derecho.

1.3. Las nuevas condiciones socioculturales

Pareciera fundamental pensar nuevas categorías sociales que expliquen los mecanismos de la desigualdad y el poder. Sen, por ejemplo, critica el uso "indiscriminado" de la expresión "exclusión social", vinculándola a la noción de pobreza como privación de capacidades, e indaga su contenido en la relación social que supone. Si se entiende la pobreza como bajos ingresos, entonces se distancia de la noción de exclusión social, pero si se la entiende como privación de capacidades, puede asociarse a ella. Y aunque los bajos ingresos implican vivir con privaciones, ellos no son la

única influencia en este aspecto. Sen retoma la filosofía aristotélica para señalar que una vida empobrecida es aquella en la que se carece de libertad para ejercer actividades consideradas importantes para una persona. Pobreza, en su enfoque, es privación de capacidades. Hay capacidades y funcionamientos a los que las personas tienen buenas razones para valo-

24 Para mayor detalle véanse CEPAL (1990 y 1992) y Ocampo (2005).

rar; por ejemplo, existen buenas razones para valorar no ser excluidos de las relaciones sociales y ser parte de la vida de la comunidad sin sentimientos de vergüenza, autocensura, discriminación, etc. Además, ser excluidos de relaciones sociales puede derivar en otras privaciones que limiten oportunidades de vida, como por ejemplo ser excluido de la oportunidad de tener empleo o de recibir créditos, lo que puede conducir a un empobrecimiento económico, que a su vez puede generar otras privaciones (como quedarse sin vivienda, estar mal nutrido, etc.). "La exclusión social puede, así, ser una parte constitutiva de la privación de capacidades así como una causa instrumental de los diversos fracasos de capacidades".[25]

En este sentido, la inclusión serviría para promover capacidades humanas. Sen enfoca el análisis de la pobreza y la exclusión en sus rasgos relacionales: la pobreza es vista como carencia de libertad para realizar ciertas cosas valoradas. La importancia de la idea de exclusión social descansa en que enfatiza el rol de los rasgos relacionales en la privación de capacidades y, así, en la experiencia de la pobreza. Por ello, para Sen hay que ser cuidadoso en el uso del término para designar cualquier tipo de privación, ya que lo fundamental es que se refiere a relaciones sociales. De este modo, los bajos ingresos por sí solos no producirían exclusión social, pero sí sus efectos (dificultades para estudiar, autocensura, etc.), pues inciden en las relaciones sociales. Asimismo, el ser excluido puede constituir en sí mismo una privación y tener una importancia intrínseca. "Por ejemplo, no poder relacionarse con otros y tomar parte en la vida de la comunidad puede empobrecer directamente la vida de la persona. Es una pérdida en sí misma, sumada a cualquier otra privación generada de manera indirecta. Este es un caso de relevancia constitutiva de la exclusión social" (Sen, 2000: 3).

Los siguientes cuatro puntos, de alguna manera, sintetizan las nuevas condiciones sociales de la democracia y el desarrollo en la globalización, y quizá puedan incidir en la reconstitución de escenarios de una renovada ciudadanía con mayor desarrollo humano.

i. La globalización viene generando asimetrías en los patrones de inclusión y exclusión, tanto simbólicas como materiales.

Si bien es posible detectar disposiciones políticas para lograr una mayor inclusión de-

25 Sen (2000: 5).

mocrática, el funcionamiento de la economía de mercado muchas veces impulsa tendencias hacia una mayor exclusión. Esto se manifiesta en la precarización del trabajo, la distribución regresiva del ingreso y la segmentación territorial y residencial, así como en la menor calidad de la educación y la salud y en una desigual conectividad electrónica. Las promesas de interacción a distancia y de libre acceso a la información, junto con la democratización política y la mayor transparencia de las instituciones, contrastan con la pérdida de cohesión social, el debilitamiento de los sentimientos de pertenencia colectiva y la mayor desigualdad en el interior de las sociedades nacionales, todos fenómenos que los nuevos patrones productivos no sólo no mitigan sino que incluso pueden exacerbar.

Las paradojas abundan en esta nueva dinámica entre inclusión y exclusión. Por ejemplo, mientras se universaliza cierto consumo mediático, la segmentación en la conectividad interactiva produce nuevas brechas en educación, poder y comunicación; mientras avanza la cobertura escolar, se segmentan los logros educativos por grupos socioeconómicos, con la consiguiente reproducción intergeneracional de la pobreza; mientras la sociedad de la información mejora la distribución de las imágenes, empeora la distribución de la riqueza; mientras se crean condiciones para un mayor espacio político y tecnológico favorable al multiculturalismo, la penetración de los grandes emporios mediáticos y los patrones de consumo que transmiten tienden a homogeneizar estilos de vida que aparecen como los únicos posibles. El vínculo entre inclusión simbólica y material hoy es difuso porque, mientras el acceso a recursos materiales es obstaculizado por una distribución del ingreso que no mejora (más aún, se agrava en períodos de recesión con el aumento del desempleo en los grupos de menores ingresos), se expande el acceso a bienes simbólicos tales como la educación formal, la televisión y la información. Esta suerte de desbalance permitiría proponer que existen más posibilidades de lograr inclusión social a partir del campo simbólico que del económico. La idea de que el uno y el otro eran parte de un círculo virtuoso se ve desmentida por los datos.

Probablemente América Latina es la región en desarrollo con la mayor brecha entre consumo simbólico y material, lo que se comprueba al contrastar la distribución del ingreso y la difusión de los bienes culturales mencionados. Esto resulta central para pensar el problema de la distancia entre las expectati-

vas de inclusión e inclusión social efectiva. Los problemas de reproducción cultural y de socialización afectan la cotidianidad del ejercicio ciudadano.

ii. Existe mayor complejización de los sistemas de inclusión y exclusión social.

Las nuevas prácticas sociales o culturales no se orientan como en el pasado hacia un eje de lucha focal (el Estado, el sistema político o la nación como su expresión territorial), sino que se diseminan en una pluralidad de campos de acción, de espacios de negociación de conflictos, de territorios e interlocutores. Las demandas sociales, o son estrictamente puntuales y locales, o se deslocalizan espacialmente, ya sea porque la complejidad de las sociedades modernas provoca una diversificación cada vez mayor en su contenido y en la expresión política de los actores, o porque esas demandas son menos susceptibles de ser "agregadas" con las de los grandes sindicatos y los partidos políticos, pues hoy se vinculan más a temas puntuales de la vida cotidiana y del mundo simbólico, no subsumibles en grandes categorías generales; o porque muchos grupos locales se conectan a la red para posicionarse primero a escala global, con el propósito de que sea la comunidad global la que presione a los gobiernos nacionales para que respondan a sus reclamos locales, en una dinámica local-global-nacional que rompe todos los esquemas históricos. Emergen, así, nuevas movilizaciones sociales y proyectos políticos con experiencias en el ámbito global y con rasgos neodesarrollistas que cuestionan los resultados de las reformas estructurales. Asimismo, la creciente diferenciación de los sujetos por su inserción en los nuevos procesos productivos o comunicativos y la mayor visibilidad de la cuestión de las identidades, hace que los distintos grupos sociales y las demandas de inclusión se crucen cada vez más con el tema de la afirmación de la diferencia, las políticas de reconocimiento y la promoción de la diversidad. Campos de autoafirmación cultural que antes eran competencia exclusiva de negociaciones privadas y autorreferencias de los sujetos colectivos, hoy pasan a ser competencia de la sociedad civil. Grupos étnicos y de género, principalmente, claman por ser reconocidos en su singularidad y por contar con derechos específicos, o por la aplicación a su caso en particular de los derechos universales. Discriminación positiva, derecho al autogobierno y políticas diferenciadas en educación son algunos ejemplos que emanan de esta situación. Por todo

lo mencionado, estas sociedades pueden considerarse policéntricas.[26]

En este contexto, aparecen al menos tres temas clave en torno a la redefinición de la ciudadanía: la redefinición de las relaciones culturales a escala nacional y global, que enfatiza la vinculación entre identidades culturales y ciudadanía; el reconocimiento de las diferencias en sociedades cada vez más diversas; y el reconocimiento de los derechos a la participación del ciudadano en las temáticas de desarrollo humano vinculadas especialmente a la globalización.

iii. La migración refuer za los patrones de exclusión social y acentúa la cultura de la desigualdad.

Un tema estratégico del devenir de la democracia y el desarrollo en la región está asociado con los movimientos poblacionales o la migración, incrementada por los procesos de globalización a nivel nacional, regional y global. El fenómeno migratorio que existe hoy en América Latina parece estar más relacionado con los cambios globales que con los patrones migratorios asociados al modelo de sustitución de importaciones. La migración afecta la sostenibilidad del desarrollo en el conjunto de los países involucrados. Hoy, ni el funcionamiento de varias economías latinoamericanas podría explicarse sin las remesas enviadas desde el exterior, ni la calidad de vida de los países desarrollados sin la presencia de estos trabajadores. Este fenómeno obliga a repensar los temas de la multiculturalidad y la ciudadanía y su vinculación con las instituciones de la democracia. Los inmigrantes muestran de manera patente la calidad del multiculturalismo y de la democracia (que por lo general no les reconoce derechos ciudadanos), así como los imaginarios sociales en torno a temas de empleo, acceso a bienes y ser vicios, y la aceptación o el rechazo cultural.

Las migraciones exponen de manera abierta el tema de la diferencia, la precariedad económica y social, la desigualdad y la discriminación racial y xenófoba, planteándose una tensión entre un deseo de fortalecimiento ciudadano y pluralista y la discriminación recién mencionada. Esta discriminación debilita los lazos de inclusión social, pues, al no ser aceptados por la sociedad que los recibe, los inmigrantes tenderían a retraerse sobre su

26 Un primer análisis del carácter policéntrico de las sociedades latinoamericanas puede verse en Calderón y Lechner (1998).

propia cultura. Otros fenómenos asociados son la pérdida de la condición ciudadana y la consiguiente reducción de sus derechos, la estigmatización, la preferencia de inmigrantes provenientes de ciertos países en relación con otros y las identificaciones simplistas de las cuales son objeto y que generan una incomprensión de su realidad.

Como los conflictos interculturales son cada vez más relevantes en la organización del poder y el orden de los Estados, las políticas de desarrollo humano tendrían que tomar en cuenta la calidad de la trama de relaciones de los inmigrantes, puesto que, mientras más puedan disfrutar de derechos ciudadanos, mejor será el proceso de inclusión y menor la discriminación. Ello requiere, sin embargo, que se discutan valores democráticos de equidad e igualdad a partir de los cuales se acepte como ciudadanos a los inmigrantes, porque si prevalece una visión instrumental de mercado los resultados en términos de integración serán escasos. Estos temas son discutidos particularmente en algunos países receptores, no obstante, existen pocos estudios sobre migración, globalización y democracia.

Los procesos de globalización simbólica y cultural pueden cumplir un rol importante aunque paradójico en este contexto, pues si bien permiten compartir referencias de carácter global, éstas son apropiadas desde las diversas culturas locales. Este fenómeno genera que el sentimiento de desarraigo propio de los inmigrantes (reforzado por el hecho de no ser plenamente aceptados en la sociedad receptora) se viva de manera compleja: por un lado, compartir referencias simbólicas globales los hace parte de una cultura global (lo que daría un marco de igualdad simbólica); por el otro, la necesidad de no perder la propia identidad favorece la recreación de prácticas culturales por fuera de los territorios locales, proceso en el que se produce una apropiación de símbolos globalizados desde las propias particularidades en contextos extraterritoriales.

El fenómeno actual de la migración pone en el tapete de discusión el tema del desarrollo humano, de la exclusión social y la desigualdad cultural. Si bien existen condiciones para ampliar el multiculturalismo (lo que ocurre en el plano de los procesos simbólicos globales), los inmigrantes tienden a recrear sus culturas en sociedades donde, mayoritariamente, poseen un estatus preciudadano. En este sentido, es central promover políticas de reconocimiento, tanto en el plano cultural como en el de los derechos ciudadanos.

iv. En la sociedad de la información, la inclusión y la exclusión social adquieren nuevas especificidades.

Se vive una época de transición de sociedades industriales a sociedades "red" o "en la red", de economías de capital físico a economías de conocimiento e información, de sociedades de producción y trabajo a sociedades de comunicación y consumo, del modelo de Estado-nación al modelo global interdependiente. En este contexto de cambio, los usos de las redes en la configuración de nuevos espacios públicos, en la comunicación y el acceso a la información, en la visibilidad de los actores y en los nuevos vínculos con otros, podrían tener gran impacto sobre el desarrollo humano. La capacidad integradora de la red es tan exhaustiva como el potencial de exclusión para quienes no acceden a ella. La ciudadanía se juega aquí en un terreno donde la amenaza de exclusión se vuelve más intangible, pero no por ello menos real.

La marcha hacia la sociedad de la información genera nuevas formas de inclusión y exclusión relacionadas con una nueva división social del trabajo. Los sectores que mejor se integran son los vinculados a la producción de conocimientos (y que incorporan conocimiento a su producción), los que tienen sistemas y estructuras flexibles, y los que invierten en tecnología de información. La globalización sólo incluye a los sectores considerados económicamente valiosos para la red y para los nuevos mercados, agravando la desigualdad dentro de los propios países, regiones y ciudades. Cada vez más se tiende a entender la exclusión como "exclusión con respecto a la sociedad-red", vale decir, con respecto a la tecnología, el conocimiento y los nuevos mercados.

Desde un punto de vista positivo, el acceso de diversos actores a los medios interactivos puede ejercer un impulso incluyente en las sociedades latinoamericanas. Abundan los ejemplos en los que el uso de nuevos bienes culturales y comunicacionales permitió la conexión horizontal entre importantes grupos étnicos, organizaciones feministas, grupos ecologistas y diversas ONG. Todos ellos son actores que se movilizan para plantear demandas particulares y que encuentran en la red y en los medios un espacio de comunicación y de encuentro con otros interesados en la defensa de los mismos temas. Esto demuestra que las nuevas redes de comunicación horizontal pueden incrementar el protagonismo de sujetos anteriormente autorreferentes. De igual manera, se abre una amplia gama de opciones de acceso a la información (sobre servicios, derechos y demandas

compartidos), de influencia en la opinión pública (al disponer de estaciones radiales, acceder a redes informatizadas, difundir videos), de "fiscalización" de la discriminación mediante el uso de Internet (que permite debatir asuntos públicos en "tiempo real"), entre otras.

Sin embargo, también en este plano existen asimetrías que reproducen patrones excluyentes. Sería preciso discutir cómo contrarrestar las asimetrías que emergen cuando unos actores capitalizan tecnología comunicativa para hacerse presentes y otros no. O también, cómo promover los medios técnicos idóneos, y el conocimiento sobre su manejo, que favorezcan un juego democrático incluyente en la sociedad de la información. ¿Cómo hacer frente a la nueva brecha entre informatizados y "desinformatizados" para no ahondar desigualdades en el plano de las representaciones simbólicas que circulan por la red, puesto que mientras unas pueden ejercer influencia en la toma de decisiones políticas, otras, por ser "electrónicamente invisibles", pueden ser políticamente excluidas? Todos éstos constituyen nuevos temas para pensar desde la región.[27]

1.4. CIUDADANÍA ACTIVA

En este contexto, debería potenciarse a los actores políticos y socioeconómicos para que sean capaces de reconstruir —en un marco de diversidad de actores y situaciones— la idea y el propósito de una inclusión social creciente que garantice un mayor desarrollo humano. Se trata, en definitiva, de reconstituir la nación en la globalización, sustentándola en una ciudadanía renovada y activa que articule democracia y desarrollo.

Una ciudadanía activa implica combinar complementariamente libertad e igualdad. El régimen político no garantiza por sí mismo la

27 En América Latina se advierte una creciente frustración de expectativas por parte de la población. Por un lado, ha habido notables avances en indicadores propios del desarrollo humano, como la reducción de la mortalidad infantil y la expansión de la expectativa de vida. También han mejorado sustantivamente los indicadores relativos a tecnología y comunicación: en promedio, de acuerdo con datos de la CEPAL (2006) entre 1990 y 2004 la cantidad de líneas telefónicas y teléfonos celulares por cada 100 habitantes creció casi 7 veces, y la de usuarios de Internet, más de 39 veces. Pero, al mismo tiempo, los rezagos en materia de pobreza y desigualdad son enormes. Por consiguiente, se tiene una población más educada e integrada a la vida cultural moderna, pero excluida en términos de ingresos y empleo. El saldo es una fuerte frustración de expectativas que, sin lugar a dudas, afecta la vida política de las personas.

evolución de la sociedad en este sentido; son las prácticas y orientaciones de los actores las que pueden profundizar la democracia. La libertad, de acuerdo con Sen, se entiende como la capacidad de las personas de optar por el tipo de vida que desean vivir según sus valores y aspiraciones, y de evaluar e incluso asumir otras opciones.[28] El concepto se apoya en la idea de que la diversidad es un valor intrínseco de la libertad y que la igualdad, que "reúne" libertades diversas, es un producto de aquélla porque supone e implica las libertades de todos. En este sentido, el desarrollo y la democracia deben ser decididos por todos en un nuevo espacio público donde los ciudadanos hagan la democracia.

El Estado podría jugar un rol estratégico en la formación de actores autónomos y en la recreación de una conciencia de nación y de región en la globalización, y la política podría potenciarse equilibrando lo económico y lo social, la igualdad y la diferencia, con conciencia de que los cambios toman tiempo y exigen consistencia y sentido de justicia.

El desarrollo democrático actual, tal como se sostiene en el informe *La democracia en América Latina*, requiere el fortalecimiento de una ciudadanía activa, mediante la puesta en práctica de una política generadora de poder democrático que, a su vez, depende de una política consistente que lo promueva. En los países latinoamericanos es posible impulsar una democracia de ciudadanos asociada con niveles progresivos de equidad y dinámicas eficaces de lucha contra la pobreza. Esto implica avanzar en la construcción de una ciudadanía centrada en los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

Como se indicó, los cambios globales plantean nuevos desafíos a la región y es necesario fortalecer la democracia como régimen y espacio de expansión de la ciudadanía, con especial énfasis en la participación activa de la sociedad y sus actores. Una perspectiva de fortalecimiento de los derechos sociales y culturales no implica, por otra parte, soslayar los derechos civiles y políticos. Por el contrario, un enfoque integrado —coincidente con el planteado en PNUD (2004)— supone una interacción entre sus componentes, donde lo político-institucional viabiliza lo social, y donde, inversamente, los avances en lo social legitiman lo institucional. En la medida en que los actores y las instituciones expandan su

28 Sen (1999).

capacidad de innovación y adaptación a los cambios sociales y globales, las amenazas percibidas respecto de esos cambios podrán ir revirtiéndose a favor de una percepción de nuevas oportunidades y potencialidades.[29]

Los artículos comprendidos en este libro se inscriben en una línea de reflexión crítica sobre la relación entre democracia y desarrollo. En estos nuevos tiempos, el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad política son requisitos esenciales para la inversión y el crecimiento de la economía. Instituciones sólidas y Estados activos, creíbles y orientados por actores coherentes y con capacidad de manejo del cambio, y de gestión institucional de conflictos, son la base de una nueva dinámica social fundamentada en una lógica de las capacidades.

En este sentido, un punto central es la capacidad de acción de la ciudadanía y de las instituciones de la democracia para resistir mejor los riesgos y manejar mejor las oportunidades que plantean los procesos de cambio global. ¿Cómo se redefinirán los ciudadanos de cara a las actuales sociedades policéntricas? ¿Cómo se posicionará a sí misma la ciudadanía social en sociedades altamente internacionalizadas, organizadas en función del conocimiento y la información, y donde los fuertes mecanismos de diferenciación social tienden a reforzar la desigualdad preexistente?

¿Cómo construir ciudadanía, cuando se está redefiniendo un orden multicultural altamente conflictivo y que excluye política y económicamente a los grupos más débiles? Desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿cómo se redefinirán los ya limitados mecanismos de cohesión social, dado que las instituciones encargadas de la socialización, como la familia y la escuela, manifiestan serios problemas de reproducción social?

Se vive un momento de cambio en el que, si bien es fundamental resolver viejas demandas de derechos humanos básicos (que, por lo demás, cada día se reciclan en la globalización), el surgimiento de nuevos derechos y demandas de diverso tipo (culturales, étnicas, ecológicas, de género, de información, sexuales, etc.) plantea espacios de expansión ciudadana que los mecanismos institucionales y los Estados escasamente pueden procesar. Estaría en

29 El informe apela a una democracia de ciudadanía, concebida no sólo en función del régimen político y del goce de derechos políticos, sino también orientada por los derechos civiles y sociales. El reconocimiento y la garantía de realización de los tres tipos de ciudadanía (civil, política y social) llevarían a disfrutar de una ciudadanía integral (PNUD, 2004: 25-31).

germen una suerte de movimiento de ciudadanía "asincrónica" que entrecruza derechos de diverso tipo, intensidades y direcciones, dando lugar a nuevos desafíos que el Estado, la democracia y el desarrollo tienen que enfrentar. La cuestión es cómo se construyen agendas para encararlos.

1.5. Propuesta analítica

Una primera aproximación conceptual para enfrentar la desigualdad y analizar de forma integral la ciudadanía tendría que explorar los niveles de articulación entre el reconocimiento ciudadano (*reconocimiento de identidades*); los tipos de participación a los que el ciudadano accede y que puede ejercer (*participación*); y los niveles de distribución de los recursos sociales, económicos y culturales (*distribución*).[30] A partir de ahí se pueden elaborar opciones de políticas de desarrollo y nuevos mecanismos institucionales para regular el conflicto. La condición es que éstos sean pertinentes para cada situación nacional o histórica.

El nivel de integración y sinergia entre los tres principios que organizan la ciudadanía (reconocimiento, participación y distribución) determinaría las capacidades o debilidades ciudadanas para actuar en un mundo en cambio, y enfrentar los procesos globales en aras de aprovechar las oportunidades y revertir las rigideces en materia de pobreza, exclusión y desigualdad social.[31]

Hipotéticamente, las relaciones entre reconocimiento, participación y distribución no son unívocas:

– Cuando la tensión principal se encuentra entre el reconocimiento y la distribución, la cuestión en juego serán las opciones de políticas sociales (producción y distribución de bienes públicos);

30 Esta conceptualización está sustentada en el proyecto *Estrategias de fortalecimiento de la ciudadanía social*, elaborado durante 2005, en el marco de las actividades del PRODDAL.

31 Cada país podría presentar distintas situaciones de articulación entre las tres dimensiones señaladas y, por lo tanto, el nivel de desarrollo de las capacidades de ciudadanía tenderá a ser diferente. Estas situaciones son dinámicas y pueden atravesar por niveles diferentes de articulación en contextos específicos también diversos. Se trataría de identificar los rasgos centrales que explican las posibilidades y limitaciones de la capacidad de acción ciudadana en las distintas sociedades.

– cuando la tensión está entre el reconocimiento y la participación, la cuestión en juego será la regulación institucional del conflicto, y
– cuando la tensión está entre la participación y la distribución, la cuestión en juego será la capacidad de transformar los derechos en demandas efectivas.

Por otra parte, como ya se mencionó, los cambios globales producen transformaciones en las sociedades nacionales en diversos ámbitos de la economía, la política, el mundo social y la cultura, e inciden en la conformación de una nueva estructuración de la sociedad. Son particularmente relevantes los cambios en los patrones de exclusión/inclusión y sus relaciones con la multiculturalidad y la identidad, la socialización y la inserción en la sociedad de la información. En todos estos aspectos hay actores y necesidades, instituciones que regulan los conflictos y políticas públicas que producen y distribuyen bienes. De cómo se trabajen estas variables dependerá si los cambios se convierten en oportunidades o se empantanan como problemas de los que se torna difícil emerger. Algo similar ocurre con la llamada crisis de la política y de los partidos.

En el debate teórico contemporáneo sobre la ciudadanía, la línea iniciada por Marshall, que distingue entre derechos políticos, civiles y sociales, es un referente analítico fundamental.[32] Su principal legado es la incorporación de los derechos sociales al ámbito de los derechos de ciudadanía, antes integrados en los derechos civiles y políticos. La inclusión de los derechos sociales como derechos ciudadanos fue promovida por los Estados de bienestar, impulsores de la igualdad social a través de la prestación de servicios sociales referidos a estos derechos. Sin embargo, en sociedades policéntricas no se observa en la actualidad una acumulación de formas diversas de ciudadanía, como sostuvo Marshall, sino una "implosión de derechos, una transformación de los derechos civiles y políticos a través de la inclusión de nuevos sujetos sociales (de género, niños, minorías sexuales), junto al surgimiento de nuevas esferas de derecho (como la ecología, la reproducción, la información) y una mutación (en general declinación) de derechos sociales aparentemente consolidados, en particular, aquellos ligados al mundo del trabajo".[33]

32 Marshall (1965).

33 Sorj (2005: 31). Véase también Manin (1992).

2. El espacio público

La idea de democracia de ciudadanas y ciudadanos está asociada a la renovación de la política, a una democracia de lo público y a una sociedad deliberativa; en definitiva, supone un retorno a la idea republicana de espacio público como bien común.[34] En este enfoque, la política tiene un papel estratégico en el desarrollo.

El espacio público es el lugar de "encuentro" de los ciudadanos donde se debate y genera opinión pública. Se trata del lugar donde se crea lazo político entre los ciudadanos y donde éstos participan de la política. Esta idea de espacio público supone la existencia de actores e individuos con autonomía y capacidad de plantear y argumentar sus ideas y opiniones sobre la vida en común; es, en fin, el lugar donde se debate y se discuten las prioridades y metas de una sociedad.[35] Mientras más sólida sea la red de articulación y argumentación en el espacio público, mayores son las probabilidades de que una sociedad pueda lograr una mejor participación a escala global.[36]

34 En este sentido, Viroli señala que la virtud cívica se trata "de una virtud para hombres y mujeres que quieren vivir con dignidad y, sabiendo que no se puede vivir dignamente en una comunidad corrupta, hacen lo que pueden y cuando pueden, para servir a la libertad común: ejercen su profesión a conciencia, sin obtener ventajas ni aprovecharse de la necesidad o debilidad de los demás; su vida familiar se basa en el respeto mutuo, de modo que su casa se parece más a una pequeña república que a una monarquía (Bobbio y Viroli, 2002). También véase Manin (1987).

35 Para Habermas, "El dominio público se ubica por fuera de las instituciones del Estado y sir ve como foro para la discusión sobre las normas públicas". Benhabib (1996) cuestiona la posición de Habermas en tanto este autor no abordaría el tema de la diversidad en el espacio público y sostiene que las decisiones que allí se tomen se planteen como separadas de los ámbitos institucionales de toma de decisiones. Según Benhabib, los ámbitos del debate público y de la toma de decisiones deben ir juntos, pues, de lo contrario, se fortalece la separación entre lo sustantivo (que se da en el espacio del debate) y lo instrumental (que se da en el ámbito de la toma de decisiones).

36 Castells hace referencia a los nuevos procesos políticos que contribuyen a la crisis de la democracia liberal clásica, mientras que fomentan el surgimiento de una nueva democracia electrónica, inserta en la revolución de la sociedad informacional. La expresión "democracia electrónica" trata de resumir los nuevos condicionamientos de la relación entre el sector público y la opinión pública, ante el nuevo paisaje social. Este tema es fundamental para la reformulación del espacio público. Para mayor detalle, véase Castells (1996-1997).

El espacio público supone así la interacción de actores con capacidad política para expresar sus argumentos y debatir en forma libre en condiciones de igualdad con otros.

La capacidad política de la sociedad y de sus actores, que se expresa en este espacio, tendría que vincularse a:

i. *El ejercicio político*. La dignidad humana, que constituye la esencia del ejercicio ciudadano, está vinculada al derecho a hacer política. El ejercicio político es lo que nos distingue como humanos[37] y el derecho a la ciudadanía, a ejercer libremente la acción política propia con otros, es el fundamento de la democracia. Asimismo, el logro de una ciudadanía activa, que articule las ciudadanías social, política y civil en la deliberación social, depende de la capacidad política de los actores, vinculada al ejercicio político.

ii. *La producción de libertad, entendida como bien colectivo*. La libertad (o la no dominación) es un bien colectivo porque cumple dos condiciones: a) *es un bien social*, ya que la no dominación no implica la ausencia de otros, sino la existencia de límites que evitan que algunas personas dominen a otras y; b) es un *bien común*, pues la no dominación sólo está asegurada cuando los sectores más vulnerables no sufren dominación.[38] Así, la libertad como no dominación debe darse tanto a nivel de la sociedad (de ahí su carácter colectivo) como individualmente. Ambas son inseparables y, en esta línea de pensamiento, el Estado juega un rol central promoviendo la libertad en ambos sentidos para vincularla al desarrollo y a la ciudadanía.[39]

iii. *La capacidad integradora, deliberativa y promotora de acuerdos que tiene la política*. La política tiene un poder constructivo

37 Así, para Hannah Arendt: "Únicamente la pérdida de la comunidad política es la que puede expulsar al hombre de la humanidad", citada por Lechner (1988).

38 Véase Petit (1997).

39 Para una primera aproximación a la idea del estado de lo público en el desarrollo humano, véase el Informe Desarrollo Humano de 1993. En este informe, se afirma que el concepto de mercados "amigables" para las personas implica el trabajo conjunto del Estado y los mercados. Dado que, en la práctica, tanto los Estados como los mercados son guiados por estructuras de poder, el informe sugiere que ambos deberían ser guiados por la gente. Mercados y Estados deberían trabajar en tándem y la gente debería ser lo suficientemente empoderada para controlarlos de forma efectiva (UNDP, 1993).

de espacios donde distintos actores intercambian argumentos y propuestas para generar opciones o acuerdos. Ese intercambio sólo puede darse en base al mutuo reconocimiento de identidades que incluso se redefinen en el encuentro político. En este sentido, la política debería hacerse cargo de la pluralidad social, cultural y política de las sociedades. Lo nacional debe comprenderse como producto de la pluralidad, y al Estado y los partidos les cabe la tarea de propiciar una dinámica política pluralista e institucional, en contextos donde en gran medida la participación es fragmentada, particularista y a menudo corporativa, lo que inhibe la construcción de consensos nacionales en función de objetivos colectivos básicos.[40]

iv. La promoción de la idea de un desarrollo compartido asociado a la democracia. La democracia se vincula al desarrollo humano porque viabiliza el derecho fundamental de participar políticamente en las decisiones que afectan la propia vida, establece mecanismos que ayudan a proteger a las personas de grandes catástrofes económicas y políticas y, sobre todo, porque puede favorecer el desarrollo humano a través de la ampliación de la participación política ciudadana que genere mayor equidad social y económica y establezca prioridades de política pública.[41]

v. El desarrollo como producto de la acción de ciudadanos activos que se hacen en el espacio público democrático, espacio en el que se reproducen virtudes y valores republicanos.

En esta línea, los temas vinculados al ejercicio político, a la libertad como bien colectivo, a la deliberación, al logro de acuerdos y a una socialización ciudadana permanente, constituyen asuntos que encuentran en el espacio público un ámbito democrático de manifestación. Las virtudes públicas se relacionan con la construcción colectiva de la dignidad individual y la conciencia de la necesidad de un modo de vida democrático.[42]

El espacio público es, entonces, el lugar de participación y expresión política. Sin embar-

40 Calderón (2002).

41 Véase PNUD (2004).

42 Para un debate sobre estos temas, véanse Bobbio y Viroli (2002: 15) y Petit (1997).

go, en tiempos de globalización, la política, si no está en crisis, tiene enormes dificultades para enfrentar los cambios. Al respecto, una conclusión de la conferencia realizada en México en septiembre de 2004, en el marco del informe *La Democracia en América Latina*, enfatizaba que la política hoy no tiene la fuerza para contrapesar los poderes fácticos. Los partidos políticos, en general, no han podido asumir la complejidad del mundo actual, lo que ha llevado a una suerte de "quiebre" de la representación partidaria como forma única de participación política. Si bien se trata de un fenómeno global, en América Latina los límites de una ciudadanía integral lo agudizan. Es fundamental, en este sentido, recuperar la autoridad de la política y hacer hincapié en su capacidad creadora de espacios públicos.

¿Cómo salir de este *impasse*? Parece necesario idear y construir una forma de asociación política que rescate su dimensión ética, a partir de la cual se cree una relación entre los participantes que permita hablar de un espacio público compartido, e integrar la dimensión ético-normativa de la política, sin omitir su carácter pragmático, generador de poder y de condiciones para el desarrollo.

Se trataría de crear una comunidad política de diferentes donde la identidad se establezca a través de compartir reglas que organicen la relación civil entre actores y ciudadanos que, de otro modo, estarían preocupados por sus proyectos particulares. Esta forma moderna de comunidad política se sustenta en un vínculo dado por un interés público común. No tiene una forma predefinida; se construye de manera constante.[43]

Empero, esto no significa que el régimen democrático tenga garantías intrínsecas para profundizarse a sí mismo. Sólo la representación y participación ciudadana pueden conducir a una tendencia hacia la igualdad social que profundizaría la democracia.[44] Esto finalmente lograría una convergencia cada vez mayor entre ciudadanía política, civil y ciudadanía social.

En sociedades cada vez más globales, con mutaciones constantes, resulta fundamental una visión más dinámica de la ciudadanía, una visión centrada en la ampliación permanente

43 Mouffe (1996). Véase también PNUD (2004: 195).

44 Los cambios necesarios para hacer posible la sostenibilidad del régimen democrático deberían provenir de la interacción de la sociedad y el sistema institucional. Cabe señalar que esa interacción no está exenta de conflictos. Toda sociedad necesita apelar, a la vez, al orden y el conflicto, y el manejo de la tensión entre ambos es lo que permite avanzar en democracia.

del espacio público, donde debatir y elaborar los problemas a escala local, nacional o global, según se vayan presentando.

La ciudadanía, según el informe *La democracia en América Latina*,[45] abarca un espacio mayor que el del régimen político y sus reglas institucionales, y hoy se considera que el ciudadano pleno debe acceder a sus derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales de manera integrada, y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado. Un desafío político es superar la naturaleza desintegrada de la ciudadanía, es decir, su irregularidad y asincronía, que producen tensiones y frustraciones que inhiben el avance del desarrollo humano. Para ello resultaría importante reconocer el papel de la ciudadanía política como portadora de una "igualdad compleja" que permita avanzar en los otros planos.[46] El ciudadano es el sujeto de la democracia y la ciudadanía implica la existencia de igualdad básica dada por el solo hecho de pertenecer a una comunidad política, de compartir un mismo espacio público.[47] Ello supone que todos los individuos, en tanto ciudadanos, tienen iguales derechos y deberes. Sin embargo, en cada país la democracia y el ejercicio de la ciudadanía tienen sus propias particularidades socio-históricas. La cuestión es cómo redefinir el ejercicio ciudadano en sociedades de cambio acelerado como las latinoamericanas.

Que la sociedad elija el espacio público como lugar para realizar sus orientaciones de desarrollo puede constituir una opción que beneficie intereses individuales, pero en la medida en que estos se extiendan hacia el conjunto de la sociedad, sus beneficios tenderán a ser colectivos. El espacio público y los acuerdos

45 PNUD (2004). Véase, además, Touraine (1994), quien afirma que el juego democrático supone a la vez la representación, las reglas del juego y la participación ciudadana.

46 La idea de igualdad compleja de Walzer supone que existen diferencias en los otros planos de la vida social pero que, en el plano político, en la ciudadanía, habría un elemento de igualdad que permitiría avanzar. Sen retoma la idea de libertad como fuerza que potenciaría la igualdad y posibilitaría el desarrollo (Walter, 1993). Para mayor detalle véase también el capítulo I del informe de 2005 (PNUD, 2005).

47 Como plantea Schnapper, en "toda nación democrática, la política instituye lo social. […] La ciudadanía, en ese sentido, no fue solamente un atributo jurídico y político, [sino] el medio seguro de adquirir estatus social, la condición necesaria —incluso si ella no era concretamente siempre suficiente— para que el individuo pudiera ser plenamente reconocido como un actor en la vida colectiva" (Schnapper, 1994).

que puedan surgir en él serán más eficientes mientras mayores sean las oportunidades particulares de una amplia gama de ciudadanos. Probablemente esto convertiría al espacio público en un bien común, pues beneficiaría a todos. En este sentido, el espacio público sería un recurso para el desarrollo humano, primero porque es legítimo y segundo porque puede constituir un medio eficiente para tomar decisiones sociales colectivas.[48]

3. La necesidad de horizontes normativos

La distancia existente entre las necesidades de la sociedad y las posibilidades de la política marca la inflexión histórica que vive la región. Para que esa distancia sea superada se necesitan horizontes normativos de sentido que trasciendan la fragmentación y que apelen a una relación fecunda entre ciudadanía y desarrollo humano. Desde este enfoque, se requiere argumentar al menos en una doble dimensión normativa: la primera, referida a las *normas procedimentales que organizan la vida democrática* en la línea de lo que Pizzorno denominó "solidaridad procedimental";[49] la segunda, referida a valores propios de la cultura democrática, como las virtudes cívicas o la libertad real. Estas dos dimensiones normativas están relacionadas, pues procedimientos y valores son parte de un mismo proceso.

Este tema también se vincula a la relación entre el orden vigente y el orden posible, planteada por Lechner,[50] y a la congruencia del orden institucional con el tipo de desarrollo posible, planteada hace años por Medina Echavarría.[51]

Los procedimientos en la política —entendida ésta como un sistema de expectativas y reconocimientos recíprocos— no son meramente formales, sino formas comunicativas que establecen normas de reciprocidad y solidaridad *procedimental.* Esta visión supone un enfoque constructivo de la política, que debe respetar pero también producir nuevas identi-

48 Al respecto, Sen trabaja la noción de "elección colectiva racional" y la idea del desarrollo individual como compromiso colectivo, véase Sen (2003).

49 Pizzorno (1985).

50 El orden posible está marcado por la relación entre lo que es (lo real) y lo deseado (que es visto como utopía, como lo imposible), véase Lechner (1987).

51 Medina Echavarría (1964).

dades y orientaciones, lo que implica reconocer el pluralismo como un valor constitutivo de la democracia.

Además, en la democracia moderna, los procedimientos pueden modificarse, ya que ésta no tiene principios "incuestionados". Como dice Lechner (1987): "El relativismo de valores también relativiza las reglas del juego. No hay procedimientos verdaderos u objetivos, sino acuerdos contractuales que establecen un derecho, pero no un deber. No ofrecen garantías en el sentido de una obligación ética. […] Un pacto sobre las reglas de juego sólo sería

éticamente vinculante por referencia a una normatividad externa". Esto tiene que ver con valores, con el sentido de la democracia.

Entre los valores y las virtudes de la cultura democrática, interesa aquí destacar el de libertad, entendida —según Sen— como compromiso social. De acuerdo con este autor, la expansión de la libertad es a la vez el fin principal del desarrollo y el medio para alcanzarlo.[52] Como fin, las libertades son fundamentales para el enriquecimiento de la vida; como medio, las libertades se interrelacionan de modo tal que los avances en unas contribuyen a alcanzar otras.[53]

Como agente, el individuo se relaciona con el rol instrumental de la libertad. Un mayor grado de libertad mejora la posibilidad de las personas de ayudarse e influir sobre el mundo. Sen (1996) denomina a esto "capacidad de agencia" de los individuos y utiliza la palabra "agente" para definir a quienes actúan y logran cambios, los que pueden expresarse en función de sus propios valores y objetivos. En este sentido, la capacidad de una persona de ser agente ("actor", según la denominación de Touraine) consiste en el grado de libertad para actuar y conseguir, en un proceso de búsqueda, las metas y los valores que estime relevantes.[54] Desde esta perspectiva, el rol de agente de las personas, en tanto integrantes de una sociedad y participantes activos en la economía, la política y el campo de lo social, es fundamental para el desarrollo.

El desarrollo es visto, entonces, como la expansión de las libertades que poseen las personas para vivir de acuerdo con los valores que

52 Sen (1999 y 2003).

53 A partir de este rol instrumental de las libertades, Sen plantea distintos tipos de libertades instrumentales que refuerzan la idea de complementariedad entre normas y valores.

54 Sen (1997).

aprecian.[55] Esas libertades permitirían evaluar los cambios ocurridos y, a la vez, serían un factor decisivo para impulsarlos. La formación de los valores y la evolución de la ética social forman parte del desarrollo y a ellos debe prestarse tanta atención como a los mercados y las instituciones, las que, por otra parte, dada su diversidad requieren ser comprendidas de forma integral. La expansión de las libertades individuales se logra a partir de un compromiso social. Dicho compromiso está asociado a la idea de una ciudadanía que construye, en un espacio público deliberativo, su propia promesa colectiva para lograr metas tanto colectivas como individuales.

Estas ideas sobre los horizontes normativos en democracia llevan a la pregunta sobre la relación entre los ciudadanos y el Estado, y sobre los límites y las posibilidades de ampliar los derechos y asegurar su sostenibilidad.

Como argumenta Sorj, un ámbito privilegiado donde se expresa esta relación es el de los derechos civiles (que se constituyen en contra del poder discrecional del Estado), los derechos políticos (que expresan integración y participación del ciudadano dentro del Estado) y los derechos sociales (que expresan demandas del ciudadano al Estado).[56]

La diferencia entre los distintos tipos de derechos se asociaría a la diferencia de valores. Algunos derechos pueden establecer relación de oposición (por ejemplo, el derecho de propiedad contra los derechos distributivos, o el derecho a la información contra el derecho de privacidad). "El reconocimiento de las consecuencias antinómicas que sustentan los diferentes derechos es fundamental para comprender la dinámica política, social e ideológica de la modernidad; indica la necesidad de no confundir derechos (como sistema de valores) con Derecho (como ordenamiento jurídico)."[57]

En este sentido, existiría una doble reivindicación que fundamentaría un enfoque renovado del desarrollo humano y que supone la presencia de valores que establecen una relación de oposición en la práctica: por un lado, la búsqueda del pleno ejercicio de la libertad individual se sostiene en valores individualistas;

55 Sen (1999).

56 Estos últimos derechos implican una "institucionalización de mecanismos de integración de aquellos grupos sociales que el capitalismo, inicialmente, condenara a la subordinación y/o a la pobreza" (Sorj, 2005: 27).

57 Sorj (2005: 28).

por otro, la búsqueda de igualdad entre todos los ciudadanos en una comunidad nacional se funda en valores colectivos y solidarios. La antinomia que surge de esta doble reivindicación promueve la existencia de un Estado que vele por la seguridad individual y, al mismo tiempo, por la integración de los más desfavorecidos en la vida social.

Bibliografía

Arditi, B. 2005 *Ciudadanía polémica, de geometría variable y metaestable.*

Arendt, H. 1988 *La condition de l´homme modern* (París: Calmann-Levy).

Banco Mundial 2006 *Panorama del Desarrollo Mundial 2006. Equidad y desarrollo* (Washington, DC: World Bank-Oxford University Press).

Banco Mundial 2006 *World Development Indicators*, en <http://devdata.worldbank.org/dataquery/>.

Beck, U. 1998 *¿Qué es la globalización?* (Barcelona: Paidós).

Benhabib, S. 1996 *Democracy and difference* (Princeton: Princeton University Press).

Birdsall, N. y Menezes, R. 2005 "Más allá del Consenso de Washington: nuevo contrato social en América Latina, basado en el empleo", en *Foreign Affairs en español*, julio-septiembre de 2005 en <www.foreignaffairs-esp.org>.

Bobbio, N. y Viroli, M. 2002 *Diálogo en torno a la república* (Barcelona: Tusquets). Busino, G. 2001 "Quelles significations attribuer aux processus de rationalisation de la mondialisation", en Mercure, D. (dir.), *Une société monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation* (Québec: Les Presses de l'Université Laval).

Calderón, F. 2002 *La reforma de la política. Deliberación y desarrollo* (Caracas: ILDIS/Friedrich Ebert/Nueva Sociedad).

Calderón, F. (coord.) 2003 *¿Es sostenible la globalización? Debates con Manuel Castells* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).

Calderón, F. y Lechner, N. 1998 *Más allá del Estado, más allá del mercado: la democracia* (La Paz: Plural).

Calderón, F. y Castells, M. 2003 "Inconclusiones", en Calderón, F. (coord.), *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica-PNUD Bolivia).

Castells, M. 1996 *The Rise of the Network Society* (Cambridge: Blackwell).
Castells, M. 1996-1997 *La era de la información. Economía, sociedad y cultura* (Madrid: Alianza).
Castells, M. 2001 *La galaxia Internet* (Madrid: Areté).
Castells, M. 2005 *Globalización, desarrollo y democracia. Chile en el contexto mundial* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
Castells, M. 2006 *Comunicación móvil y sociedad: una perspectiva global* (Barcelona: Ariel). Chiriboga, M. 2003 "Sociedad civil, movimientos indígenas e Internet", en Calderón, F. (coord.), *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel*
Castells (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
CEPAL 1990 *Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa* (Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 1992 *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad* (Santiago de Chile: CEPAL).
Corporación Latinobarómetro 2005 *Informe Latinobarómetro 2005* en <http://www.latinobarometro.org/uploads/media/2005.pdf>.
Cukrowski, J. 2006 "New Social and Political Conditions for Human Development in Europe and the CIS", en *International Forum on the Social Sciences-UNESCO*, Buenos Aires (20 al 24 de febrero).
Dervis, K. 2005 *A Better Globalization: Legitimacy, Reform and Governance* (Washington, D. C.: Center for Global Development, Brookings Institution Press).
Fajnzylber, F. 1987 *De la caja negra al casillero vacío* (Santiago de Chile: CEPAL).
Fajnzylber, F. 2003 "Cultura, juventud e Internet: la pregunta por el arte como puente cultural", en Calderón, F. (coord.), *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).
Grzybowski, C. 2004 "Democracia, sociedad civil y política en América Latina", en PNUD-PRODDAL, *La democracia en América Latina* (Buenos Aires: Aguilar).
Habermas, J. 1998 *Más allá del Estado nacional* (Madrid: Trotta).
Habermas, J. 1975 *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío* (Buenos Aires: Amorrortu).

Hopenhayn, M. 2003 “Conjeturas sobre cultura virtual. Una perspectiva general y algunas consideraciones sobre América Latina”, en Calderón, F. (coord.), *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).

Kliksberg, B. (comp.) 2002 *Ética y desarrollo: la relación marginada* (Buenos Aires: El Ateneo).

Lechner, N. 1987 “¿Qué es realismo en política?”, en Lechner, N. (comp.), *¿Qué es realismo en política?* (Santiago de Chile: Catálogos).

Lechner, N. 1988 “Los derechos humanos como categoría política”, en Ansaldi, W. (comp.), *La ética de la democracia* (Buenos Aires: CLACSO).

Loayza, N. 2003 “El movimiento de mujeres. ¿Una ‘revolución de terciopelo’?”, en Calderón, F. (coord.), *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica).

Manin, B. 1992 “Metamorfosis de la representación política”, en Dos Santos, M. (coord.), *¿Qué queda de la representación política?* (Caracas: CLACSO/Nueva Sociedad).

Manin, B. 1987 “On Legitimacy and Political Deliberation”, en *Political Theor y*, Vol. 15, Nº 3 (Minneapolis: Sage Publications).

Manin, B. 1998 *Los principios del gobierno representativo* (Madrid: Alianza).

Marshall, T. H. 1965 *Class*, *Citizenship and Social Development* (Nueva York: Anchor Books).

Medina Echavarría, J. 1964 *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina* (Buenos Aires: Solar/Hachette).

Mehrotra, S. 2006 “The Politics of Poverty in Asia: A Preliminar y Explanation of Inter-Regional and Inter-Country Differences in Poverty Dynamics”, en *International Forum on the Social Sciences-UNESCO*, Buenos Aires (20 al 24 de febrero).

Mouffe, Ch. 1996 *O regreso do político* (Lisboa: Gradita).

O’Donnell, G. 2006 *Hacia un Estado de y para la democracia. Contribuciones para el debate*, Vol. 2.

Ocampo, J. A. 2005 “Economía y Democracia”, en *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate* (Buenos Aires: Aguilar/Altea/Alfaguara).

Offe, C. 1992 "Ingobernabilidad. Sobre el renacimiento de teorías conservadoras de la crisis", en *Partidos políticos y nuevos movimientos sociales* (Madrid: Editorial Sistema).

Ohno, I. (comp.) 1996 "Beyond the East Asian Miracle: an Asian View", en *Discussion Papers* Nº 5 (Nueva York: UNDP/Office of Development Studies).

Petit, P. 1997 *Republicanism. A Theory of Freedom and Government* (Oxford: Oxford University Press).

Pizzorno, A. 1985 "Sobre la racionalidad de la opción democrática", en *Los límites de la democracia*, Vol. 2 (Buenos Aires: CLACSO).

PNUD Chile 1998 *Informe de Desarrollo Humano en Chile 1998. Las paradojas de la modernización* (Santiago de Chile: PNUD).

PNUD Bolivia 2002 *Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2002. Capacidades políticas para el desarrollo humano* (La Paz: PNUD).

PNUD México 2002 *Informe sobre Desarrollo Humano en México 2002* (México, D. F.: Mundi-Prensa).

PNUD Bolivia 2004 *Informe Nacional de Desarrollo Humano en Bolivia 2004. Interculturalismo y globalización: la Bolivia posible* (La Paz: Plural).

PNUD-PRODDAL 2004 *La democracia en América Latina* (Buenos Aires: Aguilar).

PNUD 2005 *Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual* (Barcelona: Ediciones Mundi-Prensa).

Rocher, G. 2001 "La mondialisation: un phénomène pluriel", en Mercure, D. (dir.), *Une société monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation* (Québec: Les Presses de l'Université Laval).

Sachs, J. 1999 "Latinoamérica y el Desarrollo Económico Global", en Campero, F. *et al.*, *Bolivia en el siglo XX, La Formación de la Bolivia Contemporánea* (La Paz: Harvard Club de Bolivia).

Schnapper, D. 1994 *La communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation* (París: Gallimard).

Sen, A. 1996 "Capacidad y bienestar", en Nussbaum, M. y Sen, A., *La calidad de vida* (México: The United Nations University/ Fondo de Cultura Económica).

Sen, A. 1997 *Bienestar, justicia y mercado* (Barcelona: Paidós).

Sen, A. 1999 *Development as Freedom* (Nueva York: Alfred A. Knopf).
Sen, A. 2000 "Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny", en *Social Development Papers*, Nº 1, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank.
Sen, A. 2003 *La libertad individual como compromiso social* (La Paz: ILDIS/Plural).
Sorj, B. 2005 *La democracia inesperada* (Buenos Aires: Prometeo-Bononiae Libris). Tandon, Y. 1997 "Globalization and the South: The Logic of Exploitation", en *Internationale Politik und Gesellschaft* (Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung).
Touraine, A. 1994 *Qu'est-ce que la démocratie?* (París: Fayard).
Touraine, A. 1999 *Como salir do liberalismo* (Bauru: EDUSC).
Touraine, A. 2003 "Revoluciones del siglo XX: la nación en la globalización", en PNUD/FES-ILDIS/ASDI/Plural, *Revoluciones del siglo XX. Homenaje a los cincuenta años de la Revolución Boliviana. Tenemos pechos de bronce… pero no sabemos nada* (La Paz: Plural).
UNDP 1993 *Human Development Report 1993. People's Participation* (Nueva York: Oxford University Press).
UNDP 1999 *Human Development Report 1999: Globalization with a Human Face* (Nueva York: Oxford University Press).
UNDP 2001 *Human Development Report 2001. Making new technologies work for human development* (Nueva York: Oxford University Press).
Wagner, P. 1997 *Sociología de la Modernidad* (Barcelona: Herder).
Wallerstein, I. 1979 *The Capitalist World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press).
Walzer, M. 1993 *Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad* (México: Fondo de Cultura Económica).
Wiewiorka, M. 2005 "After New Social Movements", en *Social Movement Studies*, Vol. 4, Nº 1 (París: Routledge).

La participación local como factor estratégico de la reforma del Estado

La idea que se aspira desarrollar en esta exposición afirma que las reformas estatales pensadas y realizadas principalmente desde una perspectiva economicista e institucionalista son insuficientes para producir un nuevo orden estatal congruente con la globalización, con la democracia y con el modelo de desarrollo pensado y producido desde el ámbito público. Más bien, resulta fundamental colocar la política como eje de las transformaciones estatales.

Desde esta perspectiva, el Estado tendría las potencialidades para transformarse en una suerte de "bisagra activa" entre la economía y la sociedad y entre la búsqueda de integración social interna y el posicionamiento de la nación en la globalización.

En este ámbito la participación ciudadana a escala local constituye uno de los factores potenciales de fortalecimiento de un espacio público desde donde se podría generar una cultura cooperativa entre Estado y sociedad.

a. Un breve balance de las reformas estructurales

1) Paradójicamente, no se puede negar que el Estado ha tomado iniciativa con relación a algunas de las transformaciones económicas y sociales señaladas; pero él mismo se ha transformado poco y de manera muy lenta respecto de los cambios que ha provocado. Esa es una paradoja latinoamericana: el Estado patrimonialista corporativo toma iniciativas de reformas económicas e institucionales pero él, política y culturalmente, se reforma escasamente. Es, pues, una peculiaridad estatal,

* Este texto es la exposición presentada en la Feria de gobernabilidad de Rosario "Rosario más ciudad, más humana" en el año 2005.

porque se reforma mucho menos de lo que ha reformado a otros. Sin embargo, ha habido algunas reformas exitosas más en unos estados que en otros, más en unos aspectos que en otros; entre ellas pueden mencionarse las de las Contralorías y las de los Bancos Centrales, aunque los cambios en estas instituciones sólo han sido parciales. Reformas más integrales no se han dado. La emergencia de nuevas autarquías institucionales altamente concentradas en la esfera económica es un rasgo predominante del Estado actual, en el que no existe, por ejemplo, una genuina autoridad social o un eficiente control social de la corrupción. Lo social no es considerado un fin del desarrollo, sino que está más bien subordinado a lo económico.

2) Por otra parte, es importante reconocer que se ha avanzado en el plano político-institucional. Obviamente, si se compara la realidad latinoamericana actual con su pasado se han producido algunos avances. Sin embargo, la práctica y la cultura políticas clientelar y patrimonialista no sólo se han mantenido, sino que se han ampliado a lo largo de estos años de democracia delegativa y de reforma económica limitada. En América Latina se ha inventado el "*populismo neoliberal*".

3) Con relación a la economía, si bien los procesos de modernización en general –y especialmente aquellos referidos a la estabilización, la privatización y la capitalización *integraron las economías nacionales a los mercados externos*, *también han generado una brutal concentración de ingresos y poder*. Vale la pena asimismo mencionar que en varios aspectos –y particularmente en algunas ramas y empresas ya transnacionalizadas– se ha venido dando una nueva dinámica de reestructuración empresarial, de inserción en los procesos de globalización y de funcionamiento empresarial cada vez más sustentado en criterios de eficiencia y eficacia, que hace que las empresas sean altamente competitivas en el mercado internacional. *Hoy en día el núcleo de la economía latinoamericana ya está transnacionalizado e integrado a la globalización. Tal fenómeno*, *además*, *condiciona el conjunto del cambio económico*[1].

4) *No obstante*, *es importante recalcar que hasta el momento esto no ha provocado en la mayoría de los casos que los núcleos productivos internos fueran fagocitados o que*

1 CEPAL, 1994a; UNRISD, 1998.

se lograra una competitividad auténtica[2]. En gran medida, las políticas de estas empresas en el nivel nacional se han adecuado al lento y precario funcionamiento estatal, quizás desconociendo las dinámicas sociopolíticas de las regiones donde operan e introduciendo de esta manera "peligros" a su sostenibilidad. En este sentido, la filosofía de la empresa que se inserta en las economías nacionales es fundamental, como también lo son las estrategias que el Estado y los empresarios locales elaboran para insertarse en la globalización. (Chile, Brasil, México y Costa Rica)

5) Así mismo, la sociedad se ha complejizado tremendamente: las distancias sociales han crecido, así como las distancias internacionales, y en general las sociedades son cada vez más duales. De no mediar importantes cambios, este problema no sólo se va a complejizar aún más, sino también se va a incrementar[3]. Por otra parte, la acción colectiva tiende a fraccionarse y se multiplican sus demandas e intereses, fenómeno que no se expresa en un aumento de la capacidad de acción y menos en una mayor representación política. Cabe destacar aquí que detrás de la rica diversidad cultural en la región se esconden importantes tendencias hacia el faccionalismo social y hacia un malestar sociocultural generalizado. *En síntesis, la sociedad cambia pero pierde capacidad de acción sobre sí misma (Chile).*

6) En varios estudios se constata que el peso del Estado es decisivo tanto para la integración social y el funcionamiento interno de la economía como para el posicionamiento de los distintos países en la dinámica global[4].

2 CEPAL, 1991.

3 En el mundo, 507 millones de personas no sobrevivirán hasta los 40 años de edad, 1.200 millones carecen de acceso a agua potable, 842 millones de adultos son analfabetos, 152 millones de niños menores de 5 años son malnutridos, 1.300 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza de ingreso, más de 500 millones de los habitantes más pobres del mundo viven en tierras marginales. (UNDP, 1997:31, Graf. 2.2b y p. 75.)

4 "El Estado, como los mercados, debería estar orientado por el público. Los dos deberían trabajar en *tándem* y el público debería tener suficientes poderes para controlar a ambos en forma eficaz. Podría hacerlo mediante la participación en la gobernación o en su calidad de productores y consumidores, o en muchos casos mediante organizaciones populares u organizaciones no gubernamentales". (UNDP, 1993:53.) "Los mercados favorables al

También se constata que, a pesar de una fuerte ideología antiestatal global, la realidad proteccionista internacional es mucho más fuerte y real que la lógica ideológica de la apertura neoliberal en el funcionamiento de las economías modernas. Asimismo, los estudios señalan que si bien es necesaria una modernización y una reforma del "Estado empresario", es también urgente reconocer la presencia de una fuerte estructura monopólica prevaleciente en el funcionamiento de los mercados que limita seriamente la competencia entre las empresas.[5] En tal sentido, son notables las experiencias de los Estados del Japón y de los países del sudeste asiático[6].

7) Estos ejemplos demuestran que es importante relativizar los juicios y las ideologías absolutistas y tratar de entender cómo están realmente funcionando el Estado y el mercado, determinando más bien cuáles son las necesidades de cambio estatal y de mercado frente a una sociedad particular y frente a la dinámica que enfrenta en un mundo cada vez más globalizado.

8) La cuestión, desde la perspectiva que aquí interesa, es cómo el Estado y el mercado pueden trabajar en función de lo público y de un desarrollo endógeno e incluyente que pueda ser considerado como bien común.

9) ¿Es posible entonces construir democracias estables en medio de la crisis, el ajuste y el cambio impuesto desde afuera? ¿Cómo fortalecer la democracia con Estados cada vez más débiles frente al mercado externo e incapaces de satisfacer mínimas demandas de la población? Porque, en definitiva, ¿acaso el proceso de rede-

público permiten a éste participar plenamente de su funcionamiento y compartir equitativamente sus beneficios. Para que los mercados estén al servicio de la gente, y no la gente al servicio de los mercados, hacen falta varias medidas concretas". Sobre estas medidas véase UNDP, 1993:31, Box 3.1. Para un mayor análisis de la relación entre crecimiento económico y Estado y el enfoque de las políticas públicas desde el enfoque del desarrollo humano, véase UNDP, 1996 (especialmente Caps. 2 y 3). Para una visión del consumo y del desarrollo a partir de una óptica pública, véase UNDP, 1998.

5 Un ejemplo curioso es ilustrativo. Según *El economista* de junio de 1997, en los 18 años de gobierno de Margareth Thatcher el PIB estatal sólo se redujo de 43% a 42%

6 Véase Ohno, I., Comp., 1996; World Bank, 1993; Lee, E., 1998; López, V., 1998.

mocratización no consiste en crear permanentemente un proceso histórico de convivencia democrática que permita a la vez la autogobernabilidad de la sociedad y, en especial, la gobernabilidad de la economía? ¿Es posible renovar el sistema político en función de una auténtica capacidad de inclusión de actores sociopolíticos en el sistema de toma de decisiones?

10) Seguramente *estas preguntas nos lleven a plantear la problemática de la articulación posible entre Estado, actores sociales y sistema político. Quizá aquí es importante aclarar las chances de articulación entre Estado y sistema político en una sociedad democrática.* Seguramente esto significaría que el Estado no cierre en forma absoluta las decisiones; no se encierre sobre sí mismo y organice monopólicamente la vida social. El Estado, en un sistema democrático, tendría que estar sometido cada vez más a las demandas políticas de la sociedad y sus actores, que progresivamente provendrían de un sistema de decisiones políticas públicas. El Estado tendría nuevas formas de comunicación con la sociedad civil a través del sistema político. En este sentido, quizás el desafío político del futuro consista en no confundir más poder político con poder del estado.

11) En este contexto, se trataría de valorizar al sistema político como la instancia posible de creación de una escena pública, no meramente estatal ni puramente privada. Una escena política que sea especialmente un espacio de manifestación de conflictos, donde la sociedad exprese su unidad y diversidad. *Sin embargo, esto plantea el tema de la reforma del Estado y la imprescindible necesidad de fortalecerlo, tanto en la escena interna como en el marco internacional.*

12) Probablemente el desafío de los procesos de democratización y desarrollo en las actuales circunstancias latinoamericanas consista en articular las necesarias transformaciones del proceso político institucional con las imprescindibles necesidades de fortalecer y crear un genuino Estado de bienestar.

B. Elementos para un nuevo tipo de Estado

1) La reorganización del Estado, en una visión sistémica -y según todo lo señalado-, tendría que tomar en cuenta al menos tres elementos. *En primer lugar*, que la inserción en los mercados mundiales, meta principal de la

transformación económica, se rige por un paradigma de competitividad auténtica; es decir, la inserción *no depende tanto de la competitividad de una u otra empresa como de las capacidades organizacionales, institucionales y gerenciales de un país para combinar un basto conjunto de factores económicos y no económicos y para articular, además, la diversidad de actores*. La competitividad de un país supone pues una actualización del Estado nacional como una de las instancias fundamentales de coordinación de los diversos procesos sociales.

2) De esta competitividad se desprende, *en segundo lugar, la relevancia de la integración social (ciudadanía, mercado y solidaridad)*. Precisamente, los efectos de exclusión social de las políticas de ajuste y del mercado *otorgan un papel primordial al Estado como instancia responsable de asegurar la cohesión social de una sociedad*. Considerando el aumento de las desigualdades sociales y el riesgo creciente de explosiones violentas, la reformulación del Estado y de las políticas sociales representa hoy día un tema estratégico para el nuevo desarrollo y para la misma competitividad de las empresas.

3) *En tercer lugar*, la nueva conciencia ciudadana; ésta, como la política, requiere mayor cooperación entre ciudadanos, los que a su vez reclaman mayor participación al Estado. Un ejercicio efectivo de los derechos de ciudadanía presupone ante todo un Estado de derecho, pero también un acceso equitativo a los servicios públicos y a una burocracia razonablemente eficiente y respetuosa de la dignidad de las personas.

4) El Estado en un régimen democrático no se identifica con el mercado[7]. La función estatal es proteger y fomentar la participación de los ciudadanos. El Estado en un mundo globalizado debe potenciar la capacidad de sus ciudadanos, tanto en el plano "técnico-instrumental" -es decir, del manejo de los nuevos códigos de conocimiento-, como en el de la "socialización democrática", referida a instituciones, a valores sustantivos, al reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y a la comprensión de la democracia como referente de la acción política estatal.

5) En este marco se sitúa la reforma del Estado; ella abarcaría no sólo la redefinición de

7 Calderón, F. y Lechner, N., 1998.

los ámbitos clásicos de la intervención estatal, sino también el desarrollo de un nuevo instrumento institucional, es decir, de entes reguladores, supervisores, comisiones antimonopólicas, agencias de defensa del Estado, etc. *El Estado se debe dotar de una red de instituciones de derecho público que, sin ser mecánicamente estatales, aseguren el funcionamiento del Estado y del mismo mercado.* Siendo un paso importante, aún así resulta insuficiente, pues el economicismo reinante hace perder de vista la dimensión cultural de la gobernabilidad democrática y el peso decisivo de la política en la economía; ésta depende, en buena parte, de que las representaciones colectivas acerca del orden y de los sentimientos de la comunidad puedan expresarse en la política. *En este sentido, el Estado debe tomar en cuenta el ordenamiento simbólico de la convivencia social*[8].

6) Se trata de constituir un nuevo Estado en función de lo público. Un Estado que transparentemente genere condiciones para que la sociedad se desarrolle y busque la deliberación y la integración de los ciudadanos, independientemente de sus condiciones socioculturales, en una sola comunidad política, pero que a la vez tenga por meta que éstos puedan convivir con una responsabilidad nacional compartida. *Y convivir hoy en América Latina significa buscar y redefinir colectivamente la justicia social.* El Estado, como resultado de un nuevo acuerdo social, debe buscar que todos los ciudadanos tengan una vida digna y asegurada su subsistencia. Además, debe frenar el brutal crecimiento de las brechas sociales existentes. Ello, desde luego, también supone que debe velar por la existencia de reglas del juego claras y estables en la relación entre empresarios y trabajadores compatibles con una economía competitiva. *En el fondo, lo que se está argumentando aquí es la insoslayable necesidad de que los ciudadanos puedan rediscutir el sentido de la nación en un mundo fatalmente globalizado.*

7) El Estado en función de lo público no es privado ni estatal; es un Estado que potencia la capacidad de acción de los actores del desarrollo y que busca participar y satisfacer los acuerdos que emergen de las experiencias deliberativas. Esta óptica debería contemplar la necesidad de la creación de esa suerte de "Estado bisagra", donde si bien la actuación estatal se subordina a una dinámi-

8 Steinmetz, G., Ed., 1999.

ca pública deliberante y a la vez busca actuar en la integración social interna, en lo externo tendría que buscar el posicionamiento del país y de su economía en la globalización. En este enfoque, Estado y sociedad desarrollan prácticas y estrategias de cooperación en función del bien común con una fuerte dosis de realismo deliberativo.

c. El rol estratégico de la participación local

1) Sin duda, uno de los cambios más importantes ha sido la descentralización del Estado y el uso de lo local *en el Desarrollo y la Democracia*. Desde el inicio ésta ha sido planteada como un objetivo de primera línea, a pesar de que haya cobijado acciones de diverso orden, entre las cuales se puede mencionar:

Desconcentración, a través de políticas públicas, de la población, actividades y servicios. En ciertos caso se piensa en potenciar las regiones y ciudades intermedias con mayores posibilidades de desarrollo.

Transferencia de funciones administrativas. Con la idea de desburocratizar y disminuir costos de la administración central, se transfiere funciones de planificación y, principalmente, gestión de servicios costosos como educación y salud, a los municipios, provincias o regiones.

Fortalecimiento político y técnico administrativo de los gobiernos locales. Político en cuanto a mayor representatividad y mayores competencias que implican autoridad, como la aprobación de la planificación. Técnico administrativo en cuanto a la gestión de mayores recursos económicos, gestión de servicios importantes, etc.

2) De esta forma la descentralización vendría a ser uno de los mecanismos más novedosos para impulsar y potenciar una relación virtuosa entre modernización y Estado. Ello, si la descentralización es capaz de integrar procesos de racionalización y eficiencia de la gestión local con una legítima participación ciudadana, para de esta forma enfrentar los problemas y desafíos de forma democrática. Para esto, la generación de espacios públicos vendría a ser un paso fundamental en la consolidación de estos objetivos Casos y experiencias notables: Villa el salvador, Porto Alegre, etc.

3) En este marco, un tema especialmente importante es el desarrollo local. Los distintos

actores sociales y políticos están concibiendo a los gobiernos locales como verdaderos núcleos de desarrollo y gestión de la crisis y ya no sólo como organizaciones políticas predeterminadas. En este sentido, los gobiernos territoriales no solo expresan procesos sociales urbanos, sino que surgen en ellos nuevas potencialidades para orientar a estos; a pesar que la resolución final de estos procesos requiera de políticas de desarrollo y cambio nacionales, que sean más amplias.

4) Por otra parte, el predominio de políticas de descentralización, que promuevan mecanismos locales de eficacia y racionalización de la gestión, y de participación y representación en el sistema de toma de decisiones, seguramente potenciará la articulación entre los distintos niveles del Estado y las condiciones específicas de las sociedades locales, con las respectivas ventajas para una inserción fecunda de cada espacio económico específico en la economía global, además de conseguir una representación más genuina de los intereses locales a nivel central. Sin embargo todas estas afirmaciones generales solo cobran sentido en las experiencias políticas nacionales y en los marcos de los cambios específicos de las relaciones entre Estado y sociedad.

5) Sin embargo, es sugerente la hipótesis de que la globalización diferencia territorialmente y el resultado de ello son regiones y localidades que se fortalecen y otras que se deterioran. En realidad esto es un producto del nuevo cambio global. Las luchas y conflictos locales que se observan en los distintos países de la región y de otras partes del mundo, en el fondo se dan por un cierto posicionamiento de lo territorial en la globalización. Claro que, por otro lado, también es pensable que las políticas de descentralización pueden tener un efecto funcional a la integración social si se conciben como políticas nacionales integradas. Sin embargo, lo que está en pugna es cómo una región determinada se integra o no a ese proceso de globalización.

6) En este ámbito, el espacio local o municipal puede llegar a jugar un papel fundamental en la medida que él también sea una bisagra entre las redes locales nacionales y las redes virtuales en la globalización.

7) La importancia de lo local o territorial en la lógica del Estado de lo público se debe a que puede ser una fuerza estratégica para que los países logren vincularse en las redes globalizadas, esto en función de 3 razones:

i. Primera: En lo local o municipal se pueden crear con mas facilidad que a escala nacional mejores condiciones para una mayor productividad y competitividad en la economía. También existen ventajas en el fortalecimiento institucional, en el desarrollo de infraestructura y tecnología adecuada. El desarrollo de flujos comunicacionales como caminos, redes de información, redes de intercambio de mercaderías y recursos humanos pueden ser fortalecidos con mayor eficiencia a escala local que nacional.
ii. Segunda razón, en lo local hay mayor legitimidad, es un espacio mas adecuado para lograr integración social y convivencia pluricultural, un espacio de gestión del pluralismo.
iii. Y la tercera es que lo local es mas eficaz y legítimo a nivel político, institucional de esta manera la deliberación es mas factible.

8) El conjunto de estos factores lleva a pensar en cadenas y redes locales flexibles. En una perspectiva de mediano y largo plazo, lo que está en juego no sólo es la necesidad de instituir un Estado de lo público que favorezca el desarrollo interno, sino que este mismo Estado pueda compartir su autoridad con otros Estados para poder tener un lugar en el mundo moderno. Y aquí el tema es nuevamente el de la política a escala global: son imprescindibles sistemas de alianzas abiertas e inéditas.

9) Posiblemente lo regional y la soberanía estatal se va a redefinir en nuevos campos de acción y en un contexto altamente internacionalizado. Sin embargo, para que esa redefinición tenga un sentido social es importante recolocar a la política, y especialmente a la política deliberativa, como la principal fuerza vinculante entre Estado, sociedad y economía, y entender, de una vez por todas, que se necesita un Estado fuerte y ojalá pequeño, el cual sólo será posible si la sociedad misma lo es; y eso es, desde luego, una responsabilidad que se construye entre todos los ciudadanos.

10) Finalmente desearía enfatizar, que las políticas que aumentan las capacidades de los actores, y particularmente la de los pobres, son la clave. Para que esto tenga lugar es esencial la participación directa de los pobres mediante experiencias deliberativas en la política democrática. Cuanto más los pobres y los grupos marginados sean capaces de transformar sus demandas en resultados institucionales, tanto

más posible será el logro de las MDM y del desarrollo humano en general.

11) Varios casos en América Latina demuestran que, especialmente en el ámbito local, el reforzamiento de las capacidades de acción social entre los pobres y los marginados es posible. Mientras ellos sí tienen ciertas limitaciones, estos casos representan ejemplos clave de participación democrática y desarrollo humano con potencial para reproducirse y expandirse en ámbitos más amplios regionales y nacionales. Tal parece que estos casos tienen el potencial de un "efecto demostrativo" que podría ayudar a la inspiración de otras iniciativas y de esta manera contribuir al logro de las MDM y al desarrollo humano en general. Asimismo, creemos que estos casos pueden tener un doble impacto: primero, promueven acciones en la igualdad y en la redistribución de los ingresos, de los ingresos y servicios e incluso de bienes de capital, segundo, pueden promover una mejor distribución de las capacidades políticas entre los diversos miembros de la sociedad, en otras palabras, el objetivo de alcanzar la igualdad política democrática en el sistema de la toma de decisiones por medio del incremento de la acción ciudadana[9].

9 Para un tratamiento general de este tópico, ver Dos Santos (1986) *Concertación politico-social y democratización*

Ciudadanía activa y desarrollo sostenible*

Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler

La crisis del progreso

Entre los varios problemas no resueltos por los procesos de modernización —y de cuya existencia se ha empezado a tomar real conciencia hace sólo unos pocos años-, se pueden mencionar los relacionados con la desafección política y con los límites de una gobernabilidad democrática, los del incremento de las desigualdades sociales y de la contracción ciudadana y los de la crisis del ecosistema global. El desarrollo tecnológico, los ajustes económicos y el crecimiento de las economías de los países desarrollados han traído aparejada una incapacidad de la política para procesar los conflictos y las demandas socio-culturales de las sociedades y un descontrol sobre los recursos naturales, acelerando su escasez y provocando daños ambientales, algunos de los cuales parecen ser irreparables. Frente a este problema ambiental, ni la cultura política estatista ni la cultura del mercado han podido dar una respuesta satisfactoria, pues ambas conciben un progreso basado en el deterioro del ambiente.

Los procesos de modernización tuvieron dos componentes fundamentales: por un lado, se basaron en una idea de progreso lineal y ascendente, no sólo en el plano científico-tecnológico, sino también en los de la política, la economía y lo socio-cultural; por el otro, fueron acompañados por un proceso de secularización, cuyo creciente ritmo diferenciador fue distanciando cada vez más los distintos ámbitos de la vida (la ética, la política, la moral, la economía, la ciencia, etc.), a partir de una lógica de especialización basada en una racionalidad instrumental. Si bien el proceso secularizador valorizó al individuo, haciendo posible su reconocimiento como sujeto y como ciudadano, minó las bases

* Este trabajo fue escrito en coautoría con A. Szmukler. Integra el libro *Calidoscopio latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente*. Ansaldi, Waldo (Ed.) 2004 (Buenos Aires: Ariel).

subjetivas de los lazos sociales, debilitando la solidaridad comunitaria. Estas consecuencias del proceso de secularización hicieron cada vez más difícil articular el proyecto cultural de la modernidad que, bajo la égida de una razón sustantiva fundada en valores, haría posible la *evolución* y realización humanas.

La consecuente separación entre el proyecto de la modernidad y los procesos de modernización puso en crisis la idea de un progreso —surgida con la revolución industrial— basado no sólo en la evolución tecnológica sino en valores sustantivos. Esta concepción del progreso se sustentaba, por un lado, en el desarrollo científico-tecnológico de las capacidades humanas para dominar la naturaleza y, por otro, en una perspectiva ascendente-evolutiva en la que el conocimiento científico marcaba el sentido de la historia y sus resultados exitosos se expandirían a los ámbitos económico, social, político y cultural, contribuyendo a la construcción de un mundo en constante evolución en todos los planos.

¿Por qué esta idea de progreso lineal y ascendente entró en crisis? En primer lugar, a nivel productivo (en los campos económico, tecnológico, científico, industrial), el desarrollo indefinido basado en la explotación del ambiente tiene límites muy concretos: hoy se ha vuelto evidente que si se sigue depredando los ecosistemas tal como se lo ha hecho hasta ahora el planeta tiene los años de vida contados. En segundo lugar, la promesa de integración social y de eliminación del atraso fracasó, y más bien lo que se vive hoy es un aumento de la pobreza y las desigualdades y un incremento de la complejidad social. En tercer lugar, la ideología que sustentaba este modelo suponía que todos los países eran capaces de desarrollarse, a partir de un único modelo, alcanzando los niveles socio-económicos de los países más desarrollados; para esto, primero debían solucionar sus problemas económicos —base de todos sus males— y luego, casi de manera automática, se resolverían las dificultades sociales y culturales. El Estado-nación era el actor que debía orientar este tipo de desarrollo por su papel de representante del bien común.

La crisis de los Estados de bienestar, tanto en los países centrales como en los periféricos, y de los regímenes socialistas, por un lado, y los límites evidenciados por la crisis del ecosistema global, por el otro, erosionaron las bases de este paradigma de progreso con sentido ascendente, sin haber podido ser reemplazado por otro aún.

Los procesos de globalización de la reestructuración económica, cultural-comunicativa e

informacional y de internacionalización de la política, así como los de la creciente concentración de la toma de decisiones —efecto del propio paradigma tecnológico-informacional— y la fragmentación de identidades que se *defienden* frente a esa *globalización impersonal*, también cuestionan aquella idea economicista de progreso[1]. Frente a una dinámica de integración global como característica de época, aparece paradójicamente un mundo cada vez más fragmentado, en el que las vías de acceso a aquel progreso social que todos los países alcanzarían en algún momento se vuelven cada vez más inequitativas, poniendo en duda la noción de desarrollo y generando amplios márgenes de incertidumbre.

Así, como consecuencia de los procesos de modernización, se vive hoy un debilitamiento del tejido social y de la capacidad de la política para plantear órdenes emancipatorios, cuestionándose las mismas bases progresivas —en el sentido de su capacidad de aumentar el bienestar de la mayoría de la gente— de la modernización.

La actual crisis del ecosistema global constituye una de las manifestaciones más claras del predominio de la razón instrumental —base de los procesos modernizadores y de un crecimiento basado en el dominio indiscriminado de los recursos naturales y en la degradación del ambiente— sobre una razón sustantiva que pudiera fundamentar, a partir de valores, una idea de progreso sostenible y más equitativamente distribuido.

En tal contexto, la tesis central que organiza nuestra reflexión afirma que los procesos de modernización tienden tanto a minar las bases subjetivas articuladoras de la sociedad moderna cuanto a romper el equilibrio del ecosistema global. La cuestión consiste en cómo, a partir de una política democrática sustentada en valores, reconstituir el lazo social para desde allí lograr un desarrollo sostenible que, basado en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema global, asegure la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones sin sacrificar las necesidades de las futuras generaciones. Se trata entonces de un desarrollo intra e inter-generacional, centrado en la participación ciudadana y que supone una visión de largo plazo. Así, el desarrollo sostenible implica la necesidad de participación de las personas y de niveles de integración social, lo que lleva a profundizar el tema de una *ciudadanía más activa* —que se verá en

1 Cf. Manuel Castells, 1995.

seguida— y a replantearse el rol, renovado y central, que debería cumplir la política a partir de una mirada desde la ecología y el desarrollo sostenible.

En una perspectiva latinoamericana —a partir de la cual se considera la tensión entre los efectos de la modernización y las chances de manifestación efectiva de una subjetividad basada en valores más universales-, se analizará, en primer lugar, la relación entre política y gobernabilidad, entendida esta última como la capacidad política de una sociedad de innovación ciudadana. En segundo lugar, se buscará delimitar las características de lo que se ha llamado *ciudadanía activa*, la que debe ser socialmente incluyente y vincularse al problema ecológico por su carácter global y local a la vez. Este tema está ligado también al de la pobreza, pues los pobres, al no poseer otros recursos, deterioran los recursos naturales por una cuestión de supervivencia. El daño ambiental tiene así dos fuentes: 1) el crecimiento basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales a través de un proceso de industrialización que no se detuvo en los perjuicios que ocasionaba y 2) el aumento de la pobreza que genera un círculo vicioso cuando los pobres deben deteriorar el ambiente para sobrevivir provocando más pobreza ambiental[2].

Finalmente, se analizarán las consecuencias socio-culturales de la degradación ambiental en curso y su vínculo con las posibilidades de ampliación de una ciudadanía global que comprenda tanto la necesidad de cambios en la representación social y política como el problema (globalizado) de la crisis ambiental en curso.

El texto pretende argumentar que las actuales formas de articulación entre procesos de modernización, política y ecosistema, se han agotado, lo que ha quedado en evidencia con el fracaso de aquella idea de progreso cuestionada. Es necesario, por tanto, una óptica diferente que, a partir de una cultura política democrática constantemente expansiva, pro-

2 "La pobreza y el medio ambiente están atrapados en una espiral descendente. La degradación de recursos del pasado profundiza la pobreza de hoy, en tanto que la pobreza de hoy dificulta mucho preocuparse de la base de recursos agrícolas o restaurarla, hallar otras posibilidades distintas de la deforestación, prevenir la desertificación, luchar contra la erosión y reponer los nutrientes del suelo. Los pobres se ven obligados a agotar los recursos para sobrevivir; esta degradación del medio ambiente los empobrece todavía más". (PNUD, 1998a:5.)

mueva un tipo de desarrollo sostenible que haga hincapié en la comunicación y la participación ciudadanas.

1. Política y momentos de gobernabilidad en la experiencia latinoamericana

En un mundo donde se relativizan las fronteras nacionales gracias a la dinámica de economías abiertas y a culturas cada vez más globalizadas, donde la fuerza de la comunicación y la información son transversales a toda actividad humana, la política misma asume cada vez con más fuerza rasgos internacionalizados e interdependientes. Esto es tan así que en alguna medida existe cada vez más un tiempo político hiper-acelerado con efectos sistémicos globales.

Sin embargo, este proceso no es unidireccional. La política en una sociedad globalizada esconde la paradoja de un mundo cada vez más integrado pero al mismo tiempo más fragmentado. Los gobiernos, las corporaciones, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y cualquier organización moderna fundada en redes coordinadas de información, están buscando expandir sus alcances, pero sus unidades menores o básicas buscan mayor autonomía e independencia. El Estado y las unidades territoriales locales viven este tipo de paradojas[3].

Estos procesos colocan bajo nuevos términos la cuestión de la gobernabilidad, pues en la medida que los parámetros de funcionamiento del sistema global están cambiando, está disminuyendo la autoridad de los gobiernos centrales. El incremento del poder de las diversas colectividades globales, y no sólo de las transnacionales, limita el de los Estados y afecta la soberanía y las gobernabilidades nacionales de manera tal que hoy día en América Latina no sólo cuenta el proceso de dependencia asociado con la internacionalización de la política, sino la lógica interdependiente y multicéntrica asociada con mecanismos de decisión globalizados. En consecuencia, cualquier estrategia de gobernabilidad y de sostenibilidad democrática a nivel nacional debe tomar en cuenta hoy más que nunca los condicionantes políticos de la globalización y, más aún, debe impulsar una estrategia internacional, subregional o regional de gobernabilidad a nivel global. Esto implica la concreción tanto de pactos a nivel inter-gubernamental y de carác-

3 Véase al respecto James Rosenau y Ernest Czempiel, 1993.

ter subregional como de acuerdos y acciones en el plano local.

Fue precusor al respecto el Informe para la Comisión Trilateral que formularan Crozier, Huntington y Watanuki en 1975. Para sus autores, la gobernabilidad sería la capacidad global de procesar conflictos; sin embargo, según una de las conclusiones del Informe, dicha capacidad se habría debilitado, pues la creciente complejización de las sociedades contemporáneas generó una disgregación de intereses y un exceso de demandas que el sistema político cada vez tiene menor capacidad de procesar.

Con todo, la gobernabilidad debe ser entendida como un proceso de construcción política entre los diferentes actores sociales y políticos de un sociedad determinada. Ello implica una serie de acciones vinculadas a la formación de la autoridad y el orden, lo que supone un conjunto de relaciones políticas. En términos más abstractos, la gobernabilidad está asociada a un conjunto de relaciones sociales que suponen poder, mando y autoridad.

Esto lleva a preguntarse una vez más por el fin de la política, considerada como unas relaciones de poder determinadas que implican un cierto orden. Desde otra perspectiva, considerar al orden como producto de la estratificación de clases implica preguntarse por la relación entre medios y fines políticos o, en otras palabras, por la ética en la política, la cual tiene un carácter prescriptivo que se define no por lo que es sino por lo que *debería ser*. El problema consiste en superar la noción y sobre todo la práctica, de una política del poder por el poder.

Si la política se refiere, en su mínima expresión, a la construcción del orden, la política democrática se refiere a la construcción de un orden institucional, plural, conflictivo y abierto. Institucional en el sentido de una cultura de solidaridad de procedimientos; plural en cuanto al reconocimiento de sujetos distintos; conflictivo porque acepta diversas relaciones sociales y distintas orientaciones de los actores; y abierto por la incertidumbre intrínseca del juego democrático y de la capacidad de la democracia de innovarse constantemente.

La gobernabilidad democrática como construcción política no es ajena entonces a la construcción de proyectos y/o pactos que viabilicen el desarrollo y legitimen su propio accionar. En el mejor sentido del concepto, la gobernabilidad supone una sostenibilidad creativa de la política y una alta capacidad de gestión. Desde un punto de vista más institucional, la gobernabilidad eficiente, coherente, eficaz y legítima, se vincula a la calidad de la gestión de gobierno. Por otra parte, la calidad de la cultura ins-

titucional está asociada a la ciudadanía y a las normas cívicas de la sociedad.

La gobernabilidad, entonces, se refiere a la calidad del desempeño gubernamental en el tiempo y se concretiza en la continuidad política. Ese desempeño, para que sea óptimo, implicaría un orden y una cultura institucional con seis características prescriptivas: a) *oportunidad*, es decir, capacidad de adoptar oportunamente decisiones frente a demandas que exigen respuestas gubernamentales; b) *efectividad de las decisiones adoptadas*, lo que implica que sean acatadas y percibidas como legítimas; c) *aceptación social* de las decisiones en congruencia con los intereses de los distintos grupos en juego; d) *eficiencia* de las decisiones en términos de sus efectos para modificar situaciones; e) *eficacia* de las decisiones, referida al uso de los mejores medios para obtener determinados fines en el marco de requerimientos culturales previstos, y f) *coherencia* de las decisiones[4].

Por otra parte, conviene diferenciar una gobernabilidad sistémica de otra progresiva. La gobernabilidad sistémica implica no funcionar debajo de ciertos umbrales críticos respecto de los temas centrales de la política y la economía en un momento determinado. La progresiva —que incluye a la sistémica— también implica plasmar objetivos de desarrollo socialmente incluyentes.

En una acepción más general, la gobernabilidad progresiva se refiere al incremento de la capacidad política de una sociedad para el logro de metas emancipadoras, de justicia y libertad. También supone mantener los umbrales mínimos de funcionamiento de la economía y la política. Asimismo, incluye necesariamente toda una capacidad de gestión en la acción de gobernar, es decir, una capacidad de incremento de la continuidad política mediante acciones eficientes, eficaces, oportunas y coherentes.

En América Latina la gobernabilidad supone antes que nada una construcción institucional sólida que funcione en términos de las actuales circunstancias históricas y culturales. Dicha construcción no sólo se refiere a un marco ordenador del funcionamiento de la política y la economía o a la construcción de una cultura institucional, sino sobre todo a una cultura de solidaridad en los procedimientos que permita cabalmente el logro de las metas señaladas. La cultura política latinoamericana no diferencia reglas institucionales de comportamientos individuales o colectivos. Así, el logro de una

4 Véase Angel Flisfisch, 1989.

cultura institucional es una tarea histórica de largo plazo, que se conjuga con un proceso real pleno de inconsistencias y ambigüedades. Consiguientemente resulta fundamental, tanto desde el punto de vista del análisis como de la acción, indagar la pertinencia histórica de determinandas concepciones y posibilidades de gobernabilidad en cada uno de los países de la región.

¿Cuál es entonces la problemática de la gobernabilidad en los países que vivieron la transición a la democracia, el ajuste económico y la reforma del Estado? La respuesta a esta pregunta precisa diferenciar, al menos hipotéticamente, varios momentos políticos.

En un primer momento, es posible distinguir una situación de crisis inflacionaria y alta conflictualidad social, como por ejemplo durante los gobiernos de Siles en Bolivia, de Alfonsín en Argentina y de Sanguinetti en Uruguay. El tema en esos países fue el de gobernar por emergencia con el fin de satisfacer ciertas necesidades muy postergadas de la sociedad y a la vez de respetar la institucionalidad democrática. Un caso límite fue el del Haití de Aristide.

En un segundo momento, en la mayoría de los países de la región se trató de lograr una gobernabilidad sistémica adecuada para frenar la inflación e impulsar políticas de ajuste económico. Aquí, el tipo de gestión política fue distinto y se gobernó por el método del *cinturón apretado*. Los resultados fueron altos costos sociales en todas partes aunque con saldos políticos diferentes. Probablemente el caso más crítico fue el del gobierno de Perez en Venezuela, donde los resultados de la gobernabilidad por motivos sociales y éticos fueron muy críticos. Desde un punto de vista societal, las políticas aplicadas debilitaron fuertemente los lazos sociales en Latinoamérica, particularmente en los sectores asalariados.

Frente a este tipo de situaciones, Adam Przeworsky planteó la necesidad de asumir una opción de *real politik*, de alianza de centro-derecha con motivaciones altamente eficientistas y tecnocráticas para lograr un saldo positivo de gobernabilidad. Da la impresión de que esta opción sólo fue posible en algunas situaciones especiales como la chilena, donde el colchón económico y las características socio-políticas del régimen lo permitieron.

Ciertamente, estas tendencias cobran distintos sentidos según las situaciones específicas. En el caso mexicano, por ejemplo, la gobernabilidad se vio amenazada por el reclamo democrático y ético por parte de la sociedad civil, como aquél asociado a las posibilidades de ampliación de un régimen de partido único,

por las demandas de movimientos étnicos y culturales y por la contracción económica del llamado *efecto tequila*. Con todo, en la mayoría de los casos, las políticas de ajuste y estabilización, como también los altos niveles de inflación, dejaron en la región un saldo negativo para la gobernabilidad democrática.

En estos momentos de apertura democrática e inflación y de ajuste socio-económico, no se generaron acciones de sostenibilidad de los recursos naturales; más bien el costo de la transición hacia la economía de mercado fue muy alto en términos ambientales. El caso chileno es un ejemplo paradigmático de crecimiento económico y deterioro de los recursos naturales.

Estamos empezando a vivir un tercer momento que plantea un nuevo tipo de gobernabilidad en relación a las salidas posibles del ajuste. La gobernabilidad al menos tendrá que enfrentar tres temas fundamentales: los límites de la política, la nueva situación estatal como resultado de los cambios en curso y el peso determinante de la opinión pública y de los medios de comunicación de masas.

Es preciso repensar, entonces, el tema de la gobernabilidad en América Latina a partir de la revisión mencionada de los procesos de modernización y la idea lineal de desarrollo. Hoy la gobernabilidad debe hacerse cargo tanto de las consecuencias modernizadoras sobre el lazo y la diferenciación social —con el objeto de reconstruir un tejido social y político a partir de prácticas institucionales vinculadas al desarrollo de una cultura democrática que permita reconocer e incluir a los distintos actores-, como de un nuevo tipo de desarrollo que sea sostenible económica y ambientalmente, asegurando la continuidad para las generaciones futuras, y más equitativamente distribuido.

Esto requiere del fortalecimiento de los diferentes actores políticos y sociales y de la extensión de una ciudadanía activa, tema que se tratará más adelante. Pero, sobre todo, de nuevos valores que funden una visión de un desarrollo sostenible, de largo plazo, y que revierta la otra, basada en un crecimiento espúreo que degrada tanto los recursos naturales como la naturaleza de relaciones sociales más justas y equitativas.

Los límites de la política

Una de las consecuencias principales de los procesos de modernización a escala global es el fuerte desfase entre los cambios que se dan en múltiples esferas de la economía, la cultura y la sociedad y las formas políticas

preexistentes, propias de una sociedad industrial que se agota. Tales cambios han producido un descrédito generalizado de la política y de los profesionales de la misma. Existen incluso algunos analistas que hablan del fin de la política.

Sin entrar en lógicas catastróficas, conviene reconocer los límites y comprender las formas específicas que asumen en la región. Sin embargo, es preciso postular antes que las soluciones en este plano en definitiva están asociadas a la recreación de la sociedad y a su capacidad de reinvención política para poder enfrentar los problemas derivados de la modernización, especialmente aquellos vinculados a las relaciones entre comunidad y mercado y, muy especialmente, los asociados a la diferenciación social creciente.

En esta línea, da la impresión de que en la región uno de los temas más importantes es el del sistema político, en cuanto al sistema de toma de decisiones políticas, sobre todo el de los partidos políticos. En tal sentido, merecen especial atención el nuevo rol de los partidos políticos y la calidad de los sistemas de representación.

Pareciera que en los partidos predominan tres tipos de orientaciones: a) a la reestructuración del clientelismo-burocrático y del patrimonialismo estatal; b) al desplazamiento de las decisiones del liderazgo político tradicional a la tecno-burocracia, y c) al reforzamiento del liderazgo presidencial y por tanto del ejecutivo.

En relación al sistema de representación política de lo socio-cultural, el hecho más contundente es la presencia de una suerte de inconsistencia entre procesos de complejización, diferenciación social y pluralización cultural de las sociedades latinoamericanas, por un lado, y la incapacidad del sistema de partidos de representar tales fenómenos, por el otro. El resultado es una crisis de credibilidad creciente de los partidos y, como contrapartida, una instrumentalización política acelerada de éstos para *controlar o seducir* a la sociedad. En el corazón de estos dinamismos está el nuevo rol del Estado y de los medios de comunicación de masas y especialmente de la televisión.

Sin embargo, sigue siendo el campo político el ámbito de representación con capacidad decisoria. En tal sentido, el problema consiste en cómo ampliar la representación, tanto política como social y cultural, para regenerar el tejido social desde una óptica basada en valores que permita la "discusión" sobre el desarrollo sostenible y las chances de construir una sociedad más equitativa.

La nueva situación estatal

La región ha sufrido una serie de cambios tanto en el aparato estatal como en las relaciones entre Estado, sociedad y economía. Tales cambios no sólo se deben a políticas inducidas por parte de actores internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino muy especialmente a límites duros impuestos por la incapacidad de reproducción del patrón patrimonialista-corporativo del Estado latinoamericano.

Efectivamente, ni en el plano de sus relaciones internas ni en el de sus relaciones externas, este tipo de Estado tenía chances de reproducirse. Fenómenos como la crisis de la deuda externa, el deterioro del déficit fiscal, la incapacidad creciente de resolver las demandas de la población —especialmente de los sectores más excluidos-, los límites de las empresas estatales para competir en el mercado y la creciente ineficacia burocrática, ejemplifican los límites duros del Estado en la región. Además estaban presentes en el escenario internacional fenómenos más decisivos como la reestructuración de la economía mundial y la crisis generalizada del Estado de bienestar en el mundo industrializado.

Las políticas de transformación del aparato estatal se han focalizado en: a) la modernización de las empresas estatales vía capitalización, privatización y/o renovación y descentralización; b) la reestructuración de servicios sociales del Estado, especialmente con la creación de los Fondos de Pensiones, la focalización de la políticas sociales y el *targeting*; c) la descentralización tanto a nivel local como regional, y d) la modernización del ejecutivo y de las oficinas de las presidencias y otros poderes del Estado.

Ciertamente, estos cambios introducen factores de resistencia que indujeron en el corto plazo a la ingobernabilidad porque además de modificar estructuras de poder afectan a vastos sectores de la población. Los resultados todavía no son definitivos, ni siquiera se pueden fijar rumbos históricos claros. Todo parece indicar que lo que se viene produciendo es la constitución de nuevos campos de conflicto y que su evolución dependerá de cada caso nacional concreto y de las fuerzas en juego. Así, estas reformas pueden tomar un sentido progresivo si producen finalmente integración social y democratización o un sentido regresivo si aumentan las inequidades sociales.

En todo caso, dada la inercia de la cultura política en la región, es muy probable que

emerjan formas estatales híbridas donde, por una parte, se renueven arcanos mecanismos clientelares y, por otra, se modernice el aparato estatal por lo menos en algunas esferas. Sin embargo, en los marcos de funcionamiento de la sociedad y la economía regional parece más pertinente que nunca un Estado social, al menos en términos de buscar mayor integración y participación social, así como de regular el funcionamiento de la economía.

La transición estatal implica entonces el paso de un Estado que dirigía la economía a otro socialmente activo que la regule y busque una inserción nacional en la globalización. Por ejemplo, ¿es posible en Bolivia un Estado, o aparatos estatales como el Banco Central, que regule al capital financiero altamente internacionalizado? O, ¿es posible una regulación que limite el desplazamiento de capitales golondrinas causantes, en México y Argentina, de espejismos de inversión y de atroces estampidas financieras? ¿Podrá el nuevo Estado frenar movimientos especulativos de la banca en función de la producción? Por otra parte, ¿podrá el Estado jugar un rol importante en la educación, en la ciencia y la tecnología, que incida en el posicionamiento de las economías latinoamericanas en la nueva división internacional del trabajo? Y ¿cuál será el rol de este nuevo Estado frente al problema creciente de la pobreza y la exclusión social? ¿Qué políticas y qué mecanismos de integración generará para resolverlos o paliarlos? Además, ¿cuál será su papel en cuanto al impulso de un desarrollo sostenible y de una distribución más equitativa?

Todas estas preguntas apuntan al fortalecimiento de las relaciones del Estado con la sociedad y la economía en función de las chances de actuación del Estado, tanto en el plano externo como en el interno. Debe quedar claro que no existe en la historia reciente del mundo moderno ninguna experiencia económica exitosa sin un Estado fuerte. Nuestra hipótesis es que ese Estado será fuerte si la sociedad también lo es. En un enfoque de gobernabilidad progresiva, tanto el Estado como el mercado están regulados por lo público. Así, los mercados deberían no sólo asegurar una mayor eficiencia, sino también la equidad, y aquí el papel regulador del Estado es central, como también lo es la capacidad de control del público. La participación de las distintas organizaciones (consumidores, productores, organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales, etc.) debería asegurar la eficiencia y una mayor equidad en relación con el acceso a los mercados e incluso de los organismos estatales.

En cuanto al rol regulador del Estado frente a los mercados, y de acuerdo a los procesos de reestructuración que estamos viviendo, creemos que éste debería ocuparse, entre otros aspectos, de garantizar un acceso más equitativo a través de inversión en educación, de políticas distributivas más justas, de brindar créditos a los pobres, de garantizar acceso a la información a todos para su participación en los mercados, de inversión en infraestructura que permita la llegada a los mismos.

Más ligado al desarrollo sostenible y al cuidado del ambiente, el Estado debería asegurar a todos el consumo básico, brindar las posibilidades de utilizar tecnologías que aseguren la sostenibilidad ambiental a toda la población (ricos y pobres), aplicar políticas fiscales orientadas a alentar el consumo que no daña el ambiente y a desalentar el que lo daña, priorizar una gestión educativa que ponga énfasis en elevar la conciencia ambientalista y brinde información a la población en cuanto a este tema, establecer acuerdos internacionales tendientes a disminuir los efectos del consumo dañino a nivel global. Finalmente, el Estado, a partir de una visión que vincule los problemas ambientalista, de la pobreza y de un consumo espúreo, debería establecer alianzas con los grupos locales involucrados en la defensa del ambiente y con otros actores de la sociedad civil y el sector privado para lograr consensos amplios en torno al logro de un desarrollo sostenible[5].

Todo esto implica una renovación y recuperación de la política en el centro de la escena, pues sólo a través de ella será posible establecer consensos en relación con todos estos temas.

Los medios

Respecto del papel de los medios y de la opinión pública se debe señalar que una de las consecuencias de la modernización tecnológica, de la complejización socio-cultural y de la instrumentalización e internacionalización de la política es un mayor desplazamiento del poder político hacia los medios de comunicación social.

Su peso en la conformación de la opinión pública y sus orientaciones políticas es cada vez más determinante. En alguna medida, el espacio público de la televisión y otros medios de información tiende a reemplazar el papel mediador de los partidos y el parlamento.

5 Cf. PNUD, 1998a:9-13.

La hiper-aceleración del tiempo político pasa a ser un dato en la construcción virtual de la realidad política. El inmediatismo de los actos de gobierno o de la oposición es sólo un ejemplo clave. Para tener influencia política en la gente resulta indispensable el uso de los medios, pues ellos son los puentes fundamentales de comunicación, influencia y persuación de la gente. La misma gobernabilidad depende cada vez más del manejo de los medios y del impacto que éstos puedan tener ante la opinión pública. Además, la influencia y los cambios de la opinión pública están cada vez más regulados por las encuestas, los grupos focales y los análisis de imagen. Probablemente los publicistas y los comunicadores son los agentes del nuevo campo político en el mundo y en la región.

Dominique Wolton (1995) ha descubierto que la importancia de las encuestas tiene relación directa con la publicidad que le dan los medios y con la elaboración misma de la publicidad. No importa tanto el valor que le dan los electores sino el otorgado por las elites mediático-políticas. El principal peligro de esta política virtual es que resta intercambio comunicativo y soberanía a los ciudadanos. El periodismo no es el supremo tribunal público, aunque, lamentablemente, en muchos casos se torna en una de las pocas vías de expresión, fragmentada y dispersa, de muchas cuestiones que no se canalizan a través de otros mecanismos.

Ahora bien, el impacto de los medios es diferente en el caso de sociedades institucionalmente desarrolladas que en el de sociedades con grandes debilidades institucionales como las latinoamericanas. La televisión no puede sustituir instituciones e incluso puede llegar a ser negativa para la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, los medios tienen la potencialidad de ser usados por intereses diversos. Así, una política de gobernabilidad progresiva, si quiere estar presente en el escenario moderno, deberá plantear sus objetivos y realizar sus prácticas dándole un sentido interactivo y comunicativo al uso de los medios. La campaña contra el hambre impulsada por el sociólogo Betinho en el Brasil es un excelente ejemplo de una alianza mediática entre publicistas, intelectuales y organismos no gubernamentales. También, como apunta Castells (1997), el éxito de muchos movimientos ecologistas está íntimamente vinculado al manejo que éstos han logrado hacer de los medios, o la importancia que los medios le han dado a la crisis del ecosistema global.

La nueva situación del sistema político, las tentativas de modernización del Estado y el

peso creciente de la opinión pública vía medios —si bien son los nuevos datos sobre los cuales se construyen estrategias de acción política— están condicionados por la calidad del diseño estratégico de gobierno, tanto de los oficialismos como de las oposiciones. Es solamente en esta nueva gramática del conflicto que se puede construir la expansión democrática de la región, expansión que necesita obligatoriamente de una lógica dual, pues para ser democráticos al menos se necesitan dos. En el corazón de tales movimientos anida la cuestión de la renovación ciudadana.

Para sintetizar, las relaciones entre política y gobernabilidad en la región se ven complejizadas por la necesidad de replantearse un nuevo tipo de política, lo que incluye renovados mecanismos de representación para construir un orden institucional democrático expansivo, en los marcos de la actual reestructuración del aparato estatal, el cual debería tener un fuerte componente social, tanto para acoger las demandas de los distintos actores cuanto para hacerse cargo de los problemas de exclusión e inequidad social. En este marco, si bien los medios masivos de comunicación constituyen mecanismos de publicidad de problemas sociales, es preciso que no reemplacen el papel de la política, ya que no son vías de representación de los actores, aunque puedan darles un espacio.

En este contexto, el tema de la ciudadanía aparece como central, pues vincula las chances de cambios en la representación política y social con los problemas de diferenciación creciente, producto de los procesos de modernización. La participación ciudadana en la determinación de un nuevo tipo de desarrollo parece central; y su ampliación constituye un desafío tanto para el Estado como para la política.

2. Hacia la búsqueda de una ciudadanía activa

Una de las consecuencias de la crisis económica y del Estado patrimonialista-corporativo ha sido la necesidad de transformar la relación política entre el Estado y la sociedad. En el período nacional-popular, el sistema político no representaba la diversidad socio-cultural de la sociedades latinoamericanas, sino más bien integraba a la comunidad nacional, vía la participación, como una unidad política homogénea. Por el contrario, los regímenes autoritarios pretendieron limitar, cuando no eliminar, la participación popular y plasmar un juego económico en función de un mercado liberado

de presiones sociales. No obstante, en el plano político el Estado autoritario mantuvo mecanismos clientelares con algunos segmentos de la sociedad civil.

Cuando se inició el proceso de democratización la cuestión se planteó en torno a la capacidad de la propia sociedad y de sus partidos políticos de transformar los mecanismos de participación propios de los regímenes nacional-populares en un sistema de representación de las demandas sociales, entre las que figuraban, entre otras, un reclamo por el derecho a la diferencia y a la valoración de la diversidad.

En este contexto, la cuestión ciudadana ya no sólo se refiere a la satisfacción de una larga cadena de demandas de ciudadanía social, o a la satisfacción de demandas de participación política de la sociedad civil diferenciada, sino sobre todo al logro de un sistema institucional que valorice y acepte las pluralidades constitutivas de la dinámica social e incluso tenga capacidad de procesar los cambios provenientes de los ámbitos socio-culturales y ecológicos en el mundo moderno. Se trata de avanzar en una lógica y en una cultura institucional, tanto en el plano de un conjunto de reglas y procedimientos consensuados como de una serie de valores sólidos universalistas referidos a la igualdad y a la libertad de los ciudadanos. Ello además evoca la constitución de un espacio público de una fuerte corresponsabilidad social, tanto respecto de los excluidos y los pobres de hoy día como respecto de las nuevas generaciones del mañana. De manera tal que el ámbito ciudadano se constituye en un ámbito temporal dinámico. De este modo, quedan vinculados el tema de la ciudadanía con el del desarrollo sostenible.

A continuación se pretende analizar estos nuevos desafíos democráticos estudiando, por una parte, qué efectos han tenido los procesos de internacionalización sobre la ciudadanía y, por otra, los nuevos campos de renovación ciudadana. Finalmente, se auscultará la posibilidad de una articulación fecunda entre ciudadanía, procesos de modernización y desarrollo sostenible.

Internacionalización y ciudadanía

La noción de ciudadanía, en su visión más clásica, tiene dos acepciones. Una, de carácter liberal, basada en el supuesto de que la organización política funda la condición jurídica; en esta perspectiva, el individuo, que es externo al Estado, contribuye con prestaciones a cambio de servicios. La otra, de carácter social, ve a la ciudadanía como una pertenencia comunitaria

o social a través de la cual el individuo se va autodesarrollando y autodeterminando. En este caso, el individuo es miembro de una colectividad política y recrea esta identidad en el marco de las instituciones políticas reconocidas.

La ciudadanía, en palabras de Darendorf (1992), está vinculada a la vez con una institución, un objetivo moral, una opción de vida y un valor ético, además de un cierto estilo de desarrollo. Sin embargo, esta noción se vio últimamente relativizada y complejizada por una serie de fenómenos ligados a la internacionalización de la economía, la política y la cultura que obligan a repensar esta concepción de ciudadanía. Entre estos fenómenos, encontramos la tendencia a la reformulación de la noción de ciudadanía como producto de la expansión y redescubrimiento de las identidades culturales, en el sentido de que la asunción generalizada de la multiplicidad cultural tendería a aumentar la conflictualidad social. Aún más, pareciera que los conflictos centrales en la sociedad moderna están vinculados a las relaciones interculturales y a la sociabilidad y cotidianidad de nuestras sociedades[6].

Por otra parte, uno de los temas cruciales de la redefinición ciudadana está vinculado a la combinación de un núcleo duro de inteligencia y su expansión socialmente integrativa. Aquí, la llamada *ciudadanía activa* es considerada como construcción comunicativa entre actores y sujetos sociales mediante una socialización del conocimiento entre los distintos miembros de una sociedad. Es decir, la noción de *ciudadanía activa* se combina con el manejo de los códigos de la modernidad.

Dichos códigos se refieren al conjunto de conocimientos y destrezas abstractos necesarios para participar en la vida pública y desenvolverse productivamente en la sociedad moderna. Estas capacidades suelen definirse como las requeridas para el manejo de las operaciones aritméticas básicas, la lectura y comprensión de un texto escrito, la comunicación, descripción y análisis crítico del entorno, la recepción e interpretación de los mensajes recibidos de los medios y la participación y diseño de trabajos en grupo. En este marco, resulta fundamental que los ciudadanos latinoamericanos, para

6 Por ejemplo, en el *Informe sobre desarrollo humano 1994* del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se señala que entre 1990 y 1994 sólo el 30% de los conflictos se dio entre países, mientras el 70% se produjo al interior de los países, siendo éstos predominantemente de tipo intercultural, sobre todo étnicos y religiosos.

ser tales, reivindiquen el manejo de los códigos de la modernidad[7].

Finalmente, la globalización de la cultura mediante la industria y el mercado culturales redefine las construcciones ciudadanas nacionales. Así, la reorganización de los escenarios culturales y los cruces interculturales plantea la cuestión del orden simbólico entre los diversos grupos. La desterritorialización de identidades culturales y la reinserción en otros planos constituyen situaciones-problemas muy importantes, y de allí que éste sea un tema muy concreto tratado en las diferentes Comisiones europeas y norteamericanas que discuten el estatus ciudadano de los migrantes. En realidad lo que está en el tapete es la redefinición de la soberanía nacional y su vinculación con la ciudadanía.

Este conjunto de tendencias permite pensar, con límites, la noción de ciudadanía en términos culturales. Una hipótesis en este sentido afirma que las identidades culturales se hacen más presentes en la medida que pueden expresarse o multiplicarse en la misma sociedad. Es posible que tales identidades culturales se expongan cada vez más a múltiples influencias y experiencias como producto de los procesos de modernización y globalización en curso.

En este ámbito, se plantea la pregunta acerca de las capacidades de nuestras sociedades y regímenes democráticos de asimilación y de respuesta a estas nuevas dinámicas de la internacionalización. Las salidas son múltiples, pero ellas pasan por trabajar críticamente la tensión entre las tradiciones culturales y la racionalidad instrumental y, especialmente, entre estas identidades culturales y la democracia política.

Los actuales tiempos modernos se caracterizan además por la innovación constante de las condiciones culturales; de ahí que el ciudadano se halla más en medio de un laberinto que frente al progreso. La ciudadanía moderna y activa precisamente consiste no sólo en la capacidad de adaptarse a esos cambios, sino en tratar de incidir en ellos y así renovarse constantemente. En tal sentido, parece central fortalecer el capital social y cultural de las sociedades y de los individuos en base a:

– el reprocesamiento constante de identidades culturales;
– la ampliación y el mejoramiento permanentes del manejo de los códigos de modernidad;

7 Cf. CEPAL-UNESCO, 1993, y también Fernando Calderón, Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone, 1996.

– la institucionalización de estos cambios, es decir, la capacidad de consolidar institucionalmente el imaginario de la sociedad.

Todo esto implica crear condiciones para que la sociedad se reinvente a sí misma desde su propia cotidianidad.

Al respecto, hoy parece fundamental un *aggiornamiento* ciudadano respecto de algunos temas que se tratarán seguidamente.

La renovación ciudadana

En primer lugar, como ya se señaló, se observa en casi todas partes del mundo occidental una cierta crisis política de las llamadas democracias representativas.

El problema, en nuestro caso particular, es que además los procesos de consolidación de la democracia son aún muy limitados y antes que volverse regímenes representativos se estarían constituyendo en democracias censitarias. Así, buena parte de América Latina viviría una suerte de doble transición. En el corazón de estos problemas estarían la pervivencia de una cultura política organicista-autoritaria y, sobre todo, la debilidad de las instituciones y la capacidad política limitada del sistema de actores.

Con más fuerza, Lechner (1993) se refiere a la creciente debilidad de lo político en cuanto a su capacidad de representar lo social. No sólo los ciudadanos ven debilitados los lazos de pertenencia a la comunidad, sino que además se sentirían cada vez más ajenos a la comunidad política. En este ámbito, invocar el pluralismo supone la existencia de un campo público de interacción política que hoy no existe o está, por el momento, debilitado. La ausencia de un campo real de interacción política es consecuencia, entre otros factores, de una fragmentación o anomalía política creciente; consiguientemente, se expande la brecha entre identidad cultural e identidad ciudadana. En el caso de Chile, Lechner destaca la desafección ciudadana como resultado de una privatización económica, donde los asuntos públicos pasan a ser asuntos particulares que se alejan de la construcción de compromisos colectivos. En el caso de Bolivia, la ausencia o la debilidad de espacios institucionales interactivos conduce a la *política en las calles*, es decir, al conflicto directo, pues no bastan reformas lúcidas si no están acompañadas por la construcción de espacios públicos de negociación, o, como decíamos, de actores con capacidad autónoma para llegar a acuerdos institucionalizados.

En segundo lugar, resulta fundamental en términos de ciudadanía retrabajar la cuestión de la exclusión social y la pobreza. En una región donde los procesos de diferenciación social y exclusión son complejos y persistentes, la pobreza es una condición pre-ciudadana. Parece que vivimos una suerte de paradoja perversa pues, por una parte, se opera un proceso de democratización y, por otra, como consecuencia de la inflación, de los ajustes y de las reformas estructurales, se produce una gran exclusión social. Las ideas de exclusión social y pobreza necesitan abolir la figura del necesitado al cual hay que darle ayuda para, al contrario, investirlo de derechos y dotarlo de capacidad de participación política. Por otra parte, el tema de la pobreza está estrechamente vinculado al de la necesidad de reformular el paradigma del progreso. Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la pobreza limita las chances de un progreso futuro e incluso presente. La relación entre pobreza y daño ambiental, como ya se mencionó, constituye un ejemplo perverso que evidencia los obstáculos a una sociedad global más justa y equitativa.

En tercer lugar, está el tema de la eco-política. Para empezar es muy importante —como se analizará detalladamente más adelante— reconocer la existencia de una cierta ruptura entre los procesos nacionales y la dinámica de la globalización gracias a los problemas ecológicos y la emergencia de aquello que Morin (1993) llama eco-política. Para este autor los patrones de identificación de una comunidad nacional, generalmente mirados desde la noción de madre-patria-república o nación, estarían mutando por la degradación ambiental hacia una comunidad global. Así, las formas tradicionales de apropiación de la naturaleza estarían agotadas y el deterioro marcaría la necesidad de un nuevo tipo de ciudadanía de carácter universal transcultural representado por la tríada madre-tierra-patria. El autor apela entonces a una ciudadanía universal, basada en valores globalmente compartidos gracias a la conciencia y preocupación por el deterioro ambiental, como defensa ante la destrucción planetaria, donde una especie de sincretismo intercultural estaría precondicionando la construcción de dicha ciudadanía.

Quizás, en nuestro caso, tal ciudadanía estaría vinculada a una degradación asociada tanto a la imitación de modelos de consumo de las sociedades avanzadas como a las consecuencias de la exclusión social. Los actuales patrones de consumo han favorecido tanto la inequidad social como el daño al ambiente. Según el *Informe sobre desarrollo humano 1998*

del PNUD, "a escala mundial, el 20% de los habitantes de los países de mayor ingreso hacen el 86% del total de los gastos en consumo privado, y el 20% más pobre, un minúsculo 1,3%"[8]. Por otra parte, la relación entre expansión del consumo y ambiente es negativa pues ésta se ha basado en el daño a los ecosistemas, por contaminación y acumulación de desechos, y en la degradación sobre todo de los recursos naturales renovables que son, a diferencia de lo que se pensaba hasta no hace mucho, los que requieren una atención más urgente.

La complejidad de estos problemas vuelve pertinente el concepto de *pensamiento ecologizado* de Morin, el cual invita a reflexionar, partiendo de la necesidad de que el sujeto se piense como parte del medio y no como externo a él (y de ahí que la ecología sea la vía prioritaria para este pensamiento), acerca de las chances de una ciudadanía internacionalizada desde nuestros propios contexto y patrimonio cultural, pues si bien la actual crisis ecológica afecta a nivel global, se traduce localmente en problemas concretos. En este sentido, y desde el punto de vista de posibles y diversas soluciones, el comunitarismo andino, por ejemplo, y su experiencia sobre el control de los pisos ecológicos y los mecanismos de reciprocidad, puede no sólo confluir con el *pensamiento ecologizado* sino también contribuir a la definición de una ciudadanía más universal, pues si bien el sujeto se constuiría hoy a partir de la comprensión de esto problemas globales que afectan a la humanidad, ésta ya no se comprende desde una noción abstracta sino desde lo concreto que es la cotidianidad degradada.

Finalmente, está el tema de lo individual en la cultura ciudadana en América Latina. Creemos que es fundamental repensarlo en un contexto institucional que busque revalorizar al individuo como construcción socio-cultural.

Este constituye un tema central cuando se degrada la representación política de lo social, tal como parece estar ocurriendo en el presente. En este contexto, el ciudadano pasa a ser un súbdito o un cliente de una clase política estancada y deja de tener interés en lo político, en aquello que es vital para la repre-

8 PNUD 1998a:2. El Informe seguidamente agrega: "Más concretamente, la quinta parte más rica de la población mundial: consume el 45% de toda la carne y el pescado, y la quinta parte más pobr, el 5%; consume el 58% del total de la energía, y la quinta parte más pobre, menos del 4%; tiene el 74% de todas las líneas telefónicas, y la quinta parte más pobre, el 1,5%; consume el 84% de todo el papel, y la quinta parte más pobre, el 1,1%; posee el 87% de la flota mundial de vehículos, y la quinta parte más pobre, menos del 1%".

sentación y que Claude Lefort (1992) denominó *pertenencia democrática*, es decir, estar involucrado en el juego político del poder. La política pasa a ser una actividad atrincherada en el monopolio de una corporación política partidaria donde ya no hay diversidad social a ser representada[9].

En tal dinámica, el ciudadano viviría la política como algo ajeno a él, dejando de participar en la *cosa pública* y sólo interesándose por consumir o replegarse en una comunidad pequeña o *tribu* en medio de una sociedad cada vez más transformada por los efectos de la tecnología. Castells (1995) coloca precisamente aquí las tensiones actuales de las sociedades contemporáneas, tensiones entre el ciudadano y el nuevo poder tecnológico, entre la red de información y el yo.

Al respecto, un tema de singular importancia es el de la igualdad de oportunidades. En teoría, la igualdad de oportunidades es la condición básica para el desarrollo del individuo-ciudadano; sólo después se puede ser un ente privado. Es decir, habrá ciudadanía sólo en la medida en que las instituciones puedan garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos sociales, pues sólo si hay derechos hay ciudadanos.

Entonces conviene relativizar los argumentos culturalistas respecto de la construcción individual del ciudadano. Toda construcción identitaria, por muy importante que sea el movimiento, tendría que ser, además de incluyente, abierta en el sentido de abolir la tutela de la diferencia como atributo absoluto de cualquier cultura de comunidad.

Aquí también el tema es complicado para los latinoamericanos, pues históricamente nuestros liberalismos han sido muy débiles y las construcciones individuales reales casi inexistentes en la mayoría de los casos, y sólo válidas para los sectores medios. Además, recordemos la dramática historia de lo que Angel Flisflisch denominó *ciudadanías avasalladas*. Pareciera que la construcción social y cultural del individuo en América Latina es una tarea pendiente que abre nuevos surcos para cualquier proyecto emancipatorio.

La ciudadanía como construcción de la igualdad y de la libertad

¿Cómo, pues, vincular la diversidad cultural que expresan las nuevas sociabilidades en la región con la política? O, expresado de otro

9 Al respecto, puede verse también Paulo Flores de Arcais, 1996.

modo, ¿es posible una articulación entre la diversidad cultural emergente y la ciudadanía en los actuales procesos de modernización?

El tema es complejo porque se trata del reconocimiento universal de la ciudadanía, lo que implica la institucionalización de valores referidos a la igualdad de oportunidades y a los derechos de expresión de las diferentes culturas. En este marco, únicamente la asunción colectiva de valores ciudadanos permitirá la expansión de identidades individuales y colectivas particulares. Esto conlleva a la aceptación del multiculturalismo y del otro diferente, lo que sólo puede darse en democracia.

La cuestión es que ya no sólo se trataría de consolidar una ciudadanía política y ampliar la ciudadanía social, sino de constituir una serie de nuevos derechos ciudadanos (de género, ecológicos, de consumo, de información, de migración) derivados de los actuales procesos de modernización.

Sin embargo, estos nuevos problemas no evolucionarán de manera espontánea. Resulta fundamental una visión normativa renovada que, a la vez de constituir un objetivo moral y una opción de vida cotidiana en el marco de un desarrollo sostenible centrado en la igualación de las capacidades humanas, construya una lógica integrada de la ciudadanía. En tal visión, la cuestión de la innovación institucional y el desarrollo de una cultura democrática constituyen herramientas claves. Y aquí pueden ser de especial utilidad los conceptos de *igualdad compleja* (Walzer, 1993) y de *libertad real* (Sen, 1995).

La idea de *igualdad compleja* supone la igualdad entre los miembros de una comunidad política por su participación en todas las esferas de la justicia, lo que requiere no sólo que el Estado contribuya en la distribución de los bienes, sino que los ciudadanos y los distintos actores tengan voz en el reparto de esos bienes. Es decir, la *igualdad compleja* no niega ni las distancias ni las diferencias sociales en sociedades crecientemente complejas, tan sólo coloca el énfasis en la democratización del sistema de toma de decisiones.

Por su parte, la noción de *libertad real* está vinculada a una idea de desarrollo considerado como un proceso que enriquece la libertad real de los involucrados en la búsqueda de sus propios valores y cuya característica central es la expansión de la capacidad humana. La capacidad sería un concepto libertario, pues se refiere a la igualación de capacidades para que las personas puedan decidir la clase de vida que aspiran llevar.

Bobbio (1997), por su parte, establece un vínculo entre igualdad y libertad —funda-

mento de la posibilidad de diferenciación entre los seres humanos— en el que se basaría la idea de justicia, la que dejaría de ser un patrón abstracto, pues ya no se referiría sólo a la *igualdad* sino a la *igualdad de oportunidades de ejercer la libertad*. No se trataría de que las personas sean iguales, sino de que tengan el mismo derecho a ejercer su libertad. En este vínculo —que debe asumir una forma institucionalizada, la cual sólo sería posible dentro del régimen democrático— radicaría la chance de construir una ciudadanía que respete a los otros, es decir, una ciudadanía pluralista y multicultural.

Existen, empero, obstáculos al desarrollo de una propuesta como la presente de ampliación ciudadana. Entre ellos, la concentración de la toma de decisiones en grupos tecnocráticos, producto de los propios procesos de modernización; los altos índices de exclusión social y pobreza que se vinculan a un deterioro del tejido social; la existencia de identidades cerradas intolerantes con los otros distintos; el propio dinamismo del mercado que, basado en una lógica del consumo y en el deterioro ambiental, profundiza las inequidades sociales existentes.

En América Latina los valores de jerarquía y de igualdad de oportunidades han sido siempre problemáticos e inestables. La igualdad ha estado asociada con la lucha por la ciudadanía, casi siempre avasallada, y las jerarquías son el resultado tanto de adscripciones del pasado como de una capacidad de movilidad social frecuentemente de tipo informal.

Finalmente, desearíamos insistir en la tensión entre individuo y multiculturalismo. La tesis es que estos dos elementos de la relación no son potencialmente excluyentes, por lo menos en América Latina, y que más bien se pueden retroalimentar mutuamente. En primer lugar, parece necesario fortalecer la capacidad de acción autónoma de los actores colectivos e individuales así como los tejidos interculturales que los contienen. En segundo lugar, esto será posible si la comunicación entre diversas comunidades se expande y al hacerlo quizá se potencie la capacidad de acción individual. Hoy en día en nuestras sociedades modernas —cada vez más expuestas al bombardeo de los medios, y que, por lo demás, no son tan xenofobas y heterogéneas como otras sociedades del mundo— es posible establecer compromisos razonables de expansión ciudadana.

América Latina es un continente de equilibrio y de términos medios, en el cual el mismo tejido intercultural, si quiere potenciarse hacia el desarrollo y la democracia, necesita avanzar

zigzagueando entre la construcción de las identidades culturales y la imprescindible construcción del individuo, asumiendo, por último, que dicha tensión es irresoluble.

Como se ha sostenido en este capítulo, el tema de la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía está estrechamente vinculado a las consecuencias diferenciadoras, social y culturalmente, de los procesos de modernización. La creciente diferenciación y fragmentación ha contribuido también a poner en duda aquélla noción de progreso posible para todos. Hoy se requieren nuevos valores universales que fundamenten una idea de desarrollo basado no en un crecimiento económico espúreo, que destruye los recursos naturales, es inequitativo y no puede mantenerse en el futuro, sino en una competitividad que asegure el desarrollo no sólo a las actuales generaciones sino también a las venideras. Uno de esos valores universales, y que cuestiona los efectos instrumentales de los procesos modernizadores, es la *conciencia ecologizada* propuesta por Morin, porque si bien el problema del daño ambiental es global, sus efectos los viven poblaciones particularizadas localmente, en especial los más pobres. Y en tal sentido, estos problemas quedan vinculados a los de la extensión y construcción de una nueva ciudadanía.

3. Modernización y ecología

La crisis del ecosistema global y el problema de la sostenibilidad

La crisis ecológica actual puede considerarse efecto de la degradación creciente del ambiente como consecuencia del proceso de industrialización acelerada, producido a partir de la revolución industrial, y del crecimiento poblacional que ésta trajo consigo. Tal crisis evidencia tanto la imposibilidad física de continuar con el modelo de desarrollo que ha imperado hasta el presente como el nacimiento de una nueva conciencia y el inicio de acciones en relación a la conservación del equilibrio natural amenazado. Estaríamos, entonces, en presencia del surgimiento de una *conciencia globalizada*, ya que el problema ecológico afecta a todo el planeta y no puede ser resuelto parcialmente; no se trata de la sumatoria de problemas particulares, pues el ecosistema global constituye un sistema en el cual al afectarse un elemento se producen cambios en el conjunto.

En el campo político, los grupos ecologistas han aparecido durante los años 70 en las ciudades más industrializadas y tecnologizadas, lo que fundamenta más aún la oposición entre naturaleza y procesos de modernización

e industrialización, entre naturaleza e idea de progreso, tal como fuera planteada. Ha sido en estos ámbitos más modernizados y con un mayor nivel de desarrollo —medido en términos de progreso económico-social— donde más se ha sentido la necesidad de revisar ese progreso basado en la destrucción del ecosistema global[10]. Más recientemente, en los países en desarrollo también se ha venido produciendo un debate en torno al tema y a cómo revertir el vínculo perverso entre pobreza y degradación ambiental, sobre el que volveremos enseguida. Ejemplos de esta preocupación en los países en desarrollo son la Conferencia de Río de 1992 y la Agenda 21, donde se plantean los problemas ambientales centrales y se ofrecen alternativas de solución y sugerencias de gestión a los gobiernos, además de rescatarse el papel que deben cumplir los distintos sectores de la población a través del fortalecimiento de su participación y se vincula la crisis del ecosistema global a las inequidades de un mundo en el que coexisten altos niveles de pobreza con patrones elevados de consumo que basado en la depradación del ambiente para reproducirse.

De acuerdo con Castells (1997:147), los movimientos ecologistas surgen coincidentemente con la generación de una nueva estructura social, caracterizada por "la ciencia y la tecnología como medios y objetivos básicos de la economía y la sociedad; la transformación del espacio y del tiempo; y la dominación de la identidad cultural por los flujos globales y abstractos de riqueza, poder e información, que construyen la virtualidad real mediante las redes de medios de comunicación". En tal sentido, de estos movimientos, los más exitosos han sido los que pudieron establecer un vínculo fructífero con los medios y los que vincularon los problemas locales ambientales con la ampliación de la participación ciudadana en el mismo nivel micro.

Para el sociólogo francés Edgar Morin, la concientización ecológica tendría tres características: a) reintegrar el ambiente a una conciencia social y humana, b) orientar la visión de

10 "Todo retorno a la naturaleza había sido percibido en la historia occidental moderna como irracional, utópico, en contradicción con las evoluciones 'progresivas'. De hecho, la aspiración a la naturaleza no remite solamente al mito de un pasado natural perdido; remite también a los seres que se sienten oprimidos en un mundo artificial y abstracto. La reivindicación de la naturaleza es una de las reivindicaciones más personales y más profundas que nace y se desarrolla en los medios urbanos más industrializados, tecnologizados, burocratizados, cronometrados". (Edgar Morin, 1990:180. Traducción de los autores.)

la naturaleza como ecosistema, y c) conformar una conciencia planetaria. Esto sería posible por las propias características del ecosistema: se trata de un sistema global basado en la interrelación, conflictiva pero también solidaria e interdependiente, entre los seres vivos. Se trataría de la configuración de una nueva identidad basada en la dimensión biológica, cuyo principal elemento de integración es la naturaleza, lo que no implica el rechazo de identidades culturales específicas, y allí es donde radicaría también el éxito de estos movimientos: en su capacidad de vincular lo particular con lo universal desde una perspectiva no instrumental, opuesta, en este sentido, a los puros procesos de la modernización. Este punto de vista cuestiona el acercamiento que los seres humanos han tenido hacia la naturaleza, fundado en una apropiación tecnológica que ha posibilitado dominarla al costo de destruirla. Se cuestiona, entonces, desde estos movimientos el sentido de este tipo de apropiación violenta[11].

Se trata de una perspectiva basada en valores globalizados y compartidos, pues ¿quién racional y concientemente puede oponerse a la valoración del ecosistema global[12]? Por tanto, son movimientos que intrínsecamente tendrían una carga antisistémica. En América Latina estos movimientos son débiles; en el caso de Bolivia, por ejemplo, no se termina de construir un movimiento ecologista; sin embargo, existen demandas y reivindi-

11 "Esta violencia tecnológica [propia del dominio del hombre sobre la naturaleza] termina con una derrota: y no porque sea imposible el dominio total sobre la naturaleza, sino porque en cada nivel del éxito tecnológico las cosas constituyen nuestro botín, no el fruto de un encuentro amistoso. [...] El mundo, tan repleto de las huellas de nuestras intervenciones tecnológicas, ese mundo aparentemente humanizado, planificado en todos sus detalles por nuestros denodados esfuerzos, comienza a aparecérsenos de nuevo como una pesadilla". (Leszek Kolakowski, 1975:78.)

12 Castells (1997:152), cita a Petra Kelly (dirigente del Partido Verde alemán): "'Hemos de aprender a pensar y actuar desde nuestros corazones, a reconocer la interconexión de todas las criaturas vivientes y a respetar el valor de cada hilo de la vasta trama de la vida. Es una perspectiva espiritual y la base de toda la política verde [...] la política verde requiere de nosotros que seamos tiernos y subversivos a la vez'. [Y Castells agrega] La ternura de la subversión, la subversión de la ternura: estamos muy lejos de la perspectiva instrumentalista que ha dominado la era industrial [...]. Y estamos en contradicción directa con la disolución del significado en los flujos del poder sin rostro que constituyen la sociedad red. La cultura verde, según se propone en un movimiento ecologista multifacético, es el antídoto de la cultura de la virtualidad real que caracteriza los procesos dominantes de nuestras sociedades".

caciones puntuales que probablemente tiendan a crecer, así como reacciones o reclamos puntuales frente a desastres ambientales.

El Estado, por otra parte, enfrenta el tema o a partir de acuerdos internacionales suscritos o como respuesta a esos reclamos específicos. Se han logrado, empero, algunos avances. En 1992 se promulgó la Ley del Medio Ambiente y seis decretos reglamentarios en 1995, que estipulan, entre otros, que para la implementación de todo proyecto o actividad debe realizarse una evaluación del impacto ambiental, así como da un plazo de cinco años a las empresas ya establecidas para que renueven su capacidad técnica de acuerdo a los nuevos reglamentos que protegen el ambiente, los cuales adoptan estándares internacionales. Sin embargo, la aplicación de la nueva reglamentación se ve limitada tanto por la carencia de recursos humanos calificados para las tareas de control como por los costos que implica adecuar la estructura productiva según la nueva normativa. Asimismo, existen factores que contribuyen a incrementar el daño ambiental y en los que el Estado y los gobiernos locales deben cumplir un rol central, como la construcción de infraestructura en saneamiento básico y agua potable, y esto en el marco de los escasos recursos con los que se cuenta. En todo caso, problemas cruciales como los del agua y los de la depradación de los suelos, todavía no han sido enfrentados en su real medida.

Retomando el problema ambiental en su dimensión global, se reconoce que las políticas orientadas a resolver o paliar las consecuencias de los daños al ambiente también deben ser globales. Sin embargo, como bien apunta Roberto Guimaraes (1991), las responsabilidades no son globales y equitativas para todos. Los países desarrollados deberían asumir una mayor responsabilidad pues ellos han dañado más fuertemente el ecosistema global, siendo ahora quienes desean distribuir "equitativamente" los costos de ese desarrollo del cual disfrutan. Un ejemplo que ilustra bien las brechas ambientales entre países industrializados y países en vías de desarrollo: los primeros, con el 20% de la población mundial se apropian del 80% de los recursos naturales y son responsables del 75% del total de emisiones contaminantes; mientras que los segundos, con el 80% de la población mundial, se apropian del 20% de los recursos y son responsables del 20% de la contaminación[13]. En este mismo contexto, si bien América Latina participa de manera mar-

13 Véase Roberto Guimaraes, 1996:61.

ginal en el deterioro ambiental, vive los efectos del mismo de manera contundente[14].

Así, "los temas que dominan la agenda internacional sobre medio ambiente —lluvia ácida, efecto invernadero, agujero de ozono— son todos responsabilidad de los países del Norte. En suma, para soportar el impacto negativo de estos problemas —mientras estos países se benefician de los procesos de desarrollo que han producido— los países del Sur son llamados a compartir la responsabilidad, así como los costos, de las medidas necesarias para aliviar esa situación"[15]. Esto se enmarca en la asimetría de las relaciones entre los países del Norte y los del Sur.

Un dato al respecto: los países desarrollados, con aproximadamente un 5% de la población mundial, consumen un 35% de los recursos existentes y producen un 75% de la contaminación global[16]. Este ejemplo vale para observar la profunda asimetría al momento de repartir responsabilidades y de acusar a la explosión demográfica de los países subdesarrollados como una de las principales causas del aumento del daño a los ecosistemas. Reforzando esta idea, mientras que los países desarrollados pueden, por su propio nivel de desarrollo, a costa del deterioro del ambiente, paliar o aliviar problemas ambientales, los países subdesarrollados están terminando con sus recursos naturales por una cuestión de supervivencia, perjudicándose enormemente en el largo plazo[17].

14 "Sólo para dar un ejemplo, sobre la capa de ozono, se estima que el 15% de ella ha sido destruida por la producción principalmente de gases de carbono, pero también de otros compuestos químicos. Si bien es cierto que es un problema global la destrucción de este 15%, las investigaciones más recientes muestran que el 70% de esa destrucción está en el cono sur de América Latina, en ese caso específico, no contribuye ni siquiera con el 3% de la producción de gases de carbono. Por lo tanto, el 97% del problema de destrucción de la capa de ozono no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, tenemos el 70% del hoyo que está sobre Argentina, Chile, Paraguay y el sur del Brasil con las consecuencias que se derivan para la pecuaria y para la salud humana". (Ibidem., 62.)

15 Roberto Guimaraes, 1991:53. (Traducción de los autores.)

16 Ibidem., 55.

17 Otro dato que refuerza la desigualdad y muestra crudamente el daño al ecosistema global es el proporcionado por Paul Kennedy (1993) acerca de la deforestación: en 1980 se estimaba que la deforestación en los trópicos alcanzaba anualmente los 11.4 millones de hectáreas, de las cuales el 60% correspondía a América Latina; para el año 2000 se prevee que las tres cuartas partes de sus bosques tropicales habrán sido destruidos y que el 50% de sus especies habrán desaparecido.

Sin embargo, no sólo los patrones productivos y de desarrollo ligados al uso indiscriminado de los recursos naturales son los responsables de esta crisis global del ecosistema. También lo son los actuales patrones de consumo, como lo sostiene el *Informe sobre desarrollo humano 1998* de Naciones Unidas, que inciden en el deterioro ambiental y en la creciente desigualdad social. Dichos comportamientos consumistas están en tensión con el ambiente porque lo degradan con la emisión de contaminantes, agotan los recursos no renovables (minerales y metales), deterioran los recursos renovables (agua, suelos, ríos, biodiversidad) por el mal uso que se hace de ellos, producen niveles de contaminación y desechos muy por encima de la capacidad de absorberlos y aumentan las distancias entre la población pobre y la población con más oportunidades y recursos económicos.

En este último aspecto, como ya se sostuvo, los pobres son los que soportan el precio más alto del patrón consumista-productivo de los países industrializados. Por ejemplo, los efectos producidos por la contaminación y los desechos que genera dicho patrón son cambios climáticos y acidez del ecosistema, que en un futuro próximo llevarán, entre otros, a la "reducción del rendimiento de las cosechas, al aumento de las enfermedades contagiosas, al cambio de los monzones y a más inundaciones, constantemente arrebatando tierra a la gente"[18]. Sin embargo, según datos de 1995, sólo la quinta parte de la población mundial se beneficia de este patrón, mientras que los costos ambientales están más distribuidos, siendo los pobres los que cargan con el mayor peso de las consecuencias y los que menos (o ningunos) recursos tienen para hacerles frente.

Todos los problemas ambientales (deforestación, degradación de suelos y desertificación, contaminación del agua y del aire, generación de desechos, etc.) afectan a los más pobres en mayor medida, aunque el daño sea global. Por ejemplo, si bien el mayor porcentaje de las emisiones de dióxido de carbono (60%) se genera en los países industrializados, son los países en desarrollo los que tienen mayor riesgo de cambio climático[19].

De cada 10 árboles talados en los trópicos sólo se planta 1; en Africa la relación es aún peor: 29 por 1.

18 Cf. PNUD, 1998a:56.

19 "Se espera que los países en desarrollo, en particular los habitantes más pobres, sean los más afectados por la reducción de las cosechas, la mayor escasez de agua y el aumento del nivel de los mares que acompañarán

La relación entre pobreza y daño ambiental constituye uno de los puntos centrales de las preocupaciones sobre la crisis del ecosistema, pues se trata de un círculo vicioso que genera más pobreza y deterioro ambiental. Esto se debe a que el uso indiscriminado de los recursos naturales, sobre los cuales la población empobrecida ejerce presión por cuestiones de supervivencia, hace que disminuyan dichos recursos para las próximas generaciones, lo que hará aumentar la pobreza. Obviamente, no han sido los pobres los principales responsables del actual deterioro del ecosistema global, como ya ha sido fundamentado, pero ellos son los que tienen menos opciones en cuanto a hacer un uso más racional de los recursos naturales.

En tal sentido, el PNUD (1998a:56) señala al uso indiscriminado de los recursos renovables como uno de los responsables más importantes de la pobreza, reduciendo las posibilidades de subsistencia a millones de personas, en particular a los campesinos que dependen directamente de la naturaleza. Estos campesinos (se calcula que 500 millones de ellos viven en zonas ecológicamente marginales) constituyen la población más pobre de Asia, Africa, América Latina y los Estados árabes.

Es urgente, entonces, modificar el actual patrón de crecimiento basado en la degradación ambiental en función de lograr otro que asegure la sustentabilidad de los recursos naturales. Un elemento clave para romper este círculo perverso entre pobreza y degradación es la educación ciudadana, que debe orientarse tanto a capacitar a los recursos humanos para aumentar la competitividad a través del uso de tecnología que disminuya niveles de contaminación como a elevar la conciencia y cultura ambientalistas. Y en este tema el rol del Estado es central. Por otra parte, es preciso generar compromisos y pactos y volver más rígidos los controles y las normas —o hacer efectivos los existentes-, implementar políticas públicas tendientes a modificar el actual patrón productivo, generar nuevas pautas de consumo, introducir tecnologías más limpias y ser más eficientes en el uso de los recursos naturales.

En Bolivia, uno de los graves problemas es la dependencia de la economía de los recursos naturales. Como muestra: "En total, los recursos naturales (renovables y no renovables) constituyen más del 70% de la ge-

el recalentamiento mundial de la atmósfera". (PNUD, 1998a:79) La reducción de las cosechas hará aumentar el precio de los alimentos provocando más hambre en el mundo y agrandando los niveles de desigualdad.

neración de divisas para el país"[20]. Esto pone barreras al cambio del modelo de desarrollo económico porque en el corto plazo, y desde una visión "individualista", no se observan las consecuencias negativas para el propio crecimiento económico.

Tomar conciencia de la actual crisis ecológica implica entonces cuestionar un tipo de desarrollo inequitativo, orientado a satisfacer estilos de vida consumistas y no sostenible, y del que se beneficia sólo una parte de la población mundial frente a un gran número de países y regiones, y sobre todo a millones de personas que se ven forzadas a deteriorar sus ecosistemas para sobrevivir. Incluso más, lo que este "desarrollo" cuestiona es un tipo de vida cotidiana que lleva a un sin sentido en cuanto a las metas de progreso que las sociedades se han puesto, porque excluye a la mayoría de la población y porque cercena las posibilidades de desarrollo futuro.

Algunos interrogantes

Después de repasar los problemas que afectan nuestro ambiente, pensar el tema de la sostenibilidad ambiental del desarrollo desde Latinoamérica y desde la sociedad civil, parece constituir un reto importante y sobre todo urgente.

¿Cómo favorecer efectivamente la conservación de los recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental, cuando se sabe que parte de su degradación es producto de la miseria en que vive gran parte de la población de nuestros países? Por otra parte, la falta de legislación en algunos casos y en otros la poca dureza en la aplicación de normas ambientales por parte de los gobiernos, dificultan la puesta en marcha de acciones efectivas para la sostenibilidad del desarrollo.

Por tanto habría un factor de tipo económico difícil de controlar y otro de tipo más político, aunque ligado por supuesto a intereses económicos, que favorecen una débil aplicación de las normas ambientales. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre favorecer un crecimiento económico con costos ambientales y una sostenibilidad del desarrollo? ¿Cómo aumentar la conciencia de la población y de quienes toman decisiones (*policy makers*) en torno a la necesidad de usar de manera sostenible los recursos ambientales? ¿A través de qué mecanismos —educativos, comunicacionales, de gestión pública y participación

20 Cf. PNUD, 1998b:141.

ciudadana, por ejemplo— incrementar esa conciencia para que la propia sociedad civil ejerza una presión importante, obligando a los gobiernos a tomar medidas en relación con las industrias que contaminan o con las empresas que depredan los bosques? Incluso más, pues no se trata únicamente de lograr una mayor "conciencia ecológica", sino de cómo llevar adelante una gestión ambiental efectiva y participativa, impulsada por acciones e ideas que, tanto desde los ámbitos público como privado, se orienten al logro de una sostenibilidad de largo plazo. Esto se relaciona incluso con la extensión de una ciudadanía activa que contemple la participación institucionalizada para lograr amplios consensos en torno al desarrollo sostenible. Asimismo, ¿cómo impulsar alianzas con grupos, instituciones y movimientos de los países desarrollados para enfrentar estos problemas? ¿Cómo plantear acciones conjuntas en los marcos de los pactos de integración en curso?

Las preguntas quedan planteadas. Sin embargo, las respuestas parecen no poder esperar demasiado y son el Estado y los distintos actores de la sociedad civil, a partir del ejercicio de una ciudadanía activa, los que deben generar acciones.

4. Lo posible, lo deseable y la sostenibilidad de la política en la democracia

El progreso social se relacionaba tanto con un conjunto de elaboraciones socio-políticas como con una serie de procesos societales referidos a la organización de la sociedad, a sus vínculos con la naturaleza y la economía y a la institucionalización de la política. Aquélla noción de progreso lineal y las prácticas sociales vinculadas a ella se han agotado. Ya no hay, pues, en el campo de lo socio-político, ideas absolutas y procesos sociales que desemboquen en el progreso social de sociedades modernas e industrializadas.

El espejismo de Próspero, contrastado con la realidad histórica muestra, especialmente por razones ambientales y sociales, que los países en desarrollo no vivirán el progreso del que disfrutan los actuales países desarrollados, los que tampoco podrán reproducir sus estilos de vida consumistas sin que peligren ellos mismos.

La modernización ha acelerado el cambio histórico a una velocidad increíble, produciendo potencialidades y límites inauditos. Así, la reestructuración de la economía mundial, la internacionalización de la política, la globali-

zación y expansión culturales y la posibilidad de gestión sostenible de los recursos naturales, plantean una serie de potencialidades múltiples de desarrollo y de democratización.

Sin embargo, estos procesos han generado una gran concentración de poder a escala global que impone fuertes límites al régimen democrático, junto con el crecimiento acelerado de las desigualdades sociales y la degradación del ambiente. Da la impresión de que las distintas acciones políticas, tanto a nivel estatal, internacional o de la sociedad civil resultan insuficientes para paliar tal dinamismo. Al momento es muy difícil reconocer un sujeto histórico con capacidad de transformación política que incida en la dirección de los acontecimientos narrados a lo largo del texto.

Tan sólo pueden encontrarse algunos interesantes indicios que señalan que es posible articular políticamente gobernabilidad progresiva y competitividad sistémica con expansión ciudadana y sostenibilidad ambiental. En el núcleo de este nuevo y potencial dinamismo se encuentra la cuestión de la cultura política democrática como un ámbito básico de comunicación entre la pluralidad de actores socioculturales existentes en la región y como vía de integración de esos mismos actores. El tema ecológico aparece aquí como fundamental, incluso como mecanismo que permita una renovación en el plano de la política, pues se trata de una preocupación compartida que debería generar consensos y que incluye cuestiones claves como la equidad y la propia discusión sobre el desarrollo que una sociedad se plantea.

La representación política y el ejercicio de una ciudadanía ampliada son centrales entonces. La política en democracia implica relaciones y comunicaciones entre actores y entre intereses distintos. Desde esta perspectiva, lo real es lo construido a través de un sistema de alteridades entre los diferentes actores; y donde hay alteridad existe decisión de reciprocidad entre los actores parte de ese intercambio político. Realismo democrático es entonces sinónimo de encuentro.

En este sentido, la puesta en práctica de este tipo de ejercicio político, que considera al orden político como un orden comunicativo global, implica reconocer la posibilidad de construcción de un principio político articulador entre los distintos actores. Un principio articulador posible es el de una cultura política democrática, la cual, en última instancia, no puede sino referirse a las experiencias cotidianas que tiene la gente y a las cargas motivacionales que existen en determinado momento

histórico. En este marco, la noción de realismo político ya no hace referencia a esa lógica de lo necesario, sino a aquello que retoma lo mejor de la política, es decir, a la idea de la política como el arte de lo posible. La pregunta es: ¿cómo determinamos qué es lo que se puede hacer en política? Se trataría, creemos, de buscar un orden prescriptivo a seguir, como, en este texto planteamos, el de una gobernabilidad progresiva que expanda la ciudadanía activa conviviendo en tensión con los procesos de modernización.

Las prescripciones políticas descubren los límites de las utopías, los cuales, paradójicamente, permiten visualizar lo posible. Pero, aunque la realización de las utopías no es posible, su propia crítica, en el marco de una política comunicativa como construcción cultural y como nuevo mapa cognitivo —según sostiene Lechner (1984)—, es lo que da sentido a la acción política. Ya no se trata, entonces, de cualquier utopía, sino de una utopía crítica que sería el sustrato básico de una noción de gobernabilidad progresiva, en la que no sólo es posible y necesario el cálculo político para la práctica política, sino además la aceptación del otro para la propia construcción de la política.

Así, lo real en política implica la búsqueda de interpretación de sentidos de los disímiles en la realidad social, eliminando la supuesta teoría de la objetividad o del realismo político, siendo este sentido el que marca la acción o la utopía política. Esta sería una construcción comunicativa producto de una pluralidad ética. El problema radica en lo que sucede cuando no hay sujetos, o cuando éstos son muy débiles, pues esta óptica supone de todas maneras el reconocimiento del otro distinto de uno participando en pie de igualdad en esa comunicación política. Consiguientemente, resulta fundamental la reconstitución de sujetos autónomos con capacidad de llegar a acuerdos institucionales.

De este modo, la comunicación en política no significa solamente la interacción de unos con otros, la capacidad de interactuar de manera positivista en el sentido parsoniano, en el que cada uno modifica la acción por las expectativas del otro, produciéndose un campo de socialización funcional de orden. De lo que se trata, por el contrario, es de comprender la identidad y la libertad de los otros para entender la propia identidad, lo cual genera una gran cuota de incertidumbre. Por lo tanto, esta idea de la relación política no apela a la mera relación costo-beneficio; la política no es solamente el "mercado de la política", sino un sistema de pasiones, valores, creencias e intereses que se hacen con otros.

Ahora, la construcción de lo otro, que es también la propia construcción, es una cuestión política y es un tema fundamental para la gobernabilidad. Por lo tanto, una política "comunicativa democrática" implica ser eficaces y eficientes en la gestión del cálculo político. Precisamente por eso la óptica de gobernabilidad progresiva en definitiva aspira al autogobierno de la sociedad. Lo fundamental en cuanto a la política es cómo se hace la selección de "lo mejor posible" y, en tal sentido, la gobernabilidad progresiva aparece como el conjunto de mecanismos institucionales que permitirían una selección de este tipo.

Cuando se quiere construir la sociedad con una pluralidad de actores culturales y de sujetos políticos distintos, el logro de lo mejor posible es difícil. El tiempo histórico para los actores y la noción de tiempo en la política son muy complejos, sobre todo cuando existen pisos interculturales tan distintos como los de Latinoamérica. El tiempo para un industrial cruceño, limeño o porteño es distinto del tiempo para una campesina del norte argentino, del norte chileno o del nordeste brasileño; una gobernabilidad progresiva tiene que conciliar estos distintos tiempos políticos.

Pareciera no existir una respuesta sobre cómo construir el orden en un tiempo político que permita resolver las comunicaciones entre los actores. Quizás una forma de construir la relación con el otro sea a través de una apelación a la memoria. En países como los latinoamericanos no es posible construir un campo comunicativo de interacción entre sujetos si no se recurre a la memoria. Entonces el tiempo político es también un tiempo que tiene que ver con la historia y eso es, como se dice en quechua, un *chenk'o* o un complejo cultural muy denso.

Complejizando aún más el tema, el problema no radica únicamente en que se debe rendir cuentas con la propia historia, sino, además, en que hoy la construcción del tiempo político debe hacerse en un contexto altamente internacionalizado, caracterizado fundamentalmente por una hiper-aceleración del tiempo histórico que erosiona la continuidad social y constituye una de las principales causas de la crisis de la gobernabilidad en el sentido político ya señalado.

Finalmente, el tiempo ecológico, que actúa en el plano global como una unidad interactiva, es un tiempo lento que se hace cada día, cada minuto, y que *de pronto* se transforma en *catástrofe* cuando el deterioro es ya irreparable. La política también debe contemplar un tiempo ecológico, que quizás, a diferencia de otros

tiempos narrados, es a la vez un tiempo global y un tiempo de futuro. La política ecológica sólo será viable si es normativa; en ella no se puede evaporar la visión de futuro.

Todo esto replantea el tema fundamental de la política en las sociedades contemporáneas, donde existe una lógica cada vez más compleja y diversificada en la sociedad con tiempos muy complejos, mientras que las formas políticas que acompañan esa complejidad, para poder hacerlo, tienden a instrumentalizarse. No es posible acompañar la mutación trans-societal, cada vez más internacionalizada, con formas políticas nacionales como las prexistentes a estos procesos globalizados; por eso los sistemas de representación en todo el mundo están en crisis y por lo mismo la apatía política es un resultado de los tiempos modernos.

Sin embargo, esto no niega que la pregunta central respecto de la política siga siendo ¿cómo reducir la complejidad a un presente real y cómo emprender esta tarea desde la propia memoria histórica? La inconsistencia, entonces, entre un tiempo de transformación societal y la persistencia de formas políticas que no acompañan tal complejidad marca los límites de la política y también la deficiencia estructural de la gobernabilidad en las sociedades contemporáneas de la manera más aguda, constituyendo uno de los obstáculos —que es lo que interesa acá— a la posibilidad de construir una cultura democrática que permita a las sociedades repensar sus proyectos y su futuro. En este marco, el tema ecológico, por su alcance global y sus manifestaciones locales, podría constituir un aporte para la renovación de la política y del propio proyecto de la modernidad.

Bibliografía

Beiner, Ronald (ed.) 1995 *Theorizing citizenship* (New York: State University of New York Press).

Bobbio, Norberto 1997 *Autobiografía* (Madrid: Taurus).

Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario (eds.) 1991 *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica/CLACSO).

Calderón, Fernando y Szmukler, Alicia 1995 "El progreso como una forma de vida: ¿se puede medir el progreso? Apuntes sobre el desarrollo humano sostenible". Conferencia presentada en el seminario internacional "Modernización social en la apertura",

organizado por COMFAMA, Medellín, Colombia, 30/31 de octubre.
Calderón, Fernando, Hopenhayn Martín, Ottone Ernesto 1996 *Esa esquiva modernidad. Desarrollo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe* (Caracas: Nueva Sociedad).
Castells, Manuel 1989 *The informational city. Information technology, economic restructuring and the urban-regional process* (Oxford: Basil Blackwell).
Castells, Manuel 1995 "Les flux, les réseaux et les identités: oú sont les sujets dans la société informationnelle?" en Dubet, François et Wieviorka Michel (eds.) *Penser le sujet*, (París: Fayard).
Castells, Manuel 1997 *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad*, Vol. 2 (Madrid: Alianza).
CEPAL-UNESCO 1993 *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad* (Santiago de Chile: CEPAL).
Crozier, Huntington y Watanuki 1975 "The crisis of democracy" en *Report of the gobernability of democracies to the Trilateral Comission* (New York: University Press).
Darendorf, Ralph 1992 *Moralitá, instituzione e societá civile* (Turín: Bollati Borlinghieri).
Dos Santos, Mario 1993 "Las estrategias de gobernabilidad en la crisis" en *Informe comparativo del Proyecto RLA 90/011 PNUD-UNESCO-CLACSO* (Buenos Aires: CLACSO).
Escobar, Jairo y Muñoz, Jorge 1997 "Marco regulatorio e instrumentos de mercado de la política ambiental en Bolivia" en *Documento de Trabajo 55/97* (La Paz: UDAPSO)
Flisflisch, Ángel 1989 "Gobernabilidad y consolidación democrática; sugerencias para la discusión" en *Revista Mexicana de Sociología*, Nº 3 (México).
Flores de Arcais, Paulo 1996 *Modernidad y política. Izquierda, individuo y democracia* (Cararacas: Nueva Sociedad).
Germani, Gino 1985 "Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna" en VVAA *Los límites de la democracia*, Vol. 1 (Buenos Aires: CLACSO)..
González, Sergio 1993 "Una aproximación a la política de Edgar Morín" en *Documento de Trabajo* Nº 15 (Santiago de Chile: ILADES).
Guimaraes, Roberto 1991 *The ecopolitics of development in the Third World. Politics*

and enviroment in Brazil (Londres: Lynne Rienner Publishers)
Guimaraes, Roberto 1996 "Desarrollo sostenible: de la retórica a la formulación de políticas públicas" en *Desarrollo humano. Problemas y perspectivas* (Cochabamba: NUD/CESU).
Keating, Michael 1993 *Agenda for change* (Ginebra: Centre for Our Common Future).
Kennedy, Paul 1993 *Preparing for the twenty-first century* (New York: Vintage Books).
Kolakowski, Leszek 1975 *La presencia del mito* (Buenos Aires: Amorrortu).
Lechner, Norbert 1984 "El realismo político: una cuestión de tiempo" en VVAA *¿Qué es el realismo en política* (Santiago de Chile: Catálogos).
Lechner, Norbert 1993 "Apuntes sobre las transformaciones del Estado" en *Documentos de Trabajo* (Santiago de Chile: FLACSO).
Santiago de Chile y Misfud, Tony 1993 "Ética y sociedad emergente. ¿Nuevos paradigmas en la política?"en *Documento de Trabajo* Nº 14 (Santiago de Chile: ILADES).
Lefort, Claude 1992 "La representación no agota la democracia" en Dos Santos Mario (Coord.) *¿Qué queda de la representación política?* (Caracas: CLACSO/Nueva Sociedad).
Malloy, James 1987 *Autoritarians and democrats* (Pittsburg: Pittsburg University Press).
Morin, Edgar 1990 "La pensée écologisée" en Morin E., Bocchi G. Y Ceruti M. 1990 *Un nouveau commencement* (París: Edtions du Seuil).
Morin, Edgar y Kern, Anne-Bigidte 1993 *Tierra-Patria* (Buenos Aires: Kairós).
Programa de Acción de las Naciones Unidas de Río 1992 *Cumbre para la Tierra. Programa 21* (New York: Naciones Unidas).
PNUD 1993 *Informe sobre desarrollo humano 1993* (Madrid: PNUD-CIDEAL)
PNUD 1994 *Informe sobre desarrollo humano 1994* (México: Fondo de Cultura Económica).
PNUD 1998a *Informe sobre desarrollo humano 1998* (Madrid: Mundi-Prensa Libros).
PNUD, 1998b *Desarrollo humano en Bolivia 1998* (La Paz: PNUD).
Rabellino Carola y Szmukler Alicia 1994 "Paradigmas de la complejidad y nuevas búsquedas en las ciencias sociales

latinoamericanas" en *Documento de Trabajo* Nº 24 (Santiago de Chile: ILADES).
Rosenau, James y Czempiel, Ernest-Otto 1993 *Governance without goverment. Order and change in world politics* (Cambridge: Cambridge University Press).
Schnapper, Dominique 1994 *La communauté des citoyens* (París: Gallimard).
Sen, Amartya 1995 *Nuevo examen de la desigualdad* (Madrid: Alianza).
Tomassini, Luciano 1993 *Estado, gobernabilidad y desarrollo* (Washington: BID).
Walzer, Michael 1993 *Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad* (México: Fondo de Cultura Económica).
Wolton, Dominique 1995 "Identité, communication et crise" en Dubet, François y Wieviorka, Michel (eds.) 1995, ob. cit.

Cultura de igualdad, deliberación y desarrollo humano*

Introducción

La tesis central que organiza este texto sostiene que una cultura política de desigualdad incidió, y continúa haciéndolo, de manera negativa en la consolidación de la democracia y de sus instituciones, así como también en los procesos de desarrollo humano de nuestras sociedades.

Se trabajarán aquí cuatro fenómenos que contribuyen a mantener la relación mencionada:

1. La desigualdad se profundizó en América Latina como efecto negativo de la globalización económica y la diferenciación social. La hipótesis que se plantea en este ámbito es que existe una asociación entre los cambios y reformas estructurales y el aumento de la desigualdad a escala global.
2. Se caracteriza la situación actual de desigualdad y pobreza en la región.
3. Esa situación de desigualdad se asocia con una percepción de la igualdad y la pobreza, es decir, impacta en la percepción que las personas y las sociedades viven el asunto de la igualdad. Asimismo, tal percepción es resultado de una combinación de procesos históricos, donde se rescatan de manera hipotética tres grandes patrones subjetivos de desigualdad:
   a. La visión de la desigualdad ligada al origen, de impronta colonial.
   b. La visión de la desigualdad ligada al punto de vista patrimonialista y clientelar asociada a los diversos populismos vividos en la región durante el siglo XX.
   c. La visión de la desigualdad ligada a una suerte de "fundamentalismo de mercado", a partir de los años noventa.

* Este trabajo fue presentado originalmente en la 14º Conferencia de la Academia de Latinidad en Río de Janeiro en el año 2006.

4. Dada la heterogeneidad estructural, social y cultural, y las disposiciones de los nuevos actores sociales, parece posible plantear cultura política igualitaria de reconocimiento del otro, que es preciso rescatar, analizar y trabajar, vinculada al concepto de deliberación.

Se plantean finalmente algunas ideas que cierran el trabajo.

1. Globalización, diferenciación social y desigualdad

La globalización tecno-económica, cultural y política imprime nuevas características a los procesos de diferenciación social.[1] Aunque la globalización supone nuevas oportunidades de relación entre países y/o regiones a partir de sus capacidades, el acceso a los beneficios que puede brindar es desigual y las posibilidades de integración de los países en

1 La globalización es un proceso básicamente económico que tiene consecuencias socioculturales y políticas y que fue impulsado por el desarrollo de las tecnologías de información, telecomunicaciones y transporte, que permiten una interconexión mundial gracias a una red de flujos de información que actúan en tiempo real sobre el conjunto de la vida. El funcionamiento de los mercados financieros que operan las 24 horas del día simultáneamente en todas partes del mundo es un buen ejemplo sobre cómo funciona la globalización. Por otra parte, ella implica una nueva percepción del tiempo y el espacio, en la que las fronteras nacionales se vuelven borrosas, produce cambios en la vida cotidiana de la gente y tiende a generar un sentimiento de inestabilidad e incertidumbre económica y social que debilita el tejido social y el sentimiento de solidaridad. Los acontecimientos políticos y/o económicos se conocen cada vez más rápido y las consecuencias de las decisiones, sobre todo financieras, tienen un impacto global. La difusión veloz de la información y el alcance de las comunicaciones alteran la cotidianidad de las personas y los patrones de vida y de cohesión social. Todo ello tiene consecuencias importantes en el plano de la política y los Estados nacionales, y también aparecen oportunidades de desarrollo de capacidades a escala global. Hoy, como nunca, existen condiciones para que el pluralismo cultural, sobre todo de base nacional, se articule con un nuevo cosmopolitanismo virtual y real, lo que empieza a crear nuevas lealtades y condiciones de reproducción cultural. Una nueva estructura social con rasgos globales de una sociedad red estaría emergiendo. La trilogía de Castells (1997 y 1998a y b). La era de la información constituye un referente obligatorio para comprender los cambios en la sociedad y economía contemporáneas.

desarrollo en dichos procesos son escasas. En general se produjo una mayor distancia entre países centrales y periféricos y aumentó la concentración económica. Para "graficar" esta situación, en un estudio del PNUD (1999: 38) se sostiene que "Las desigualdades mundiales han aumentado constantemente durante casi dos siglos. Un análisis de las tendencias de largo plazo de la distribución del ingreso mundial (entre países) indica que la distancia entre el país más rico y el más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1820, de 11 a 1 en 1913, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de 72 a 1 en 1992. Es más sorprendente todavía que los británicos tuvieran en 1820 un ingreso alrededor de 6 veces superior al de los etíopes en 1992. Esas tendencias, sin embargo, ocultan el hecho de que muchos países han alcanzado a los más adelantados. Japón, por ejemplo, tenía apenas el 20% del ingreso de los Estados Unidos en 1950, pero el 90% en 1992". Todo ello conduce a sostener que se está frente a un tipo de modernización con rasgos excluyentes que repercute negativamente sobre el desarrollo democrático.[2]

Al interior de los países, estos procesos provocaron un incremento de las distancias entre clases sociales, regiones ricas y pobres, culturas y géneros, así como también entre diversas actividades y nichos productivos. Este es un fenómeno visible tanto en países en desarrollo como desarrollados. En el Cuadro 1 puede observarse, como ejemplo, la iniquidad en la distribución del ingreso dentro de algunos países.

2 Los procesos de modernización tendrían, como sugirió Germani (1985), una fuerte carga autoritaria. Para él, la secularización, caracterizada por el predominio de la elección racional, la aceleración del cambio institucional y la diferenciación de roles e instituciones, erosiona cada día con más fuerza los principales valores de la modernización occidental. La integración social se reduce y se pone en duda el sentido individual y colectivo de la vida social. La dinámica de los procesos de modernización reduce el acceso de las personas y las colectividades al sistema político de toma de decisiones de las sociedades, quedando las decisiones en manos de "especialistas", lo que finalmente produce un deterioro de la propia democracia. Así, Germani alerta sobre los peligros de una modernización que alienta un nuevo tipo de autoritarismo, véase también Calderón (1993).

Cuadro 1. Desigualdad de ingresos o consumo

País	Clasificación IDH 2003	Año de la encuesta	Porcentaje de ingreso o consumo del				Coeficiente de Gini	
			10% más pobre	*20% más pobre*	*20% más rico*	*10% más rico*	*Gini/Año*	*Gini/Año*
Países Bajos	5	1994	2.8	7.3	40.1	25.1	...	32.6 (1994)
Estados Unidos	7	1997	1.8	5.2	46.4	30.5	...	40.8 (1997)
Japón	9	1993	4.8	10.6	35.7	21.7	...	24.9 (1993)
Rep. de Corea	30	1998	2.9	7.9	37.5	22.5	36.0 (1985)	31.6 (1998)
Eslovaquia	39	1996	3.1	8.8	34.8	20.9	19.5 (1992)	25.8 (1996)
Chile	43	1998	1.1	3.2	61.3	45.4	55.3 (1996)	55.9 (2000)
México	55	1998	1.2	3.4	57.6	41.6	50.3 (1992)	51.9 (1998)
Colombia	64	1996	1.1	3.0	60.9	46.1	51.3 (1991)	57.1 (1996)
Brasil	65	1998	0.7	2.2	64.1	48.0	63.8 (1996)	63.9 (2001)
Bolivia	114	1999	1.3	4.0	49.1	37.2	58.8 (1997)	61.4 (2002)
Honduras	115	1998	0.5	2.0	61.0	44.4	55.8 (1997)	58.8 (2002)
Pakistán	144	1998-99	3.7	8.8	42.3	28.3	31.2 (1997)	33.0 (1999)
Guinea-Bissau	166	1993	2.1	5.2	53.4	39.3	56.2 (1991)	47.0 (1993)

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de UNDP 2001 (pp. 186-189 y 282-283) y 2003 (pp. 237-240 y 282-285); World Bank 1997 (pp. 222-223); CEPAL 2004 (pp. 76-77).

Esta mayor diferenciación socioeconómica provoca una creciente iniquidad social, de ingresos y de distribución de la riqueza y un aumento de la pobreza; es decir, mayor exclusión social, siendo los más perjudicados los indígenas, las mujeres y los jóvenes. Como consecuencia de estos procesos excluyentes, los actores políticos y sociales y sus organizaciones representativas se debilitaron, quebrándose sentimientos de pertenencia colectiva y la calidad del lazo social; se vive un descreimiento y desconfianza en la política y los políticos, y una tendencia fuerte es la que los individuos, al no visualizar proyectos que den significado a su acción social y política, se vuelcan al espacio privado.[3]

3 Esto también se asocia con una diferenciación funcional que vuelve en apariencia cada vez más autóno-

La globalización reforzó tanto la diferenciación social como funcional en América Latina, pues contribuyó a crear altas expectativas sobre todo en los planos del consumo y la cultura, sin generar mecanismos de integración. Este fenómeno se dio simultáneamente con un recorte del aparato y del alcance social del Estado, que fue dejando en manos del mercado funciones de carácter social; sin embargo, la integración social no es una tarea de la cual pueda hacerse cargo el mercado.[4] Así, los fenómenos de la pobreza, la exclusión y la inestabilidad social se complejizaron, lo que repercutió de manera negativa en el conjunto del tejido social. El malestar que produce la incertidumbre del cambio es central en la cotidianidad de nuestras sociedades.

Entre las consecuencias políticas de los procesos de globalización destacan el debilitamiento de la soberanía de los Estados nacionales y la evidencia de que el proyecto de

mos los campos de la política, la economía, la justicia, la ética, la tecnología y la ciencia. Tal autonomía produce una percepción fragmentada de la sociedad y una pérdida de horizontes integradores de sentido colectivo; por ejemplo, desde la esfera económica se justifican las políticas sociales como un asunto de eficiencia tecnocrática, sin referirse a la inequidad de la estructura económica y social como causa de la pobreza a la que esas políticas combaten. En el mismo sentido, las ideas de progreso, libertad y cohesión social, propulsadas por el proyecto cultural de la modernidad, se desvanecen en sociedades cada vez más excluyentes. Este tipo de diferenciación limita el logro de visiones integrales del orden social, minando los sentimientos de pertenencia a la comunidad nacional, el ejercicio de la ciudadanía y el tejido social.

4 La difusión de la televisión ejerce un papel central en el aumento de las expectativas de consumo. Según CEPAL (1992: 28), la televisión promueve expectativas de consumo en la gente al mismo tiempo que merman sus ingresos, impactando negativamente sobre la capacidad de consumo; se genera así una gran frustración que puede dar lugar a actos delictivos y violentos. El Cuadro 2 muestra el aumento del número de televisores por cada 1.000 habitantes entre 1990 y 1996-98.

Cuadro 2. Número de televisores por cada 1.000 habitantes

País	Televisores por cada 1.000 habitantes		
	1990	*1996-98*	*Aumento en %*
Estados Unidos	772	847	9.7
Japón	611	707	15.7
Rep. de Corea	210	346	64.8
Chile	206	232	12.6
México	150	261	74.0
Colombia	118	217	83.9
Brasil	213	316	48.4
Honduras	72	90	25.0
Pakistán	26	88	238.5

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de UNDP (2000), pp. 198-201.

progreso social asociado a la modernización está en crisis, lo que genera una cierta desorganización en términos socioculturales y una pérdida de referentes significativos que permitan sentirse parte de un proyecto colectivo común. Otros dos importantes fenómenos asociados a la globalización de la política son, por un lado, la evidente instrumentalización de la política internacional en torno a los intereses de Estados Unidos, sobre todo en lo concerniente a las políticas financieras y militares y, por el otro, la concentración de poder de las empresas transnacionales así como de los ingresos frente al aumento de las desigualdades en la distribución de los mismos; ello en un marco de aparente despolitización en un mundo cada vez más internacionalizado pero menos integrado en términos de valores y horizontes comunes. Este panorama requiere reflexionar de manera responsable sobre las posibilidades del desarrollo democrático y sobre sus contenidos.[5]

En el campo de la cotidianidad de la gente y de la cultura, la velocidad de transmisión de la información, la variedad de sus contenidos y la diversidad de imágenes a las que hoy se tiene acceso, hace que personas distantes en términos espaciales, generacionales, culturales, nacionales, se vinculen a través de los mercados e industrias culturales.[6] Un ejemplo en este

5 Por ejemplo, "en 1960 el 20% de la población mundial que vivía en los países más ricos tenía 30 veces el ingreso del 20% más pobre, y en 1995 tenía 82 veces ese ingreso". Los datos sobre la disparidad entre personas más ricas y más pobres del mundo son aún más escandalosos: "[…] los 225 habitantes más ricos del mundo tienen una riqueza combinada superior a un billón de dólares, igual al ingreso anual del 47% más pobre de la población mundial (2.500 millones de habitantes). [Además:] Las 3 personas más ricas tienen activos que superan el PIB combinado de los 48 países menos adelantados. Las 15 personas más ricas tienen activos que superan el PIB total del África subsahariana. La riqueza de las 32 personas más ricas supera el PIB total del Asia meridional. Los activos de las 84 personas más ricas superan el PIB de China, el país más poblado, con 1.200 millones de habitantes" (UNDP, 1998: 30). Como se ve en el Cuadro 1, la concentración al interior de los países también se reproduce.

6 El impacto de la industria y el mercado culturales es crucial en la redefinición de las identidades culturales, la política y la economía. Según Calderón y Dos Santos (1991, Tesis 15), en América Latina la educación, la ciencia, la tecnología y la industria cultural nacionales están en franca decadencia, al tiempo que crece la incidencia del mercado cultural internacionalizado en la vida cotidiana de las personas, segmentando gustos sofisticados y generalizando un consumo cultural masivo para la mayoría. Este fenómeno está vinculado tanto a los avances en la tecnología de información como a la reestructuración económica global y constituye un nuevo campo de dominio.

sentido es el de los migrantes que mantienen, de diversas maneras, identidades culturales originarias en otros países ayudados hoy por la tecnología virtual que les permite interconectarse con otros con quienes las comparten y así construir espacios comunitarios virtuales donde intercambian mensajes, compran, venden o miran y transmiten sus propios deseos y valores en un "lugar" sin fronteras y donde las distintas temporalidades confluyen

en un único tiempo simultáneo.[7] Este es un ejemplo de la porosidad de las fronteras; pero no significa que la nación como forma de organización y núcleo de valores y creencias que reflejan una identidad vaya a desaparecer en los espacios virtuales, sino que es preciso redefinir qué papel cumplirá en el nuevo contexto, tomando en cuenta las aspiraciones de sus ciudadanos, los rasgos más profundos de sus identidades culturales y la vivencia de su historia registrada en la memoria colectiva, para desde allí fortalecer la democracia y promover el desarrollo humano.

Por otra parte, en el mundo actual los riesgos también se globalizaron. Las consecuencias negativas de la modernización sobre la ecología, y por tanto sobre los seres humanos, encuentra su origen fundamentalmente en la sobreproducción industrial y los estilos de consumo, y hoy tienen un impacto de alcance planetario, pues ya no amenazan un espacio claramente delimitable o a un sector social específico.[8] Ulrich Beck (1998: 19)

7 Un ejemplo cercano es el de los migrantes bolivianos en Buenos Aires, que resignifican su cultura en un espacio distinto a través de sus fiestas en plazas bonaerenses y su comida (puede encontrarse ají y habas de Bolivia en algunos mercados), se abren espacios de comunicación entre connacionales y con argentinos a través de varias emisoras radiales (algunas de las cuales transmiten en aymara y quechua), como forma de fortalecer redes solidarias que ayuden a los nuevos migrantes bolivianos a encontrar un empleo (aunque en ellas se juegan relaciones sociales también de explotación entre los mismos bolivianos), etc. Véase Calderón y Szmukler (1998) y Grimson (1997 y 2000).

8 Sin embargo, aunque esto es cierto, emergen nuevas desigualdades internacionales cuando se trasladan fábricas a países en desarrollo por los bajos salarios que allí se pagan y para que la polución se genere allí. Esto no evita, empero, el efecto boomerang, pues aunque los riesgos se producen mayormente en países en desarrollo, luego son "exportados" a países desarrollados a través de alimentos, por ejemplo, o simplemente porque un rasgo del daño ecológico es que afecta a todo el planeta, aún produciéndose en un lugar específico (Beck, 1998). El mismo acto terrorista del 11 de septiembre se puede comprender con esta lógica.

alerta sobre la paradoja central de la que él denomina "sociedad del riesgo": el éxito del progreso económico y tecnológico tiende a eclipsarse por los riesgos que produce, pues sus avances se vuelven amenazas a la vida a escala mundial. Los ámbitos de la economía, la política, la tecnología, que funcionan de manera aparentemente más independiente (en consonancia con los procesos de diferenciación funcional), no pueden absorber las consecuencias de los riesgos globales. En el caso de las sociedades latinoamericanas, los aspectos negativos de la diferenciación funcional y el riesgo son más notorios por la fragilidad del Estado de bienestar social y por la poca participación de nuestras economías en la economía mundial.[9]

Cabe preguntarse, en este contexto, cómo las nuevas dinámicas globales inciden en los procesos de diferenciación social en la región, con sociedades que históricamente han sufrido una aguda desigualdad social.

Para sintetizar, es posible caracterizar la situación actual en la región a partir de los siguientes rasgos: i) desestructuración de relaciones de clase y de patrones de organización social clásicos; ii) crecientes distancias sociales que conducen a menores niveles de integración colectiva; iii) pérdida de capacidad de decisión de los movimientos sociales clásicos (por su debilitamiento) y nuevos (por su fragmentación); y iv) reorganización del movimiento social en múltiples actores que promueven temas vinculados a la subjetividad y las identidades pero sin un horizonte de acción común hacia una visión integral de la sociedad. En este marco, el Estado de bienestar basado en el desarrollo industrial no puede reproducirse y emergen, entonces, múltiples conflictos porque se ahondan problemas históricos de exclusión social, inequidad y riesgo y la política no logra dar cuenta de estos cambios en términos de su capacidad de representación.[10]

9 Un dato que refuerza esta visión es que el conjunto de la economía latinoamericana no alcanza al 7% del PIB mundial (World Bank, 1998: 162); asimismo, mientras que en los países más desarrollados se invierte un promedio de 2,4% de su PIB en investigación y desarrollo, en los países en desarrollo sólo se invierte 0,8% (América Latina y el Caribe apenas 0,6%), y en tanto en los primeros el gasto medio en educación pública por alumno es de 5.360 dólares —21% de su PIB per cápita—, en los segundos es de 194 —16% de aquél— (en América Latina es de 465 dólares, 14% de su PIB per cápita) (UNDP, 2001: 41, 57 y 93).

10 Calderón y Lechner (1998).

El aumento de la inequidad en la distribución del ingreso en algunos países de la región (ver Cuadro 1) promueve, entre otros fenómenos, la migración fundamentalmente campo-ciudad de gran parte de la población; pero cuando dicha población llega a las ciudades se encuentra con fuertes límites de acceso al mercado laboral urbano, que no puede absorberla plenamente y en condiciones justas y dignas, lo que refuerza la exclusión social, económica y cultural.

Las ciudades, además, atraviesan por una suerte de dualismo crónico, donde las distancias sociales se vuelven más patentes por las consecuencias de la desindustrialización y la reconversión industrial a partir de los años setenta y la consecuente informatización de la economía (que repercutieron sobre la acción del movimiento sindical debilitándola), por la presencia de población pobre proveniente del campo, las limitadas oportunidades de movilidad social y la incapacidad de las políticas urbanas de responder a las crecientes demandas de la población; todo esto profundizó la diferenciación social. En los últimos años creció el desempleo y la precariedad laboral así como la tasa de desempleo (ver Cuadros 3 y 4), hecho que afecta negativamente no sólo las posibilidades de acceder a bienes y servicios hoy privatizados, sino también de ejercer una ciudadanía activa y alcanzar individual y colectivamente horizontes de futuro certeros que contemplen la movilidad social y el logro de aspiraciones de mejores condiciones de vida tanto a nivel individual como de las sociedades en su conjunto.

Así, los actuales procesos de modernización asociados a la urbanización no generan las expectativas de progreso social que generaban antes. Ello lleva a la desarticulación social, al aumento de la inseguridad de la vida urbana, al debilitamiento de los lazos sociales y la consecuente fragmentación de la acción colectiva, y a un sentimiento de malestar asociado a la desconfianza hacia los otros y al temor al desempleo que contribuye a la pérdida de horizontes de significación compartidos. Otros rasgos de la diferenciación social urbana en la región son la pauperización de los sectores medios urbanos y el aumento de la desocupación producto de la privatización de servicios públicos.[11]

11 Ver, entre otros estudios recientes, UNDP (Chile, 1998), Karasimeonov *et al.* (1997), UNDP (1994) y Pronagob-UNDP (Bolivia-ILDIS, 1996).

Cuadro 3. Desempleo urbano y precarización laboral

País	Desempleo urbano (promedio simple en %)		Trabajadores asalariados sin contrato de trabajo en áreas urbanas		Fuerza de trabajo asalariada sin seguridad social	
	Período	*%*	*Año*	*%*	*Año*	*%*
Argentina	1990-1997 1998-1999	11.5 13.6	1990 [a/] 1996 [a/]	21.9 33.0	1990 1997	29.9 37.3
Bolivia	1990-1997 1998-1999	5.2 5.1			1989 1997	57.3 61.8
Brasil	1990-1997 1998-1999	5.1 7.6	1990 1996	35.1 46.3	1990 1996	26.9 34.9
Chile	1990-1997 1998-1999	7.0 8.1	1990 1998	15.1 22.2	1990 1996	20.1 19.6
Colombia	1990-1997 1998-1999	10.1 17.4	1989[b/] 1996[b/]	37.5 31.0		
Costa Rica	1990-1997 1998-1999	5.3 5.8			1990 1997	22.5 26.2
El Salvador	1990-1997 1998-1999	7.9 7.3			1997	45.6
México	1990-1997 1998-1999	3.8 2.9	1989 1998	32.4 37.7	1989 1996	36.3 35.6
Paraguay	1990-1997 1998-1999	5.9 8.0	1995	64.9	1995	64.4
Perú	1990-1997 1998-1999	8.5 8.8	1989[c/] 1997[c/]	29.9 41.1		
Uruguay	1990-1997 1998-1999	9.8 10.7			1981 1997	2.8 3.9
Venezuela	1990-1997 1998-1999	9.6 13.1			1997	38.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, 2000 (pp. 39, 100 y 102), sobre la base de cifras oficiales y tabulaciones especiales de encuestas de hogares. La precarización laboral se comprende aquí como falta de contrato y de seguridad social de empleados.

a/ Gran Buenos Aires: industria y servicios. b/ Industria, construcción y servicios. c/ 10 áreas metropolitanas: industria, construcción y servicios.

Cuadro 4. América Latina: evolución de la tasa de participación y desocupación (en porcentajes)

	Total nacional					Zona urbana					Zona rural				
	1990	*1994*	*1997*	*1999*	*2002*	*1990*	*1994*	*1997*	*1999*	*2002*	*1990*	*1994*	*1997*	*1999*	*2002*
Tasa de participación	61.0	61.6	62.0	62.4	65.0	59.6	60.5	61.2	61.6	64.3	64.8	64.9	64.9	64.9	67.3
Hombres	84.9	84.3	83.8	83.6	81.0	81.4	81.2	81.1	81.0	78.9	93.7	92.8	92.0	91.5	87.7
Mujeres	37.9	39.7	41.1	42.0	49.7	39.5	41.4	42.8	43.7	50.9	33.1	34.3	35.2	35.8	44.9
Tasa de desocupación	4.6	5.8	6.7	8.6	9.0	5.5	7.3	8.5	10.8	10.7	2.2	1.5	1.5	1.3	3.9
Hombres	4.3	5.1	5.7	7.2	7.7	5.4	6.5	7.4	9.4	9.3	2.0	1.7	1.4	1.2	3.2
Mujeres	5.1	7.2	8.7	11.2	11.1	5.7	8.7	10.3	13.3	12.7	2.9	0.8	1.6	1.6	5.2

Fuente: CEPAL, 2004, p. 158.

En el campo también aumentó la distancia entre empresarios agrícolas y campesinos, grupos que internamente son muy heterogéneos: por ejemplo, los empresarios comprenden desde aquellos que incorporaron alta tecnología hasta latifundistas que mantienen relaciones precapitalistas de producción; por su parte, los campesinos se dividen entre aquellos que tecnificaron sus sistemas productivos y los semi-asalariados o asalariados sin tierras (la gran mayoría) con un acceso muy limitado a los mercados. Esta diferenciación económico-productiva se expresa en su accionar social y político: así, los campesinos con ventajas productivas están mejor organizados en torno de la defensa de sus intereses, mientras que los campesinos más pobres tienen menor capacidad de expresar organizadamente sus demandas y sus posibilidades de ejercer ciudadanía son más bajas.[12]

12 [12] Calderón, Chiriboga y Piñeiro, 1992: 55. Las políticas estatales en el ciclo de ajustes económicos fueron anti-campesinas y redujeron las capacidades de diversifica-

Sin embargo, los procesos descritos suceden paralelamente a la democratización en la región, dejando en evidencia un desajuste entre las aspiraciones de integración política propias de la democracia y la exclusión social que genera el funcionamiento de la economía; dicho desajuste explica en parte la emergencia de condiciones autoritarias y/o populistas en varios países de la región.

Todos estos cambios repercutieron en las formas de hacer política, pues los movimientos sociales clásicos se fragmentaron y hoy son más reactivos que propulsores de proyectos comunes y su accionar es más aislado y local. Esto influye, asimismo, en una disminución del poder del movimiento sindical para negociar demandas laborales colectivas, en una menor capacidad de representación de los partidos políticos, que no alcanzan a procesar los cambios descritos y los límites de la responsabilidad estatal, y en la multiplicación de variados y segmentados movimientos sociales que no proponen visiones abarcadoras del conjunto de la sociedad sino que se quedan atrincherados en sus demandas particulares. Las consecuencias políticas de la diferenciación, entonces, pueden resumirse en la disminución de la representación social y la consecuente merma de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Los rasgos descritos de la diferenciación social fueron reforzados por los procesos de ajuste estructural que redujeron la dinámica económica y social estatal; sin embargo, en la práctica social y política persiste el clientelismo entre el Estado y la sociedad. Frente a la pérdida de soberanía estatal, el poder emergente de los mercados financieros globalizados viene unido a la búsqueda de hegemonía de Estados Unidos, contexto en el cual América Latina participa de manera subordinada. El nuevo eje de poder vincula a las empresas transnacionales, a los grupos nacionales más concentrados y al sistema de partidos en el juego político; esta alianza permitió realizar reformas modernizadoras en la economía y en los Estados nacionales de la región, permitiendo que de alguna manera se integrara a la globalización, pero los mecanismos políticos no cambiaron y persiste una intermediación entre Estado y sociedad de carácter patrimonialista y clientelista heredada de los regímenes nacional-populares de la segunda mitad del siglo XX. Las reformas

ción y reproducción social en el campo. Sobre este tema puede verse, entre otros, Bartra y Otero (1988), Chonchol (1990) y Warman (1988).

políticas liberales en los últimos años fueron más de forma que de fondo, lo que contribuyó a deslegitimar aún más el régimen democrático en el continente.

En resumen, la globalización agudizó los procesos de diferenciación social en América Latina, produciendo un escenario altamente complejo de desigualdad creciente, caracterizado por una mayor exclusión y fragmentación económica y social, niveles más altos de inequidad de las estructuras sociales, un debilitamiento de la cohesión social y la consecuente dificultad para encarar procesos de cambio y una crisis del Estado que deja en evidencia la incapacidad de sus instituciones para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía.[13] Parece necesario, sin embargo, analizar más detenidamente la relación entre desigualdad y pobreza en la región desde una visión que no sólo aspira a explicar o comprender los elementos económicos que promueven la situación descrita, sino que más bien apunta a vincular estas tendencias con las posibilidades de ejercicio de una ciudadanía activa que apunte al logro de mayores niveles de desarrollo humano.

2. Desigualdad y pobreza en América Latina (caracterización de la situación de desigualdad y pobreza en América Latina)

2.1. Pobreza, exclusión y ciudadanía

Tomando distancia de una definición de la pobreza en términos de ingresos bajos o insuficientes para que las personas puedan satisfacer una canasta básica de bienes y servicios, se plantea una noción "relacional" de la pobreza, es decir, una noción que supone comprenderla en los marcos de relaciones sociales desiguales y en términos de carencia de capacidades para ejercer ciudadanía por parte de la población pobre. En esta línea, la pobreza no se mide únicamente en términos de capacidades económicas, sino también de capacidades políticas y sociales de acción, que van unidas a posibilidades de ejercer conocimientos aprendidos y ciudadanía; esta noción, asimismo, se inspira en una idea de justicia que apunta a hacer efectivos la igualdad y el pluralismo.

13 Sobre la complejidad del proceso de modernización-globalización, ver, entre otros, Dahrendorf (1995), Germani (1985), Giddens (1995), Haferkamp y Smelser (1992). Para Latinoamérica puede consultarse Calderón y Lechner (1996).

Esta noción de pobreza adquiere particular importancia en América Latina, pues históricamente los pobres siempre se asociaron a un "otro" amenazador, y por lo tanto existe una tendencia a excluirlo no sólo a través de prácticas sociales cotidianas, sino también de prácticas políticas basadas en patrones político-culturales de acción negadores de esos "otros". Por ello se plantea aquí la necesidad de pensar el desarrollo humano en la región vinculando la pobreza a la vigencia de una cultura de la desigualdad y a la necesidad de hacer efectiva la ciudadanía.

Asimismo, parece necesario entender la pobreza de manera diferenciada, pues la pobreza urbana es distinta a la rural, pero también existen diferencias entre los pobres según categorías tales como género, generación, cultura, origen étnico. Estas diferencias tienen que ver con formas particulares de funcionamiento de la economía, la cultura y la política. Esto implica que la pobreza es un fenómeno complejo al cual debe enfrentarse desde una perspectiva que integre, de manera crítica, sistémica y participativa, sus particularidades.

La pobreza es un serio obstáculo para el desarrollo humano y los mecanismos de solución deben ir de la mano con el logro de mayores niveles de igualdad y libertad política.[14] En tal sentido, los valores y las aspiraciones de los individuos y sus colectividades son diversos y constituyen el núcleo central del debate sobre qué se pretende lograr en términos de igualdad, ciudadanía y desarrollo. En este enfoque, los significados culturales de la pobreza pueden variar según las sociedades particulares y este es un factor fundamental para comprenderla y trazar posibles salidas.[15]

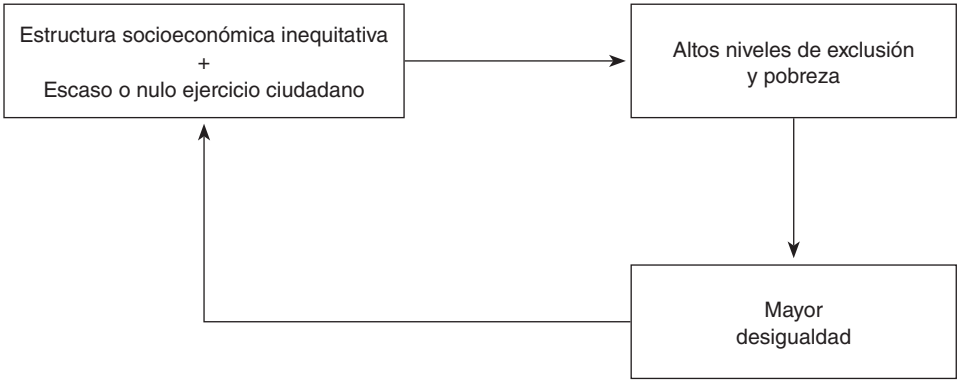
El tema de la pobreza debe considerarse en un mundo que tiende a una modernización excluyente y donde los fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos, ecológicos son cada vez más globales; es decir, en un mundo cada vez más complejo cuyos rasgos centrales son, como se dijo, la creciente diferenciación social y funcional,

14 Sen (1999).

15 La pobreza tiene, por ejemplo, distintos significados en la cultura occidental y en la andina. Para la primera, el término proviene del latín *pouvertas*, que significa estéril, improductivo; mientras que para la segunda, se utiliza el término quechua *waqcha* o *waycha*, que significa huérfano, sin padre, madre o comunidad, es decir, sin lazo social. Por eso es distinto ser pobre en el norte de Potosí que en una calle de Manhattan.

la fragmentación económica y social, la inequidad de las estructuras sociales que impiden mayores niveles de cohesión social y la crisis del Estado y de las instituciones democráticas y ciudadanas.[16] Todos estos aspectos afectan directamente a los pobres y refuerzan una percepción de aumento de la desigualdad.

Para graficar lo dicho, puede considerarse que la relación entre estructuras socioeconómicas inequitativas y el escaso o nulo ejercicio ciudadano llevan a una mayor exclusión y pobreza cuyo efecto es el aumento de la desigualdad, lo que, en un círculo vicioso, genera más inequidad de la estructura socioeconómica y debilita la ciudadanía.



16 Véase para este tema, entre otros, Dahrendorf (1995), Germani (1985), Giddens (1995), Haferkamp y Smelser (eds.) (1992). Para la situación latinoamericana puede consultarse Calderón y Lechner (1996).

Es necesario, ante este diagnóstico, preguntarse qué resultados tuvieron las políticas contra la pobreza implementadas en América Latina y en qué medida contribuyeron a aumentar las capacidades de la población empobrecida. Asimismo, qué papel jugó el Estado y cómo los procesos de globalización económica afectaron a nuestras sociedades en términos de las posibilidades de reducir la pobreza y la desigualdad.

Una mirada sobre las políticas sociales paliativas de la pobreza

Las políticas sociales focalizadas fueron aplicadas por los Estados latinoamericanos para contrarrestar los crecientes niveles de pobreza a partir de la década del ochenta. La focalización de la política social consiste en una racionalización del gasto en la que se priorizan problemas y poblaciones específicas con el objetivo de llegar a aquéllos que más necesitan. Para ello es preciso establecer de manera eficiente la población que será beneficiada e idealmente promover la participación de la misma en el proceso de planificación y elaboración de las propuestas de las políticas sociales. Desde este enfoque se pretendía, asimismo, dar una respuesta a los procesos de diferenciación vinculados a la modernización y el ajuste estructural.[17] Pero, dados los resultados, pareciera que en lugar de mejorar la situación de los más pobres, sólo racionalizó el asistencialismo sin atacar las raíces estructurales de la pobreza.

La reestructuración de la economía y la consecuente modernización del aparato estatal encarada durante esos años supuso una concepción de los excluidos en tanto necesitados y no en tanto ciudadanos. Los pobres, en esta perspectiva, son personas carenciadas a quienes hay que asistir y no ciudadanos con derecho a participar en las decisiones que, entre otras, apuntarían a políticas de reducción de la pobreza. El enfoque asistencial se sostiene en una mirada "privatizada" de la sociedad y en el aislamiento de los individuos sobre sí mismos; precisamente sobre este enfoque se aplicaron la mayoría de las políticas sociales en la región.[18]

17 CEPAL (1995).

18 Rosanvallon sostiene que el reconocimiento de la diversidad cultural, al valorizar la tolerancia y el respeto hacia el otro, oculta que valores como la solidaridad y la igualdad (entendida en algún nivel) se debilitaron, lo que llevó a un reforzamiento del individualismo que produce un quiebre del lazo social y de los imaginarios colectivos. Así, el autor (1995: 68)

Cuadro 5. América Latina: Jefatura femenina en hogares urbanos

País	Año	Jefatura femenina de hogar (%)
Argentina [a/]	1994	23.8
	1999	27.6
	2002	28.6
Bolivia [b/]	1994	18.2
	1999	20.4
	2002	23.5
Brasil [c/]	1995	22.1
	1999	25.4
	2001	26.3
Chile	1994	22.4
	1998	24.0
	2000	24.3
Colombia	1994	24.2
	1999	28.8
	2002	30.3
Costa Rica	1994	24.0
	1999	27.9
	2002	28.4
Ecuador	1994	18.7
	1999	20.1
	2002	21.4
El Salvador	1995	30.8
	1999	31.4
	2001	35.3
Guatemala	1998	24.3

dice: "Los valores sociales centrales son la tolerancia mucho más que la solidaridad y la imparcialidad mucho más que la igualdad. La 'buena sociedad' es aquella que permite la coexistencia pacífica de las diferencias; ya no es más aquella que asegura la inserción. El principio de ciudadanía no implica más una exigencia de redistribución en este contexto, él se reduce a la confianza común en la ley civil organizadora de la autonomía". Sobre el mismo tema puede verse también Fraser (1995).

País	Año	Jefatura femenina de hogar (%)
Honduras	1994	25.0
	1999	30.3
	2002	31.4
México	1994	17.0
	1998	19.4
	2002	21.4
Nicaragua	1993	34.9
	1998	34.5
	2001	34.2
Panamá	1994	27.0
	1999	27.4
	2002	28.9
Paraguay	1994	23.7
	1999	27.3
	2002	29.6
Perú	2001	22.1
Rep. Dominicana	2002	34.2
Uruguay	1994	27.1
	1999	30.5
	2002	32.3
Venezuela	1994	24.6
	1999 d/	27.2
	2002 d/	28.8

Fuente: CEPAL, 2004 (p. 147).

a/ Período 1994: Gran Buenos Aires + 18 aglomerados. Período 1999: Gran Buenos Aires + 26 aglomerados. Período 2002: Gran Buenos Aires + 30 aglomerados.
b/ Período 1994: 7 departamentos más la ciudad de Trinidad. Período 1999: 8 departamentos más la ciudad de Cobija. Período 2002: 9 departamentos.
c/ Período 1994: 7 áreas metropolitanas más resto urbano. Período 1999 y 2002: 10 áreas metropolitanas más resto urbano.
d/ Total nacional.

Cuadro 6. Gasto social por sectores en los años noventa como porcentaje del PIB 1991-1992 y 1998-1999

País	Educación		Salud y nutrición		Seguridad social		Vivienda, agua, saneamiento	
	1990-91	*1998-99*	*1990-91*	*1998-99*	*1990-91*	*1998-99*	*1990-91*	*1998-99*
Argentina	3.3	4.7	4.0	4.6	8.3	8.7	2.1	2.5
Brasil	3.7	3.9	3.6	3.4	8.1	11.5	2.7	2.2
Chile	2.6	3.9	2.1	2.8	7.0	7.5	1.4	1.8
Colombia	3.2	4.7	1.2	4.1	3.0	5.2	0.6	1.0
Costa Rica	3.8	4.4	5.0	4.9	4.9	5.9	2.1	1.8
México	2.6	3.8	3.0	2.1	0.3	2.3	0.7	0.9
Perú	1.3	2.2	0.7	1.3	1.1	2.8	0.1	0.5
Uruguay	2.5	3.3	2.9	2.8	11.2	16.3	0.3	0.5

Fuente: CEPAL (2001: 26).

En esta concepción, que despoja al pobre de su ciudadanía y lo ve separado de un contexto de relaciones sociales desiguales, las políticas sociales son más un paliativo que un ataque efectivo de inequidades estructurales. Así, las políticas sociales se vuelven una cuestión de gobernabilidad frente a demandas fragmentadas de la sociedad. A estos rasgos básicos de las políticas sociales, hay que agregar que en la región su aplicación estuvo unida al clientelismo político con muy poca participación de la población a la cual beneficiaría, con dos efectos: por un lado, limitó sus alcances en la disminución de la pobreza y por el otro, no contribuyó al fortalecimiento de la ciudadanía.

Los procesos de reestructuración económica no implicaron mayor empleo ni mayor equidad en la distribución del ingreso, si bien, de manera irregular, se modernizaron las economías latinoamericanas y hubo crecimiento en algunos países. Los más perjudicados fueron los niños y adolescentes trabajadores y las mujeres trabajadoras; en este sentido, cabe notar que aumentó el número de jefas de hogar (como se observa en el Cuadro 5 para el caso de los hogares urbanos) y que las mujeres siguen siendo discriminadas en el mercado laboral.

En cuanto al gasto social, destaca una orientación progresiva, como se observa en el Cuadro 6; sin embargo, el aumento de los gastos en seguridad social, incrementados en casi todos los países, opaca dicha orientación progresiva pues constituye un elemento que afecta de manera regresiva la distribución global del gasto.[19] Como puede observarse, entre 1990 y 1999 en casi todos los países latinoamericanos aumentó el gasto social en educación, salud, vivienda, agua y saneamiento y en seguridad social, siendo ésta el área en que más aumentó.

En general, los resultados de las políticas sociales focalizadas, más allá de algunos logros puntuales y de los esfuerzos de los gobiernos, muestran su insuficiencia para enfrentar la complejidad de los procesos de modernización y la inequidad de la estructura socioeconómica de nuestros países, inequidad que finalmente lleva a un aumento de la pobreza.[20] Así, su aplicación en realidad pretendió dar alguna legitimidad a los programas de ajuste estructural entre los sectores poblacionales más perjudicados por dichos programas. Las políticas sociales focalizadas se transformaron, de este modo, en una respuesta compensatoria de las elites privilegiadas a la pobreza, preferible para ellas a una reversión de las tendencias regresivas de distribución del ingreso. Por otra parte, esta orientación de la política social hizo que muchas veces no llegara a los sectores más empobrecidos, los que, además, por no tener gran capacidad de acción orga-

19 CEPAL (1994).

20 A pesar de los esfuerzos nacionales, la política social focalizada no redundó en una disminución efectiva de la pobreza porque no estuvo orientada a resolver problemas estructurales y mantuvo su carácter compensatorio. Según CEPAL (2001: 14), entre 1990 y 1999 la lucha contra la pobreza en la región alcanzó éxitos moderados, y aunque unos países tuvieron mayores éxitos, ninguno logró disminuir los niveles de pobreza a los que existían en la década del setenta. Estos magros resultados se deberían a la desigual distribución de los costos sociales del ajuste y a las tendencias regresivas de la distribución del ingreso. Los sectores pobres y medios fueron los más afectados, estos últimos debido a la privatización de empresas públicas y al consiguiente achicamiento del aparato del Estado. La desocupación y la precariedad laboral afectaron sobre todo a los más pobres, dado su escaso nivel de calificación y porque la pérdida de un salario en estos hogares modifica de manera radical su situación. Estas tendencias se produjeron incluso a pesar del aumento del PIB, hecho que desmiente la idea de que cuando el crecimiento económico es mayor descienden los niveles de pobreza; esto no fue así, al menos en términos de la estructura de ocupación laboral, ya que ella se modificó en perjuicio de los sectores menos favorecidos y menos calificados.

nizada tampoco participaron en su propuesta y fiscalización, estableciéndose una distancia entre la eficiencia económica y la eficacia social de las políticas sociales.

Los análisis críticos de las políticas sociales focalizadas fueron más bien de carácter técnico, en tanto políticas complementarias a las económicas, dejando de lado un debate de sus efectos sobre las bases estructurales de la exclusión y la pobreza. Asimismo, la escasa participación de la población afectada, que es la más empobrecida, en torno a las políticas sociales es un elemento que refuerza el círculo de inequidad, falta de ciudadanía, desigualdad y pobreza, porque es precisamente la población más pobre la que también sufre los mayores niveles de exclusión social y política y cuya capacidad de ejercer presión y de participar en procesos deliberativos, por consiguiente, es escasa. Lo central en este debate, según nuestro entender, no son las políticas sociales por sí mismas sino los límites que imponen la estructura socioeconómica y el sistema político a la participación y la deliberación de los ciudadanos.[21]

De lo antedicho se desprende como central la necesidad de trabajar los temas de la exclusión social y la pobreza en términos de ciudadanía y

21 Considerando la experiencia asiática se destacan algunos requisitos sociales y políticos para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; entre ellos pueden mencionarse: fuerte intervención estatal en la orientación del desarrollo económico, a través de la regulación del funcionamiento del mercado; atención a los factores institucionales del desarrollo económico; alta efectividad de la política industrial con perspectiva de largo plazo; liderazgo político con visión de integración nacional; compromiso del sector privado con el desarrollo del país; altos niveles de movilidad social y de cohesión social; inicial distribución relativamente equitativa del ingreso; estructura social igualitaria basada en la extensión de la educación básica y el acceso a oportunidades de educación superior, en una justa distribución de capitales, incluyendo la tierra, y en la creación de oportunidades para la emergencia de nuevos empresarios; sentido de identidad nacional. Contrariamente a los principios ideológicos de los programas de ajuste estructural, esta experiencia demuestra que la distribución equitativa del ingreso, la extensión de la educación y la inversión en recursos humanos, la reforma agraria y un progresivo nivel de empleo, entre otros, son requisitos previos al desarrollo económico y no consecuencias de éste. No se plantea aquí trasladar ese modelo de desarrollo a la región, pero se debería aprender de él para relativizar un modelo de mercado con los efectos ya mencionados en términos de la política social. Para ganar efectividad y sostenibilidad, las políticas públicas deberían dirigirse a reforzar las capacidades de la gente y relacionarlas con las oportunidades; de este modo, se vincularía oferta y demanda de capital humano, disminuiría el desempleo y se lograría mayor equidad en la distribución del ingreso, lo que generaría mayores niveles de integración social. Véase, entre otros, Ohno (1996) y UNDP (1996).

cultura deliberativa, pues dadas las condiciones de exclusión y diferenciación social en la región, la pobreza constituye un problema pre-ciudadano. En este sentido, la región atraviesa por una tensión entre los procesos de democratización (más allá de sus límites) y los altos niveles de exclusión económica y política (como resultados de los programas de ajuste estructural).

Los pobres deben ser considerados no como personas cadenciadas a las que hay que asistir, sino como ciudadanos con derechos y capacidad de deliberación y participación política. Hoy son vistos desde una cultura de desigualdad impulsada por un "fundamentalismo de mercado" desde la cual se niega a quien no accede al consumo. Desde la perspectiva que aquí se plantea, es necesario articular los logros institucionales, el acceso al mercado y el ejercicio ciudadano, para promover un desarrollo humano socialmente incluyente a partir de espacios deliberativos donde la igualdad ciudadana sea un eje.

Hacia una idea más compleja del concepto de pobreza

Las ideas sobre la pobreza difieren histórica y culturalmente.[22] Una definición más generalizable puede encontrarse en Sen (1995: 27) cuando, a partir de concebir la pobreza como privación frente a la cual es una obligación de la sociedad tomar medidas, plantea que "la pobreza [puede comprenderse] como carencia de capacidades básicas para alcanzar determinados niveles [de vida] mínimamente aceptables. Los funcionamientos pertinentes para este análisis van desde los físicamente elementales, como estar bien nutrido, o vestido y protegido adecuadamente, o libre de enfermedades que pueden ser prevenidas, etc., hasta logros sociales más complejos, tales como participar en la vida de la comunidad, poder aparecer en público sin avergonzarse, y así sucesivamente". La forma e importancia que de cada uno de estos funcionamientos y aquello considerado como privación, cambia según la sociedad de que se trate. En este planteamiento existe la intención de comprender lo que tiene de general y de particular el fenómeno de la pobreza, dando énfasis a los aspectos políticos y culturales que inciden en él, y cuestionar una visión reduccionista del fenómeno que vincula la pobreza sólo con los bajos ingresos.[23]

22 Un análisis de los distintos significados del concepto de pobreza puede encontrarse, entre otros, en Argüello y Franco (1982), Boltvinik (1990), David (1994[a]) y Sen (1989 y 1995).

23 "Si queremos identificar la pobreza en términos de ingresos, no podemos mirar solamente a los ingresos

En esta misma línea que cuestiona la visión reduccionista de la pobreza, se ponen en tela de juicio los métodos usados para medirla en diversos países, regiones y grupos de población.[24] Un límite central de éstos es que no logran vincular la satisfacción de necesidades de los hogares con la estructura de distribución del ingreso y con el acceso a los servicios públicos, y tienen dificultades para captar situaciones coyunturales de pobreza y exposición a la vulnerabilidad de la población.[25] Adicionalmente, las carencias no pueden verse sólo a través de los ingresos pues otras variables, como las capacidades personales para utilizarlos, también dicen mucho sobre los niveles de privación.[26]

La idea de pobreza aquí defendida es aquella vinculada no sólo a sus aspectos económicos y

(sean éstos altos o bajos) independientemente de la capacidad de funcionar derivada de esos ingresos. La suficiencia de los ingresos para escapar de la pobreza varía paramétricamente con las características y las circunstancias personales" (Sen, 1995: 127).

24 Los métodos más utilizados son el de Línea de Pobreza (LP), el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Método Integrado de LP y NBI, todos ellos basados en datos estadísticos. Por su parte, para medir el nivel de desarrollo se utiliza el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador principal y se agregan otros indicadores que complementen la visión. El problema principal de estas formas de medir la pobreza y el desarrollo consiste en que no toman en cuenta las relaciones de poder que inciden en el fenómeno ni sus causas estructurales. En el último tiempo, a los métodos cuantitativos se les sumó una exploración de la pobreza de carácter cualitativo centrada en una caracterización del fenómeno por parte de la propia población que lo sufre. Esto supone un cambio en el enfoque del tema, que contempla una visión más plural y acepta la heterogeneidad social y cultural del fenómeno. En general, en este tipo de investigaciones, se destaca la importancia de los límites al ejercicio de las capacidades políticas de las poblaciones empobrecidas, de la estructura institucional y de las barreras sociales y étnicas para el desarrollo. El estudio auspiciado por el Banco Mundial, Voz de los pobres, y muchos otros de carácter nacional (como el Informe de Desarrollo Humano Bolivia, 2000), son un ejemplo de esta nueva línea de investigación.

25 David, D. (1994a: 42).

26 "Algunas veces [problemas como] la edad, la incapacidad o la enfermedad, reducen la capacidad de uno para obtener ingresos y pueden también dificultar la conversión de ingresos en capacidades. Es frecuente que una alta proporción de pobres en los países desarrollados sufra estos problemas y la extensión de la pobreza en dichos países se infravalora sustancialmente, dado que sobrevalora los ingresos obtenidos y los ingresos utilizados en la generación de capacidades. […] Las desventajas en la utilización de los ingresos pueden agravar sustancialmente el característico bajo poder adquisitivo de determinadas personas afectadas por desventajas" (Sen, 1995: 130).

de insatisfacción de necesidades básicas, sino también al acceso a bienes, servicios, derechos y actividades políticas, base del ejercicio ciudadano en una cultura política deliberativa más igualitaria. Los límites al ejercicio ciudadano muchas veces van unidos a una cultura política elitista y desigual que incluye prácticas de discriminación étnica y de género, la explotación de menores, o la extra-legalidad que vivencian cotidianamente los pobres.

De Soto (2001) tiene una visión particular sobre el tema de la extra-legalidad. Él sugiere que el límite central a la solución de la pobreza en los países en vías de desarrollo radica en que la población afectada no puede acceder a sistemas legales formales para "capitalizar" sus "activos" (sus bienes) por los altos costos económicos y en términos de tiempo. Frente a ello, dicha población crea sus propios sistemas extralegales que, aunque no los habilita para interactuar con los sistemas formales, permiten dar legitimidad a sus bienes y actividades en su comunidad. La solución sería hacer concordar los sistemas legales con los extralegales, es decir, reconociendo legalmente aquello que representa una gran proporción del PIB de las economías y de la actividad laboral latinoamericana.[27]

Sin embargo, la extra-legalidad a la que los pobres están expuestos simplifica el problema de la pobreza, pues los pobres sufren una exclusión ciudadana que no les permite participar plenamente en los sistemas de toma de decisión, y no solamente una exclusión de los marcos legales que les permita garantizar sus propiedades y trabajar formalmente; el problema principal no se resuelve únicamente a través de un reconocimiento legal en este sentido, sino sobre todo en un aumento de su capital individual y colectivo que les permita ejercer su ciudadanía. Además, la situación de los pobres no puede quedar a expensas sólo de un gobierno o de sus líderes; ellos deben contar con mecanismos institucionales y participativos no formalizados institucionalmente que les permitan plantear sus intereses, necesidades y de-

27 Sin embargo, el autor parece partir de una premisa falsa (expresada ya en el subtítulo del libro: "Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo"), pues ignora la pobreza que existe en los países desarrollados; asimismo, sus conclusiones se basan en datos periodísticos y no en investigaciones académicas empíricas, lo que resta seriedad al análisis. En su análisis tampoco se explican los costos y beneficios que tendría la gente al entrar en el sistema legal formal ni se ven los mecanismos de inclusión legar, por ejemplo de changadores, empleadas domésticas, lustrabotas, cartoneros, vendedores ambulantes. ¿Cómo defenderían sus intereses para que el sistema legal los beneficie?

mandas. Asimismo, es necesario estar informado y capacitado para usar dicha información, para participar dentro de los sistemas legales, lo cual es otro límite que va más allá de la inclusión legal. Estas ideas, por último, suponen una visión estrecha de la pobreza que sólo la vincula a una dimensión económico-legal cuya resolución quedaría únicamente en manos de la voluntad de los gobiernos, sin tomar en cuenta la complejidad cultural, social, política y económica del fenómeno. Estas críticas, empero, no pretenden restar importancia al tema de la legalidad económica y laboral, sino destacar que una comprensión más compleja de la pobreza, en relación con la inequidad distributiva y los límites ciudadanos, es central a nuestro entender. Incluir en los sistemas legales las propiedades y actividades de la población pobre desde ya mejoraría su situación, pero no eliminaría la precariedad de sus viviendas ni mejoraría la calidad de su educación, entre otros. La solución al problema de la pobreza es más compleja de lo que plantea De Soto, quien además no incluye a los mismos pobres como participantes indispensables para tomar decisiones que contribuyan a mejorar su situación.

Creemos que para superar la pobreza es indispensable lograr niveles aceptables de integración, participación y deliberación social; es decir, construir sociedades y economías más equitativas. La superación de la pobreza requiere la realización de un proyecto de largo plazo destinado a modificar las bases estructurales de la misma, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el acceso a recursos productivos, la capacitación y valorización de las personas, la acción social organizada y el fortalecimiento de lazos de solidaridad.[28]

Aquí se hace hincapié en el vínculo entre la calidad del crecimiento económico y la calidad y capacidad de la participación social y política. Asimismo, se postula que el ámbito de la producción está fuertemente ligado al de la integración social y que ambos, entonces, son un tema político. En tal sentido, el debate sobre cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano y equidad, debe involucrar al conjunto de la sociedad, porque la orientación del desarrollo y las políticas sociales que la acompañen son temas políticos prioritarios en los que deben participar todos los actores involucrados en un contexto democrático deliberativo. El interrogante que se abre aquí es cómo lograr fortalecer espacios deliberativos con una historia de desigualdad presente en las

28 David (1994b).

prácticas y la cultura política latinoamericana, tema que se trata a continuación.

3. Las culturas políticas de la desigualdad

La cultura política es el conjunto de ideas, sentimientos, valores, información, actitudes y capacidades políticas, que se manifiesta en la práctica política de los ciudadanos, grupos, líderes y comunidades, así como en su memoria histórica, en los modos en que elaboran las dinámicas políticas, sociales, culturales y económicas de su país, y en los significados que dan a la vida política.[29]

Una vía para estudiar la cultura política sería analizar las disposiciones de las personas y grupos sociales hacia el sistema político, los procesos políticos y las políticas concretas[30]; según cómo sea el grado de disposición hacia estos tres elementos de la política nacional será el nivel de legitimidad de los gobiernos y regímenes políticos nacionales. Y aunque estas disposiciones no son homogéneas, pueden indicarse tendencias generales que permitan definir una cultura política específica.

La cultura política también consiste en las formas y medidas en que se distribuyen los conocimientos de las instituciones, las prácticas y las fuerzas políticas; cuáles son las principales orientaciones políticas (nivel de confianza, racionalidad, burocracia, clientelismo, paternalismo, tolerancia, obediencia a la ley, reconocimiento del otro) y cuáles son y cómo se establecen las normas (qué derechos y deberes tienen los ciudadanos, la obligación de aceptar las decisiones de la mayoría, etc.).[31]

Otros factores importantes son el nivel de adaptación de la cultura política a las estructuras y las prácticas políticas, el peso de la historia y la pertenencia a subculturas específicas; ello, sin embargo, no niega las posibilidades de cambio, pues las actitudes de los ciudadanos

29 Esta definición retoma las ideas de Almond y Powell (1992), Bobbio y Mateucci (1985) y Touraine (1997).

30 Las disposiciones hacia el sistema político incluyen las visiones de los ciudadanos y los líderes de las organizaciones que componen el sistema y de los valores en que se basan; las disposiciones hacia los procesos políticos indican el grado de compromiso de los ciudadanos con el planteo de demandas políticas, con el respeto a la ley y con la participación en general; las disposiciones hacia las políticas pueden estudiarse observando en qué medida las políticas concretas de los gobiernos son afines con las expectativas de los ciudadanos (Almond y Powell, 1992: 39-42).

31 Bobbio y Matteucci (1985).

pueden modificarse a partir de la experiencia de nuevos contextos históricos.

Una característica de las culturas políticas latinoamericanas es la exclusión del otro de quienes son considerados distintos, como una forma concreta de negación de la diferencia; esta es una de las principales fuentes de la desigualdad que se fue expresando de diversas maneras según los momentos y los espacios. Así, se plantean tres vertientes de las culturas políticas de desigualdad, a saber, las que se basan en el origen, las que se basan en una idea de cultura y sociedad homogénea y las que se basan en la creencia en la "libre" integración al mercado. La noción de "dialéctica de la negación del otro", que supone un rechazo cultural que inferioriza al "otro" (indígena, mujer, marginal, campesino) y lo excluye social, económica y políticamente, es útil para comprender este rasgo de las políticas culturales en la región. La negación de la cultura del "otro" ocurrió con la conquista, colonización y evangelización y, de otras maneras luego, con los procesos de modernización; los resultados son marginalidad y rechazo, que constituyen un límite importante al ejercicio de la ciudadanía y al mismo régimen democrático.[32]

En síntesis, las culturas políticas de desigualdad se basan en elementos culturales, económicos, políticos: quienes son distintos cultural o étnicamente también son pobres y a la vez tienen dificultades para ejercer sus derechos políticos. Sólo por el hecho de pertenecer a una clase, etnia, cultura y/o género específicos, los individuos y los grupos sufren los efectos prácticos de estas culturas políticas de desigualdad, que se manifiestan en acciones políticas, en la educación, en el acceso a mercados, en las relaciones sociales cotidianas. En lo que sigue se trabaja más puntualmente cada una de las tres culturas mencionadas que coexisten simultáneamente y se refuerzan unas a otras.

3.1. La cultura política de desigualdad ligada al origen

La cultura política de la desigualdad referida al origen surgió con la colonia. Desde ella se interpreta que la igualdad está dada por la pertenencia (por herencia o adscripción) a un deter-

32 En Calderón, Hopenhayn y Ottone (1996) se vio la "negación del otro" como barrera del desarrollo y elemento de un entramado cultural que lo potencia; aquí se plantea, además, su relación con la igualdad y con una cultura deliberativa que permita reconstruir una visión de lo público y del bien común.

minado grupo étnico, socioeconómico, político y/o cultural. El régimen de la hacienda, primero colonial y luego republicana, fue el fundamento socioeconómico de este tipo de cultura.[33]

Al rechazo al indígena, que se inició con la conquista, le siguió el rechazo al "cabecita negra", el mestizo, el mulato, quienes eran considerados inferiores tanto por pertenecer a una cultura distinta a la del español y criollo cuanto por el lugar de explotación que ocupaba en la estructura económico-productiva. No se trata sólo de discriminación étnica, pues se extiende a las relaciones con las mujeres, los jóvenes, los homosexuales, etc. Resulta especialmente relevante la discriminación de la mujer a partir de la negación de sus derechos que en la región surgió durante la colonia pero sucede en las distintas culturas políticas de desigualdad.

En América Latina, producto de la interacción compleja de diversas culturas, la búsqueda de igualdad ha sido conflictiva y nunca plenamente alcanzada, pues el "otro" es más bien rechazado. Esa negación tiene un patrón patriarcal de origen colonial, que se expresa en que las elites, para diferenciarse del otro, lo niegan e inferiorizan.[34] Quienes son rechazados por una elite culturalmente hegemónica reaccionan de diversas maneras: así como pueden renegar de la propia identidad para sentir que están más integrados a la sociedad discriminadora, pueden asumir una resistencia política a partir de la defensa de la identidad entendida de manera fundamentalista.

La discriminación constituye en la región un límite al desarrollo económico, a la democracia y al ejercicio de la ciudadanía, limita así el aumento de las capacidades políticas de las personas y los grupos. Esta cultura de desigualdad vinculada al origen fue la base de proyectos políticos autoritarios y del autoritarismo en la vida cotidiana.[35]

33 Medina E. (1964) destaca los rasgos centrales del régimen de la hacienda desde el punto de vista sociológico; ellos son: "la concentración político-militar y económica; el poder ligado a las familias que se irradiaba al conjunto de las instituciones de la sociedad; ser modelo de autoridad; dar origen a un "tipo humano de un carácter singular". Comentando estas ideas, Faletto (1988: 79) sostiene que "[…] la hacienda fue el fundamento de una […] cultura política".

34 Según Rex (1978: 30), la negación se justificó al "estilo aristotélico": "Si todos los hombres son en principio iguales, los desiguales no pueden ser verdaderamente hombres". Esta frase resume sin escrúpulos un pensamiento elitista que niega cualquier otra identidad.

35 Calderón, Hopenhayn y Ottone (1996).

Una consecuencia nociva de esta forma de concebir la desigualdad son los límites al pleno ejercicio de la ciudadanía, pues quien es negado también es excluido de su comunidad en tanto ciudadano. Así, aunque quienes son negados participen de actividades vinculadas a la producción e intercambio, aunque en general en condiciones muy desventajosas, no son incluidos en tanto ciudadanos con plenos derechos, como, por ejemplo, el derecho a previsión, a salud, a educación.[36] En esta cultura política, el origen (dado por la pertenencia a un grupo étnico o socioeconómico, a una región pobre o rica, a un género) incide fuertemente en las posibilidades de ejercer ciertos derechos.[37]

La discriminación hacia las mujeres es un ejemplo de esta cultura política de desigualdad vinculada al origen. Según diversas investigaciones[38], clase, género y etnia se superpusieron durante la colonia como forma de "justificar" la discriminación de las mujeres. Por ejemplo, mientras en alguna medida se cuidaba el trato de las mujeres pertenecientes a la nobleza incaica (por la clase económica a la que estaban adscriptas), las campesinas fueron objeto tanto de abuso económico como sexual; por su parte, la mujer mestiza fue doblemente discriminada (por ser mujer y por tener orígenes indios), doble discriminación a la que se suma la discriminación de clase, porque además era sirviente del colonizador (blanco) o del criollo (que tenía derechos sexuales sobre ella).

El conjunto de los elementos de esta cultura política estuvo signado por la negación de la igualdad ligada al origen. En el caso de las elites, sus disposiciones hacia el sistema político, los procesos y las políticas, estuvieron marcadas por la negación, o en su defecto por un paternalismo combinado con autoritarismo. Desde esta óptica se justificó la negación a la participación política, social y cultural de indígenas y mujeres[39], se ignoró a estos gru-

36 Walter (1993).

37 Las consecuencias de esta cultura son nefastas, pues para empezar se basa en la negación del otro. Al respecto, Hirshman (1986: 42) sostiene que "Muchas culturas —incluyendo la mayoría de las latinoamericanas que conozco— confieren enorme valor a tener opiniones firmes sobre prácticamente todo desde el principio, y a ganar una discusión en lugar de escuchar y descubrir que a veces se puede aprender algo de los demás. A tal punto que se hallan básicamente predispuestas a una política no democrática sino autoritaria".

38 Por ejemplo Silverblatt (1990), Behar (1993), Mannarelli (1991) y Stolcke (1993).

39 Si en Bolivia, hasta la Revolución de 1952, no se permitía el ingreso de indígenas a las plazas públicas,

pos de las políticas públicas y ellos mismos no tuvieron conocimiento sobre sus derechos políticos y sociales ni de las instituciones y prácticas políticas[40].

En cierto sentido, la influencia de esta cultura política fue contrapesada por la ideología y experiencia nacional-popular, que sostenía la extensión de los derechos ciudadanos. Sin embargo, cuando estos movimientos accedieron al poder estatal vincularon la idea de igualdad social a la adscripción al partido, con un fuerte sentido patrimonial-clientelar, también paternalista y con rasgos autoritarios.

3.2. La cultura política de desigualdad ligada a un patrón clientelar-patrimonialista

Con los regímenes nacional-populares se inició una nueva etapa, en la cual disminuyó la desigualdad dada por la pertenencia a una clase socioeconómica o a una cultura; bajo una subjetividad nacional inclusiva se reconoció como pertenecientes a una identidad cultural homogénea a los distintos grupos y culturas que convivían en el territorio de la nación. Se otorgaron derechos ciudadanos a amplios sectores hasta entonces no considerados iguales políticamente para participar en la comunidad política nacional, se impulsó un sentimiento nacionalista integrador y se consiguió mayor igualdad de oportunidades por el reconocimiento de esos derechos.

El problema central de este enfoque fue que el pueblo se identificaba con la nación y el Estado, como si fuera homogéneo y como si las pertenencias sociales y culturales debieran subsumirse a una identidad nacional y política única. De esta postura se destaca el reconocimiento de quienes eran considerados distintos e inferiores por la cultura política de la desigualdad vinculada al origen, pero su carácter autoritario se centró en el recha-

no es difícil imaginar su situación en términos de exclusión política.

40 A pesar de lo comentado, existieron experiencias de resistencia a esta situación de discriminación y exclusión, como la creación en los años treinta de la Escuela Ayllu (comunidad) Rural de Warisata en el Altiplano boliviano, que propulsó un proyecto emancipatorio y participativo moderno a partir de la historia y el mundo andinos y de la participación de la comunidad (Pérez, 1962). Otro ejemplo en este sentido fue la práctica de la "brujería" por parte de las mujeres indígenas, práctica que les daba un poder simbólico frente a los colonizadores.

zo de la diversidad política y cultural, negando así la complejidad del tejido identitario. La idea de que la comunidad nacional debía construirse en torno del Estado y el partido hizo que se desconociera el desarrollo de una comunidad diferenciada política, cultural y socialmente (pues el "distinto" era considerado enemigo de la Nación), limitándose la integración a lo nacional.

Esta cultura política de la desigualdad con una fuerte impronta clientelar se comprende en términos sociológicos por las características del desarrollo en la mayoría de los países de América Latina. Entre ellos destacan: acelerados procesos de urbanización que se dieron de manera paralela a un limitado crecimiento industrial, generando ciudades terciarias sin industria; informalidad de las relaciones sociales en economías diversificadas de pequeña escala; altos niveles de integración simbólica a través de la extensión del consumo de la cultura popular; proyectos políticos orientados a construir la Nación en torno del Estado y débil desarrollo institucional[41]. Así, se generaron en la región ciudadanos no plenos y ciudadanías políticas que luego fueron avasalladas por regímenes autoritarios.

Cuando la lógica clientelar alcanza a las burocracias ella puede comprenderse como un sistema de control de flujo de empleos y prebendas y como formas de intermediación de intereses entre el Estado y la sociedad. Esta lógica propicia la creación de grupos informales que disputan por los beneficios y recursos del Estado, cuyo resultado es el intercambio de prebendas por legitimidad, lo cual es visto por los involucrados como una práctica natural.

El corporativismo y el clientelismo propios de los regímenes nacional-populares jugaron en favor de quienes apoyaban al régimen y al partido y en contra de quienes se oponían. Así que en realidad el reconocimiento político fue limitado, y aunque se amplió la igualdad social, ella se subsumió en buena medida a estar de acuerdo con una ideología nacionalista o con el partido nacionalista y, en todo caso, a no expresar oposición.

Un ejemplo de este tipo de desigualdad vinculada al clientelismo estatal fue el de los

41 Ver, entre otros, Medina E. (1964), Di Tella (1965). El Zapatismo, por ejemplo, es una respuesta político-cultural a este tipo de cultura que niega las particularidades culturales; en esta misma línea puede interpretarse las actuales protestas de los mapuches en el sur de Chile.

sindicatos campesinos bolivianos durante los años cincuenta[42]. Aunque la revolución de 1952 otorgó derechos ciudadanos a indígenas y campesinos, la identificación con el partido de Estado era una condición política. A diferencia de la base social de los campesinos, la mayoría de sus dirigentes era de extracción media y hablaba español; ellos se convirtieron en intermediarios entre el gobierno y la base. La orientación del sindicalismo campesino varió sustantivamente a partir de 1956, año en que, de liderar la defensa de los intereses campesinos pasó a identificarse con los intereses del partido gobernante y sus dirigentes pasaron de intermediarios a voceros del gobierno. De manera paternalista y clientelar, que consideraba al indígena campesino como "un hermano a ser ayudado a salir de su postración", comenzaron a entregar títulos de propiedad de las tierras a cambio de apoyo político (ésta fue la política dominante hacia el campesinado), y dejaron de lado cuestiones sustantivas como la modernización productiva del campo y su relación con las ciudades y la diversidad cultural presente en las áreas rurales.[43]

El carácter clientelar de los gobiernos nacional-populares irradió sobre todo a las instituciones públicas dirigidas al ámbito social y a las organizaciones de la sociedad civil. Desde esta lógica, el Estado satisfacía demandas sociales para ganar legitimidad política; la debilidad del sistema de partidos contribuyó a la expansión de estas prácticas.

El otro rasgo de los gobiernos nacional-populares que reforzó la lógica clientelar fue su mirada conspirativa hacia quienes no estaban de acuerdo con ellos; éstos eran vistos como amenazadores del proyecto nacionalista y por lo tanto debían ser eliminados al menos políticamente. Esta visión conspirativa se basaba en una gran desconfianza frente a quienes pensaban distinto y en la necesidad de demonizar al otro para descalificarlo en tanto actor político o de cooptarlo para la "causa nacional".

A pesar de todas estas características negativas en términos de la construcción de una cultura política más igualitaria, hay que reconocer que estos gobiernos fueron fundamenta-

42 Estos sindicatos se organizaron en los años treinta y cuarenta, pero la participación campesina creció después de 1952: en 1956 cerca del 80% de las comunidades originarias y el 100% de los campesinos de ex latifundios pertenecían a los sindicatos (Servicio Nacional de la Reforma Agraria, 1970).

43 En síntesis, primó la cooptación política. Véase al respecto Calderón y Dandler (1984).

les en el reconocimiento de quienes eran discriminados por el origen o la adscripción (el pobre, el marginal, el campesino, el indígena, el excluido políticamente hasta entonces), lo cual constituyó un gran avance en el desarrollo político de nuestras sociedades. Ellos generaron condiciones para la integración y la movilidad social y desestabilizaron la visión que las elites tenían de sí mismas, pero el clientelismo y la idea de una identidad homogénea coincidente con la nación, el Estado y el partido, fueron un freno al pleno reconocimiento de los diferentes actores. Por lo tanto, se trató de una cultura política excluyente de quien pensaba distinto, pero inclusiva socialmente de grandes sectores hasta entonces excluidos (aunque a cambio se exigía lealtad política). Sin embargo, desde una perspectiva democrática, una genuina igualdad debe basarse en el reconocimiento pleno de la diversidad.

Un nuevo tipo de cultura política de desigualdad surgió con los procesos de globalización, la crisis de la democracia y la política y la influencia de una ideología de mercado, se vislumbra en la región el surgimiento de un nuevo tipo de cultura política, donde el excluido es quien no puede acceder a los mercados (económicos, políticos, culturales); cultura política que, en lugar de revertir la complejidad de las anteriores, se suma como un tipo de negación que agrega nuevos componentes a las culturas políticas de desigualdad ya comentadas. En lo que sigue, se analizan primero las características de los procesos de globalización y diferenciación que forman el contexto en que vivimos, para pasar luego a indagar sobre esta cultura política de desigualdad vinculada a una concepción fundamentalista de mercado.

3.3. La cultura política de desigualdad ligada al fundamentalismo de mercado

La emergencia de esta cultura política se vincula a un conjunto de factores previos que se vivieron en América Latina; entre ellos sobresalen: i) la derrota de las fuerzas políticas de izquierda que acompañaron la transición democrática luego de las dictaduras militares; ii) la aplicación de reformas estructurales que tuvieron altos costos sociales; iii) los límites de integración a los procesos de globalización económica de la mayoría de los países y regiones; iv) la victoria política de fuerzas conservadoras y elitistas en algunos países, con una orientación en muchos casos discriminadora según el origen.

Es una cultura que apela al mercado, que sería el ámbito racional y natural distribuidor

de oportunidades y un nuevo fundamento para construir un tipo de orden sociopolítico y económico en el que el Estado, la sociedad, el régimen de partidos y la democracia se subordinan a las "leyes" del mercado.[44] Pero no es competencia del mercado integrar social

y/o económicamente de manera eficaz, sobre todo en América Latina donde su dinamismo es escaso. Así, la idea de que una lógica estatal debe resignarse en función de una lógica absolutamente mercantil, es más congruente con una ideología que con la realidad de nuestras sociedades y de nuestras economías, pues aunque con las reformas estructurales hubo una racionalización económica, las economías se integraron muy limitadamente a la globalización, donde prevalecen monopolios y restricciones a ingresar a mercados sumamente protegidos de los países desarrollados.

La lógica de mercado se basa en la racionalidad dada por el logro de máximos beneficios individuales, en una visión de la sociedad donde se desdibuja la idea de bien común y donde los individuos son considerados más consumidores que ciudadanos, y en un aislamiento hacia el ámbito privado que debilita los lazos colectivos y promueve una noción individualista del futuro. La igualdad de oportunidades se vuelve un principio abstracto a partir del cual se limita el acceso generalizado de toda la población a los mismos derechos y no se logra garantizar ni siquiera un trato igualitario a quienes sí los ejercen. En este sentido, se destaca nuevamente que la existencia de estructuras socioeconómicas inequitativas y de culturas políticas que favorecen la desigualdad verdaderamente imposibilitan la igualdad de oportunidades en el mercado; y aunque se reconoce que éste es un factor clave de integración social, en la región fue muy limitado como tal.[45]

Lograr integración social a través del mercado supone que distintos individuos y grupos poblacionales accedan al consumo. Está claro que en los países latinoamericanos este es un límite duro del modelo, pues a las desigualdades históricas se suman los efectos sociales de las reformas estructurales que ampliaron los niveles de vulnerabilidad social y pobreza y provocaron un aumento de la precarización laboral. Para acceder al mercado los individuos deben poder conseguir un empleo en función de sus capacidades adquiridas, las

44 Hinkelamert (1984).

45 Una dura crítica al mercado como utopía neoliberal puede verse en Bourdieu (1998) y Touraine (1999).

que sin embargo hoy no les aseguran dicho acceso con lo cual la percepción de inequidad y de frustración aumenta. Asimismo, las desigualdades en el mercado pueden estar dadas por las diferentes capacidades adquiridas, por la experiencia laboral individual (que incluso puede relacionarse con trabajos que subvaloran la calificación real de la persona), por la privatización económica, etc. No se trata de negar la importancia del mercado en los ámbitos económico y cultural ni su papel modernizador, pero es preciso criticar la visión fundamentalista porque es la base de una nueva cultura política de desigualdad debido a sus limitaciones en términos de integración socioeconómica y política.

Ampliando lo dicho, en esta nueva cultura la igualdad de oportunidades ligada a la adquisición de capacidades a través de la educación, que se basa en la idea de que quien posee más conocimiento también tiene mejores oportunidades en el mercado laboral, y este sería un acto de justicia, es negada por el hecho de que las oportunidades de conseguir empleo dependen cada vez más de la suerte o de las posibilidades de ejercer influencia. El aumento del desempleo, la inestabilidad laboral y la reforma de la seguridad social, favorecen esta percepción incierta de la igualdad, lo que se corrobora cuando personas con niveles semejantes de capacitación tienen un acceso muy diferenciado al mercado laboral.[46] El Estado

46 La percepción de las desigualdades como un fenómeno de injusticia creciente fue trabajada por Sen (1995) y Fitoussi y Rosanvallon (1997). Estos análisis asumen que las desigualdades estructurales (en la distribución del ingreso, el acceso a educación, salud, bienes y servicios básicos) aumentaron, pero además aquellas dadas por diferenciaciones dentro de un mismo sector social, que hasta no hace mucho eran aceptadas porque existía oportunidad de ascenso social, también crecieron generando un sentimiento de injusticia y frustración. Estas desigualdades intra-categoriales replantean, además, el tema de la identidad, pues al ser percibidas como un fenómeno social creciente se erosionan los sentimientos de pertenencia y las identidades sociales. Así, lo que está en juego es el mismo modelo de integración social e incluso nacional de las sociedades dependientes. El estancamiento de la movilidad social (que desalienta una visión esperanzadora de futuro) y las consecuencias de modelos económicos regresivos con consecuencias de aumento de la pobreza con alcance ahora a los sectores sociales medios, acentúan la sensación de malestar. Los individuos se disponen a resolver su situación personalmente de la mejor manera posible para ellos, lo que tiende a debilitar los lazos sociales y el ejercicio ciudadano. La crisis de la ciudadanía, referida al derecho a tener derechos (a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo), pone también en crisis una razón igualitaria, pues los

debería asegurar la igualdad, pues el mercado no puede hacerlo, y trabajar en función del bien público, la ampliación de la ciudadanía y el desarrollo humano.

En este sentido, en el Informe de desarrollo humano 1993 (PNUD, 1993: 37) se sostiene que algunas medidas promotoras de un mercado en función del bien público serían inversiones en educación, salud y capacidades de la gente; distribución equitativa de activos, sobre todo de tierras en las sociedades agrarias pobres; facilidades para que la población empobrecida acceda a créditos; acceso a información de oportunidades que brinda el mercado; suficiente infraestructura física; apoyo a la investigación y el desarrollo; marco jurídico claro; eliminación de barreras vinculadas a factores culturales, de género o religión; estabilidad macroeconómica; sistema de incentivos y régimen fiscal justo; protección de la competencia, los consumidores, los trabajadores, los grupos especiales (mujeres, niños y minorías étnicas) y el medioambiente; fortalecer redes de seguridad social que atiendan a quienes son expulsados del mercado coyunturalmente.

La pregunta es cómo, a partir de nuestras particularidades, es posible lograr un mejor acceso a los beneficios de la globalización, disminuir la exclusión y las inequidades socioeconómicas y ampliar la participación ciudadana. En este sentido, analizar cuánto y cómo las culturas políticas de desigualdad limitan los procesos de desarrollo y la inclusión parece fundamental. Con base en las demandas de la gente y aceptando la existencia de la heterogeneidad económica, social y cultural en la región, se propone que sólo a través de una cultura deliberativa pluralista, que reconozca la igualdad entre distintos, es posible lograr metas compartidas en función de un desarrollo humano incluyente.

4. Hacia una nueva cultura de la igualdad. La deliberación como una salida posible

Lo planteado hasta ahora hace necesario repensar las relaciones entre cultura política y desarrollo humano, reconociendo tanto los límites de las políticas de reestructuración económica y de la ciudadanía y el régimen demo-

derechos al trabajo, a la salud y a la educación tienden a disminuir la desigualdad, o a que aumenten los individuos con condiciones para sufrir menos la desigualdad respecto de individuos favorecidos por su condición socioeconómica (Bobbio, 1995).

crático, como los avances institucionales y de la racionalización económica que, sin embargo, generaron en varios países mayor exclusión, inequidad y desigualdad social.

Existe una genuina demanda ciudadana de volver más ética la política y de alcanzar mayores niveles de justicia social; asimismo, las experiencias participativas exitosas en varias ciudades, los avances en el debate sobre ideas como deliberación y compromiso y la complejidad social, cultural y económica de las sociedades latinoamericanas, impulsan a pensar sobre una cultura política de igualdad vinculada a un desarrollo humano que integre cultura y democracia.

En lo que sigue, se desarrolla la noción de cultura política deliberativa, en la que el otro es aceptado más igualitariamente y que busca superar la exclusión. Se trata aquí de una idea de igualdad asociada a una cultura cívica en torno al espacio de una comunidad de ciudadanos, partiendo de la idea de que en sociedades fuertemente heterogéneas socioeconómica y culturalmente, como muchas de la región, articular de manera fecunda democracia y desarrollo puede depender en gran medida de prácticas deliberativas que generen opciones, consensos, acuerdos y resultados en función del bien común.

4.1. La cultura política de la deliberación: hacia un balance empírico y conceptual

Heterogeneidad y culturas de desigualdad

Las sociedades latinoamericanas son heterogéneas cultural, estructural y socialmente, hecho que se asocia con culturas políticas de desigualdad. Los tres tipos de cultura política propuestos permiten reconocer la fuerte heterogeneidad cultural presente históricamente sobre todo en las sociedades andinas. Las culturas indígenas con las que los colonizadores se enfrentaron eran de por sí muy complejas[47] y la relación que establecieron con los colonizadores incrementó su complejidad. Por su parte, la heterogeneidad estructural de la economía marca un dualismo y una marginalidad que inciden directamente en las culturas políticas de desigualdad. Finalmente, la heterogeneidad social puede reconocerse principalmente en la explosión de demandas diversas que combinan lo social con lo cultural, sobre todo desde la década del ochenta, como las vinculadas a temas de género, indígenas, éticos, a la calidad de la

47 Cabe recordar que el Estado incaico intentó controlar una sociedad pre-hispánica cultural y socialmente heterogénea.

vida, etc.; ellas son impulsadas por movimientos sociales que, aunque tienen un accionar muy fragmentado, reclaman el reconocimiento de la diferencia y la diversidad como un tema clave de la democratización de la sociedad.

Las sociedades pre-coloniales ya eran sumamente heterogéneas culturalmente en la región, pues habitaban desde tribus con una organización social muy simple hasta imperios sumamente complejos como el maya, el inca o el azteca. La llegada de los colonizadores complejizó la situación porque ellos desconocieron al indígena y lo subordinaron a través de la conversión al catolicismo y la explotación económica.[48] En las nuevas sociedades que surgirían con el tiempo permanecieron las culturas previas a la colonia, aunque no eran reconocidas políticamente, a través de ritos, creencias, artesanía, comidas. El resultado fue una cultura que integró las anteriores, aunque con un estatus inferior. Un ejemplo claro en este sentido es el arte barroco mestizo que muestra cómo el cristianismo fue reelaborado sobre la base de la religiosidad indígena. Esta complejidad del entramado de culturas diversas se mantiene hasta la actualidad en América Latina; hoy se acepta más ampliamente el pasado cultural, aunque en muchos casos aún es relegado y sus representantes (indígenas y mestizos) siguen siendo discriminados.

La heterogeneidad cultural se asoció a la estructura económica, identificando ocupación con etnia: los campesinos en su gran mayoría eran indígenas; los marginales, los empleados informales y los comerciantes urbanos eran mestizos; parte de la burocracia y el poder económico estaba en manos de colonos blancos.[49]

48 Sin embargo, la noción del otro no fue homogénea; la misma Iglesia tuvo actitudes diferenciadas. Por ejemplo, el fraile Bartolomé de las Casas sostuvo que: "Así, estos indios, totalmente inocentes, no pueden ser acusados por no entrar en razón con sólo la prédica de las primeras palabras del Evangelio, pues ellos no entienden al predicador. No están obligados a abandonar de golpe su religión ancestral, porque no comprenden que esto es lo que les resulta mejor". Para Bravo (1992: 64) de las Casas deja en evidencia la paradoja de la conversión, porque "Para salvar, para traducir la identidad del otro, le pide al otro abandonar su identidad de origen. Para convertir a la "ley natural" pervierte el origen "natural" del otro, le da otra versión del origen. […] [Así,] de las Casas […] se sitúa en una suerte de frontera indecible entre la salvación y la negación del otro".

49 El asentamiento de los colonizadores en el continente ofrecía la posibilidad de reproducir relaciones no racionales sino más bien feudales con un contenido paternalista que en su propia tierra estaban llegando

La diferenciación al interior de estas categorías es mucho más compleja; por ejemplo, en el caso de México, los marginales urbanos no sólo son mestizos sino ladinos que son indígenas; ellos, sin embargo, hablaban castellano y adoptaron la cultura española.[50] Aunque la modernización de la sociedad produjo una cierta movilidad ascendente, los grupos segregados étnica y económicamente ocuparon nuevos lugares. Estos grupos no accedieron a aprender mecanismos de inserción en mercados más amplios, más allá de que existieron normas importantes en este sentido, como la reforma agraria o la emancipación de los esclavos.

Así, un dato de las sociedades latinoamericanas actuales es su complejo entramado intercultural, vinculado a una estratificación económica específica. Ello incide en la cultura política de desigualdad, que rechaza al otro por su cultura y su posición en la estructura económica a la vez: al indígena y al campesino, al mestizo y al pobre urbano y al blanco y a las elites económicas.

La heterogeneidad estructural de la economía es el resultado de procesos de dualización de las sociedades con las siguientes características: i) acelerada urbanización con parcial industrialización y modernización; ii) coexistencia de un sector moderno económicamente con otro tradicional; iii) distancia entre quienes se encuentran más o menos incluidos (como aquellos que participan del mercado formal de trabajo) y los excluidos del sistema económico formal (los informales urbanos, los campesinos con escasa capacitación, los empleados en situaciones de inestabilidad y precariedad laboral); iv) distribución inequitativa de ingresos con la consecuente concentración de los mismos (como se observa en el Cuadro 7), concentración que deriva en un consumo suntuario para pocos frente a un consumo básico para la gran mayoría.[51]

a su fin; ellos no intentaron traer a América el espíritu capitalista en el agro (Rex, 1978). Este autor ofrece una detallada estratificación de la sociedad colonial.

50 Rex (1978: 23). En el caso de México, continúa el autor (p. 24), "[…] los mestizos a los que se negó la posibilidad de poseer tierras porque no eran indios y de ocupar cargos políticos porque no eran españoles, se vieron obligados a desempañar cometidos de comercio urbano".

51 Al respecto ver Touraine (1989). La concentración de los ingresos no implicó, empero, una inversión en desarrollo nacional en todos los países, pues gran parte de las elites concentradoras exportaron capitales e impulsaron un sistema financiero alejado de la industria. El caso más claro es quizás el de Argentina.

Cuadro 7. Distribución y concentración del ingreso de los hogares (1990-2002)

País	Año	Participación en el ingreso total de		Indice Gini
		40% más pobre	*10% más rico*	
Argentina a/	1990	14.9	34.8	50.1
	1997	14.9	35.8	53.0
	2002	13.4	42.1	59.0
Bolivia	1989 b/	12.1	38.2	53.8
	1997	9.4	4.07	59.5
	2002	9.5	41.0	61.4
Brasil	1990	9.5	43.9	62.7
	1996	9.9	46.0	63.8
	2001	10.2	46.8	63.9
Chile	1990	13.2	40.7	55.4
	1996	13.1	40.2	55.3
	2000	13.8	40.3	55.9
Colombia	1994	10.0	41.8	60.1
	1997	12.5	40.1	56.9
	2002 c/	11.9	39.1	57.5
Costa Rica	1990	16.7	25.6	43.8
	1997	16.5	27.3	45.0
	2002	14.5	30.2	48.8
Ecuador c/	1990	17.1	30.5	46.1
	1997	17.0	31.9	46.9
	2002	15.4	34.3	51.3
El Salvador	1995	15.4	32.9	50.7
	1999	13.8	32.1	51.8
	2001	13.4	33.3	52.5
Guatemala	1989	11.8	40.6	58.2
	1998	14.3	39.1	56.0
	2002	14.2	36.8	54.3

País	Año	Participación en el ingreso total de		Indice Gini
		40% más pobre	*10% más rico*	
Honduras	1990	10.1	43.1	61.5
	1997	12.6	37.7	55.8
	2002	11.3	39.4	56.4
México	1989	15.8	36.6	53.6
	1998	15.1	36.7	53.9
	2002	15.7	33.2	51.4
Nicaragua	1993	10.4	38.4	58.2
	1998	10.4	40.5	58.4
	2001	12.2	40.7	57.9
Panamá c/	1991	13.3	34.2	54.5
	1997	13.3	37.3	55.2
	2002	14.2	32.7	51.5
Paraguay	1990 d/	18.6	28.9	44.7
	1996 c/	16.7	33.4	49.3
	2001	12.9	37.3	57.0
Perú	1997	13.4	33.3	53.2
	1999	13.4	36.5	54.5
	2001	13.4	33.5	52.5
R. Dominicana	2000	11.4	38.8	55.4
	2002	12.0	38.3	54.4
Uruguay c/	1990	20.1	31.2	49.2
	1997	22.0	25.8	43.0
	2002	21.6	27.3	45.5
Venezuela	1990	16.7	28.7	47.1
	1997	14.7	32.8	50.7
	2002	14.3	31.3	50.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, 2004 (pp. 73-74 y 76-77).

a/ Gran Buenos Aires. b/ Ocho ciudades principales y El Alto. c/ Total urbano. d/ Área metropolitana de Asunción.

Desde la teoría de la dependencia[52], en la década del sesenta se planteó que el mayor obstáculo al desarrollo de los países de la región era su limitada industria, que o no producía valor agregado o producía muy poco; ello llevó a una inserción muy dependiente en los mercados internacionales a partir sobre todo de los recursos naturales y a depender del consumo interno; a esto se suma la escasa inversión en investigación y desarrollo, un consumo imitativo y un empresariado con escaso liderazgo y compromiso social. Los resultados son una modernización imitativa e incompleta, con poca innovación económica y con un crecimiento sin equidad.[53]

La expansión en la región de la industria cultural y un ascenso social creciente a mediados del siglo XX, ambas cuestiones de carácter inclusivo, fueron la contracara de estos procesos de modernización, impulsados por gobiernos nacional-populares que aumentaron la inversión en educación y en obra social, consolidando una clase media que actualmente vive procesos de pauperización debido a la retracción del Estado. En esa época también se realizaron reformas agrarias importantes, pero las antiguas oligarquías no dejaron de ejercer poder, aunque se expandieron a la industria y el sector financiero.

El Estado orientó la dinámica del desarrollo, no sólo regulando la actividad política sino también la social y económica, pues generaba empleo a través de las empresas nacionales y la burocracia estatal. El carácter interventor del Estado entró en crisis a partir de la década del ochenta, pues no pudo hacer frente a los condicionantes de una economía globalizada en la que la tecnología de información cumple un rol central.[54]

Por heterogeneidad social se entiende la emergencia de múltiples actores sociales a partir de los años ochenta con demandas que se salían de los cánones clásicos del sindicalismo

52 Prebisch (1963), CEPAL (1965), Cardoso y Faletto (1969).

53 Fajnzylber (1987).

54 Entre los factores que habrían impulsado la crisis se encuentran las presiones del sector externo de la economía (deterioro de los precios de intercambio, pago de los intereses de la deuda externa); el aumento de las necesidades y demandas de la población, hasta entonces satisfechas en gran medida por el Estado; la fuerza de una ideología conservadora antiestatal; la creciente ineficacia de la estructura estatal para satisfacer las demandas de la gente, hacer más eficiente el propio funcionamiento administrativo y eliminar la corrupción (Calderón y Dos Santos, 1995).

obrero y campesino, que sufrieron serios reveses con la reestructuración económica y perdieron representatividad. Los nuevos movimientos sociales planteaban demandas más diversas, que iban desde aquellas de carácter ético hasta otras de corte económico. Los nuevos actores proponen generar nuevas representaciones que abarquen la diversidad social, cuestionan los límites del sistema de partidos políticos y el autoritarismo y la discriminación en sociedades inequitativas y negadoras de la diferencia.

Estos aspectos positivos, sin embargo, se contraponen con la actitud defensiva frente a los procesos de reestructuración y el carácter pragmático de sus demandas que limitan su fuerza de acción y sus posibilidades de articularse en función de un proyecto nacional de largo alcance. Pero, por otra parte, ellos pusieron en evidencia temas no resueltos en nuestras sociedades, como la necesidad de una ciudadanía que incluya la diversidad social, territorial, cultural; la aceptación del pluralismo; el logro de mayor autonomía con respecto al Estado; la revalorización de una cultura colectiva frente al individualismo creciente de la sociedad de mercado; la necesidad de cambios institucionales democráticos.[55]

Así, entre la multiplicidad de movimientos sociales aglutinados en torno a diversas reivindicaciones, figuran los que apelan a lograr mayor ética en la democracia (derechos humanos, anti-corrupción); aquellos que están vinculados al movimiento obrero pero que buscan mayor autonomía con respecto al Estado; los propulsores de la descentralización y democratización municipal (movimientos en torno a los asentamientos y toma de terrenos, Comités Cívicos, ollas populares, barriales, etc.); aquellos que reivindican identidades sociales y culturales desde donde construir nuevos lazos sociales (de género, indígenas, comunitaristas, ecologistas).[56] Se trata de movimientos que hoy están muy fragmentados y no se articulan entre sí en función de objetivos más generales de largo alcance, mostrando la heterogeneidad social y la conflictividad de nuestras sociedades.

Teniendo en cuenta esta compleja historia y heterogeneidad social, cultural y estructural de las sociedades latinoamericanas, se intentará en lo que sigue esbozar algunas ideas so-

55 Calderón y Dos Santos (1987a).

56 Entre los muchos trabajos sobre los movimientos sociales en la región puede verse Calderón y Dos Santos (1987a y b), Escobar y Alvarez (1992), Touraine (1989), Jelin (1985), Calderón (1986).

bre cómo sería una cultura política igualitaria para la región.

4.2. La cultura política deliberativa

La cultura política deliberativa busca vincular justicia y ética con la igualdad, tema que debe ser públicamente debatido. Se opone a las culturas políticas de desigualdad porque aquí la igualdad es concebida en el marco del respeto del pluralismo de las sociedades. Es una cultura política democrática, pues plantea una discusión de propuestas sobre los temas que interesen a la sociedad, en la que participen (directamente o a través de sus representantes) todos los afectados por las decisiones que se vayan a tomar. Y aunque no se desconocen las relaciones de poder en las que están inmersos los actores sociales que participan del proceso de deliberación, el rasgo central es que la deliberación debe basarse en argumentos racionales comprometidos con la imparcialidad, desde donde puedan generarse formas de cooperación y autonomía e incluso puedan disputarse la dirección del desarrollo. Así se construiría una sociedad más libre, tolerante y justa.[57]

En otras palabras, la deliberativa es una cultura política que busca generar espacios públicos donde los actores, a partir de su diversidad cultural, social y económica, participen con otros como iguales para alcanzar acuerdos en función del bien común, acuerdos que puedan ser evaluados colectivamente. En esta cultura, las capacidades políticas se desarrollan en la medida en que existe una relación igualitaria con otros. Incluso sólo con que una cultura de este tipo exista, se estaría frente a la posibilidad de construir opciones entre las cuales los ciudadanos pueden elegir según sus identidades culturales y aspiraciones personales y colectivas.[58] Tres aspectos centrales caracterizan la cultura política deliberativa: el reconocimiento de la igualdad política, la equidad en los actos de habla y la capacidad reflexiva de la sociedad.

a) El reconocimiento de igualdad

Aquí la igualdad no se entiende como una noción general y abstracta, sino en sus aspectos concretos, como igualdad ante la ley, de

57 Varias experiencias históricas en la región ilustran esta posibilidad, entre ellas las tradiciones comunitaristas con rasgos deliberativos, sobre todo entre indígenas y obreros; también la opción por el diálogo como forma de resolver problemas.

58 Sen (1999).

ingresos, de oportunidades. Las sociedades son las que priorizan alguno de estos ámbitos según sus propios criterios, valores, cultura.[59] Pero como las diferencias (económicas, sociales, culturales, individuales) entre las personas pesan en las desigualdades, el tema es lograr igualdad respetando las diferencias. Para Sen, la demanda de igualdad se justifica, en última instancia, por una preocupación ética.[60]

En un debate sobre el tema, Tabboni (2001) sostiene que es imposible lograr igualdad en la diferencia porque la misma idea de diferencia supone un patrón jerárquico de desigualdad. Para Touraine (2001), empero, la relación entre igualdad y diferencia es de complementariedad y no de oposición, pues la igualdad apela a un principio meta-social, superior a la sociedad (dado por principios religiosos, la capacidad racional de los individuos y/o por la ciudadanía), que se vincula a lo que ella determina como bien común. Tal principio aseguraría el reconocimiento de la diferencia, pues para que el sujeto pueda realizarse individualmente debe reconocer el mismo derecho de autorrealización (y, agregaríamos, libertad) de los demás individuos sin excluirlos por sus adscripciones o atributos (clase, género, cultura, etnia, educación). El autor reconoce que existe desigualdad en el ejercicio del poder, pero sostiene que la democracia, respondiendo a ese principio, debe asegurar el respeto por la igualdad de derechos políticos y hacer posible la realización plena de los derechos sociales, lo que garantizaría que todos los indivi-

59 Sen (1995). El autor destaca que en algún ámbito considerado importante, todas las teorías éticas, sociales y políticas hacen referencia a algún tipo de igualdad, incluso aunque defiendan la desigualdad en otros ámbitos; como estos ámbitos pueden ser diferentes según los distintos enfoques sobre el orden social, el problema de la diversidad quedaría resuelto. El ámbito de exigencia de igualdad debe ser el de la libertad y potencialidad de realización de los proyectos individuales. Un grave problema es que en la percepción general actual, la igualdad no está establecida como exigencia en ningún ámbito ni su relación con la diferencia en ninguna utopía socialmente compartida. Esto refuerza el sentimiento de injusticia frente a diversas desigualdades y falta de reconocimiento, provocando una gran frustración. Este fenómeno se vincula al debilitamiento del ejercicio ciudadano y al aumento de la fragmentación social, económica y cultural, y a la desafección política, reforzando un sentimiento de malestar generalizado.

60 Para Sen (1997 y 2000), la opción colectiva racional permite a la vez maximizar intereses particulares y colectivos, al expandirse al conjunto de la sociedad. Se trataría de opciones más eficientes y también más justas al involucrar tendencialmente a toda la sociedad.

duos puedan hacer reconocer sus diferencias. El problema de este análisis, dice Tabboni, es que no describe los comportamientos concretos de los sujetos, a quienes en los hechos no se les reconoce esa igualdad porque están inmersos en relaciones de poder y dependencia.[61] El debate queda abierto.

Teniendo en cuenta las relaciones de poder a las que individuos y actores están sometidos, sería posible lograr una relación menos contradictoria entre igualdad y diferencia en la medida que se refuerce una cultura deliberativa que no sólo permita la canalización institucional de la participación ciudadana, sino que estimule la participación que, aunque aparece aislada y centrada en problemas concretos, supone que el aporte de individuos y actores es central para redefinir aspectos que hacen al bien común, el cual debe ser discutido en función de los intereses y propuestas diversos de los participantes. La idea es que la cultura política deliberativa debería permitir la manifestación de múltiples voces (aspiraciones, intereses, proyectos) para construir nuevos horizontes de desarrollo más equitativo y eficiente para todos, brindando el marco institucional que inspire confianza y compromiso y que, basado en valores democráticos,

61 Tabboni (2001: 80-81), tomando como referencia el análisis de Fraser, encuentra dos tipos de enfoques para tratar la relación entre igualdad y diferencia: (i) el distributivo que, desde una perspectiva social, coloca el problema en la distribución de riquezas y recursos y en la explotación económica, la marginalidad y la exclusión, e invita a una reflexión en términos de equidad y de igualdad de capacidades para todos (sus exponentes son Sen, Rawls, Fraser, Dworkin); (ii) el del reconocimiento que, desde un enfoque cultural, coloca el problema en las injusticias culturales, intentando eliminar la dominación de unas culturas sobre otras y la falta de respeto de derechos culturales que genera grandes distancias e inequidades (sus representantes son Taylor y Honneth). La dificultad para vincular ambos enfoques en un único proyecto político radica, para Fraser, en que los efectos de las políticas distributivas son contradictorios con los de las políticas de reconocimiento, pues las primeras pretenden acabar con las desigualdades (sobre las cuales se apoyan las diferencias) y las segundas dar oportunidad de recrear las diferencias, las que dejarían de existir con la aplicación de políticas redistributivas eficaces. Contrariamente, Young sostiene que en los hechos no se da tal dicotomía, ya que en general las injusticias económicas se superponen a las culturales. Para esta autora, la demanda de reconocimiento es a la vez una vía para lograr igualdad de oportunidades económicas, y las políticas redistributivas viabilizarían, por su parte, el reconocimiento de demandas culturales. Así, igualdad y diferencia no se contrapondrían sino que se reforzarían mutuamente.

asegure la manifestación de las diferencias. La agenda y la solución de problemas se construyen también a partir de la deliberación pública de los participantes, colectivamente, a través de la argumentación y contra-argumentación entre los involucrados.

La igualdad y la justicia son logros de una comunidad política que actúa en un marco de deliberación, siendo la sociedad deliberante la que interpreta esta igualdad que se asume como compleja. La práctica de la igualdad tiene sentido sólo en un marco político deliberativo, donde los intereses mayoritarios estén siempre presentes, aunque exista desigualdad propia de la lógica del poder. En los espacios deliberativos de la comunidad de ciudadanos es posible tomar decisiones colectivas con otros actores para alcanzar resultados que beneficien a todos cuando el otro es genuinamente reconocido en un plano de igualdad.[62] Son espacios que deben viabilizar la acción colectiva argumentativa con vistas a que los intereses particulares se amplíen al conjunto social como única vía de realización. Se alcanzarán mejores resultados en la medida en que se amplíe la diversidad de actores. El bien común así construido beneficia a todos los participantes y da sentido a la práctica política, que adquiere mayor legitimidad y eficiencia en la toma de decisiones.[63]

b) La equidad en los actos de habla

Ponerse de acuerdo sobre qué es el bien común para una sociedad implica necesariamente que los individuos y grupos se comuniquen de manera genuina, expresando libremente sus opiniones y propuestas y escuchando las opiniones y propuestas de los otros. Ello implica asegurar un espacio público de respeto y reconocimiento del otro en condiciones de igualdad. En nuestra región, como se explicó más arriba, las culturas políticas de desigualdad son muy fuertes y están vigentes; a ello se suma, además, el carácter excluyente de algunas políticas de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Con más razón, entonces, es preciso abocarse a crear espacios comunicativos deliberativos donde prime la igualdad y el reconocimiento, en función de lograr mayor equidad en la toma de decisiones y mayor legitimidad democrática como meca-

62 Miller y Walzer (1995), Walzer (1998). Sobre esta idea se basaron los Informes de Desarrollo Humano de Bolivia (2000 y 2002).

63 Sen (1999).

nismos tanto para discutir el bien común como para procesar conflictos.

La equidad en los actos de habla precisa que los actores intenten comprender el sentido de la acción de los otros actores. Esa comprensión se daría en relación con:

i. la propia cultura (que en América Latina debe partir por reconocer una histórica negación de aquel considerado otro distinto que de diversas maneras ha peleado por autoafirmarse y ser aceptado como igual);
ii. los modos de relación social de los otros y sus comprensiones sobre la naturaleza;
iii. la interpretación de sus historias personales.

Como ya se analizó, la inequidad no es sólo socioeconómica, sino también política y cultural, y se transforma en autoritarismo cuando se expresa en los diversos espacios de la vida diaria a través de los actos de habla, de la comunicación entre diferentes. Para revertir estas tendencias tan presentes en el contexto latinoamericano los actores y los individuos deben tener capacidad crítica y de oposición que les permita plantear demandas al sistema político de tal manera que, mediante los actos de habla en espacios más equitativos que no se darán sin lucha o conflicto, se vuelvan políticas concertadas de acción para lograr el bien común.

c) La capacidad reflexiva

El tercer requisito de esta cultura política de igualdad (además de la autonomía de los actores, de las expectativas de resolver consensuadamente los conflictos y de la racionalidad sustantiva y pluralista que debe primar en los espacios deliberativos), es una mayor capacidad reflexiva. La capacidad reflexiva debe abocarse a pensar, en términos sustantivos, los cambios en la sociedad globalizada en función de las propias sociedades nacionales y, en términos procedimentales, cómo rebatir argumentativamente las ideas de otros, no para negarlas sino para llegar a mejores propuestas para todos tomando en cuenta las diversas subjetividades, formas de sociabilidad y sus reflexiones.

La capacidad reflexiva se plantea como las formas en que las sociedades, desde sus propias particularidades ciudadanas y comunitarias, usan los saberes modernos (códigos de modernidad) en función de su propio desarrollo frente a los contextos globales. Este ejercicio podría, además, incentivar la comunica-

ción tanto entre actores nacionales y locales como a escala internacional apelando a los valores universales que la democracia supone.[64]

La cultura política deliberativa permitiría tomar mejores decisiones en democracia y lograr mayor justicia distributiva, pues la comunidad política sería la protagonista en un marco garantizado de reconocimiento igualitario de los distintos actores. Esto elevaría la capacidad ciudadana para comprender mejor la sociedad y las transformaciones a las que se asiste.

Para sintetizar, a continuación se presenta el Cuadro 8, que resume las ventajas y los límites de la cultura política deliberativa.[65]

Aunque existirán límites y conflictos de poder en los espacios deliberativos, también ellos serían los únicos desde donde lograr cooperación entre actores distintos. En este sentido, la cultura política deliberativa puede ser un genuino espacio de igualdad y reconocimiento que contrapese el autoritarismo y la desigualdad de las culturas políticas históricamente dadas en la región. Un espacio político deliberativo, incluso con sus desventajas, puede permitir concertar una orientación del desarrollo humano de las sociedades en función del bien común decidido en conjunto.

Para terminar, es preciso reconocer los límites y las ventajas particulares que existen en las sociedades latinoamericanas para promover la cultura política deliberativa, como se expresa en el Cuadro 9.

(Ver Cuadros 8 y 9 en página siguiente)

64 El uso de las redes de información y de imagen globales puede, en un horizonte temporal de mediano plazo, ser absolutamente crucial. Ver Castells (1998a, cap. 6).

65 Stokes (2001) y Przeworski (2001) sostienen que la democracia deliberativa puede ser más un espacio de manipulación ideológica que induzca preferencias y haga pública una información sesgada que un espacio genuino de comunicación entre distintos actores. Ello implicaría al menos desigualdad en cuanto a la información y la capacidad para procesarla.

Cuadro 8. Límites y potencialidades de la cultura política deliberativa

Potencialidades	Límites
• Crea opciones. • Refuerza el espacio público. • Logra eficacia en los resultados. • Facilita la viabilidad para elaborar demandas y lograr consensos. • Es un fin moral en sí, a partir del cual deben rediscutirse las ideas de bien común y responsabilidad pública y los principios básicos sobre los que descansen las decisiones políticas. • Mejora la acción colectiva racional porque es legítima y eficiente. Legitima procesos y elecciones finales asociados con justicia distributiva. • Implica un debate argumentativo de ideas donde debe ganar la opción más eficiente y racional porque sería mejor para todos. • Supone que la información está lo más equitativamente distribuida y es lo más transparente posible para todos. • Supone que todos los individuos son considerados libres e iguales.	• Se manipulan las opciones. • Refuerza intereses corporativos. • No logra eficacia en los resultados. • Es difícil lograr consenso y el debate puede terminar en votación, siendo la agregación del voto, y no el debate, lo que decide. • No todos comparten este fin moral. Además, enfatiza los medios y no los fines, ya que en la práctica no se discuten valores sino instrumentos de políticas. • No siempre se opta por lo más eficaz y/o legítimo (si no se llega al consenso); esto le resta legitimidad cuando se conocen opciones mejores. • No convencer a otros de una propuesta no implica abandonarla; el debate se puede trabar y puede no optarse por lo más eficiente y racional. • Se manipula la información para tomar decisiones e inducir preferencias. • La cultura de la desigualdad no se discute, pues se supone que se delibera entre sujetos libres e iguales.

Cuadro 9. Límites y potencialidades de la cultura política deliberativa en América Latina

Potencialidades	Límites
• Demandas de participación y de diálogo como mecanismo para resolver conflictos. • Experiencias deliberativas en espacios comunitarios, sindicales, territoriales y otros de participación social. • Logro de acuerdos políticos y sociales concertados. • Cierta voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que produzcan resultados concretos.	• Heterogeneidad estructural. • Brechas de desigualdad y alta fragmentación social como efectos de los procesos de diferenciación social y funcional. • Coexistencia conflictiva de subjetividades diversas y mercados culturales que tienden a subsumirlas. • Crisis de representación. • Malestar generalizado de la ciudadanía.

5. A modo de cierre

¿Qué resultados habrá en términos de sostenibilidad de la propia sociedad en el largo plazo de persistir los procesos de diferenciación social y funcional que complejizan la estructura social y las tendencias al aumento de la pobreza, la exclusión y la inequidad social, que generan un fuerte sentimiento de malestar, una apatía de la población frente a la comunidad y, por tanto, un debilitamiento de la ciudadanía y del régimen democrático?

Este problema plantea la necesidad de crear nuevas relaciones entre la sociedad, el Estado y la economía. Al menos vale la pena insistir en tres perspectivas. En primer lugar, dados los procesos de globalización económica, los Estados nacionales deberían promover políticas de integración nacional impulsadas por la búsqueda de una competitividad sistémica. En segundo lugar, dadas las características predominantes de la economía de mercado, los Estados deberían promover procesos de integración social eliminando las barreras sociales de acceso al mercado, impulsando una cultura de solidaridad y coadyuvando a la constitución de un sistema de actores sociales donde los más excluidos puedan transformar sus necesidades en demandas que se expresen e interactúen en el sistema político de toma de decisiones, asegurando así la cohesión social de las naciones. En tercer lugar, el funcionamiento estatal tendría que subordinarse al régimen democrático y a la búsqueda de una política de mayor cooperación y participación de los ciudadanos. Ciertamente, esto también supone una nueva lógica institucional que se construya sobre una red de instituciones de derecho público que asegure el funcionamiento del mercado, pero que a la vez permita expandir la reproducción y ampliación constante de una cultura política igualitaria y deliberativa como principal garantía de su funcionamiento.

5.1. Hacia un vínculo fecundo entre desarrollo humano y democracia: la cultura deliberativa

Desde la perspectiva que se ha venido argumentando, el desarrollo humano puede ser considerado como la promoción de las capacidades de las personas, comunidades e instituciones para realizar políticas deliberativas en distintos niveles y esferas de la vida pública de una sociedad. La deliberación constituye el eje de una cultura política que busca mayor equidad en las relaciones sociales, considerando que las capacidades políticas, histórica y cultu-

ralmente determinadas, condicionan la calidad de vida de la población y por tanto sus niveles de pobreza. Así, por ejemplo, si bien como resultado de alianzas nacionales modernizadoras (como en los países del sudeste asiático y los momentos de auge de los regímenes nacional-populares en América Latina) se plasmaron importantes experiencias de integración y justicia social, ahora, bajo las nuevas condiciones de complejidad de la sociedad, y en el marco de una democracia comprendida como régimen institucional y como estilo de vida, una cultura política asociada a la deliberación y la igualdad puede incrementar la capacidad de acción de la sociedad sobre sí misma y sobre el desarrollo.[66]

La cultura política deliberativa se vincula a valores de justicia social, pluralismo e igualdad compleja, desde donde la democracia se concibe como resultado de una construcción colectiva deliberativa en la comunidad política, no desconociendo los mecanismos institucionales de representación, sino como forma de fortalecimiento ciudadano.

En este enfoque, los niveles de pobreza e inequidad de una sociedad se relacionan con la incapacidad de sus habitantes, actores e instituciones para participar en procesos deliberativos, así como con la exclusión de los otros y con la dependencia de los excluidos respecto de quienes detentan el poder y la autoridad. Ello también implica la necesidad de que los

66 Un ejemplo en este sentido es el caso de Malasia, que logró en el período 1970-1980 una elevada expansión económica junto con una reducción de la incidencia de la pobreza de 52,4% a 17,1%. Estos resultados respondieron a una política activa del gobierno malayo que consideraba como objetivo primordial disminuir las diferencias sociales entre grupos étnicos, estableciendo en consecuencia activas políticas educativas y de cuotas en el mercado de trabajo con el propósito de favorecer al grupo étnico de origen malayo, mayoritario en el país y principalmente compuesto por personas de bajos ingresos. El sustento político de esta estrategia de desarrollo de largo plazo fue la constitución, a partir de 1970, de instituciones estatales fuertes. El eje de dicha estrategia era la disminución de las brechas entre etnias. Con tal fin, se lograron consensos interétnicos a través de los cuales se establecieron medidas que favorecerían a la mayoría malaya en detrimento de la minoría china. Esto fue posible por la consolidación de una institucionalidad estatal muy fuerte y el incentivo que representaba el peligro latente de la violencia o del separatismo étnico. En definitiva, el elevado crecimiento económico logrado en la década de 1980-1990 favoreció al conjunto de los grupos étnicos del país. El éxito de esta estrategia implicó además combinar de manera flexible y pragmática políticas económicas que respondieron a diferentes contextos históricos, pero sin perder de vista los objetivos nacionales de largo plazo (véase Ohno, 1996).

excluidos tengan disponibilidad hacia el cambio y la acción, pues en la medida en que puedan transformar sus necesidades en demandas que expongan argumentativamente con otros en un diálogo entre iguales, se darán las posibilidades de integración social y desarrollo. Al contrario, el faccionalismo, la anomia y el conformismo entre los pobres son factores que mantienen las lógicas autoritarias y excluyentes en el sistema de toma de decisiones políticas.[67] No basta oponerse a un sistema de poder injusto; es fundamental que la oposición y la crítica se transformen, a través del diálogo, en propuestas de desarrollo.

Esto supone una serie de consideraciones que todo proceso de deliberación tendría que tomar en cuenta. En primer lugar, se debe reconocer que existe en estas sociedades, periféricas y complejas, una sistemática exclusión de gran parte de los ciudadanos considerados pobres del sistema de toma de decisiones políticas, de la vida pública y de políticas institucionalizadas. Si bien es posible encontrar en estos países buena parte de la población, especialmente la que tiene niveles altos y medios de educación, más o menos involucrada en el juego político, también hay ingentes grupos de marginales urbanos, rurales, indígenas y mujeres con escasos niveles de educación, excluidos de la participación política democrática o que sólo participan a través de arcanos mecanismos de dominación patrimonial-clientelar. Muchas veces esa exclusión se traduce en frustración y en acciones violentas que a menudo expresan demandas sobre el derecho a hablar y a ser incluidos y reconocidos con dignidad.[68]

En este sentido, la participación de los pobres en experiencias de deliberación es un camino de integración social tanto en el plano político como en el simbólico. Resulta fundamental además promover discusiones públicas sobre el significado mismo de la pobreza y abordar los imaginarios sociales en torno de ella, imaginarios que generalmente tienen una carga profundamente discriminatoria y racista que, como se argumentó, constituye la base de culturas políticas de desigualdad fuertemente arraigadas en la región.

En segundo lugar, parece importante que las experiencias deliberativas se transformen en acuerdos y consensos que deriven en planes

67 World Bank (2001); Narayan, Patel, Schafft, Rademacher y Koch-Schulte (2000); UNDP Bolivia (2000), cap. 6.

68 UNDP Bolivia (2000), Calderón y Szmukler (2000), cap. 13.

y resultados evaluables públicamente y con la participación de los mismos involucrados. La legitimidad de la deliberación se dará en una pragmática de resultados donde los mismos actores puedan participar en su realización, gestión y evaluación. El éxito de este tipo de políticas dependerá de los niveles de cooperación en la sociedad y entre ésta y el Estado, el que tendría que fomentar la creación de espacios públicos que promuevan la participación ciudadana y políticas de apoyo a las iniciativas de la sociedad, como también promover la vinculación de redes de organizaciones sociales de la comunidad y de las organizaciones no gubernamentales. La sociedad civil y los actores sociales, por su parte, tendrían que desarrollar una suerte de sentido de corresponsabilidad en función del éxito de los planes y las políticas a aplicar. En este contexto, políticas orientadas a redescubrir y facilitar el desarrollo de capacidades de deliberación y participación pueden ser también relevantes.

En tercer lugar, la deliberación puede llegar a tener efectos multiplicadores en otros planos, como en el intercambio de experiencias de diverso tipo: productivas, informacionales, de educación, de comunicación, etc. Asimismo, en el ejercicio deliberativo los actores pueden ir construyendo sus propias agendas de desarrollo buscando acuerdos más progresivos y estrategias sociales más amplias y ambiciosas. La deliberación puede incluso llegar a promover el incremento de las capacidades de desarrollo en otros campos, como el económico, el del capital social y el del uso de la información. Las estrategias de inserción en la sociedad y en la economía de la información y la calidad del crecimiento económico deberían ser el resultado de debates públicos relacionados con el tipo de sociedad y economía en que se desea vivir y con los sistemas de valores que los alimentan. En esto radica la calidad de un enfoque de desarrollo que tiene como horizonte la autodeterminación de la sociedad. No se trata de una nueva utopía escatológica de una sociedad paradisíaca resultado de un gran pacto colectivo, sino que la sociedad, en las múltiples manifestaciones del poder, dispute las orientaciones del desarrollo en función de sus valores y como resultado de sus experiencias deliberativas.

En cuarto lugar, la sociedad de redes también puede llegar a constituirse en un importante recurso para la deliberación. El acceso a los “códigos de modernidad” puede ser una vía muy interesante para fortalecer la capacidad de acción en la deliberación. La capacidad de desarrollar la información como un ins-

trumento para el debate público puede hacer más intensa y exitosa la misma experiencia deliberativa. Por otra parte, las posibilidades de integrarse a la sociedad de redes desde una cultura deliberativa promueve las posibilidades de desarrollo y de conexión entre lo local y lo global y abre una inmensa posibilidad de conocimiento al conjunto de los actores participantes en la deliberación.

Finalmente, el ejercicio participativo que supone la cultura política deliberativa fortalece la misma capacidad de acción de los actores en la modernización y les permite también redescubrir sus propias subjetividades y, desde ellas, plantearse metas de desarrollo y emancipación más amplias.

La distancia entre los problemas anotados y las respuestas parciales desde la política (por su visión instrumental del crecimiento económico), pone en un primer plano la necesidad de reformar la política como espacio capaz de reinterpretar el nuevo malestar social teniendo como horizonte un proyecto de desarrollo en el que la igualdad y la participación sean temas centrales, temas por lo demás presentes en la experiencia de buena parte de los movimientos populares en América Latina, que hoy tienen que reconstituirse impulsando una democracia más participativa y más justa.

BIBLIOGRAFÍA

Almond, Gabriel y Bingham, Powell 1992 *Comparative Politics Today. A World View.* (New York: Harper Collins).

Bartra, Roger y Otero, G. 1988 "Crisis agraria y diferenciación social en México", *Revista Mexicana de Sociología*, Nº 50 (México).

Beck, Ulrich 1998 *Sociedad del riesgo* (Buenos Aires: Paidós).

Behar, Ruth 1993 "Brujería sexual, colonialismo y poderes de las mujeres: su reflejo en los Archivos de la Inquisición Mexicana", en Verena Stolcke (comp.), *Mujeres invadidas. La sangre en la conquista de América* (Madrid: Horas y horas).

Blackburn, James 2001 "Popular Participation in Bolivia: Rights Versus a Clientelistic Political Culture?". Documento presentado en el Seminario sobre Participación y Empowerment (Lima: Banco Mundial).

Bobbio, Norberto 1995 *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política* (Madrid: Taurus).

Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola 1985 *Diccionario de política* (México: Siglo XXI). Bohman, James y Rehg, William (eds.) 1997 *Deliberative Democracy. Essays on*

Reason and Politics (Cambridge: The MIT Press).
Bourdieu, Pierre 1998 *Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale* (París: Liber-Raisons d'Agir).
Bravo, Germán 1992 "La estructura íntima del pensamiento latinoamericano", en Germán Bravo 1996 *Cuatro ensayos y un poema* (Santiago de Chile: Intemperie).
Calderón, Fernando (comp.) 1986 *Los movimientos sociales ante la crisis* (Buenos Aires: CLACSO-UNU-IISUNAM).
Calderón, Fernando 1993 "La sociología en Latinoamérica: la tesis de Germani y la cuestión del otro", *Persona y Sociedad*, Año 1994, Vol. VIII, N° 1-2 (Santiago de Chile: ILADES).
Calderón, Fernando; Chiriboga, Manuel y Piñero, Diego 1992 "Modernización democrática e incluyente de la agricultura en América Latina y el Caribe", Documento Nº 28 (San José de Costa Rica: ICA).
Calderón, Fernando y Dandler, Jorge (comps.) 1984 *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado* (Cochabamba: UNRISD-CERES).
Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario 1987a "Movimientos sociales y democracia: los conflictos por la constitución de un nuevo orden", en Fernando Calderón y Mario Dos Santos (comps.), *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden* (Buenos Aires: CLACSO).
Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario 1987b "Movimientos sociales y gestación de cultura política. Pautas de interrogación", en Norbert Lechner (comp.) *Cultura política y democratización* (Santiago de Chile: FLACSO-CLACSO-ICI).
Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario 1991 *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario* (Santiago de Chile: FCE-CLACSO). Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario 1995 *Sociedades sin atajos. Cultura, política y reestructuración económica en América Latina* (Buenos Aires: Paidós).
Calderón, Fernando, Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone 1996 *Esa esquiva modernidad. Desarrollo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe* (Caracas: UNESCO- Nueva Sociedad).
Calderón, Fernando y Norbert Lechner 1996 "Modernización y gobernabilidad democrática. Informe para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo" (La Paz: UNDP).

Calderón, Fernando y Norbert Lechner 1998 *Más allá del Estado, más allá del mercado: la democracia* (La Paz: Plural).
Calderón, Fernando y Alicia Szmukler 1998 "Aspectos culturales de las migraciones en el MERCOSUR", *Documentos de Debate 31* (París: MOST-UNESCO).
Calderón, Fernando y Alicia Szmukler 2000 *La política en las calles. Política, urbanización y desarrollo* (La Paz: Plural).
Cardoso, Fernando H. y Enzo Faletto 1969 *Dependencia y desarrollo en América Latina* (México: Siglo XXI).
Castells, Manuel 1997 *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad red* (Madrid: Alianza).
Castells, Manuel 1998a *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2: El poder de la identidad* (Madrid: Alianza).
Castells, Manuel 1998b *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 3: Fin de milenio* (Madrid: Alianza).
CEDIB/Programa INFOBOLIVIA 1999 *Bolivia Press*, N° 13, en <http://www.cedib.org/publicacio nes/boliviapress/1999/Bolpres1399.htm#top>. CEPAL 1965 *El proceso de industrialización en América Latina* (Nueva York: CEPAL). CEPAL 1992 *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad* (Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 1994 "El gasto social en América Latina: un examen cuantitativo y cualitativo". *Cuadernos de la CEPAL 73* (Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 1995 "Focalización y pobreza". *Cuadernos de la CEPAL 71* (Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 2000 *Panorama social de América Latina 1999-2000* (Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 2001 *Panorama social de América Latina 2000-2001* (Santiago de Chile: CEPAL).
Chonchol, Jacques 1990 "Modernización agrícola y estrategias campesinas en América Latina". *Revista Internacional de Ciencias Sociales 124*.
Dahrendorf, Ralph 1995 "Economic Opportunity, Civil Society and Political Liberty". *Discussion Paper 58* (Ginebra: UNRISD).
De la Fuente, M.; Villareal, F. y Seifert, A. 2000 "La guerra del agua: crisis boliviana", en <http://www.montrealconsabor.com/archives/boliviaAgua/>.

De Soto, Hernando 2001 *El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo* (La Paz: Comunicaciones El País).

Di Tella, Torcuato 1965 "Populism and Reform in Latin America", en Claudio Veliz (comp.) *Obstacles to Change in Latin America* (Londres: Oxford University Press).

Dos Santos, Mario (comp.) 1987 *Concertación político-social y democratización* (Buenos Aires: CLACSO).

Elster, Jon (comp.) 2001 *La democracia deliberativa* (Barcelona: Gedisa).

Escobar, Arturo y Sonia Alvarez (comps.) 1992 *The Making of Social Movements in Latin America* (Boulder: Westview Press).

Fajnzylber, Fernando 1987 "De la 'caja negra' al 'casillero vacío'", en *Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada postmoderna* (Buenos Aires: CLACSO).

Faletto, Enzo 1988 "Cultura política y conciencia democrática". *Revista de la CEPAL 35* (Santiago de Chile: CEPAL).

Fitoussi, Jean y Pierre Rosanvallon 1997 *La nueva era de las desigualdades* (Buenos Aires: Manantial).

Franché, Marc-André 2000 "Concertación y acuerdos: la experiencia de Porto Alegre". *Cuadernos de Futuro 13* (La Paz: UNDP).

Fraser, Nancy 1995 "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a Post-Socialist Age". *New Left Review 212* (julio-agosto).

Gambetta, Diego 2001 "'¡Claro!': Ensayo sobre el machismo discursivo", en Jon Elster (comp.), *op. cit.*

Germani, Gino 1985 "Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna", en *Los límites de la democracia Vol. 1* (Buenos Aires: CLACSO).

Genro, Terso 2001 "Os desafios da tragedia" (inédito).

Giddens, Anthony 1995 "Affluence, Poverty and the Idea of Post-Scarcity Society". *Discussion Paper 63* (Ginebra: UNRISD).

Grimson, Alejandro 1997 "Relatos de la diferencia y la igualdad". *Nueva Sociedad 147* (Caracas).

Grimson, Alejandro 2000 "La migración boliviana en Argentina". *Cuadernos de Futuro 7* (La Paz: UNDP).

Habermas, Jürgen 1999 *The Inclusión of the Other. Studies in Political Theory* (Cambridge: The MIT Press).

Haferkamp, Hans y Neil Smelser (eds.) 1992 *Social Change and Modernity* (Berkeley: University of California Press).
Hinkelamert, Franz 1984 *Crítica a la razón utópica* (San José: DEI).
Hirschman, Albert 1986 "On Democracy in Latin America". *New York Review of Books*, 10 de abril de 1986.
Jelin, Elizabeth (comp.) 1985 *Los nuevos movimientos sociales* (Buenos Aires: CEAL).
Karasimeonov, Georgi *et al.* 1997 *Human Security in Bulgaria* (Sofía: UNDP), inédito. Lechner, Norbert 1996 "Tres formas de coordinación social. Un esquema" (Santiago de Chile: Inédito).
Mannarelli, María 1991 "Las relaciones de género en la sociedad colonial peruana. Ilegitimidad y jerarquías sociales", en María del Carmen Feijoo (comp.) *Mujer y sociedad en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
Medina Echavarría, José 1964 *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina* (Buenos Aires: Solar-Hachette).
Miller, David y Michel Walzer (comps.) 1995 *Pluralismo, justicia e igualdad* (México: Fondo de Cultura Económica).
Narayan, Dapa; Ray Patel; Kai Schafft; Anne Rademacher y Sarah Koch-Sculte 2000 *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* (World Bank-Oxford University Press).
Ohno, Izumi (comp.) 1996 "Beyond the 'East Asian Miracle': an Asian View". *Discussion Papers Series 5* (New York: UNDP-Office of Development Studies).
Perez, Elizardo 1962 *Warisata. La escuela ayllu* (La Paz: E. Burillo).
Pires, V. 1999 *Orcamento Participativo: O qué é, para que serve, como se faz* (Piracicaba: Ed. do autor).
Prebisch, Raúl 1963 *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano* (México: FCE). Pronagob/UNDP Bolivia/ILDIS 1996 *La seguridad humana en Bolivia. Percepciones políticas, sociales y económicas de los bolivianos de hoy* (La Paz: Edobol).
Przeworski, Adam 2001 "Deliberación y dominación ideológica", en Jon Elster (comp.) *op. cit.*
Putnam, Robert 1995 "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy 1*, Vol. 6 (Washington).
República de Bolivia 2001 Pactos democráticos en Bolivia. Compilación de documentos (La Paz).

Rex, John 1978 “Introducción: Las nuevas naciones y las minorías étnicas. Aspectos teóricos y comparados”, en *Raza y clase en la sociedad postcolonial* (Madrid: UNESCO).

Roncken, Teo 2000 “The Revolt of the Water of Cochabamba: Part Two”, en <http:// www. americas. org/country/Bolivia/bolivia noticias.htm>.

Rosanvallon, Pierre 1995 *La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-Providence* (Paris: Seuil).

Schnapper, Dominique 1994 *La communauté de citoyens. Sur l’idée moderne de nation* (Paris: Gallimard).

Sen, Amartya 1989 “Development as Capability Expansion”. *Journal of Development Planning 19*.

Sen, Amartya 1995 *Nuevo examen de la desigualdad* (Madrid: Alianza).

Sen, Amartya 1997 *La libertá individuale como impegno sociale* (Roma: Literza). Sen, Amartya 1999 *Development as Freedom* (New York: Knopf).

Sen, Amartya 2000 *Desarrollo y libertad* (Buenos Aires: Planeta).

Servicio Nacional de la Reforma Agraria 1970 Evaluación de la Reforma Agraria en Bolivia (La Paz: SNRA).

Scherer-Warren, Ilse y Paulo Krischke (comps.) 1987 *Uma revolucao no cotidiano? Os novos movimentos sociais na América do Sul* (Sao Paulo: Brasiliense).

Silverblatt, Irene 1990 *Luna, sol y brujas. Género y clases en los Andes prehispánicos y coloniales* (Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos).

Stokes, Susan 2001 “Patologías de la deliberación”, en Jon Elster (comp.), *op. cit.*

Stolcke, Verena 1993 “Mujeres invadidas. La sangre de la conquista de América”, en Verena Stolcke (comp.), *op. cit.*

Tabboni, Simonetta 2001 “Il n’y a pas de différence sans inégalité”, en Michel Wieviorka y Jocelyne Ohana (dir.) *La difference culturelle. Une formulation des débats* (Paris: Balland).

Touraine, Alain 1989 *América Latina. Política y sociedad* (Madrid: Espasa Calpe). Touraine, Alain 1997 *¿Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et différents* (Paris: Fayard). Touraine, Alain 1999 *Comment sortir du liberalisme?* (París: Fayard).

Touraine, Alain 2001 “Égalitté et difference”, en Michel Wieviorka y Jocelyne Ohana (dir.), *op. cit.*

UNDP 1993a Informe de Desarrollo Humano 1993 (New York: UNDP).
UNDP 1993b 1993 *Country Human Development Indicators. Latin America & the Caribbean* (New York: UNDP).
UNDP 1994 *Human Development Report* (New York: UNDP-Oxford University Press).
UNDP 1996 *Human Development Report* (New York: UNDP-Oxford University Press).
UNDP 1998 *Human Development Report* (New York: UNDP-Oxford University Press).
UNDP 1999 Informe de Desarrollo Humano 1999 (New York: UNDP). UNDP 2000 Informe de Desarrollo Humano 2000 (New York: UNDP).
UNDP 2001 Informe de Desarrollo Humano 2001 (New York: UNDP). UNDP-Bolivia 2000 Informe de Desarrollo Humano en Bolivia 2000 (La Paz: UNDP).
UNDP-Chile 1998 Informe de Desarrollo Humano, Chile 1998 (Santiago de Chile: UNDP).
Walzer, Michel 1993 *Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad* (México: Fondo de Cultura Económica).
Walzer, Michel 1998 *Traité sur la tolérance* (Paris: Gallimard).
Warman, Arturo 1988 "Los campesinos en el umbral de un nuevo milenio". *Revista Mexicana de Sociología 50* (México).
Whitehead, Laurence y George Gray-Molina 2000 "Capacidad política a la larga". *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 179*, Año XLIV (mayo-agosto), México.
World Bank 1997 *World Development Report 1997. The State in a Changing World* (New York: World Bank-Oxford University Press).
World Bank 1998 *World Development Indicators* (Washington: World Bank).
World Bank 2001 *World Development Report 2000/1: Attacking Poverty* (Washington: World Bank).

América Latina en la era de la información

Cambio estructural, crisis, actores sociales, procesos de transformación*

Fernando Calderón G. y Manuel Castells

Como colofón a los análisis presentados en este libro, Fernando Calderón y Manuel Castells entablaron un diálogo que aquí se presenta en transcripción literal. El debate se inicia con la presentación, por separado, de dos visiones de la problemática de América Latina a principios del siglo XXI, sintetizando y comentando los trabajos elaborados para este proyecto colectivo de comprensión de la nueva realidad latinoamericana. A continuación, Calderón y Castells discuten y elaboran las tesis presentadas y plantean temas insuficientemente recogidos en los capítulos de este libro. No se trata de una conclusión, sino de un debate que Calderón y Castells quieren dejar abierto.

* Este texto fue escrito junto a Manuel Castells y publicado originalmente en *¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells* 2003 Vol. II "Nación y cultura. América Latina en la era de la información" (Madrid: Fondo de Cultura Económica).

Fernando Calderón

Haber participado en la construcción de este texto me lleva a retomar, para empezar el diálogo, un tema central que hemos venido trabajando hace varios años sobre la relación entre cambio y sociedad en América Latina. Me refiero a la tesis que privilegia a los actores sociales y sus capacidades de acción como articuladores de desarrollo y de democracia. De la capacidad de los actores sociales y políticos de ser agentes autónomos con capacidad crítica para crear proyectos, realizar pactos y construir pautas culturales de acción, dependerá el curso de la democracia y el desarrollo de la calidad de inserción en los procesos de globalización. La misma idea de renovación de la democracia descansa en la capacidad de acción, reproducción e innovación de los actores sociales. Recuerdo que hacíamos una formulación sencilla al respecto: sólo potenciando la capacidad de acción de las sociedades se podrá reproducir y profundizar la democracia y el desarrollo.

Aún más, habíamos concluido hace más de diez años que frente a los procesos inevitables de reestructuración de la economía mundial y sus implicaciones sobre la región, había, a pesar de la fuerza del cambio económico, importantes componentes sociopolíticos que permitían actuar en la misma direccionalidad del cambio. En este sentido, resaltaba la importancia de innovar integralmente y lo más efectivamente posible, ya que la globalización y la sociedad de la información eran un hecho. Sin embargo, argumentábamos que para que esto fuera fecundo socialmente era fundamental potenciar la capacidad de acción –de agencia diría Sen- potenciando a los actores políticos y sociales como los principales garantes de transformaciones estructurales y de regímenes democráticos estables. El resultado histórico fue mucho más complicado y la inserción de nuestras sociedades en la globalización, aunque estuvo asociada a recursos económicos, humanos y tecnológicos, dependió más de la trama de relaciones sociopolíticas internas que de meras fuerzas externas. El saldo, como demuestran los estudios económicos y sociopolíticos de este libro, ha sido relativamente negativo, entre otras cosas debido a una capacidad de acción débil y saldos sociales regresivos y, yo diría además, sin actores con capacidad de actuar en la economía y en la sociedad de la información.

A diferencia del Sudeste Asiático, me da la impresión de que la persistencia de un patrimonialismo enraizado en las relaciones Estado-sociedad y economía en la región no ha permitido una integración más sólida y activa en los procesos de globalización. La misma debilidad de los movimientos sociales, que al diferenciarse en gran medida se han fragmentado, ha incidido en esta globalización sin informacionalismo. Al final, la misma política y la democracia, que desgraciadamente también pierden legitimidad en la región, han terminado pagando el costo más alto.

Quisiera ahora y desde esta perspectiva distinguir cuatro temas que, a mi entender, son fundamentales y podrían ayudar a estructurar el mapa latinoamericano a que se ha hecho referencia.

En primer lugar, quisiera mencionar el tema de esta globalización irreversible, pero no sostenible, reflexión con la que iniciamos el libro.

El gran desafío de la sostenibilidad de un desarrollo globalizado, de una globalización irreversible, tiene que ver con el tránsito de nuestras sociedades de una inserción pasiva (y además restringida) en la globalización a una economía informatizada. Se trata de re-

construir la noción de competitividad auténtica en la nueva economía informacional de la globalización.

En esto hay otro punto que es de innegable importancia en esta discusión, que es la débil institucionalidad de nuestros Estados y la crisis de liderazgo de los proyectos nacionales en contextos regionales: la crisis de identidad entre Estado-nación, que se basa en la constatación de la pérdida de soberanía del Estado nacional y la emergencia de un pluriculturalismo activo en distintos escenarios nacionales y regionales.

Aquí, muy brevemente, quisiera retomar las viejas tesis de Medina Echavarría sobre las condiciones sociológicas para el desarrollo económico, pues sin elites que tengan una cierta cultura de la responsabilidad donde predomine una lógica de producción sobre una lógica de consumo, resulta imposible una competitividad genuina. Asimismo, me da la impresión de que la existencia de una cierta disponibilidad para el desarrollo científico y tecnológico, es condición clave para la competitividad en la globalización y ésta supone un comportamiento coherente de los actores más modernos de la sociedad. Una tercera condicionalidad estaría asociada corresponsabilidad entre orden institucional y estilo de desarrollo. Da la impresión de que es muy difícil plasmar un desarrollo en la globalización sin estas condiciones y que muchos países de América Latina desgraciadamente están ausentes de éste como una brutal fatalidad. El peso atávico de prácticas patrimoniales a menudo de origen oligárquico que permea nuestras sociedades, constituye un límite importante para el desarrollo. Nuevamente los problemas del desarrollo económico son la débil capacidad de acción de las elites políticas y los grupos empresariales de nuestra sociedad. ¿Cuándo se harán nacionales?

En segundo lugar, está el tema de los movimientos sociales en América Latina. Muchos de los que hemos trabajado estos años en torno a este tema, estábamos atravesando por un momento de desconcierto. Habíamos llegado a la conclusión de que los movimientos o los actores sociales estaban pasando de una visión con relación al Estado, a una mirada hacia sí mismos, hacia la vida cotidiana. Había una especie de fragmentación que, al enfrentarse con este proceso de reestructuración de la economía mundial asociada a la concentración de poder, sufría un gran desbalance, una especie de vacío, una contradicción entre una lógica de la sociedad fragmentada y dispersa y un proceso brutal de concentración de poder.

Todos tratamos de encontrar una salida, intentamos muchas respuestas y fuimos fracasando. La realidad avasallaba. No encontramos un elemento que permitiera pensar en un actor histórico capaz de enfrentar la globalización, a este poder concentrado, asociado a las empresas transnacionales o a la racionalidad instrumental, a lo que después tú denominaste como la sociedad red.

Lo único que encontramos a la luz de las ponencias mencionadas, a las que se puede añadir la intervención de Manuel Chiriboga y Natasha Loayza, y las opiniones de Manuel Castells, es que se empiezan a perfilar algunas nuevas tendencias. Las experiencias de otros países o la emergencia de los movimientos anti globalización (que en realidad son movimientos pro globalización, pero de otro tipo de globalización), hacen ver la posibilidad de un movimiento de reconstitución del actor social, aunque el problema reside justamente en que éste o éstos aún no existen.

En tercer lugar, está el tema del espacio público en la red como lugar constructor (de construcción o Inter.-construcción) de actores. Martín Hopenhayn hablaba de que la cultura virtual era un proceso (o podía serlo) de construcción de un imaginario democrático global. Jorge Schvarzer intentó lo propio al hablar desde la tecnología. Por mi parte y la del equipo boliviano de desarrollo humano, hemos empezado a trabajar en la idea de deliberación, sobre la base de una renovación de la política vía pactos que permita construir opciones, y que en la construcción de esas opciones se llegue a acuerdos a través de los cuales se logren resultados.

En cuatro lugar, está el desafío de plantear un nuevo estilo de desarrollo. ¿Cuál sería el nuevo mapa de desarrollo para América Latina?

Este es un desafío nada sencillo y muy importante. Es determinante pensar y unir ideas sobre un modo de desarrollo para América latina en la sociedad de la información.

En mi opinión, este proceso pasa, insisto, por la reconstitución de los actores sociales y la capacidad de autoproducción de la sociedad con actores autónomos, que desarrollen sus capacidades informacioales.

La idea del pacto social es fundamental en sociedades con una heterogeneidad estructural de base, con una diversidad sociocultural tan amplia y con una pérdida de capacidad de representación política. Una de las tensiones en este modo de desarrollo es lograr a la vez una correlatividad en los actores, en la construcción de una economía informacional y una sociedad de redes, construyendo simultáneamente una forma de articulación política.

Manuel Castells

Por mi parte, al término de este recorrido intelectual compartido con los compañeros de este proyecto colectivo, quisiera subrayar una serie de ejes analíticos de convergencia que podrían alimentar también nuestra reflexión final, naturalmente dejando abiertas más preguntas que cerrando respuestas. Pero tal vez lo más importante en cualquier proceso de análisis es encontrar las preguntas clave que, en el fondo, sólo pueden ser convincentemente contestadas por la investigación rigurosa de los temas que señalan, en contextos específicos.

Vamos pues con estos grandes temas que, en mi opinión, subyacen en el conjunto de nuestros debates.

En términos generales, América Latina ha vivido de manera contradictoria una década de transformación profunda. Los noventa supusieron una transformación profunda del mundo y, también en forma específica, de América Latina.

Esta década de transformaciones ha afectado a toda la región, con énfasis diferentes. Algunos países –a los que haré referencia específica más adelante- salen poco de este esquema por características particulares que conviene analizar por separado. Sin embargo, esta década de transformación en América Latina tiene algunos puntos comunes para el conjunto de la región.

Primero hay una articulación muy profunda de América Latina con el sistema de relaciones globales, tanto en lo económico como en lo cultural; al tiempo que hay una desarticulación nacional sobre todo en la economía. Por lo tanto, hay un doble movimiento de articulación y desarticulación. Grandes sectores del sistema productivo de la población no se encuentran articulados con esta dinámica, no están penetrados por esa globalización: hay exclusión productiva y exclusión social. De estas exclusiones, caracterizadas como sostuvo Judith Sutz, por la existencia de capacidades sin oportunidades, surge como forma de supervivencia la economía urbana informal, que en América Latina ocupa a casi la mitad de la población urbana.

De manera que un segundo eje de análisis sería el tema de la economía urbana informal. Esta es una economía de trueque con formas de supervivencia en los márgenes de lo que está desintegrado de la estructura productiva. No hay un sector arcaico y un sector moderno globalizado; hay uno moderno globalizado, articulado, minoritario en empleo aunque muy mayoritario en producto bruto; y hay un

gran sector desarticulado sin capacidad productiva competitiva.

La causa estructural, en términos muy esquemáticos, es que la transición al informacionalismo como sistema productivo es muy limitada, por consiguiente hay un informacionalismo limitado y una informatización extendida.

Hay dependencia de un sistema informacional global. Es una dependencia financiera, tecnológica, de infraestructura, de comunicaciones, de medios de comunicación y expresión cultural.

Un tercer aspecto son los cambios en la estructura territorial de América Latina. Al mismo tiempo que cambiaba la economía, ha habido un cambio extraordinario en la estructura espacial de América Latina, ha cambiado el territorio latinoamericano. América Latina es un continente muy urbanizado –sobre todo América del Sur– que ha llegado a un 80% de población urbana. Lo que queda del campesinado latinoamericano vive mayoritariamente en una situación de exclusión, con excepción de algunas explotaciones intensivas agro-exportadoras, en particular en Costa Rica, en el Sur de Brasil, en el Valle Central de Chile, en la economía agro-pecuaria de Argentina y en las nuevas producciones inducidas internacionalmente, como la producción de espárragos para la exportación en Perú. La estructura territorial latinoamericana está extraordinariamente concentrada en las grandes ciudades. Las periferias urbanas se han convertido en zonas desarticuladas de la ciudad, aunque articuladas localmente: no es la descomposición total, sino la recomposición. El tema de la urbanización de las sociedades latinoamericanas y sus nuevas formas de estructuración en torno a las ciudades es central y complejo, cuando se analiza el proceso de transformación de lo local a partir de la inserción en lo global.

Un cuarto punto sería una reflexión acerca de la desestructuración de grandes sectores de la sociedad que lleva (como analizó hace años Roberto Laserna), a la conexión perversa: la economía criminal global. La economía criminal está protegida por elbandidismo, que es un síntoma de disolución de la capacidad de instituciones como la policía, por ejemplo, que llega a veces a ser parte de la estructura criminal. Son estos aspectos que contribuyen decisivamente a la crisis de Estado, al tiempo que actúan como un sistema de redistribución forzada de recursos de las clases medias hacia los pobres. Quiero decir: como hay exclusión social en grandes dimensiones, como no existe el Estado de bienestar de tipo europeo, como el Estado de bienestar beneficia sobre

todo a sectores privilegiados de clases medias o de trabajadores organizados, lo que queda como alternativa es un sistema salvaje de redistribución del ingreso sobre la base de la criminalidad y el bandidismo.

Un quinto aspecto se refiere a la ruptura de la solidaridad entre clases medias y sectores populares (o sectores en exclusión social). Hay, además, tendencia a una individuación creciente de todos los procesos de construcción de sentido. Pero frente a ello, hay fenómenos de construcción de redes solidarias. Y, más importante todavía, observamos la recuperación de identidades comunitarias como son las de resistencia y reconstrucción de sentido, aunque crecientemente aisladas del resto de la sociedad. Así se explican, por ejemplo, los comunitarismos religiosos, étnicos o territoriales. Cuando no hay posibilidad de reconstruir el sentido en una situación de exclusión, se cae en el fatalismo individual, reflejado por numerosas encuestas, que indica la absoluta falta de fe y expectativas de parte de los sectores populares.

Es a partir de esta ruptura de solidaridades que se puede hablar de otro tema trascendental que es la crisis de legitimidad del Estado durante este período de globalización. Esta crisis es la expresión de la incapacidad del Estado de ejercer incluso su más vieja función que es la protección física. Cuando el Estado rompe alianzas, no redistribuye, se pasea por el mundo como agente de globalización, se concentra en tareas de modernización y ni siquiera es capaz de proteger, entonces no tiene función útil para la mayoría de la sociedad. No es que la gente esté contra el Estado, es que éste se convierte en un estorbo. Es crisis de legitimidad y crisis de efectividad a la vez.

Por otro lado, el fenómeno de individuación en una situación de crisis institucional lleva a estrategias de individuación también de los actores políticos; el sálvese quien pueda en política es la corrupción política. El aumento de la corrupción política obedece a una lógica donde al estar en un sistema político se tiene cada vez menos poder, mientras que al estar en la lógica del mercado se tiene cada vez más recompensas: se está en el sistema político para acumular lo suficiente para salir de él y entrar en el sistema de mercado como un sistema de acumulación.

Esto está relacionado con la transformación de la política como política informacional (basada en los medios de comunicación, el control y el procesamiento de la información, la creación de imagen, la personalización de liderazgo político y los ataques para destruirlo), y la

práctica de la política del escándalo que en estos momentos es uno de los grandes problemas de las instituciones de gestión de la sociedad.

La constitución de esta política del escándalo profundiza la crisis de legitimidad pero al mismo tiempo mantiene una hegemonía negativa mientras no haya alternativa o se asegure la supervivencia de alguna otra forma. Para asegurar la supervivencia hay que traducirla en código cultural, para cada uno la supervivencia qe lo que uno mismo define, no es un estándar objetivo de supervivencia.

Por consiguiente cuando se llega al umbral en que ni esa hegemonía negativa funciona, en que ni siquiera existen las formas de supervivencia, ni las alternativas, nos encontramos en un terreno desconocido, que puede dar lugar a la explosión social y la violencia individual generalizada, o todo a la vez. Cuando se da tal crisis de legitimación es cuando surgen los movimientos sociales y las formas de reconstrucción del Estado.

Ahora bien, aunque esos rasgos generales se comparten en todos los países, su importancia relativa cambia según los contextos específicos. Dentro del espectro latinoamericano, hay países que entran en este esquema de exclusión globalizante o exclusión de la globalización, y otros que se han insertado en ese proceso de forma relativamente autónoma. El caso más importante de inserción dinámica y autónoma en la globalización es el de Chile. La política de Chile es diversificar sus relaciones globales. Chile es, en cierto modo, el país tigre del Pacífico Sur, con base en su capacidad exportadora competitiva. Buscando reforzar su inserción productiva con información, tecnología y mejora de la gestión empresarial, Chile decide salir de la espiral destructiva de sus vecinos. Hay una política explícita y deliberada de Chile para salvarse en solitario. El modelo chileno está funcionando, aun dentro de sus límites y problemas, porque ha sido capaz de introducir un cierto informacionalismo dinámico, que caracteriza el actual modelo democrático de desarrollo. Chile, habiendo decidido ser un actor económico autónomo en el mundo, está obligado a usar las armas de la competencia en ese mundo.

El otro país que tiene una inserción específica en la globalización es México, que es económica y demográficamente –por migración– parte de la nueva Norteamérica, pero en donde subsisten problemas que dificultan su plena inserción en la economía dominante del mundo. Uno de estos problemas es la situación de transformación productiva desigual profunda. La integración brusca de dos estructuras pro-

ductivas muy diferentes está desintegrando gran parte de la estructura productiva mexicana. Un segundo tema es la emigración masiva a Estados Unidos y la constitución de un tercer espacio sociocultural en torno a las redes transnacionales de mexicano-americanos. Una tercera cuestión es el problema social y político de los indígenas marginados, evidentemente en la incapacidad del sistema de integrar las reivindicaciones de los zapatistas.

Brasil, por su parte, representa una inserción económica competitiva en la globalización junto al mantenimiento de la exclusión social en una buena parte de la población (33% de la población como mínimo se sitúa por debajo del límite de pobreza), es decir, se trata de la consolidación de la sociedad dializada. En términos macroeconómicos funciona bien, está funcionando bien y los sectores dinámicos de Brasil están compitiendo en el mundo y están articulados, pero al mismo tiempo ha habido un mantenimiento de la desigualdad y una ampliación de la exclusión social en términos del sistema productivo, con incremento de la economía informal. Lo que ocurre es que falta articulación real del Estado, con una clase política fragmentada y clientelista y una gran falta de coordinación entre el Estado federal y los gobiernos estaduales, la mayor parte de ellos dependientes de situaciones caciquiles. Esta forma de globalización dinámica restringida es peligrosa porque a la primera crisis seria que tenga Brasil puede desestabilizarse la sociedad ya que los mecanismos de integración social y política son extremadamente débiles.

Costa Rica representa tal vez la forma de inserción más exitosa en la globalización porque ha sabido aunar modernización tecnológica, capacitación de recursos humanos y cobertura social de las necesidades básicas a partir de un Estado de corte socialdemócrata. Su fragilidad es grande, sin embargo, por su dependencia extrema del sector globalizado exportador, muy minoritario como productor y exportador. Su desafío consiste en expandir este sector dinámico a partir del desarrollo de una política de recursos humanos y de una modernización tecnológica y de gestión del propio Estado.

Cuba, naturalmente, tiene su forma propia, autónoma, de inserción en la globalización. Pero está en la globalización, y también depende de la competitividad de sus sectores exportadores en los mercados capitalistas globales. Además de sus tradicionales exportaciones agrarias, la gran industria globalizada de Cuba es el turismo, y la frontera de su desarrollo es la venta de sus servicios médicos, así como el

posible desarrollo de la biotecnología. Pero la interrogación política sobre el castrismo después de Castro, y la inquina fanática de una parte del enclave cubano de Florida, hacen planear sombras amenazantes sobre el futuro de Cuba. Una demostración más de que la inserción técnico económica en la globalización está fundamentalmente condicionada por el proceso político-social.

Así pues, si bien cada uno de los países citados representa una problemática específica en su inserción en el sistema global, en todos ellos puede analizarse esa especificidad aparte de las cuestiones generales que hemos planteado. Tal vez a partir de ahí, y de tu propia interpretación, Fernando, podríamos profundizar en algunos de los temas señalados.

FC: Un tema que deseo plantear es la relación entre crisis de las reformas económicas, crisis de legitimidad del Estado y la emergencia de movimientos anti globalización. El saldo, como dices tú, ha sido una globalización sin informacionalismo. Se trata de un triángulo fundamental a trabajar, porque probablemente allí anida la tesis central del libro. Eso nos lleva a la necesidad de repensar una nueva constitución de lo social y de la política en la región o, por lo menos, a reconocer algunas pautas.

MC: Yo creo que el tema puede graficarse como un triángulo: la crisis del sistema productivo, la crisis del Estado y las dificultades de emergencia de actores sociales capaces de reconstruir tanto la economía como la sociedad misma son los tres lados. Entonces, es un triángulo en la medida en que están relacionadas las aristas y no se pueden entender los unos sin las otras, pero cada uno tiene un peso específico distinto.

Si hablamos de la globalización, el aspecto de reestructuración de la organización productiva de América Latina y de su inserción en el sistema de economía global, es un efecto exógeno. Ahí sí hay dependencia: el mundo cambia y América Latina tiene que cambiar. Hay un efecto de dependencia en el sentido tradicional, es decir, el cambio de los mercados financieros globales no se produce desde América Latina, el cambio del sistema tecnológico y de la economía del conocimiento y el paso a la economía basada en la generación y aplicación de conocimiento, no se producen en América Latina. Es América Latina la que tiene que adaptarse a estos cambios. Entonces, la crisis de la globalización en América Latina, desde el punto de vista estructural, proviene de que al tiempo que se opera la homogenización de condiciones de intercambio de capitales, bienes o

servicios –que es la apertura de la liberalización- no hay capacidad instalada para desarrollar las fuerzas competitivas propias que hacen posible el insertarse activa y positivamente en esos sistemas; es decir, la apertura a un juego que no se domina.

FC: Lo que se señala en el texto de la Graciela Mouguillansky es que no solamente pasa esto sino que hay también una regresión en la construcción económica.

MC: Hay una regresión, porque al entrar en un sistema de reglas de juego abiertas a todo el mundo pero sin las capacidades y las potencialidades con las que se puede operar en ese sistema, tienes que jugar con armas que no tienes y entonces el sistema productivo entra en crisis. Es algo totalmente distinto a lo que ocurrió en los países del Asia del Este en el momento de inserción o, incluso, yo diría en el momento de recomposición después de la crisis del `97. Allí había capacidades competitivas, por tanto su apertura a la economía global permitió a actores económicos y a conexiones en las redes globales de riqueza y productividad del Occidente tener la posibilidad de jugar en ese sistema. Entonces, existe una doble situación: por un lado, América Latina pasa a estar totalmente integrada a la economía global -no hay dos economías, todas están integradas a una sola economía global, donde hay apertura en términos de comercio, en términos de capitales, en términos de transferencias de tecnología, en todos los términos-, pero el sistema productivo radicado en la región es débil. Es decir, si bien las reformas estructurales, las reformas macroeconómicas, homogeneizaron la macro economía, homogeneizaron los parámetros económicos (política monetaria, política de créditos, política comercial), el sistema productivo no evolucionó en la misma medida. Hay desfase entre la modernización productiva y la homogenización global de los parámetros económicos. Por otro lado, hay una falta de homogenización del sistema productivo entre los diversos sectores. Aunque haya habido incremento de productividad en algunos sectores manufactureros y agro-exportadores, las bases de incremento de productividad de esos sectores son débiles en términos de educación, de tecnología y de flexibilidad de las empresas, así como en términos de un Estado de bienestar que permita el desarrollo del capital humano. En todos esos sectores de servicios básicos para una economía informacional, la modernización es muy limitada. Y un sistema productivo que tiene que funcionar con reglas distin-

tas en un nuevo contexto y no tiene capacidad de evolucionar, no se queda estable, entra en crisis y, por tanto, hay regresión, como analiza Graciela.

FC: Ese es el primer lado del triángulo, ahora, no crees que en ese mismo lado lo que el Estado hace –reclamando esa idea tuya de que el Estado es un actor en la globalización- es una acción limitada en cuanto a la presencia generalizada de la economía en la globalización y en cuanto a posibilitar la creación de condiciones para que los actores nacionales –fundamentalmente empresarios medianos y pequeños- se globalicen. La capacidad social es muy limitada; solamente un sector nacional mínimo logra estar como socio menor, pero esto rompe la idea de cadena propia de un sistema económico nacional. Lo que yo no sé es si, desde el punto de vista estructural , esto tiene perspectiva en el largo plazo; me parece que no. ¿Tú que piensas?

MC: Sí, estamos de acuerdo en ese desfase con el Estado. Se globalizan los parámetros macroeconómicos y no las condiciones de productividad y competitividad de inserción en un sistema global y, por tanto, eso entra en crisis. Hay un pequeño sector productivo de bienes y servicios, globalizado, que sí consigue llegar; o sea, hay sectores altamente competitivos y dinámicos pero no es toda la economía. Dejemos de lado, de momento, los casos de Costa Rica y Chile, que son la excepción más que la regla, pero las excepciones sirven para pensar la regla. Tienes razón, no hay ya un sistema económico nacional. Pero lo que yo añadiría, es que esa acción de globalización no es automática, no es que llegan los flujos globales y por sí solo estructuran la inserción de América Latina en términos globales; hay una acción deliberada de agentes sociales y políticos en pro de la globalización, y, por tanto, lo que es un efecto fraccionador de la sociedad y caotizador de la economía debe responder a algunos intereses. Y esos intereses no hay que verlos como intereses del capital financiero global transnacional, porque ese capital global transnacional no tiene capacidad de acción directa sobre las sociedades, sino que son las sociedades las que proporcionan al capital financiero mecanismos de inserción, cambiando el sistema de valores y las prioridades en torno al cual se estructuran las sociedades. La tesis aquí es que los globalizadotes en América Latina han sido los Estados-nación que al situarse como agentes globalizadotes dejan de ser Estados entendidos como representantes de la nación, y pasan

a ser representantes de otra cosa. La pregunta ahora sería: ¿De qué?

FC: ¿Pero, acaso en el Sudeste Asiático el Estado no es un actor central en el posicionamiento de estos países en la globalización?

MC: Absolutamente central, pero arrastrando la sociedad, esa es la gran diferencia, Es un Estado desarrollista, la cuestión radica en la diferenciación entre Estado globalizador y Estado desarrollista. El Estado desarrollista se inserta en la globalización a partir de un determinado momento, no desde el principio del proceso de desarrollo, como proyecto necesario para una fase más avanzada del desarrollo. El Estado globalizador crea las condiciones de inserción de economías y sociedades en el sistema global, pero no actúa sobre los mecanismos de competitividad y productividad que llevan al desarrollo.

Eso quiere decir, en concreto que la política de globalización, por un lado, es una homogenización de parámetros macro económicos, pero, por el otro, es la política productiva correspondiente al interior de las economías por parte de los Estados; fue la privatización, la liberalización y la apertura de las grandes empresas multinacionales, de todos los bancos y de las empresas de telecomunicaciones y de tecnología de información, las que reconstruyeron, como extensión de sus redes, la capacidad productiva de los países. En ese sentido, no es que los Estados no tuvieron política económica interna; la tuvieron, y ella consistió en desorganizar el papel directivo del Estado, en hacerle por tanto perder su poder como Estado desarrollista. El Estado globalizador es lo contrario del Estado desarrollista. La gran cuestión es saber porqué. A partir de qué intereses políticos, sociales, culturales, en qué marco económico, se produce lo que se ha venido a denominar la "política neoliberal" de los Estados. La simple calificación ideológica de neoliberalismo, dificulta la comprensión, porque es una etiqueta. Cuando se dice que un Estado es neoliberal, simplemente se está diciendo que hace todo lo que acabamos de describir. El problema es que no es una religión, entonces ¿por qué lo hace? Como justificación superficial puede considerarse como una ideología neoliberal, que la mayor parte de los Estados, por cierto, recusan como término y como ideología (Sólo lo aceptaban explícitamente los Chicago boys de Pinochet precisamente en el momento que realmente no hacían esto sino que eran mucho más estatistas, intervencionistas). Si esas son las políticas que se han seguido, y aceptando la idea de que la exclusión social es

una necesidad temporal y luego llega la redistribución de la riqueza y se desarrolla el resto de la sociedad, el tema a preguntar es quién, qué y por qué esos Estados han procedido así, y aquí tenemos que tener cuidado con interpretaciones simplistas conspirativas, que llevan a decir simplemente que las elites de siempre sólo hacen lo que les interesa a ellas. Eso es sólo cierto en el caso de Venezuela, que es una gran excepción porque es una economía totalmente atípica, porque sólo se controla el desarrollo del petróleo y nada más; ahí se da un patrimonialismo puro. Los demás casos son más complicados y tenemos que tratar de interpretar cuáles son los intereses, los valores y los mecanismos a través de los cuales el Estado pasa de patrimonialista exclusivo a desarrollista y, últimamente, a Estado globalizador que, insisto, es completamente diferente.

FC: Si se argumenta que la dependencia es un dato y que la globalización es otro, el problema es cuándo una sociedad tiene la capacidad de vivir con esos datos y de incidir en ellos.

MC: No siendo simplemente receptor pasivo de los efectos de ese proceso generalizado, sino capaz de modularlo, de cambiarlo, de insertarse de forma relativamente autónoma.

FC: Por eso digo, qué es lo que depende de la capacidad de la propia sociedad y particularmente de la capacidad empresarial en su relación con el Estado y con distintos grupos; y ahí detecto que el comportamiento empresarial es restringido; los empresarios más modernos son los que pautan la acción. En el pasado estuvieron asociados con el Estado, ahora, predominan tres tipos de acción: por un lado, se han asociado con las transnacionales, comparten el negocio y tienen un sistema de intereses directamente dependiente de las transnacionales, no es una dependencia pactada como el pasado. Por otro lado, han permitido vender, no solamente los bienes estatales, sino también sus mismas empresas y han retornado a un rentismo improductivo. Hay muchos grupos en América Latina que disponen de dinero y que entran a especular en el sistema financiero, pero que han dejado de tener una vocación productiva, una ética de la producción.

MC: Y además han exportado sus capitales a través de bancos multinacionales, ha habido una exportación masiva de capitales en y de América Latina.

FC: Finalmente hay quizás también un grupo más activo, los más lúcidos, los más moder-

nos y cada vez más importantes ante la otra lógica.

MC: ¿Los más lúcidos? Eso no está tan claro, porque a nivel de interés personal, los más lúcidos son los que cobran su dinero y se largan.

FC: Los más lúcidos en términos de no perder su vocación empresarial, de adecuarse y adaptarse a las consecuencias. Son los que en esa alianza tratan de tener un rol más activo y tratan entre otras cosas, de dar más servicios a las mismas empresas transnacionales. Se subordinan, pero en una lógica más dinámica, puede que haya otros comportamientos, pero yo detecto esos tipos. Ahora, ¿cuánto de estos comportamientos y de esta lógica predominante más pasiva frente a las transnacionales y a la dinámica económica, refuerzan la misma estructura patrimonialista del pasado? Creo que este sigue siendo un rasgo generalizable en la región, tanto en el plano social, como en el plano político.

MC: Define patrimonialismo.

FC: El patrimonialismo es una red de relaciones, de intercambios informales, de vinculaciones entre distintos grupos sociales, en el cual se intercambia prebendas por legitimidad; se trata del funcionamiento de un orden informativo dentro de una lógica formal, es un suborden.

MC: Concretamente, ¿el Estado da a los grupos empresariales concesiones y a cambio recibe dinero?

FC: Recuerda lo que Cardoso llama anillos burocráticos. Brasil constituye un ejemplo ideal de patrimonialismo. Yo no creo que éste sea solamente privilegio de las elites y de las empresas; es un tipo de relación social generalizada basada en intercambios informales, transversales a la sociedad: está en los empresarios, en los sindicatos, en la lógica de los movimientos sociales más radicalizados, etc.; por eso te digo que es una suerte de patrón cultural de larga duración que tiene su epicentro en las elites y que tiene origen colonial. Es rentista, es consumista. Es decir, es una forma de comportamiento de las elites que se generaliza a la sociedad y que tiene origen colonial, una suerte de cara negativa del barroco.

MC: Supones que el Estado tiene un papel central y que en el fondo la clase empresarial es dependiente del Estado.

FC: Sí, desde luego. El problema es que cuando se produce este cambio global –y esa es la tesis que quiero explorar- estos señores se adaptan a la modernización sin llegar a ser plenamente modernos para seguir ejercitando un poder con base en relaciones patrimoniales-clientelares.

MC: Estos señores ¿quiénes son?, ¿los empresarios?

FC: Es una lógica de elites y fundamentalmente hoy día de empresarios patrimonialistas asociados con políticos patrimonialistas que, en definitiva, no logran obtener una relación activa en la globalización, sino ser tan sólo socios pasivos de los globalizadotes.

MC: ¿Los globalizadotes son el Estado?

FC: El Estado globalizador y las empresas transnacionales globalizadas entran a jugar ese juego; la pregunta es si ese juego es viable, tanto desde el punto de vista productivo como de la globalización. Si yo fuera transnacional diría que no me conviene este tipo de alianza y, en segundo lugar, me preguntaría si sería sostenible desde el punto de vista social por las consecuencias de desigualdad, y desde el punto de vista de la viabilidad política, porque el sistema político tendría que gestionar este sistema de alianzas y yo no estoy tan seguro que esto suceda o se pueda sostener durante mucho tiempo.
MC: Aquí hay dos puntos. Uno, en términos de mecanismos concretos, ocurre que aquellos sectores dinámicos de cada economía que se articulan directamente a las redes transnacionales –formen o no parte de las empresas multinacionales pero sí de las redes multinacionales-, pueden jugar en la economía global, mientras que aquellos sectores que son exportadores autónomos aún no. Porque el gran tema es que en América Latina –como en gran parte del mundo- la globalización de mercados es asimétrica, es decir que aunque se puede exportar más que antes a EE. UU. Y Europa, existe todavía un enorme proteccionismo, sobre todo a los productos más tradicionales, para el sector agro-exportador, para el sector de materias primas, etc. Por tanto la única manera de estar realmente integrado en una globalización que no es simétrica, está en formar parte de las redes de producción de bienes y servicios de las multinacionales. Porque el comercio interno de estas redes no tiene barreras arancelarias, porque es interno de las empresas y puede pasar por muchos lugares. Es decir, que hay un incentivo poderosísimo para acabar con el negocio de exportación

directa y reinvertir en ser nudos de las redes multinacionales en cualquier sector productivo del sistema, y por consiguiente, hay desnacionalización creciente del sector empresarial que quiera intervenir en la globalización. Pero eso no resuelve el problema básico, porque si estamos de acuerdo en que hay, remedando a Tajnzylber, una globalización truncada de América Latina, ¿cuál es el motivo por el cual los Estados latinoamericanos tomaron la iniciativa de globalizar? Porque es una iniciativa de los Estados. Las redes estaban globalmente organizadas pero la conexión entre esas redes transnacionales de producción de bienes y servicios y los mercados financieros, esa conexión con la economía nacional de la sociedad en cada país, fue mediada, impulsada y dirigida por el Estado.

FC: ¿Estaríamos retornando a una clásica relación de dependencia? Porque cuando el Estado crea esa vinculación, la hace mediada con otro Estado y a través de una institución que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo actúa con el saldo de la deuda y la iliquidez de los países; condiciona las aperturas para abrir las economías nacionales a esta lógica de la globalización y lo hace desde luego según los intereses que representa.

MC: Exacto, pero en ese sentido sería el Estado el que pasa a ser agente racionalizador de la inserción en las redes globales, esperando, confiando y apostando a que la dinámica del mercado interno llegue a un nivel de crecimiento económico y que de esa inserción al sistema global por capas sucesivas se vaya generalizando la incorporación de la sociedad a un mercado mundial y a una red de inversión, con lo cual el Estado puede retirarse de la economía y pasar a ser, sobre todo, regulador de la última instancia. Por lo tanto, no es la dependencia tradicional; se trata de un Estado que organizaría la interdependencia confiando que permitirá una dinamización interna de la sociedad que, además superará los actores sociales corporativos, que serían la rémora burocrática a la productividad y a la competitividad; para hablar claro, el sector público y los sindicatos organizados. El proyecto sería desarticular el Estado corporativo y establecer nuevas redes de relación entre el sistema mundial y la sociedad nacional, a través de la incorporación individual, mediante mecanismos de mercado y de representación democrática. Ese sería el proyecto más coherente y en el fondo es la política del Fondo Monetario Internacional, a partir de la cual se piensan los Estados de América Latina. Esa política ha chocado con una realidad

en que el segmento capaz de incorporarse a través de mecanismos de mercado y de apertura a esas redes globales es muy pequeño y mucho más reducido de lo que pensaban en principio.

FC: Pero todo lo que estás diciendo, Manuel, supone una cosa medio perversa, y perdona que sea así de brutal. ¿Estás suponiendo la existencia de un Estado policía y probablemente medio corrupto, pero muy eficiente en la gestión de este nuevo pacto?

MC: No muy eficiente en general. La prueba ha sido que se ha perdido bastante el control de la inserción en esa nueva administración, insisto, dejando aparte de momento el caso de Chile y Costa Rica (pero hay que tratarlos). Pero no diría un Estado policía, sino un Estado que tomó una iniciativa estratégica.

FC: ¿Estás suponiendo nuevamente que el desarrollo viene desde afuera?

MC: La fuente de riqueza posible, de poder y de influencia es la inserción en un sistema mundial y, por tanto, es un Estado que tiene que jugar con las reglas del sistema mundial y que necesita condiciones de apoyo de los poderes de esa sociedad global, concretamente a través del Fondo Monetario Internacional. Para entrar en ese sistema tiene que pagar una cuota de privatización, de liberalización que saben perfectamente que destruye las bases del Estado corporativo y patrimonial sobre el que estaban creadas las alianzas anteriores. Tomemos como ejemplo el caso de Bolivia. Bolivia a partir de 1985 toma una opción estratégica que acaba con el apoyo de los sectores organizados porque son una rémora para el país, en especial los mineros, y entra en una serie de políticas liberalizadoras para satisfacer las condiciones de entrada en el club del Fondo Monetario Internacional. Bolivia es paradigmática porque además la determinación política que orientó dicha estrategia la tomó el partido populista nacionalista que representaba lo contrario, que representaba el Estado corporativo.

FC: Además el mismo líder, Paz Estenssoro.

MC: El mismo líder, Paz Estenssoro por ejemplo, que venía del populismo patrimonialista y se convirtió en el agente de la globalización y el liberalismo.

FC: Un matiz en el caso de Bolivia. Lo que Paz Estenssoro contraargumentaba cuando uno le enrostraba su pasado era que tanto entonces

como en el presente estaba construyendo la nación. Él dijo: "Bolivia se nos muere" si no hago esto, e hizo todo lo contrario a lo que hizo treinta años antes, cuando dirigió la Revolución de 1952 y colocó en el centro del escenario político un proyecto desarrollista.

MC: En el fondo yo diría de una manera más sofisticada, de largo plazo. Es lo que decía Cardoso. Su tema siempre ha sido: "con la inflación nada, ni hacia fuera ni hacia adentro". Pero el control de la inflación requería el control de la política económica del Estado. Y para el control del Estado había que cambiar las reglas de la relación entre Estado y sociedad y también había que cambiar el sistema productivo. Para insertarse, Brasil tuvo que romper los privilegios de la clase media que estaban ligados a la inflación. Por lo tanto, Cardoso también hacía un discurso en defensa de los intereses nacionales frente a la demagogia populista de los sectores corporativos. Pero es cierto, la defensa de Paz Estenssoro es inteligente, pero depende de qué se llame nación. Nación no es lo mismo que país. La cuestión es que para que no se hunda la economía boliviana hay que hacer una apertura de tipo liberal, pero sin la nación, porque la nación es la representación social que se constituye en ese Estado-nación. Eso es la nación, y no una concepción abstracta de una identidad metafísica. La nación es lo que existe como comunidad nacional anclada y organizada en torno a ese Estado. Entonces, en el momento que Paz Estenssoro construye la revolución nacional boliviana está construyendo la nación, porque hay un proceso de integración de la sociedad en esa construcción; pero en el momento en que abre el país a las redes globales, está desestructurando la nación, salvando al país, en su visión, pero desestructurando la nación. Y yo diría que en el caso de Cardoso ocurrió algo semejante. Y por eso cuando la gente dice que el Partido de los Trabajadores (PT) es el partido obrero de izquierda, para mí lo más importante del PT es que es un partido nacionalista brasileño, de defensa de la nación, pero la nación entendida como el conjunto de actores sociales que se constituyen en nación.

FC: Eso es. Quizás para matizar un poco la posición de estos dos líderes importantes y distintos –pero importantes para pensar el tiempo histórico de estos países en el mundo, uno grande y otro chico- es que ambos consideran, y no quiero, Manuel, ensalzarlos, pero ambos consideran que estas medidas son condiciones para sobrevivir y proyectarse.

MC: Ese es el análisis y yo diría que personalmente estoy de acuerdo. Si se toma la opción –y siempre insisto que es y fue una opción- de entrar a fondo en la estructura global, en el nuevo paradigma de producción, de información y de conocimiento, entonces hace falta dos cosas: entrar con esas reglas del juego y ser capaces de hacer funcionar esa red. Pero esas dos cosas hay que hacerlas secuencialmente, porque mientras no haya un mercado de capitales que funcione, una inflación controlada, un sistema bancario, un desarrollo de la productividad, creación de capital humano, no se puede desarrollar el país ni competir en la economía global. Mientras no se creen las condiciones de la transformación de la estructura productiva no puede haber empleo en la estructura productiva ni dinámica de acumulación de capital. Y por tanto, en último término, un Cardoso clarividente te diría "para que el PT tenga oportunidad de hacer el nuevo Brasil, yo tuve que hacer esto".

FC: Eso lo diría Paz Estensoro también.

MC: Entonces, ese proyecto visto así es un proyecto que tendría su lógica su funcionara de forma integrada, pero claro, como en la primera parte tienes que deshacer la nación, antes de poder reconstruirla, ella se organiza por su cuenta y entonces hay una separación entre Estado y nación.

FC: Esa es la cuestión. Ahí quería llegar y creo que entramos a la tercera parte del triángulo.

MC: Es que la ingeniería social ignora los tiempos históricos.

FC: Ahí voy, porque me da la impresión de que esta condición creada desestructuró tanto que no permite que se reestructure la comunidad política y la misma comunidad nacional; es una paradoja. Sin embargo, con el correr de los años, me parece que se hace más de lo mismo: reajustes permanentes. Es decir, se crean condiciones permanentes sin salida y esto tiene un costo muy alto porque la regresión económica es muy fuerte y el costo social muy alto; esto además en una sociedad que, a diferencia del pasado, no se simplifica sino que se complejiza en estos procesos de exclusión.

MC: El caso límite es la Argentina. Allí la dolarización del peso quiso decir "somos Estados Unidos y entonces no tenemos necesidad de visa a Estados Unidos". Me parece psicológicamente muy importante: "somos como Estados

Unidos, nuestra moneda vale lo mismo"; pero claro, el esfuerzo que el país tiene que hacer para ser como Estados Unidos, sin ser Estados Unidos, destruye la capacidad productiva interna, de manera que se hace cada vez más insostenible la economía ficción, porque no solamente en el momento de partida no se es Estados Unidos, sino que por querer ser Estados Unidos se destruyen las posibilidades de un desarrollo endógeno que sea capaz, realmente, de insertarse diferencialmente en la globalización.

FC: Además, quisiera plantear el saldo de todo esto: una tremenda exclusión social, una regresión económica asociada con simplificación, una complejización social excluyente y una política que no puede hacer una gestión de todo este proceso porque quien está llamando a hacer la gestión de este proceso es la política, los partidos, el Estado y ellos están débiles. Lo que queda es la resistencia y la rebelión.

MC: Ahí no estoy de acuerdo; es una visión demasiado positiva de la capacidad de resistencia. Hay estrategias de supervivencia, hay estrategias de resistencia y hay estrategias de reconexión, y mi tesis de hace muchos años, con Roberto Laserna, de la conexión perversa –que quiere decir el paso de la economía criminal como forma de actividad económica globalizada– es el tema, no es la economía criminal ligada a la pobreza, es la pobreza articulada como forma productiva, como base social de una economía globalizada.

FC: ¿Es esa una salida?

MC: No es una salida, porque una cosa que hace esa economía globalizada es destruir todo el sistema institucional y por lo tanto deja a las comunidades incapaces de gestionar nada. Porque la forma de inserción de las instituciones a las redes globales de la producción económica es mucho más destructiva que las formas de inserción a través de las multinacionales.

FC: Tú estas diciendo que dadas estas características de la globalización –en el marco de reproducción de economías campesinas de pequeña escala, urbanas, rurales, etc., donde están los excluidos- y dadas las necesidades del mercado se produce esta conexión perversa, que reproduce sociedad con un costo de desintegración institucional brutal, pero logra niveles de acumulación de escala global altos.

MC: Y no son solamente los pobres que se articulan ahí, sino los empresarios que reinvierten

en sectores donde pueden invertir. Por ejemplo, los nuevos carteles de Cali y Medellín son la nueva forma de burguesía de una cierta y vieja tradición de industriales y burgueses en esas sociedades, no todos, pero es una reinversión del sistema productivo. Son los sectores que no pueden competir a través de los mecanismos globales formales, que buscan otras formas de globalización donde sí pueden competir con base en la capacidad gerencial de controlar territorios.

FC: Está perfecto, pero yo quiero volver un poquito atrás. Está bien, ese es un camino; el otro camino que ha tenido la gente es la resistencia. Como estamos viendo en el caso argentino y como muestra el estudio de Héctor Palomino y de Ernesto Pastrana, ante el fracaso de la economía y del Estado, la sociedad se retira sobre sí misma para poder sobrevivir y reinventa sociedad. Donde no hay opciones, la sociedad se repliega sobre sí misma y trata de subsistir casia primitivamente, cuestionando lo que se vivió en la globalización, porque globalización es también lo que uno vive, no lo que uno define o encuentra en el resto del mundo. Y esto estuvo asociado con una resistencia gigantesca a al globalización, además con un costo altísimo para la política. Yo digo, además, que entre uno y otro caso hay muchos más matices a lo largo de la región que introducen otros actores, por ejemplo los movimientos indígenas que introducen otras formas de organización local. En fin, vamos a ir luego a ese tema.

Pero hay estas dos dinámicas, la de resistencia y la de inserción perversa, que también se constituyen en actores como es el caso del movimiento campesino indígena en buena parte de los países andinos. Ellos también tienen un peso político al cuestionar esa forma de globalización. Entonces, hay dos ingredientes de dinámicas, de prácticas, de ideologías anti globalización, sobre las cuales se estructuran discursos. Ahora: ¿qué es esto?, ¿es un movimiento de resistencia, de sobrevivencia?

MC: Hay supervivencia y hay resistencia. No es lo mismo, porque muchas de las formas de sobrevivencia son supervivencia y no son movimientos.

FC: Quiero hacer un rodeo antes de volver a este tema y tratar de entender qué es lo que pasa, dada la evolución que tenían los movimientos y los actores sociales en América latina, muy rápidamente, para entender mejor esto que es muy importante. En primer lugar, había en general movimientos paraestatales asocia-

dos con el Estado o enfrentados a él, pero el Estado era la razón de ser de los actores sociales en América Latina.

MC: Era la toma del poder, y eso implicaba llegar al Estado por cualquier medio posible.

FC: O entrar en negociación con el Estado para legitimarlo y estar en el juego. De otra parte, el Estado integraba cuando tenía recursos; así más o menos funcionó. Cuando esto se acaba, entre otras cosas por las dictaduras, porque se restringe esa capacidad del Estado de integración y además por los fracasos políticos de las vías revolucionarias, surgen nuevos tipos de conflictos y de acciones sociales que tienen que ver con fragmentación y pluralismo en la acción colectiva, con múltiples tonos, voces y orientaciones. Pero era una acción de resistencia asociada al tránsito a la democracia y con este "nuevo modelo neoliberal". Decíamos con Norbert Lechner: "los actores sociales además de diferenciarse, se fragmentan", porque crecían y se multiplicaban pero tenían menos control sobre lo que les pasaba. Se pasó de una sociedad Estado céntrica a otra policéntrica .

La sociedad le dio la espalda a su sociedad y a la política y fue prisionera del mercado y sobre todo del consumo cultural. En las décadas del ochenta y del noventa algo que creció en América Latina, junto a la pobreza y la disminución de los salarios, fue el acceso a los medios de comunicación de masas y al teléfono celular. Entonces, se trata de una incorporación parcial con todos los problemas de frustración de expectativas, etc. Ahí la sociedad se redujo a su mínimo nivel de expresión. Ahora estamos entrando en otro momento, y aquí vuelvo al punto anterior y mi pregunta es: ¿estamos entrando a un momento donde la sociedad nuevamente empieza a abrir sus ojos, a construir sentido? Parece que ahora no le basta la negación ni la resistencia, sino que empieza a ver nuevas formas de acción –más a nivel local-, valoriza la democracia local, expresa demandas culturales, hay en el juego político nacional ofertas neopopulistas; o sea, estamos entrando en otra coyuntura. Me da la impresión de que ella está asociada con este fracaso, o relativo fracaso, de esta forma en que vivimos la globalización. Creo que ahí se inician, de manera muy tenue algunas veces, muy mediática otras, incluso de forma muy explosiva, nuevas formas de acción; eso que quizás tú ya pintas en tu libro sobre el internet como movimientos más propositos, porque además estos movimientos son fortalecidos por una acción desde afuera: redes de internet, etc. Manuel Chiriboga traba-

ja los movimientos indígenas en este libro; a ellos les sirve la red para pensar de una manera más compleja su propia situación y hacer una demanda más abierta a la sociedad global y quizás también a la propia nación.

MC: Cuando hablamos de formación de actores colectivos, aparte del sistema político, porque yo creo que son dos ámbitos distintos, pensando concretamente, ¿qué actores hay? ¿qué actores vemos en constitución de actores colectivos, movimientos preactivos? El gran caso es Argentina, que se trata en nuestro libro y que es extremadamente revelador; pero claro, es revelador sobre todo porque hay doble rechazo articulado, hay un rechazo al sistema financiero y hay un rechazo a la clase política entera, a toda la clase política. Es uno de los pocos casos en el mundo en el que deliberadamente se quiere despedir a todo el sistema político: "¡Que se vayan todos!". Eso es novedoso, pero claro, lo que es más novedoso es que el anarquismo aparezca otra vez como fuerza social. Y, por cierto, que en el movimiento por la justicia global (llamado anti globalización) hoy día la corriente que cada vez tiene más fuerza sea la corriente anarquista, que toma internet no sólo como un instrumento organizativo, no sólo como una forma de estar en contacto, movilizar y demás, sino como la infraestructura material de una posible forma de democracia alternativa. Porque la gente dice: "la gestión directa de los países, de las economías, se organiza de abajo hacia arriba, a partir de la gente y se puede hacer a través de internet porque nos podemos comunicar todos con todos". La asamblea general permanente de toda la gente diciendo cosas conjuntas en internet es una utopía, pero el hecho de que esté formulada en esos términos, como objetivo político y no como medio organizativo, me parece extremadamente revelador.

FC: Además yo tengo la sospecha de que en buena parte de estos movimientos generados en América Latina por lo menos en lo que respecta a su inserción al internet está mediatizada por loo que llamábamos en la década del sesenta, "yankees de base", o sea todos estos agitadores modernos que vienen de ONG, de universidades del centro, etc.

MC: Claro, el Institute for Global Comunication de San Francisco es el que ayudó a desarrollar la red zapatista del internet. Bueno, acabo este tema porque ya no quiero volver al Estado. Argentina sí es un caso clave, aunque no está excluido, en mi opinión, que haya una vuelta,

una recomposición política tradicional de tipo populista peronista, con lo cual estaríamos ante una explosión social reactiva que no se traduce en una reconstrucción de la sociedad por la base, sino, que es otra vez, rearticulada en un sistema político por delegación, corrupción, etc., como el que ha existido. No por casualidad las sociedades vuelven a repetir los mismos sistemas de autodestrucción, hay algo que las empuja a ello en la estructura social; en el momento en que estamos discutiendo podemos ver que hay embriones de reconstrucción social por la base a partir de actores colectivos de movimientos sociales en Argentina. No podemos decir que hayan reconstruido la sociedad, que hayan generado un sistema político de tipo distinto; no lo han hecho y parece que es difícil, pero sí han reorganizado y reconstruido una parte de la sociedad. Pero este movimiento tiene grandes límites. Gran parte de la protesta era de la clase media contra el corralito; en la medida en que se vaya solucionando parcialmente el tema del corralito, la clase media Argentina no necesariamente va a participar en las asambleas de la Central General de Trabajadores (CGT). Aun así, habría que reconocer que la Argentina del 2001/2002 sea una de las situaciones en que realmente se observa la emergencia de actores colectivos y no solamente uno, sino actores colectivos en toda la gama de la sociedad, tratando de rearticular una forma de a agregación de intereses sociales no dependiente del sistema político tradicional ni simplemente de grupos de presión. Yo creo que ahí hay un principio de formación de actores colectivos con nuevos valores y nuevas experiencias. Pero si observamos el resto de América Latina el panorama es muy distinto.

FC: Para complementar este tema, me parece que el otro ejemplo paradigmático –probablemente tengamos diferencias acá- es el Brasil y es concretamente el PT y todas las experiencias que el PT ha generado sobre todo a nivel sindical, municipal, etc., a partir de o relacionado con la Central Única de Trabajadores (CUT). Me da la impresión de que en el Brasil, con toda la lógica casi estructural de corporativismo, de estatismo exagerado, de patrimonialismo generalizado en las relaciones sociales y hasta en los grupos de carnaval, el hecho de existir una clase obrera relativamente nueva y activa plantea la posibilidad de construcción de un nuevo sistema de actores sociales o incluso de reconocimiento de un pluralismo democrático de nuevo tipo. Yo sé que esto está mediatizado por las ideologías o por el radicalismo de los mismos dirigentes o por su debilidad en la gestión

económica en la globalización o por muchas cosas más, pero me parece que hay, con mucha más fuerza que en ningún otro país de América Latina, una opción distinta. ¿Cómo ves esta fuerza y esta dinámica en el Brasil?

MC: Primero, creo que lo que representa el PT en el Brasil es una agregación de intereses muy diversos a nivel del sistema político y de movimientos muy distintos. Por ejemplo, para hablar claro, el movimiento más radical, más famoso en el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), del cual el PT ha tomado extraordinarias distancias en cuanto tuvo, en serio, la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales, hasta el punto de no movilizarse activamente para liberar de la cárcel a algunos de los dirigentes del MST. El MST es un movimiento muy radicalizado de un sector muy marginal y al mismo tiempo muy manipulado por ideólogos y el PT ha resistido la demagogia de los movimientos –no del MST en particular- pero de los movimientos del entorno de las fracciones más radicalizadas y es muy posible que haya un enfrentamiento futuro. Ahora bien, la otra cuestión en la que yo estaría de acuerdo contigo es en experiencias de participación ciudadana local, ahí yo si veo experiencias importantes. Cuiba ha sido una experiencia de autogestión municipal; Porto Alegre se está convirtiendo en un referente mundial como modelo de participación ciudadana en la gestión de la ciudad, y muchos otros casos de innovación institucional y política, generalmente asociados al PT. Pero en lo esencial hay que recordar que la clase obrera organizada en los sindicatos brasileros es un segmento minoritario de la clase obrera, sobre todo centrado en el sector público, y en el sector del automóvil, por tanto, extremadamente sensible a cualquier movimiento que mitigue la globalización y con un interés en la defensa de los privilegios del sector público. Entonces, la idea de que un actor como el movimiento sindical, que ha sido un heroico actor en la construcción de la identidad popular brasileña, pero en una situación en que la industrialización no se ha generalizado, y donde casi la mitad de la fuerza de trabajo de las ciudades está en la economía urbana informal pueda generar un sistema de representación como actor colectivo que abarque a los sectores populares del Brasil me parece difícil; y no sólo difícil, sino contradictoria con el análisis de la fragmentación de clase con respecto a los otros sectores de la sociedad. Porque, por otro lado, si vamos a las favelas de Río, se observa que las formas de organización popular son tres: las iglesias africanas, los evangé-

licos y los narcotraficantes. La idea de que el Comando Vermelho en Río pueda movilizar, en septiembre de 2002, a miles de personas en defensa de su líder cuando estaba en la cárcel, que haya huelgas de comercio y de transporte y de empresas en las zonas populares de Río (aunque sean parcialmente forzadas por las armas), la idea de que este Comando Vermelho tenga una organización en el internet con un lugar web, con un link a las fuerzas armadas de Colombia y que se identifiquen ideológica, práctica y organizacionalmente con las FARC, ahí nos encontramos con un fenómeno de nuevo tipo. Entonces, lo que yo observo es, en el fondo, el fenómeno Escobar pero con una vinculación aún más fuerte al conjunto de redes mafiosas en el Brasil, y no simplemente con el barrio. Esa situación social desborda la capacidad de integración y representación del PT.

Más aún, el PT está fuertemente articulado a la Iglesia católica; la base del PT son los sindicatos y la Iglesia católica. Pero lo que ocurre es que el paso de la Iglesia católica al sistema de poder político en el Brasil está en total contradicción con el extraordinario progreso de los evangelistas, es decir, la Iglesia católica pierde terreno entre los sectores obreros organizados y recordemos que los evangelistas en el Brasil también empiezan a tener conexiones con la globalización. Por tanto, yo diría que detrás de una posible crisis –que a nivel personal espero que no suceda, espero que no fracase un gobierno PT en Brasil que es la esperanza de un Brasil democrático y menos injusto- la siguiente ola política podría ser populista evangelista con Garotinho como líder.

FC: Si fracasa el PT. Mi idea, por tanto, es que sí hay formas de participación popular muy interesantes en torno a los sectores obreros organizados en el Brasil y en torno a los municipios controlados por esos gobiernos organizados, esas formas son muy difícilmente extrapolables a otros sectores populares. Si, por ejemplo, comparamos a la mejor alcaldesa o alcalde que posiblemente tenga el PT en Brasil, que es Marta Suplicy en Sao Paulo, aunque los mecanismos de funcionamiento de participación en Sao Paulo son mucho más reducidos, mucho menos movilizadotes e innovadores que los que existen en Porto Alegre o incluso en el ABC. Porque al contrario de lo que se cree, Sao Paulo no es una ciudad industrial. El Sao Paulo industrial es su periferia, el ABC. Son los sectores populares de Sao Paulo los que están haciendo el clientelismo local y esos sectores no tienen la misma articulación que hay en el ABC, no son actores sociales au-

tónomos. Entonces, generalizando el tema, la cuestión es que más que una recomposición de actores sociales, yo veo en Latinoamérica, con excepción de Argentina, una recomposición de grupos de Interés organizados del antiguo sistema corporativo que perdieron la capacidad de influencia y negociación una vez que el sistema se globaliza, por un lado, y resistencias identitarias, por otro. Si quieres una ilustración de lo que son esas diferencias de intereses te recuerdo el análisis del gran sociólogo brasilero Vilmar Faria. La ortodoxia de izquierdaa es que hay que defender al sector público y la Seguridad Social (sistema de pensiones). Pero en las condiciones concretas de Brasil, en 1999, el 20% más pobre de la población recibía el 7% del gasto de la seguridad social, mientras que el 20% más rico de la población recibía el 30% del gasto de la seguridad social. Cardosoquiso cambiar esta situación y no lo consiguió. Ojalá esto sea distinto con Lula. Pero hay que partir de la realidad del corporativismo de los actores sociales constituidos.

MC: Lo que quiero decir es que en lugar de una reconstitución de sistemas de actores sociales capaces de rearticular la sociedad, lo que observo es la emergencia de un sistema de actores sociales que fragmentan la sociedad y que, por tanto, anclan identidades o anclan grupos de intereses con gran independencia tanto del Estado como de los otros grupos. Un gobierno del PT en Brasil es el gran experimento para ver si a partir de un grupo del antiguo sistema corporativo, ese grupo se puede abrir en términos políticos, más que de constitución de actores sociales, a una rearticulación de de una comunidad política democrática con base en el nacionalismo, con base en una estrategia de defensa de la nación. Ahí sí, reconstitución de la nación y defensa de la misma en torno al Estado.

FC: Pero esa es la lógica de la globalización. Si analizas el Foro de Porto Alegre, vas a ver que tratan de hacer una articulación entre su comunidad nacional (los excluidos, los obreros modernos, comunidades eclesiales, campesinos pobres, experiencias locales vecinales, etc.) y los movimientos anti globalización en los países desarrollados. No hay, por otro lado, presencia indígena fuerte en Porto Alegre. En la Alianza de Porto Alegre están los que protestan contra una globalización injusta.

MC: La fuerza justamente de ese movimiento es su disparidad, su heterogeneidad y su capacidad de crear alianzas a partir de su hetero-

geneidad –la frase genial de Ruth Cardoso; "el pueblo desunido jamás será vencido"- efectivamente esa fuerza es la heterogeneidad. Pero, entonces: ¿qué es lo que recompone esa heterogeneidad?, ¿por qué puede coexistir? Porque el proyecto común es en el fondo un producto político, democrático, porque la clave del movimiento anti globalización es su eslogan original enSeattle: "no a la globalización sin representación". Pero ¿qué quiere decir sin representación? Son los Estados, la mayor parte democráticos, los que estaban en Seatlle, son los que están en todos estos lugares donde protestan los movimientos. Entonces, lo que están diciendo estos movimientos es que en un sistema global, en un sistema de representación política mediatizada a través de los Estados que luego se articulan en redes inter-Estados, no hay democracia, hace falta otro sistema de representación que nadie sabe qué es, pero otro sistema: "no nos sentimos representados por los señores que se sientan en nombre nuestro". En el fondo es un movimiento político democrático más que de protesta social al que cada uno llega con sus protestas sociales pero lo que todo el mundo dice es que necesitamos un foro de debate y discusión que sea distinto. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de América Latina, el intento que me parece extremadamente importante del proyecto PT, es el de dar una articulación política en torno a uno de los pocos actores sociales constituidos, que es el movimiento sindical, dar (esa articulación) a partir de ese núcleo, ampliar en términos políticos la construcción de una comunidad nacional dentro del sistema de articulación político, más que negociar directamente con al globalización en nombre de la nación y no simplemente mediando lo que son las influencias sociales para que el país funcione. Ese es el gran desafío.

FC: No sabemos si lo van a lograr, pero es el gran desafío.

MC: Ocurre que eso se hace en condiciones extremadamente frágiles, tanto de negociación externa como de negociación interna, y que el gran tema es que en la medida en que cada negociación –con actores políticos internos o con actores económicos globales- representa concesiones, en una situación extremadamente desestructurada, fragmentada y con una población desalentada tanto por el cinismo y la desesperanza político como por las crisis económicos y sociales, los márgenes no son muy pequeños.

FC: Ahora, si uno toma en cuenta además, el caso venezolano, la re-emergencia del APRA en el Perú, el éxito de Gutiérrez en el Ecuador, da la impresión que estamos ante una nueva reacción populista en América Latina frente a la crisis de la globalización y de la democracia representativa. Probablemente el caso más paradigmático sea el de Venezuela, ¿Cómo ves el asunto?

MC: Venezuela es un caso paradigmático de la dificultad de la democracia en América Latina en situación de desigualdad extrema y corrupción sistémica de las instituciones políticas. Venezuela desafía los análisis tradicionales de las causas del subdesarrollo. Tiene recursos, una clase media profesional educada e internacionalizada, sindicatos de trabajadores potentes y un sector público importante que hubiera podido representar un mecanismo de estímulo al desarrollo y redistribución social. Pero esa clase media profesional, dependiente del Estado y del sector público en lo esencial, acaparó los recursos y marginó a la gran mayoría de la población.

La clase política profesional mantuvo el control del país mediante redes de clientelismo político con las clases populares. Era una democracia de clase clientelista, tanto de AP como de COPEL. Pero como en lugar de invertir los recursos del petróleo en creación de riqueza se especuló con el sistema bancario e inmobiliario y como la clase política tuvo como máxima su enriquecimiento personal, las bases del clientelismo se fueron estrechando hasta hacerse insuficientes para contener el descontento popular. La clase política tradicional de Venezuela es la peor de América Latina.

Cuando se extendió la conciencia de esa corrupción sistémica, los ciudadanos optaron por votar cualquier posibilidad de salir de ese sistema. Y votaron, repetidamente, por el populismo de Chávez, un líder bien intencionado en un principio pero que carecía de base política real más allá del entusiasmo desesperado de los sectores pobres y su política carismática-mediática, además de un sector de la oficialidad nacionalista joven en las fuerzas armadas. A pesar de los esfuerzos de Rancel y otros veteranos de la izquierda venezolana, la institución bolivoriana es débil, superficial y frecuentemente demagógica, de forma que los círculos bolivarianos son más milicias que organización de masas. Es decir que la justificada reacción popular contra los políticos profesionales y la práctica cínica de una democracia clasista, no desembocó en una institucionalización de alternativa democrática. Y aunque Chávez ha

respetado el voto popular más que la oposición, la dinámica del enfrentamiento civil y la crisis económica están llevando a Venezuela al abismo.

Posiblemente entre el momento en que hablamos y el momento en que seamos leídos haya habido una crisis profunda en Venezuela. Porque aunque entre la movilización de las clases medias (que defienden sus privilegios sociales), la manipulación de los medios de comunicación, las intrigas de la CIA y la influencia de los sectores conservadores de las fuerzas armadas fuercen la renuncia anticipada de Chávez, como es probable, esto no resuelve el problema fundamental de Venezuela: una pseudo-democracia de clase en donde la mayor parte de la población está excluida de la apropiación de recursos en una economía rentista manejada por profesionales de la corrupción. Esto no lo inventó Chávez. Chávez fue el producto de una situación de descomposición social e institucional que no fue capaz de rectificar. Venezuela es la demostración de que el principal obstáculo para el desarrollo y la democracia en la mayoría de las sociedades latinoamericanas es su clase política profesional –con honrosas excepciones, como Chile y Costa Rica y sólo en parte Brasil y Bolivia. El "que se vayan todos" lanzado por los manifestantes en Argentina en medio de la crisis del 2001 es perfectamente aplicable a Venezuela y explica el fenómeno populista de Chávez. Pero un populismo sin articulación política y sin política de desarrollo estratégico suele conducir a la crisis, y ese es tristemente el caso de Venezuela.

FC: Ciertamente hay una crisis de legitimidad en las instituciones políticas, económicas y militares y ellas están asociadas a una cultura patrimonial desde 1958 y también con el proceso de corrupción que tú señalas. Llama la atención además esa fuerte vinculación entre social democracia y corrupción que por cierto no sólo se dio en Venezuela sino también en varios países de América Latina y muy especialmente en España y en el PSOE. Allí me parece que la fuerza y el tipo de crecimiento económico impidió el desbande institucional, cosa que no se dio en América Latina. En realidad, me da la impresión de que hay una suerte de correlación entre una economía de enclave petrolera (que no invierte el excedente en una estructura productiva basada en una competitividad genuina) y un consumismo acelerado, la que en definitiva crea condiciones para la corrupción que además se hace intolerable en momentos de recesión económica. Quizás es esto lo que produce la crisis de legitimidad en Venezuela.

Crisis por lo demás asociada con una tremenda polarización social.

El chavismo responde a esta crisis de legitimidad insistiendo en criterios distribucionistas, por lo menos en el plano simbólico, incorporando de esta manera a masas marginales urbanas que se movilizan, lo legitiman y además crea expectativas de movilidad social. Esta suerte de apelación populista, ha estado asociada en Chávez mismo con un cierto resentimiento y agresión contra los sectores medios más ilustrados que tú mencionabas, eso ha incidido de manera determinante en el proceso de polarización, ya que estos sectores medios han terminado apoyando a la oposición. Es en este contexto, que Rigoberto Lanz insiste que en Venezuela hay una tendencia en reproducir un sistema nacional de corrupción. Según varias encuestas, la mitad de los venezolanos rechaza al Presidente, tres quintos de los venezolanos rechazan a la Asamblea Nacional y cuatro quintos a los partidos políticos. A nivel institucional hay una suerte de polarización entre las mismas instituciones del Estado, y el bloque opositor es un bloque heterogéneo donde empresarios, obreros, grupos políticos y sobre todo medios de comunicación rechazan en lo fundamental al Presidente de la República que sería el causante de todo "el mal". Se está acelerando la polarización y la radicalización de la sociedad venezolana. Una tercera vía es por ahora muy débil. Sin embargo, créeme Manuel que Venezuela no volverá a ser la que fue, como no fue la Argentina después del peronismo u otras experiencias regionales. Fundamentalmente porque las masas despertaron con hambre política.

Me parece que vale la pena examinar ahora los casos de Chile y Costa Rica.

MC: Esos dos casos son fundamentales, contradicen la hipótesis que dice que los países se reconstituyen sobre la base de los movimientos sociales, porque las dos economías que funcionan relativamente bien, que redistribuyen, que crecen, que compiten, etc., son aquellas en que el Estado ha logrado rearticular un sistema político directamente a la globalización, integrando, por mecanismos políticas tradicionales, la población al mercado. O sea que probablemente la forma de que funcione un modelo neoliberal en lo ideológico en América Latina es a través de un gobierno social demócrata.

FC: Hay otros antecedentes que a mi juicio son determinantes en esos dos países. Con todo, a pesar de que Chile ha tenido un incremento de la desigualdad social brutal en el periodo de Pi-

nochet, que el Gini de hoy no es el mismo que el de la época de Allende y que el modelo social chileno es curioso ya que baja la pobreza y aumenta la desigualdad y a pesar de que en Costa Rica las desigualdades no han aumentado al ritmo de otros países, pues hay un patrón de integración social de origen muy lejano, que tiene que ver con la estructura de tenencia de la tierra, hay dos aspectos importantes en estos países que permiten pensar lo que estábamos diciendo sobre la globalización. Estos países tienen una legitimidad institucional de larga data; ellos tienen una práctica institucional que les permite remitirse a un proyecto cultural que casi no encuentras en ninguna otra parte de América Latina. Sea en su opción más orientada a una política institucional, desde Calderón y Figueres en Costa Rica en el contexto de la crisis centroamericana y de las dictaduras de los treinta y cuarenta, o de un Chile en un proyecto de mucho más largo alcance, asociado con el iluminismo de Bello y el pragmatismo de Portales, en el trasfondo, en estos dos países haya dos temas: son países aislados, casi insulares, países que no soportan como decía Portales el peso de la noche.

MC: Chile no es chiquito, esa es una visión restringida de Chile.

FC: Originalmente era un país periférico y económicamente limitado, La reflexión de Portales es cabalmente ésta: Chile no puede soportar la pesada noche, la noche larga, no puede soportar el caos, los fantasmas de la noche, Chile necesita hacer un pacto constitutivo de orden, y ese pacto tiene que ser además institucionalizado, con normas, con prácticas, con reglamentos y con sociabilidad. Eso tiene Chile desde 1830 y los tipos que se enfrentan a esto mueren como nuestro querido Allende; son los que sacaron los pies del plato, porque demás, tiene un proyecto de origen muy oligárquico. Pero lo curioso y no novedoso de Chile y la virtud de la Concertación es que trata de mediar entre esos dos mundos: ese patrón elitario de largo plazo, con una modernización en elglobalización y eso lo hace desde el Estado como el resultado de un proyecto político. Esa es la novedad chilena.

MC: El Estado es el actor central.

FC: Ese es el sentido portaliano de la historia, con otras ventajas, porque también se gestionan otros elementos –hay que decirlo- el laico, moderno, de clase media, de educación pública. Eso es Lagos. Las inversiones en educación en Chile y la participación de Chile en la edu-

cación es importante. Hay en Chile un proyecto letrado de largo alcance. Ahora, dicho todo esto, y con cambios muy fuertes al interior de la economía, del mercado y del consumo y con partidos que articulan esto y que reproducen elites patrimoniales también fuertes, han podido funcionar en la globalización. No sé cuán sostenible será este estilo porque no se da el salto de innovación; sí sé, sin embargo, que el costo de estos cambios es un malestar con la política y con la propia identidad cultural como lo hemos visto en los diferentes Informes de Desarrollo Humano de Chile. Pero se plantean un camino y no sé tampoco cuán ausente puede seguir la sociedad. Hay una fuerte tendencia a la individualización.

MC: Bueno, yo creo que parte del modelo chileno es que el Estado provea de articulación dinámica a la globalización, provea el sistema institucional de cobertura de necesidades básicas y deje al resto de la sociedad estimularse en el mercado y, por tanto, el mercado se constituye en mecanismo fundamental de legitimación y de distribución, es un mecanismo de individualización. Por consiguiente, la idea de un Chile identitario es una idea contradictoria. Una cosa muy interesante es que cuando en todo el mundo se observa un extraordinaria identidad territorial y regional, en el Chile que yo conocí primero, en los años setenta, las estructuras regionales eran muy importantes y, en este momento, para mí es paradójico que la famosa regionalización en términos militares región I, región VI, etc., se haya aceptado de forma normal, porque es una terminología militar y son las administraciones burocráticas administrativas de prefectura napoleónica.

FC: Nadie va a morir por la V Región, pero por Valparaíso lo haría mucha gente.

MC: Exactamente, ése ha sido el precio, Chile no sólo tenía que salvarse en términos económicos de los embates de la globalización; tenía que hacer algo, yo diría, más importante: demostrarse a sí mismo y demostrar a la población chilena que no tenía que escoger entre una dictadura militar y el progreso económico, que la democracia podía asumir el progreso y el modelo económico, añadiendo además, la distribución social, añadiéndole las reglas democráticas del juego; o sea, volver un poco al Chile original, pero además a un Chile situado en la globalización y capaz de competir dentro de la globalización. Yo creo que ese era el gran desafío, las dos cosas a la vez: el orden con el progreso; pero al mismo tiempo demostrar que no

les hacía falta Pinochet para ese orden y para ese progreso y ese es el quid del proceso democrático chileno. Lo que hacía Pinochet, y que no lo legitimaba, hacerlo mejor que Pinochet pero además con redistribución y democracia, y en ese sentido, está funcionando, con los límites que tú insinuabas. ¿Hasta qué punto es Chile el tigre del Pacífico? Ese modelo chileno de competir solo en Europa, en Estados Unidos, estar más o menos dentro de las alianzas comerciales pero sin realmente jugar a esto, sino hacer su propio camino, tratar con todas las partes a la vez en una economía totalmente avierta: ¿hasta qué punto eso es sostenible sin un desarrollo fundamental en términos de la economía informacional del conocimiento, con una baja productividad, con desarrollos tecnológicos, todo lo cual está en la teoría, pero todavía no ha llegado a la práctica? Es un empresario muy moderno, los agro-exportadores sobre todo, pero con una base bastante pequeña sobre la cual expandirse. Lo que decías sobre educación sí, porque es muy importante con relación a América Latina, pero es muy inferior a la educación en capital humano en general al de los países del Asia del Este.

FC: ¿Será que Chile es una vía de América Latina, que se está yendo de América Latina?

MC: Yo creo que los chilenos lo tienen claro, ellos ya no están sólo en América Latina.

FC: Pero yo te pregunto a ti, ¿será que esta forma chilena, con todos los matices que quieras, es un proceso que da para pensar el resto de América Latina? O ¿será que es una cosa tan especial que toma una distancia, otro ritmo en un marco regional disperso?

MC: yo creo que lo que estamos haciendo es aproximar Chile a Costa Rica y se parecen mucho. Costa Rica es un nivel mucho más reducido, pero también está haciendo un proceso de desarrollo competitivo en la economía global con mayor inversión tecnológica que Chile, con mayor capacidad de capital humano que Chile.

FC: Y con dos cosas que también son muy importantes. Me da la impresión que una ventaja es la inversión estratégica en industria electrónica, en conocimientos aplicables a la electrónica y en Internet con políticas estatales muy sólidas y con un cierto grado de visión. La otra cosa que me sorprende de Costa rica es que quieren hacerlo a escala ambientalmente sostenible.

MC: Y el punto negro de la política democrática de Chile, es la de medio ambiente.

FC: Pero, por otro lado, Costa Rica quizás está más integrada, por lo menos en el imaginario, con Centroamérica que Chile con Sudamérica. Me da la impresión de que hay un juego distinto y que marca diferencias en los estilos; no es que se aun solo modelo con dos caras, sino que da la impresión que hay cosas comunes en ambos casos, pero son dos etilos distintos de inserción a la globalización.

MC: Lo que ocurre es que si tomamos países enteros como especificidad o generalidad, prácticamente cada país va a ser un caso, por eso no es bueno decir que Chile es la excepción. Yo creo que hay que tomar procesos; en los casos de incorporación dinámica hay que ver qué procesos tienen esa capacidad dinámica y si esos procesos se pueden transponer a otras situaciones aunque el conjunto del país no sea lo mismo. Entonces, hay un tema fundamental en el modelo democrático chileno, no en el modeloPinochet que es mucho menos exitoso que el primero. Lo que es importante en el modelo democrático de desarrollo chileno es la posibilidad demostrada bajo ciertas condiciones de estabilidad política y de productividad y competitividad que permiten jugar a fondo en la globalización, disminuyendo la pobreza y redistribuyendo, que es algo que en el conjunto de América Latina no se ha producido. Es más, en muchos casos se ha teorizado esa incapacidad, argumentando que hay que anclar el crecimiento en un sector estratégico, dinámico y luego esto arrastrará al resto. En el fondo era lo que Pinochet hacía; el caso del modelo democrático chileno ha sido un caso de voluntad conciente y deliberada de articular el modelo de inserción global con los actores sociales, con los sindicatos y, en ese sentido, podría prefigurar una nueva dinámica.

FC: Pero en una lógica muy subordinada.

MC: Subordinada, pero cambiando apoyo a la competitividad por redistribución, que es una lógica social democrática, yo apoyo a la productividad, apoyo la competitividad, apoyo la flexibilidad, apoyo al sistema de pensiones, pero usted me redistribuye, en términos de salarios, en términos de vivienda, en términos de salud, de educación. Ese es el paso social demócrata tradicional. Y en el fondo es lo que hay detrás de la política del PT en Brasil. La gran diferencia sería que las masas excluidas en el Brasil son tan inmensas comparadas con el núcleo de lo que puede hacer ese tipo de negociación, que no te sirve, porque en Chile haces una negociación con los sindicatos; lo

esencial de la sociedad chilena está integrado en torno a ese núcleo sindical corporativo de clase media, etc., excepto los mapuches y ahí sí hay movimiento, pero es movimiento identitario de los excluidos cultural y socialmente. Ahora bien, el proceso de lo que ha sido el modelo democrático chileno permite pensar otras situaciones en América Latina y permite plantearse porqué no se producen al menos intentos en otros lugares.

Para completar nuestra visión, yo creo que tienes toda la razón sobre la base institucional cultural por la cual Estados de pequeños países pueden competir en la globalización, llevando con ellos la sociedad, aunque yo diría reemplazando la nación por el mercado. Para pensar esto siempre en términos de contraste, pongamos el caso de Uruguay. Creo, ya que estamos en el análisis más específico pero con posibilidades de pensar en temas más generales, que el contraste de Uruguay es importante, porque si la base institucional cultural de clase media de un Estado democrático es importante en Chile y en Costa Rica, Uruguay tendría que tener esa capacidad de inserción, porque en términos históricos era el mismo sistema de organización: además siempre se hablaba de una social democracia –la Suiza de América Latina-, nada que ver con Argentina. Entonces, intentando pensar de forma concreta creo que podemos encontrar mecanismos y procesos que es lo que yo estoy intentando, ¿por qué Uruguay no es capaz de hacer esa misma recomposición partiendo de una base institucional y cultural grosso modo similar a la de Chile o Costa Rica?

FC: El caso de Uruguay sorprende, porque da la impresión de que debería ser el país con mayores chances de hacer este proceso, incluso, con algunos nichos financieros, tecnológicos, etc., se lo intentó y relativamente fracasaron.

MC: Hay una población muy educada y un alto nivel de educación e investigación en la universidad.

FC: Con una universidad con un deterioro tremendo, como varias veces ha señalado Judith Sutz. Creo que hay temas cruciales en el caso de Uruguay. El primero es el peso propio del Estado de bienestar, la carga burocrática de ese Estado uruguayo, su rol de empleador, su fuerza en el imaginario nacional y sus características cada vez más ineficaces de funcionamiento.

MC: El enemigo perfecto para una crítica neoliberal del papel del Estado en América Latina.

FC: Muy pesado, cabalmente fue lo más avanzado como Estado de bienestar en América Latina; hoy se ha transformado en lo más pesado para producir innovaciones porque además está muy legitimado en la población. Un cambio en el Uruguay crea tremendo desempleo, inseguridad, se trata de un costo político muy alto que no aguanta nadie, nadie tiene la fuerza para hacerlo, aunque algunos lo piensan.

El segundo punto importante en el Uruguay que me parece interesante, es que además de tener todos esos niveles de educación y de una universidad tradicionalmente muy rica, la capacidad de innovación empresarial es baja, tanto en el plano industrial como en los servicios, aunque el sector turístico es más dinámico y también hubo reformas interesantes en el sector agrícola y ganadero. Y aunque hubo reformas en el fondo fue una economía rentista del Estado. Quizás lo más novedoso sea una incipiente industrial de software. En el Uruguay hay una crisis estructural porque existe un déficit de reformas y fracasos de otras. La reforma financiera de 1974 acaba de colapsar. Quizás la pregunta sea no sólo cómo desarmar un Estado ineficaz, sino pensar qué es lo que lo reemplaza y que haga sentido para la sociedad uruguaya. Es difícil.

MC: Eso en términos de mecanismos es muy importante, yo estoy de acuerdo contigo, aunque conozco muy poco Uruguay. Pero lo que nos dice eso es que junto al Estado nacional populista había también un Estado redistribuidor y que ese Estado redistribuidor sólo puede funcional eficazmente en la medida en que obtienes fuentes de acumulación que permiten redistribuir; pero las características del Estado redistribuidor no le permiten incorporarse activamente a la globalización y por tanto es insostenible.

FC: Creo que el caso de Uruguay quizás también tiene que ver con el exilio y la fuga de cerebros de la época del autoritarismo; de alguna manera las elites innovadoras, jóvenes técnicos capaces, lo más ilustrado en tecnología del Uruguay, se fueron después de la represión y la crisis, y esto se fue acelerando con la debilidad del mercado, con la crisis de la universidad etc., etc. Entonces, hay también un costo social que tal vez no es tan claro pero habría que explorar e investigar más, preguntarle a la propia Judith a DiegoAchard, qué sé yo. Pero a mi me parece que éste es un dato muy sugerente del Uruguay respecto de América Latina.

MC: Por tanto, el mecanismo que estamos identificando es que no solamente la redistri-

bución ligada a una política de productividad y de competitividad es un elemento que sostiene esa productividad, sino que la redistribución como fundamento de legitimidad y funcionamiento del Estado hace a este Estado sostenible en las crisis sociales que acompañan el proceso de globalización.

FC: Ahora Uruguay tiene ventajas comparativas; sus niveles de equidad, su cultura institucional, es posiblemente el país con el nivel de solidaridad interna más alta de América Latina, no hay grandes movimientos sociales, tiene una izquierda medio conservadora muy fuerte que probablemente va ganar la elección. Ahora, yo creo que hay otro fenómeno también fuerte en el Uruguay y es que se construye y se proyecta con relación al Brasil y Argentina. La crisis de la Argentina tiene un impacto brutal en el Uruguay y, por otra parte, la indecisión en el Brasil los tiene hoy día en una situación de orfandad terrible, igual que el Paraguay. Más allá de la crisis política y de temas de corrupción, en el Paraguay hay un tema de orfandad y por eso hay un cierto retorno al pasado, una nostalgia de seguridad política.

MC: ¿No crees que el sistema es simplemente que Paraguay está demasiado inmerso en una economía de conexión perversa? Pienso en Ciudad del Este…

FC: Pero Paraguay no es solamente eso; hay cierta capacidad empresarial en la agricultura, hay una cierta capacidad empresarial en la ganadería, hay una cierta instalación de recursos en servicios hidroeléctricos, hay una capa empresarial tecnocráticamodernizada. En Paraguay hay sectores medios emergentes modernos integrados a la región, al MERCOSUR, hay un movimiento campesino interesante, hay una dinámica de solidaridad alta a nivel rural y organizaciones urbanas de barrios etc., hay políticos modernos –el alcalde de Asunción parece ser un político moderno- hay liberales radicales institucionalistas, hay incluso una impronta nacionalista con un fuerte arraigo cultural, que defiende la nación, o sea, no solamente en esta imagen del Paraguay de “mercado y contrabando”, también hay desgraciadamente, mucha corrupción. Me da la impresión de que en el centro sigue el Estado stroessnerista; eso es, y por eso el fracaso aparente de la democracia en Paraguay. Vuelve además Oviedo. Pero hay cosas nuevas , hay también intelectuales muy lúcidos, hay también esa otra parte, que desgraciadamente está perdiendo pero. Más allá de estas diferencias claro que no es Uruguay ese

pedacito de Europa que está a un costado de Sudamérica, pero lo que sorprende en ambos casos es que son totalmente dependientes no ya de la globalización en general, sino de lo que está pasando en los procesos políticos y económicos de Brasil y Argentina.

En el caso de Bolivia yo creo que hay una suerte de situación intermedia. Bolivia ha hecho reformas, ha sido el principal aprendiz de las reformas, ese modelo se ha agotado y hoy día todo se redefine.

Esta redefinición marca una situación de inflexión. Por una parte, las reformas estructurales no han producido incremento económico significativo, sólo ha crecido la economía en el sector hidrocarburos, el resto sobre todo el sector intensivo de mano de obra, se ha deprimido. Por otra parte, la producción de coca excedentaria ha disminuido drásticamente, también ha disminuido la pobreza por necesidades básicas pero se ha incrementado la pobreza de ingresos y ha aumentado la desigualdad. Esto se ha traducido en un notable incremento de las demandas y luchas sociales.

Finalmente en el plano político el pacto interpartidario que le dio gobernabilidad al modelo se encuentra relativamente agotado. Al contrario, han emergido nuevas fuerzas populares y sobre todo han llegado indígenas al Parlamento y al sistema de partidos. Adicionalmente, se ha incorporado el tema de las enormes reservas de gas. La cuestión es qué tendencias emergen de todo esto.

El hecho de que Bolivia negocie con el MERCOSUR y negocie con la Comunidad Andina, tenga una relación privilegiada con el Banco Mundial, que haya conseguido con el resto de los países andinos, que se abra el mercado de productos industriales a EE.UU. y esto, quizás posibilite una nueva oportunidad. El hecho de que tenga una dirigencia tecnocrática que ha permanecido en el poder los últimos 20 años y que se den procesos de participación local más o menos exitosos y, sobre todo, posibilidades de hacer una triple alianza con Brasil, Chile y EE.UU., no solamente por la comercialización del gas y la agricultura del oriente, sino también por todo un sistema de comunicación de infraestructura tanto de caminos como también de fibra óptica y que busque hacer un puente entre el Atlántico y el Pacífico, le da una pequeña chance.

En todo caso, para mí, las opciones están asociadas con la capacidad de los distintos actores para producir acuerdos que viabilicen modernización con equidad.

MC: El tema importante es, tanto para Bolivia como para Brasil, en qué medida nuevos

actores sociales, que fueron parte de la reconstrucción de la sociedad, son capaces de pensar el Estado cambiando el contenido de sus políticas y de rearticular a la sociedad entre lo nacional y lo global. Sólo si la inserción de indígenas, cocaleros, etc., en el Estado boliviano permite que las políticas del Estado no solamente sean las de exportar el gas y el petróleo y acumular en Bolivia, sino que además sean decididamente compartidas por sectores populares hasta ahora excluidos del Estado, sólo entonces, habrá esa articulación entre el actor social y el movimiento político. Porque hasta ahora la clase política boliviana se ha caracterizado, más bien, por lo contrario, es decir por mantener el juego político encerrado en una clase política que dirimía los conflictos en términos de aparato de partidos y que después tenía un comportamiento patrimonialista con distintos sectores. Los que han ido cambiando son los beneficiarios de esepatrimonialismo, pero siempre desde el punto de vista del mismo sistema de poder que es la clase política profesional, históricamente ligada al nacionalismo, al movimiento obrero, etc., y que, en último término, se independizó completamente de sus orígenes históricos y no representa más que a la clase política misma.

FC: La opción es que el proceso se democratice, que la comunidad democrática constituya una comunidad nacional. Esto significa una suerte de tercera vía boliviana. No se puede ser cerradamente ortodoxo, pero tampoco se puede ignorar el mercado y la globalización. No se puede ser cerradamente indigenista, pero es imposible no pensar que la comunidad es fundamental en la democracia y el desarrollo. No se puede tampoco no construir una dinámica institucional legítima y adecuada a los cambios.

Claro que también pesan lógicas pasadas como la lógica cerrada e improductiva de las elites autóctonas, cuya miseria en buena medida estuvo asociada a la escasez de recursos y a una lógica de enclave. Casi siempre, salvo Patiño, fueron socios menores de empresas extranjeras. Hoy están ansiosas frente al gas. Otro tema es el papel de EE.UU. y la cooperación institucional que tienen importantes agendas internas, que a veces son modernizadoras pero nunca negocian directamente con los más excluidos. Quizás Bolivia será también a la vez una probeta y un eslabón débil.

MC: Es que el modelo de inserción productiva de Bolivia en la economía global no está claro. Para mí, el modelo del gas, es típico de enclave.

Se puede hacer gas en Tarija, un poco de litio en el altiplano y unas cuantas cosas más, y ya está: es suficientemente rentable para el sector empresarial globalizado y la clase política profesional; esto es economía de enclave, exceptuando a Santa Cruz. Volvemos a la misma economía de siempre y por eso es intuitivamente excluyente, en gran parte porque a las elites les basta tener un buen enclave productivo para vivir bien y, además, como la sociedad no está tan desestructurada porque es una sociedad con rasgos comunitarios e identitarios fuertes, la gente se organiza a nivel de supervivencia y solamente se enfada cuando le restringen sus formas propias de supervivencia, como por ejemplo los mismos cocaleros. Ahí viene el cuestionamiento del propio gobierno boliviano y no sólo de EE.UU. con relación a la conexión perversa de Bolivia durante un tiempo. El Estado boliviano juega a cortar la conexión perversa, que es el mecanismo de integración de una parte importante del campesinado boliviano y de intermediarios.

FC: Bueno, en Bolivia, hoy día hay un nuevo panorama político, hay una nueva oportunidad respecto del gas, ha habido una disminución objetiva de la producción de coca, hay la integración indígena y popular en el Parlamento Nacional, en el sistema de partidos, y se está dibujando un nuevo mapa.

MC: A mí me parece que todo esto reproduce las características tradicionales, porque en el fondo Bolivia es el único país de América Latina que más directamente ha estado articulado globalmente y desarticulado globalmente; toda la historia de Bolivia ha sido la de un país de enclave y de exclusión social y política de gran parte de la población, y por eso también es un país de gran tradición revolucionaria. Justamente es una situación que genera tales niveles de exclusión que en la medida en que haya fundamentos y principios de organización social autónomos, (que fueron, por un lado, los identitarios, pero por otro lado, los del campesinado y los del movimiento obrero), son actores que se constituyen frente al Estado. Pero ¿cuál es la situación en este momento? ¿Es un nuevo lanzamiento de la economía de enclave, de una nueva forma de enclave minero (energético), de un nuevo bien con alto valor en el mercado, pero muy limitado y con poca capacidad de irradiación interna directamente de la producción? Aunque haya una fábrica de gas, yo visité en algunos países inversiones de 2,000 millones de dólares de una multinacional creando 300 empleos, las petroquímicas y las

fábricas de procesamiento de combustible son altamente tecnologizadas y altamente intensivas en capital. Por tanto, la posibilidad de que una economía de enclave, en lo económico, con los recursos controlados por la elite de siempre sea restringida a una nueva clase social es una posibilidad real. Que no sea así depende de la movilización social.

Segundo, la incorporación de sectores marginados, excluidos, a través de un movimiento social que luego se convierte en agente político y pacta dentro del sistema de poder, es la historia de la revolución boliviana. O sea, los campesinos bolivianos realmente fueron actores, los mineros bolivianos fueron actores, pero sus elites dirigentes se integraron en la clase política boliviana y simplemente se convirtieron en correas de transmisión de grupos de intereses en gran parte; por tanto, tiene que haber algo distinto que cambie la ecuación con respecto a lo que en el momento actual es simplemente una reproducción de mecanismo de inserción global. Yo espero que no sea así, pero necesito saber qué nuevo elemento articula una nueva dinámica.

Tercero, la otra cosa que es relativamente nueva en Bolivia en los últimos 20 años es la inserción seria de Bolivia en la conexión perversa; esa conexión ha sido altamente reducida por la política conjunta de EE.UU. y el gobierno boliviano. Yo creo que una parte de los efectos de la estructura de la corrupción ha sido el incremento de la pobreza y la falta de recursos alternativos para la economía informal, no solamente campesina, sino urbana. Todo lo que era el contrabando, no se ha generalizado, pero ha disminuido porque los capitales que se generaban en la economía ilegal se reinvertían también en buena parte en la economía ilegal. Entonces, yo creo que el movimiento cocalero es un movimiento de resistencia a una reconversión económica: es mi puesto de trabajo, son mis formas de supervivencia. En la medida en que además esa economía de conexión perversa de Bolivia depende absolutamente de la administración de Colombia, pero lo que sí está ocurriendo es que el traspase que se había operado hacia Colombia de las explotaciones del Perú y de Bolivia, incluso el procesamiento de pasta de coca, que es muy importante en el Chapare, ese traspase puede estar invirtiéndose, volviendo hacia Bolivia por razones de seguridad ligadas a la guerra en Colombia. Entonces, es muy posible que haya una reconexión boliviana a través de la economía informal y probablemente en zonas distintas de las tradicionales. Hace mucho tiempo que se habla en Bolivia de la nueva frontera de expan-

sión de la coca el Beni. Entonces, esto vuelve a recrear otro tipo de tensión que contrapesa la política del enclave, teóricamente se podría sugerir un modelo alternativo que a partir de la acumulación de capital de un enclave dinámico se convierta en un sistema de alimentación de una inversión productiva autónoma en la globalización con capacidad de generar muchos mayores recursos en un sector mucho más amplio de la población. Y eso pasa necesariamente por una economía intensiva del conocimiento, ampliación de los recursos humanos y una población mucho más educada, es decir, el sistema de incorporación a una competitividad en términos informacionales, aunque sean con otros conjuntos que no sean de alta tecnología, incluso los productos agropecuarios que produce Chile que exporta salmón y vino, pero salmón y vino que en el fondo es conocimiento y tecnología empaquetados en forma de salmón y vino. Entonces, ese cambio depende de en qué medida la clase política boliviana se convierta en una clase desarrollista, dinámica capaz de abrirse a otros sectores, más que en una clase patrimonial de nuevo, simplemente cooptando nuevos actores.

FC: Bueno ese es el tema de nuestro nuevo Informe de Desarrollo Humano. Por otra parte, estamos tratando de explorar otra variable que coloca nuevos temas y problemas, se trata del crecimiento de nuevas regiones o subregiones con un cierto dinamismo económico y que tiene que ver más con fronteras y también con recursos, que es el caso de la Amazonía en el norte, de las reservas de hierro y del dinamismo económico en Puerto Suárez y Guayaramerin en el sudeste. La otra región incluye al norte de la Argentina y el Paraguay y tiene como epicentro el Chaco tarijeño. También hay un nuevo dinamismo de mercado interesante, entre parte del norte de Chile y sur del Perú y parte del altiplano boliviano. Como el que en la economía boliviana se dan potencialmente otros ejes que el central. Pero yo sé que son tendencias secundarias; nuevamente esto pone en peligro la nación y apela a la necesidad, también histórica, de reconstruir un pacto, lo que reafirma tu idea de que el enclave no es suficiente.

MC: Insisto, la nación es una construcción que depende de los intereses nacionales, la nación boliviana, por ejemplo, la nación del 52 se hace contra la oligarquía, pero al mismo tiempo esto se hace aplastando al oriente.

FC: No

MC: ¿Y entonces las masacres de las milicias de Ucureña?

FC: Desde luego que hubo represión pero, por otro lado, quizás por ello, lo que trae la revolución en definitiva es el dinamismo de Santa Cruz y que Santa Cruz sea luego el eje de la economía boliviana. Fíjate qué paradójico: los mineros y los campesinos hicieron la revolución para colocar en el centro de la economía del país a Santa Cruz.

En Santa Cruz hubo un empresariado junker, a la cruceña, que produjo un dinamismo y un movimiento regional muy fuerte, único o muy especial en Latinoamérica, con una elite regional con fuerte identidad, con proyecto, con Estado que le da a la región un dinamismo y una particularidad única. Buscaron innovación en crecimiento y lograron ventajas comparativas de Santa Cruz con respecto al resto del país en varios planos: en lo social, en lo económico, en el dinamismo tecnológico. Pero eso fue producto del 52 y también es un costo del 52. Pero más allá de esto, es verdad que puede pasar lo que tú dices, entre otras cosas, fagocitado hoy día por los intereses cruceños del empresariado y de la elite cruceña.

Sin embargo, también plantea la idea de asumir la diversidad de una comunidad nacional sobre la base de un pluralismo que necesariamente tendría que reconocer el universo cruceño.

Desearía ahora precisar el tema de los movimientos sociales. Para introducir y retomar la tesis de Manuel Chiriboga, que es el que trata esto, pero también los textos de Natasha Loayza y Hugo José Suárez. Me da la impresión de que emerge una novedad vinculada a esta globalización, a esta crisis del Estado, a la exclusión, y también a un proceso de modernización cultural global: la emergencia de un movimiento indígena polifacético en toda la mancha indígena del continente que, incluso, incluye a los mapuches de Chile.

MC: Pero no están conectados.

FC: Sí, están muy conectados en red. Se leen, se miran, viajan, hacen seminarios, talleres, páginas de Internet, etc. En el texto de Manuel estos movimientos son incomprensibles sino es por la apropiación que tienen del Intenet, lugar donde se comunican e interactúan. Hay muchos sitios; ahí están los números y los nombres de los mismos. Esta dinámica tiene un detonador muy fuerte: el zapatismo trasciende México y recupera mundos mayas, etc., sobre todo en Guatemala y la fundación de Rigoberta Menchú, las ONG, fagocitan también

esto. Existe un movimiento muy interesante; donde más se detiene Manuel es en el movimiento indígena del Ecuador, el movimiento de las centrales de campesinos indígenas que producen cambios y reformas en la Constitución Política del Ecuador. No hay país indígena fuerte que no haya hecho reconocer con sus luchas indígenas el carácter pluricultural, plurilingüe, incluso plurinacional de sus países. Está cambiando el mapa, porque se dan prácticas transnacionales indígenas, muchas veces antiglobalización, muchas veces de negociación con la globalización en términos de tierras, en términos de demandas ecológicas, en términos de negociación con las transnacionales que van a colocar petróleo en esas zonas, etc. En fin, hay una multiplicidad de experiencias, pero yo creo que ellos colocan en el centro nuevamente el tema de la comunidad como valor cultural, como práctica de convivencia social, muchas veces oscilando entre tres tensiones. Me explico. Por un lado, están aquellos que se orientan por uncomunitarismo a la tradicional, que buscan una relación de cooptación patrimonial con el poder político de siempre buscando redistribución. En el otro extremo existe una lógica más cerrada en torno a un repliegue comunitario y de enfrentamiento, donde se sostiene que se reinventan historias muy parecidas al aislamismo, profecías milenarias andinas, que nunca existieron. La coca y Evo Morales en Bolivia tienen un componente de este tipo, así como los movimientos milenaristas en Ecuador y una parte en México y Guatemala, muy fagocitados desde afuera y asociados con grupos izquierdosos de clase media y con ONG de los países desarrollados que cultivan y consumen mucho esto. Tienen su peso. Finalmente hay una fuerza que creo que es más política, que quiere colocar a la política como el tema principal, repensando la democracia, planteando temas y cuestiones a la democracia, y sin salirse del marco institucional. En el caso de Bolivia, más que los indígenas andinos son los guaraniés los que colocan sus problemas indígenas en el mundo de los quechuas y aymaras y los obligan a cambiar su discurso.

Tres posiciones: una de integración cooptada, otra de rechazo y otra más política, y en esto se están moviendo, pero todos colocan a la comunidad en el centro del escenario político y movilizan fuerzas y cambian escenarios en todos estos países. El proyectozapatista creo que fracasó con el Pacto de San Andrés, con todas las características y quiebres que tuvo pero colocó temas en el escenario regional.

MC: Eso es muy interesante. Aparte de la situación en la Argentina, que me parece novedosa pero hay que ver todavía hasta qué punto es una reacción ante el hundimiento de un sistema que se desvanece, cuándo el sistema se recompone o no, veo la constitución de actores sociales nuevos, capaces de intervenir en una rearticulación de la sociedad frente a la globalización y al Estado globalizador, esos son los movimientos típicos o de base identitaria. Yo creo que mi obsesión con el movimiento zapatista, desde el principio, se basa en que es un movimiento tan consciente que ataca el primer día de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la consigna del ataque a la globalización a través del libre comercio. Ahora, el gran tema es el de la capacidad de pasar de la identidad de resistencia a la identidad de proyecto, entonces retomo lo que conozco mejor del movimiento zapatista. La identidad resistente ha funcionado muy bien, ha aglutinado a todos los indígenas, ha aglutinado al sector más consciente e identitario. A veces por identidad se entiende simplemente la lengua, la tradición, la cultura, pero la identidad es más amplia para los indígenas, es la tierra y, por tanto, los derechos sobre la tierra y los derechos de autogobierno, y esto es lo que los zapatistas pusieron en primer plano: "oiga, ustedes me dicen que reconocen mi identidad, yo quiero que reconozcan mi derecho a mi tierra y si hay petróleo debajo es mi problema y no el suyo, ya veré qué hago con el petróleo". El tema de Chiapas es ese, las tierras de Chiapas son un buen paquete de petróleo, que incluso no pueden explotar, porque si lo explotan ya entran a otro sistema, pero si lo mantienen como tierra identitaria, estamos como en el caso de los indios de Venezuela, que movilizaron a la prensa mundial cuando sostuvieron: "preferimos morir antes de que exploten nuestra tierra aunque seamos ricos…"

Estas son identidades de resistencia que se convierten en identidades proyecto. Desde el principio la declaración zapatista era: "somos indígenas pero no sólo somos indígenas, somos también mexicanos y estamos luchando por la democracia de todos los mexicanos". Pero eso a la vez tuvo éxito y fracasó, ¿en qué sentido? En que fue un factor muy importante en la movilización de la clase media de México, que fue decisivo para acabar con el reino del PRI; no con el PRI ni muchísimo menos – porque el PRI está muy vivo- pero con el Estado del PRI, por tanto, en ese aspecto contribuyó al proceso democratizador. Pero al mismo no hubo cabida dentro de la propia democracia mexicana para las reivindicaciones propiamente identita-

rias indígenas. Por lo tanto, funcionó a la vez como proyecto de identidad democrática pero se rompió el vínculo entre el proyecto identitario de resistencia y el proyecto identitario democrático porque no se le reconocieron los derechos como indígenas, sino que se reconocieron sus derechos como pobres mexicanos. En realidad, se reconocieron formalmente los derechos de los indígenas pero no los derechos a vivir desde su punto vista con sus culturas, sus tradiciones y su tierra, porque eso efectivamente rompe los esquemas de la democracia liberal y, por tanto, el principio de autonomía identitaria y el principio de democracia no funcionan juntos, porque implicaría la recomposición de todo el Estado mexicano a partir del reconocimiento de la autonomía de las comunidades. Y ahí, es que el proyecto comunitario es contrario al proyecto de democracia liberal que está basado en la soberanía del individuo que es una cosa abstracta definida por el Estado. Si un proyecto colectivo identitario dice: "yo me autodefino en función de mis valores históricos, mis costumbres, etc., y usted me va a reconocer, yo le reconozco y juego a la democracia, pero usted me va a reconocer que no soy lo mismo que otro mexicano ni mejor ni peor, pero que tengo otros derechos además de los derechos como mexicano", se vuelve un principio contradictorio. Incluso hay intelectuales mexicanos, todos de izquierda, que se han opuesto totalmente, violentamente, a los zapatistas en sus artículos, en sus revistas, como subvertidotes de la democracia representativa. En ese sentido, hay tensión entre comunitarismo y democracia, una tensión en la práctica, no quiero decir que un modelo de Estado no pueda incluir las dos cosas, los derechos de las comunidades y los derechos de los individuos, articulándolas en un Estado que respete los derechos de las comunidades, que es la discusión en España y en la India, en todos sitios, porque el reconocimiento en un Estado democrático de los derechos de las comunidades étnico-culturales es un principio de representación distinto del derecho de ciudadanía que es una individualización, por tanto contradictoria con lacomunitarista.

Entonces, yo lo que observo es que la vinculación de los movimientos indígenas está articulando a escala de América latina los derechos comunitarios de los pueblos indígenas, rompiendo las sociedades nacionales y convirtiéndolas en una forma de desarticulación del Estado-nación.

Claro que en la dinámica de la lucha contra la globalización, los indios ecuatorianos se encuentran con los trabajadores ecuatorianos,

etc., pero en el momento en que surge su primera derrota, su marcha sobre Quito, se repliegan a sus comunidades, no toman el parlamento, ocupan el parlamento y luego se van, porque si ocuparan el parlamento tienen que gobernar el Ecuador y ¿cómo gobiernan al Ecuador con sus principios de comunidad indígena?

Como el Estado latinoamericano en todas partes se fundó en torno a los principios de la democracia sobre el principio de la representación ciudadana, que por principio excluía los derechos indígenas, la aplicación directa de la democracia liberal excluye los derechos indígenas como indígenas, transforma a los indígenas en individuos y, en algunas regiones, como Bolivia y Paraguay como hablan otras lenguas pues tuvieron que reconocer la oficialidad de la lengua, que al mismo tiempo era estigma (como hables quechua o aymara y no hables español tienes un problema en la sociedad). Yo diría que el gran movimiento que observamos de constitución de un actor colectivo de tipo nuevo con valores distintos, claramente asentado en la globalización, porque esa globalización le es doblemente excluyente, económica y culturalmente excluyente, ese gran movimiento es fraccionador de las sociedades y desarticula el Estado-nación tal como existía hasta ahora.

Por lo tanto, no es un movimiento de recomposición de una sociedad nacional, sino de otro principio de organización social que fragmenta la sociedad nacional y que, en cambio articula los pueblos indígenas bajo otros principios y de otras formas y en último término se organiza una lucha contra el Estado nacional que los había excluido y la globalización que los excluye económica y culturalmente en estos momentos.

FC: Pero también plantea un tema positivo, Manuel.

MC: El tema positivo es la expresión de su autonomía. Pero yo no estoy diciendo aquí que hay sólo identidad resistente. Digo que la transformación de la identidad resistente en identidad proyecto de los movimientos indígenas, ese proyecto pasa por una forma que no es estatal; la identidad de proyecto es comunitaria, no nacional ni democrática liberal.

FC: Quiero plantear tres temas que me parecen absolutamente importantes. El primero, ¿cómo vinculas esto con otros movimientos de tipo cultural, o incluso con otro tipo de conflictos de base cultural, religiosa, sexual, etc.? ¿Cuál sería la vinculación entre esta cara

andina latinoamericana indígena y estas otras caras culturales?

El segundo, ¿cómo se vincula esto con tu propia tesis de la red identidad? Y, ¿cómo, entre las dos cosas, estás cuestionando la nación o los límites de la democracia liberal típica de la sociedad industrial y estás pensando, además, en algo que sea más que la democracia liberal? Finalmente, el tercero, ¿qué está detrás de todo esto, nuevamente pensando en América Latina, en la idea de construir una comunidad económica y una comunidad política? Me pareced que el conjunto de tus argumentaciones señalan que las escalas nacionales tienen límites fuertes, más en unos países que en otros, y que más bien desde aquí estás planteando de alguna u otra manera el tema de la integración. ¿Cuáles serían tus reflexiones?

MC: Interesante y bien planteado todo lo que dices. Yo estaba pensando que dije cosas que al principio la gente estaba muy extrañada de que la gran fuerza de oposición contra la globalización era la identitaria, en lugar de ser la obrera. Estaba pensando en esto porque había visto el movimiento zapatista y porque esto lo ponía en relación con otras cosas que ocurren en el mundo. Segundo, movimientos que en mi análisis empírico están relacionados en cierto modo con este tipo de movimientos, son los religiosos fundamentalistas, pero también el cristianismo fundamentalista, el hinduismo fundamentalista; los dos tipos de movimientos son distintos. ¿En qué se parecen? En parte en la autodefinición y la autonomía del sistema de valores; cambia el eje de lo que tiene valor y de lo que no tiene valor, no piden un reparto, una redistribución –eso también, pero ese no es el principio en torno al cual se organizan-; no se organizan como pobres, sino como indígenas, y como indígenas pobres también piden redistribución, un puesto de trabajo. Pero cuando los zapatistas están diciendo: "queremos la tierra y queremos nuestras zonas de autogobierno", no están diciendo sólo que el gobierno responda: "o damos trabajo o damos programas sociales". Están diciendo: "queremos nosotros decidir qué hacemos con la tierra y nosotros queremos gobernarnos según nuestras reglas y que nuestros órganos comunales tengan prioridad sobre los órganos del Estado mexicano en nuestro territorio". Autonomía territorial pero sobre nuestra base identitaria tradicional de operaciones, nuestra cultura, nuestra tradición., etc. Eso se parece extraordinariamente al fundamentalismo religioso, por ejemplo, el fundamentalismo islámico. La idea es: "yo no funciono bien en el mercado financiero yo me

rijo por la ley de dios y no por la ley del capitalismo global". Al mismo tiempo hay un cuestionamiento del principio de valoración y del Estado tal y como existe, democrático o no, del Estado basado en los principios de autoridad constitucional de ese Estado. Esto quiere decir para ellos que el poder de ese Estado tiene que adaptarse al poder de mis instituciones. Y por otro lado, si tomo los fundamentalistas islámicos, su objetivo es la umma, la umma es global, trasciende al Estado nacional, el Estado está para aplicar la ley islámica (la Sha´ia), el Estado tiene que expresar la voluntad de dios y es incluso blasfemo pretender que hay Estados-naciones que puedan fraccionar a los creyentes. Son movimientos globales, que no reconocen las fronteras nacionales, los movimientos indígenas, en la medida en que parten primero dentro de lugares localizados, se van articulando, están diciendo: "Estamos formando nuestras propias instituciones con base en las alianzas históricas o representantes de los pueblos indígenas que atraviesan los Estados". Entonces, dos elementos fundamentales: cambio de los criterios de valorización y puesta en cuestión del Estado como principio de organización social prioritaria, me parecen esenciales. ¿Cuestiona esto la democracia liberal representativa? Yo personalmente no la cuestiono, digo que este principio de organización política es distinto, incluso diría antagónico con la democracia representativa tal como se concibe; sólo puede ser distinto si la democracia representativa acepta la superposición de dos principios de legitimidad popular, el principio identitario y el principio de representación ciudadana y se articulan los dos.

FC: ¿Hay en el Corán, hay en el budismo, en el mundo andino, elementos que fortalecerían la democracia occidental y viceversa?

MC: En el fondo, es una discusión absolutamente presente en todas las sociedades bajo formas distintas. Cuando en España, los catalanes dicen: "nuestra autonomía no es como la de Castilla", conservadores y socialistas se indignan y responden: "un momento, y ¿por qué, no son tan españoles como usted? Un momento, usted olvida que yo soy catalán y como catalán tengo otra historia y otra cultura, otra forma de ser, otras instituciones que vienen de la Edad Media, que no es lo mismo que una región autónoma constituida arbitrariamente en 1978, que se constituyó así no más porque había que dar algo". No es lo mismo; la contradicción es entre lo que llaman los catalanes las "autonomías de café para todos, todos iguales"; "si usted es au-

tónomo yo también lo soy" y desde el punto de vista jurídico institucional de un Estado liberal representativa: "¿Por qué usted por ser catalán va a tener más autonomía?" Y los catalanes dirán: "Porque somos catalanes y la historia es diferente; ni más ni menos. Pero somos más autónomos y necesitamos más autonomía porque la hemos conquistado, y perdido, varias veces a sangre y fuego".

En Estados Unidos, la batalla interminable por la acción afirmativa de las minorías (claro, porque si usted es negro va a tener más derechos que un blanco a que lo admitan en la universidad, porque si usted es negro hay que admitirlo más que si es blanco) es totalmente contradictoria con el principio de igualdad ante la ley del Estado liberal. Entonces, los negros dicen: ¡Cuidado! como nos han tenido de esclavos durante siglos, ahora la equidad redistributiva del sistema es que tenemos ventajas comparativas por ser precisamente una minoría explotada, oprimida como esclabos, etc.".

FC: Ahora, esta racionalidad también es generalizable a otros actores que no son indígenas, como por ejemplo el movimiento de mujeres, porque el movimiento de mujeres está reclamando equidad en su diferencia; entonces ¿cómo puedes ser equitativo si no tomas en cuenta mi diferencia? Está reforzando la idea de democracia viéndola como forma de vida más que como régimen.

MC: Está bien, pero yo te diría más, y también en lo religioso en América Latina: ¿qué dice el fundamentalismo cristiano?: "Yo quiero que en las escuelas donde van mis niños, se enseñe que el mundo fue creado por Dios". Eso rompe un principio de separación entre Estado e Iglesia en el cual está fundamentada la democracia liberal. Dice : "Yo quiero que sean mis creencias las que eduquen a mis hijos; yo no entrego mis hijos al Estado". Entonces, como el Estado es así, lo que hacen es no llevarlos al colegio, guardarlos en sus casas y hacer autoescuelas, pactando para ello con los gobiernos para evitar caer en la ilegalidad. Y en el famoso caso en España de las niñas con el chador: si usted lleva crucifijo no pasa nada, pero si lleva un chador, sí pasa. ¿Entonces dónde está la separación? Toda la cuestión de la especificidad –como queda claro en el libro que hemos publicado sobre la Europa musulmana- queda de manifiesto en este dilema: ¿qué pasa cuando hay un principio y un criterio musulmán fuerte, mucho más fuerte que el catolicismo o el cristianismo en una Europa occidental, con escasísima religiosidad?, ¿qué pasa cuando hay una

parte de la población que es musulmana con un principio identitario fuerte, que es contradictorio, en su práctica de vida y en la construcción de sentido, con las instituciones de una democracia representativa? ¿Qué hacer? ¿Crear para los musulmanes normas de excepción, porque son para nosotros una excepción?.

Por eso te digo que el principio identitario y los intelectuales mexicanos que se han opuesto tan fuerte a los zapatistas, como demócratas y progresistas tienen razón en ese aspecto. Es que ese principio identitario contradice en lo esencial las reglas de base de la democracia liberal basada en el ciudadano como sujeto individual y abstracto. Tiene razón en la argumentación, pero resulta que si hay contradicción entre la realidad cambiante y los esquemas ideológicos de la democracia, es la realidad la que hay que reconocer.

FC: ¿Se contradice en el fondo con la globalización? ¿No será que lo que está en cuestión es la democracia a escala nacional?

MC: Claro, porque te está contradiciendo el Estado nacional y, por tanto, la práctica de la democracia en el marco del Estado nacional.

FC: Eso es lo que digo.

MC: Exactamente, y el fundamentalismo islámico es muy claro en ese aspecto. El Estado nacional es la umma, la comunidad de los creyentes es la unidad y la umma es global, por definición y los Estados no son más que apéndices de la expresión de la voluntad de Dios a través de los sulemas, en cada territorio en que ese Estado exista, y si traicionas y no reconoces que La Meca es el centro, si se traiciona eso, es un Estado blasfemo y por tanto la insurrección contra ese Estado es legítima.

FC: Ahora bien, quisiera ahora plantear una reflexión que me parece una constante en el proceso histórico de América Latina y que está asociada con la crisis del Estado y con lo que estamos hablando. Me refiero al proceso de urbanización: hay cambios de los patrones urbanos y de organización del territorio a raíz de la globalización. ¿Tú crees que los patrones de urbanización, que trabajaste para casos de los países más desarrollados, tienen algo común con lo que pasa en América Latina? Por ejemplo, la megalópolis, pensando en la ciudad de México o en Sao Paulo, las grandes ciudades son similares a Los Ángeles. ¿Se combinan con un nivel de informatización de la economía y en un doble marginamiento en el espacio? ¿Cuál es tu reflexión habida cuenta de lo que hace

años trabajaste sobre América Latina? ¿Hay en definitiva un nuevo patrón de organización territorial urbana en la región?

MC: No es sustancialmente diferente a lo que se observa en otras regiones del mundo en los llamados países en vías de desarrollo. Pero aunque la escala de la urbanización y la formación de grandes regiones metropolitanas es semejante a la de EE.UU. y Europa, los contenidos son bastante distintos; en cambio el proceso de urbanización actual en América Latina, aunque más avanzado que el de Aria y África tiene muchas similitudes en formas espaciales y contenidos sociales, Ahora bien, la gran diferencia es que, como sabemos, América Latina es el continente más urbanizado del mundo, sobre todo América del Sur, que está más o menos al 80% de población urbana, Brasil 81% y México se está acercando al 80%, lo único que baja en la región en general es cuando incorporamos América Central. En su conjunto, lo primero que observamos es la pérdida de peso específico de la población rural por la combinación de una acentuación de las migraciones urbanas y, por otro lado, simplemente el crecimiento vegetativo natural de enormes masas de población ya concentradas en las áreas metropolitanas. Lo que me parece sustancial son las formas que toma esta concentración territorial, sobre todo en las grandes regiones metropolitanas como Sao Paulo, o ciudad de México o Buenos Aires. Este fenómeno de metropolitanización es por cierto generalizable al conjunto de la región: Bogotá tiene 7 millones y medio, Lima se acerca a los 7 millones, Chile tiene más de un tercio de la población concentrada en el área de Santiago. Así pues, la paradoja es que en la época de las telecomunicaciones, en lugar de difusión espacial, observamos una enorme concentración de actividades y población en las grandes metrópolis. Incluso en países como Colombia que tenía una estructura urbana más equilibrada, la organización territorial está cambiando debido a la primacía creciente de Bogotá. Yo creo que esto se debe al movimiento de concentración de recursos en los centros de procesamiento de información y generación de valor añadido a partir del conocimiento, articulados al sistema global que son las metrópolis. Estas grandes metrópolis son los puntos de conexión, son los nudos del sistema global, de relación con las redes de riqueza, poder, e información: la mayor parte de lo que se valoriza en la economía global circula por los centros de procesamiento y control de este intercambio con las redes globales que

son las grandes metrópolis. La segunda fuente de concentración urbana y metropolitana es el proceso de descomposición de estructuras productivas pre-informacionales, tanto en el campo como en las regiones menos competitivas. Este proceso expulsa población, que acaba yendo al lugar donde existen mayores probabilidades de salir adelante, si no para los migrantes, el menos para sus hijos. Entonces, yo creo que este doble proceso de concentración, que es dinámico y a la vez deja a parte de la población desarticulada del resto de la actividad productiva, está generando enormes aglomeraciones urbanas, que se caracterizan por su falta de integración social, cultural, institucional, e incluso espacial. O sea, son grandes constelaciones territoriales, extremadamente fragmentadas y fraccionadas con una enorme segregación social en la que, según todos los datos estadísticos de que se dispone, el índice de segregación espacial ha aumentado, sobre todo porque los ricos se segregan ellos mismos. En el caso extremo, esto conduce al desarrollo de comunidades cerradas, valladas, protegidas por guardias armados: las elites abandonan la ciudad. Por ejemplo, se está creando un nuevo Bogotá, por condiciones de seguridad especiales, a 30 o 40 kilómetros al norte de Bogotá, en donde se concentra la clase media alta, en verdaderos castillos fortificados. Yo diría que hay una medievalización de las grandes metrópolis en el mundo, un fenómeno que mis estudiantes han analizado en El Cairo, Yakarta, Johannesburgo, pero también en California. Pero hablando concretamente de América Latina incluso los espacios se hacen más reducidos en términos de la práctica espacial de cada grupo social. Por ejemplo, en ciudad de México, poca gente de la que vive en el sur del DF, en Coyoacán por ejemplo, se avneutra en Netzahualcoyotl o Ecatepec, y muy pocas veces van al centro histórico. Hay realmente una segregación no sólo del espacio residencial, sino del espacio de actividad económica. Grandes áreas de la ciudad que se desconectan de otras, como en el desplazamiento de las sedes de empresas en Sao Paulo de la Avenida Paulista, símbolo de lo que fue la potencia empresarial de Sao Paulo, hacia la periferia en torno a Nova Faria Lima, espacio segregado de conexiones multinacionales. Sin embargo, estas metrópolis internamente segmentadas, son al mismo tiempo una unidad funcional, un complejo territorial de producción de bienes y servicios, un mercado para los medios de comunicación locales, una unidad de asentamiento. Pero una unidad caracterizada por su extrema fragmen-

tación social y cultural y una gran debilidad institucional de gestión de la región metropolitana real. Así pues, la dinámica de relación entre global y local se reproduce a nivel urbano de la forma siguiente: los gobiernos de las regiones metropolitanas y las clases empresariales locales concentran sus esfuerzos en ser atractivos a las redes globales de riqueza y, por tanto, su prioridad es desarrollar la gran infraestructura para hacer competitiva la ciudad: hay que construir telecomunicaciones, aeropuertos, servicios avanzados de negocios, hoteles de lujo, centros de convenciones internacionales, para colocar a la ciudad en el mapa de alto vuelo. Como los recursos de inversión tanto públicos como privados son limitados –eso quiere decir que los recursos para hacer competitiva la ciudad se retraen de lo que es la distribución de servicios sociales, la provisión de infraestructura urbana, etc. El argumento es que hay que hacer competitiva la ciudad para que con el excedente generado por esa competitividad mundial, se puedan sufragar los gastos de los servicios y de infraestructura urbana para la población local. Pero, en realidad, lo que ocurre es que cualquier tipo de competitividad que se obtiene va sobre todo en beneficio de las clase profesionales que son los agentes de esa competitividad y que, al contrario, absorben cada vez más recursos y en lugar de articularse al mundo para luego distribuir internamente, se apropian esos recursos y, en su momento, los exportan. Esa es también la misma lógica de globalización a nivel del Estado. Lo que ocurre es que los núcleos activos y dinámicos de las grandes ciudades latinoamericanas, se articulan en un mundo cultural y funcionalmente muy semejante al de las grandes ciudades de los otros países y se desarticulan de su propio *hinterland*, y sobre todo de la mayor parte de los sectores populares urbanos. Ese es el fenómeno de articulación global y desarticulación local.

FC: Pero hay un doble plano, porque por el otro lado, tú tienes una integración simbólica a la globalización mediante la industrial y el mercado cultural, hay un uso generalizado de los medios de comunicación de masas, la televisión, el celular, etc., que han generado una integración simbólica con la globalización a la cual acceden amplias mayorías sobre todo de estas grandes ciudades latinoamericanas.

MC: Pero un momento, ¿será la imagen del celular la más adecuada? Porque los sectores populares tienen celulares no para llamadas globales sino locales.

FC: Así es, también tienen acceso restringido a la televisión por cable, pero no así a la televisión, como tú sabes, las últimas puntas de descubrimiento electrónico en comunicación. Posibilitan nuevos horizontes internacionales. Hoy se estructuran cadenas simbólicas, pautas de consumo, etc., pautas que te reproducen el imaginario global. Hay por ejemplo un patrón de integración que está asociado con el tema de la seguridad personal, con la construcción de la vida cotidiana, con la recreación, con el miedo al otro, con la segmentación, con la trivialización de las ciudades, que en definitiva te están reproduciendo formas urbanas imaginarias inéditas, la gente ya no se habla pero todos ven televisión. La ciudad estaba asociada con la modernización neutral ciudadana, fue el espacio, por lo menos etimológico, en la cual la gente vinculaba lo moderno con lo ciudadano, hoy día eso aparentemente ya no es así, a no ser éstas contrafuerzas de descentralización y de mejoramiento de la calidad de la vida urbana que las encuentras en varias ciudades de América Latina. También existen movimientos comunitarios urbanos que necesariamente trabajan sobre la vida cotidiana, y en muchos casos también retornan y se asocian con estos movimientos identitarios e indigenistas fuertes de los que estábamos hablando anteriormente. Uno no se explica estos movimientos indigenistas solamente sin base rural, sino más bien en función de estos procesos de urbanización y de modernización trunca si quieres.

MC: Que es un intento de recomposición y de reconstitución de sentido de lo que son masas urbanas excluidas. Ahora bien, lo que yo añadiría en ese doble movimiento de articulación y desarticulación, es decir de construcción de sentidos a partir de comunidades, es la cuestión de que la construcción de sentido sobre la base de una comunidad específica (cultural, territorial) incrementa la fragmentación, la ciudad se fragmenta aún más. O sea que esas comunidades se constituyen en mecanismos de supervivencia, tanto cultural como económica, pero distanciándose de una especie de socialización de la ciudad y de los gobiernos de la ciudad. El urbanismo que generalmente se practica, en el fondo se convierte cada vez más en mecanismo de protección yrecualificación de la vida de la clase media. Cuando estoy en Río y veo todo ese maravilloso frente de mar los domingos por la mañana, cerrando el tráfico y una enorme muchedumbre (que podrían ser californianos por su atuendo), haciendo *jogging*, paseando, caminando de prisa, cultivando el cuerpo, eso no tiene nada que ver con la inmensa mayoría

de la población de Río. Sin embargo, al mismo tiempo cuando voy a la Rosinha, a una de las más grandes favelas de Río, sí observo que ha habido un experimento de un urbanismo muy interesante, muy bien hecho por los urbanistas locales con un gran entusiasmo, y apoyo de la Prefectura, pero claro habiendo tenido que pactar cada cosa que hacen con los narcotraficantes locales que controlan la Rosinha y con los grupos de evangelistas que controlan las asociaciones de vecinos, y que están de acuerdo con los narcotraficantes. Entonces, la gestión local organizada y comunitaria escapa al control del Estado, mientras que al mismo tiempo los gobiernos municipales están fundamentalmente controlados por los sectores de clase media profesionales. Yo diría, pues, que en este momento la gestión urbana está amplificando la fragmentación de la sociedad, más que uniéndola, y he ahí la raíz de la violencia. Porque la violencia tiene tres aspectos en la gran ciudad latinoamericana. Uno es un sistema redistributivo primitivo; lo que yo llamaría el Estado del bienestar urbano de América Latina, que consiste en que cuando los pobres no aguantan más tratan de apropiarse de lo que tienen los ricos y como eso nunca es un proceso directamente pacífico puede desmadrarse. Segundo, algo que tú decías, el fraccionamiento, la separación, lo que es del otro pasa a ser del otro y no es algo tuyo, entonces, la violencia es contra los otros, contra los alienígenos –porque pertenecen a otra comunidad, a otra cosa, no a otra clase sino a otro mundo- es una violencia contra los de otra especie, y más que violencia, es competencia entre especies. Y un tercer aspecto que me parece importante, es algo que la socióloga venezolana Magali Sánchez describe en su libro sobre la cultura de los balandros en Caracas, un libro espléndido, es lo que llama la cultura de la urgencia; es que ella ha detectado en los grupos jóvenes, sobre todo, que el mundo no tiene tiempo el tiempo es ya, y para mí y ahora porque yo no sé si sobrevivo, en qué condiciones sobrevivo, medio en la delincuencia, medio en la enfermedad, medio en la violencia. En esta cultura de la urgencia, un niño de 14-15 años, cuando quiere sus zapatillas deportivas, carísimas, que nunca va a poder comprar, pero que necesita ya las necesita ahora, entonces las tiene que conseguir como sea, si es necesario con violencia porque hay que hacerlo ya, porque no sabe si podrá hacerlo mañana.

Esta cultura de la urgencia, de tragarse la vida a borbotones, sin pensar en un posible futuro es también algo que aparece muy claramente en ese maravilloso librito de García Márquez, “Noticia de un secuestro”, en donde el

Gabo vuelve a su origen de gran periodista. En "Noticias de un secuestro" realmente se refleja el mundo de los sicarios como un mundo de absoluta cultura de la urgencia: es como si éstos jóvenes dijeran: "Yo hago esto porque necesito afirmar mi vida aquí, en este momento, porque la vida no tiene horizontes temporales, sólo tiene momento presente". La cultura de la violencia con estos componentes es un elemento básico de la ciudad latinoamericana, porque hace que la gente viva con miedo y la convivencia no se puede construir con miedo. Esto se da no solamente entre clases sociales –desde luego entre la clase media y las demás- sino en cada grupo, en cada barrio, en cada ciudad, el miedo como pauta de vida cotidiana y organizador de los mismos espacios es absolutamente definidor de lo que es la ciudad latinoamericana hoy.

FC: En el Informe de Desarrollo Humano en Chile del ´98, me parece, que en uno de los *focus group*, tratamos de entender ese miedo, el miedo al vecino, como decía una persona en un foco: "Mira yo no sé quién es mi vecino pero si sé que nuestros perros se ladran…"

MC: Me parece impresionante. Ahora, algunas cosas deberíamos decir también de la estructura espacial. Yo creo que se ha abandonado el análisis de lo que son las dinámicas propiamente territoriales de constitución del espacio. Hay toda una tendencia en los analistas de ciencias sociales y en la intelectualidad latinoamericana a dejar este tema a los geógrafos, a los arquitectos, a los urbanistas, a los demógrafos, a los especialistas de temas territoriales. Y olvidar que la construcción de un espacio, la organización de un territorio, es una dimensión material fundamental de las sociedades, que realmente marca la estructura y dinámica de dichas sociedades. Lamento mucho que nuestro libro, por una serie de razones, que quizás se relacionan con ese abandono de un terreno básico de análisis, no haya podido reflejar mejor esta realidad, porque es fundamental.

En ese sentido, quisiera señalar dos cosas; una es que, si bien las grandes regiones metropolitanas, las megalópolis, son la forma de asentamiento más distintiva, no es cierto que son las que más crecen en estos últimos 10 años; lo que más crece son ciudades medias –entendiendo por medio en América Latina, las ciudades entre 200,000 y 1`000,000 de habitantes-, algunas de las cuales son los focos más dinámicos de crecimiento económico y tecnológico. Por ejemplo, en la inmediata periferia de Sao Paulo, el famoso triángulo industrial del ABC está en crisis. Pero en cambio el interior

del estado de Sao Paulo, Campinas, Araracuara y otras ciudades, son ciudades muy dinámicas donde hay alta tecnología, en algunos casos una agricultura muy dinámica exportadora. OCuritiva en Paraná (aunque Curitiva tiene dos millones de habitantes). Por tanto, se puede decir que hay dos elementos que funcionan a la vez. Por un lago, la gran metrópoli es una metrópoli dual que se configura en torno a los polos de articulación global, caracterizados por una sociedad urbana metropolitana desarticulada en crisis. Mientras que las ciudades medias en muchos casos se constituyen en nuevos polos dinámicos que son los que atraen más población rural y que son los que constituyen la base de la nueva estructura urbana de América Latina.

FC: Ahora, ahí yo quisiera meter dos temas: uno, respecto a la urbanización y a la vida cotidiana y otro respecto a la región. Yo creo que están cambiando los patrones regionales. Pero respecto a la vida urbana, la tesis de la sociedad de riesgo cobra otro sentido, en cuanto a la incapacidad de control que existe y a la forma de vivir la incertidumbre. No hay otra forma de vivir la incertidumbre que viviendo el momento. Pero en el caso de América Latina esto es como una estrategia de vida, "si no, me muero".

MC: La cultura de riesgo, en el fondo es un factor positivo, es vivir la vida como una aventura, la aventura de vivir peligrosamente. Pero en el caso de América Latina es vivir peligrosamente y generalmente fracasar en esa forma de vivir. Es decir, como tú dices muy bien, la sociedad de riesgo no te dice qué porcentajes de riesgo realmente tienes, la supervivencia es instinto y la gran diferencia es que tienes altas probabilidades de fracasar en la supervivencia en un caso mientras que en el otro es un proceso emprendedor y de construcción de economía e innovación cultural.

Yo diría, la sociedad riesgo a la Beck parece desarrollarse en un proceso de construcción de autonomía; en la ciudad latinoamericana es un proceso de construcción limitada porque pasas a ser dependiente de los mecanismos concretos a través de los cuales la gente se inserta en la supervivencia.

FC: Quiero usar una metáfora; cuando trabajé en la Universidad de Austin un amigo mexicano me llevó a visitar a unos mexicanos en las cárceles de Texas que estaban muy contentos porque se les había limitado el riesgo y aumentado la calidad de vida: comían bien, veían televisión…

Deseo insistir en otro tema que has trabajado, con nuestro buen amigo Jordi Borja; se refiere a los cambios en los patrones regionales

y su vinculación con lo global. Conozco unas investigaciones para varios estados del Brasil que está haciendo el FUNDAPI DE Sao Paulo, que muestran y analizan las distintas estrategias que están siguiendo los estados para lograr una vinculación directa con la globalización. Estrategias como estados autónomos, yo no sé cuál es el grado de autonomía en el Brasil pero si sé que buena parte de las regiones en América Latina, -incluso en Estados no solamente federales sino unitarios, en los distintos aparatos de estado regionales- están planteando estrategias autónomas de vinculación con la globalización. En ese sentido, cuestionando las estrategias nacionales, los patrones de regionalización están cambiando. Ustedes acuñaron el término, creo, de "glocal" ¿Cuál es tu reflexión respecto a estos patrones en América latina? ¿Cómo lo ves? Porque quizás son las regiones más exitosas las que están planteando esto y quizás tengan que ver con estas ciudades intermedias sobre las que estabas hablando.

MC: Exacto, pero todo depende de la fuerza de la sociedad regional, porque hay estrategias descentralizadoras de los Estados como difusión de contradicciones y de presión social, que fue, por ejemplo, la estrategia mexicana. Entonces, uno de los esfuerzos del régimen Salinas fue dar juego a los gobiernos de los estados en mayor medida, de forma de disminuir la presión directa sobre el gobierno federal por demandas sociales de competencia política y, de hecho, intentar una cierta democratización controlada del Estado PRI, abriendo algunas elecciones, como en Guanajuato, y dejando que ciertos gobiernos estaduales fueran gobiernos penetrados por la oposición. Pero de ese experimento es interesante ver que salieron algunas dinámicas regionales muy intensas que escaparon al control de esta tendencia: la gente, en la medida que aumenta el nivel educativo y el estatus socioeconómico, cree más en sí misma y menos en su país y, al revés, mientras más pobre es, más esperanzas se tiene en su país…

MC: Porque sabe que por su cuenta no puede mejorar, es muy interesante. Respecto al otro tema que quería mencionar, que es el de las consecuencias ecológicas de los patrones de desarrollo sobre la vida territorial, es decir de los efectos de estas políticas de dinamización de regiones que tú señalas y que consisten en superar los límites de crecimiento económico del sistema actual mediante la puesta en marcha de nuevos recursos productivos en nuevas regiones. O sea, añadiendo las regiones aún no explotadas, como la Amazonía. Esto se hace

en condiciones de urgencia, en condiciones en las que hay que encontrar nuevas formas de desarrollo, en condiciones en general de falta de control ecológico, amenazando sistemas ecológicos muy frágiles, como son todos los sistemas amazónicos.

Esto tiene dos consecuencias: la primera, sabemos que hay un deterioro extraordinario, por ejemplo, de la Amazonía. Aunque también hay que decir que en los últimos años en Brasil en concreto ha habido una mejor política de protección que la que había anteriormente. Además esto está creando una enorme contradicción entre las políticas desarrollistas –cuando la gente habla de desarrollo sostenible, en realidad unos dicen desarrollo otros dicen sostenible-, hay muy poca capacidad de integración y esto se expresa con una oposición entre el mundo desarrollado que ya destruyó su sistema ecológico y el mundo en desarrollo. Bueno, dicen los países en proceso de desarrollo, como India o China, vamos a hacer las mismas estupideces que vosotros hicisteis y luego vemos cuando los dos estemos igualmente desarrollados. Entonces, yo creo que aquí hay una contradicción explosiva entre el desarrollo de las fuerzas productivas que necesita América Latina y la sustentabilidad.

FC: Bueno, pero esto está mediatizado por otra cosa. La necesidad de salidas a escala global, un nuevo patrón de desarrollo global porque a la larga, como dices en tu libro, esto es una espada que les cae a todos.

MC: Claro, la única razón por la que este modelo actual es sostenible es porque hay pobreza; es decir, por un lago es cierto que la pobreza es el enemigo peor del medio ambiente, la gente destruye porque no tiene otra posibilidad. Pero simplemente si todo el mundo consumiera la energía que se consume en Estados Unidos, o si todo consumiera el mismo tipo de plástico que se consume en Estados Unidos o en España, el planeta no daría para eso. Entonces, solamente mediante la exclusión social del consumo y del desarrollo de la mayor parte del planeta se puede continuar con el modelo del desarrollo sostenible.

FC: Sí, pero igual con límites. Ahora yo quiero volver a un punto sobre el que me gustaría que desarrollemos algunas hipótesis sobre las cuales no tengo respuesta, quizás tiene que ver con lo que están diciendo. Este patrón regional urbano del que hemos hablado están en los límites de la supervivencia ecológica quizás al punto de no retorno; como ejemplo, quizás Puerto

Príncipe es el límite de los límites como futuros no sostenibles del mundo urbano. En todos los casos, y en algunos casos incomprensiblemente desde el punto de vista social, es la ausencia de movimientos ecológicos en América Latina, éste es un continente sin movimientos ecológicos; no digo que no haya, pero son muy débiles. Sin embargo, el impacto ecológico es muy fuerte. En Chile, Santiago es el ejemplo más paradigmático, es un lugar donde literalmente ya no se puede respirar. No hay movimientos fuertes que te cuestionen esto, que tengan presencia política…

MC: Mi amigo Guillermo Gueise lleva años en Chile haciendo esto…

FC: Claro, muy lindo, pero ¿cuántos votos tienes? Max Neff logró algo, pero se evaporó.

MC: Pero, por ejemplo, en Bogotá, el famoso alcalde Antanas Mokas se apoyó en una base política de ecologistas, Porto Alegre también ha hecho una política ecológica muy interesante.

FC: Sí, el Estado ha hecho algunas cosas; felizmente existen estos ejemplos, menos mal, también los movimientos indígenas plantean algunas demandas. Pero dada la magnitud del problema, no se han constituido actores ni acciones. Hay muchas cosas pero muy pequeñas. Me da la impresión de que no es un tema político de primera magnitud en la movilización política actual. ¿Por qué? Curiosamente no es ni siquiera un tema mediático. Sí existe en buena parte de los países desarrollados y los movimientos antiglobalización ecológica a escala mundial, pero en América Latina no hay.

No digo que no existan; lo que yo digo es que no tienen la fuerza que deberían tener con relación a la magnitud que tiene el problema como, por ejemplo, lo tienen los movimientos indígenas o estos movimientos comunitaristas que hemos visto en Buenos Aires. Quizás el tipo de urgencia tiene que ver más con la comida y la identidad que con el aire o el agua. Hay mucha gente que trabaja, investiga, pero yo no te puedo citar ejemplos de estos movimientos. Yo contrasto lo que dices en tu texto sobre los movimientos ecológicos en el mundo respecto a los movimientos ecológicos que hay en América Latina y la fuerza es mínima, no sé explicar muy bien por qué. No hay movimientos con sentido de historicidad para seguir una terminología de Touraine, que estén disputando la dirección ecológica en la globalización.

Sin embargo, yo creo que en el trasfondo de este proceso de urbanización hay un tema que

en algún momento tú lo trabajaste en el pasado que también ha quedado pendiente. En otro momento hablamos de esa terciarización, del ejército industrial de reserva sin industria. Pero hoy día me parece que hay un cambio cualitativo porque esto ya no pasa a ser marginal sino que pasa a ser central en la reproducción de la vida urbana. ¿Cómo podemos repensar esta informatización que es muy compleja y muy diversa? Me parece que es un fenómeno nuevo del mismo proceso de informatización. No sé si tienes algunas pautas o hipótesis de este fenómeno que va más allá de las estadísticas.

MC: El tema de la desocupación en América Latina es más bien un estatus de los privilegiados que tienen la posibilidad de tener desocupación y sobrevivir. Si por desocupación entendemos la no existencia de un empleo relativamente regular y protegido en sectores urbanizados, de acuerdo. Pero no hay desocupación en el sentido de que hay mucha gente que no hace algo para generar una renta, para generar un ingreso. O sea, todo el mundo hace algo, puede buscar basura, robar, montar un taller, vender algo ambulante, todo el mundo está empleado en una actividad que genera renta, a veces renta de supervivencia, a veces renta de trueque, medios materiales de subsistencia, todo el mundo está en algo, incluso los niños. A los niños, les envían a la calle, son niños que van a la calle enviados por sus familias a encontrar algo y volver a casa ese día o al día siguiente y, en general, cuando no vuelven a casa es porque no han encontrado nada, no pueden volver a casa si no han encontrado algo…

FC: La otra gran ciudad en América Latina de que deberíamos decir algo como expresión máxima de lo que tú dices es la ciudad de niños en la calle, es la ciudad flotante, donde los niños duermen un día bajo un puente, otro día en las puertas de los edificios y que trabajan en todas partes, en todos los recovecos urbanos, a lo largo de todo el continente.

MC: En la mayoría de los casos son niños que trabajan en la calle, no que viven en la calle, no son niños abandonados por sus familias, tienen familias, sólo en algunos casos más extremas hay niños abandonados que hacen bandas de niños salvajes. Pero la mayor parte de datos son sobre niños que están trabajando, en la calle, sacando de debajo de las piedras cualquier tipo de ingreso para llevar a la familia. La prueba es que en Brasil una de las formas como se consiguió reducir considerablemente, en los últimos años, el número de niños en la calle es

con un programa de dar a las familias dinero como una especie de beca, un salario para que el niño esté en la escuela, así se controla que esté en la escuela, y si no se le quita ese dinero a la familia. Por tanto, se sustituye el ingreso de la calle por el ingreso del Estado para la familia. Creo que eso es importante de señalar.

Pero la economía informal, ilegal, hoy día es una fuente esencial de empleo en la mayor parte de grandes ciudades de América Latina. Hay enormes discusiones con los expertos de la CEPAL y de otras instituciones que siempre han negado que la economía informal urbana sea tan grande porque es muy difícil registrarla estadísticamente. Es difícil registrar que la gente tiene empleo formal o informal porque combina distintas formas y a veces tiene desocupación, pero no la tienen: tienen desocupación formal y ocupación informal. Esto lo analizamos hace mucho tiempo con Alejandro Portes en un volumen que codirigimos sobre la economía informal en el mundo. Es decir, hay distintas formas de desarticulación, pero lo más importante es la enorme cantidad de actividad económica no regulada, no estandarizada, no estructurada en torno a lo que son las normas institucionales. Eso es la economía informal. Esta economía informa tiene una característica muy importante que es la bajísima tasa de productividad. Uno de los grandes temas de América Latina es que cuando se mide la tasa de productividad su nivel es muy bajo en los últimos años en casi todos los países.

Pero cuando se mide después lo que pasa en los distintos sectores, resulta que el sector manufacturero tiene frecuentemente una alta tasa de productividad, el sector exportador también, son sectores donde crece la productividad. Pero lo que ocurre es que a nivel de la sociedad en su conjunto, como se hace productividad por obra trabajada de la gente en general, las estadísticas son bajísimas porque hay una enorme masa de trabajo formal, informal y semiformal que efectivamente emplea mucha gente pero con bajísimas tasas de productividad, por tanto esos recursos humanos se despilfarran.

La otra característica que tiene la economía informal es la imposibilidad para la gente de prever su vida, de organizar su vida. El horizonte temporal está limitado por cómo va la actividad informal, que es precaria casi por definición. Pero, en cambio, hay en esa economía informal una enorme capacidad empresarial. Cuando la gente dice: “no hay empresarios en América Latina”, es que no conocen lo que es la economía informal. Unos empresarios que vi en el mercado Tepito en la ciudad

de México, cuando hace 25 años hice trabajo de campo allí, eran fantásticos; por ejemplo, una de las actividades más lucrativas era vender maravillosos pájaros tropicales con unos colores que nunca has visto y claro que nunca los han visto porque los pintaban y esperaban que no lloviera el día que los tuvieran que vender. En realidad vendían verdaderas obras de arte porque pintar un pájaro con colores que nunca has visto y con formas geométricas es una obra de arte, tienes que ser un artista. ¿Pero cómo se calcula esta productividad? Bueno, América Latina está llena de ejemplos de todo tipo de la capacidad de invención, de la capacidad empresarial de buscar formas de supervivencia que se convierten, en algunos casos, en pequeñas formas de acumulación. Por ejemplo, en el mismo Tepito, lo que observamos y que luego se verificó más tarde, es que hay mucho dinero y esto se encontró después del terremoto del ´85, en el ´86 cuando se hizo el plan de reconstrucción de Tepito. La gente tenía que poner dinero para que le dieran una buena vivienda, y salió mucho dinero de debajo de las piedras de Tepito. Porque cuando era ya inversión sólida en una casa bien rehabilitada, se vio que muchos de los comerciantes ambulantes de Tepito habían acumulado bastante.

Entonces, todo ese sector de la economía informal tiene conexiones obviamente con la economía formal, porque son subcontratistas, porque hay servicios, pero el sistema de acumulación es un sistema paralelo y que no funciona a través de los mismos mecanismos del sistema crediticio, del sistema bancario, etc. Entonces, lo que está ocurriendo es que una buena parte del crecimiento económico latinoamericano es invisible. Porque si no, si las tasas de ocupación y las tasas de inversión que reflejan las estadísticas representaran la realidad, en muchas economías latinoamericanas la situación sería aún peor de la que es.

Yo diría que Argentina, precisamente, era el país hasta ahora en el que había menos economía informal y de ahí la enorme fragilidad del sistema que no tiene flexibilidad. Pero si pienso en otras ciudades como Lima o ciudad de México que tienen una economía extraordinariamente flexible que admite muchos choques porque la gente pasa de unas ocupaciones a otras y de unas microempresas a otras.

FC: ¿Sabes qué me dijo, nuevamente para matizar, un maestrito paceño –que a su vez es albañil, plomero, electricista y a su vez con su familia tienen un puesto de venta en el lugar donde literalmente compras el mercado de tra-

bajo- cuando hablábamos de la Argentina? Me dijo: "Pobrecitos los argentinos". Yo le contesté: "¿Cómo que pobrecitos?, no son tan pobres como nosotros". Y él me respondió: "Sí. Pero no saben sufrir. Nosotros sí tenemos esa experiencia del rebusque".

MC: Eso es lo que yo quiero señalar, que se ha menospreciado la economía informal latinoamericana hasta reducirla a un nivel folklórico. A la economía informal en América Latina, los grandes expertos económicos no la toman en serio; es cosa del antropólogo y de estudiantes románticos. En este sentido, hay muchos méritos de varias ONG con experiencia en temas analíticos para entender la economía latinoamericana; hay que colocar en un lugar central la economía urbana informal y ver sus formas de articulación no sólo en términos de empleo sino de la supervivencia, con temas de acumulación, en términos de capacidad de de generación de iniciativa empresarial, etc. Yo creo que las tesis de De Soto han sido deformadas por la izquierda, como si intentara romantizar la pobreza y lo que está diciendo y sigue diciendo es: "Cuidado, hay una forma de creación de riqueza que escapa a las pautas de lo que son economías totalmente formales dinámicas de los países ricos". Hay otras formas que no son menos empresariales y que canalizadas en una forma de mayor protección social pueden ser elementos de iniciativa empresarial y fuentes de riqueza.

FC: En las ciudades todo esto está fragmentado, por otro lado, se dan reacciones muy fuertes que producen grandes explosiones urbanas, quiero decir, paros urbanos, marchas urbanas, impugnación a muchas cosas, que a veces tienen, incluso, otras formas de expresión cultural, por ejemplo, la lucha contra la privatización del agua en Cochabamba, que retoma en su texto Manuel Perló o las luchas en San Juan de Puerto rico contra transnacionales telefónicas, porque son temas que afectan a la cotidianidad de esta gente que tiene un equilibrio muy precario en su reproducción (de repente de manera muy brutal, se sube la tarifa del agua, se sube la tarifa de electricidad, se rompe el equilibrio de la precariedad de la reproducción de esta gente). Entonces, la gente responde con grandes explosiones que afectan la gobernabilidad. Quisiera cerrar esta parte urbana y regional para meternos e otros temas que creo que son muy importantes y que tú trabajas en la "Era de la Información", me refiero a la economía de la droga.

Yo quisiera que expliques estas dos nociones dentro de la globalización y por qué les das tanto peso y significado, tanto en el plano económico como en el político.

MC: Mi expresión es la conexión perversa. En el plano económico, porque si nos referimos a estimaciones muy aproximadas de lo que transita por los mercados financieros globales como lavado de dinero procedente de la economía criminal, estamos hablando de un equivalente del producto bruto del Reino Unido. Entonces, estamos hablando de algo absolutamente sustancial y que, aunque es muy difícil de estimar, representa una parte muy importante de los productos brutos reales de economía en sociedades como Colombia, como Perú, como Bolivia en su momento, como Ecuador, como Paraguay, como Panamá, como la República Dominicana, como Haití y aunque mucho menor en proporción pero mayor en volumen, en México. Es decir, que es un volumen muy importante. Pero su papel estructural en la economía y sociedad en América Latina es aún más decisivo que el simple dato cuantitativo. Primero, es un fenómeno económico de gran versatilidad. Segundo, es un fenómeno que está articulado a través de grandes redes multinacionales y no sólo al narcotráfico. Ese es el punto fundamental; por eso, yo digo, economía no del narcotráfico, una economía criminal, es una economía de todo lo que es criminal y se puede hacer y vender de un sitio a otro; es el contrabando, de todo tipo…

FC: ¿Qué es criminal? ¿Criminal es lo que está fuera de la ley?

MC: Criminal yo lo defino en un sentido muy claro porque estoy harto de las construcciones y descontrucciones de intelectuales. Criminal es lo que un Estado determinado dice que es criminal, punto. Es una decisión empírica que tiene toda clase de consecuencias. Quiere decir que se tiene que enfrentar a la lógica institucionalizada de los Estados sobre lo que declaran como criminal, eso es criminal. En el caso de Bolivia está absolutamente claro: si cultivas o consumes coca del contingente afectado no es criminal y si es del contingente no afectado es criminal. Está claro que no es una definición sustantiva, es una decisión política, no ética, ni sustantiva, ni funcional; es política, exclusivamente político-institucional. Es criminal lo que el Estado dice que es criminal.

Creo en la importancia además que hay que darle a la economía criminal; insisto, no sólo la de la droga, El tráfico de seres humanos –

mujeres, niños y migrantes, etc.- el tráfico de armas, el lavado de dinero y todo lo que ello quiere decir, y todo un sistema ramificado de actividades sobre la que reposa la producción y el comercio criminales. Porque para traficar todo esto hace falta un ejército, hace falta protección, hace falta corromper funcionarios, jueves, políticos y policías a gran escala, hacen falta sistemas de transporte y de penetración de mercados, sistemas de lavado de dinero y conexiones bancarias. O sea, todo esto constituye un potente sector económico. Pero además tiene una enorme influencia en la sociedad y en las instituciones. En la sociedad, porque absorbe, centenares de miles de personas, en las actividades y en las zonas controladas. Yo lo viví hace dos años y he viento a vivir recientemente, en las laderas de Río. Numerosos barrios de Río están controlados en gran parte por grupos de bandidos, en el sentido tradicional del término, ligados a la economía criminal y cada vez más con una ideología política vaga, a veces racionalizadota, pero contra el sistema, contra los políticos corruptos porque en parte los corrompen ellos y por eso no les tienen mucho respeto, lo saben perfectamente. Pero por otro lado, es la penetración de las instituciones en países enteros. Cada vez que cito esto siempre cito los otros países, no sólo de América Latina, porque está claro que no es solamente en América Latina en desarrollo.

Pero en América Latina, el Estado está penetrado en todos los niveles: en los jueces, en la policía, en cualquier fuerza, incluido el ejército cuando entra en persecución de la droga. Por eso, por ejemplo, Cardoso nunca quiso que el ejército interviniera en la persecución de la droga para evitar que el ejército se corrompiera al nivel que está la policía en Brasil. Como es el caso del zar de la droga en México, que era general del ejército, que era jefe de una banda de narcotraficantes, ayudado por otros generales del ejército, hoy en la cárcel. Hay numerosos casos así. Si introducimos además Argentina y Brasil, aparte del consumo, son fundamentales ahora como productores de los precursores químicos de la droga, que antes se fabricaban sobre todo en Suiza y Alemania.

Entonces, la penetración del sistema financiero es profunda y no se pueden entender muchos momentos especulativos sin estos grandes movimientos de capitales que hacen además que la lógica de ciertas instituciones financieras en los países de América Latina sea muy dependiente de este tipo de acumulación, que sube y baja en función de los vaivenes de la economía criminal. Por consiguiente, no se puede entender, hoy día, el sistema institucio-

nal, la economía, la organización de sectores urbanos y de grandes regiones rurales -como el caso de Colombia- sin esta economía criminal.

El caso paradigmático, en este sentido social, es Colombia. Colombia vive una situación que yo creo podemos asociar históricamente con el bandidismo y la rebelión social o los bandidos chinos del siglo XIX, cuando se rebelaron contra la penetración de China por los extranjeros; es decir, al mismo tiempo bandidismo y revuelta social. Las FARC no son narcotraficantes, es un movimiento guerrillero comunista que está luchando contra la explotación de los campesinos. Pero las FARC se articulan con el narcotráfico y solamente a través del sistema de impuestos sobre el cultivo y transporte de droga pueden sostener una guerra de la envergadura que han sostenido y están sosteniendo con base en recursos enormes que les permite un armamento importante, les permite sobornar, les permite comprar autoridades, etc. La desintegración de Colombia viene de la combinación de la larga tradición de violencia en Colombia y de la debilidad del Estado colombiano junto al impacto de la globalización de la economía criminal con centro en Colombia. Yo diría que los carteles colombianos han sido la primera multinacional latinoamericana que ha competido con éxito con Estados Unidos y Europa, porque son mucho más potentes que las mafias americanas o europeas. Este proceso representa la articulación de la economía criminal con la marginalidad social y con la lucha social. La protesta social en una situación de violencia estructural de la sociedad, es la respuesta a la marginación de gran parte de la población por las elites de las clases políticas colombianas que siempre han sido oligárquicas y que nunca se han abierto a los sectores populares, excepto mediante políticas populistas controladas. Entonces, con todo eso, la presión de Estados Unidos hace que además el movimiento narcoguerrillero –al mismo tiempo lucha social y negocios- se redoble en la resistencia contra la presión imperialista, como en el caso de los extraditables. La oposición a las extradiciones se constituyó en la defensa de la soberanía nacional. Por eso yo creo que el caso de Colombia muestra de forma paradigmática cómo es absolutamente imposible hoy día separar los problemas del desarrollo, los problemas de la marginación, los problemas de la lucha social, de lo que es la economía del narcotráfico y, más allá, la economía criminal con todo eso que quiere decir institucionalmente. Es decir, yo le doy sobre todo importancia a la economía criminal por

las ramificaciones institucionales y de integración y desintegración social que tiene.

FC: Sobre todo de descomposición política, porque ¿qué posibilidades hay de construir una práctica democrática en un régimen democrático cuando tienes una lógica muy fuerte de violencia?

MC: Exactamente, por ejemplo, hablando de Colombia. Pero México en la última fase de la crisis del Estado PRI tuvo (y tal vez aún tiene parcialmente) una penetración profunda de las redes de narcotraficantes de los carteles mexicanos que se hicieron tan fuertes como los colombianos en Colombia, en los aparatos de los partidos políticos y en las instituciones de gobierno y de la policía.

FC: Comenzaron a controlar y a negociar sólo en el mercado norteamericano restándole peso, dinamismo y fuerza a los propios carteles colombianos. Además es un problema de frontera, ¿no es cierto?, que involucra la frontera mexicano-norteamericana, por lo tanto son operadores norteamericanos que también acumulan este dinamismo. Es una cosa transversal. Lo que yo no sé es cómo funciona, o se conoce menos, en la comunidad europea. Esto afecta a la economía europea pero no sé en qué magnitud, según los expertos norteamericanos esto se está desplazando hacia Europa, fundamentalmente hacia Europa del norte, pero también empieza a ser un factor central en la vida económica y social de estos países.

Ahora, hay un proceso de diferenciación funcional, asociado a la internacionalización y a la especialización casi sistémica de los narcotraficantes. Porque es de suponer que es un proceso de división del trabajo, no solamente complejo sino que su rasgo de funcionamiento es que se tiene que compensar para actuar en la globalización y tener un componente de racionalización instrumental muy fuerte…

MC: Exactamente, y lo más importante es que todo depende del lavado de dinero. Sin un sistema sofisticado de lavado de dinero lo demás no tiene sentido porque esto es un gran negocio. Todo esto tiene que llegar a los mercados financieros. Por tanto, la política de represión de los gobiernos en este momento es concentrarse en el lavado de dinero. Es allí donde está la batalla. Resultado de la batalla en los años noventa, estamos recordando que por año habría uno y medio billones de dólares (de los doce ceros). El dinero confiscado en total en los años noventa, se evalúa en unos 200 millo-

nes, o sea que comparado con la masa de dinero que se mueve es insignificante.

FC: Es tanto la magnitud de la globalización, que tú dirías que es uno de los rasgos negativos, si tú quieres, o es uno de los rasgos constitutivos del mismo proceso de la economía global y del sistema financiero.

MC: Es eso lo que yo he intentado argumentar en mi trilogía. Lo que pasa es que el problema de datos de la información precisa es muy complicado. Finalmente se tienen datos de periodistas, que no te cuentan de dónde los sacan, no sabes si es verdad o es medio verdad, es muy complicado. Los datos más sólidos son los que vienen de la policía, pero también son interesados. Lo que sabemos es insuficiente, pero sabemos que las sociedades latinoamericanas sufren efectos profundos de la economía criminal que se genera en su seno.

Por ejemplo, en México sabemos que a finales de los noventa hubo un fuere impacto, sabemos que hubo asesinatos políticos serios. Gente bien informada considera que a Colosio lo mató el cartel de Tijuana en el marco de la lucha política de la sucesión presidencial en el PRI. En cualquier caso, no lo sabemos porque, probablemente, Colosio se encontraré con Kennedy en el panteón de los magnicidios inconfesables.

Pero, luego, en los primeros años del siglo XXI el nivel de penetración institucional de los carteles bajó claramente. En el periodo de Fox ha habido un cierto control por lo menos de la corrupción de alto nivel. Y los carteles han sido seriamente golpeados. Pero al mismo tiempo cuando yo estuve en Guadalajara en el año 2001, me informaron que las familias narco pudientes de Guadalajara están a la vista, todo el mundo sabe quiénes son. Viven en general en un barrio rico protegido. Una amiga me contaba que ella se encuentra regularmente en los supermercados de su zona con las que llaman las “narcas”, que visten de forma bastante aparente, elegantes, sexys, enjoyadas.

Entonces, sí, la penetración abierta de los órganos máximos del Estado ha bajado, ha habido golpes contra los carteles mexicanos, pero en muchas ciudades viven y operan con toda libertad. Alguien les protege, alguien en el Estado tiene algo que ver con esto.

FC: Pero si funcionan en redes, como debe ser, me imagino que tiene que haber una estructura. ¿Y qué rasgos tiene la estructura capitalista en sociedades avanzadas?

MC: Insisto en que realmente es un capital de afuera, con excepción de los colombianos, aunque hay rápida acumulación local también. Los mercados son globales, el capital también y las redes operativas también. Los grupos multinacionales criminales son mucho más que latinoamericanos: son rusos, albaneses, chinos, (muy importantes), tailandeses, japoneses, nigerianos, turcos, italianos y, nunca hay que olvidarse, estadounidenses. Se entroncan con la vieja mafia del padrino. Pero son distribuidores, es decir, la mafia italiana –que sigue siendo muy potente- son los agentes de los agentes de los colombianos. La mafia americana –que sigue existiendo- son los agentes de los colombianos en Nueva Cork. Es el único sector en que el mundo en vías de desarrollo ha conseguido ser exitoso, competitivo.

Hay casos espectaculares, por ejemplo, muchos expertos opinan que mini-Estados, como la isla de Aruba, están controlados por distintos carteles y por grupos mafiosos internacionales. Estos grupos poseen grandes empresas, poseen islas, controlan Estados. Y hay, en todo el mundo, grandes mercados financieros informales que funcionan fuera de las regulaciones bancarias. Son transacciones financieras multimillonarias que funcionan con base en acuerdos verbales y se hacen cumplir por asesinos a sueldo, si es necesario, pero no suele serlo: la gente sabe con quien juega. Economía criminal global, mercados financieros incontrolados y bandidismo de alta tecnología forman parte del mismo sistema. Esto es relativamente nuevo, porque en la última década la desregulación, la emergencia del narcotráfico y el colapso de la Unión Soviética han creado situaciones de descontrol institucional en que prolifera este submundo que amenaza con corroer el mundo en el que vivimos. Todo esto como que es material de películas, material de las novelas, material de sensacionalismo. Cada vez que se habla de esto sin los datos de cada país la gente no lo toma en serio. Pero en algunas reuniones en circuitos internacionales de muy alto nivel, a las que yo he asistido, sí hablan, y muy en serio. Y no existe realmente un sistema eficiente de control por parte de los Estados. El sistema policíaco internacional no funciona, porque INTERPOL no es una multinacional, INTERPOL es un sistema de información entre policías de Estados. Cada policía tiene que actuar por su propia cuenta, con sus propias leyes en función de sus reglas y lo único que puede hacer INTERPOL es poner en contacto dos policías, a ver si se ponen de acuerdo en una operación compleja. Pero no hay una policía global, no hay porque no hay Estado global. Las redes cri-

minales son mucho más eficientes que las redes de los servicios policíacos. Así, por ejemplo, los grupos terroristas no utilizan mucho Internet, porque saben que está muy vigilado. Pero las grandes multinacionales del crimen sí utilizan comunicación de todo tipo –teléfono móvil global, comunicación codificada- ahí sí que hay extraordinaria sofisticación. Tanto como de los sistemas de producción y manufacturera y refinamiento de drogas, por ejemplo. En este momento hay más de 50 formas de cocaína, diseñadas para mercados específicos, para precios específicos, para países específicos, para grupos sociales. Es un mercado diseñado para el cliente, con químicos de alta calidad y alto nivel. Todo este extraordinario imperio de las drogas de diseño, en la que están metidos también los latinoamericanos, son drogas del futuro. Por eso la base de producción en América Latina es temporal, los grupos colombianos y mexicanos le dan mucha mayor importancia a la capacidad de control territorial de sus bases de operaciones que a los terrenos de cultivo. La cuestión para ellos es mantener el sistema actual de producción mientras hacen la transición a las drogas puramente químicas. Ellos ya han entendido, o sea ya están preparando la nueva fase. ¿Qué es lo valioso de todo esto? Lo valioso no es la coca. Bolivia se va quedar sin utilización criminal de las hojas coca porque, aunque es difícil capturar las plantaciones, como ustedes saben, en último término hay una localización en algunos sitios. Entonces, se puede atacar esto, pero lo que no se puede atacar es esa red global descentralizada, articulada; si son capaces de producir otros productos químicos. La primera droga de diseño fue el Crac, que era como hacer cocaína para los pobres, muy peligrosa, muy mala, pero cocaína para el pobre. Hoy está por todas partes. No está bajando el consumo de la cocaína ni el consumo de drogas, el consumo de drogas está subiendo, medido en un ámbito mundial.

Pero hay que partir del principio de que la economía criminal no es sólo una economía que produce drogas, es una economía que produce, distribuye y transfiere cualquier bien, servicio o persona para hacer lo que está prohibido y lo que está criminalizado. Lo que está instalado, digamos, por demanda social, de una sociedad con crisis en su propia constitución.

El negocio más lucrativo en Europa es la importación de inmigrantes ilegales. Las masas desesperadas del mundo pagan de 5 a 20 mil dólares para llegar a Europa en cualquier condición. Entonces, llegan en barcos cientos de personas que se pasean en el Mediterráneo, son barbos comprados para hacerlos encallar

en Sicilia o en Andalucía. Encallas el barco con cientos de hombres y mujeres, sobre todo muchos niños. Y ya está, ha has llegado. Entonces, empieza el proceso legal, los que se reportan. Ahora, Blairofrece que la Marina británica patrulle el Mediterráneo Oriental para detener a los barcos ilegales. Bossi, el ministro italiano, quería que los hundieran (sin inmigrantes, afortunadamente), pero finalmente se decidió que no se los van a bonbardear pero se les va a disparar tiros de aviso por encima para que se paren y luego pararlos, apresarlos y devolverlos. La gloriosa *Royal Navy* va a patrullar el Mediterráneo Oriental para parar a las masas hambrientas del mundo.

Es esencial colocar ese mundo criminal de explotación de la miseria global en el centro del sistema, no en la periferia, sobre todo por la relación entre las redes criminales y las instituciones del Estado. Cuando hablamos de crisis del Estado, también tiene esta dimensión, porque quiere decir que las instituciones también están en crisis. Si en septiembre de 2002 en la prisión de máxima seguridad de Río de Janeiro el jefe de una banda pudo asesinar a otro y después poner fuego a la prisión y cuando vino la policía militar a rescatar la prisión, los guardias de la prisión hicieron un escudo humano para que no los atacaran, estamos hablando de una crisis profunda de las instituciones del Estado.

FC: Quisiera volver a los orígenes de la discusión de este libro, que es la crisis del Estado y también la reconstitución de las naciones. Para decirlo de alguna manera, tenemos una crisis de legitimidad del Estado y toda esta amalgama de este mapa que hemos dibujado, casi un mapa latinoamericano que se asemeja más a una pintura de Jackson Pollock que a otra cosa. Pero ¿qué hay en el trasfondo de este mapa que hemos tratado de dibujar no sólo nosotros dos sino todos los colegas a lo largo del libro? Tomando como referencia tus tomos. ¿Qué queda de la nación?, ¿qué queda del sueño latinoamericano, de la nación que predominó todo el siglo XX?, ¿qué queda en la globalización para América Latina? Cual sería tu conclusión de la crisis de la legitimidad del Estado y de lainsostenibilidad o la relativa insostenibilidad de la globalización.

MC: De la nación queda lo que queda en la sociedad después de un divorcio con el Estado. El grave error analítico que se sigue cometiendo es confundir Estado con nación. Son dos entidades que se fundieron históricamente en torno al Estado, no en torno a la nación. Fue el

Estado el que creó la nación, no la nación que creó al Estado. Sabemos que cuando se constituye Italia la mayor parte de su población no hablaba italiano (que de hecho es el florentino). Y en Francia, en el momento de la Revolución Francesa sólo el 13% de la población hablaba francés, la lengua de l´lle de France. Pero había un proyecto, un proyecto del Estado para construir la nación. La nación, para mí, fundamentalmente es una comunidad de proyecto. La historia muestra que hay naciones sin Estado y Estados sin nación o con varias naciones. En el caso de Francia, el Estado construye la nación a través de la destrucción de las naciones preexistentes. Esos proyectos a veces funcionan a veces no. Por ejemplo, España nunca consiguió crear realmente una nación española, aunque el Estado español es un Estado fuerte y muy serio, Pero para España los problemas en el siglo XXI siguen estando ahí y el gran drama en España, que no tiene drama de otro tipo, es que el gobierno mayoritario de Euzkadi en este momento no es el que propiamente le gustaría al gobierno español elegido por la población española. El gobierno vasco propone hacer un referéndum para declararse Estado libre asociado de España. Escándalo. Y la respuesta del gobierno español: comprar una bandera española inmensa de varias decenas de metros, plantarla en una plaza de Madrid y hacerle homenaje una vez por mes, para acostumbrar a la gente a que hay una nación española, a ver si al final se lo creen. De momento, en Catalunya tampoco de lo creen mucho.

La construcción de la nación en la edad moderna es un proyecto del Estado-nació n, que ahora está en crisis. En algunos casos funciona como en Francia, sobre todo gracias a la escuela de la Tercera República y, en otros casos, como España, no funciona. En Inglaterra, en contra de lo que se cree, tampoco funcionó: Irlanda era parte del Reino Unido y el problema de Ulster sigue planteado un siglo después. Y Escocia recupera su identidad histórica.

FC: Yo quiero insistir ¡qué pasa con la nación? ¡por qué América Latina hizo esa construcción de la nación moderna con el Estado mirando a Europa, mirando sobre todo a Francia y, por otro lado, mirando a Estados Unidos? Bolívar es el que hace esa síntesis…

MC: Históricamente, tú lo sabes mejor que yo, lo que hay es un movimiento de independencia. Este movimiento de independencia constituye naciones en torno a las Audiencias y Virreinatos que se fueron liberando por procesos específicos, en su mayoría de acuerdo a la división

de las audiencias territoriales españolas, y en parte según hasta dónde llegaron los generales. No hay ninguna razón cultural, histórica o geográfica para que Bolivia y Perú sean distintos en 1825: eran el Alto Perú y la Baja Bolivia, como decís los bolivianos. Ahora sí, naturalmente. Por tanto, es un Estado que se define, que tiene que definirse frente a un opresor y a un imperio, y lo tiene que hacer en términos de ser una comunidad más que el aparato político. La comunidad tiene que construir una identidad a partir de su práctica compartida. Y como el único principio identitario que tenían la mayor parte de los pueblos de América Latina era la nación, al cabo de todos estos años sí que se construye una nación y un nacionalismo. Un nacionalismo fuerte, Bolivia se entiende sobre todo como unidad nacional. Entonces ¿qué pasa?, que esa unidad nacional viene de la relación Estado-sociedad mediante la construcción nacional. Pero si el Estado traiciona a la sociedad, esa construcción queda vacía, y la identidad nacional, no es que desaparezca, es que se la apropia la sociedad contra el Estado.

Es por eso que se reconstituyen estos movimientos de identidad fuertes. Pero ahí es donde existe una gran diferencia entre los movimientos; la reconstitución del Brasil es muy distinto a los movimientos indígenas, que es la identidad de una nación, de otra nación que es una nación de otras naciones y la constitución de un nuevo internacionalismo sobre la base de naciones no oficiales.

Entonces, el tema que planteas, a saber qué queda de la nación en la crisis del Estado-nación, se responde con la hipótesis de que lo que queda es la sociedad. Pero sólo en la medida que esa sociedad sea capaz de construir un proyecto nacional autónomo que mantenga las fronteras de la comunidad nacional. Ahí, según el grado de homogeneidad social, cultural, étnica, histórica de las naciones se consolida o no se consolida, Por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo no sé si con el katarismo, los quechuas, loa aymaras, los guaraníes, si con todas estas culturas se puede reconfigurar Bolivia como nación, independientemente del Estado.

FC: Esa es una gran pregunta, además recoloca la cuestión del pluralismo y la cuestión de la democracia; insisto, durante años se privilegió desde el Estado la construcción de una comunidad nacional y se dejó de lado a la comunidad democrática. Quizás ha llegado la hora de trabajar al revés, que la comunidad democrática construya la nación y el Estado.

¿Será el nuevo signo de la globalización? ¿Y qué papel juegan las potencias económicas?

MC: Fernando, ¿cuál es tu análisis sobre la transformación de las relaciones América Latina/ EE.UU. vista desde América Latina? Visto desde Estados Unidos, yo observo un cambio sustancial después del 11 de septiembre.

Tradicionalmente, la principal preocupación de Estados Unidos era de seguridad geopolítica, a la que se añadió después de lucha contra la droga en el origen. Pero en los noventa, el impulso a la liberalización de los mercados y a la inserción de América Latina en la globalización, mediante un vínculo estrecho con Estados Unidos, se convirtió en el eje de la política norteamericana. Eso ha pasado a segundo plano, aunque Bush todavía quiere integrar todas las Américas en un vasto mercado unificado bajo criterios de Estados Unidos. Pero la seguridad y la geopolítica vuelven a dominar, como indica la atención a Colombia y la simpatía con que se vio el intento de golpe a Chávez. A mi me impresionó en la reunión del World Economic Forum en Nueva York, en enero de 2002, una sesión en la que estuve y en la que el secretario del tesoro, O´Neill, dijo que no iban a ayudar a Argentina porque los plomeros y los carpinteros americanos estaban hartos de que sus impuestos fueran a parar a los corruptos políticos argentinos. Algo parecido dijo de Brasil unos meses más tarde y Cardoso se negó a recibirlo hasta que pidió excusas públicas por su frase.

El post-11 de septiembre ha modificado profundamente la relación de Estados Unidos con el mundo, haciendo que de nuevo, como en la Guerra Fría, todo se vea bajo el prisma de la seguridad nacional. ¿Cómo afecta esto el desarrollo de América Latina? ¿Y cómo responde, o no responde, la región a este cambio de actual? ¿O no hay tanto cambio según tú?

FC: Para empezar esta última parte del diálogo tan sólo desearía mencionar dos asuntos. En primer lugar, me parece que la relación entre lo político y lo económico después del 11 de septiembre no es inmediata, aunque probablemente lo que tu mencionas constituye la tendencia principal. Por ejemplo, después del 11 de septiembre Brasil vía TIAR apoyó inmediatamente a EE:UU; y condenó el atentado; sin embargo sus procesos de negociación económica con EE.UU. son lentos y accidentados. Mientras que México, que tiene una integración económica intensa con EE:UU, tardó mucho por motivos internos en dar una respuesta política al respecto. Es decir, la seguridad y la geopolítica son cada vez más importantes, pero todavía creo que tiene peso la agenda económica y la agenda democrática, y que esto va a tener variaciones según cada caso.

En segundo lugar, creo que en América Latina la idea maniquea y demoníaca o meramente servil está cambiando. Ya no hay una sola mirada o miradas absolutistas sino múltiples miradas y variados matices. La geopolítica, para empezar, crea distintas miradas y variados matices. La geopolítica, para empezar, crea distintas miradas: un colombiano o un panameño o un dominicano miran a EE.UU. de una manera distinta que un brasileño. Para varios países latinoamericanos EE.UU. cuenta directamente como imagen y deseo de migración y muy especialmente por redes de relaciones que se establecen entre los migrantes y los residentes. Hace rato mencionábamos la importancia de las remesas para varios países de la región. La izquierda moderna latinoamericana también ha descubierto aliados fundamentales en sus propias reivindicaciones en el propio movimiento anti globalización que existe en EE.UU.

La cuestión es cómo va a cambiar todo esto a raíz de la guerra y las nuevas políticas de seguridad que está impulsando Bush. Todo esto sobre la base (y sigo con mi vieja tesis de siempre) de la matriz de los actores sociales de cada país y del propio manejo y fortaleza que puedan tener los mismos Estados latinoamericanos. ¿Cómo ves tú el asunto? ¿Cómo crees que se enlaza la sociedad en red y la economía de la información a nivel global con este nuevo ciclo militar-terrorista y cómo afecta esto a EE.UU:? ¿Cómo ves tú los diferentes tipos de relaciones que están teniendo los latinoamericanos?

MC: Yo creo que se desarrolla una triple articulación de nuevo tipo entre Estados Unidos y América Latina. La primera es el llamado transnacionalismo por la base, o sea la existencia de fuertes comunidades latinas inmigradas a Estados Unidos y la constitución de redes personales a los dos lados del Río Grande, de forma estructural, para millones y millones de personas. La segunda es la creciente interpretación (y no sólo dependencia) de las economías latinoamericanas con la de Estados Unidos, no sólo para México sino para el conjunto de la región: las prosperidades de unos y otros van siendo cada vez más interdependientes, es más interesante para las empresas norteamericanas la ampliación de mercado que la explotación de América Latina. U la tercera, que se ha renovado con el 11 de septiembre, es la seguridad geopolítica. Yo creo que Estados Unidos entra en un período de política exterior ideológica y agresiva, que va a dejar muy poco margen para populismos y para tolerancias a narcos. A los gobiernos progresistas serios los

controla el Fondo Monetario Internacional. A los populistas los desestabiliza la CIA (véase Venezuela). Y allí donde haya descomposición de las instituciones, como en Colombia, se producen formas de intervención militar de baja intensidad, pero que pueden ir subiendo de intensidad si es necesario, ahora que la tecnología militar permite bombardeos de precisión por aviones sin piloto. En fin, no se puede excluir, en este contexto, una aventura del exilio cubano de Miami en la eventualidad de la sucesión a Fidel Castro. Al fin y al cabo,Bush le debe la elección a su hermano y su hermano se la debe a los cubanos de Florida.

El tema clave es que los tres ejes, las redes personales, la interdependencia económica y la geopolítica en torno a la seguridad, tienen sus ritmos propios y conducen a situaciones contradictorias entre ellos y a combinaciones específicas para cada país en América Latina. Quiero con eso decir que en lugar de un eje de conflicto unificado del tipo tradicional (América Latina frente al imperialismo yanqui) hay una diversificación de las situaciones y los conflictos: la guerra en Colombia, la crisis social en Argentina, la desestabilización en Venezuela, el conflicto cocalero en Bolivia, son conflictos específicos con Estados Unidos, que fragmentan el esquema tradicional de dependencia y hacen de la relación con Estados Unidos un tema de geometría variable según tiempos, espacios y contenido de la relación.

Habrá que analizar antes de lanzar consignas.

Entre el gobierno de los Diablos y el gobierno de los Ángeles*

Hace algunos años, conjuntamente con Mario dos Santos elaboramos cuatro escenarios sociopolíticos para América Latina. En tales escenarios detectamos tendencias tanto hacia el gobierno de los diablos como hacia el gobierno de los ángeles. Sin embargo, de lo que se trata —como diría Milan Kundera— es que los poderes de ambos estén equilibrados. En el presente artículo trato de auscultar nuevamente este tipo de tendencias pero esta vez referidas solamente a Bolivia.

Desde luego que no se desea plantear tesis absolutistas, ni catastróficas o chantajistas del tipo Pacto o Muerte, sino tan solo subrayar algunos beneficios posibles y algunas consecuencias muy negativas respecto del hecho de embarcarse o no en una reforma política pactada o mejor aun en la fuerza de la política constructivista.

Cabe aclarar que el texto propiamente dicho no es el resultado de estudios prospectivos empíricos, sino tan solo una elaboración conceptual sobre el pacto y sobre la violencia.

Uno

Resulta difícil imaginar una gestión progresiva del cambio sin pacto. Por una parte, existe la necesidad del Estado de compartir responsabilidades en cuanto a la fijación de políticas y, por otra, el proceso democrático reabre el debate sobre qué contenido último va a tener la democracia y sobre cuánto se puede avanzar en las dos dimensiones que la califican: la de la libertad y estabilidad, y la que tiene que ver con su cualidad, o sea, con el grado de justicia social que alberga. Esta segunda vertiente, entonces, por la que también aparece la idea de pacto y de intervención de los sectores sociales organizados en la fijación de políticas, es la necesidad

* Este trabajo fue publicado originalmente en *Latin American Journal of Advanced Studies*. RELEA, Nº 2, (Caracas) año 2000.

de ampliar los canales de participación. O sea, sin ampliación de los canales de participación política no es posible el pacto.

Justamente con las expectativas de una democracia que avance progresivamente, lo que se plantea casi inmediatamente es el problema de los alcances del pacto. Ello implica una construcción de consenso sobre metas básicas del orden societal que no están aseguradas por la mera vigencia del orden democrático o económico.

Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades del quehacer político que permiten ese consenso y a partir de él la acumulación de poder y la coherencia necesarias para transitar ese camino?

La privatización de las decisiones por vía de la imposición del proyecto neoliberal, donde predomine sólo el cálculo racional formal de ventajas económicas para los actores individuales o colectivos, fragmenta la trama social e incrementa la incertidumbre y la desigualdad, y como se verá más adelante, condiciona la violencia. En el otro extremo, hoy en Bolivia no existe por parte de ninguna de las fuerzas sociales y políticas con capacidad para imponer hegemónicamente un proyecto de desarrollo, sea cual fuere éste y sabiendo los costos de la coerción con cualquier signo político.

Ante este panorama, cabe recuperar una comprensión de la política como un sistema de expectativas y de reconocimientos recíprocos, donde los procedimientos aparecen no como meramente formales, sino como formas comunicativas que establecen normas de reciprocidad. La disponibilidad de los actores sociales organizados para concurrir a la elaboración de una política de gobierno de la economía que regule el comportamiento de todos los actores sociales tiene que ver con esta modalidad. Y eso sólo se puede concebir en una intensificación del poder constructivo de la política, del constructivismo simbólico de la política, generador de nuevas identidades sociales.

Generalmente en la doctrina contractualista se supone que los actores que entran en un pacto son sectores preconstituidos, o sea actores que no juegan su identidad en el pacto, pero en realidad —si la modalidad de hacer política es la de un intercambio con reconocimientos recíprocos— el pacto es la ocasión para redefinir identidades sociales y políticas. El pacto implica interacción y reconocimiento del otro, pero un reconocimiento que conlleva comprender la libertad y la identidad del otro. La política, en este sentido, podrá ser entendida como el arte de lo mejor posible, es decir tendría que hacerse cargo de la elaboración de esa pluralidad.

En Bolivia, la necesidad de un compromiso nacional inclusivo, dado un cierto grado de heterogeneidad social, cultural, regional y política existente en el país, reclama —a nuestro entender— una comprensión de este tipo. La cuestión nacional no puede enfrentarse exitosamente sino como producto de esa heterogeneidad. En ese sentido, el reconocimiento de las identidades sociales y políticas en las diferencias constituye un requisito básico para que la sociedad se exprese democráticamente. Los que tienen que generar la dinámica de ese intercambio tienen que ser los propios actores sociales (incluido el Estado), y Bolivia resalta en el universo latinoamericano por sus grandes experiencias de participación y de movilización social. El problema tal vez consista en que la lógica de esa participación y de esa movilización tiene un carácter fragmentado, particularista en términos reales, y muy a menudo faccioso o corporativo, aunque en términos formales unos y otros defiendan sistemas y valores universalistas. Se da entonces una dinámica de acción social de unos sectores sobre otros (en la búsqueda de hegemonía), escapándose la posibilidad de construir un consenso intrasocietal respecto de metas básicas de funcionamiento de la sociedad o proyecto compartido por las mayorías.

Aquí no se tratarán los contenidos de estos proyectos nacionales, los contenidos en cuanto a modelos económicos concretos y a opciones societales plausibles. Más bien se está argumentando en relación a algo subyacente, a la necesidad de cambio en la forma de las relaciones políticas, que en su expresión actual parece tender a un sistema de opciones finales, donde el otro es un enemigo al que se derrota o destruye, o con el cual se establece una relación instrumental. En realidad si no se terminan de superar estas relaciones también se está condicionando la expansión de la violencia.

En este ciclo histórico más allá de notables expresiones pactistas a nivel partidario, las formas de hacer política han tenido que ver más con el particularismo, la manipulación, el maximalismo, el clientelismo o el regateo mercantil, que fueron afines con nuestra sociedad. Empero, en ella las relaciones sociales no están plenamente constituidas, a diferencia del paradigma europeo, norteamericano, no se trata de una sociedad tan preestablecida que permite regulaciones repitiendo mecanismos y formas de comportamiento. En ese sentido, es importante que una discusión sobre la política y la función social de la misma permita pensar posibilidades diferentes de "hacer política" en el país.

Como mencionamos ya hace algunos años conjuntamente con Mario dos Santos, tal discusión tendría tres dimensiones relevantes de reforma política: en primer lugar, el compromiso nacional tiene que ser visto como un proceso de intercambio entre actores sociales y políticos capaz de movilizar sus identidades; en segundo lugar, exige relegar o reconvenir los caminos rupturistas o maximalistas de transformación social y, en tercer lugar, acentuar los contenidos éticos de la democracia.

En cuanto a lo primero, está relacionado con una tesis sociológica, a saber, que las identidades de los sujetos sociales se construyen y reconstruyen desde los otros, en relación con otros, y fundamentalmente en el contacto cara a cara. Si pensamos en la interrelación entre el movimiento campesino y el movimiento obrero, hay cierta experiencia en cuanto a introducir problemas campesinos en el mundo del pensamiento y la acción obrera y viceversa. Hay relaciones básicas de intercomunicación entre ellos, fuera de las relaciones de dominación a las cuales pueden estar sometidos, pero tal vez esa interrelación por sí misma y en sí misma, a pesar de ser central, sea insuficiente ante la dinámica y las características tan heterogéneas de la sociedad boliviana. Y un nuevo compromiso histórico no es simplemente un espacio de reafirmación de los actores sociales, sino un espacio de reconstrucción de los sujetos en sus metas y en sus intereses.

El otro elemento que nos parece importante es el rechazo a cualquier forma de autoritarismo, sea de izquierda o de derecha comunitarista o elitista, con lo cual se impone resolver bien el problema de la representación y de la participación, de las mediaciones entre sociedad y Estado. Esto lleva a repensar los frustrados intentos de establecer en el país sistemas hegemónicos de una clase sobre el resto de las clases (sea ésta el proletariado, sea ésta la burguesía), de una región sobre el resto de las regiones, o de ciertas elites estatales sobre partidos y fuerzas sociales y en definitiva a reconsiderar el campo popular como un problema de articulación.

En tercer lugar, se justifica una preocupación por la instauración de reglas del juego político que no determinen como única posibilidad de intercambio entre los sujetos políticos y sociales una oposición de fines últimos: el reconocimiento del otro como alguien legítimo reclama la presencia o la persistencia de valores y de normas éticas en la democracia, pero también se reclama una crítica de la experiencia histórica.

Por otra parte, y pese a lo dicho, también sería necesario valorar la negociación como espacio de regateo o de intercambio de intereses, práctica no ajena a la realidad boliviana. En la medida en que toda organización social es multifuncional, la especialización en objetivos exclusivamente económicos no existe en ninguna de ellas, combinándose siempre en el accionar intereses y propuestas de orden social, o sea reivindicaciones económicas y objetivos políticos. Intereses y pasiones —en la terminología de Hirschman— son ambos constitutivos de la realidad social.

Si es cierto que todo proyecto de desarrollo nacional requiere un núcleo de intercambio económico, tecnológico, productivo y cultural autónomo, se deben valorar especialmente los procesos de integración simbólica de la sociedad como base de otros procesos de integración. Y retomando lo antedicho, tanto las negociaciones económicas como las políticas (entendidas ambas como manifestaciones de intercambio político) pueden ser ocasión de integración simbólica. Esto no equivale, evidentemente, ni a la anulación de los conflictos ni a la disolución de las identidades sociales y políticas; podría implicar, sí, reconstitución de esas identidades.

La superación de las trabas al desarrollo propias de la situación de dependencia y de atraso tienen como límite una gobernabilidad sistemática progresiva (en los planos económico y político) y esa gobernabilidad no resulta accesible sin reconstitución de identidades y de comportamientos. La acumulación de poder social y político para transitar con éxito un camino de consolidación y profundización de la democracia requiere asumir de diferente manera responsabilidades sociales y nacionales de los distintos actores, pues con ello tiene que ver su capacidad de articulación.

Y quizá el problema del pacto, en este contexto, no sea sino el de, a partir de agrupamientos fundados en intereses, lograr en un proceso de intercambio político, que los actores sociales y políticos, sobre todo estos últimos, impulsen transformaciones en el plano de la institucionalidad democrática, reinterpretando en primer lugar la naturaleza de la legitimidad para incidir inmediatamente en la regulación de la economía.

En síntesis la apuesta, en este lado de la balanza, es muy clara, se trata de que se potencie al máximo la capacidad política de la sociedad boliviana.

Ahora bien, ¿qué pasa si esto no sucede? Es decir, si la dinámica de los actores y del Estado se descompone y desinstitucionaliza y se tiende a una fragmentación acelerada de conflictos

impulsada o acompañada por actos de violencia y terrorismo, fenómenos muy cercanos a ciertas tradiciones históricas, a la nueva lógica de ciertos intereses corporativos, a comunitarismos cerrados y muy especialmente al tema coca-cocaína.

Sin tratar de especificar los rasgos históricos posibles de tal escenario negativo, en lo que sigue del texto se tratará de plantear una serie de argumentos sociológicos sobre los procesos que llevan a la violencia y al terrorismo.

En este sentido, estoy convencido de que una óptica teórica puede resultar particularmente interesante no tanto para comprender una posible situación futura, sino más bien para prevenir las consecuencias societales de no plasmarse lógicas pactistas por procesos económica y políticamente integradores. En este marco desearía reconocer que el libro de mi amigo Mitchel Wieviorka, citado al final del texto, me resultó de especial utilidad.

Dos

Se parte de un supuesto sociólogo básico: que la historia se hace en la sociedad y no a la inversa y que el conjunto de acciones colectivas conllevan multifacéticas y contradictorias caras. Una de ellas es la violencia como parte antitética de un movimiento o de un actor social.

La acción terrorista es comúnmente vista como pura acción irracional sobre la que se ejerce una crítica moral, pero el análisis sociológico debe distinguir que en la acción terrorista pura no hay reconocimiento orgánico de las relaciones sociales ni políticas y que ella produce una hiperconcentración de sentido de la acción, donde los actores son portadores de valores puros. Fenómenos estos que reproducen al interior del actor una gran cohesión de valores y prácticas cerradas y que comprenden una percepción del otro en términos de enemigo y a la acción terrorista como un método. Allí la cercanía a la muerte y el uso de las armas le dan al actor violento una gran coherencia axiológica.

Pero, ¿cómo nace una acción terrorista? ¿Cómo una demanda social se convierte en acción terrorista? Parece ser que se parte de un sentido social real que se instala en conflictos verdaderos, pero que se deriva en ideologías absolutas que pueden culminar en acciones terroristas. Fenómenos directamente dependientes de la fortaleza o debilidad de los movimientos sociales y el dinamismo sociocultural.

En este sentido se podría perfectamente preguntar: ¿por qué la descomposición de los movimientos de protesta campesina, especial-

mnete de campesinos colonizadores podrían llevar a la violencia en Bolivia? ¿Pueden las acciones de coacción de las instituciones represivas, nacionales e internacionales, incidir en el crecimiento de una cadena violentista? Las mafias del narcotráfico, ¿podrán estar interesadas en tal dinamismo de una manera abierta y expansiva?

La justificación central de la expansión de la violencia radica en la predominancia de una lógica política de sustitución de los actores sociales y políticos, es decir de la emergencia de un anti actor social. En este sentido, la posible expansión de la violencia en el trópico boliviano sería una forma extrema de descomposición del movimiento campesino, pero sería también producto de una inducción externa.

Los principios de construcción de los movimientos campesinos se verían desdibujados o rotos. Así el de identidad que define al actor deja de constituir el elemento de referencia de la identidad social y pasa a ser una esencia societal, una figura abstracta o mítica donde el protagonista se expresa en base a principios más que como una fuerza social. Este fenómeno lleva a la negación del otro en su diferencia, traduciéndose en fenómenos de xenofobia, "antioccidente", racismo etc. Así, el principio de oposición frente a un adversario social se transforma en un principio antagónico de destrucción del otro que es percibido como una identidad total: el Estado, el extranjero, etc. El enemigo se objetiviza y concretiza.

Respecto al principio de totalidad, que implica la creación de un campo de historicidad en el cual se oponen movimientos sociales con acción dirigente, deja de ser un campo de referencia que alimenta proyectos históricos. Ya no se trata aquí de dirigir y orientar la sociedad sino que ella llegue al más allá imaginado, utopías absolutas, mesiánicas como mitos andinistas que se integran de una manera pura. Todo o nada.

Sin embargo, también se producen transformaciones en el seno de la producción societal. Así, si los movimientos sociales en su mutua interrelación introducen valores y prácticas socioculturales solidarias, que alimentan y valorizan la cotidianidad social y política. En cuanto antimovimientos tenderían al deterioro del cotidiano y a la imposición generalizada de una lógica inspirada en la violencia. Por ejemplo un producto societal de las acciones violentistas en el campo peruano en los tiempos de Sendero fue el retraimiento comunitario. Única forma por lo demás de poder sobrevivir que tenían los comunarios del llamado trapecio andino del Perú.

Así en un antimovimiento social no existe referencia a una relación social sino sólo a un sujeto transformándose de adversario en enemigo que se objetiviza. En este sentido la noción de antimovimiento social es cercana a la de totalitarismo de la cual se alimenta. Lefort dice que en el totalitarismo se oculta la noción de institución de lo social oponiéndose mecánicamente Estado y sociedad civil. El sindicato, el militante, el jefe, detentan el poder del saber; ellos controlan al campesino, al ingeniero, a la sociedad.

Los antimovimientos sociales no son homogéneos ni entelequias preconfiguradas teleológicamente, pueden tener diversos orígenes y diversos resultados. Algunos pueden radicalizarse a la violencia terrorista y otros hacia la secta. Así las panteras negras y el movimiento carismático de M. L. King fueron partes de un mismo fenómeno. Los movimientos islámicos oscilarían entre un comunitarismo total y una gran violencia hacia el exterior. Un antimovimiento social sería el lugar de producción del terrorismo, pero no todo antimovimiento social o acción violenta es sinónimo de terrorismo.

La noción de violencia política es más compleja que la de la violencia social, y hace relación a un conjunto de conductas políticas cuya particularidad es la de estar alimentados por demandas sociales. En este contexto parece pertinente un paréntesis para poder diferenciar la acción revolucionaria del terrorismo de extrema izquierda y de extrema derecha. La acción revolucionaria, según Wieviorka, sería una combinación de violencia política generada por la crisis del Estado y la acción social, que implica una unión del pueblo y la vanguardia. Mientras que el terrorismo de extrema izquierda es la figura inversa pues se separa de toda acción de masas para instalarse sólo a nivel político y sólo se vincula con la sociedad de manera voluntarista, artificial y estrictamente ideológica. Por otra parte, el terrorismo de extrema derecha se refiere antes que nada a una colectividad más corrientemente definida como una nación vapuleada por el exterior y amenazada por el interior que llama al orden y a la grandeza del país. Esta acción tiende a sustituir de una manera muy voluntarista a las elites desfallecientes, incapaces de asegurar el desarrollo, o políticas y militares, impotentes frente al desorden interior o ante la escena internacional. A diferencia de los revolucionarios, los terroristas hablan poco de tomar el Estado (fines y medios se confunden) más bien se refieren a darle golpes al sistema, tienen una autoimagen de pureza fantástica. En ellos la noción del tiempo se absolutiza,

donde la violencia no es ofensiva sino contraofensiva y el presente continuo es ya el futuro: la muerte.

Todo movimiento social tiene un lado luminoso que lo hace portador de un proyecto histórico y que responde a la clase dirigente buscando alternativas para la sociedad, sin embargo, también todo movimiento social tiene una cara oculta, defensiva, excluida más que dominada, alienada más que subordinada, encolerizada más que portadora de un proyecto. El movimiento obrero, durante cierto tiempo, vivió fuertemente estos antagonismos entre una conciencia negociadora y otra corporativista. En este contexto la violencia no estuvo ausente de la acción colectiva. Hobsbawm habla de luchas obreras violentas, de revueltas prepolíticas que se dieron antes de que el movimiento obrero se organice, pero también nos habló de la violencia de los bandidos. Ello implica tratar de eliminar toda prenoción o prejuicio respecto a las diferentes formas de acción violenta y al desafío analítico de descubrir sin supuestos teleológicos las distintas racionalidades y alternativas en juego.

Posiblemente uno de los parámetros más sugerentes para entender los distintos tipos de violencia en América Latina constituye el nivel de fortaleza del movimiento obrero y campesino, su relación con el Estado, el sistema político y los procesos de desindustrialización y reconversión industrial, y más aún hoy en día cuando se vive un momento de inflexión de la acción colectiva. ¿Es posible comprender la acción de Sendero Luminoso sin tomar en cuenta la debilidad del movimiento obrero y popular en el Perú?, o aún más, ¿se puede entender el comunitarismo de Villa el Salvador en Lima, sin hacer referencia a los actores mencionados? ¿O los ciclos de la violencia estatal, la guerrilla y el terrorismo en la Argentina sin tomar en cuenta la inflexión de la acción colectiva? La moraleja pareciese ser que allí donde se da una conciencia social, producto de un sistema de actores sociales fuertes y sistemas políticos abiertos no hay lugar para la emergencia de acciones violentas. Así, lo específico de un antimovimiento social es el desenganche del actor de una relación social de dominación en función de una distancia o ruptura con el sistema de acción histórica. Precisamente por todo esto existen condicionantes serios para la expansión de la violencia en Bolivia y en América Latina.

Hay tres caminos de acceso a la violencia y al terrorismo: la descomposición del sistema político, la presencia de un Estado en crisis y los juegos de intereses del sistema internacional.

La presencia de un sistema político cerrado o en descomposición crea condiciones favorables a la emergencia de antimovimientos sociales. Esto se expresa fundamentalmente en la crisis o en la debilidad de los mecanismos de representación y participación política. "El sistema político, afirma Wieviorka, puede ser definido por su autonomía en la cual los actores producen estrategias, alianzas, calculan y pesan decisiones, y acceden o no al gobierno". Pero, ¿qué pasa cuando este sistema no tiene capacidad de reproducirse, de representar los intereses de las relaciones sociales en juego y la representación misma es cuestionada por la sociedad? Pues se crean condiciones para acciones violentas y de emergencia de antimovimientos sociales, fenómenos directamente relacionados con rupturas y fraccionamientos políticos y con procesos de fragmentación y descomposición de los actores sociales.

Así, la inestabilidad puede llegar a producir condiciones favorables para antimovimientos sociales y acciones violentas y terroristas, pero éstas se deben fundamentalmente a la debilidad de la intermediación del sistema político entre la sociedad y el Estado.

En referencia al Estado, este puede ser entendido, según el mismo autor, "como un agente de unificación de la sociedad y detentor de la violencia física legítima. Lugar de integración y represión, pero también de cambio. El Estado es también un actor atrapado en las relaciones internacionales, integrando, reprimiendo o asegurando el cambio, él se define por su modo de intervención frente a otros conjuntos societales". En este sentido el modo de intervención del Estado es un condicionador clave de la emergencia o no de violencia. Cuando es débil y organiza su dominio mediante la coacción crea condiciones para la emergencia de acciones violentas. Pero esto sólo se puede entender en función de las articulaciones que llega a establecer con los actores políticos y sociales. Asimismo, la descomposición estatal, aspecto no desligado del factor anterior, crea condiciones para la emergencia de la violencia. Así el Estado fija las condiciones para el desarrollo o no de la violencia, sin embargo éstas no son sus únicas fuentes aunque se apoya en ellas. Por su parte el terrorismo se caracteriza por cuestionar el Estado y sus modos de intervención, pero siempre el fenómeno de emergencia de acciones violentas está relacionado con la descomposición de las relaciones sociales.

La agudización de los conflictos en el sistema internacional condiciona la emergencia de la violencia y acciones terroristas, pero se hace necesario distinguir el juego del terrorismo in-

ternacional con la trama del sistema internacional. Hay muchas interpretaciones al respecto, por ejemplo Raymond Aron distingue entre edad nuclear y edad terrorista, ambas asociadas a través de la noción de paz belicosa. Allí el desarrollo nuclear impediría la realización de conflictos entre las grandes potencias que se opondrían a través de terceros Estados o recurriendo al terrorismo, y por otro lado alimentarían el desarrollo de acciones terroristas. Al mismo tiempo los Estados totalitarios basados en terror interno pueden prolongar su acción en la escena exterior.

Por otro lado, la violencia también puede ser inducida por mafias internacionales, o "estados internacionales paralelos", como es el caso de la mafia de la cocaína, o también por políticas conspirativas y represivas por parte de agencias internacionalizadas de lucha contra el narcotráfico. En realidad en la medida en que estas instituciones se autonomizan del poder civil tienden a reproducir, conjuntamente con las lógicas mafiosas, un círculo vicioso de violencia y terror. Es decir se trataría ya del predominio de una lógica guerrera entre los actores terroristas y los represores que tienden a multiplicar y complejizar este tipo de acciones.

No obstante, más allá del reconocimiento de la importancia de la política conspirativa en la escena internacional, es importante distinguir la vinculación entre la logica de la coacción y la violencia a nivel internacional y la descomposición de las relaciones sociales que las pueden alimentar. Así, es importante el análisis de la violencia en relación a sus propias sociedades más que en relación a otros regímenes, pero muy especialmente es importante el análisis de los protagonistas concretos de la violencia donde la acción internacional es adicional a una cierta trayectoria interna.

En síntesis, la creación de acciones terroristas y/o violentas es el resultado de un conjunto complejo de relaciones y comportamientos sociales, pero que tienen como eje central la crisis de los actores sociales y el desarrollo de antimovimientos.

Para que se desarrolle la acción terrorista se debe lograr lo que Wieviorka llama momento de inversión del antimovimiento social a la violencia y al terrorismo. Allí pierde sentido la acción y paradójicamente se pasa a actuar en nombre del movimiento alejándose de él, lo que de suyo implica un constante y acelerado proceso de afirmación fundamentalista y de desarrollo de los aspectos ocultos de los movimientos sociales, allí es cuando el grupo se apodera de la totalización utópica. Psicológicamente esto estaría relacionado con el fenómeno de la diso-

nancia cognitiva, que según Festinger se refiere al proceso de preparación de una decisión en base a la existencia simultánea de elementos de conocimiento opuestos y que se resuelven en una decisión que elimina la disonancia.

Las características mismas del terrorismo son distintas y es necesario distinguir por lo menos dos aspectos: aquel que percibe la acción terrorista como un método al servicio de una lucha que reposa sobre una colectividad concreta que se reconoce en ella y que ve en la acción un instrumento coyuntural al servicio de fines (y acciones), y aquel que percibe dicha acción, más que como método, como una lógica de acción donde los medios y los fines se confunden, al mismo tiempo que desaparece una base social legitimadora de referencia que sólo existe en la cabeza del actor.

En gran medida la acción terrorista se asemeja al fenómeno totalitario, ambos tienen una misma lógica para visualizar el Estado y la sociedad, ambos rechazan la idea de un espacio interno de debate abierto, es decir de una representación del poder como un lugar distinto de coexistencia conflictiva o no pero inapropiable, es decir un sistema político democrático en el que se expresen constantemente los propios actores colectivos.

Los escenarios que acabo de narrar, como mencioné al principio del artículo, no son más que tipos ideales de comportamiento posible, que jamás corresponderán directamente con la realidad social. Empero permiten dilucidar una línea imaginaria posible en donde Bolivia podría situarse. Ojalá el país esté más cerca de la primera figura. En gran medida esto depende de la propia capacidad política de la sociedad boliviana y sobre todo de su inteligencia para desprenderse de una cultura conspirativa y negadora del opositor especialmente en la "clase política" y entre buena parte de los intelectuales.

Bolivia

Un siglo de luchas sociales* **

Introducción

Durante el siglo XX Bolivia resalta en la región latinoamericana por la intensidad de sus luchas socio-políticas y socio-culturales. Tales luchas, si bien han estado asociadas a los cambios y conflictos que se dieron a nivel internacional, han poseído una dinámica muy particular. La fuerza de la sociedad boliviana, a través de sus múltiples actores y variados movimientos sociales, constituye probablemente el sello de la identidad nacional moderna.

Los actores se han hecho en los conflictos, en las oposiciones, en los deseos y en las demandas contra poderes que aparecían inconmovibles y omnipotentes, como el de los hacendados, el de las compañías mineras o el de potencias internacionales (en este último caso, fueron famosas las luchas anti-imperialistas). A veces la oposición fue directa contra el poder económico y social, otras veces las oposiciones se mediatizaron enfrentando al Estado y al Ejército; varias veces también el mismo Estado e incluso gobiernos de las Fuerzas Armadas promovieron la organización social popular, como las federaciones de mineros y de campesinos en los 40 o la organización de los municipios locales en los 90. Las luchas casi siempre fueron muy perseverantes y obsesivas, como aquélla de los empresarios e intelectuales nacionales que aspiraban construir hornos de fundición en Oruro. A veces los resultados fueron exitosos y alegres, otras no, pero casi siempre el resultado costó grandes sacrificios humanos. Por eso la historia de Bolivia moderna es también

---

* Este trabajo fue publicado originalmente en el libro de Fernando Calderón *Bolivia en el siglo XX: la formación de la Bolivia contemporánea* 1999 (La Paz: Harvard Club de Bolivia).

** Este es un texto de divulgación para estudiantes. Si se desea profundizar, consúltese la bibliografía. El texto es una síntesis de la misma.

una historia de dolor, de constancia, de sangre y de lágrimas.

Si bien los conflictos variaron en sus múltiples significados e intereses en el tiempo y en el mismo espacio nacional, de alguna manera ellos, por lo menos en el plano simbólico y a pesar de importantes momentos de ruptura y de cambio brutal, guardan una cierta continuidad. El Katarismo de los 70 se hizo mirando a Zárate Willca, a la Normal de Warizata y a Túpac Katari del siglo XVII. Los movimientistas pelearon admirando a Belzu, las feministas de los 90 miran a Bartolina Sisa y los obreros jamás olvidaron a su propios héroes nacionales e internacionales. Parece que el legado cultural que dejan todas estas ricas experiencias es que sin memoria no es posible una nueva historia.

Múltiples y variados han sido los actores que incidieron activamente en las relaciones de poder o en su modificación; sin embargo, pocos han sido aquéllos que lograron transformarse en movimientos sociales históricos, es decir en actores que incidieran decisivamente en la dirección de la nación boliviana además de tener proyectos propios de sociedad. Son fundamentales al respecto los movimientos étnico-culturales, los obreros-mineros y los regionales. Aún más, cuando la fuerza de estos movimientos más o menos logró coincidir como en el 52 o en 1900, el cambio histórico fue tremendo. Asimismo, se trata de movimientos que si bien lograron modificaciones sustantivas en la vida cotidiana de las gentes, sus orientaciones fundamentales estaban dirigidas a controlar o modificar el poder político del Estado. Precisamente por eso son sobre todo movimientos socio-políticos

En este ensayo se hará énfasis en tales movimientos tomando como referencia histórica general los dos grandes ciclos de dominación que vivió el país durante el presente siglo: el oligárquico y el del Estado patrimonial corporativo. El ensayo cabalmente parte de una breve narración de los principales momentos de acción de estos actores y movimientos, para luego, en un segundo acápite, tratar de interpretar y caracterizar sociológicamente sus orientaciones principales. Finalmente, como corolario, se plantea un nuevo escenario emergente tomando como referentes básicos el nuevo dominio neoliberal, la globalización y la democracia y, con ellos, un momento de cambio histórico de los actores sociales.

I. El poder oligárquico: 1900-1952

La dominación oligárquica fue constituída por una confluencia de intereses de terratenientes

y comerciantes del occidente del país con empresarios mineros de origen nacional, que operaban como empresas transnacionales vinculadas al capitalismo europeo y norteamericano, y sectores medios tradicionales, civiles y militares, que organizaban y mediaban las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad. Se trataba, además, de un poder jerárquico de carácter señorial que de distintas formas no sólo explotaba socialmente, sino también discriminaba y menospreciaba a las mayorías indígenas y mestizas del país.

El ciclo oligárquico se inició con los liberales a principios de siglo y luego de fuertes conflictos y crisis derivadas de la gran depresión económica mundial de 1929 y la guerra del Chaco entre en proceso de descomposición. Los conflictos y las luchas obreras y campesinas de la década del 40 fueron ya parte del proceso de la Revolución Nacional.

La confluencia de las luchas aymaras y de los liberales paceños a fines del siglo pasado y a principios de éste, con la derrota a las fuerzas chuquisaqueñas y potosinas, marcó la cancha del orden político institucional y cultural del país estos últimos 100 años. Desde ese entonces, un poder estatal relativamente centralista está ubicado en la ciudad de La Paz, expresando, sobre todo hasta los 50, el poder de las elites regionales paceñas, es decir el poder de terratenientes, mineros, comerciantes e intelectuales, que además de estructurar la dominación interna se vincularon con el mundo exterior.

Los liberales paceños, aunque de manera restringida, le dieron al país una dimensión nacional tanto a través de políticas de integración educativa, militar y laica, como de posicionamineto minero en el mercado internacional. El movimiento de Zárate Willca colocó como un tema nacional de primera magnitud a la cuestión indígena-campesina.

La rebelión de Zárate Willca, orientada a transformar las relaciones serviles en las haciendas y a recuperar las tierras de comunidad expropiadas bajo el gobierno de Melgarejo, fue utilizada por los liberales en su lucha regional contra los Federalistas. Cuando los liberales tomaron el poder, el movimiento indígena fue aniquilado, pero no murió. Efectivamente, la historiografía registra más de 40 levantamientos campesinos entre 1901 y 1918 en todo el territorio nacional y no sólo de aymaras, sino también de campesinos quechuas y de indígenas choritis, tapiates y tobas en el Chaco boliviano. En realidad, el período liberal estuvo plagado de luchas campesinas e indígenas en todo el territorio nacional. Estos levanta-

mientos también se dieron en la década del 20, sobresaliendo los levantamientos de Jesús de Machaca en 1921 y de Cayanta el 27, que incluso se prolongaron hasta la misma guerra del Chaco. Se trataba de luchas, a veces muy crueles, que aspiraban modificar las relaciones sociales y económicas impuestas por los terratenientes. Lo notable es que en medio de estos conflictos, que incluían crueles formas de discriminación social, se desarrolló el movimiento educativo de Warisata. Este constituyó una notable experiencia moderna que vinculaba el desarrollo de la cultura aymara al contexto nacional boliviano.

Después de la guerra del Chaco las luchas campesinas se focalizaron en Cochabamba. Allí fueron célebres las luchas y demandas de los piqueros contra los hacendados y el Estado para instaurar sindicatos campesinos. Más adelante, ya en la década del 40, conjuntamente con múltiples movilizaciones sociales, sobresalieron las demandas campesinas en todo el país para participar en el Primer Congreso Indigenal promovido por el Coronel Gualberto Villarroel, como muy especialmente la rebelión liderada por el gran Hilarión Grájeda en la provincia de Ayopaya en Cochabamba, donde campesinos quemaron haciendas y controlaron el territorio local que sólo fue recuperado por bombardeos aéreos y la más brutal represión. La Revolución Nacional y la posterior Reforma Agraria no pueden ser comprendidas sino como parte de este proceso histórico.

Bolivia se incorporó al mercado mundial a principios del siglo mediante la producción de estaño. Este se obtenía a través de actividades primarias controladas desde afuera del país. La actividad minera fue el núcleo del poder oligárquico, pues logró hegemonizar la economía nacional, subordinar las formas de explotación de la tierra a través del sistema de hacienda e impulsar las formas embrionarias de industrialización urbana.

Tres grandes empresas mineras de origen nacional, la Patiño, la Aramayo y la Hoschild Mines, fueron absorbidas por la dinámica de las economías centrales y constituyeron verdaderos consorcios internacionales de las acciones y el poder norteamericano, inglés y suizo, con un control de la producción, el refinamiento y la distribución del estaño a nivel mundial. Estos procesos de producción, si bien se sustentaron en importantes avances tecnológicos, se desarrollaron en base a altos niveles de explotación de la fuerza de trabajo que, combinados con una racionalidad burocrática empresarial moderna y un orden político represivo, consolidaron la dominación en el país.

Los obreros mineros constituyeron el grupo social probablemente más moderno y combativo de la sociedad boliviana. Ellos se desarrollaron en función de una oposición y lucha contra el poder minero transnacional y el Estado y supieron proyectar y concatenar sus intereses sociales nacionales con los del movimiento obrero internacional. Incluso no es exagerado señalar que el mismo movimiento obrero mundial tiene en los mineros bolivianos uno de sus protagonistas más combativos y representativos.

En el corazón de toda su actividad anidó el sindicato. Este fue una creación colectiva y contractual de los mineros, que en el caso boliviano expresó también una especie de auto-gobierno local. Desde allí pretendió negociar o enfrentarse con las clases dominantes o dirigentes.

Los mineros forjaron una identidad cultural muy particular; ésta puede ser caracterizada tanto por el tipo de vida en el campamento (*company towns*), regida por relaciones primarias "cara a cara" y con un alto grado de solidaridad de grupo, como por comportamientos industriales modernos típicos de empresas capitalistas avanzadas para ese entonces. Esta identidad también se hacía en una cultura de socavones, en la que se yuxtaponían una visión del mundo propiamente minera, con tradiciones y rituales andinos que reforzaban no solamente una visión radicalizada del mundo, sino también una fuerte identificación colectiva indígena y mestiza. Seguramente, el encuentro de perforadoras inglesas con el "Tío" simbolizan la fuerza de esta cultura política, que percibía al resto de la sociedad, y sobre todo al Estado, como distantes, atrasados, ajenos y amenazadores.

La acción minera moderna prácticamente se inició con la huelga en la mina de Animas en 1912 por la jornada de ocho horas de trabajo y la organización de asociaciones de socorros mutuos. Hasta la guerra del Chaco, el movimiento obrero fue de tipo corporativista y se expresó en sindicatos puramente reivindicativos, mediante la formación de mutuales y asociaciones, cuyo objetivo era lograr una legislación proteccionista en las relaciones de trabajo.

Sin embargo, progresivamente se desarrollaron organizaciones y federaciones sectoriales y nacionales que, en general, reprodujeron las pugnas marxistas-anarquistas y marxistas entre sí, tal como ocurría en otros países latinoamericanos. La organización sindical fue el escenario del inicio de las prácticas partidarias y de las divisiones político-

ideológicas que se originaban sobre todo en conflictos externos.

La acción minera fue decisiva en la constitución del imaginario político nacional forjado en las décadas del 30 y del 40. No es casual que tanto las rebeliones mineras sofocadas con cruentas masacres por parte de los gobiernos represivos de turno, como las formidables tesis políticas de Pulacayo, trostquistas, y de Colquiri, nacionalista, hayan influido en la vida política nacional por más de 40 años y se hayan constituído en referentes obligatorios en la formación de partidos políticos que desde entonces están presentes en el sistema político nacional.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), principal fuerza política del país desde ese entonces, se formó mirando y promoviendo la acción obrera. Por ejemplo, la masacre de Catavi en 1942 fue un referente fundamental de la identidad de ese partido; célebre fue al respecto la denuncia que pronunció Paz Estenssoro sobre esta masacre ante el Congreso Nacional. Bajo la misma influencia se desarrollaron el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), de influencia marxista estalinista, y el Partido Obrero Revolucionario (POR), de orientación trostquista fundado en la primera reunión de la Cuarta Internacional en Filipinas. Incluso movimientos claramente fascistas, como Falange Socialista Boliviana (FSB), fundado en 1937, se hicieron bajo una influencia popular anti-imperialista.

Para complementar el panorama de este medio siglo, vale la pena mencionar muy brevemente la situación de los empresarios industriales, de los obreros y de los sectores medios.

A partir de 1910 se instalaron varias industrias, sobre todo en la ciudad de La Paz. Entre ellas destacan las fábricas de cervezas, embutidos y tabaco y, más tarde, las de textiles Forno, Said y Soligno; estas últimas incluso reinvirtieron en Chile y Argentina, fortaleciendo el desarrollo industrial de esos países. Probablemente, la estrechez del mercado interno, el dominio de una economía primario-exportadora y el peso de grandes casas importadoras limitaron el desarrollo industrial nacional. En este sentido, la fuerza empresarial boliviana, a pesar de encomiables esfuerzos, fue muy limitada y su peso en el sistema de decisiones políticas secundario.

Este fenómeno no sucedió respecto de los pequeños grupos de obreros industriales; éstos vieron fagocitada su influencia política tanto por la acción minera y de los partidos de izquierda como por la fuerza popular de artesanos y grupos urbanos marginales. En este con-

texto fueron muy importantes en la caída del régimen oligárquico varias luchas fabriles y populares urbanas, como, por ejemplo, los famosos paros y luchas en las zonas de Villa Victoria y Achachicala en La Paz. En la misma ruptura revolucionaria del 9 de Abril de 1952, los obreros y los grupos populares urbanos paceños y los mineros de Oruro constituyeron la fuerza principal que derrotó al Gobierno y al Ejército.

Por otra parte, en la conformación de la dominación oligárquica las capas medias jugaron un rol importante. Estas capas mediadoras entre el poder económico de los empresarios mineros y de los terratenientes y la débil sociedad civil boliviana ejercieron el dominio político y administrativo de la nación. La política estatal se nutrió de las ideas y prácticas de estos grupos medios. Ellos no sólo se encargaban de la administración estatal, sino que también otorgaban la legitimidad electoral a los gobiernos liberales y republicanos de la época.

Claro está que el comportamiento de los grupos medios no se vinculó exclusivamente al poder, también estas capas promovieron importantes movimientos estudiantiles e intelectuales de protesta que cuestionaron el poder central tanto en La Paz como en otras ciudades y regiones del país. Sin embargo, con la guerra del Chaco y la integración social que se dio en los campos de batalla y las peripecias que la acompañaron, emergieron nuevos grupos medios militares y civiles que cuestionaron seriamente el poder oligárquico. Los actores más significativos fueron los gobiernos militares de Toro, Busch y Villarroel. Este último, como parte de la logia militar "Razón de Patria" (Radepa), jugó un papel importante en la organización popular y en el cuestionamiento del poder oligárquico. Entre sus acciones se destacan la promoción del Primer Congreso Indigenal, la abolición del pongueaje y la promoción de la fundación de la poderosa Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y, desde entonces existió, en determinadas circunstancias históricas, una curiosa conexión entre militares nacionalistas y mineros sindicalizados.

Finalmente, vale la pena mencionar que los nuevos sectores medios, no ajenos al proceso de mestizaje que vivía la nación, fueron los principales promotores políticos e ideológicos de los nuevos partidos políticos que se conformaron en la década del 40. El MNR, principal fuerza política, fue un movimiento pluriclasista liderado por estos nuevos sectores medios que emergieron de la guerra del Chaco. Quizás por todo esto el MNR reivindicaba a la raza indomestiza como crisol de la nacionalidad.

En un país con conformaciones socio-culturales y regionales heterogéneas, con luchas sociales fuertes y débiles instituciones políticas como Bolivia, necesariamente se desarrollaron caudillos peculiares y extraños, caudillos cuyas personalidades y experiencias de vida le dieron a las luchas, a los actores y a los movimientos rasgos particulares. Es imposible entender la dinámica de los movimientos analizados sin auscultar el papel que jugaron tales líderes. Las personalidades de Montes o Zárate Willca son únicas. Sólo un místico de la educación como Elizardo Pérez y un aymara perseverante como Siñani pudieron crear Warisata. ¿Cómo entender, por ejemplo, al movimiento obrero sin la personalidad carismática y astuta de Juan Lechin Oquendo y su envidiable don de escuchar a las gentes, especialmente a los más humildes? El mismo MNR jamás podrá ser comprendido sin el carácter maquiavélico y el don de mando de Paz Estenssoro, o sin esa personalidad curiosa que combinaba humildad con valentía de Hernán Siles, o sin el arrojo de Ñuflo Chávez, o sin la obsesión teórica de Walter Guevara. ¿Cómo pues comprender la mística revolucionaria que dio origen a la revolución nacional sin la magia misteriosa del "Dictador suicida" o sin la bondad luminosa de "El Presidente colgado", como los denominó Céspedes en sus célebres novelas a Busch y a Villarroel. Incluso, uno legítimamente puede preguntarse si el destino de la revolución hubiese sido el mismo si Germán Busch hubiera vivido.

Pero no sólo de poderosos se hace la historia. Los diversos líderes regionales o sectoriales también jugaron un increíble papel. La entrega a una causa y la tragedia de Hilarión Grájeda quizás sólo se justifica por el triunfo de la Reforma Agraria. María Barzola es más que un símbolo; fue una mujer minera concreta que murió reclamando por un mendrugo de pan. En fin, como mencionó Pablo Neruda: "detrás de los libertadores estaba Juan". Y en Bolivia los héroes anónimos de las múltiples luchas brevemente narradas fueron muchos.

II. El ciclo patrimonial-corporativo: 1952-1985

Existen tres hitos históricos que organizan este nuevo ciclo de dominación: la Revolución Nacional propiamente tal, el régimen autoritario y el proceso democrático.

La Revolución Nacional fue una alianza pluri-social liderada por el MNR que introdujo cambios profundos en la sociedad boliviana y en la proyección de Bolivia en el mundo. Tam-

bién posibilitó una nueva estructura de dominación, la del Estado patrimonialista-corporativo. La revolución fue un cambio de unas clases y grupos por otros en el poder del Estado y en las principales actividades de la economía. La revolución no fue lineal, ni siquiera prevista; ella vivió un proceso ambiguo y complejo pleno de contradicciones, conflictos e incertidumbres, en el que asumir unas opciones y no otras produjo determinadas consecuencias que a la larga estructuraron el curso de la vida nacional. La historia la hacen los actores y sus líderes en circunstancias particulares; en este caso, circunstancias de una tremenda concentración de conflictos e intereses en las que el papel y la presión de la política norteamericana en un contexto de guerra fría fue crucial; de ahí el carácter social y anti-imperialista de la revolución y del MNR, por lo menos a nivel ideológico y en sus primeros años.

A un nivel más conocido, la revolución introdujo una serie de reformas fundamentales en la realidad nacional que modificaron las bases mismas de la sociedad; entre ellas se destacan la nacionalización de las minas que creó empresas estatales, la Reforma Agraria que distribuyó tierras entre los campesinos y posibilitó la extensión del minifundio, la Reforma Urbana que entregó a los sectores populares urbanos tierras y lotes, la Reforma Educativa que produjo un extraordinario dinamismo de alfabetización, y el voto universal que reconoció la ciudadanía política para la inmensa mayoría nacional.

Sin embargo, tales cambios son impensables sin la fuerza de los actores sociales y sobre todo sin el amplio, rico y complejo dinamismo de organización y participación la misma revolución suscitó: más de 650.000 obreros y campesinos se organizaron en sindicatos, 60.000 trabajadores del campo y de la ciudad estaban organizados en milicias. Cientos de Comités de Abastecimiento organizaban la distribución de los alimentos a escala local. El papel de un movimiento de mujeres emenerristas, llamadas Barzolas, fue crucial tanto en la organización de la distribución de alimentos como en el mantenimiento de un orden urbano autoritario común a este tipo de cambios radicales. A nivel obrero, no sólo se fundó la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), sino que se desarrollaron formas inéditas en latinoamérica de participación obrera, como el control obrero en las minas nacionalizadas o el co-gobierno con el poder obrero en tres ministerios. La revolución boliviana fue única en la historia de la región y sólo es comparable en su magnitud a la mexicana o a la cubana.

El proyecto nacionalista fue cultural y políticamente homogeneizador y, en ese sentido, profundamente autoritario, pues solo se aceptaban, y no siempre, diferencias que se daban al interior del partido de gobierno. Allí lo social y lo político estaban profundamente entremezclados.

El MNR privilegió la construcción nacional sobre la construcción democrática y buscó combinar metas de modernización socio-económica con procesos de integración territorial y de ampliación de la ciudadanía social, sin lograr empero, por el faccionalismo ascendente en su mismo seno, transformar el cambio político en un cambio institucional sólido que promoviese un desarrollo nacional sostenible en el tiempo y entre las nuevas generaciones que emergieron del cambio revolucionario.

La revolución cambió a todos, incluso a los que se opusieron e ella, y desde ese entonces los bolivianos, a pesar de varios intentos de restauración señorial, no volvieron más a ser los mismos, ni podrán hacer otra cosa que no retome lo que la revolución hizo de ellos, incluso si se desea ser, lo que puede ser legítimo, neoliberales.

El nuevo poder que al final la revolución creó reposaba en una nueva estructura socio-económica y política de carácter estatal. Efectivamente, el núcleo de las actividades económicas estaba en manos de empresas y corporaciones estatales que funcionaban en base a "anillos o roscas" burocráticas de poder. El Estado organizó sus relaciones con la sociedad en base a relaciones burocrático-clientelares, a través de las cuales se otorgaban cargos y prebendas a cambio de legitimidad o apoyo político. En este marco, el poder del Ejecutivo fue crucial, pues allí se concentraran las decisiones; de ahí el peso fundamental del caudillo o del jefe. Un jefe del partido cínicamente comentaba años después que la derrota de la revolución se explicaba porque el partido tenía 200.000 militantes y sólo había 100.000 puestos. Ciertamente, el MNR miró constantemente en el espejo latinoamericano al PRI mexicano.

El Estado fue entonces el nuevo eje de la vida socio-económica y política de la nación y también el referente principal de los nuevos conflictos sociales. Además, el Estado prácticamente monopolizó las relaciones económicas con el exterior y con ello fue también el puente con la dominación externa. Este nuevo Estado corporativo y patrimonialista tuvo, en general, dos grandes orientaciones políticas nacionalistas. Algunas veces, como bajo el gobierno de Ovando y Torres, por ejemplo, tuvo un carácter más progresista y distribucionista,

otras, más autoritario y conservador, como en los casos del General Barrientos y del General Banzer durante los 70, pero siempre fue el parámetro de referencia de los distintos comportamientos colectivos.

La instalación de un nuevo orden militar autoritario estuvo asociada con un intenso dinamismo de faccionalismo y de crisis moral del MNR y de los actores populares, llegando incluso a fases de enfrentamiento violento. Quizás, el caso más grave fue la guerra civil entre campesinos en el Valle Alto de Cochabamba, conocida como la Champa Guerra, pero también en el seno del movimiento minero se vivieron momentos de sangre y fuego entre diversos grupos políticos. Al decir de Sergio Almaraz Paz, uno de los más lúcidos analistas del 52: "Se vivía el tiempo de las cosas pequeñas, una crisis moral corroía todo" y, así, la Revolución Nacional fue derrotada en noviembre de 1964 con una mínima y escuálida defensa de un reducido grupo de milicianos en el cerro de Laikakota de La Paz. "Laikakota -decía Almaraz Paz- cementerio de tercera clase para una revolución arrodillada".

Si en el occidente del país el primer momento del régimen del General Barrientos fue de confusión y orfandad de los actores populares, en el oriente se fortaleció un movimiento regionalista cruceñista que se convirtió progresivamente en un parámetro de referencia en la reemergencia de nuevos actores regionales que ocuparon un lugar destacado a lo largo de todo el país las siguientes décadas. Los movimientos regionales se expandieron en función de las desigualdades del proceso de desarrollo, de las diferentes concentraciones de poder territorial y de la participación diferenciada de las regiones en la asignación de los recursos estatales.

El desarrollo en el oriente se basó en los recursos naturales de la región, en las inversiones durante la Revolución Nacional y en la fuerza del movimiento cruceñista. Este movimiento, a pesar del apoyo económico proveniente del Estado que tuvo la región, se enfrentó a aquél por las regalías del petróleo y por otros temas de poder. Durante las décadas posteriores a la revolución, el movimiento se fortaleció, unas veces, respaldando decididamente a regímenes autoritarios, como en el caso del Gobierno del General Banzer durante los 70, otras veces, apoyando el proceso de democratización, como a principios de los 80.

El movimiento campesino se fue subordinando al Estado de manera creciente a través del denominado "Pacto Militar-Campesino". Se estructuró un complejo sistema de redes clientelares entre dirigentes campesinos, naciona-

les y locales, con las Fuerzas Armadas. Este sistema fue viable gracias al formidable carisma del General Barrientos y su rol pacificador en el Valle Alto de Cochabamba. Fue recién en la década del 70 que esto cambió definitivamente, pues se empezó a crear una creciente unidad y autonomía campesina en oposición al régimen autoritario.

El eje de los conflictos se desplazó entonces al Altiplano y al mundo aymara, aunque es innegable que las masacres de Tolata y Epizana, como respuesta a la protesta campesina por un alza de precios decretada por el gobierno militar, afectaron a todo el imaginario campesino y alimentaron la acción rebelde. En los 70 emergió un liderazgo aymara que se construyó en base a identidades y proyectos étnico-culturales, anti-coloniales y de orientación campesina. Nuevamente, lo comunitario fue colocado en la escena política nacional. El movimiento no solamente criticaba las nuevas formas de dominación en el mercado y el papel excluyente del Estado, sino que también progresivamente fue planteando metas de construcción de un nuevo tipo de sociedad basada en la autonomía y la liberación campesinas.

Este dinamismo culminó con el establecimiento de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que logró articular, a partir del paradigma katarista, al conjunto de los campesinos del país, y empezó un nuevo tipo de vinculación, no sin contradicciones, con el movimiento obrero en el período de la Unidad Democrática y Popular (UDP).

El movimiento obrero se recuperó en 1967 y reinició un proceso de luchas y oposiciones brutales contra el autoritarismo militar. Se trataba, esta vez, de un movimiento con orientaciones socialistas muy vinculado a los procesos ideológicos y políticos radicales a nivel internacional. El punto culminante fue en 1971 con el desarrollo de la Asamblea Popular. Este movimiento se alió con un movimiento estudiantil altamente radicalizado y tampoco fue ajeno al movimiento guerrillero que actuó en el país a fines de la década del 60 y que se identificaba ideológicamente con la Revolución Cubana y con la figura heroica del Che Guevara.

En noviembre de 1982 el General Vildoso Calderón reconoció la legitimidad de las elecciones de 1980 y se inició el nuevo ciclo democrático sin interrupciones hasta los presentes días. Momentos decisivos de las luchas sociales y políticas que iniciaron el proceso democrático fueron, entre otros, las luchas, los paros y las huelgas de los mineros y, muy especialmente, las gestas heroicas de los Comités

de Amas de Casa mineras. La resistencia en las calles de La Paz contra el golpe de Natush Busch y sus aliados (tan bien retratada por René Zabaleta en *Las masas en noviembre*), la rebelión de jóvenes militares contra García Mesa y las marchas fabriles en Cochabamba, el sacrifico de heroicos jóvenes miristas y de otras organizaciones de izquierda, la posición crítica de los Comités Cívicos Regionales en todo el país, la huelga general de mineros de Huanuni y la adhesión de Juntas de Vecinos, organizaciones empresariales, sectores medios, etc., todas ellas posibilitaron la caída de la dictadura y el proceso de transición a la democracia. En síntesis, la democracia en Bolivia, a diferencia de varios otros casos en América Latina, fue en lo fundamental el resultado de la lucha popular.

En ese largo período de dictaduras y de una cultura autoritaria y conspirativa común a los distintos grupos sociales en pugna, también se desarrollaron nuevos liderazgos políticos y sociales sin los cuales se hacen incomprensibles las características de las luchas sociales y políticas en el período. Ejemplos de estos líderes son: Camargo en las minas, Genaro Flores en el campo, Domitila Chungara entre las mujeres, Marcelo Quiroga en la política, Luis Espinal en lo cultural y tantos otros mártires de la democracia. Sobre estos hombres también descansó el posterior curso del nuevo régimen.

Al gobierno de la alianza centro-izquierdista de la Unidad Democrática y Popular (UDP) le tocó iniciar, desde el 10 de octubre de 1982, un doble proceso de transición que vivió la sociedad boliviana. Por una parte, en el plano político y luego económico, la descomposición del ciclo patrimonial-corporativo, condición necesaria para el posterior período de la denominada economía de mercado , por otra parte, la transición hacia una democracia institucional y de partidos.

Tales transiciones estuvieron en ambos planos plagadas de conflictos y movilizaciones. El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), observó entre 1982 y 1985 un total de 2300? eventos conflictivos. En su mayor parte fueron conflictos contra el Estado y en función de reivindicaciones socio-económicas. El resultado fue una tremenda crisis de gobernabilidad expresada en una desagregación acelerada de conflictos y de fuertes antinomias en el mismo aparato del Estado. Parece que las fuerzas sociales y políticas de izquierda no lograron compatibilizar su capacidad de crítica y oposición contra las dictaduras con una buena gestión de gobierno que potencializara la estabilidad democrática. Claro que esto es compresible si se piensa que

con la llegada de la democracia también arribó una explosión de demandas sociales que otrora estuvieron postergadas por los regímenes autoritarios. Sin embargo, el costo fue un deterioro creciente de la economía. El Presidente Siles, particularmente, y el gobierno de la UDP, cristalizó mejor que nadie este drama. Curioso destino el de este honesto líder del 52 a quien le tocó administrar gobiernos en medio del caos.

Bajo el gobierno de la UDP acabó la cultura política del enfrentamiento heroico, de los fines últimos de los conflictos antagónicos entre las Fuerzas Armadas y la FSTMB y de los grandes movimientos históricos. Estos no últimos lograron definir en el plano del poder esa vinculación, creativa y genuina boliviana, entre formas de acción y de auto-representación socio-cultural directa y la democracia institucional representativa, dejando quizás el tema pendiente para el futuro...

1985 fue el inicio de un nuevo período nacional. El dominio patrimonial-corporativo no se podía reproducir ni por motivos internos, como lo demostró la crisis del gobierno de la UDP, ni por motivos externos, dados por los procesos de reestructuración y globalización de la economía y de la política a nivel mundial. También había caído, a una velocidad inusitada, el muro de Berlín.

El nuevo gobierno del MNR, en alianza con ADN y bajo la influencia del FMI y el Banco Mundial, inició una serie de políticas de ajuste y de reestructuración económica e institucional de corte neoliberal que continuaron y se profundizaron bajo los gobiernos de Paz Zamora y de Sánchez de Lozada. Los partidos políticos se convirtieron en los protagonistas principales de la democracia y un complejo sistema de alianzas partidarias, si bien le dio gobernabilidad instrumental al régimen, también le restó legitimidad social. Y así terminó todo un ciclo histórico iniciado a principios de siglo. El nuevo siglo XXI plantea nuevos desafíos, empero, que tendrán que revisar necesariamente la experiencia histórica aquí narrada.

En lo que sigue se tratará de plantear una somera interpretación sociológica sobre las orientaciones, oposiciones e identidades de los tres movimientos fundamentales de este siglo en Bolivia: el movimiento obrero, los movimientos étnico-culturales-campesinos y los regionalistas.

III. Movimientos y actores sociales

Históricamente, los movimientos sociales han jugado un papel fundamental en el proceso de constitución de la sociedad boliviana, una

sociedad compleja caracterizada, en primer lugar, por la heterogeneidad de las relaciones económico-sociales, es decir, por la coexistencia de relaciones industriales, artesanales y comerciales y de economías campesinas familiares y comunitarias, que tuvieron diferentes expresiones en el campo político; en segundo lugar, por la acentuada pluralidad cultural, pues se trata de una sociedad en la que conviven la cultura occidental, industrial y cristiana, con las culturas aymaras, quechuas y tupiguaraníes; y, en tercer lugar, por las profundas desigualdades regionales producto de modelos de desarrollo diversos basados en las particularidades socio-geográficas.

Como resultado de este marco social, se desarrolló un espectro multifacético de movimientos sociales que se han constituído cuestionando y demandando al Estado. Estos movimientos no sólo han estado presentes en distintos momentos de crisis y de definición de la sociedad, en los innumerables conflictos y luchas, sino también en la memoria colectiva.

Asimismo, el Estado, además de ser el principal opositor referente, también ha sido un interlocutor permanente, asumiendo una actitud conservadora para mantener el *statu quo* político. Así, se pasó de oposiciones contra el poder oligárquico a oposiciones contra el poder del estado corporativo. No fueron ajenas tampoco las luchas contra potencias extranjeras; por eso también las luchas, especialmente obreras, tuvieron un marcado carácter antiimperialista.

EL MOVIMIENTO OBRERO

En los últimos 50 años, el movimiento obrero se desenvolvió en el marco de proyectos políticos diferentes: un proyecto nacional-revolucionario, uno socialista y otro democrático.

Estos tres proyectos, que se desarrollaron en tres situaciones distintas, nos permiten reflexionar acerca de los rasgos más importantes del movimiento minero boliviano: durante la revolución de 1952, su participación en un proceso de intensa lucha contra el Estado oligárquico, lo llevó a formar parte en la nueva institucionalidad revolucionaria; durante la crisis de fines de la década del 60, su influencia quedó demostrada con la formulación de un proyecto socialista de una Asamblea Popular, en 1971; y durante la apertura democrática, iniciada en 1978, su acción fue definitiva para la recuperación de este régimen.

Conviene destacar dos rasgos estructurales en el comportamiento minero. En primer lugar, su carácter de "masa aislada", en cuanto

los campamentos mineros constituyeron conglomerados modernos que vivían relativamente separados del resto del país y en donde se construyó una alta conciencia y practica de solidaridad entre sus miembros en base a relaciones primarias y afectivas y en segundo lugar, se desarrolló un sindicato revolucionario, no solo en términos de su auto representación política en la escena nacional sino por la permanencia de orientaciones radicales en función de metas de poder. Las diferentes Tesis políticas que planteo la FSTMB y la COB son importantes ejemplos al respecto.

a) La revolución de 1952

Los obreros y las capas medias, movilizados por el MNR, impulsaron acciones reivindicativas contra el Estado oligárquico que llegaron, en los años 50, a enfrentamientos callejeros en las ciudades. En el ámbito rural, los campesinos también estaban viviendo un proceso de movilización social y política a nivel regional y local.

De todos estos actores, el movimiento minero fue el más importante en el proceso de lucha y descomposición social y política de la dominación oligárquica. Dicho movimiento tenía en el sindicato su máximo nivel de expresión, aunque sus prácticas de oposición política se canalizaron a través de la acción partidaria.

En este sentido, la relación entre los sindicatos obreros y los partidos políticos fue peculiar y se caracterizó por la confusión de roles entre los sindicatos y los partidos, siendo la acción sindical dominante.

El proceso de lucha popular dirigido por el MNR se agudizó durante el sexenio anterior al 52, con enfrentamientos, huelgas, movilizaciones populares, resistencia clandestina, golpe militar y, finalmente, insurrección armada. El movimiento obrero, conjuntamente con otras fuerzas sociales, desarrolló las luchas, combinando varias formas de manifestación.

La ruptura revolucionaria se inició con un golpe de Estado el 9 de abril de 1952, alentado por cuadros político-militares del movimientismo y una fracción de carabineros. A convocatoria del MNR, obreros y organizaciones populares salieron a las calles y protagonizaron una insurrección popular urbana armada apoyada por otras ciudades del país, principalmente Oruro.

La revolución implicó el paso de un Estado oligárquico a uno nacional, bajo la dirección de una alianza política en la que obreros, campesinos y sectores medios y populares urbanos se vinculaban de manera contradictoria. Esta alianza se articulaba a través de relaciones entre el MNR, los sindicatos obreros y campesinos y otras organizaciones populares.

Pero en el seno de esa alianza fueron surgiendo una serie de conflictos con los sectores medios en torno a la forma de aplicación de las medidas nacionales y populares, lo que, a su vez, generó procesos de burocratización y de manipulación política del Estado hacia los sindicatos. La consigna era: "el MNR dirige y la COB vigila".

Producto de esta disputa interna, la aplicación y el desarrollo del conjunto de medidas nacionales y populares de la revolución no fueron fruto de una acción homogénea, aunque externamente el carácter de las medidas nacionales daba una imagen de unidad al bloque social.

El movimiento obrero, aliado al MNR, logró ampliar su participación en la sociedad gracias a la coincidencia con los cambios económicos, la nacionalización de la minería, el crecimiento de la masa sindicalizada y de los dirigentes sindicales, el fortalecimiento de la organización popular (nucleada especialmente en la COB), el mejoramiento relativo de las condiciones de vida y del consumo colectivo en general y la ampliación de los mecanismos de participación popular.

En este contexto, emergió un nuevo tipo de relación con el Estado populista-corporativo, basadas en la burocratización y la movilidad social de los dirigentes del MNR y su consiguiente separación de las bases.

La COB, en buena medida, se constituyó en una estructura piramidal de prebendas y manipulaciones políticas ante el profesionalismo de sus dirigentes, la reelección permanente de los controles obreros y de los dirigentes sindicales y su alejamiento de la práctica productiva. La incapacidad política y estructural de los sindicatos para imponer su hegemonía en la alianza impidió profundizar la democracia y los vínculos entre obreros y campesinos.

b) La Asamblea Popular

La crisis del modelo de coacción social y de diversificación económica del autoritarismo militar (a fines de la década del 60), y que culminó con la instalación de la Asamblea Popular, significó otro nuevo reto para el movimiento obrero.

En este marco, el proyecto militar nacionalista se enfrentaba tanto a la burocracia civil estatal como a las organizaciones sociales que demostraban el deterioro de un tipo de dominación político-social basada en la coacción. Estas organizaciones estaban lideradas por el movimiento obrero.

La Asamblea surgió luego de un proceso de agudos enfrentamientos políticos, generados

en el marco y de una fuerte debilidad institucional en el país.

El movimiento obrero impulsó, en esta nueva situación, una independencia de clase total con el objeto de evitar la experiencia de subordinación al Estado vivida durante la Revolución Nacional, y generó respuestas a través de un aparato sindical altamente ideologizado y más inspirado en enfrentamientos antagónicos y de fines últimos que en posiciones democráticas.

Junto al sector minero se aglutinaron en la Asamblea los obreros fabriles, de la construcción, ferroviarios, petroleros, gráficos, y los sectores medios (maestros, periodistas, estudiantes, profesionales y empleados), que defendieron su propia autonomía y el control de cuotas de poder dentro de la nueva instancia popular, aunque los obreros, particularmente mineros, eran los que mayor poder ejercían, demostrando su predominio y capacidad de dirección.

El movimiento obrero-minero, por intermedio de sus elites sindicales, monopolizaba las decisiones subordinando a los demás sectores sociales y políticos, en tanto los partidos políticos quedaron subordinados a la estructura y acción sindicales.

Así, la Asamblea, que era predominantemente obrerista en un país socialmente heterogéneo y fundamentalmente campesino, no asumió las reivindicaciones populares más amplias, lo que aisló al movimiento obrero del resto de la sociedad y le impidió constituirse en un órgano aglutinador de las más amplias capas sociales. Un abismo separaba a las propuestas y propósitos de la Asamblea de su capacidad de llevarlas a cabo.

c) 1978: la apertura democrática

La apertura democrática, iniciada en 1978, se dio en medio de un frágil campo institucional vinculado a la crisis del modelo de desarrollo. Aunque la fortaleza de las acciones y organizaciones del movimiento obrero quedó demostrada, los conflictos de esa época se resolvieron muchas veces por la coacción.

Sin embargo, es necesario destacar el renacer, durante este período, de diferentes expresiones de la sociedad civil y de mecanismos de solidaridad en el seno del movimiento obrero, y entre éste y el resto de los sectores populares.

El movimiento obrero fue el actor principal en las reiteradas acciones defensivas y en la conquista democrática. Las protestas y las luchas protagonizadas entre 1978 y 1984 dejaron en evidencia el alto grado de identificación con el régimen democrático que tenía este sector. La defensa obrera de la democracia ante varios

golpes de Estado es el mejor testimonio de su apoyo a la nación.

Sin embargo, la integración de las organizaciones sindicales (ya con mayor diversidad social) en un nuevo bloque político pluri-clasista fue conflictiva y se dio en medio de una gran crisis estatal. Asimismo, el desarrollo relativamente independiente del movimiento obrero, de alguna manera lo seguía aislando del resto de la sociedad.

Este movimiento tuvo distintos comportamientos de acuerdo a las coyunturas específicas vividas en este período:

- Al inicio de la apertura democrática, su acción fue más bien espontánea, en un contexto de reorganización sindical, política y social, que él mismo dirigió a partir de una lógica no únicamente clasista, sino más amplia. Este proceso se dio en el marco de un vacío político, pues los partidos aún no tenían suficiente fuerza. Las acciones lideradas por el movimiento obrero fueron sobre todo de carácter expresivo y solidario.
- Frente al golpe militar de julio de 1978, el movimiento obrero defendió el régimen democrático, recuperado luego gracias a la presión de los partidos políticos y otras fuerzas sociales. El movimiento obrero participó del proceso pero no fue el actor principal, subordinando su práctica más bien a la de los partidos. Su actitud más abierta, y no restringidamente clasista, lo acercó a los demás sectores sociales.
- Finalmente, la inestabilidad del régimen hizo que predominara el conflicto; en este contexto, el movimiento obrero se distanció de los partidos, fortaleciendo la práctica sindical a través de negociaciones directas con el Estado y las empresas.

Estos diferentes comportamientos demuestran no sólo la fortaleza del movimiento obrero sino su flexibilidad y ductilidad para adaptarse a las distintas coyunturas.

El movimiento étnico-campesino

El rasgo central que caracteriza al movimiento campesino en Bolivia es la superposición entre una orientación campesina clasista, otra étnico-cultural y una tercera ciudadana. En esta yuxtaposición han predominado una u otra orientación de acuerdo a las coyunturas histórico-regionales, lo que muestra la complejidad y el carácter político de este tipo de movimiento. Estas tres orientaciones se han combinado de la siguiente manera:

– Cuando el elemento articulador fua la clase, como en el caso de las orientaciones campesinas en el período del MNR (décadas del 40 y 50), la orientación étnico-cultural apareciñó como secundaria y la ciudadana como integrada y subordinada al proyecto nacional. Este tipo de orientación fue también muy fuerte en las propuestas políticas de partidos de izquierda marxista (tanto en sus versiones pro-china como pro-cubana). En estos enfoques el campesinado era parte de una alianza de clases (fuerza motiz) dirigida por la clase obrera o por la vanguardia guerrillera. Este tipo de orientación fue especialmente en Cochabamba (en los Valles Alto y Central) y también en el oriente (ejemplos son la Unión de Campesinos Pobres –UCAPO- y las guerrillas impulsadas por el Che Guevara).
– Cuando la orientación étnico-cultural predominó sobre la clasista o la ciudadana, el núcleo era el cuestionamiento al neo-colonialismo y la reconstitución de una identidad étnico-cultural arcana para, desde allí plantear tanto reivindicaciones de clase como de ciudadanía. Esto ha sido muy común en el caso del Movimiento Katarista, en la rebelión de Zárate Willca y otras en el Altiplano, el norte de Potosí y en los movimientos impulsados por el CIDOP en el oriente.
– La orientación hacia la defensa de derechos de ciudadanía política y social predominó sobre la clasista y la étnico-cultural en el período de apertura democrática, con demandas vinculadas a la descentralización y la participación popular y articulando desde allí las reivindicaciones clasistas y de reconocimiento de identidades pluriculturales en la nación. Parte del Movimiento Katarista y el propio CIDOP han impulsado este tipo de manifestaciones, especialmente en el período de transición democrática. Probablemente, la figura de Victor Hugo Cárdenas, ex Vice-Presidente de la República, está asociada a este tipo de orientación.

Históricamente, las orientaciones del movimiento campesino sobresalieron siempre en situaciones de definición político-social: en el proceso de Reforma Agraria iniciado en 1953, en la ruptura del Pacto Militar-Campesino y en el proceso democrático. Estos son los tres momentos que se analizarán a continuación.

a) Una reforma campesina

Luego de un largo período de luchas y protestas contra el sistema de hacienda en el que se enfrentaba a los grandes terratenientes y al poder oligárquico, en los primeros años de la

revolución de 1952, el movimiento campesino inició la ocupación directa de la tierra, fortaleció sus demandas de integración ciudadana mediante el voto, la educación y la participación política, y presionó a las distintas fuerzas en el poder del Estado para definir el carácter de la Reforma Agraria y la naturaleza de la revolución.

Este proceso fue dirigido por un vigoroso aparato sindical campesino, estructurado verticalmente en centrales, subcentrales y en la Confederación Nacional. Esta estructura generó intermediación, clientelismo y faccionalismo del movimiento campesino en su relación con el Estado y con el MNR.

El movimiento campesino fue un actor dinámico en el proceso revolucionario a través de alianzas con otros sectores sociales y de una estrecha relación con los sindicatos minero y fabril, aunque el sindicato campesino funcionó con mecanismos propios. Si bien los campesinos no participaron activamente en la lucha armada, tan pronto como el MNR asumió el poder se difundió la idea de que comenzaba una nueva era para los ellos.

Una muestra importante de voluntad política en este sentido, fue la creación del Ministerio de Asuntos Campesinos (MAC), dirigido por Ñuflo Chávez Ortíz, líder movimientista de izquierda, propulsor de la Reforma Agraria y de los sindicatos agrarios, bajo el postulado: "La tierra es de quien la trabaja".

El problema de la distribución de tierras fue solucionado provisionalmente con la firma del Decreto de Reforma Agraria, el 2 de agosto de 1953 en Ucureña, Decreto que, al mismo tiempo, legitimó al sindicato campesino como la organización interlocutora y legítima para iniciar el proceso de afectación de cada hacienda, que duró muchos años.

Luego de la Reforma Agraria de 1953, tres elementos incidieron en el comportamiento de este movimiento:

- La formación de un mercado interno que integró al campesino directamente a las relaciones de mercado a través de la producción y el consumo, desencadenando una compleja dinámica de diferenciación que tuvo como consecuencias procesos de descampesinización, semi-proletarización y recampesinización (este último debido a la colonización y a la diversificación de la economía campesina).
- La configuración del nuevo Estado, que se hizo cargo de las nuevas relaciones de mercado y desplegó prácticas de control social y manipulación política respecto al campesinado.

– El fortalecimiento de la identidad del sindicato campesino en la vida nacional, que fue, desde los primeros años de la Revolución Nacional, la principal organización de este sector. El alcance nacional del sindicalismo campesino se debió tanto a sus reivindicaciones de carácter económico-productivo (referidas a la propiedad de la tierra, a los precios de los productos y a una mejor negociación con el Estado) como político (referidas al auto-gobierno local). Esto se reflejó en la conformación de una estructura sindical nacional en la que las bases, que ejercían mayor presión para lograr estas reivindicaciones, se fueron distanciando de sus dirigentes, que tendían a ser cooptados por el Estado.

b) Del Pacto Militar-Campesino a una fuerza autónoma

Solucionado el problema de la demanda de tierras (que se dio con mayor intensidad en el Valle Alto de Cochabamba), la dinámica campesina se fue subordinando cada vez más a la lógica estatal. La máxima expresión de este fenómeno fue la firma del Pacto Militar-Campesino, a mediados de 1960, cuya consecuencia principal fue la pérdida de autonomía y la subordinación al Estado de las prácticas sindicales campesinas.

Entre 1968 y 1974 se inició un proceso de recuperación de las identidades del movimiento campesino, produciéndose la ruptura del Pacto Militar-Campesino. El movimiento empezó a enfrentarse al Estado y a los comerciantes usureros buscando recomponer su identidad social y cultural. Las luchas más ilustrativas de este cambio fueron protagonizadas por grupos aymaras en contra del impuesto único promovido por el General René Barrientos en 1968 y los conflictos contra el Estado como consecuencia del alza de precios decretada por el régimen militar.

Estos conflictos marcaron el inicio de un nuevo liderazgo sindical, la progresiva recuperación de la autonomía campesina y la apertura hacia el movimiento obrero y popular.

c) La recuperación democrática

Entre 1978 y 1984, el movimiento campesino se consolidó como una fuerza social independiente y autónoma, combinando demandas y protestas contra el Estado autoritario y contra las desiguales relaciones en el mercado. Su papel en las sucesivas recuperaciones de la democracia entre 1978 y 1982 fue crucial.

En ese contexto, surgió un nuevo Movimiento Katarista con orientaciones, valores y prácticas indigenistas, que reelaboraba la

identidad aymara y buscaba la auto-afirmación campesina.

La Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia cumplió también un papel central como expresión del nuevo sindicalismo, que expresó con claridad la autonomía de los intereses sociales del campesinado y, al mismo tiempo, postulaba la integración de intereses nacionales y culturales, pretendiendo una mejor inserción en la COB, pero sin perder su independencia frente a ésta, al Estado y a los partidos políticos.

LOS MOVIMIENTOS REGIONALES

Uno de los grandes problemas en Bolivia es que, salvo la identificación territorial de origen (Charcas), no se han consolidado otros principios cohesionadores de la sociedad. La creación misma de Bolivia, pese a ser un logro socialmente compartido, no fue percibida del mismo modo por la existencia de múltiples intereses regionales. El país también esta constituido por una suerte de " sociedades regionales" altamente diferenciadas cuyas élites muy a menudo han reivindicado intereses locales contra el poder central percibido casi siempre como distante y amenazador.

Es precisamente sobre la base de esta característica que se desarrollaron distintos y varios tipos de comportamiento regionales que de una u otra manera apretendieron modificar o incidir en la estructura de poder territorial. Sobre esta tendencia también se plasmaron una compleja red de alianzas entre unas regiones y el poder central y entre regiones.

Los liberales colocaron a la sociedad paceña como eje del poder central nacional hasta mediados de siglo. Mas adelante este proceso sufrió una serie de modificaciones que mas o menos equilibraron el poder en el denominado eje central compuesto por las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Los cambios producidos por la Revolución Nacional (el impulso al desarrollo agrario en el oriente, una cierta sustitución de importaciones y la política migratoria) configuraron un nuevo mercado interno relativamente integrado, lo que implicó una reorganización territorial. Como consecuencia se originó una nueva jerarquía regional y surgieron nuevos conflictos entre las regiones y el Estado en torno a demandas e intereses particularistas que pretendían obtener más recursos estatales y mayor poder.

El desarrollo de los movimientos vinculados al territorio no fue igual en todas las regiones.

Por ejemplo, en La Paz, las escasas demandas locales fueron permanentemente mitigadas por los conflictos de clase que suelen sacudir a la sede del gobierno, mientras que el Comité Cívico de Santa Cruz fue el que impulsó con mayor fuerza en el país este tipo de movimiento.

Estos movimientos, además de buscar una identidad propia ("cruceñismo", "cochabambinismo", etc.) y la diferenciación regional, en los últimos 50 años dejaron en evidencia el desarrollo de elites locales que vinculaban su constitución como clase con el logro de demandas regionales.

Tres momentos claves se distinguen en la evolución de los movimientos regionales: a) entre 1956 y 1960, período en que se producen conflictos regionales tanto de carácter intra-regional como con el Estado central, destacando los Comités Cívicos cruceños; b) entre 1971 y 1976, período en el que convergen el regionalismo y el autoritarismo; y c) entre 1978 y 1984, período caracterizado por la emergencia del regionalismo democrático, en el contexto de crisis del régimen autoritario.

a) La revolución

Como antecedentes a este período, las luchas del regionalismo cruceño contra el modelo de "enclave" y el centralismo político en el occidente del país se convirtieron en uno de los bastiones del MNR contra la dominación oligárquica. Pero después de 1952, se produjo una serie de conflictos entre el MNR y las elites regionales cruceñas debidos, entre otros factores, a las demandas regionales para asegurar el 11% de las regalías de petróleo, a la distribución de otros recursos del Estado y a las tensiones entre la organización emenerrista local y las elites dominantes. Estos conflictos llegaron, incluso, a enfrentamientos armados. Como resultado de ellos se legitimó el Comité Cívico cruceño, que logró el predominio casi absoluto en el manejo de la política regional.

En el resto del país, las pugnas entre las regiones y el Estado central se resolvieron a través del MNR o de otros partidos.

El proceso desencadenó una serie de "crisis regionales" que desembocaron en un juego de demandas regionales e intereses particularistas por los recursos del Estado y una nueva posición en la estructura social de poder.

b) El militarismo

Las fuerzas regionales apoyaron el golpe militar de 1971 cuestionando severamente al gobierno del General Torres, a quien veían como el portador del "comunismo extranjero".

Durante las dictaduras de la década del 70, las organizaciones cívicas regionales crecieron y se fortalecieron, dando legitimidad al régimen mediante un discurso "cívico", "apolítico" y "regionalista", aunque hubo algunas excepciones, como los paros cívicos realizados contra el centralismo del Estado autoritario.

Las características más importantes de los movimientos regionales de esos años fueron el amplio nivel de convocatoria (aunque la dirección de las acciones fue cerrada y estuvo centrada en las elites locales) y la oscilación entre las demandas al Estado (respecto a proyectos de desarrollo, destino de los recursos, etc.) y la defensa del régimen cuando éste era amenazado. Asimismo, destaca el nucleamiento de los Comités Cívicos de Sucre, Potosí y Tarija, en torno a una organización intra-regional (el Bloque Cívico del Sur).

c) Participativos y democráticos

La acelerada crisis de legitimidad del gobierno autoritario fue involucrando en el proceso de democratización a las fuerzas regionales, que empezaron a cuestionar el excesivo autoritarismo y el exacerbado centralismo y a reivindicar, desde 1978, la democracia desde una perspectiva anti-partidaria y anti-militar. En ese contexto, los movimientos regionales se sumaron a las protestas populares contra la dictadura de García Mesa.

En los 80 y 90, los movimientos regionales han experimentado varios cambios. Se registra una mayor participación en sus niveles de dirección debido, sobre todo, a la adscripción de organizaciones populares obreras, urbanas e, incluso, campesinas y provinciales, que antes del proceso democrático habían sido marginadas de los Comités Cívicos.

Las organizaciones regionales -que ahora se agrupan en un organismo nacional- fueron cambiando la forma de impugnar el centralismo del Estado, enfatizando un proceso de participación social cuya meta era la descentralización y el reconocimiento en tanto movimientos de carácter nacional a partir de orientaciones y objetivos que involucren a, y repercutan sobre, un ámbito socio-espacial que trascienda su propia región.

IV. FIN DE SIGLO

La instauración del denominado régimen neoliberal está íntimamente vinculada con la crisis del Estado corporativo, con las políticas de estabilización y capitalización (léase privatización) de las principales empresas estatales,

con la derrota política de los movimientos populares y con la globalización de la economía y la cultura a escala internacional.

La globalización tiene su núcleo fundamental en las transformaciones tecnológicas y científicas y sus efectos, en tiempo real, sobre la economía y la vida cotidiana de las personas y las comunidades.

El país ya está integrado a los procesos de globalización, pues el eje de la actividad económica son las empresas transnacionalizadas; además, la integración al mercado y a la industria cultural globales es un dato cotidiano. La cuestión que se plantea es si esa integración será pasiva o proactiva. Si es proactiva, la pregunta que atañe al texto es saber qué papel jugarán los viejos y nuevos actores sociales.

Las reformas estructurales afectaron también al mismo Estado, tanto en el plano productivo como institucional, sin lograr empero modificar seriamente las estructuras clientelares y burocráticas entre el Estado y la sociedad. El propio sistema de partidos políticos funciona como un sistema de intermediación clientelar, pero sin una base económica que lo sustente, lo que además de afectar los ya bajos niveles de credibilidad por parte de la población, plantea nuevamente un tema de reforma política.

El conjunto de todos estos procesos aceleró las brechas sociales en el país, fragmentó a los grandes actores históricos y produjo una explosión de nuevos conflictos sociales. En este ámbito, si bien el fraccionamiento de la acción colectiva es un dato empírico, se produjeron dos tipos de comportamientos colectivos. Por una parte, los viejos actores y movimientos sociales disminuyeron su capacidad de acción política y sus luchas fueron más bien defensivas o reactivas a las políticas neoliberales, teniendo siempre, sin embargo, presencia en las calles y cuestionando la legitimidad de los sistemas de representación política.

Por otra parte, emergen nuevos actores sociales que plantean demandas más socio-culturales, puntuales, muchas veces orientadas hacia cambios en la vida cotidiana más que hacia la toma del poder político. El caso de nuevos actores como el movimiento de mujeres y la reivindicación de sus derechos a la diferencia y a la participación y los nuevos movimientos étnico-culturales en el oriente por la defensa de sus territorios y sus derechos de participación ciudadana.

A nivel general, y de manera transversal en el conjunto de la sociedad, varios de estos actores y la misma opinión pública nacional,

han planteado una demanda crucial respecto al futuro político-institucional de Bolivia: el tema de la ética en la política y el tema de la ética en la sociedad. También es posible visualizar a lo largo y ancho del país una serie de reivindicaciones de participación local.

Sin embargo, hay una serie de actores regionales en los distintos departamentos del país que se están planteando metas más generales, asociadas con los temas de la globalización y la reconstitución política nacional. Seguramente estos actores jugarán un papel político decisivo en el futuro de Bolivia.

Sin embargo, la cuestión más importante a fin de siglo sigue siendo el de la integración social y, más particularmente, el de la pobreza. Si las brechas sociales y la pobreza continúan creciendo el mismo futuro del país, al menos en términos democráticos, está en duda. La cuestión es saber, por un lado, si los pobres podrán convertirse en actores y, por otro, si la nación enfrentará la lucha contra la pobreza como una lucha nacional y como un bien público. Este es el gran desafío del futuro que en verdad, a pesar de múltiples esfuerzos y logros, fue planteado 100 años atrás por el movimiento iniciado por Zárate Willca. El tema, pues, de la justicia social aún está pendiente.

BIBLIOGRAFÍA

Albó Xavier 1979 "¿Bodas de plata? o réquiem para una reforma agraria". *Cuadernos de Investigación CIPCA*, Nº 15. CIPCA: La Paz.

Almaraz Paz Sergio 1980 *Réquiem para una República*. Los amigos del libro: La Paz. (2ª ed.)

Arauco María Isabel 1984 *Mujeres en la Revolución Nacional: las Barzolas*. Cinco: La Paz.

Barnadas Josep 1973 *Charcas. 1535-1565. Orígenes históricos de una sociedad colonial*. CIPCA: La Paz.

Calderón Fernando 1982 *La política en las calles. Ciudad, desarrollo y Estado en Bolivia: 1952-1978*. CERES: Cochabamba.

Calderón Fernando y Dandler Jorge (Comps.) 1986 *Bolivia: La fuerza histórica del campesinado*. UNRISD-CERES: La Paz. 2ª Edición.

Calderón Fernando y Laserna Roberto (Comps.) 1983 *El poder de las regiones*. CERES-CLACSO: Cochabamba.

Condarco Morales Ramiro 1983 *Zárate, el "temible" Willca. Historia de la revolución indígena en la República de Bolivia*. Renovación: La Paz. (2ª ed.).

Dankerley , James 1987 *Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982* (La Paz: Quipus).

Laserna Roberto (Comp.) 1985 *Crisis, democracia y conflicto social*. CERES: Cochabamba.

Lazarte Jorge 1989 *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia (Historia de la C.O.B., 1952-1987)*. ILDIS: La Paz.

Malloy James 1989 *Bolivia: La revolución inconclusa*. CERES: La Paz.

Medina Echavarría José 1973 "El problema social en el desarrollo económico de Bolivia". En: CEPAL, 1978, *El desarrollo económico de Bolivia*. CEPAL: Santiago de Chile.

Montaño Virreira , Sonia y Sanz Ardaya, Mariana 2009 "Movimientos sociales de mujeres. El feminismo" en Calderón, Fernando (comp.) 2009 *Movimientos socioculturales en américa latina Ambientalismo, feminismo, pueblos originarios y poder empresarial Cuaderno de Gobernabilidad Democrática 4* (Buenos Aires: PNUD/Siglo XXI).

Perez Elizardo 1962 *Warisata: la escuela-ayllu*. Empresa gráfica Industrial Murillo: La Paz.

Rivera Silvia 1984 *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua en Bolivia, 1900-1980*. Hisbol-CSUTCB: La Paz.

Roca José Luis 1999 *Fisionomía del regionalismo boliviano*. Plural: La Paz. 2ª Edición.

Romero Salvador 1973 "Movimientos sociales campesinos en Bolivia". Tesis Doctoral. Ecole Pratique des Hautes Etudes: París.

Gordillo José M. (Coord.) 1997 *Arando en la historia. La experiencia política campesina en Cochabamba*. CERES-UMSS-Plural: La Paz.

Zabaleta Mercado René 1983 *Las masas en noviembre*. Juventud: La Paz.

Muralismo y revolución nacional*

En realidad todos se han ido
aunque en verdad todos se han quedado
César Vallejo

Fernando Calderón: Bueno, Javier, veamos lo que serán estas dos conversaciones que tendremos sobre el arte y la Revolución nacional. Me parece que queremos observar la Revolución del 52 desde la estética, y ver si así podemos reconstruir una visión propia y reveladora de este conflictivo acontecimientos que marca el desarrollo de la modernidad boliviana. Yo diría que esta experiencia estética puede ser entendida como una producción incierta de significados. Por tanto, me parece que a la misma Revolución le costó mucho crear su propio patrimonio cultural, es decir, el desarrollo de una "cultura nacional". Creo, entonces, que el objetivo de estas dos charlas sobre la conflictiva naturaleza de la cultura de la Revolución nacional, es traer a la mesa de discusión todos esos elementos que aparecieron en nuestra memoria desfigurados, ocultos, fantasmagóricos. Es ahí que adquieren relevancia histórica los murales de la Revolución del 52. Hasta donde he podido reconstruir, resultan ser más o menos sesenta murales. También discutiremos, en una conversación posterior, ciertas obras literarias que muestran aspectos interesantes del acontecimiento histórico que tratamos. Habría que decir que, como tú bien sabes, hemos intentado trabajar "Los muertos están cada vez más indóciles", el cuento de Medina Ferrada, pero nos hemos pasado un par de meses tratando de ubicarlo en biblotecas tanto de Bolivia como del extranjero ¿Qué te sugiere el hecho de que no podamos encontrarlo?

* Publicado en el libro *El gato que ladra*, escrito con Javier Sanjines. (La Paz: PLURAL editores) en 1999.

Javier Sanjinés: Fernando, déjame que revise los diferentes aspectos de tu comentario introductorio. En primer lugar, me parece que aciertas en comenzar el diálogo con la necesaria reflexión de las relaciones entre el arte y la Revolución nacional. Noy hay duda de que existen pocos trabajos que se concentren en la Revolución desde la estética y no sólo desde la ciencia política. Y esto implica, en mi parecer, la necesidad de estudiar el comportamiento emocional de escritores y artistas ante la crisis que produce toda revolución. Recuerdo aquí que René Zavaleta Mercado solía decir que toda revolución es para sus clases medias como un cataclismo para la naturaleza. La manera cómo estos artistas perciben el hecho revolucionario; cómo resuelven estéticamente el dato histórico, tiene, en mi parecer, mucha relación con la creación de símbolos que ayuden a consolidar lo social como un "nosotros" colectivo. Y estos símbolos, nacidos de la pintura o de la literatura, orientan nuestro actuar social cotidiano. Pero, ¿qué pasa, como tú lo dices, cuando los significados son deficitarios, y cuando los símbolos se transforman en hechos estéticos desfigurados y fantasmagóricos? Mi teoría acerca de lo grotesco tiene mucho que ver con los significados deficitarios de la Revolución y con la desfiguración estética de lo hechos sociales. Me parece, sin embargo, que el muralismo es la forma estética vanguardista mejor ligada a la Revolución nacional. Este mismo vanguardismo resulta poco explorado por la literatura. Fernando, te dejo a ti la tarea de plantear al muralismo como hecho estético de la Revolución. Pero, volviendo a tu comentario anterior, es indudable que lo desfigurado y lo fantasmagórico son elementos importantes de observación de la literatura nacional posterior a la Revolución del 52. Y respondiendo a tu pregunta, creo que lo fantasmagórico se manifiesta de manera reveladora en el hecho de que no podamos conseguir ese cuento posrevolucionario. Existe la novela con el mismo nombre, que se publicó a fines de los 60, y que, si mal no recuerdo, ganó uno de los premios Casa de las Américas. Pero el cuento de Medina Ferrada anda escondido y teje su propia historia. Lo hemos ubicado en los depósitos de la Hillman Library de la Universidad de Pittsburgh, pero ya no hemos podido ver si está o no en la Benson Library de la Universidad de Texas.

F.C.: Lo que dices, Javier, tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿por qué, hoy día, en pleno 1998, dos amigos y colegas quieren, desde la estética, hacer la relectura de uno

de los actos claves de la modernidad en la historia de la Bolivia contemporánea? ¿por qué comienzan el diálogo con el muralismo y el cuento de la Revolución? Mira, Javier, los puntos de partida estéticos que hemos privilegiado en este diálogo acerca de la modernidad boliviana están absolutamente desfigurados: los murales han sido destruidos, olvidados o encerrados, y el cuento de Medina Ferrada que dio la primera idea para la realización de estos diálogos--que, como tú sabes, los hacemos los días domingo, subiendo y bajando montañas--no está en ninguna biblioteca de La Paz y lo hemos localizado en un sucucho escondido de una biblioteca de la Universidad de Pittsburgh.

Creo, también, que el tema abre otras interrogantes. Se trata del hecho de que dos personas como nosotros, nos dediquemos a explorar hechos intrascendentes para la economía de mercado y para la ciencia política"esquelética", como tú la llamas. Pero dejando de lado a los serios y a los emprendedores, creo que la reflexión de estos temas aparentemente irrelevantes tiene mucho que ver con la memoria que combate al olvido, como lo discutiremos en un diálogo posterior, y también cuando realicemos el diálogo sobre el diálogo, al final de este nuestro libro.

J.S.: Bien, ¿cómo ves tú los orígenes, el desarrollo, y los significados del muralismo como hecho estético relevante de la modernidad en Bolivia?

F.C.: Una primera reflexión sobre el muralismo nacido en las minas de Oruro, con Miguel Alandia Pantoja, y en Sucre, con Walter Solón Romero y el grupo Anteo, es que éste busca la integración del adentro y del afuera. Aún más, yo diría que el afuera permite buscar el adentro, produciéndose así la construcción de significados del mundo moderno. A mi juicio, se trata de los significados de la modernidad que están relacionados con otro tema, el del mito nietzcheano del eterno retorno. En otras palabras, el significado o los significados de la Revolución tienen que ver con su voluptuosidad y con su destino trágico.

J.S.: Como si los excesos de la Revolución se la devoraran.

F.C.: Algo así, pero déjame explicarte mejor eso del "adentro" y del "afuera". Tanto en la tradición estética, como en el proceso histórico, resulta imposible entender la producción de los muralistas bolivianos sin tomar en cuenta a los tres grandes mexicanos: David Alfaro Siquei-

ros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. La influencia de estos muralistas en la pintura latinoamericana se extiende desde México hasta Chile. Pero es en Bolivia que, debido al acontecimiento revolucionario, los muralista mexicanos tienen su mayor impacto. Los tres grandes muralistas se vinculan, por otra parte, con la pintura norteamericana. Existe, por ejemplo, una muy interesante literatura que explica la influencia que Siqueiros, Rivera y Orozco tuvieron en la historia del arte norteamericano. Como bien sabes, el hecho estético que más resalta, aún más allá de la historia de los murales censurados en el Rockefeller Center de Nueva York, es la influencia que el muralismo mexicano tuvo en el gran pintor norteamericano Jackson Pollock, quien innovó materiales y técnicas a partir de las enseñanzas de David Alfaro Siqueiros.

En el caso boliviano, la influencia del "afuera" mexicano se da con la relación directa y permanente entre Alandia Pantoja y Diego Rivera. El mexicano estuvo de visita, viendo los murales en La Paz, particularmente los del Palacio de Gobierno y los del Palacio Legislativo, que fueron después destruidos. En una relación de estos acontecimientos, Elena Poniatowska dice que Miguel Alandia Pantoja supo trascender a sus maestros y sintetizar la estética de los tres muralistas mexicanos. Esto es lo que yo llamaría el "acontecimiento de afuera".

J.S.: Pero se dan también en el muralismo expresiones locales, que tú llamarías de "adentro".

F.C.: Sí, querido Javier, pero debo también indicarte que es el propio Octavio Paz quien dice que el muralismo mexicano sólo puede descubrir sus raíces vernaculares desde "afuera". Al seguir esta teoría del recientemente desaparecido escritor laureado, compruebo que el "adentro" del muralismo mexicano sólo puede ser explicado gracias a su vinculación con el movimiento modernista europeo. No hay manera de desligar, por ejemplo, a Diego Rivera de Gaugin y del surrealismo europeo. En otras palabras, es interesante la tesis de Octavio Paz que para poder descubrir el "adentro" hay que hacer el viaje desde "afuera".

Reproduciendo esta figura para el caso boliviano, podríamos decir que la mirada universal del arte moderno que trae el muralismo mexicano, es la que permite a nuestros pintores explorar la tradición vernacular, guiados por ese otro grande nuestro, Cecilio Guzmán de Rojas, quien también logra una síntesis entre lo universal y lo vernacular. Gaugin está presente y,

fíjate bien, Cezzane también influencia las figuras clásicas de Alandia Pantoja. Podría incluso añadir que muchas de las figuras de Walter Solón tienen que ver con la pintura de Velázquez. Esos rostros esqueléticos, de bellos reflejos, y de una luminosidad tan atrayente, pueden también ser encontrados en Solón Romero. Y si esto es así, entonces los nuestros también pasan a ser pintores clásicos porque hacen retratos de sí mismos a partir de un viaje crítico hacia el pasado universal. Yo diría que, de alguna manera, podemos plantear la hipótesis de que lo moderno en Bolivia sólo se descubre gracias a la modernidad europea que pasa por México y su Revolución. De este modo. . . .

J.S.: Pará un ratito, Fernando, porque lo que acabas de afirmar es muy apropiado para los procesos modernizadores que introducen sus reformas desde "afuera" con un costo social también elevado. Afirmar, como lo hace Octavio Paz, que sólo podemos descubrir nuestro "adentro" desde el "afuera" occidental y europeo, lleva a posturas homogenizadoras harto conflictivas. Una de tales posturas, cultivada por los procesos estéticos de la modernidad, es el mestizaje ideal que aparece en las pinturas de Cecilio Guzmán de Rojas, a quien tú mencionas. Concuerdo con tu análisis, pero cuestiono el "efecto social" de estas posturas ideales, homogéneas, que tantos problemas nos han causado. El "Cristo Aymara", de Guzmán de Rojas, por ejemplo, muestra toda la energía indígena que Franz Tamayo alaba en la *Creación de la pedagogía nacional* . Pero si el indio es el depositario de esta energía, éste debe adquirir la lengua española y transformarse en el Calibán culto y mestizo, del que habla críticamente nuestro amigo Roberto Fernández Retamar cuando refuta al arielismo latinoamericano. Se trata, pues, de un mestizaje homogéneo, idealizado, guardián de esa herencia europea que descubre lo vernacular. Me parece que aquí nace el "aura" de la modernidad boliviana, "aura" que marcará a todos nuestro intelectuales, incluso a Carlos Montenegro, en la década de los cuarenta, quien, como todos sabemos, influye en la construcción del nacionalismo revolucionario. Y este "aura" al que me refiero está en "El Cristo Aymara", de Guzmán de Rojas. Observa, Fernando, esa idealización romántica que Guzmán de Rojas hace del indígena. ¿No te parece conflictiva? Al ver su cuadro, no puedo apartarme del símbolo ideal, de la realización de la "idea" en la obra de arte. Idea quiere decir, como bien sabes, lo trascendente, lo absoluto, lo atemporal. El mestizo idealizado no está presente sólo en la obra ar-

tística; ésta, por el contrario, sirve también de vehículo para el mensaje social que brilla en su homogenizadora totalidad. "El Cristo Aymara" es un indígena transfigurado, de radiante plenitud, apoteósico. Y lo que me parece problemático es que esta radiante plenitud distorsione la realidad, bañándola de un dudoso fulgor. A pesar de su fuerza estética, estas visiones idealizadas son, en mi criterio, conflictivas porque desdibujan la memoria del oprobio, del pasado colonial no superado. Por ello, no celebraría tanto ese "afuera" condicionante del "adentro", aunque comprendo su función estéticamente revolucionaria.

F.C.: Sin embargo, Javier, no te olvides que el muralismo es una relectura crítica del proceso histórico interno que saca a luz lo que estaba oculto. Ciertamente, este proceso interno revela la historia de la negación del otro, de su distorsión, como tú prefieres llamarla. Y esta negación es una constante en el país. Tradicionalmente, la estética ha negado la historia de los dominados, a quienes sólo se les reconoce el nivel folclórico que, en última instancia, ratifica y refuerza la dominación. Yo, sin embargo, no sería tan radical como tú con el proceso estético revolucionario. Lo que hago es tratar, y recalco la palabra tratar, de reconstruir el proceso histórico del 52, y de encontrar belleza en aquello que estaba condenado, para expandirlo y exponerlo en su máximo nivel de creación. De este modo, la Revolución pasa a ser una búsqueda de sus propias raíces, de su propia historia, tornándose bello ese otro que la historia denigró o condenó. Guste o no, la Revolución del 52 es nuestro primer acto de modernidad. El muralismo es un acto profundamente "vital" que, como la pintura de Alandia Pantoja, tiene movimiento y vida. Es un deseo pleno de voluptuosidad donde todo el proceso creativo se va transformando constantemente. Quizás por eso Diego Rivera veía en Alandia Pantoja no sólo su propia proyección, sino también la de Siqueiros y la de Orozco. A diferencia de lo que tú lees en el Cristo de Guzmán de Rojas, yo te diría que los Cristos de Alandia Pantoja son más gárgolas que Cristos, y pueden ser leídos como procesos de inversión crítica del poder.

J.S.: Sin duda que los "adentros" y "afueras" tienen una función estética revolucionaria muy importante en el proceso que va del modernismo al vanguardismo. Hay un vanguardismo 'interno", centrípeto; otro "externo" y centrífugo. Este último, el centrífugo, es plenamente europeo porque busca anexarse a lo univeral. Es el vanguardismo de Vicente Huidobro. Su *Altazor*

es una búsqueda incesante de significantes que abandona lo local, lo americano, para generar un lenguaje universal totalmente nuevo. El movimiento centrípeto, sin embargo, que se ubica más próximo a la dialéctica entre el "adentro" y el "afuera", es el vanguardismo de Vallejo y de Neruda. Creo que tus reflexiones van ligadas a este proceso de síntesis entre lo universal y lo local, entre lo europeo y lo americano.

F.C.: Sería interesante que apliques tus observaciones al caso boliviano. En nuestra realidad estética, hay también una dialéctica entro lo "centrífugo" y lo "centrípeto". Fíjate, por ejemplo, que no se puede leer a Alandia Pantoja sin la producción de María Luisa Pacheco. Ambos son producto de la Revolución del 52. María Luisa, naturalmente, con una tendencia abstraccionista que se acerca más al vanguardismo centrífugo que tú examinas, con ausencia de figuras humanas definidas en su pintura. Me parece que en María Luisa Pacheco lo humano se naturaliza. En Alandia Pantoja, por el contrario, la corriente centrípeta hace que la naturaleza humanice. Si ves bien, debajo de los cerros y de las banderas de Alandia Pantoja hay seres humanos vivos. Y esta reflexión me lleva nuevamente a la Revolución como acto estético crecientemente naturalizado y como acto constantemente humanizado.

Para mí, la Revolución es por definición múltiple y catársica. Y, en mi entender, su destino está ligado al destino de sus productos estéticos. María Luisa Pacheco no tuvo, lamentablemente, mayor trascendencia en la sociedad boliviana; por su parte, los murales de Alandia Pantoja fueron destruidos, ocultados, volviéndose auntenticos fantasmas de la Revolución.

J.S.: La Revolución como un acontecimiento fantasmagórico, de destrucción y olvido. Este acontecimiento, me parece, viene significativamente ligado al hecho de que se nos pierden los objetos de estudio en los depósitos de las bibliotecas.

Quisiera, ahora, que reflexionásemos otro de los aspectos vitales al estudio del muralismo. Has hablado de la influencia del muralismo mexicano, pero ¿qué podrías decirnos acerca de la conexión entre el muralismo y el mundo industrial andino, mundo sin el cual tampoco puede entenderse esta manifestación estética?

F.C.: No podemos desligar al muralismo de la minería. Alandia Pantoja no se explica solo. Su universo es el de la mina, del campamento minero, del interior mina y de su vinculación con el mundo externo. Esta relación significa

todo un mundo de comunicación y de intercambio cultural. La mina es el lugar de socialización del mundo industrial moderno; de interacción entre la cultura, el deporte, la maquinaria y la idea del progreso. Y mira que la misma noción de progreso es ambigua porque relaciona al polo burgués con la noción profundamente proletaria que asocia al progreso con la liberación.

Por ello me parece que el acto estético del muralismo tiene su base material en la sociabilidad minera. No puede entenderse sin el poder de los sindicatos, sin la tradición de lucha de los mineros, definitivamente moderna. Uno de los fundadores de la sociología latinoamericana, José Medina Echavarría, decía que el grupo social más moderno en Bolivia era el minero.

Miguel Alandia Pantoja participó tanto del trotskismo como del nacionalismo. En este sentido, Alandia Pantoja expresa y sintetiza, en el plano ideológico, ese movimiento entre lo universal y lo vernacular. Al igual que Diego Rivera, fue el pintor oficial de la Revolución. Pintó murales en los espacios simbólicos del poder: en el Parlamento, en el Palacio de Gobierno, en Yacimientos; también en sindicatos y en hospitales. A su vez, Alandia era el pintor de la ideología trotskista como militante del POR, moviéndose así entre el nacionalismo del MNR y el internacionalismo del POR. Este movimiento en el plano de las ideas también se da en el de la producción estética. En efecto, Alandia se mueve entre el realismo de la tradición local y el expresionismo que le viene de afuera. Quiero aquí rescatar "La imilla", uno de sus cuadros más famosos, el mismo que se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Este cuadro, profundamente clásico, podría ser "La Mona Lisa"del mundo andino.

Alandia Pantoja, por tanto, reinterpreta los códigos nacionales en un código universal. En su pintura sa dan los cruces de tiempos históricos que retoman lo mejor de la tradición boliviana y la ubican en el movimiento universal de la producción estética de los años 20. Ese es, pues, el gran aporte de Alandia Pantoja, el único pintor boliviano plenamente reconocido en las mejores historias de arte, como, por ejemplo, en el libro de Edward Lucy Smith. Pero fíjate, Javier, lo curioso no es que haya sido reconocido fuera, sino que haya sido ignorado dentro de su propio país. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el destino de la Revolución. En México, el poder burocrático se apoderó del muralismo; en Bolivia, lo olvidó.

J.S.: Hablas de un realismo expresionista ¿Cómo lo conjugas con el muralismo mexica-

no, el abstraccionismo y el mundo industrial andino? En mi criterio, la relación de todos estos aspectos se da también en la obra de Walter Solón Romero, otro de los altos exponentes de este realismo. ¿Qué dirías tú al respecto?

F.C.: Hay una relación estrecha entre el vanguardismo postulado por el movimiento estético del Café Voltaire, es decir, por el movimiento surrealista francés de los años 20, y la noción de vanguardia política. En su forma más burda, esta relación está trabajada por el pensamiento marxista-leninista; en su forma más elaborada, es decir, sofisticada, en el pensamiento de Antonio Gramsci. Las vanguardias, en mi criterio, son la prefiguración consciente de lo posible. Son la conciencia en embrión; el movimiento que permite el paso del "en sí" al "para sí". Desde el punto de vista del movimiento estético, el surrealismo pretendía desestructurar la realidad existente y construir una nueva desde lo onírico. En este sentido, creo buena tu pregunta en torno al realismo expresionista y a la obra de Alandia Pantoja y de Sólon Romero. Con las diferencias del caso, las respuestas estéticas de ambos fueron muy parecidas. No te olvides que Solón Romero estuvo vinculado a las corrientes soviéticas y al stalinismo; Alandia Pantoja, al trotskismo. Ambos estaban inspirados en la idea vanguardista de que la estética prefigura el porvenir.

Como ya lo discutimos antes, esta vanguardia buscó ligar lo vernacular con lo universal. El nacionalismo con el stalinismo y el trotskismo. No importa ya si dicha vanguardia es nacionalista o trotskista; tampoco importa si toma el expresionismo francés o la tradición vernacular de Guzmán de Rojas. Lo que importa es el salto final, el acto estético universalizador. No exiten, pues, culturas puras, y todas se hacen en relación a otras. Y eso es lo fantástico, ¿no te parece?. Cuándo y cómo lo logran es ya otro problema.

J.S.: Reforcemos ahora la relación entre lo vernacular y lo universal en el acto vanguardista. Tus observaciones me hacen recuerdo a César Vallejo.

F.C.: En Vallejo, el universalismo antecede a su endogenismo, aunque, al revisar cualquiera de sus obras poéticas, sea en *Trilce* o en sus *Poemas Humanos* , por ejemplo, siempre hay una constante que retrabaja lo vernacular desde lo universal. Creo que ahí está lo maravilloso de Vallejo: siempre pone la nota irónica de impotencia en su trabajo. "Hoy hablaba de mí conmigo y he colocado sobre un pequeño libro

un pan tremendo". Su poesía es de una tensión permanente entre lo no posible y lo deseado.

J.S.: Pero, en Vallejo, lo universal también está trabajado desde lo vernacular. Cuando digo esto, no me fijo tanto en su poesía como en su obra en prosa, la que es poco conocida porque sufre un olvido voluntario. En *Tungsteno* o en *Colacho Hermanos*, supuestamente obras menores que "empañan" el brillo de su poesía, Vallejo reinterpreta la modernidad desde farsas y tragedias peruanas. En otras palabras, y como Guido Podestá nos lo revela en sus trabajos sobre el anacronismo y la modernidad en el teatro de Vallejo, éste piensa en una modernidad insertada en imágenes construidas del Perú. Fíjate, querido Fernando, que Vallejo no es el literato vanguardista oficial, como Huidobro, quien se inserta en la universalidad francesa rindiendo pleitesía a la corte del "rey burgués". Vallejo llega a París vía España. Todavía no se ha dado la liberación de Argelia, y la presencia del extranjero es respondida con el aumento de las fobias locales. Vallejo no llega, como lo hacen Vicente Huidobro o Alfonso Reyes, a la Sorbona o a la Ecole des Hautes Etudes. Vallejo es un "méteque" sin empleo. Este "obrero peruano" adopta a Firpo como figura propia, creando así un leitmotiv para el intelectual marginal, el "intelectual firpero". Recordarás, querido Fernando, que Firpo no era un boxeador elegante, como Georges Carpentier, ni técnico, como Jack Dempsey. Firpo era el pegador excéntrico, de estilo heterodoxo, con una fenomenal mano derecha. Vallejo adopta su estilo, su "desprecio activo" de lo burgués. Como tú observas en Alandia Pantoja y en Solón Romero, Vallejo se hace simultáneamente marxista y dramaturgo. Es casi imposible distinguir uno del otro. De ahora en adelante no abandonará ninguna de estas dos vocaciones. Pero el dramaturgo invade con sus dramas el territorio de la modernidad francesa y el espacio de la lengua, que los franceses consideran sagrado. Sus "dramas parisinos" son rechazados porque el "méteque" intruso no domina la fonética de las palabras. Terco, arrogante, chaplinesco, "parado" y en sus "momentáneos pantalones", Vallejo logra trabajar la modernidad francesa desda la anacronía peruana. Pero, como los actos estéticos vanguardistas revolucionarios que hemos repasado en este diálogo, su obra teatral también desaparece por largas décadas. El desconocimiento u olvido de su obra teatral, al igual que los murales nuestros, es voluntario.

Pero retornemos a Alandia Pantoja y a Solón Romero. No quiero dejar inexplorada la relación entre el muralismo y la sublimación

estética. ¿No crees tú que los quijotes espiritualizados de Solón Romero, relacionados con el tema de la dictadura, tienen una función sublimante más acentuada que la pintura de Alandia Pantoja?

F.C.: Creo que esa función sublimante está en ambos pintores. Te propongo mirar los murales de la Revolución que, lamentablemente, se están descascarando en el Monumento a la Revolución Nacional de la Avenida Busch.

En el centro del gran mural, en la parte de Alandia Pantoja, está la síntesis de la historia de Bolivia y de la humanidad. En la figura central, un cóndor, y, a los lados del cóndor, cobijados bajo sus alas, dos mineros a un lado y dos campesinos al otro, los cuatro de origen indígena. Encima del cóndor hay una figura humana descuartizada por una red nuclear y, debajo, el imperialismo aplastado por el mismo cóndor. En este mural, la primera cosa que me llama la atención es que la figura del cóndor está vinculada a la interpretación que Chipana Ramos tenía de la Revolución. Chipana Ramos, presidente del Primer Congreso Indigenal, el año 46, decía que la Revolución es "como el cóndor viejo que nos protege con sus poderosas alas. Tenemos pechos de bronce pero no sabemos nada". Creo que Alandia Pantoja construye, con suma inteligencia, la figura del cóndor como símbolo del poder, o del contra-poder de la cultura andina, cóndor que defiende en su seno a la sociedad emergente y autoliberada, es decir, a los obreros y campesinos indios. Encima del cóndor está la figura prometéica que , a mi entender, es Tupaj Katari. De este modo, mi enterpretación es que, a pesar de la Revolución, el progreso siempre va a descuartizar a quien se levanta.

J.S.: Me llama mucho la atención esa afirmación de Chipana Ramos. Antes de que continúes con tu interpretación de este mural, déjame decirte que ese "aquí no sabemos nada" es el leitmotiv de gran parte de la producción literaria posrevolucionaria. Qué paradoja ésta. Toda una Revolución triunfante termina en la conjetura, el enigma y la duda. Y lo que tu interpretación me está diciendo es que el cóndor, símbolo de nuestra cultura, está, como Oscar Cerruto diría, "en lo alto detenido", protegiendo pero no alumbrando. Mira, Fernando, la sublimación está, en mi criterio, algo menoscabada.

F.C.: Lo que pasa, Javier, es que la sublimación va ligada al sacrificio. El mural tiene un tono de sacrificio que es recurrente; aparece también en otros murales, lo que me recuerda al mito

nietzscheano del eterno retorno. Nuestra cultura revolucionaria es una cultura de sacrificio que revela otro aspecto de la modernidad: la soledad.

J.S.: Quizás la soledad en comunidad. Creo que las similitudes con Solón Romero se tornan ahora más visibles.

F.C.: Observa que esa figura descuartizada, prometéica y katarista, es también quijotesca. El Quijote de Solón Romero es también Tupaj Katari, y éste es el Prometeo de Alandia Pantoja. El estilo de Solón Romero es, sin embargo, diferente, influenciado por la pintura de José Clemente Orozco. Las figuras de Solón Romero son más trágicas y me recuerdan al Renacimiento español. La figura del Quijote obsesiona a Solón Romero. Esta tríada Quijote/Tupaj Katari/Prometeo confluye en la Revolución nacional porque no pudo darse en otro tiempo. Solón Romero pinta Quijotes idénticos desde los años 50. Creo que nos quiere decir que el tiempo verdadero se ha detenido en esa década de la Revolución.

J.S.: ¿Cómo relacionas lo esquelético de Solón Romero con tus anteriores observaciones sobre lo voluptuoso?

F.C.: Si vuelcas la cabeza hacia la parte derecha del mural que estamos observando, tendrás ahí la constante esquelética de Solón Romero. Los Quijotes, los trabajadores y los Prometeos de la pintura de Solón, tienen la estructura esquelética clásica. Impotencia y rebelión son su distintivo. La parte de Alandia Pantoja, por el contrario, es mucho más carnal, voluptuosa, vital. Es el movimiento, la plenitud, la acción. Lo interesante es que, siendo diferentes, Alandia Pantoja y Solón Romero se unen en la búsqueda de lo universal a partir de lo vernacular.

Si te fijas ahora en el lado izquierdo del mural, verás que Alandia Pantoja pinta una mujer/virgen/Pachamama. Es la carnalidad y la alegría personificadas. Esta mujer entrega el destino de la Revolución: conocimiento, educación, voto universal, defensa de las conquistas sociales obtenidas. Si el cóndor es el destino prometéico, la mujer, la Pachamama, es el lado gozoso, carnavalesco de la Revolución. Curiosamente, es la misma mujer que aparece, más madura, en “La Imilla”. Existe, en la pintura de Alandia Pantoja, una tercera mujer que, en resumen, es la misma, pero envejecida, convertida en “chullpa”. Son, pues, tres momentos distintos de la vida. De las tres mujeres, la que más me impresiona es “La Imilla”, que está en

el Museo Nacional de Arte. Es el enigma de la jovencita bella del mundo andino, la que después se vuelve símbolo de la Revolución, para concluir en "chullpa". Alandia Pantoja muestra con esta serie, el ciclo de la Revolución, desde su surgimiento hasta su muerte. La "chullpa" es ya la contra-revolución que retorna a los orígenes andinos. Como, en los hechos históricos, la Revolución fracasó, la propia producción estética que ella generó para entenderse a sí misma, se agotó y se transfiguró.

J.S.: Tu última apreciación volverá en posteriores diálogos casi como el mito del eterno retorno. No me queda claro, sin embargo, el aspecto que mencionas acerca de la trasfiguración estética. Para concluir nuestro primer diálogo, ¿podrías aclarar este punto?

F.C.: Mira, encuentro que, agotado el muralismo, éste retorna renovado en el cine de Jorge Sanjinés. Particularmente en sus primeras películas. *Ukamau*, *El coraje del pueblo* y *Sangre de Cóndores* replantean estéticamente la problemática del muralismo. Las figuras de Alandia Pantoja y de Solón Romero están nuevamente en el cine revolucionario planteando viejos y nuevos problemas. El extraordinario cine de Sanjinés nos devuelve la misma pregunta acerca de nuestra identidad. En este sentido, creo que el cine se vuelve una revelación también vanguardista: es el planteamiento estético universal de las masas obreras y campesinas, realizado desde la cotidianidad boliviana. En tal sentido, no puede imaginarme el cine de Sanjinés sino como un pedazo del mundo moderno.

J.S.: Próximo al muralismo, el cine de Jorge es para mí la plasmación estética popular más importante de un pueblo semianalfabeto. No creo que la literatura tenga esta fuerza estética. Creo que en nuestro próximo diálogo tendremos la oportunidad de referirnos a este aspecto ¿Te parece que seleccionemos a Oscar Cerruto y a Marcelo Quiroga Santa Cruz como nuevos temas de estudio? Es una pena que no hayamos podido desenterrar el cuento de Medina Ferrada, "Los muertos están cada vez más indóciles".

F.C.: Es una pena que el cuento de Medina Ferrada esté perdido. Qué pena que para nuestro diálogo el cuento esté más "muerto" que "indócil".

Diversidad cultural y ciudadanía*

Trataré de avanzar un poco más en la comprensión de las relaciones entre ciudadanía, multiculturalismo y desarrollo, continuando textos ya trabajados con Martín Hopenhayn, Ernesto Ottone y Mario dos Santos. Primero me referiré a puntos de llegada, luego plantearé algunos nuevos temas e ideas que complejizan las relaciones, para finalmente tratar de elaborar algunas reflexiones más teóricas sobre el asunto que nos convoca.

En primer lugar, la noción de ciudadanía pretendía reconocer la presencia de dos acepciones de ciudadanía. Una liberal en la cual se supone que la organización política funda la condición jurídica. En ella el individuo, que es externo al Estado, contribuye con prestaciones a cambio de servicios. Otra acepción, de carácter social, ve a la ciudadanía como una pertenencia comunitaria o social, a través de la cual el individuo se va autodesarrollando y autodeterminando. En este caso el individuo es miembro de una colectividad política y recrea tal identidad en el marco de las instituciones políticas reconocidas. En realidad la ciudadanía, en palabras de Dahrendorf, está vinculada a la vez con una institución, un objetivo moral, una opción de vida y un valor ético, además de un cierto estilo de desarrollo.

En segundo lugar, habíamos señalado que existían algunos fenómenos ligados a la internacionalización de la economía, la política y la cultura que fuerzan a pensar la noción de ciudadanía.

Me refiero a la tendencia a la reformulación de la ciudadanía como producto de la expansión y redescubrimiento de las identidades culturales. La idea consistía en señalar que la asunción generalizada de la multiplicidad cultural tendía a aumentar la conflictividad social. Aún más, pareciese que el centro de los con-

* Este trabajo fue publicado originalmente en la revista *Leviathan Review*, Nº 70, Winter (Madrid) año 1997.

flictos en la sociedad moderna está vinculado a las relaciones interculturales, a la sociabilidad y cotidianidad de nuestras sociedades. O en palabras de Habermas, a la reproducción cultural, la integración social y la sociabilidad.

Por ejemplo, en un reciente informe de Naciones Unidas sobre seguridad humana, se señala que en los últimos cinco años más del 70% de los conflictos a nivel mundial se está dando en el interior de los países mientras que sólo el 30% de los conflictos se dio entre países. Además señalan que estos conflictos son predominantemente de tipo intercultural, principalmente étnicos y religiosos.

Por otra parte, también señalamos que uno de los temas cruciales de la redefinición ciudadana estaba vinculado a la combinación de un núcleo duro de inteligencia y su expansión socialmente integrativa. Es decir, aquí la ciudadanía es considerada como construcción comunicativa entre actores y sujetos sociales mediante una socialización del conocimiento entre los distintos miembros de una sociedad. Aquí la noción de ciudadanía activa se combinaba con la noción de manejo de los códigos de la modernidad.

Finalmente, consideramos que la globalización de la cultura redefinía las construcciones ciudadanas-nacionales. Así, la reorganización de los escenarios culturales y los cruces interculturales planteaban la cuestión del orden simbólico entre los diversos grupos. La desterritorialización de identidades culturales y reinserción en otros planos constituyen situaciones-problemas muy importantes, por eso este es un tema además muy concreto en las diferentes Comisiones Europeas y de EE.UU. que discuten el estatus ciudadano de los migrantes. En realidad, lo que está en el tapete es la redefinición de la nación y su vinculación con la ciudadanía.

Estas tendencias en su conjunto nos llevaron a repensar la noción de ciudadanía en términos culturales. La hipótesis que teníamos afirmaba que las identidades culturales se hacen más presentes en la medida en que ellas mismas se pueden expresar o multiplicar en la misma sociedad. Es posible que tales identidades culturales se expongan cada vez más a múltiples influencias y experiencias como producto de los procesos de modernización en curso.

En este ámbito la pregunta que planteábamos era acerca de las capacidades de nuestras sociedades y regímenes democráticos de asimilación y de respuesta de estas nuevas dinámicas de la internacionalización. Las salidas son múltiples, pero pasan por trabajar críticamente la tensión entre las tradiciones culturales y la

racionalidad instrumental y especialmente entre estas identidades culturales y la democracia política.

Nuestra respuesta, por lo demás un poco osada, fue tratar de ver las dos caras de una misma moneda de una supuesta identidad cultural latinoamericana. Me refiero al reconocimiento de una identidad indo-afro-euro-americana, a la dialéctica de la negación del otro y a su potencialidad en cuanto al reconocimiento de una presencia de una suerte de tejidos culturales intermedios, que podrían constituir fuerzas pluralistas y críticas para embarcarnos en la modernidad.

La tesis creo que no era tan errada. Sin embargo, ahora pienso que simplificamos demasiado el problema. No sé la respuesta, sólo sé que es importante tomar en cuenta otros fenómenos y conceptos que, por lo demás, más que enriquecer la propuesta creo que la hacen más difícil. En este sentido, el ciudadano está posado más que frente al progreso, en medio de un laberinto.

Quisiera entonces detenerme someramente en cuatro temas y luego retomar la cuestión general de las relaciones entre multiculturalismo y ciudadanía.

En primer lugar, como varios analistas han señalado, ya se han conformado espacios de discusión, como por ejemplo en la revista *MicroMega*; se observa prácticamente en todas partes una cierta crisis de la política de las llamadas democracias representativas.

El problema, en nuestro caso adicional, es que además los procesos de consolidación de democracia son aún muy limitados y antes que constituirse en regímenes representativos, se estarían constituyendo en democracias censitarias. O'Donell habla de democracias delegativas. Delegación que se centra en la figura del presidente y de la tecnocracia que le acompaña. En las "veinte tesis" con Mario dos Santos argumentamos acerca de una cierta contracción en los procesos de democratización latinoamericanos.

En la opinión de O'Donell, la delegación se refiere a la instalación democrática de gobiernos que no llegan a constituirse en verdaderos sistemas representativos. Así que buena parte de América Latina viviría una suerte de doble transición. En el corazón de tales problemas estarían una suerte de pervivencia de una cultura política organicista-autoritaria y sobre todo la debilidad de las instituciones. Y yo agregaría la debilidad de un sistema de actores con mayor capacidad política.

Con más fuerza Lechner se refiere a la creciente debilidad de lo político, en cuanto a su

capacidad para representar lo social. En tal caso no sólo los ciudadanos ven debilitados los lazos de pertenencia a la comunidad, sino también se sentirían cada vez más ajenos a la comunidad política. En este ámbito invocar al pluralismo, como lo hicimos nosotros, supondría un campo público de interacción política que no existe o que está, de momento, debilitado. En este sentido, la ausencia de un campo real de interacción política supone una fragmentación o anomalía política creciente. Consiguientemente se percibe una mayor distancia entre identidad cultural e identidad ciudadana. En el caso de Chile, Lechner por ejemplo habla de una desafección ciudadana como el resultado de una privatización económica, donde los asuntos públicos pasan a ser asuntos particulares que se alejan de la construcción de compromisos colectivos. En el caso de Bolivia, la ausencia o debilidad de espacios institucionales interactivos conduce nuevamente a la política en las calles, es decir al conflicto directo, pues no bastan reformas lúcidas si no están acompañadas por la construcción de espacios públicos de negociación. O como decíamos, de actores con capacidad autónoma para llegar a acuerdos institucionalizados.

En segundo lugar, creo que no trabajamos bien la cuestión de la exclusión social y la pobreza. En una región donde los procesos de diferenciación social y exclusión son complejos y persistentes, la pobreza es en realidad una condición preciudadana. En este sentido resulta fundamental vincular su expansión a la persistencia de un sistema de relaciones sociales que la explican. Parece que vivimos una suerte de paradoja perversa, pues por una parte se operaba un proceso de democratización y, por otra, como consecuencia de la inflación y de los ajustes, se producía una gran exclusión ciudadana. El tema de la exclusión social y la pobreza necesita abolir la figura del necesitado al cual hay que darle ayuda, en vez de investirlo de derechos y dotarlo de capacidad de participación política.

En tercer lugar, deseo referirme a la ecopolítica. Para empezar, reconocer el desarrollo de una cierta ruptura entre los procesos nacionales y la dinámica de la globalización gracias a los problemas ecológicos y la emergencia de aquello que Morin llama ecopolítica. Para este autor los patrones de identificación de una comunidad nacional, generalmente mirados desde la noción de madre-patria-república o nación, estarían mutando en razón de la degradación ambiental hacia una comunidad internacional. Así, las reformas de apropiación de la naturaleza ya estarían agotadas y más

bien el deterioro marcaría la necesidad de un tipo nuevo de ciudadanía de carácter universal transcultural: madre-tierra-patria. Apela entonces a una ciudadanía universal como defensa de la destrucción de la tierra, donde una especie de sincretismo intercultural estaría precondicionando una nueva ciudadanía universal, o quizás, en nuestro caso, tal ciudadanía estaría vinculada a una depredación asociada no sólo a los modelos de consumo de las sociedades avanzadas, sino también a una degradación proveniente de la exclusión social. El pensamiento ecologizado de Morin nos invita a reflexionar acerca de las posibilidades de una ciudadanía internacionalizada desde nuestro propio patrimonio cultural. En este sentido el comunitarismo indigenista, por ejemplo, y su experiencia sobre el control de los terrenos ecológicos y los mecanismos de reciprocidad pueden contribuir quizás no sólo al pensamiento ecologizado, sino también para definir una ciudadanía más universal en el sentido de Morin.

Finalmente, está el tema de lo individual en la cultura ciudadana de América Latina. Creo que es fundamental repensar el tema en un contexto intelectual que busca revalorizar lo individual como una construcción sociocultural.

Paolo Flores de Arcais, muy influenciado por la situación italiana, plantea algunas ideas importantes para pensar la relación entre ciudadanía e individuo. Me gustaría retomar algunos puntos de su pensamiento, porque además creo que son significativos para América Latina.

Para este autor, un hecho político en el mundo actual es el fenómeno de la ciudadanía sustraída, en la cual la representación política de lo social se degrada. El ciudadano pasa a ser un súbdito o un cliente de una clase política inamovible y estancada. El ciudadano deja de tener interés en lo político, en aquello que es vital a la representación y que Claude Le Fort denominó pertenencia democrática, es decir, el estar involucrado en el juego político del poder. Aquí la política pasa a ser un asunto de "ellos", es decir, una actividad atrincherada en el monopolio de una corporación política partidaria y donde ya no hay diversidad social a ser representada. En tal dinámica el ciudadano viviría la política como algo ajeno a él.

En este sentido, los políticos de oficio son vistos como una casta que se reproduce por cooptación, autolegitimada y autorreferencial, políticos cada vez más incapaces de representar a los ciudadanos. Por ejemplo, por todas partes las encuestas de opinión pública mues-

tran una gran desafección política y una gran crítica hacia los partidos por parte de los ciudadanos. El ciudadano deja de interesarse en la cosa pública y sólo le interesa consumir o replegarse en una tribu en medio de una sociedad cada vez más transformada por los efectos de la tecnología. Castells coloca precisamente aquí las tensiones actuales de las sociedades contemporáneas, tensiones entre el ciudadano y el nuevo poder tecnológico, entre la red de información y el yo.

En este ámbito, según Flores de Arcais, el sujeto atacado o debilitado es el individuo. En este sentido, cualquier proyecto emancipatorio con pretensiones renovadoras tendría que plantearse que es precisamente el individuo lo que se necesita reconstituir, puesto que él constituye el lado más débil de los efectos del cambio moderno.

Al respecto, un tema de singular importancia es el de la igualdad de oportunidades. En teoría sólo la igualdad de oportunidades constituye una condición para el desarrollo del individuo-ciudadano, sólo después se puede ser un ente privado. Es decir, una ciudadanía será sólo en la medida en que las instituciones puedan garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos sociales. En consigna, sólo si hay derechos habrá ciudadanos.

Entonces conviene relativizar los argumentos culturalistas respecto de la construcción individual del ciudadano. Toda construcción identitaria, por muy importante que sea el movimiento, tendría que ser además de incluyente, abierta, en el sentido de abolir la tutela de la diferencia como atributo absoluto de cualquier cultura de comunidad.

Aquí también la cosa se complica para los latinoamericanos, puesto que históricamente nuestros liberalismos han sido siempre muy débiles y las construcciones individuales, reales, casi inexistentes en la mayoría de los casos, sólo válidas para los sectores medios. Además recordemos la dramática historia de lo que Angel Flisfish denominó “ciudadanías avasalladas”. Yo diría que la construcción social y cultural del individuo en America Latina es toda una tarea pendiente que abre nuevas vías para cualquier proyecto emancipatorio.

¿Cómo, pues, vincular los procesos de subjetivación narrados —o la diversidad cultural que expresan las nuevas sociabilidades en la región— con la política? O, expresado de otro modo, ¿es posible una articulación entre la diversidad cultural emergente y la ciudadanía en los actuales procesos de democratización?

La respuesta crea un dilema, pues por un lado esto implicaría la asunción por parte del

conjunto de los actores de un valor común referido al reconocimiento universal de la ciudadanía. Dicho reconocimiento se expresaría en el logro de la institucionalización de valores comunes que supongan la igualdad de oportunidades y el derecho a tener derecho a subjetividades propias. Este razonamiento implica que sólo en la medida en que los valores ciudadanos universales sean asumidos colectivamente se podrán expandir las identidades particulares, tanto individuales como colectivas. Seguramente esto implicaría la constitución de un proyecto de modernidad destinado a eliminar la dialéctica de la negación del otro y asumir en plenitud el multiculturalismo abierto y la otredad latinoamericanas, como una fuerza ética de la misma sociedad. En realidad esto supone una lógica laica que sólo el Estado y el régimen político democrático pueden preservar.

Sin embargo, por otro lado existen límites duros, establecidos por a) la propia lógica de la modernización y específicamente por la técnica creadora del cambio que tiende a concentrar decisiones en élites tecnocráticas; b) el incremento de los procesos de exclusión y marginación social —el abismal crecimiento de la miseria está asociado también con la pérdida de lazos sociales—; c) la presencia de identidades "duras" o irreductibles, del tipo mesiánico, que por su propia consistencia niegan la otredad y la tolerancia y, muy especialmente; d) la dinámica y la ideología hiper-racionalista del mercado y la sociedad de consumo.

Quizá vale la pena reafirmar la presencia de elementos adicionales que moderan las tendencias señaladas, es decir el desarrollo de movimientos éticos en la política y en la sociedad referidos a la ética de la responsabilidad social, al derecho a la diferencia, a opciones de vida comunitaria de la más variada índole y, muy particularmente, a la idea de que desarrollo y modernización son un bien común que se construye con *otros*. Esto replantea la temática del consenso sobre la base de aquello que Pizzorno denominó "cultura de la solidaridad procesal", en la cual los enemigos se convertirían en jugadores. Semejante consenso implicaría, cuando menos, un método para resolver las diferencias en función de la argumentación y la alteridad.

Habermas ha sugerido que esto implicaría la comprensión de la racionalidad democrática como un asunto de procedimientos que van más allá de una lógica meramente instrumental, que se fundaría sobre todo en la fuerza de una convicción derivada de consensos obtenidos en función de un debate sustentado en argumentos, y así, la deliberación intersubjetiva

entre los actores permitiría la construcción de una solidaridad procesal.

En América Latina la construcción de consensos en el sentido señalado tendría que estar normativamente vinculada con un proceso de integración social creciente, tanto en el plano simbólico como en el material. Sin equidad no es posible la otredad, ni siquiera la competitividad económica es sostenible si siguen creciendo las distancias sociales.

En esta óptica, una participación creativa en la sociedad necesitaría estar acompañada por procesos de equidad y libertad sociocultural, es decir por el reconocimiento institucionalizado al derecho a existir y a ser diferente; en realidad la temática del consenso plantea la del peso estratégico de la cultura política democrática en un nuevo proyecto emancipatorio de modernidad.

En América Latina los valores de jerarquía y de igualdad de oportunidades han sido siempre problemáticos e inestables. La igualdad ha estado asociada con la lucha por la ciudadanía, casi siempre avasallada, y las jerarquías son el resultado tanto de adscripciones del pasado como de una capacidad de movilidad social frecuentemente de tipo informal.

Finalmente, desearía insistir en la tensión entre individuo y multiculturalismo. La tesis es que estos dos movimientos no son potencialmente excluyentes, por lo menos en América Latina, y que más bien se pueden retroalimentar mutuamente. En primer lugar, pienso que se necesita fortalecer la capacidad de acción autónoma de los actores colectivos e individuales y además fortalecer los tejidos interculturales que los contienen. En segundo lugar, esto será posible si la comunicación entre diversas comunidades se expande y al hacerlo quizá se potencie la capacidad de acción individual. Hoy día, en nuestras sociedades modernas, cada vez más expuestas al bombardeo de los medios, que por lo demás no son tan xenófobas y heterogéneas como otras sociedades del mundo, es posible establecer compromisos razonables de expansión ciudadana.

Al fin América Latina es un continente de equilibrio y de términos medios, en el cual el mismo tejido intercultural, si quiere potenciarse hacia el desarrollo y la democracia, necesita avanzar de modo zigzagueante entre la construcción de las identidades culturales y la imprescindible construcción del individuo. Y asumir también que felizmente tal tensión es irresoluble.

¿Todo lo que se termina se acaba?

La sociedad y el ciclo estado-nación*

Fernando Calderón G. y Mario R. dos Santos

1.1. La modernización inconclusa

Las pendulares mutaciones que marcan la historia política latinoamericana contemporánea rebasan la imaginación prospectiva que pudieron tener los ensayistas y futuristas de principios de siglo. Entre tales mutaciones, las que se resumen a continuación permiten comprender el modo como se constituyó cierto estilo de modernización en la región y uno de sus productos más significativos, el modelo de Estado latinoamericano. Sin la comprensión de este modo histórico de articulación entre Estado, economía y sociedad civil en la región, no es posible ponderar, en todos sus alcances sociopolíticos, socioculturales y socioeconómicos, ni la magnitud de la actual crisis institucional en los países latinoamericanos, ni los efectos que tienen sobre la región los cambios de los escenarios latinoamericanos.

Para empezar, las ciudades y su voraz crecimiento transformaron definitivamente la faz rural del continente, pero no se industrializaron como se esperaba, ni tampoco produjeron la moderna incorporación al progreso o, si se quiere, la vigencia de relaciones sociales plenamente capitalistas; al contrario, ocurrieron una serie de asincronías que distan mucho de lo imaginado por nuestros pensadores evolucionistas. Por ejemplo, urbanización asociada a expansión de economías familiares en pequeña escala, incorporación parcial a la modernización vía el consumo imitativo —o lo que Germani llamaba "efecto de demostración"— y múltiples escalas de exclusión e integración social como parte de una modernización heterogénea.

Para continuar, en el ámbito rural se han sufrido importantes cambios, sobre todo en los lugares donde hubo procesos de reforma

* Este trabajo fue publicado originalmente en Calderón, Fernando y Dos Santos, Mario 1995 *Sociedades sin atajos* (Madrid: Paidós).

agraria, pero nadie puede negar que incluso las viejas oligarquías terratenientes, especialmente donde no se operaron procesos de reforma, han sufrido metamorfosis quizá demasiado completas, pues de alguna manera se han reconstituido como nuevas elites en el poder, mientras que los campesinos no sólo se han incorporado al mercado sino que han sufrido profundos procesos de diferenciación sociocultural. Por ese motivo, muchas de nuestras ciudades son también rurales. Ya las industrias y su sustantivado abstracto, la industrialización, ¿acaso no han seguido zigzagueantes cursos inimaginables para cualquier mentalidad ferrocarrilera? El continente se industrializó, pero lo hizo a medias y en forma dependiente de las economías centrales; luego también se desindustrializó parcialmente por los efectos de la crisis y de la revolución tecnológica, para volverse por último a reestructurar en función del mercado externo (con una mayor o menor dosis de reindustrialización y de reconversión).

El Estado, que en prácticamente todos los casos fue el pivote de estos cambios, también empieza a transformarse, habiendo sido la razón y la pasión de las sociedades latinoamericanas y de sus líderes. Qué mayor símbolo de esta pasión que la biografía de sus conductores, quienes hablaban a la historia en nombre de la nación que ellos mismos encarnaban. Parecían eternos y resultaron fugaces, aunque paradójicamente reaparecen cual fantasmagóricas figuras que las masas desamparadas invocan.

Nuevas burocracias, nuevas elites internacionalizadas, novedosos empresarios, curiosos liderazgos, intrigantes y polifacéticos comportamientos colectivos, entre otros factores, marcan el comienzo de azarosos cambios en la sociedad latinoamericana. Lo llamativo es que nuevamente el Estado está en la encrucijada; no sabemos si se acercará al sistema político para convivir allí con la sociedad o si se fortalecerá modernizándose en función de un nuevo dominio sin vivencias democráticas plurales y socialmente expansivas.

Los mismos partidos políticos, esencialmente paraestatales, que encarnaron con fuerza proyectos nacional-populares e incluso clasistas, hoy están desconcertados, y no sólo por la crítica proveniente de la sociedad sino también por su propio deslumbramiento frente a los cambios societales y a los nuevos desafíos del sistema internacional: ellos también están en la encrucijada.

Los cambios fueron tan inusitados que difícilmente se pueda verificar una evolución regional gradual, ni siquiera a nivel nacional. En realidad el ciclo estatal fue largo, y los al-

tibajos constituyeron lo único constante. Aun en México, donde hubo una estabilidad institucional, las mutaciones en la sociedad y en el mismo Estado son profundas y comienzan sólo ahora a ser ampliamente reconocidas por los analistas.

Es cierto que desde una perspectiva analítica, hubo en las décadas del 40 y del 50 varios enfoques y respuestas sobre el carácter y el significado de un arribo de América latina a la moderna sociedad industrial. Con una intención a la que es afín este libro, el sociólogo Medina Echavarría tuvo la sagacidad de preguntarse quién o quiénes podrían ser los actores sociales con posibilidades de enfrentar los desafíos que planteaban los procesos de modernización en ese momento histórico. La modernización suponía para él la construcción de un consenso político en torno de la estabilidad e institucionalidad del binomio democracia-desarrollo económico. Medina Echavarría[1] insistía, pues, en preguntar y en preguntarse qué orientaciones de la acción colectiva y qué actores trataban de vincular orgánicamente una institucionalidad democrática y desarrollo económico. Sus estudios le devolvieron una realidad con enormes paradojas y dificultades. Una de ellas fue la hacienda, vinculada a órdenes despóticos tradicionales, aunque varias de las elites correspondientes a ella estaban enlazadas externamente con la modernización; otra, el carácter anacrónico de los empresarios y las limitaciones socioculturales tremendas de los sectores medios, lo cual mermaba el potencial de liderazgo. Respecto del caso boliviano, por ejemplo, su conclusión es que sólo los mineros, por su vinculación con la cultura industrial, podían plantearse la institucionalidad democrática con desarrollo económico y optar por ella. Sin embargo, ya entonces observó que la hiperideologización de ese sector era la principal barrera.

No obstante, la modernización se produjo, pero a la latinoamericana: a medias, tocándole al Estado actuar como monopolizador de la política, como primer empresario moderno y como ámbito de los conflictos sociales, mientras el resto de la sociedad participaba en el juego consustanciada y compenetrada con la lógica estatal.

El Estado se convirtió, de diferente manera y con distintos ritmos, sabores y tiempos nacionales, en el unificador y articulador del

1 Medina Echavarría, J.: Sociología latinoamericana. Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina, San José, EDUCA Centroamérica, 1980.

conjunto de las relaciones sociales, siendo parte constitutiva de aquél. Las instituciones y los aparatos estatales se caracterizaron por regular directamente procesos de integración y de coacción social, pero también fueron los impulsores de los procesos de cambio, subordinando —cuando existía— a la democracia política. Por ello puede decirse que en esos casos se trataba más de gobiernos democráticos que de regímenes democráticos.[2]

El Estado no sólo fue actor unificante de toda la sociedad, sino también buscó identificarse con la nación y el pueblo. Su intervención alcanzó todas las esferas de la vida societal, siendo el principal agente de transformación social y económica. Cuando se vinculaba al partido de gobierno, a los partidos de una coalición, al movimiento político populista o incluso al mismo líder, lo hacía de manera viscosa, entremezclada, sin saber claramente dónde empezaban o terminaban su estructura o su campo de acción. Estas vinculaciones se dieron a través de una cultura política sui géneris que, por un lado, invocaba al pueblo como un sujeto sustancial en el cual, además de la verdad, residían la solidaridad y la "razón de la historia", y, por otro, recurría a una serie de prácticas y de valores clientelares, de tipo prebendalista, que reproducían las articulaciones sociopolíticas señaladas. Para los líderes el punto consistía en adecuar la realidad al sentido de la historia, sentido que ellos podían descubrir.

El Estado, por lo general yuxtapuesto a un solo partido político, tendió a monopolizar las relaciones políticas. Los conflictos sociales o políticos sólo eran legítimos cuando se expresaban en el seno del aparato estatal o en el partido predominante; el resto del accionar político era por lo general considerado ilegítimo. El Estado que dirigió los procesos de modernización e industrialización atrapó a la sociedad en su seno e inhibió un desarrollo pleno de la ciudadanía política, aunque en ocasiones la haya expandido fuertemente. Esta última requiere una compe-

2 En un texto anterior se señaló lo siguiente: "En cuanto al sistema político, resalta que el ejercicio de la democracia se practicase más en el seno del mismo movimiento nacional que fuera de él, y por lo tanto no como cualidad deliberadamente buscada del mismo. Por ello puede decirse que eran más gobiernos democráticos que regímenes democráticos". Cf. Calderón, F. y dos Santos, M. R., "Lo político y lo social: bifurcación o síntesis en la crisis", en *Latinoamérica: lo político y lo social en la crisis*, Buenos Aires, CLACSO, 1987, pág. 628.

tencia entre fuerzas políticas, sin que las minorías sean descalificadas como necesariamente expresiones de la antinación, ya que se identificaban el desarrollo y la autonomía nacionales exclusivamente con la práctica política del movimiento popular. No hubo equivalencia, pues, entre el intento de fundar una comunidad nacional y el de fundar una comunidad política; la primera se reveló parcial con la caída o derrocamiento de los regímenes nacional-populares y la segunda no se concretó, frustrando la continuidad de un camino de integración, transformación y desarrollo nacional.[3]

Además, el Estado, al representar a la nación, no sólo monopolizaba y ordenaba sus relaciones con el sistema internacional sino que competía y muchas veces combatía contra el poder y las políticas de otros estados, particularmente con los del llamado imperialismo inglés, norteamericano o ruso. En ello, parafraseando una conocida consigna peronista, los estados populistas no encontraban nada mejor que otros estados populistas, más allá del hecho de que las ideologías nacionalistas tenían consistencias disímiles, desde la compleja proposición aprista hasta las difusas reivindicaciones varguistas.

Pero precisemos lo anterior. Progresiva y diferencialmente el Estado se convirtió, en la mayoría de los casos, en el principal actor de la escena económica, pues tomaba las principales decisiones en cuanto al perfil productivo de las economías nacionales, acerca del empleo, la distribución del ingreso, el consumo colectivo y las características de los procesos de industrialización, algunas veces impulsando al empresariado nacional, otras actuando directamente, según se tratase o no de un sector estratégico de la economía. Con ello se convirtió en una especie de vaso comunicante entre los procesos de inversión, producción, distribución y consumo. Impulsaba un estricto control, por lo menos en los momentos de auge populista, de las relaciones con la economía internacional y precisamente por esto más adelante se convirtió en el principal canal y socio del capital transnacional. El Estado controlaba la economía.

Sin embargo, este predominio estructurador del Estado exhibe tendencias contrapuestas, y los tiempos en que se plasma también son distintos. En buena parte de Centroamé-

3 Ídem, pág. 629.

rica[4] ocurre como un proceso tardío y regresivos. Cuatro años más tarde se produce el golpe de los coroneles, que desarrollan una política modernizante, iniciando la democratización del Estado y promoviendo un crecimiento económico.

El retraso de la crisis nicaragüense se produjo por dos razones. Por un lado, debido al carácter antisomocista del partido conservador, oposición no necesariamente democrática y antioligárquica. Por el otro, debido a las consecuencias que en el plano económico tuvo el *boom* algodonero, con el cual se inicia el período primario exportador.

En los tres casos mencionados, el Estado actúa Como represor frente a la agitación social, siendo los grupos más conservadores los que, a mitad de los años setenta, van a decidir el curso de la batalla. El sistema de Honduras se caracterizó por el surgimiento de un caudillismo tradicional, fruto de la alianza del Estado con los propietarios de plantaciones, en general extranjeros. Dada la estabilidad que ésta tuvo, las coaliciones populares que se conformaron no alcanzaron el éxito de las que surgieron en Guatemala y en El Salvador. El triunfo de Villedo Morales en 1964 representa el inicio de los gobiernos democráticos en el país, siendo el general López Arellano quien realiza los primeros intentos de modificación de la estructura agraria.

El caso de Costa Rica representa la excepción de cómo una sociedad rural, apoyada en valores conservadores, puede experimentar una modernización política. Con la guerra civil de 1948 se rompe parcialmente la hegemonía oligárquica y se pone en práctica un proyecto tendiente a lograr la continuidad del orden social vigente y a asegurar una estrategia de desarrollo económico dirigido desde el Estado. La existencia de una canti-

4 E. Torres Rivas señaló al respecto lo siguiente: "En las tres décadas transcurridas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad centroamericana experimentó cambios sustanciales y relativamente rápidos. Se trata de un proceso de modernización con todas las desigualdades inherentes a una sociedad agraria que empieza a cambiar, proceso estimulado en buena medida por influencias (económicas y políticas) externas y que fue dirigido y aprovechado por la burguesía agraria en el interior" (pág. 26).

"La década de los 70 recoge, en consecuencia, no sólo los fracasos de la democratización imposible, sino también de un movimiento popular que acumuló derrotas y represión cada vez que intentó organizarse políticamente o plantear luchas gremiales […] Se intersectan, finalmente, los efectos ya presentados de la doble crisis económica: la de origen estructural y por ello fincada en la historia de cada país, y la de origen externo, más coyuntural, que afecta por igual a la región" (pág. 38).

Algunos hitos cronológicos nacionales serían los siguientes. En el caso de Guatemala, luego de otorgada la libertad de organización política en 1947 y de la reforma agraria producida cinco años más tarde, el movimiento popular es derrotado en 1954 y quedan restablecidos el poder y la influencia de los sectores cafetaleros y agrarios más conservadores. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los años setenta se asiste a un estado de excepción como respuesta estatal a la profundización de la crisis social.

Con la caída del general Hernández Martínez en El Salvador, en el año 1944, estalla una crisis dentro del ejército que se resuelve a favor de sus sectores más regre-

vo, con una corporatización que directamente tiene como actores las fuerzas armadas y las empresas transnacionales. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con El Salvador, Honduras y Nicaragua en la década del 60, en tanto que en Guatemala existe el antecedente previo y transitorio del régimen de Arbenz y en Costa Rica la prolongada vigencia de un Estado interventor democrático (desde 1949). El caso de Panamá con Torrijos en la década del 70 es otro ejemplo de proceso nacional-popular tardío a través del cual se encara la modernización y superación del orden oligárquico semicolonial.

En unos y otros casos de desarrollismo estatal la modernización constituyó una de las orientaciones fundamentales de la acción pública. Los movimientos populistas persiguen difusamente, a través del Estado y con una visión evolucionista, transformar los valores tradicionales y las arcanas estructuras organizativas, particularmente las agrarias, en procesos y organizaciones urbanas modernas. La urbanización y la industrialización, impulsadas por fuertes políticas educacionales, constituirían los pilares modernos de las nuevas sociedades latinoamericanas. Cuando el impulso de estas metas derivaba de una ideología nacionalista, considerada el *ethos* fundacional o refundacional de las repúblicas latinoamericanas (pues ese *ethos* era palanca de la segunda independencia), quien se opo-

---

dad importante de medianos y pequeños propietarios cafetaleros explicaría la dimensión más democrática y participativa de la vida política de este país.

Véase Torres Rivas, E.: "La formación del Estado en Centroamérica" y "Quién destapó la caja de Pandora", en *La crisis centroamericana*, San José, FLACSO, EDUCA, 1984.

Véase también Molina Chocano, G.: "Estado y proceso de acumulación en Centroamérica.", en *Estudios Sociales Centroamericanos*, nº 37, San José, enero-abril de 1984. En este texto Molina Chocano afirma: "El proceso de industrialización centroamericano impulsado en los años 60 con el modelo integracionista que se dio en condiciones de dependencia y dentro del fenómeno llamado internacionalización del mercado que se caracterizó por el arribo y penetración de las grandes corporaciones transnacionales (que pasan a interesarse y a controlar, en mayor o menor medida según los países, el sector urbano) colocó al Estado centroamericano en la posición de garante del proceso de acumulación de capital presidido por dicho capital monopólico internacional" (pág. 91).

Véase, asimismo, "La crisis económica centroamericana. Una propuesta de análisis histórico-político", en varios autores, *Centroamérica, condiciones para su integración*, San José, FLACSO, 1982, y, especialmente, Arias, Arturo, *Estado, sociedad y economía en Centroamérica. Proyecto RLA 86/001*, -CLACSO-PNUD-UNESCO, trabajo mecanografiado, 1990.

nía al Estado nacional o a su líder se oponía a la nación y al pueblo.[5] Esa interpretación era

5 A título de ejemplo, veamos algunos conceptos y discusiones elaborados por G. Germani, E. Laclau y A. Touraine.

Para Germani los movimientos nacional-populares pueden ser entendidos como "forma peculiar de intervención en la vida política nacional de los estratos tradicionales en curso de rápida movilización en los países de industrialización tardía" y "han aparecido o están apareciendo puntualmente en todos los países de América Latina, pues en todos ellos el grado de movilización de las capas populares de las áreas marginales dentro de cada país rebasa o amenaza rebasar los canales de expresión y de participación que la estructura social es capaz de ofrecer" (pág. 231). "En la mayoría de los países de América Latina tal movilización está ocurriendo en forma vertiginosa y dentro de una estructura arcaica", lo que este autor llama paso de la pasividad tradicional a la movilización total. Cf. Germani, G., "De la sociedad tradicional a la participación total en América Latina", en *América Latina. Ensayos de interpretación sociológico-política*, Santiago, Ed. Universitaria, 1970.

Laclau distingue dos tipos de populismo. Por un lado, el populismo de las clases dominantes, que se produce cuando el bloque dominante experimenta una crisis profunda por la existencia de una nueva fracción que intenta imponer su hegemonía y no consigue hacerlo dentro de la estructura existente de dicho bloque de poder. Una de las soluciones posibles puede ser el llamamiento directo a las masas para desarrollar su antagonismo frente al Estado. "El populismo de las clases dominantes es siempre altamente represivo porque intenta una experiencia más peligrosa que un régimen parlamentario corriente; mientras que el segundo neutraliza simplemente el potencial revolucionario de las interpelaciones populares, el primero trata de desarrollar dicho antagonismo, pero de mantenerlo dentro de ciertos límites" (pág. 203).

Por otro lado, distingue el populismo de las clases dominadas. "Para los sectores dominados la lucha ideológica consiste en expandir el antagonismo implícito en las interpelaciones democráticas y en articularlo al propio discurso de clase. La lucha de la clase obrera por su hegemonía consiste en lograr el máximo posible de fusión entre ideología popular-democrática e ideología socialista. En este sentido, un populismo socialista no es la forma más atrasada de ideología obrera, sino su forma más avanzada: el momento en que la clase obrera ha logrado condensar en su ideología el conjunto de la ideología de una formación social determinada" (pág. 203).

En los discursos ideológicos populistas "…las interpelaciones populares aparecen presentadas bajo la forma del antagonismo y no sólo de la diferencia. Su oposición a la ideología dominante puede ser más o menos radical y, en consecuencia, el antagonismo estará articulado a los discursos de clase". Véase Laclau, E.: *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo*, *fascismo*, *populismo*, México, Siglo XXI, 1978.

Por su parte, Alain Touraine contraargumenta lo siguiente: "Es decididamente imposible hablar de movimiento nacional-popular. Menos aún, identificar el populismo con intereses de clase, como lo hace Laclau, que opone un populismo de clase dominante a un populismo de clase dominada. No se puede hablar más que

defendida por una política de sincretismo cultural que vinculaba lo local o regional a lo nacional, y lo nacional a lo universal. En varios casos, como en México o en Bolivia, este sincretismo también era racial: Paz Estenssoro hablaba de la raza indo-mestiza como el crisol de la nacionalidad.[6]

---

de una política nacional popular, definida como una forma de intervención del Estado. Esta política busca incorporar ofertas y demandas sociales en el proyecto nacional de un Estado. [...] La construcción de un Estado, no a la Bismarck, pero capaz de superar las contradicciones y los riesgos de estallido en la sociedad, es la meta principal de la política nacional-popular que no separa el desarrollo del Estado de la integración nacional y de la defensa de los intereses populares. […] La política nacional-popular no es representativa y en consecuencia, a pesar de que crea frecuentemente una fuerte participación, no puede ser considerada como democrática". Véase Touraine, A.: *La parole et le sang*, París, Ed. Odile Jacob, 1987, pág. 203.

Véase también Graciarena, J.: "El Estado latinoamericano en perspectiva. Figuras, crisis y prospectiva", en *Pensamiento Iberoamericano*, nº 5, Madrid, enero-julio, 1984.

A nosotros nos interesa resaltar especialmente el papel desempeñado por el Estado y sus relaciones con la sociedad y la economía. En términos nacionales, incluso en una situación aparentemente distinta o anómala como lo es la de Paraguay, el Estado juega un papel central. Al respecto señala T. Palau: "…el Estado interviene en la economía y en la sociedad civil para reproducir su fondo prebendario y cooptarlas, como mecanismo de supervivencia política, aplicando los beneficios de su intervención económica al mantenimiento del clientelismo. […] El otro parámetro que el Estado se ha encargado de volver explícito, inherente a su autoritarismo, es el de atribuirse a sí mismo y en exclusividad la gestión del desarrollo, lo cual no obsta que —en nombre del progreso— mediatice con frecuencia los intereses transnacionales o simplemente extranjeros, en detrimento del capital nacional […] Su proceder se caracteriza por el centralismo y la negación a la participación". Véase Palau, T., y otros: "Las políticas económico-sociales en el marco de la crisis. Ensayos, demandas y prospectivas en el caso paraguayo", en ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina? Los actores socio-económicos del ajuste estructural, Buenos Aires, CLACSO, 1988, pág. 218.

Véase también Rivarola, D.: "Los movimientos sociales en el Paraguay.", en Calderón, F. (comp.), *Los movimientos sociales ante la crisis*, Buenos Aires, CLACSO, 1986.

6 Stavenhagen, R. sintetiza críticamente dicha afirmación en su sexta tesis: "La integración nacional en América Latina es producto del mestizaje", pero ello —según este autor— "esconde generalmente un prejuicio racista, puesto que en lo biológico el mestizaje, sobre todo en los países en que la población mayoritaria acusa rasgos indígenas, significa un blanqueamiento". Por consiguiente, "las virtudes del mestizaje esconden un prejuicio en contra de lo indígena. […] El llamado mestizaje cultural representa, de hecho, la desaparición de las culturas indígenas". Véase Staven-

En muchos de los casos nacionales el instrumento privilegiado para la consecución de estas metas asociadas a la modernización industrializadora fue la planificación del desarrollo. Dicho instrumento daba al Estado la legitimidad técnica para convertirse en el racionalizador de la sociedad: el actor que regulaba la dirección de la historia en función de un saber "racional" que permitía, en cada fase del desarrollo, optimizar el uso de los recursos sociales disponibles. Además de ser un hiperagente económico en sí mismo, el Estado debía, en virtud de su carácter planificador, coordinar y ordenar los comportamientos de los diversos actores sociales a fin de que sus resultados pudiesen ser previsibles, integrados y orientados en una direccionalidad de conjunto.

Por cierto, las versiones latinoamericanas de la planificación del desarrollo han sido, como en el caso de las ideologías nacionalistas y de los gobiernos populistas, sumamente heterogéneas, conflictivas, espurias y discontinuas. Toda caracterización que desconozca estos rasgos pecará necesariamente de reduccionismo o de generalización. No existe, para la región, un populismo, un paradigma del Estado planificador o un discurso nacionalista único. En esta diversidad reside parte de la riqueza y de la confusión que atraviesan la historia política latinoamericana. Es por ello que, a continuación, se presentan sólo aquellas características que, conforme la evidencia histórica, han sido las más extendidas y compartidas por una amplia gama de experiencias nacionales de modernización en la región.

Desde el punto de vista de las relaciones sociales y de la trama organizacional, una característica crucial de esta forma estatal es que fue impulsora de nuevas organizaciones sociales,[7] particularmente en el nivel popular,

hagen, "Siete tesis equivocadas sobre América Latina", en varios autores, *América Latina. Ensayos de interpretación sociológico-política*, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1970, pág. 93.
Véase también Quijano, A.: *La emergencia del grupo cholo y sus implicaciones en la sociedad peruana*, tesis de doctorado, Lima, Univ. de San Marcos, 1964.

7 En este sentido es muy ilustrativo de buena parte de la región la experiencia del MNR y de la COB. Véase al respecto la biografía de Lechín, por Lupe Cajías.
En términos más analíticos resultan interesantes las reflexiones de J.C. Portantiero referidas al caso argentino. "Otras situaciones en donde la presencia de demandas y organizaciones neocorporativas coexiste con sistemas políticos democráticos sin que las decisiones

como los sindicatos campesinos y obreros, pero también de organizaciones empresariales, afectando el desarrollo y la consolidación de clases sociales y grupos de intermediación. En este sentido fue importante su incidencia en la creación de capas medias burocráticas que sirvieron no sólo de puente para alianzas de clase sino como articuladoras de las relaciones de dominación. Por otra parte, este tipo de Estado, si bien impulsó un proceso de diversificación económica en el nivel regional, dentro de cada país fue esencialmente centralista y verticalista respecto del conjunto de las relaciones políticas, más allá del régimen —democrático o no— que lo sustentara. Tanto en las estructuras estatales como las partidarias fueron funcionales en un sistema vertical de toma de decisiones en torno del poder ejecutivo, y de allí derivaron una serie de conflictos y tensiones con la sociedad, especialmente donde se vivieron cambios revolucionarios (posiblemente el caso del sindicalismo minero boliviano constituyó una experiencia extrema). Finalmente, el mismo Estado se amplió y transformó al desarrollar modernas empresas estatales y ampliar las instituciones de los sectores ligados al área social principalmente (educación, salud y vivienda), mediante las cuales pretendía plasmar sus metas de desarrollo y alimentar su legitimidad.

---

políticas sean producto de una concertación regulada, han sido y son habituales. El neocorporativismo es allí conflictivo: el sistema político, en lugar de emplazarse sobre la capacidad planificadora del Estado (a partir del filtro de demandas que han efectuado los actores sociales 'legítimos'), se constituye sobre una exaltación de la capacidad de presión de esos actores en una situación de reequilibración permanente." Véase Portantiero, J.C.: "La democratización del Estado.", en *Pensamiento Iberoamericano* nº 5, Madrid, ICI-CEPAL, 1984, pág. 108.

En el caso de Venezuela: "A partir del año 58 fue pautándose un conjunto de fórmulas que viabilizaron el proyecto de democracia representativa, cuyo modelo hegemónico está constituido por una alianza entre los cinco actores sociales de mayor peso al inicio del proceso: partidos políticos, grupos empresariales, sector militar, movimiento sindical e Iglesia. Los pactos constitutivos acordados entre ellos dirimieron los asuntos clave para la continuidad del modelo de desarrollo que venía desenvolviéndose en los años anteriores y establecieron las reglas de juego en el sistema político".

"Superada, durante la coyuntura crítica 1958-1964, la inestabilidad institucional, el Estado poseedor de crecientes recursos fue adquiriendo de manera progresiva un papel central en todos los aspectos de la sociedad." Véase López Maya, M., y Gómez Calcaño, L., "Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958 a 1985", en *Del Punto Fijo al Pacto Social*, Caracas, Fundación Fondo, Ed. Acta Científica Venezolana, 1989, pág. 98.

1.2. El patrimonialismo corporativo y la acción socio-estatal de los movimientos nacional-populares

Durante este ciclo de predominio estatal en la modernización Latinoamericana pueden distinguirse cinco rasgos que definen el tipo de relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía, a saber:

1) La constitución de un sistema corporativo formado por las principales empresas estatales. Si bien los procesos de acumulación y de desarrollo económico han sido en gran parte deudores de dicho sistema corporativo, indudablemente en este sistema siempre se han dado pugnas de intereses que, articulados por altas tecnocracias estatales, se vincularon a intereses privados nacionales e internacionales, formando parte de los así llamados anillos burocráticos.[8] En muchos países de la región las fuerzas armadas fueron parte central de este juego de competencias intraestatales, sobre todo cuando el sistema, por efecto de las pugnas internas, generó su propia entropía, o cuando fracasaban los proyectos o alianzas originarios.

2) La consolidación de relaciones clientelares entre instituciones e instancias del sector público (sobre todo del área social), por un lado, y diferentes organizaciones de la sociedad civil, por el otro. Mediante esta compleja maraña de relaciones de clientelas[9] el Estado satisfacía necesidades colectivas de la población a cambio de lealtades que legitimaban o reforzaban

8 Véase García Pelayo, M., "Segundo círculo y decisión consensuada. Consideraciones en torno al problema de la participación de los partidos y las organizaciones de intereses en las decisiones estatales", en *Documentación administrativa*, Madrid, Estudios, 1981.

9 Una ajustada definición de esta relación de clientelas aparece en E. de Oliveira Nunes. Este autor define el clientelismo como "un sistema de control del flujo de recursos materiales y de intermediación de intereses, en el cual no hay un número fijo ni organizado de unidades constitutivas. Las unidades constitutivas son agrupamientos, pirámides o redes que reposan en el intercambio generalizado. Las unidades clientelísticas con frecuencia disputan el control del flujo de recursos dentro de un territorio. La participación en redes clientelísticas no está codificada en ningún tipo de reglamento formal; los arreglos jerárquicos en el interior de las redes están basados en el consentimiento individual y no gozan de respaldo jurídico". Véase "Tipos de capitalismo, instituciones y acción social: notas para una sociología política del Brasil contemporáneo", en *Los conflictos por la creación de un nuevo orden*, Buenos Aires, CLACSO, 1987, pág. 77. En el mismo texto se hallará una bibliografía adicional sobre clientelismo.

el orden político. A falta de sistemas políticos partidarios con gran fuerza representativa, el clientelismo burocrático no tardó en convertirse en la fuente de legitimidad del poder público y en la cara complementaria del sistema corporativo patrimonialista.[10]

3) La configuración de un campo "espurio" de conflictos sociales, pues las oposiciones entre grupos y sectores no eran directas sino siempre expresadas a través del Estado. Mayor poder social y mayor poder en el Estado (fuese en su aparato político, administrativo o productivo) pasaron a ser sinónimos. De tanto orientar sus

10 Estos rasgos exigen explicitar diferencias entre el corporativismo en la región y el corporativismo en los países centrales. Los conceptos acuñados en el centro —corporativismo societal, liberal o democrático *vs.* corporativismo estatal— son inaplicables en América latina sin las siguientes aclaraciones. En primer lugar, el corporativismo societal exige, como concepto, la presencia de regímenes políticos democráticos y la organización autónoma de sectores sociales que intervienen institucionalmente en las decisiones sobre políticas estatales. Este principio rara vez se cumple en la región, porque aun en procesos nacional-populares con gobiernos democráticos la organización sectorial obedece en gran medida a la iniciativa y la gestión del Estado. En segundo lugar, a diferencia de la social-democracia europea, en la región el corporativismo no es un fruto de la evolución —y consiguiente institucionalización— de un sistema estable de relaciones laborales ni se asocia necesariamente a dicho sistema. En la región habría, sin embargo, casos de marcada corporativización, aunque en un sentido distinto y propio. El sistema estaría definido, por un lado, por el peso de las corporaciones estatales en la economía y de la modalidad bilateral —no mediada por el sistema partidario— de las relaciones entre el Estado y sus aparatos; por el otro, por la presión de los sectores sociales organizados. Podría hablarse, en consecuencia, de un corporativismo sectorial fomentado y creado por el Estado que puede interpretarse positivamente como mecanismo de modernización. Este modo de organización de intereses sociales privilegia la negociación sectorial y autónoma de cada interés sectorial con aparatos de la burocracia estatal.

La expresión "corporativismo sectorial" es usada por Muller y Saez "para designar un modo de organización de intereses sociales que privilegia, en el marco de procedimientos democráticos de decisión, la negociación sectorial, y autónoma, de cada interés con un elemento de la burocracia de Estado." Véase Muller, P. y Saez, G.: "Les médiations état-société et le néo-corporatisme", en d'Arcy, F. (comp.) *La représentation*, París, Económica, 1985, pág. 135.

Según Touraine lo esencial de los regímenes nacional-populares "es el predominio de las categorías políticas por sobre las categorías sociales y su corolario, la ausencia de diferenciación entre el sistema político y el Estado. Un régimen nacional-popular no puede existir si Estado, sistema político y actores sociales estuviesen separados unos de otros, si fuesen actores que tuvieran que negociar sus relaciones". Véase Touraine, A.: *La parole et le sang*, ob. cit., pág. 167.

acciones al juego intraestatal, la sociedad y los partidos acabaron por fetichizar el Estado.[11]

4) La relativa superposición de acciones sociales, políticas y culturales en los sistemas legitimados de acción colectiva. Esto hizo que el partido o los partidos políticos se hayan desempeñado al mismo tiempo como movimientos sociales, actores estatales y actores culturales, con lo cual muchas de las expresiones propias de la sociedad civil se fundieron con el Estado. En este marco, un líder sindical pudo ser a la vez dirigente partidario y funcionario estatal. El juego entre las clases y las culturas tenía el escenario del Estado. En la región, este constante desplazamiento hacia el Estado de las más diversas órbitas de la vida social ha obedecido, al menos en parte, a la débil conformación de las clases sociales y a la multipertenencia de varios grupos a distintas redes de relaciones sociales y culturales.[12] Sin embargo, generalizando puede decirse que tales movimientos nacional-populares intentaron combinar tres objetivos simultáneos: la modernización social (sobre todo por vía de la educación), la industrialización (mediante la consabida estrategia de sustitución de importaciones) y la integración económica y social.

5) Los movimientos nacional-populares, que canalizaron en la región la mayor parte de las iniciativas de modernización integradora,[13] consolidaron Estados autónomos y con legitimidad social, al tiempo que produjeron transformaciones profundas en la sociedad civil. Esto último es evidente al menos en dos planos. El primero fue la promoción, por parte de

11 Es ilustrativo el comentario que a este respecto formula N. Luhman: "En los países en vías de desarrollo en los que fue posible institucionalizar el relativamente bien esbozado objetivo de desarrollo económico del país como finalidad por excelencia del Estado, el sistema político presenta un grado de especificación de los fines que para nosotros (los países del centro) resulta inalcanzable; sólo por eso los procesos políticos en busca de consenso, de articulación o mediación de intereses, los mismos procedimientos 'democráticos' de formación de la opinión permanecen allí postergados… En ellos el partido político que ejecuta ese fin del Estado formula las preferencias del desarrollo según lo que el aparato administrativo esboza, cumple sus planes y trata de movilizar a la población en el sentido de esta preferencia". Véase *Fin y racionalidad de los sistemas*, Madrid, Ed. Nacional, 1983, págs. 200 a 201.

12 Véase Touraine, A.: *La parole et le sang*, ob. cit.

13 Véase Touraine, A.: *La parole et le sang*, ob. cit., y *La voix et le regard*, París, Seuil, 1978.

los movimientos nacional-populares, de organizaciones de base, principalmente sindicatos campesinos y obreros, así como otros organismos de movilización o negociación social. Este proceso implicó, de manera desigual y multiforme, iniciativas "asociacionistas" que en algunos casos desembocaron en genuinas experiencias de autogobierno. De modo que esta miríada de organizaciones no se redujo a relaciones de clientela política con líderes carismáticos y jerarquías partidarias, sino que también generó referentes grupales de identificación capaces de regular comportamientos cotidianos, permeando espacios tan íntimos como los de la familia o el barrio.

Los movimientos nacional-populares también "hicieron" sociedad en el sentido de fermentar un conjunto de valores, creencias y costumbres en espacios sociales donde se refuerzan comportamientos colectivos. La calle, la escuela, la cancha de fútbol, la peluquería de la esquina y otros tantos espacios del ocio, el consumo y el trabajo se convirtieron en unidades de reproducción social de la sociabilidad populista, condicionando claramente las expresiones culturales y artísticas, así como la vida cotidiana. Con ello, el populismo no sólo moldeó a sus adherentes: hasta las irascibles oligarquías mudaron de carácter cuando debieron confrontarse con los valores y modos de vida del populismo.

En síntesis, el movimiento nacional-popular y el Estado populista en que dicho movimiento cristalizó fueron canales de integración social, productiva y de consumo; se crearon y reconocieron políticamente los sindicatos y se establecieron formas de dominación clientelistas y prebendarias. Pese a esta primacía estatal, la sociedad tuvo capacidad de creación sociocultural. No cabe duda de que estos patrones paraestatales de modernización fueron la fórmula, más o menos espontánea, que encontraron sociedades barrocamente sincréticas para ingresar al mundo moderno, sin contar con relaciones sociales de clase fuertes u otras relaciones estables y diferenciadas. Tal vez por todo ello la modernización fue reclamada con pasión y conquistada sólo por retazos, quedando pendiente la promesa de una síntesis social acabada.

6) La dominación social obedeció a un núcleo de intereses políticos en los aparatos del Estado, donde se confrontaron los disímiles proyectos de los actores paraestatales. La burocracia estatal se consolidó, precisamente, como la forma institucional de equilibrar las presiones de estos grupos, vale decir, como sedimenta-

ción casi ritual, en el interior del aparato del Estado, de los conflictos emanados de la sociedad civil. La tendencia al corporativismo y al clientelismo político, tan marcada en los sistemas políticos y Estados latinoamericanos, se nutre originaria e incesantemente de esta fuerza centrípeta que desplaza las pugnas entre intereses sociales hacia el denso foco estatal. Sin embargo, los procesos no han sido homogéneos en la región y conviene señalar algunas distinciones básicas.

Un primer tipo corresponde a los casos en que esta modalidad del sistema político es el producto de movimientos populistas relevantes, fueran revolucionarios o reformistas. Ejemplos de ello, en la década del 40, son los casos de Bolivia y México, y en menor medida los de la Argentina y Guatemala; también se ajustan bastante a este tipo los gobiernos de Vargas y Goulart en Brasil, así como también de Torrijos en Panamá. En estos casos se verifica la coexistencia de un fuerte bloque popular con tendencias corporativas y clientelísticas que, sin dejar de ser orgánicas, fueron más plurales que en otros casos (esto último probablemente debido a la movilización social y política recurrente).

Un segundo tipo histórico lo componen aquellos casos donde la expansión estatal fue acompañada por el fortalecimiento del sistema de partidos —partidos que compiten efectivamente por el poder del Estado y se alternan en el gobierno en una secuencia cíclica que ya es parte del metabolismo estatal—. Bajo este patrón pueden agruparse, por ejemplo, países como Uruguay y Chile a partir de 1939, la Costa Rica de Calderón Guardia y Figueres, y muy particularmente Venezuela desde 1959 y Colombia en la llamada época "de la violencia" y durante el pacto entre liberales y conservadores (si bien en este caso no se promovieron reformas sociales sustanciales).

Un tercer tipo está compuesto por países que experimentaron ciclos tardíos o débiles de reforma estatal. Entre éstos, un extremo es el de Ecuador bajo el gobierno de Velazco Ibarra, en el cual predominaron conductas clientelares y caudillistas con escasa participación social autónoma, con un antecedente posterior en el gobierno de Roldós, que acentúa la orientación modernizadora y los esfuerzos de integración; en el otro extremo se sitúan países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay, en los cuales predominaron gobiernos dictatoriales y prebendalistas casi sin reformas sociales.

En el caso de los países centroamericanos señalados, el ciclo estatal fue tardío —sólo co-

bra impulso en los años 60— y se produjo cuando las fuerzas armadas, ante la inoperancia de grupos medios y populares para impulsar y consolidar reformas, se apoderaron del Estado en forma autoritaria y regresiva, renuentes a todo mecanismo de redistribución socioeconómica o de integración social amplia.

Un último caso, que no responde a los tipos precedentes, es el de Perú, pues si bien allí se inicia en la década del 50 un ciclo de modernización estatal bajo la hegemonía relativa de sectores terratenientes de la costa y de industriales limeños, el movimiento populista central en ese momento —el APRA— se encuentra excluido del sistema político. Curiosamente, el proceso reformista de corte populista aparece sólo en los años 60, bajo la conducción de un gobierno de las fuerzas armadas, con escasa participación de la sociedad y de los partidos políticos y con total exclusión del APRA, que retoma el proyecto populista cuando ya las relaciones internacionales y la estructura social peruana han mutado sustancialmente.

Resulta imprescindible anotar los procesos de desgaste o degradación —con ruptura del régimen político o sin ella— experimentados por este tipo de estados, pues el paulatino fracaso de los proyectos populistas tuvo como consecuencia el distanciamiento —a veces brutal— entre el Estado y la sociedad, manteniéndose empero las tendencias corporativizantes a favor de otros sectores y la evolución o ejercicio del patrón de intereses paraestatales. Estos fenómenos no son ajenos a los procesos de transnacionalización de la economía, con peso decisivo de las fuerzas armadas, pero aun en estas situaciones las experiencias guardan relación con la forma estatal anotada.

Al parecer, la región vivió un largo y asincrónico ciclo histórico estatista; sin embargo, esta suerte de Estado patrimonialista (social o políticamente regresivo o progresivo) se tornó cada vez más ineficaz tanto en términos de integración social como de acumulación y gobernabilidad de la economía, agravándose los problemas de estabilidad política y de legitimidad en el ejercicio del poder, temas que profundizaremos a lo largo del texto.

1.3. La transgresión del populismo

Con una perspectiva más global y retomando las preocupaciones de Medina Echavarría, habría tenido lugar una modernización trunca, de parcial y relativa integración social, generadora ella misma de las condiciones societales de su propio cuestionamiento, agravado

esto por las cruciales transformaciones del sistema internacional.

Si bien podemos reconocer analíticamente la inviabilidad histórica de aquel tipo de proyectos, no es menos cierto que actualmente también se gestan en varios países demandas populares de liderazgos populistas. Quizás esto ocurra por dos causas. Por una parte, esas demandas adquieren fuerza precisamente donde los gobiernos populistas no sufrieron un ciclo de descomposición social y más bien fueron derrotados por golpes militares cruentos; allí las mayorías reviven su imaginario histórico revalorizando experiencias de búsqueda de integración social. Por otra parte, favorece tal neopopulismo la ausencia de proyectos políticos para las grandes mayorías, que sean opcionales tanto a ese modelo estatista como a los modelos neoliberales en boga. Resta preguntarse sobre las posibilidades de superación, por parte de las fuerzas neopopulistas, de los proyectos políticos que les dieron preeminencia en el pasado. Es el tema de la autosuperación o transgresión del populismo en la búsqueda de opciones viables de desarrollo con integración social, pero en los marcos actuales. ¿Existen elementos en la propia dinámica de tales movimientos para introducir cambios necesarios en los métodos de acción política y en el diseño de políticas estatales? En otro texto decíamos que incluso esas posibilidades "no se definen sólo por el *telos* del movimiento; muy por el contrario, se definen en el propio campo del conflicto político, donde no sólo están presentes las oposiciones al autoritarismo y sus estructuras orgánicas, sino la propia capacidad de los sujetos políticos de superar, a partir de sus propias prácticas del pasado, sus métodos de acción política y sus metas sociales difusas".[14]

Una de las consecuencias de la crisis es la expansión de redes de relaciones sociales no plenamente capitalistas, no formales ni lógicamente modernas. Estas relaciones sociales introducen en el juego político un conjunto de demandas de integración y de identidad relativamente ausentes en una cultura política que se reclama racional.

Sin embargo, esta pretensión muchas veces encubre comportamientos y proyectos políticos propios de una comprensión inmediatista de la razón de Estado, de un progresivo y entendible sometimiento a la lógica dominante del mercado y a contenidos de la cultura política a nivel internacional, pragmática y neoliberal. La fotografía de Superbarrio, al lado de

14 Véase Calderón, F.: *Búsquedas y bloqueos*, La Paz, CERES, 1988, pág. 75.

Cuautémoc Cárdenas y de Muñoz Ledo, aclamados por las masas, y su triunfo electoral en la ciudad más populosa del continente, son un ejemplo de movilización que si bien difieren de las que suscitaron Bucaram en Guayaquil, Carlos Palenque en La Paz, el candidato electo Carlos Menem en su "menemóvil" recorriendo los suburbios de Buenos Aires y la victoria en las urnas de Erundina, del Nordeste, en el corazón de la ciudad más industrializada del Brasil, indican una misma revitalización en la búsqueda de integración e identidad sociales. Asimismo, el triunfo de Fujimori en el Perú es también un ejemplo de este tipo de situaciones.

Finalmente, una hipótesis por explorar sería que en aquellos países sin importantes procesos populistas, o donde éstos sufrieron una acelerada descomposición social y se instalaron regímenes dictatoriales, se desarrollan movimientos revolucionarios o terroristas; quizá sean una consecuencia más de los procesos de exclusión política y de la pervivencia de elites socialmente ineficaces.

1.4. Un patrón histórico en crisis

Ahora bien, la región está empezando a vivir un nuevo proceso de cambio cuyo resultado es incierto, pero teóricamente, como proceso de cambio, ¿qué conceptos son útiles para pensarlo y qué factores lo precipitan?

Los conceptos de patrón societal y de crisis adecuados a las características sociohistóricas de la realidad regional nos permitirán comprender mejor el surgimiento de los nuevos campos de conflicto y los desafíos históricos presentes hoy en la escena latinoamericana.

El primer concepto, el de patrón societal, se refiere a un conjunto de relaciones integradas al ciclo histórico estatal y estatista, y particularmente a la trama de relaciones políticas que organiza el estilo de desarrollo económico y la autocomprensión cultural de la época y de sus potencialidades sociales de cambio. Por consiguiente, dicho patrón societal hace referencia al orden social en sentido amplio, es decir no correspondiente sólo al régimen político sino a la peculiar articulación entre las dimensiones económicas, sociales y culturales.

El concepto de crisis se refiere a las dificultades de reproducir o de conservar el patrón estatal integracionista anterior (integración social más integración sistémica, en términos habermasianos). Si bien los patrones societales no están exentos de una permanente conflictividad, este sentido de la crisis es específico para las sociedades latinoamericanas, por el alto grado de

conflictividad social, inestabilidad política y de desarrollos económicos truncos y dependientes que la distinguen, lo cual se resume en una historicidad de origen colonial que no deja de reaparecer y de adaptarse a los procesos de cambio.

La mencionada historicidad reaparece en un patrón de dominación que combina sincréticamente relaciones interétnicas, interregionales, elite-masa, entre clases y de dependencia externa o interdependencia asimétrica entre los países periféricos y los centrales.

Quizás uno de los rasgos salientes de dicho patrón sea la persistencia de una suerte de elite política de larga duración, elite que no sólo concentró decisiones sino que también elaboró las más diversas ideologías y orientaciones políticas. Como el axelote mexicano que evoca Bartra para entender la identidad de su pueblo, estas elites políticas escasamente renovadas o reemplazadas se adecuaron y transformaron de acuerdo con las vicisitudes del poder, logrando instaurar toda una cultura política centralista, racista, verticalista y vicaria. Probablemente las características y los rasgos históricos de las diferentes elites nacionales marquen con fuerza los estilos de un dominio político cerrado y excluyente de las mayorías, aunque algunas veces logren representarlas. Analíticamente es importante remitirse a conceptos como los de "estratificación de clase de tipo colonial" o de sociedades dependientes, clasistas y estamentales para denotar que las relaciones sociales no sólo se refieren al orden jerárquico de clase sino a la presencia de un principio ordenador, que selecciona individuos o grupos para una relación específica con el poder político, la cual se estructura a partir de relaciones de clase pero va más allá de ellas, pues se recrea en un mundo sociocultural y político de gran persistencia histórica. Este concepto contribuye a la comprensión del desarrollo sociopolítico, cultural e histórico de las sociedades latinoamericanas. A través de él se puede trabajar sobre aquellos elementos más complejos y viscosos de la dominación, como también de las formas de oposición/resistencia y del sentido de los movimientos sociales y políticos. El régimen democrático que emerge con la crisis y, más aún, los procesos combinados de democratización y de modernización constituyen el punto de desequilibrio de este viejo andamio.[15]

15 Varios autores y textos han insinuado esta visión compleja de la dominación; sin embargo, la polémica teórica es todavía insuficiente y la investigación empírica no cruza las distintas variables. La noción de Wilson Cantoni de estratificación de clase de tipo colonial, elaborada hace más de veinte años, resulta sugerente. Véase Rex, J., Cantoni, W., y otros autores en UNESCO, *Raza y clase en la sociedad postcolonial*, París, UNESCO, 1978.

Pero el concepto de crisis también alude en nuestro caso a un momento de eclosión de múltiples realidades. En este sentido, la creciente descomposición del ciclo estatal iniciado en la posguerra también implica la gestación de nuevos campos de conflicto y de acción en estas sociedades, procesos más vinculados a las transformaciones en las sociedades y las culturas de los países centrales.

En los últimos diez años la forma estatal anterior empieza a tener importantes problemas para reproducir las relaciones con la sociedad y la economía que la caracterizaban, lo cual se podría rastrear históricamente para cada caso. Sin embargo, en la coyuntura uno puede fácilmente captar cuatro factores generales importantes, que desencadenan esa crisis del patrón histórico de modernización estatal.

1. Las distintas presiones provenientes del sector externo de la economía, como la tendencia al deterioro de los términos de intercambio y el pago de los intereses de la deuda externa, resultan para los estados muy difíciles de enfrentar.[16]
2. El incremento de las necesidades y demandas colectivas, en el pasado relativamente satisfechas por el Estado. Los actores sociales se movilizan para defender sus condiciones de reproducción y empiezan a criticar ya no sólo la incapacidad estatal sino también el tipo de articulación y de representación política estatal, incrementando así los riesgos para la estabilidad política democrática.
3. Las presiones políticas de corte conservador, cerradamente antiestatistas, traducidas en políticas neoliberales, intensifican la incapacidad estatal, afectando la acumulación en el sector público y tendiendo a privatizar la economía y a dar predominio al mercado como mecanismo de regulación.[17]
4. Finalmente, cabe agregar el brutal agravamiento de la ineficacia de los mismos apa-

16 Según CEPAL, "un índice ponderado de los precios reales de 27 productos básicos que la región exporta, contando los combustibles, revela un deterioro de más de 25% entre 1980 y 1989. Si se excluyen los combustibles, ese deterioro alcanza un 20%". Véase CEPAL, *Transformación productiva con equidad*, Santiago de Chile, CEPAL-Naciones Unidas, 1990, pág. 24.
En cuanto a la incidencia de la deuda externa, cabe señalar que la relación deuda/PIB pasó del 38% en el período 1970-1981 al 56% en el período 1982- 1987. Véase CEPAL, *Balance preliminar de la economía latinoamericana*, 1988, Santiago de Chile, CEPAL, 1988.

17 Véase el capítulo 7 de este libro.

> ratos del Estado, no sólo para satisfacer las demandas provenientes de la sociedad, sino también las que conciernen a su propio funcionamiento. La desorganización, la irracionalidad y, en algunos casos, el desmantelamiento técnico de los aparatos del Estado son también factores centrales que explican las imposibilidades de reproducir el patrón anterior. Incluso los conflictos y desacuerdos entre el Ejecutivo y otras esferas de la acción estatal, además de los conflictos entre las distintas empresas estatales y los aparatos burocráticos, promueven importantes situaciones de ingobernabilidad en el ámbito del propio Estado.[18]

Respecto de los conflictos entre el Ejecutivo y otras esferas de la acción estatal, puede anotarse que en los procesos de apertura política en la región, con la consiguiente reconstitucionalización democrática de los poderes públicos, necesariamente se producen tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y entre este último y el Legislativo, más allá de las tensiones naturales propias de un régimen democrático liberal estable. El juzgamiento o no de gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de gobiernos dictatoriales anteriores y las competencias y decisiones estratégicas del Ejecutivo y el Legislativo al respecto en presencia de presiones sociales son fuente de tales tensiones, como también lo son el distanciamiento entre estos dos poderes debido a la puesta en práctica de políticas, sobre todo las de ajuste estructural, que difícilmente pueden obtener consenso entre los representantes parlamentarios, a veces incluso entre los pertenecientes al partido de gobierno. La dura racionalidad económica, socialmente regresiva, que se impone en las decisiones socava la legitimidad de éstas, comprometiendo así la legitimidad de los actores partidarios.[19] Su posición pare-

18 Son parte de ello los fenómenos de irracionalidad advertibles en la proporción del gasto corriente sobre la inversión (sobre todo a nivel municipal), en los conflictos intraestatales tan fuertes que impiden la acción, etc. Los intentos de recuperar poder para el ejecutivo en el aparato estatal señalan, a su vez, una reacción a lo antedicho. Véase Borja, J., Calderón, F., Grossi, M. y Peñalva, S. (comps.), *Descentralización y democracia. Gobiernos locales en América Latina*, Barcelona, CLACSO/SUR/CEUMT-Santiago de Chile, 1989.

19 Respecto del caso de Brasil, véase Diniz, E. y Boschi, R.: "La consolidación democrática en Brasil: procesos sociales, intermediación de intereses y modernización del Estado"; respecto del caso de Perú, Adrianzen y otros: "Democratización y modernización del Estado:

ce oscilar entre compartir la crisis del Estado y ser blanco de las mismas críticas que a él se dirigen, tanto por racionalizar ante la sociedad las decisiones del ajuste o por desplazarse hacia una oposición nuevamente populista ante la dificultad de encontrar un modelo viable de gestión de la economía construido desde las expectativas sociales de las mayorías y con ellas. Se ha dicho al respecto que no hay aún, ni siquiera en el nivel conceptual, con una elaboración acabada, un modelo de gestión de la economía desde lo social.[20]

Por supuesto, en esto intervienen las transformaciones en la economía y la política internacionales, que afectan decisivamente los procesos de cambio de las relaciones entre la sociedad, la economía y el Estado en la región. Efectivamente, la emergencia de la llamada

el caso peruano"; respecto de Ecuador, Echeverría, J., y Verdesoto, L.: "Democratización y modernización del Estado en el Ecuador."; respecto de Bolivia, Mayorga, R., "Democratización y modernización del Estado: el caso de Bolivia"; y respecto del caso argentino, Acuña, C., y otros, "Estado, política y actores sociales en la Argentina contemporánea". Todos estos trabajos forman parte de la serie ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina? Democratización/modernización y actores socio-políticos, Buenos Aires, CLACSO, 1988, vols. 1 y 2.

20 Existiría en el sistema partidario una marcada incapacidad de "aportar respuestas a la nueva coyuntura económica y política, reproduciéndose la disociación entre partidos y sociedad. El retraimiento e inmovilismo de los partidos acentuó la tradición de centralidad del ejecutivo, determinando la pérdida de la iniciativa frente a la Presidencia y a la alta burocracia. […] Además persistió, bajo el nuevo régimen, un estilo tecnocrático y cerrado de gestión de la economía, que apartó los partidos y el Congreso de decisiones estratégicas para la vida del país". Este confinamiento genera "un círculo vicioso que exime a los partidos de responsabilidad por la eficacia de las medidas adoptadas". Véase Diniz, E., y Boschi, R.: "La consolidación democrática en Brasil: procesos sociales, intermediación de intereses y modernización del Estado", en *¿Hacia un nuevo orden estatal…*, ob. cit., vol. 2, pág. 86.
En esta misma dirección, Francisco Oliveira sostiene: "Si los movimientos sociales fueran capaces de pactar en asuntos que van desde la cuestión del Banco Nacional de Vivienda y del Sistema Financiero de Vivienda, pasando por las tarifas de los servicios públicos, por la organización de los transportes y por la resolución de pequeños problemas de alcance local, entonces en rigor se estaría fijando un nuevo modelo económico a partir de lo social". En la medida en que la línea directriz esté determinada desde la economía, se analizará la realidad a partir de un modelo de ciencia económica normal, que no puede pensar saltos cualitativos, convirtiéndose en el sostén teórico de los intereses conservadores constituidos. Véase de Olivera, F.: "Crisis económica y pacto social", en *Concertación político-social y democratización*, dos Santos, M. (comp.), Buenos Aires, CLACSO, 1987, pág. 159.

"sociedad programada"[21] o del paradigma tecnológico en el centro, incide fatalmente en el curso de las sociedades latinoamericanas, tendiendo a determinar la inserción y la situación de los distintos países en el sistema internacional, como veremos más detenidamente en un capítulo posterior.[22]

Como nunca la interdependencia transnacional afecta las posibilidades de las sociedades periféricas, lo cual, en términos más globales, está relacionado con los nuevos ejes de estructuración societal, que ya no pasan directamente por el trabajo y la industria sino por desarrollos organizacionales y saltos en la productividad derivados de la microelectrónica, de la informatización y del papel desempeñado hoy por las comunicaciones.

Muy brevemente destacamos las siguientes dinámicas.

1) Se ha dado una reestructuración radical de la relación capital-trabajo con el impulso decisivo de la revolución tecnológica y del rol del capital financiero. Todos los procesos de acumulación de capital se basan en la productividad del capital y cada vez menos en la productividad del trabajo, lo cual se expresa en complejos procesos de reconversión económica, que reorganizan los procesos de producción a gran escala y a nivel internacional. De esta forma se producen transformaciones fundamentales en las condiciones de trabajo (como la automación), así como cambios en el papel que en la modernidad tiene la industria como organizadora de relaciones sociales. En el pasado, el proceso organizador de las relaciones sociales y del desarrollo dependía fundamentalmente del papel que desempeñaban las industrias en la definición del perfil económico e histórico de la sociedad moderna.[23] Actualmente, si bien persisten

21 Según A. Touraine, la sociedad programada es aquella con "capacidad de crear modelos de gestión de la producción, la organización, la distribución y el consumo de manera que semejante sociedad aparezca en todos sus niveles de funcionamiento como producto de una acción ejercida por la sociedad en sí misma y por sistemas de acción social y no como producto de leyes naturales o particularidades culturales". Véase Touraine, A.: *El regreso del actor*, Buenos Aires, EUDEBA, 1987, pág. 142.

22 Véase Touraine, A.: *El regreso…*, ob. cit., así como Castells, M.: The informational city. Information, technology, economic restructuring, and the urban regional process, Oxford, Basil Blackwell, 1989.

23 Como lo explicaba bien Marx en el tomo III de El Capital, cap. 36, cuando afirmaba el papel determinante

aquellas tendencias, comienzan a predominar formas de organización de la vida económica y sociocultural a partir de una programación transversal posibilitada por la informática y la microelectrónica, la cual incide en forma determinante en la constitución del sistema de comunicaciones como organizador de nuevas relaciones de dominio y de conflicto.[24]

del capital industrial sobre la organización de la sociedad en su conjunto.

24 El proceso de reestructuración de la economía mundial interconectó aquellos segmentos de cada sociedad y de cada economía que eran funcionales al mismo, prescindiendo del resto.
Manuel Castells sostiene que: "para esto se dejaron de lado a todos aquellos segmentos de sociedades y, en verdad, a cientos de millones de personas innecesarios en esa lógica como productores, consumidores o gestores". Agrega además que "la capacidad de generar y tratar información y nueva información se convierte en la principal fuente de poder. Todas aquellas sociedades que, por sus condiciones históricas de dominación, por su incapacidad de generar tecnología propia en función de sus condiciones institucionales, no son capaces de entrar al menos en un nivel de asimilación tecnológica, son sociedades absolutamente sometidas al dictamen de los centros de poder tecnológico […]. Hoy por hoy, la capacidad tecnológica señala grados de poder en el sistema de dominación política". Véase Castells, M.: "Cambio político versus cambio social. Cambio social versus cambio político. Testimonio de una trayectoria intelectual", en *David y Goliath*, nº 43, Buenos Aires, CLACSO, noviembre de 1986, págs. 10 y 11.
El mismo autor, en una obra posterior, profundiza acerca de esta problemática. Según su opinión se estaría ante la emergencia de "un modo de desarrollo informacional, distinto del modo de desarrollo industrial, y que se caracteriza por el papel central de la generación y tratamiento de la información en todas las actividades productivas y de gestión. […] Conocimiento e información parecen ser pues los elementos fundamentales de la ecuación de productividad en las economías avanzadas". Las consecuencias de este proceso para el orden mundial se ponen de manifiesto en el hecho de que: "muchos países que se desarticulan de la dinámica de la economía mundial y entran en un proceso de subdesarrollo, tienden a efectuar movimientos compensatorios y entran en una dinámica que llamamos de integración perversa, como es el caso particular de varios países de América Latina en que el narcotráfico […] se ha convertido en el sector fundamental de la economía nacional". Véase Castells, M., *Nuevas tecnologías, economía y sociedad*, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1989, págs. 32 y 54.
En una dirección similar, Alain Touraine señala que "lo específico de una sociedad posindustrial es introducir grandes aparatos centralizados de gestión en los dominios más diversos de la vida social. De esta forma, se habla de industrialización, información, consumo, salud, investigación científica y aun de enseñanza general. El término es inexacto pero indica a las claras que se forman centros de decisión y gestión capaces de producir no sólo sistemas de medios sino también objetivos de la actividad social, tecnologías de la salud, del

2) Una de las consecuencias de estos procesos es la conformación de una nueva división internacional del trabajo, donde las economías que tienen capacidad de articular empresas en cadena y capacidad de expansión del capital financiero ocuparán una posición dominante en el mercado internacional.[25]

Por el contrario, aquellas economías que se integren parcialmente a este desarrollo o no alcancen a participar en él tenderán a ocupar una posición inferior en el mercado internacional o a estar excluidas de él. En ese sentido, la forma de inserción en el mercado internacional pasa a ser un condicionante fundamental de las economías nacionales. En el caso de Latinoamérica es posible visualizar una diversidad de situaciones que redefinen en la región los procesos económicos, donde particularmente Brasil y México tienden a alcanzar una posición de integración mayor que el resto de los países.[26]

Sin embargo, fenómenos negativos homogeneizadores de la posición global latinoamericana son los de la deuda externa y del deterioro de los términos de intercambio, sobre todo para las economías exportadoras casi exclusivamente de bienes primarios, incluso en los casos en que las estructuras regionales de mercado se vuelven más complejas. En el análisis de prospectiva económica que se incluirá más

consumo o de la información. Esta movilización ofrece muchas oportunidades a los individuos pero implica el riesgo de acrecentar la capacidad de manipulación de un poder absoluto". Para finalizar sostiene: "Las elecciones tecnológicas son ante todo opciones políticas y sus efectos traducen el estado de las relaciones entre las fuerzas sociales".
"La información se relaciona cada vez más con la decisión, o sea con el dominio y la capacidad de programar, esto último asociado con el poderío y el costo creciente de los medios de comunicación." Véase Touraine, A.: *El regreso del actor*, ob. cit., págs. 143, 147 y 148.
Un análisis más específico y de bibliografía técnica podrá encontrarse en los próximos capítulos.

25 Véase CEPII, *Economie mondiale 1980-1990: la fracture?*, París, Economica, 1984, fundamentalmente el capítulo 3 "Industrie: la disparité des forces", pág. 105.

26 Las instalaciones masivas de plantas maquiladoras en la frontera mexicana y las grandes inversiones en infraestructura hechas por ese país testimonian fuertes flujos de inversión, como también los desarrollos de la industria brasileña y su capacidad de competencia en los mercados internacionales en varias ramas, frente a logros más modestos o nulos de otros países. Véase, por ejemplo, De la Garza Toledo, E.: "La reconversión industrial en México", ponencia presentada en el Tercer Seminario Internacional, grupo de trabajo Empresarios y Estado, CLACSO, realizado en Buenos Aires los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1988.

adelante se prevén pérdidas progresivas por parte de las economías latinoamericanas en el mercado mundial.

3) Asimismo, se han dado reducciones y cambios en el Estado de bienestar en los países centrales, acompañados por la acción de dinámicas fuerzas conservadoras que aspiran a asignarle un rol totalizador al mercado en la regulación de las relaciones sociales y políticas. Este fenómeno es paralelo al incremento de los gastos en la carrera armamentista.[27]

Una de las consecuencias más importantes ha sido la pérdida de fuerza de las visiones integracionistas del desarrollo y de la economía política, no sólo a escala nacional sino a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a los países del Tercer Mundo. Tales visiones, así como los resultados integradores concretos de la intervención de la política en la economía, como se sabe, fueron la más importante fuente de legitimidad en el pasado, fuente por otra parte insustituible y que al perder peso impide reformular en forma democrática el sistema de reglas de ejercicio del poder, cuyo respeto es la otra gran fuente de legitimidad.[28]

4) Otro cambio fundamental es el del mundo socialista y en particular el de la Unión Soviética, donde paralelamente se comienzan a producir procesos de apertura política y de mayor integración al mercado internacional. No se sabe a ciencia cierta qué consecuencia tendrán esos acontecimientos en América latina, pero sin duda sus resultados afectarán procesos políticos y económicos en la región. En este contexto, uno puede preguntarse sobre las posibilidades de que los acuerdos políticos en torno del desarme lleguen finalmente a liberar fondos, y sobre el destino de éstos. No obs-

27 Asimismo, gran parte de la nueva tecnología proviene de la industria bélica. La consigna del imperio pareciera ser, basándose en la evolución de los gastos en el rubro, del Welfare State al Warfare State, pese a la temática del desarme en la agenda de los poderes públicos. Según un artículo aparecido en el *New York Times*, sólo Estados Unidos tiene un promedio de inversión en industria bélica de 300.000 millones de dólares anuales en el último lustro.

28 Una idea que se revela falsa en este proceso es la del crecimiento ilimitado de la producción, idea compartida por Marx y por Keynes, verificándose en la crisis del Estado de bienestar —ya innegablemente— el agotamiento de recursos naturales no renovables y en general los límites físicos existentes para aquel crecimiento ilimitado. Véase Habermas, J.: *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires, Amorrortu, 1983, págs. 58 y 59.

tante, más recientemente se han iniciado tres procesos de trascendencia inusitada: en primer lugar, el inicio de una franca transición hacia la economía de mercado, en la cual la reforma antiestatal se identifica ideológicamente con la privatización; en segundo lugar, un caótico proceso de democratización sin estructuras partidarias ni tradiciones institucionales democráticas, en el cual los partidos comunistas se disocian y se reconstituyen en función de intereses locales, lealtades corporativas, etcétera, por ello con serias dificultades para configurar un verdadero sistema de partidos. En tercer lugar, se ha operado un proceso de descomposición y reconstitución nacional en el conjunto del ex mundo socialista, generándose un abanico de situaciones que van desde el caos nacional total hasta procesos de reunificación nacional, como ocurre en Alemania.[29]

5) Una de las características de la sociedad programada es la tendencia al cuestionamiento de los valores centrales que organizaban y daban sustento al orden político democrático propio del Estado de bienestar, valores de cuño universalista que servían para pautar los conflictos sociales y para imprimir determinada racionalidad al sistema y a las relaciones intersubjetivas. Aparentemente, hoy la programación de la sociedad como mecanismo de control consciente y deliberado de vastas áreas de la vida colectiva e individual produce una eclosión de conflictos tanto a nivel micro, derivados de los procesos de fraccionamiento y diversificación de la sociedad (familia, sexualidad, educación, sub-

29 Sobre este tema pueden consultarse los trabajos de Popov, G.: "La degradación de la economía soviética", en *Política Exterior*, vol. IV, núm. 16, 1990; Sanz, J. L.: "Crisis y reforma económica en la URSS (I)", *Boletín de Información Comercial Española*, núm. 2255, noviembre de 1990, y la segunda parte de este trabajo publicada en el número 2257 de este mismo boletín y en el mismo año; Taibo, C.: "La cuestión báltica", *Cuadernos del Este*, núm. 1, octubre de 1989. Véase también en un volumen del *Journal of Democracy*, dedicado a los problemas del poscomunismo, los artículos de Geremek, B.: "Civil society. Then and now"; Rose, R.: "Toward a Civil Economy"; Rice, C.: "The military under democracy"; Karantnycky, A.: "The battle of the Trade Unions"; Jasiewicz, K.: "From solidarity to fragmentation" en *Journal of Democracy*, vol. 3, núm. 2, abril de 1992, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992.
Respecto del caso polaco, véase Pastusiak, L.: "Transformación política y económica en Polonia: una perspectiva internacional", en Teach, C. (comp.): *Crisis y transiciones*, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 1991.
Una perspectiva más global de esta problemática puede hallarse en Bresser Pereira, L. C., Maravall, J. M., y Przeworski, A.: *Economic Reforms in New Democracies*, trabajo del cual se contó con artículos mecanografiados.

culturas, etcétera) como macro, o sea aquellos relacionados con la degradación planetaria del medio ambiente, con los efectos de la carrera armamentista y con las nuevas fuentes de inseguridad e incertidumbre en la vida cotidiana.

Estos cambios adquieren un significado específico en América latina a raíz de la crisis que vive la región y de la persistencia de desigualdades nacionales, sociales y culturales de larga data, complicando de una manera extrema el proceso histórico y las posibilidades de comprenderlo.[30]

La información está directamente ligada a la decisión, es decir al poder, a la capacidad para programar, y esto es precisamente lo que hoy empieza a estar en juego. Germani, con cierto tono catastrófico, señala que el proceso de secularización social es tan dinámico y universal que logra cuestionar y debilitar los nudos de integración social y de consenso democrático. La democracia tendería a ser cada vez más instrumental y legal y menos sustancial y legítima, como resultado brutal de la concentración del poder y del fraccionamiento de la sociedad. La tendencia se caracterizaría por una sociedad cada vez más internacionalizante, programada desde la contabilidad del cálculo y la previsión, símbolos del nuevo capitalismo.[31]

Interesa destacar, polémicamente, que la complejidad adquirida por la sociedad y visualizable en la escena pública, en los medios masivos y en la vida cotidiana, no parece afectar sin embargo la percepción de la gente en cuanto a su capacidad de intervenir en forma responsable en los asuntos públicos. La impotencia deriva del funcionamiento de los sistemas políticos que no recogen ese potencial de participación sino que se protegen de él, lo cual es claramente autopercibido.[32]

30 Alain Touraine sostiene que una sociedad programada generará una más alta interdependencia de los aparatos de dominación: "El desarraigo, la modernización, la aceleración del cambio: ¿no están favoreciendo quizá la omnipotencia de un poder central capaz de imponer su voluntad en una sociedad atomizada por la destrucción de comunidades y tradiciones?". Véase Touraine, A., *El retorno del actor*, ob. cit., pág. 234.

31 "La programación del hombre, que ya ha empezado […], es un destino inevitable si no se modifican sustancialmente algunas de las características sociales y tecnológicas de la sociedad industrial". Véase Germani, G., "Autoritarismo y democracia", en *Crítica y Utopía*, nº 1, Buenos Aires, CLACSO, 1978. Un testimonio de la incipiente discusión latinoamericana sobre el tema puede hallarse en autores varios: *Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada postmoderna*, Buenos Aires, CLACSO, 1989.

32 Véase al respecto la investigación empírica de Ronald Inglehart "La nuova partecipazione nelle società post-

6) Finalmente, los procesos de internacionalización de la cultura constituyen otro hito de las transformaciones de la sociedad moderna, como producto de las nuevas tecnologías y del impacto de los medios de comunicación de masas. Estamos frente a una nueva interdependencia en el campo de las comunicaciones, interdependencia asimétrica entre diferentes países, culturas, clases sociales, comunidades, etcétera. Este proceso de internacionalización de la cultura presenta una tensión intrínseca entre la velocidad de la comunicación impulsada por los mercados culturales, por un lado, y los procesos de recepción y de interacción con ellos por parte de los sujetos. La información sobre lo que nos atañe no incrementa proporcionalmente las posibilidades de acción sobre ello.

Desde la perspectiva latinoamericana tales dinamismos no sólo plantean la presencia de nuevas formas de dominación cultural sino también nuevas amenazas para el carácter pluricultural latinoamericano. Una cosa es la segmentación de mercados culturales determinada por la expansión y diferenciación del consumo de bienes culturales, que llega a cubrir para su desarrollo las producciones más diversas a partir de condiciones socioeconómicas de públicos que lo posibilitan, y otra distinta es ese proceso de segmentación sobredeterminado por grandes exclusiones. Es infinitamente más fácil que la familia Kimberley produzca la serie *Dallas* que los Mamani se saquen el Oscar con una historia de los Katari.[33]

Por estas razones creemos poder concluir este capítulo afirmando sin ambages que las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía que vivió la región de muy diferente manera en cada país, durante buena parte de este siglo, se están agotando, y la historia comienza a ser construida sobre la base de relaciones diferentes. El núcleo de ello podría rastrearse en las nuevas políticas estatales y en las reacciones y comportamientos de una gama novedosa de actores sociopolíticos y socioculturales. El resto del texto apuntará a comprender estos nuevos escenarios a partir de tres dimensiones analíticas: la democratización y modernización del Estado, el ajuste económico estructural y los nuevos procesos culturales.

industriali", en *Rivista Italiana di Scienza Politica*, nº 3, año XVIII, diciembre de 1988, Florencia, Il Mulino, pág. 403.

33 Véase García Canclini, N.: *Culturas híbridas*, México, Grijalbo, 1989.

Hacia un nuevo orden estatal en América Latina

Veinte tesis sociopolíticas y un corolario de cierre*

Fernando Calderón G. y Mario R. dos Santos

Las sociedades latinoamericanas viven actualmente circunstancias particularmente difíciles, derivadas de un sinnúmero de privaciones económicas y de complejas mutaciones socio-políticas que no alcanzan a revertir las perspectivas de la región en el mundo. La inmediatez de situaciones de caos generalizado resulta innegable, como así también, en algunos casos, los riesgos de destrucción nacional. Ciertamente, en medio de la crisis, la región también ha avanzado en un proceso de racionalización económica y política, muy a menudo con costos sociales altísimos, pero ha avanzado. En este sentido, débese reconocer que las sociedades latinoamericanas buscan resolver sus problemas y determinar su posición en el mundo de manera democrática. No obstante esto, las tendencias económicas prospectivas se presentan como amenazadoras del orden democrático –que tanto cuesta mantener– y, asimismo, como amenazadoras de las potencialidades de desarrollo.

En el corazón de estas mutaciones está el Estado, en actual proceso de transformación, y por lo tanto renovando sus vinculaciones con la sociedad y la economía. Ante ello, las ciencias sociales buscan no sólo diagnosticar acabadamente la situación y visualizar los escenarios futuros, sino incidir como tales en la búsqueda de opciones políticas de desarrollo.

Sirviendo esa intención presentamos estas veinte tesis socio-políticas que sintetizan –en nuestra comprensión– resultados de estudios realizados por múltiples equipos de investigadores, prácticamente en todos los países de la región y en el Caribe, durante los últimos tres años[1]. Hay que

* Este trabajo fue publicado originalmente en Revista *Nueva Sociedad*, Nº 110, noviembre-diciembre 1990, pp. 50-65.

1 Cf. la serie *¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?*, ocho volúmenes: 1y 2, *Democratización/*

señalar que se trata de tesis generales sobre tendencias y procesos empíricos, los cuales fueron tratados primero a nivel nacional, para luego intentar con esa base una síntesis regional.

La tarea analítica tuvo una doble peculiaridad:

– En primer lugar, integró los diferentes actores político-sociales (Estados, partidos, corporaciones, movimientos sociales) y sus comportamientos, pues sólo con una perspectiva tal se pueden comprender aspectos decisivos de los procesos económico- sociales y culturales presentes en la región. Las dimensiones del análisis fueron las tendencias y los procesos de democratización/modernización del Estado, de innovación en políticas económico-sociales, de descentralización territorial y de las políticas y los procesos culturales.

– En segundo lugar, afrontó este desafío intelectual sin negar las enormes limitaciones que impone. La pretensión fue, por lo tanto, proporcionar una visión socio-política regional plena de implicaciones, pero sin elaborar en detalle esas implicaciones que las condiciones analizadas podrían tener o ya tienen.

Igualmente, el carácter esquemático de esta forma de presentación le resta obligadamente densidad histórica a las tesis, pero es con esta última que se las podrá enriquecer, matizar e incorporar con provecho. En el conjunto de tesis, la primera es de índole teórico-metodológica, la 2 a la 6 tienen énfasis en los procesos de democratización/ modernización; la 7 se refiere a problemas regionales y locales; en tanto las tesis 8 a 13 tratan los procesos de ajuste estructural; la 14 se refiere a cambios en la dimensión cultural y las últimas cinco esbozan escenarios, sociopolíticos de mediano plazo y apuntan una conclusión de cierre. Respecto de las tesis sobre escenarios, conviene puntualizar lo siguiente:

– el marco general en el que se plasman los escenarios construidos está dado por la insoslayable reinserción de los países latinoa-

modernización y actores sociopollticos,' 3 y 4, *Los actores socioeconómicos del ajuste estructural;* 5 y 6, *Centralización/descentralización del Estado y actores territoriales*,' 7 y 8, *Innovación mltural y actores socioculturales*, Biblioteca de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires, 1987 a 1990.

mericanos en la economía mundial, a impulsos de las nuevas condiciones de la misma, y simultáneamente por la mayor complejidad y aceleramiento de los procesos de diferenciación social internos

– la conjugación de uno y otro proceso (reinserción y diferenciación) fija los límites a los escenarios, en una perspectiva a mediano plazo, siendo el límite inferior la desnaturalización del régimen democrático en cualquier acepción de éste (por ejemplo, debido a la ocurrencia de represiones masivas) y la perpetuación de condiciones crónicas de estancamiento, aun con ajuste fiscal y otras políticas de ajuste estructural
– si bien se tomaron en cuenta prospectivas macroeconómicas[2], el punto de partida básico estuvo dado por las combinaciones y articulaciones de la acción político-social
– los cuatro escenarios construidos pueden ser considerados como un continuo-discreto de "situaciones ideales", incurriéndose por lo tanto en una falacia si se adscriben mecánicamente determinados países a determinados escenarios; lo que los escenarios permitirían afirmar es, por una parte, que en determinadas situaciones o coyunturas predominaron ciertas tendencias en ciertos países y, por otra, que en mayor o menor medida los cuatro escenarios son posibles prácticamente en casi todos los países de la región, dependiendo su efectivización en gran parte del comportamiento de los diferentes actores sociopolíticos
– cabe por último señalar que quizás la mayor utilidad de los escenarios sea la de permitir identificar las condiciones por las cuales puede haber tránsitos de un escenario a otro, o sea emplearlos en un sentido dinámico.

No obstante, los primeros tres son posibles con distinto grado de probabilidad y el cuarto constituye una imagen óptima de salida de la crisis.

Este último escenario corresponde al planteo de una reforma política democratizante que garantice una reinserción activa y selectiva en el nuevo escenario mundial, capaz de contener metas propias de desarrollo.

2 Bouzas, Roberto: "los escenarios económicos internacionales de corto y mediano plazo y América Latina: una revisión de proyecciones disponibles", Proyecto RLA 86/001 PNUD-UNESCO-CLACSO, Buenos Aires, octubre de 1989.

TESIS 1

En la reestructuración de la economía mundial y en su incidencia sobre la región hay un alto componente sociopolítico y no meramente económico, pues es falsa la derivación mecánica "crisis = ajuste estructural".

El ajuste estructural en la región está condicionado por tendencias macroeconómicas que constituyen datos duros de la realidad. Esos son los grandes desbalances en el sector externo de nuestras economías, ya no financiables mediante financiamiento externo ni endeudamiento interno. De allí la inclinación a identificar los elementos antes mencionados de crisis con un inevitable ajuste. Se trataría de una imposición unívoca del sistema económico en operación, no maleable por lo tanto en su contenido y sólo superficialmente en sus políticas.

Sin embargo, es demostrable que el ajuste estructural de la deuda externa, se plasma mediante estrategias sociopolíticas de sus actores fundamentales, que lo matizan en cuanto a orientaciones y resultados; inclusive no puede entenderse sino en un contexto de desestructuración de las acciones colectivas y de ineficaces intentos defensivos en el seno de nuestras sociedades. Tanto unas como otros remiten a comportamientos de actores políticos y sociales, a resultantes específicas de interacciones entre ellos. Hay historia aun en lo más predeterminado por el sistema.

La centralización del poder de decisión en los países centrales, la promoción pública de valores funcionales a los lineamientos de la reestructuración de la economía mundial y al lugar asignado en ella a América Latina, no quitan que el ajuste estructural sea resultado de combinaciones y articulaciones de la acción político-social, las cuales introducen modalidades diferenciadas del mismo.

No hay un solo tipo de ajuste en sus políticas y en sus efectos; hay reinserciones en la economía mundial más activas o más pasivas, meras reducciones del gasto interno versus reconversiones económicas, mayor o menor vulnerabilidad de las estructuras productivas resultantes, efectos sociales compensados o no, incidencias variables en los regímenes y en los sistemas políticos, mutaciones en la cultura política y en la percepción de las transformaciones contemporáneas por parte de los distintos actores.

Todo ello no puede rastrearse sino en los comportamientos de actores políticos y sociales que moldean la reestructuración, la reorientan, frenan o impulsan. Ellos intervienen en el sistema político para servir sus posicio-

nes, pautando el funcionamiento del propio sistema político y con ello la calidad del régimen democrático.

TESIS 2

La reestructuración de la economía mundial implica una inevitable reinserción en ella de los países latinoamericanos. Tal reinserción puede ser devastadora si se da a través del mero incremento de la capacidad exportadora a costa de la desorganización de la matriz productiva interna. Para volverla fecunda, el Estado y los actores sociopolíticos deben combinar un necesario incremento de las exportaciones con una endogeneización del desarrollo.

El actual proceso de reestructuración de la economía mundial implica una alta interdependencia asimétrica de las diferentes economías transnacionales, regionales y nacionales que se organizan en función de las pautas políticas de las economías centrales, especialmente de los Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea y de Japón.

El nudo de la reestructuración, más allá de los importantes ajustes financiero-comerciales de coyuntura, está constituido por el papel que juegan las revoluciones tecnológicas (particularmente la microelectrónica y la informática) en los procesos de gestión y programación de los diferentes órdenes de la vida económica, social y cultural de las sociedades. En este sentido, la fuerza de la reestructuración es tal, que ya no es posible actuar sobre la base de políticas y procesos autónomos o independientes.

La forma de la nueva integración a la economía mundial y sus resultados sociales constituyen el desafío de los diferentes estados y demás actores sociopolíticos latinoamericanos. Puede haber desde búsquedas de integración mediante procesos de mera racionalización económica o mediante reconversiones parciales desindustrializantes, o mediante una reconversión económico-industrial que sirva a metas de desarrollo nacional, o inclusive una incorporación mediante la droga, el contrabando o la pura intermediación financiera.

Cuando la articulación con la economía internacional es más difícil de resolver o se resuelve perversamente, por condiciones económicas o políticas negativas, el costo social será más alto. En cambio, cuando el Estado tiende a racionalizarse y a tener mayor eficacia en sus políticas, tanto de articulación con la economía externa como de regulación e integración de actores en el sistema de toma de decisiones, mediante procesos de negociación, pactos o in-

tercambios políticos, los costos sociales serán también menores y los procesos de reinserción socialmente más sólidos. Tal racionalización implica entre otros aspectos perfeccionar el sistema impositivo, eliminar selectivamente los subsidios al sector empresarial privado y público y fortalecer y crear mercados.

Un fenómeno que resalta como peculiaridad en el desarrollo capitalista de la región es que el Estado haya promovido y organizado un capitalismo asistido (empresas privadas subvencionadas constantemente por el erario público), sin gradualmente exigirles como contraparte un pleno funcionamiento empresarial competitivo.

TESIS 3

En América Latina se acaba el ciclo de un patrón estatal organizador del desarrollo. Esto implica un desplazamiento del núcleo de decisiones hacia el conjunto del sistema político. Dicho desplazamiento no es unívoco, pues puede expresarse en un particularismo corporativo o de grupos de interés en la toma de decisiones o, al contrario, en una capacidad de los actores socio-políticos para asumir tareas globales (es decir, nacionales).

Desde la crisis del 30 y en algunos casos nacionales antes de ella, de manera irregular y diversa, el Estado empezó a cumplir en la región un papel clave como ordenador de las relaciones entre la sociedad y la economía, articulando el desarrollo económico y las relaciones socio-políticas nacionales. El sistema político en tanto sistema de toma de decisiones, se concentró en el Estado, y especialmente en el Poder Ejecutivo.

Concurrentemente, el núcleo de actores e intereses socio-políticos predominantes se constituía en el Estado mismo y desde allí se organizaban las relaciones con la sociedad y con el sistema internacional. Se puede afirmar que existía un sistema estatal de acción histórica.

El régimen político en tanto sistema de reglas de constitución y ejercicio del poder político no tenía gran relevancia pues, en esta racionalidad, los actores sociopolíticos de peso procesaban sus conflictos e intereses principalmente en la acción estatal, sin hallarse muy regulado ese procesamiento por el sistema de reglas.

Sin embargo, este patrón –que tuvo históricamente expresiones progresivas y expresiones regresivas desde el punto de vista social, con democracia y sin ella– está mutando fuer-

temente en casi toda la región y paulatinamente halla dificultades tanto internas como externas para reproducirse.

Internamente, la inercia de la expansión burocrática cada vez más ineficaz, como la escasez de recursos estatales para satisfacer demandas sociales –tanto de sectores empresariales privados como de ingentes grupos populares y medios– limitan la capacidad de acción del Estado. Externamente, la reversión del flujo de capitales, las presiones de la deuda y de sus intereses, el deterioro de los precios de intercambio, el aumento de la brecha tecnológica y la incapacidad de actuar frente a ella, entre otros factores, también inciden negativamente en su capacidad de reproducción.

En este contexto, la emergencia de un proceso de democratización en toda la región, con un relativo fortalecimiento de instituciones democráticas y de actores sociales y políticos, a partir de una gama de situaciones y problemas, implica que las decisiones fundamentales se tomen en sistemas políticos con un juego más amplio para los diversos poderes sociales.

Empero, el resultado será diferente según cuánto y cómo pese el régimen democrático en el funcionamiento de esos sistemas políticos donde la centralidad del Estado es ya mucho menor. Obviamente, ni el mejor régimen democrático anula la responsabilidad de los distintos actores, tanto políticos como sociales, ni los resultados de la vigencia de la democracia son indiferentes al marco institucional que tenga la misma.

TESIS 4

El nuevo ciclo histórico se caracteriza por la conjugación de un proceso de democratización del régimen político que tiende a ser políticamente incluyente y un proceso de modernización del Estado que tiende a ser socialmente excluyente. Sin embargo, la democratización y la modernización del Estado son factibles de reforzarse entre sí y de ello depende la salida de la crisis.

La región experimenta desde fines de la década del 70 procesos de democratización/ liberalización. Independientemente de las modalidades de esos procesos, en una tipología que va desde la revolución a las aperturas fuertemente tuteladas, ellos se han dado en un marco de revalorización del régimen democrático por parte de las mayorías, cuyas demandas aúnan en la democracia la defensa de la vida y de las libertades públicas con reivindicaciones de justicia social.

La democratización, según los distintos actores de la misma, implicaría –separada o combinadamente– la superación de la inestabilidad política de la región (un aspecto del fracaso de las dictaduras), la ampliación de la legitimidad para el manejo de la crisis y la mayor satisfacción de necesidades sociales, tanto éticas como materiales.

Tales procesos de democratización valorizan pues los actores políticos y sociales, más allá de las calidades que se logren en cuanto a régimen político democrático (desde democracias "de equilibrio" –democracias constitucionales tradicionales– hasta marcos institucionales innovados con mejoramientos importantes en los sistemas de representación política y social).

En cambio, los procesos de reestructuración económica en la crisis ponen de relieve aspectos estructurales (industrialización trunca, vulnerabilidad del sector externo, etc.). Ello ocurre al aplicarse las políticas de ajuste y sobre todo al encararse las políticas de modernización del Estado. Esa modernización del estado en sus lineamientos predominantes (énfasis en el ajuste fiscal, desregulación, privatización, descentralización muchas veces con concentración de decisiones políticas, encarecimiento de servicios públicos, reducción del empleo estatal, desmonte de políticas sociales, racionalización de la gestión estatal) no revierte, sino profundiza, los resultados socialmente excluyentes propios de la crisis.

De allí que, en principio, haya una fase en la cual la ampliación de la participación política implicada por el proceso de democratización confronte una tendencia socialmente excluyente derivada de la modernización del Estado.

Empero, no se puede concebir una democratización exitosa o expansiva sin un proceso de modernización del Estado capaz de eliminar una de las causas de ingobernabilidad económica. Por lo tanto, o se logra proporcionar eficacia a la acción estatal en un intercambio con las organizaciones sociales, sobre la base de su representatividad social –restándole así a la modernización del Estado elementos de exclusión social–, o existirá un bloqueo en la democratización.

Por otra parte, si persisten los lineamientos de la modernización estatal expuestos, ésta inevitablemente chocará con las expectativas y con la experiencia de la democratización. Para que la modernización llegue a tener resultados incluyentes desde el punto de vista social es imprescindible un fortalecimiento de la capacidad impositiva estatal, que le permita a éste contrabalancear tendencias regresivas de la

distribución del ingreso y efectos sociales negativos de la racionalización/reconversión.

En realidad, no predominan en la región casos nacionales en los cuales la acción de los distintos actores permita que estos procesos y políticas se refuercen mutuamente o lleguen a combinarse, más allá de desfases temporales entre uno y otro seguramente inevitables.

Los procesos de democratización parecen derivar hacia la formación de mercados políticos con predominio de particularismos y en los procesos de modernización del Estado no se incluyen tendencialmente mecanismos de integración. Ello no quiere decir que estén ausentes en la región propuestas de combinar democratización con modernización del Estado.

TESIS 5

Si los gobiernos y otros actores sociopolíticos buscan democratización sin modernización del Estado se generará ingobernabilidad. Si los gobiernos privilegian una modernización del Estado orientada mecánicamente por el objetivo de reducir el gasto público pueden llegar a desnaturalizar el régimen democrático.

Existieron en la región procesos de democratización en los cuales se resistió fuertemente la aplicación de una política económica de ajuste estructural (intentando mantener la demanda global y el nivel de actividad económica, inclusive agregando objetivos de redistribución del ingreso). Se resistió también la aplicación de políticas de modernización del Estado, en particular las que hacen al ajuste fiscal. Invariablemente esos intentos, al no lograr recuperaciones de la tasa de inversión en los plazos en que aquellas políticas no ortodoxas aún eran viables, desembocaron en situaciones de ingobernabilidad económica y potencialmente política y/o del sistema en su conjunto.

En los marcos de la mayoría de las situaciones en las que se encuentran los países latinoamericanos, o la voluntad política obtiene resultados positivos en el funcionamiento de la economía en un lapso dado, o la legalidad del mercado se impone determinando ajustes estructurales más o menos caóticos.

Por otra parte, las políticas de modernización del Estado, en sus lineamientos predominantes, suponen un agravamiento de las tendencias socialmente excluyentes, aumentando los grados de coerción necesarios para el mantenimiento del régimen democrático. Las mayores demandas sociales posibilitadas por la recuperación de las libertades políticas, junto a la ampliación de las situaciones de extrema

pobreza y marginación socio-cultural, así parecen determinarlo.

Aún sin hacer ninguna referencia a derechos sociales y/o derechos de los pueblos (constitucionalismo social propio de Estados sociales de derecho que tiende a ampliarse en las reformas actuales a las Cartas Magnas), se advierte el riesgo de transgredir, en función del mantenimiento del orden público, dimensiones estrictamente formales inherentes a una definición mínima de régimen democrático. Por ejemplo, suspensión prolongada de garantías individuales, represiones masivas ante saqueos, deterioros en la juridicidad, etc.

TESIS 6

Si los actores sociopolíticos principales no optan por defender sus intereses dentro de la institucionalidad democrática, no hay democracia.

Los procesos de democratización son procesos de gestión de amplios consensos, pues más actores y grupos sociales revalorizan ese régimen político, pero también de enfrentamiento en cuanto al tipo de democracia por implantar y en cuanto a los contenidos sustanciales de ese régimen.

Ahora bien, las metodologías de la acción política en la región por parte de actores de peso –ya sean estatales, corporativos, partidarios, de movimientos sociales– han incluido e incluyen un uso más o menos sistemático de conspiración, violencia, transgresiones diversas a la legalidad, etc., en alguna medida por la misma inexistencia de marcos normativo institucionales válidos para el conjunto de las sociedades nacionales. Puede hablarse en la región pues de la existencia de principios de legitimidad no unívocos en la cultura política.

La democracia como régimen implica incorporar las reglas de la competencia política en la lucha por proyectos societales y/o por intereses; de allí que se la haya definido como la "tensa vía de la paz". Sin embargo, la proclamación jurídica de un Estado de derecho democrático no implica por sí, ni siquiera para los actores estatales, la erradicación inmediata ni plena de metodologías de acción incompatibles con la legalidad vigente. Operativamente, además, esa legalidad puede no contar con un poder soberano que la respalde. Tal situación se patentiza muchas veces en la existencia de actores políticos y sociales que, por distintos motivos, combinan en su accionar metodologías congruentes con la competencia política pacífica y metodologías no compatibles con ella.

Cuando se trata de actores políticos estatales o actuantes en los sistemas de representación, la combinación aberrante de metodologías compuestas de acción política amenaza o compromete directamente la existencia del régimen democrático. Este último de ninguna manera puede definirse únicamente por la existencia de un marco jurídico democrático, ya que la determinación del régimen comprende los comportamientos de sus actores fundamentales.

Tales comportamientos, para situarse al menos en el umbral del régimen democrático, deben cumplir con las reglas de juego del mismo, aunque ello sea sólo el umbral. (Más allá del umbral está la referencia en el comportamiento a un principio de integración, interés nacional, preocupación por la reconstitución del Estado, etc.).

Cuando los actores que aplican metodologías violentas o de corrupción son extraparlamentarios, la amenaza directa al régimen democrático es en principio menor, pero ello alimenta escaladas de ilegalidad precisamente por la fragilidad señalada en cuanto a internalización de los marcos normativo-institucionales. Los consensos de revalorización de la democracia no han erradicado completamente las ambigüedades en la cultura política respecto a cuándo considerar democrático un régimen: por el acatamiento de las reglas democráticas o por los resultados sociales de la vigencia del mismo. Esta ambigüedad corre el riesgo de ampliarse en procesos de democratización con resultados socialmente regresivos, lo cual facilita la acción de actores difícilmente encauzables en la vida democrática.

TESIS 7

La descentralización territorial, municipal y regional, es un campo de conflicto en gestación que evidencia las diferentes tensiones e incertidumbres de las políticas de modernización del Estado y de democratización. Si llegan a predominar políticas de descentralización que impulsen y refuercen tanto mecanismos locales de eficacia y de racionalización de la gestión, como de una mayor participación y representación en el sistema local de toma de decisiones, posiblemente se verá fortalecida la articulación entre los distintos niveles del Estado y las condiciones de las sociedades regionales o locales, con las consiguientes ventajas para una inserción dinámica de cada espacio económico específico en la economía global, además de lograrse una representa-

ción más genuina de los intereses locales a nivel central.

Si predominan políticas que se orientan a una reducción unilateral del gasto de la administración central, a fragmentar demandas y a segmentar los conflictos locales, a manipular el voto o, en el caso extremo, a la pura contrainsurgencia militar, los resultados serán procesos de modernización excluyentes y democracias locales frágiles que no redundan en desarrollo económico y que inclusive posibilitan o mantienen el caos político y social.

En América Latina históricamente han existido, bajo diferentes formas, patrones centralistas de organización de las relaciones territoriales, sean municipales o regionales. En el ciclo estatal de desarrollo, el Estado, mediante una serie de acciones directas y relaciones clientelares con las "sociedades locales" se convirtió en el articulador de las relaciones territoriales y de los procesos de acumulación; empero hoy tales acciones directas y tales relaciones clientelares encuentran serios límites para su reproducción.

La descentralización administrativa y la democracia local tienden a ser las nuevas fronteras del Estado post-populista.

El proceso de democratización iniciado a fines de la década del 70 y la crisis económica, más las políticas de ajuste impulsadas a lo largo de los 80 y una serie de factores derivados de la crisis del mismo "Estado territorial" (municipio, gobernación, etc.), empiezan a transformar el carácter centralista del Estado, potenciando correlativa y equívocamente el tema de la descentralización. La descentralización se enmarca en una serie de nuevos fenómenos territoriales, derivados, por un lado, del estancamiento y de la diferenciación de las economías territoriales o locales y del fracaso relativo de la planificación regional y, por otro lado, del aceleramiento y de los cambios en los procesos de urbanización. Es decir, crecimiento poblacional concentrado en urbes con escasos servicios y asociado al incremento de la pobreza absoluta, informalización creciente de las economías urbanas, cambios en los patrones de organización, gestión y reproducción de las unidades domésticas, incremento vertiginoso del deterioro ambiental, agudización de los problemas de transporte y de seguridad, disminución brutal del impacto de las políticas urbanas, especialmente las habitacionales, e insuficiencia notoria de las políticas asistencialistas de nuevo cuño, sobre todo alimentarias, de empleo de emergencia, etc. En este contexto, que es el con texto que tendrá que enfrentar la descentralización, se destaca el incremento

vertiginoso y absoluto de la pobreza urbana, especialmente en las grandes ciudades, cuyos pobladores demandan no solamente incorporación al sistema productivo y de consumo, sino también el derecho a la participación en la toma de decisiones. Este es uno de los problemas nodales del desarrollo y de la consolidación de la democracia en América latina.

Por supuesto los procesos de descentralización actuales también se enmarcan –y participan– en una serie de condicionamientos políticos del proceso de democratización. Algunos de los fenómenos más relevantes al respecto son: la generalización de elecciones municipales –y en menor medida regionales (departamentales y provinciales)–, el surgimiento de acuerdos e incluso pactos regionales, la incidencia de factores ajenos a la región, como el incremento de conflictos en y entre territorios (locales y regionales), y sobre todo entre éstos y el Estado central, la aparición de economías derivadas del narcotráfico, la insurgencia y la contra-insurgencia militar, etc.

Estos fenómenos son producidos, orientados, ideologizados por diferentes actores territoriales –entre ellos, el mismo Estado central, que en gran medida descentraliza para recentralizar–, los cuales muchas veces invocan la descentralización como meta democratizadora. En realidad, el desafío de los movimientos regionales o urbano-municipales consiste en poder transformarse en agentes de un Estado que se moderniza descentralizándose. Ciertamente, los límites de ello están dados por el espacio y la capacidad para plasmar acciones políticas concertadas y para recrear los marcos institucionales volviéndolos aptos para que incidan en los procesos de desarrollo.

En este sentido, la descentralización constituye uno de los espacios más privilegiados de potencial integración entre los procesos de modernización y democratización, siempre y cuando la descentralización pueda conjugar procesos de racionalización y eficacia en la gestión local con una genuina representación y participación local, resolviendo problemas y desafíos, de forma democrática, que el Estado central no puede resolver.

Lo cierto es que el Estado ya no logra articular como en el pasado sus relaciones con "sociedades locales" o "regionales"; ellas mismas lo impugnan crecientemente. Hasta el momento, aquél aplicó políticas de descentralización restringidas, discontinuas, sectoriales y parciales, en muchos casos en función de la privatización y el control social. En realidad, se observa por lo general una especial combinatoria entre lo estatal y lo privado que no

alcanza a dinamizar una descentralización más genuina. Esta última, sin dudas debería combinar también formas de gestión públicas, en oposición a lo meramente estatal-partidario o lo meramente privado.

Un proceso de descentralización basado e impulsado por actores territoriales, que promueva un espacio público concertado sociopolíticamente en pro del desarrollo local, seguramente incidiría positivamente en el control de los sectores estatales y privados en los diferentes niveles territoriales.

En todo caso, dados los cambios sociales y económicos experimentados a nivel local, como también las demandas de democratización municipal o regional, las actuales formas de organización territorial están cambiando. En ese sentido, la descentralización puede llegar a ser crucial en el nuevo orden estatal latinoamericano. El nuevo Estado para tener una mayor eficacia política y económica necesita ser más legítimo desde el ámbito local.

TESIS 8

Los actores externos impulsores del ajuste pretenden conjugar ajuste estructural 8 y estabilidad democrática; esta política es inconsistente pues el ajuste tiende a crear inestabilidad política a no ser que en su aplicación estén presentes logros de expansión productiva y distributiva, es decir, que el ajuste se subordine a una política de defensa de la democracia.

Uno de los rasgos más importantes de los procesos de democratización es que éstos se dan como parte de un complejo fenómeno de internacionalización de la política, internacionalización regulada e impulsada por actores y fuerzas de los países centrales (Estados Unidos, Japón y los de la Comunidad Europea, principalmente). Así, las políticas de democratización se conjugan con políticas de seguridad militar, de control de drogas y estupefacientes y de "ajuste económico estructural". Más aún, tienden a predominar estas últimas sobre las primeras.

Las mismas políticas de democratización apoyadas por los principales actores internacionales son variadas y a menudo inconsistentes, pues su valoración tiene que ver más con una lógica de intereses inmediatos que con metas democratizadoras.

La política de Estados Unidos, que fue y es determinante en el proceso de democratización en la región, coloca más énfasis en el ejercicio del voto y del cálculo político –muy a menudo subordinados o identificándose con la

empresa privada y el anticomunismo– que en la vigencia de un régimen político que permita la representación de la pluralidad sociocultural existente en nuestras sociedades. En realidad, se apoya un ejercicio sobre todo electoral de la ciudadanía política y, debido principalmente a la política económica, se la desvincula en forma arbitraria de la ciudadanía social.

Es una visión pragmática pretendidamente sustentada en valores éticos de la sociedad norteamericana, visión que recogen los principales partidos políticos de dicho país. Sin embargo, existen contradicciones en ella, pues como lo revelan sus orientaciones en los casos de Nicaragua y El Salvador, lo determinante es la influencia política interna y la promoción de intereses militares y económicos inmediatos.

En este sentido, parece ser que los procesos de democratización en los países periféricos están fuertemente condicionados por las formas de hacer política en los países centrales, lo que agrega un grado de incertidumbre más a los procesos internos de democratización.

Por otra parte, la política de los países europeos, concertada en gran medida a través de las reuniones del Grupo de los Seis con estadounidenses y japoneses, se subordina complejamente a la norteamericana. No obstante, sus prácticas y políticas de democratización son más amplias y doctrinarias que aquéllas, pues ponen mayor énfasis en un fortalecimiento de la sociedad civil y en una afirmación de la ciudadanía social. Seguramente, el peso que tienen redes y asociaciones políticas internacionales –como la democracia cristiana, la Internacional Socialista y las agrupaciones liberales– influye contrapuestamente en favor de una autonomía relativa respecto de las políticas norteamericanas.

Por su parte, la política japonesa pone énfasis casi exclusivamente en el ajuste económico y en el orden político genérico, más que en una dinámica de democratización.

En síntesis, se han producido políticas genéricas y/o puntuales, subordinadas al ajuste económico y a la racionalidad militar, políticas que limitan a las propias sociedades y actores sociopolíticos nacionales para enfrentar sus desafíos y problemas democráticamente.

Si a este panorama se adiciona el propio comportamiento político de actores nacionales fuertemente heterónomos y de tradición autoritaria, es posible que se retorne a situaciones no democráticas.

El ajuste mismo, si no se asocia con crecimiento y con una política redistributiva y concertada entre las diferentes fuerzas político-sociales, no logrará –por ruptura y/o

desnaturalización del régimen– la estabilidad democrática mínima que necesita para su propio cumplimiento.

Así, una coherencia entre "ajuste" y democratización se podría plasmar si los actores "externos" principales promueven estrategias de democratización estables, consistentes y de largo plazo, donde los necesarios mecanismos de ajuste se acondicionen a las distintas fuerzas e intereses nacionales de manera tal que impulsen el juego democrático y de respeto a los derechos humanos. Una política internacional, donde los propios actores nacionales concertados entre sí y con fuerzas externas enfrenten de manera socialmente más equitativa y por ello políticamente más estable el denominado "ajuste económico estructural".

TESIS 9

Los ajustes restringidos que sólo buscan reequilibrar la balanza de pagos del sector externo en el corto plazo, seguramente desequilibrarán más la economía interna e implicarán un círculo vicioso de recurrentes medidas similares. Así, la inestabilidad económica y política consiguiente alejará cada vez más una gobernabilidad progresiva.

Unicamente un ajuste en sentido amplio, o sea un paquete de políticas de transformación económica que enfrente a través de la reconversión las nuevas condiciones de los mercados mundiales, incluyendo para ello el restablecimiento de mecanismos de financiamiento internacionales, puede plasmar un proyecto de desarrollo nacional.

El carácter no reversible de los desequilibrios del sector externo de las economías latinoamericanas vuelve obligado el ajuste. No obstante, hay que ver en función de qué tipo de reestructuración se vuelve manejable el desfase del sector externo. Se sabe, y así lo reconocen los organismos financieros internacionales, que es más fácil "reducir la absorción (el gasto) que aumentar la capacidad productiva" y también que la reorientación de la economía en favor del sector de bienes exportables no necesariamente proporciona una matriz productiva menos vulnerable y más apta para un crecimiento autosostenido.

Por otra parte, las medidas para estimular directamente el crecimiento económico a través de incentivos que eleven la tasa de formación de capital fijo, su tasa de retorno, optimizar las invariablemente reducidas inversiones del sector público, liberar el mercado financiero, eliminar rigideces en el tipo de cambio, eliminar

controles de precios, etc., pueden no aumentar significativamente la eficiencia de la asignación de recursos y no reducir mucho, sino inclusive acrecentar, la imperfección de los mercados. A ello se suma la incertidumbre que introduce la negociación de la deuda externa con el FMI y con los bancos privados hecha en ciclos muy cortos, lo cual refuerza las tendencias anotadas y la recurrencia cada vez más rápida de ajustes en sentido restringido.

Así, a los costos sociales propios de la reducción de la demanda interna se suman los objetivos no cubiertos de cada una de las medidas del ajuste en términos de reactivación y crecimiento (intervención en el lado de la oferta), sin entrar aún en la problemática estricta del desarrollo.

Por consiguiente resulta imperioso que la reestructuración advenida por el ajuste produzca, además de estabilidad, crecimiento y capacidad de autosostener ese crecimiento y, segundo, desarrollo, pues sin expansión de los mercados internos, en el caso de nuestras economías, resulta imposible pensar en una menor vulnerabilidad. No en balde las reestructuraciones en la periferia fracasan en cuanto a alcanzar una tasa estable y alta de desarrollo económico, aunque esto último aparezca destacado también como meta del ajuste.

TESIS 10

En la reestructuración de la economía mundial y en los procesos de ajuste de las economías periféricas se transfiere a las fuerzas del mercado un papel protagónico en la organización de las relaciones sociales, en desmedro del Estado y de los regímenes políticos. Este hecho tiene el agravante que en nuestros países el mercado, por su insuficiente dinamismo, no puede ser un eficaz integrador social.

Si bien el ajuste estructural como paquete de políticas estatales para superar el desequilibrio del sector externo incide sobre el conjunto de la economía de cada país, llega a incidir más sobre el Estado. Este último es el agente que más se ajusta (ajuste fiscal) en función de las presiones del sector externo.

Tal ajuste desagregado en los gastos y en los ingresos del Estado revela que los más recortados son los gastos sociales, los gastos corrientes en personal y la inversión pública, habiendo en cambio cierta continuidad en las transferencias al sector privado (subsidios, promociones, etc.), un mayor peso de los intereses de la deuda externa (por estatización de la misma). Por el lado de los ingresos fiscales se observan aumentos no demasiado significativos, en la medida que las reformas impositivas puestas

en marcha tienen como eje incrementar los impuestos indirectos y la base impositiva, pero los montos recaudados sufren los efectos de la recesión, habiendo así mismo pérdidas de otras fuentes tributarias (impuestos al patrimonio, a las exportaciones e importaciones, a la renta, etc., muchas veces en función de promover la inversión y la exportación, como también de desregular ámbitos de la actividad económica). Por otra parte, no siempre el Estado vuelve transparentes los mecanismos de transferencia y asignación de recursos que continúan vigentes. Esto contribuye a que queden opacas las prioridades de asignación de recursos escasos y al mismo tiempo que no se ejercite una coerción legal plena para asegurar el buen uso de las transferencias.

La mayor o menor vitalidad económica de los distintos Estados latinoamericanos y las características de los procesos políticos matizan estas tendencias dándoles cierta hibridez a las mismas pero sin alcanzar a negarlas.

En cuanto a los espacios cedidos por el Estado en su retroceso, son ocupados por las fuerzas y los mecanismos del mercado, pero se trata de mercados con un dinamismo insuficiente como para que puedan ser medios eficaces de integración social (la reducción de la inversión pública y la recesión del mercado interno parecen pesar más y negativamente en las decisiones de inversión privada que el incremento de las tasas de ganancia de los sectores beneficiados por el ajuste).

O sea que el tipo de mercados regulados propio del ciclo estatal de desarrollo parece terminarse junto con él (el Estado como productor tiende a pesar menos y también la capacidad de intervención estatal es menor), pero ello no tiene como efecto necesario un perfeccionamiento de los mercados ni una ampliación de los mismos.

Siendo así, resalta que la apertura hacia la economía mundial no puede afrontarse exitosamente sin una intervención creciente del Estado, a fin de perfeccionar y ampliar los mercados y de que la orientación exportadora del ajuste no se resuelva en una dualización creciente y en una dependencia directa respecto de centros de decisión y de inversión externos.

TESIS 11

Las políticas de ajuste –en cualquiera de sus versiones– tienen más éxito en términos de volver sostenible la situación de nuestros países en cuenta corriente o manejable el nivel de

deuda externa que en términos de alcanzar una tasa estable y alta de desarrollo económico.

Los principales actores de la política de "ajuste estructural" (organismos financieros internacionales, bancos privados acreedores, Grupo de los Ocho, sectores empresariales más concentrados, gobiernos) tienden a identificar erradamente cualquier ajuste con modernización y reconversión económica. Estos procesos, si bien pueden ser yuxtapuestos, no tienen una implicancia sucesiva necesaria. Los dinamismos diferentes que alcancen dan múltiples configuraciones.

Es cierto que en el paquete del ajuste existen siempre políticas destinadas a incrementar la eficiencia económica y a expandir la capacidad productiva, pero los logros en esos campos son reducidos o nulos, como lo demuestra más dramáticamente la experiencia africana.

Aparentemente en el diseño de esas políticas hay supuestos sobre el comportamiento de actores económicos bajo ciertas condiciones que no se cumplen. Especialmente las condiciones de inversión que esas políticas buscan proporcionar al sector privado no compensan el retroceso del Estado en la formación de capital fijo y por otra parte no parecen atacar frontalmente las imperfecciones de los distintos mercados y las ocasiones de rentabilidad especulativa totalmente contrarias a un proceso de reconversión económica.

De esto deriva en parte que los éxitos del ajuste estructural puedan medirse más (o apenas) en reequilibrios en la balanza de pagos que en términos de crecimiento, y menos aún de desarrollo.

TESIS 12

La desestructuración de los actores socio-políticos y las dificultades de mediación/representación política, acentuadas como resultado o como necesidad del ajuste, implican la no existencia de garantías en cuanto a fortalecer el componente de reconversión económica del ajuste estructural y en cuanto a controlar sus implicaciones.

La racionalidad de la acción estatal, también en tanto orientadora de los procesos de reconversión, se plasma en y con los intercambios políticos entre actores estatales y no estatales (grandes empresas públicas, partidos, sindicatos, cámaras empresariales y movimientos sociales). Sólo cierto tipo de intercambio político puede dar como resultado una racionalidad que combine una determinación adecuada de prioridades en la reestructuración, la elimina-

ción de aquellas transferencias que no alimentan el proceso de crecimiento ni la competitividad y una visión a largo plazo en el proceso de reforma del Estado, con la consecución de los menores costos sociales.

De allí que pueda afirmarse que la desestructuración de los actores sociopolíticos sea en principio altamente negativa en cuanto a la existencia de garantías sobre el componente de reconversión económica del ajuste estructural y de sus implicaciones para el proceso de desarrollo.

En ese sentido, la creciente dificultad por parte de los partidos para agregar las demandas y contribuir a procesar el conflicto social (transgresión programática, extremo pragmatismo de alianzas, accionar racionalizador de políticas inconsensuables, etc.) se suma a la pérdida de centralidad de los movimientos sindicales en el sistema político, que les sustrae capacidad para incidir en la regulación de los ingresos y en los distintos aspectos de la reestructuración (innovación tecnológica y cambios en los procesos de trabajo). En el caso de los movimientos sociales, por su fraccionamiento y diferenciación, profundizados a veces por las propias políticas estatales orientadas a ellos, la acción colectiva tiende a oscilar entre el comunitarismo basista, el clientelismo y la confrontación.

Empero, la recuperación de la capacidad de acción estatal en el nuevo contexto internacional y en las nuevas condiciones tiene que ver con actores políticos y sociales fortalecidos y autónomos en intercambio con el Estado y entre sí, que construyen instituciones y políticas identificadas como útiles para el mejoramiento del régimen y para el proceso de desarrollo.

TESIS 13

Existen límites en la fijación de las diversas políticas de ajuste que pueden poner en cuestión la racionalidad o coherencia del mismo, aun en sus propios términos.

En la fijación de la política de ajuste hecha por los Estados, la selección de mecanismos y de campos de decisión de tales políticas, sobre sí mismo y sobre el sector privado, está subordinada a las condiciones coyunturales de la economía y al juego de voluntad y poder político en el Estado. Por consiguiente, puede haber límites en la racionalización del Estado, tal como hemos señalado que puede haberlos respecto de la reconversión del sector privado.

Tales límites pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo imposibilidad política de despidos masivos en la administración central, dificulto-

sa privatización de empresas públicas deficitarias por falta de oferta, reforma fiscal resistida exitosamente por lobbys empresariales, etc.

Genéricamente, el predominio de los ajustes recurrentes a corto plazo, que en varios de los países de la región llevan inevitablemente a una fuerte reestructuración sin crecimiento, sobre un ajuste estructural en sentido amplio, con alto componente de reconversión económica, sintetiza las amenazas a una racionalidad productivista de las políticas ejecutadas.

TESIS 14

Actualmente los Estados latinoamericanos pueden ser recreados o meramente despojados de funciones y aparatos. La recuperación de la acción estatal está ligada a su capacidad de regulación societal en las nuevas condiciones y esa regulación societal, para ser efectiva, incluye necesariamente orientar la reestructuración económica hacia la reconversión.

El logro de un Estado con mayor capacidad de acción unitaria y capacidad de regulación societal en las nuevas condiciones requiere un perfeccionamiento institucional de los sistemas de representación política y social, orientado a incrementar la incidencia de la representación en los sistemas de toma de decisiones y la responsabilidad de los actores políticos y sociales en las tareas globales. De otra manera, rasgos seculares del Estado latinoamericano, tales como su patrimonialismo, clientelismo y corporativismo pueden inclusive acentuarse con el cambio de perfil estatal en la economía y en la sociedad. O sea que se impone un doble proceso de recreación institucional y de eliminación de aquellos aparatos para funciones agotadas o imposibles de reproducir.

En la medida en que el Estado se subordine a la dinámica de un mercado excluyente, perderá capacidad de regulación societal y específicamente no cumplirá nuevas funciones imprescindibles para una reconversión exitosa.

No existen ejemplos históricos de desarrollo bajo las nuevas condiciones internacionales sin la asunción de nuevas funciones por parte del Estado, entre las cuales se halla imprescindiblemente la del desarrollo científico y tecnológico, como tampoco existen tales ejemplos sin cooperación entre agentes públicos y privados.

Preocupa observar en Estados de la región una debilidad en cuanto a la incorporación de funciones estratégicas. En ese sentido resalta la orientación del proceso de reconversión, el favorecer la innovación tecnológica desde los desarrollos de ciencia y técnica, la vinculación

entre las políticas de integración social y el proceso de desarrollo, el mejoramiento de los sistemas impositivos, etcétera.

Por otra parte, muchas de esas funciones pueden ser procesadas con la ayuda de nuevas iniciativas de integración latinoamericana, donde se ponen a prueba las potencialidades del nuevo orden estatal, incluyendo en él las pautas de cooperación entre agentes públicos y privados.

En tanto esas nuevas iniciativas tengan en vista las nuevas funciones estatales imprescindibles para el desarrollo, la integración podrá tener una fuerza expansiva hasta ahora inédita.

TESIS 15

Las políticas culturales en los ámbitos de la educación, de la ciencia y la tecnología, de la industria cultural nacional, están en un franco proceso de declinación. Correlativamente se expande una industria cultural internacionalizada cuyos rasgos fundamentales son la diferenciación y segmentación de mercados culturales para grupos de altos ingresos, y a la vez, la generalización de un consumo cultural homogeneizante para el resto de la población. En dichos procesos se advierte un predominio de medios masivos no tradicionales y con alto componente informático.

Dicha transformación es inherente a los procesos de reestructuración económica internacional; además tiende a ser más abarcador y penetrante que la misma reestructuración económica. Constituye la punta de las nuevas relaciones internacionales de dominio.

A pesar de los esfuerzos por parte de varios Estados de la región, fruto del proceso de democratización, aquellos no lograron proporcionar a sus sociedades medios y políticas para intervenir en los fuertes dinamismos señalados, lo cual resulta básico para promover el pluralismo y la creatividad culturales, como así también para que no se debiliten más ellos mismos y la democracia.

La fuerte heterogeneidad cultural de América Latina fue históricamente reducida por relaciones de dominación. La combinatoria libre entre culturas seguramente hubiera dado aún mayor heterogeneidad y creatividad culturales. No obstante, se advierte la existencia de espacios socio-culturales subregionales, habiéndose intensificado durante las últimas décadas la interrelación cultural del área en su conjunto por procesos dinámicos de industrialización de la cultura y de transnacionalización de la misma.

El dinamismo tecnológico comunicacional está en relación directa con la fuerza de la industria de los países centrales y en relación inversa con la capacidad periférica de nuestras sociedades. Su presencia y dinamismo es cada vez más omnipresente en todos los espacios culturales. El ajuste estructural está más interconectado con los procesos sociopolíticos internos (deuda), mientras que el ajuste cultural es más exógeno y abarcador.

Por otra parte, la diferenciación y segmentación de los mercados culturales es trunca en nuestra región por el tipo de expansión de los mass-media, la escasa capacidad adquisitiva de sectores importantes de la población y las restricciones de la industria cult ural tradicional provocadas por la crisis. *La tensión entre lo público y lo privado en el campo cultural tiende a resolverse asi lesivamente para el pluralismo cultural. Los Estados administran lo más tradicional del desarrollo cultural* (sistemas educativos formales en deterioro y patrimonio cultural) *y dejan en manos de la iniciativa privada los sectores más dinámicos y con mayor incidencia.* Tratándose de sectores con altos umbrales de inversión para ingresar a los mismos y habida cuenta de que los procesos de democratización no gestan políticas para garantizar el acceso plural a los medios masivos, como tampoco las políticas de descentralización redistribuyen significativamente las iniciativas culturales, se agravan las consecuencias de la concentración de poder en ese tipo de medios. En ello es clave la emergencia y el papel de nuevas élites de comunicadores (que concentran medios técnicos, inciden en las orientaciones culturales, etc.).

Las políticas de modernización del Estado refuerzan tales cambios estructurales del campo cultural y las de democratización permiten avances en contenidos simbólicos, democráticos y universalistas. Empero, la acción estatal en general aparece como un manojo de emprendimientos culturales puntuales y no como una politica coherente de desarrollo cultural.

Frente a ello, existe en las sociedades de la región una fuerte movilización sociocultural y de identidades culturales, pero a través de movimientos sociales de orientación simbólica que no alcanzan una intercomunicación y globalización. Por lo tanto, en general no logran participar en las transformaciones culturales predominantes ni modíflcar sus orientaciones.

TESIS 16

De allí que pueda hacerse un paralelo entre el imprescindible papel estatal en el campo

comunicacional y en el campo de la ciencia y la tecnología, con crilerios no subordinados a los del mercado.

La economia latinoamericana en la reestructuración de la economia internacional *experimenta prospectivamente un alto grado de incertidumbre y dependencia.*

Si la economia de los paises centrales no sufre importantes cambios. la región tendrá a lo sumo una recuperación parcial y relativamente centrifuga de la economia. sin reversión de tendencias regresivas en la distribución del ingreso. Pero si los desequilibrios entre los paises centrales son resuellos de manera recesiva existe la posibilidad de un fracaso del ajuste por motivos extemos. Tales escenarios económicos refuerzan la importancia del ajuste emprendido tanto en términos de coherencia de la matriz económica intema resultante de la reestructuración como de la matriz sociopolitica derivada del proceso de democratización.

Tal incertidumbre y dependencia provienen de:

– opciones aún impredecibles de las políticas para superar los grandes desequilibrios enlre las economias centrales (déficit fiscal USA) y desequilibrios USA, Alemania Federal y Japón;
– rítmo de crecimiento de las economias industrializadas con elevada incidencia en el mercado de exportaciones latinoamericanas;
– movimiento de las tasas de interés internacionales sin reducciones previsibles en la carga financiera derivada de la deuda externa;
– no reversión neta de las tendencias actuales de deterioro de Ios precios de intercambio

De esto devienen dos escenarios económicos demediano plazo:

– mantenimiento y recuperación de indices de crecimientoeconómico limitado, leve expansión de losmercados de exportación, mantenimiento de niveles altos de flujos negativos de capitales, no reversión de las tendencias regresivas de distribución del ingreso;
– deterioro de las economias latinoamericanas derivado de un panorama recesivo de las economías centrales, a causa de las políticas de superación de los desequilíbrios entre ellas. Es decir, no amplíación de los mercados de exportación latinoamericanos, alza de tasas de interés, restricción mayor aún de los mercados de crédito internacionales.

En resumen, fracaso del ajuste por motivos externos.

No hay nichos estables para los paises periféricos en una interdependencia ya consolidada, propia de una situación realmente de post-crisis. La reestructuración no se halla acabada.

TESIS 17

En un primer esenario sociopolítico a mediano *plazo es de caos sacietal*, *donde uno* de los rasgos principales es la desagregación extrema y anómica de conflictos y la desestructuración estatal.

América Latina frenle a la posibilidad de caos. Caos como situación histórica que implica fragmentación de la acción colectiva, dualismo societal acelerado, incapacidad de decisiones estalales para enfrentar y resolver problemas, incapacidad del sistema político para procesar representaciones e intereses inlernos (especificidad y universalidad del conflicto), deterioro de la integración simbólica proveniente tanto de prácticas politicas como especificamente culturales, surgimiento de acciones de enfrenlamiento, comportamiento anómico generalizado, formas de intervención externa, etc.

En este escenario -como en los que siguen, salvo el último de salida óptima de la crisis- existe una desagregación de los conflictos, pero extrema. Hay un conglomerado de situaciones simultáneas sin ejes estructurantes en la medida en que muchos de tales conflictos son extra-estatales y los movimientos sociales coexisten con anti-movimientos sociales, de innegable presencia política a través de su violencia destructiva y autodestructiva, pero escasa capacidad de plasmar un nuevo orden y de interpelar al conjunto de la sociedad.

Otra característica es que en los actores politicos y sociales muchas veces se superponen racionalídades y metodologias de acción en principio incompatibles, pero que condiciones puntuales, comprensiones e intereses han reunido en un mismo actor(verbigracia, acción politica y acción militar ilegal por parte de actores estatales y no estatales, combinación de acción política movilizadora legal y criminalidad, etc.).

Como dijimos, el resultado de ese conglomerado de situaciones (coexistencia en un mismo espacio nacional de expresiones de guerra civil, corrupción pública, infiltración y copamiento del sistema politico por fuerzas no partidarias y esencialmente antidemocráticas, conspiración golpista, ejércitos paralelos, in-

tentos de acción partidaria y social pro institucional, movilización popular, crecimiento o estancamiento económico, guerrilla foquista, procesos insurreccionales, etc.) socava la capacidad de intervención estatal en todos los planos, lo cual es paralelo al deterioro de la vida política institucional.

Evidentemente existen varios caminos por los cuales se puede arribar a este escenario, desde el intento fracasado de una política populista que desemboca en ingobernabilidad económica y social, hasta un insidioso y lento proceso de desorganización social y política que puede coexistir inclusive con crecimiento económico.

Un fenómeno que merece especial mención es el del narcolráfico, el cual se ha generalizado en varíos países latinoamericanos, vinculando de diferente manera a la región con demandas e intereses económicos y culturales de los países desarrollados. En lo interno, tal fenómeno desestruclura relaciones sociales,valores y sentidos nacionales, convirtiéndose en un factor precipitador del caos.

En rigor, existe una lalencia de este escenario para casi toda la región. aunque tallatencia pueda reconocerse sobre todo en determinadas coyunturas y espacios parciales de la realidad nacional de cada uno de nuestros países.

TESIS 18

Un segundo escenario es un escenario de modernización centrifuga con predominio de un proceso de tradicionalización societal. El Estado racionalizándose, busca asociarse con los actores empresariales más concentrados y combina su acción entre la cooptación social *y la coacción política. reiterando ajustes de cortoplazo. Este escenario también implica una conflictualidad social alta y probables rupturas* o *retrocesosdemocráticos.*

Escenario sociopolítico a mediano plazo correspondiente a un ajuste estructural con déficit en su racionalidad de reinserción plenamente activa en la economía internacional para afrontar –con metas propias de desarrollo– las nuevas condiciones internacionales. Los déficit provienen básicamente de dos fuentes:

1. No asunción de nuevas funciones por parte del Estado y adopción de políticas de racionalización parcial en empresas estatales;
2. Permanencia de situaciones de capitalismo asistido; énfasis especulativo y escasa reconversión en la reestructuración económica.

Este escenario implica un núcleo central de toma de decisiones compuesto por los sectores empresariales más concentrados y relacionados estructuralmente con el sector externo; empresas estatales orientadas por y subordinadas a la misma dinámica, y las nuevas capas tecno-burocráticas, cuyo sistema de referencia está dado por el sector externo y una visión neoliberal de la sociedad. Las orientaciones de dicho núcleo sociopolitico estarían dadas por la búsqueda de una mayor eficacia entendida como directa rentabilidad económica. En este contexto el Estado juega en función de estas orientaciones globales del proyecto, plasmándose una suerte de poliarquización estatal. Más allá de la búsqueda de asociación del Estado con los sectores empresariales más concentrados, los resultados económicos de este escenario estarán fuertemente pautados por el comportamiento de estos últimos y por su renuencia o no a la asunción de riesgos (nuevas inversiones, aceptación quite de subsidios, innovación tecnológica, etc.).

Asimismo, este sistema de toma de decisiones tendrá afinidades parciales respecto de otros sectores empresariales, con los cuales actuaria limitada y puntualmente, además de sectores medios y sindicales minoritarios, vinculados con las ramas y/o grupos de modernización económica.

Las transformaciones en el aparato del Estado advenidas en el proceso de ajuste incluyen en general una reforma administrativa en pro de una racionalización económica en la gestión estatal con nuevos núcleos administrativos y procesos de desburocratización.

Por otra parte, un desmonte en las áreas sociales del Estado con reemplazo o no por nuevas politicas sociales de carácter compensatorio y en general orientadas a satisfacer necesidadcs más básicas, por ejemplo alimentación y no ya vivienda, empleo mínimo, etc.

Los cambios cn cuanto a las corporaciones o empresas estatales que son mantenidas en la esfera estatal también pasan por racionalización económica de su gestión, adopción de criterios de mercado en su funcionamiento, diferentes combinaciones de modernización/ reconversión en ellas, en tanto buena parte de las mismas es privatizada según distintas modalidades.

Modernización ccntrífuga refiere pues a estos procesos de cambios, principalmentc en la acción estatal, que se orientan hacia el sector externo sin efectos multiplicado res internos y por lo tanto sin proteger la trama social.

En otro ámbito tendencialmente extra-sistémico se hallan múltiples actores plurisociales cada vez más excluidos por el proceso de

reestructuración económica, pero que demandan in'serción sociopolitica. La orientación y la organización de su acción colectiva revela fragmentación, oscilando entre la demanda dc inserción mencionada y el cierre obligado sobre sus propios recursos, oscilando entre la identidad y la anomia. Una mención destacada corresponde al campesinado que agudizaria su proceso de diferenciación social en función de su grado de vinculación o no con bienes exportables y la mayor o menor exposición a la competencia extcrna, como también en función de su grado de vinculación con el Estado (especialmente a través de la política de precios y de asignación de recursos).

En este escenario, la intersección entre un "mundo " y otro estaria dada por las demandas de integración de los sectores excluidos y por las politicas sociales asistenciales y la represión violenta, es decir, habría una revitalización parcial del clientelismo asociado con politicas represivas modernas. El Estado, en cuanto régimen político, experimentaría una serie de cambios.

La tendencia dominante en este escenario es la plasmación de una democracia "de equilibrim), caracterizada or consensos que tienden a tener sólo relevancia en ocasiones de constituir nuevos gobiernos o nuevas representaciones partidarias (versus consensos para la determinación programática). Por otra parte, se acelerarían los mecanismos de concentración de decisiones politicas en el Ejecutivo, que liende a gobernar por decreto y a hacer un desmesurado uso de su poder de veto sobre las iniciativas parlamentarias.

La función de representación partidaria tiende a modificarse privilegiándose en clla una racionalización de los actos del Ejecutivo ante la sociedad o desplazándose hacia una oposición demagógicoideológica, con carencias en cuanto al grado de elaboración técnica de políticas opcionales.

Desde la perspectiva institucional, no se advierte con modificaciones importantes, aunque posiblemente se implementen reformas constitucionales funcionales a una mayor competitividad y aumente con ello la posibilidad de altcrnancia partidaria en el gobierno. Además, existirian políticas de descentralización pero con efectos centralizadores del poder politico a nivel territorial.

En sintesis, sólo se operarian modificaciones institucionales para desagregar los procesos de legitimación social.

Finalmente, respecto de la participación partidaria en este escenario, se advierte el predominio de un tipo de acción instrumental en

deterioro de un accionar representativo y canalizador de diferentes propuestas de orden social. La dificultad creciente del sistema politico en su conjunto para procesar institucionalmente el conflicto social se hace sentir con fuerza en el accionar partidario.

Ello se nota en las trabas existentes para un intercambio nuido entre la representación partidaria y la representación sectorial, como asi también -seguramente en forma más agudaentre la representación partidaria y los diferentes movimientos sociales, sean defensivos, con reivindicaciones materiales y/o de base cultural o ética. Desde otro punto de vista, los partidos politicos, sobre todo los partidos politicos de masas o los partidos políticos históricos, tienen tres orientaciones fundamentales. Primera, la reestructuración del clientelismo. Segunda, la presencia en el sistema de toma de decisiones del aparato tecno-burocrático; en realidad un desplazamiento de las decisiones partidarias de los sistemas de liderazgo politico tradicional, populista, nacional-popular, etc., a la teenoburocracia.

Tercera, el papel fundamental delliderazgo nacional, fundamentalmente el Presidente de la República como organizador, distribuidor, regulador, impulsor de los procesos politicos anteriormente señalados. Esto implicaria fundamentalmente un proceso de centralización del poder politico en la figura del presidente y en la capacidad del mismo de tener cierto líderazgo politico nacional sobre los distintos escenarios en los cuales se desarrolla la politica.

La expresión tradicionalismo societal es usada pues en el sentido de una mantención de prácticas yorientaciones politicas (clientelismo, corporativismo y patrimonialísmo) que limitan la capacidad de innovación de la sociedad.

Seguramente este escenario traerá aparejado, sobre todo en varias situaciones, no sólo un fraccionamiento de la acción colectiva o una desaparición de los movimientos sociales, sino también una regresión societal muy amplia, sin poder asegurar tendencias de reversión de esto a largo plazo, ni tampoco el mantenimiento de esa misma democracia “de equilibrio”.

TESIS 19

Un tercer escenario sociopolftico posible se caracteriza por una modermzaclón menos fragmentada y más expansiva acompañada por un proceso de dualización societal.

El Estado recupera capacidad de regulación y de negociación frente a los sectores empresariales más concentrados, viabiliza procesos de

reconversión económica -ajuste en sentido amplio- y optimiza la cooptación social. Aqul los niveles de estabilidad politica serian mayores.

En cuanto a la forma en que se ubican los actores en este escenario, no habria diferencias significativas respecto del anterior, aunque puede discutirse si la calidad de la intervención estatal en el ajuste y el comportamiento de otros actores dominantes del ajuste, en este caso orientado por preocupaciones más globales de largo plazo referidas a la reestructuración, implican o no un conjunto de actores dominantes menos restringido que en el escenario 2.

Desde el punto de vista teórico, resulta sostenible pensar que el disciplinamiento necesario para alcanzar una racionalidad mayor de crecimiento económico y de reinserción en la economia mundial, implique una acción de limitaciones reciprocas más obtenible en un juego entre más actores. Para que los actores empresariales cumplan un rol protagónico en el crecimiento no basta una autosatisfacción de sus intereses, sino que es necesaria la gestación de un *ethos* empresarial en interacción con otros actores y con el mismo Estado.

En cuanto a las orientaciones de la acción de los diferentes actores politicos y sociales y a los cambios en el funcionamiento del sistema politico, podemos decir además lo siguiente: en primer lugar, el Estado tiene un papel más dinámico de orientacion/ regulación de la reestructuración económica, hallándose menos condicionado/ subordinado a los sectores económicos privados más concentrados, estableciendo con ellos felaciones de intercambio y negociación en función de que predominen reglas de competencia y eficiencia económicas en pro de un proceso de modernización/ reconversion más integrado.

Es decir, habría una recuperación de la capacidad de orientación del proceso de crecimiento por parte del Estado, si bien cumpliendo algunas funciones diferentes a las del ciclo de desarrollo estatal anterior.

Haria efectiva una colaboración entre actores privados y poderes públicos propia de las experiencias nacionales de crecimiento exitosas. La capacidad de cálculo politico- económico por parte del Estado concerniente a las politicas de reconversión económica, al mantenimiento y transformación gradual de actividades económicas por imperio de necesidades sociales y a las politicas sociales compensatorias, se hallaria en este escenario más desarrollada.

La tecnoburocracia estatal, por lo tanto, aparece menos colonizada empresarialmente y al servicio de una razón de Estado con conciencia de las nuevas funciones estatales necesarias y

compromiso hacia el cumplimiento de las mismas, abordando las tareas de construcción estatal implicadas (recursos de seguimiento y control,racionalización/reconversión de empresas estatales no privatizadas, fijación de prioridades y asunción de nuevas funciones en Investigación y desarrollo, ciencia y tecnologia, optimización de la capacidad orientadora del comportamiento del sector privado a través de la acción estalal, etc.). Esto implica la adopción de criterios donde la problemática de perfeccionamiento de los distintos mercados Yde erradicación de ocasiones de rentabilidad especulativa esté presente. Se verificaria por lo tanto una mayor solidez estatal en aspectos técnicos, acompañando el desarrollo de una cultura de Estado.

La gobernabilidad económica que forma parte de este escenario no implicaría -como en el anteriorun proceso de desestructuración y de debilitamiento estatal, sino lo contrario (empero, en ambos no habría procesos fuertes de reconstitución de identidades socíales). Concretamente, las politicas económicas renejarian el impulso estatal de racionalización, modernización, reconversión, tanto sobre el propio aparato del Estado (con renovada capacidad de control y viabilizado por un ajuste fiscal no sólo por el lado de los gastos sino también por el de los ingresos), como en la negociación con los sectores empresariales privados.

En la medida en que este escenario supone cierta contención de la desagregación del conflicto, ello implicaria acciones de mediación e intercambio politico más eficaces en el sístema politico. Asimismo, en los sistemas de mediación política y social se renejaría una valoración de la eficiencia y competitividad económicas con menos contemplaciones y poca condescendencia hacia los fenómenos de capitalismo asistido improductivo.

En el seno de los partidos políticos seguramente habria un proceso de modernización y racionalización con reestructuración y reducción de los clientelísmos anteriores.

Seguramente la dualización social (pocos incluidos y muchos excluidos) inherente a este escenario, asi como ei anterior, no impediria la formación de un campo de conflicto politicosocíal donde se comience a disputar la orientación del proceso de crecimiento a mediano plazo.

Con todo, la diferencia fundamental respecto del escenario anterior estaria en la mayor vitalidad y solidez de los procesos de reconversión económica y no tanto en un funcionamiento muy diferente del sistema politico, sin gran perfeccionamiento pues de los sistemas de intermediación y representación. Podria

quizás agregarse una optimización de la relación entre el Estado y los sectores excluidos a través de politicas sociales compensatorias y de liderazgos también con capacidad de apelación popular. Esto no quiere decir que el papel delliderazgo politico, sobre todo en la figura presídencial, no pueda ser decisivo también en el escenario dos, habida cuenta de que ambos escenarios suponen una elevada centralización del poder político en la instituciónpresidencial.

TESIS 20

Un cuarto escenario, seguramente poco posible, se caracterizarla por una modernización concertada y expansiva acompañada por un proceso de integración social simbólica y tendencialmente material.

El Estado es un regulador clave del desarrollo, pero descansando en un régimen democrático que multiplica los intercambios potliticos entre los distintos actores, valorizando crecientemente su representatividad social.

En este escenario habria cierta correspondencia terminal entre procesos de innovación institucional, de redefinición de comportamientos e identidades políticas y sociales y d¡: gobernabilidad sistémica progresiva.

No se disuelve el marco del ajuste económico global y del ajuste fiscal, pero se agrega a la racionalidad de la acción estatal del escenario tres un énfasis en las políticas estructurales para mejorar la eficiencia y la asignación de recursos, como asi también para expandir la capacidad productiva.

Los objetivos de equidad en la economia (mantenimiento o creación de empleos, subsidios al consumo,etc.), estarían presentes tanto en la prorigeración de los costos sociales de la racionalizaciónmodernización como en la incorporación de garantias de redistribución del ingreso paralelas al restablecimiento de los niveles de acumulación (pactos sobre inversiones del sector privado, incluyendo pautas de creación de empleos y umbrales de remuneración, etc., a través de una disminución de las imperfecciones y de las opacidades de los distintos mercados).

En cuanto a la innovación institucional, sería funcional a un peso cada vez mayor del régimen democrático en el sistema de toma de decisiones, con éxito en cuanto a disolución de aquellos núcleos que impiden una coherencia en los avances en la democratización.

La reforma política superaria pues discontinuidades institucionales en pro de una soberania democrática creciente; no se trata del im-

perio de la política sobre el mercado, sino de un restablecimiento de fronteras entre ambas dimensiones apto para el logro de una gobernabilidad sistémica progresiva.

La ocurrencia de tales procesos implicaria, en cuanto a las orientaciones de la acción de los actores politicos y sociales y del funcionamiento del sistema político, lo siguiente (a partir de los posicionamientos estructurales dados en la actualidad y del fortalecimiento de tendencias hoy subordinadas en las situaciones nacionales reales y que continuarían subordinadas en los escenarios sociopolíticos de mediano plazo que van del I al 3).

La acción estatal descansaría en este caso claramente en la capacidad del régimen democrático para agregar y racionalizar las demandas políticas y sociales en la toma de decisiones, restableciendo paulatinamente el equilibrio y la independencia de los poderes y articulando representación política y representación social.

El desplazamiento del núcleo fundamental de decisiones en favor del sistema político estaría fuertemente pautado por el régimen democrático en pero feccionamiento. Un signo inmediato de ello seria la ampliación de la escena pública y las garantías de acceso equilibrado a ella, en función de la representalividad social de los distintos actores y compen sando los poderes disimiles de los mismos en el mercado. En tal ampliación aparecería también un comoponente de racionalidad argumentativa no exenta de elementos técnicos, aportada por distintas disciplinas cientificas (incluidas obviamente las sociales), en la figura de intelectuales, universidad y colegios profesionales, actuando como magistraturas.

La asunción de nuevas funciones por parte del Estado -incipiente en el escenario 3- en lo referido a capacidad técnica de seguimiento y control, a investigación y desarrollo, capaces de influir en los procesos de reconversión, se verían complementadas aqui por politicas de comunicación, potenciando procesos de integración simbólica a través de interacción de actores politicos y sociales en la escena pública.

Estas orientaciones de la acción estatal obviamente sólo son concebibles como resultantes de cambios importantes en la orientación de la acción de los actores politicos y sociales. En el caso de los partidos politicos, existiria una renovación marcada de su modalidad de relación con la sociedad a fin de convertirse en organizaciones útiles para el procesamiento institucional del conflicto social. De alli la gestación de un espacio de negociación entre ellos y los movimientos sociales clásicos y nuevos

con reconocimiento de autonomias sociales y sin reivindicar un monopolio de la representación por su via. Esto por supuesto demanda modalidades de comportamiento interno más deliberativas y más democráticas, pero también más desideologizadas y técnicas, como se apuntó en el párrafo anterior.

Los partidos colaborarían en la constitución de los actores sociales como sujetos políticos, fomentando que el Estado los reconozca en ese carácter (lo cual seguramente deberia formar parte del proyecto político del partido o coalición de gobierno). Un proyecto político de esta naturaleza es más probable que se geste desde actores incluidos en la reestructuración que directamente excluidos de ella, pues implica comprensiones totalizantes de la complejidad del nuevo ciclo histórico.

En cuanto a los actores sociales, la gestación de autonomia en su accionar debería ir paralela a la amplíación de su capacidad de intercambio politico con los demás actores sociales y con los actores especificamente políticos (Estado y partidos). Se entiende que tal ampliación de su capacidad de intercambio exigiria a su vezcapacidad para transmutar parte de sus demandas materiales en esfuerzos de perfeccionamiento del marco institucional y con ello de los sistemas de representación.

La dispersión de poder político que exige la democratización no redundaria en deterioro de la gobernabilidad sistémica en tanto existirian autolimitaciones en las demandas a cambio de garantias institucionales de un camino de desarrollo exitoso y gradualmente más equitativo.

Ello colocaría a las políticas de descentralización en un lugar destacado, ya que es imposible promover la autonomía y responsabilidad de los actores sociales sín transferírles mayores poderes.

En el caso de los actores socíales, también se registrarian, como en los partidos, comportamientos más orgánicos y perfeccionamiento de los mecanismos de representación. La disposición a asumir tareas globales derivaría de procesos de integración simbólica (no de homogeneización), seguramente con renovación de metas nacionales de desarrollo.

Entre los actores sociales, el sindicalismo y el empresariado actuarian de manera funcional a un proceso de reinserción activa en la economia mundial a través de una reestructuración/modernización concertada, con resultados societales relativamente garantizados a través de pactos sociales tripartitos.

La naturaleza de esos pactos seria a la vez compleja y cada vez más incluyente. El aumento de la complejidad para responder a la dife-

renciación social y productiva preexistente no bloquearia el sístema de toma de decisiones, sino que por el contrario reduciria la incertídumbre por los vínculos socialmente calificados entre los actores. Habria por consiguiente posibilidades de mantener un ámbito selectivo y lo más amplio posible para decisiones siempre nuevas y diferentes sin reducción de la complejidad.

La dinámica fundamental de este escenario estaría dada por el funcionamiento de un régimen democrático donde las diferentes fuerzas y actores disputen la dirección de una sociedad moderna, mediante un proceso de intercambio político entre los distintos proyectos en cuestión. En este escenario se plasmaría una capacidad de autodeterminación de la sociedad a través de su capacidad de actuar sobre si misma. La orientación de la transformación histórica en este caso pasa por ella.

COROLARIO DE CIERRE

El fin de un ciclo histórico tiene un costo social más alto que el comienzo de otro. Es urgente innovar integralmente y lo más rápido posible, pero potenciando a los actores políticos ya los actores sociales autónomos como únicos garantes de un desarrollo y una democracia estables.

Cuando el ciclo histórico estatal, que acabamos de analizar, se agota y a la vez un nuevo proceso de democracia política enmarca la reestructuración económica, es importante detectar los costos de esta reestructuración para las respectivas sociedades nacionales y para la región en su conjunto. Sobre todo es importante detectar si esos costos varían grandemente según las modalidades de esa reestructuración.

Por una parte, las tendencias de la economia mundial que explicaron, entre otros fenómenos, la globalización monetaria, la constitución de mercados y bloques regionales (Sudeste asiático, Comunidad Europea, comunidad socialísta y el bloque EEUU Canadá), el crecimiento de las NICS, el incremento del déficit Y la deuda de EEUU y el deterioro de laseconomías deudoras del llamado Tercer Mundo, no son favorables en general para la región y además a este panorama se agrega que el elemento dinámico del crecimiento económico está cada vez hás asociado a las innovaciones tecnológicas y al dinamismo avasallador del mercado; es fácil ver que estas tendencias de integración económica no son favorables en general para los paises de la región.

Por otra parte, los procesos de internacionalización de la política ponen más énfasis el! un "pragmatismo " económico y en el cálculo de intereses inmediatos que en estrategias globales de desarrollo y bíenestar social. En este contexto, se favorecen desde el exterior procesos de democratización subordinados a los éxitos de la lógica del mercado o de las áreas y sectores de interés estratégico-militar de los paises centrales.

Consiguientemente, el desafio interno de las sociedades latinoamericanas consiste no sólo en innovar, sino especialmente en cómo hacerlo.

El juego de posibilidades es complicado y sin lugar a dudas, como ya se argumentó en otras tesis, depende tanto de la trama de relaciones sociopolíticas internas como de los recursos de los paises en cuestión. No obstante, parecen predominar procesos de simple recuperación del Estado de derecho, en el plano del régimen político, y de racionalización del gasto en ajustes de corto plazo, en el plano económico, sin innovaciones fuertes en ninguno de ambos planos (a saber, sin experimentación ni recreación en los sistemas de representación política y social y en general de los marcos institucionales, por una parte, ysin un elevado componente de reconversión económica en la reestructuración, por otra).

Empero, los costos sociales de la racionalización -por ejemplo en cuanto a pérdida de puestos de trabajo, a desaparición de actividades no rentables, etcétera- son mucho más altos que los de la reconversión, y es imp'ortante señalar que el éxito de un proceso de reestructuración productiva depende no sólo de la capacidad para racionalizar la gestión sino también para reorganizar los procesos de trabajo e incorporar nuevas tecnologias.

Por supuesto que hacer esta distinción refuerza y no anula la necesidad de hacerse cargo del desfase entre reconversión productiva y resolución de problemas sociales. En este último sentido, hay que señalar que la diferenciación-exclusión social como resultado del proceso de reconversión productiva es menor que la introducida por la mera racionalización, pero esta última parece necesariamente previa.

Por lo tanto, hay un horizonte de dos aspectos cualitativamente distintos de diferenciación social cuyo cálculo en cuanto a implicaciones sociopolíticas es clave para la democracia.

Es decír, la diferenciación social como resultado de procesos de reconversión económica es menor que la introducida por la racionalización de la gestión productiva y de servicios.

Enfatizando aún más, el ajuste como mera racionalización sin crecimiento ímplicaría un

máximo de diferenciación social regresiva, en tanto el ajuste como proceso de racionalización-modernización reconversíón implicaría una combinación entre diferenciación regresiva y aumento de la complejidad con diferenciación tambiépor el propio proceso de crecimiento.

Por lo tanto, dado que sólo el crecimiento provee un umbral de gobernabilidad, resulta necesaria la innovación integral. Además, como se postuló anteriormente, garantizar la orientación de las políticas hacia la reconversión no puede lograrse fuera de cierta interacción democrática entre actores políticos y actores sociales autónomos cuyas identidades sean redefinidas en esa misma interacción.

De allí al corolario de cierre sólo resta la convicción de que únicamente un marco institucional también renovado es el que puede pautar intercambios políticos entre esos distintos actores capaces de producir garantias recíprocas de comportamíentos, traducibles en un proceso 'de desarrollo.

La cuestión del desarrollo es una cuestión de redefinición de identidades políticas y sociales, valorizando su capacidad para promover y aceptar marcos institucionales donde impere la representatividad social y la disposición para asumir tareas globales como palancas para disputar la actual orientación de la historia.

América Latina puede quizás hoy como nunca progresar y reincorporarse al mundo mejorándolo, pero para ello necesita sobre todo combinar creativamente crecimiento económíco con equidad social. Sólo lo podrá lograr si por fin confia en si misma, en su propia capacidad de acción y cambio.

"Esa hoja verde y divina la coca es"*

El tema de la coca, el de la cocaína en especial, nos va a dar trabajo a los sociólogos por un largo tiempo. Es realmente un espacio de trabajo tan complejo y tan rico en su complejidad y sabemos tan poco de cómo funciona, que es un verdadero reto entender su dinámica. No hay muchos estudios. Hay más bien estudios muy puntuales, muchos artículos periodísticos y algunos datos de información estadística poco confiable; dado este panorama lo que quisiera más bien hacer es entregar algunas ideas, puesto que no hay mayores avances en investigación. Es decir, quisiera entender desde varias perspectivas qué es este hecho de la cocaína o este hecho del narcotráfico.

Fíjense qué tema tan paradójico y diverso es, pues puede ser considerado como un elemento de afirmación de identidad, sobre todo entre el campesino productor, o lo que es la lógica de la cultura andina o de búsqueda de la identidad en jóvenes de USA hasta lo que es la negación de una identidad mediante el consumo de cocaína relacionada con la dependencia psicológica o incluso en la esquizofrenia.

Nosotros tenemos en el mundo andino una leyenda, se llama la leyenda de la coca. La leyenda de la coca dice que el Dios Viracocha anuncia a sus súbditos que iban a venir hombres barbados a explotarlos y que él les iba a dar una hoja para que resistan ese dolor, y les dio la hoja de coca, pero esa hoja además iba a ser maligna para los viracochas de afuera. Esa es la leyenda de la coca que tiene varios siglos. Pero la identidad con la coca y sus símbolos no es pues un arraigo del pasado, se recrea constantemente.

Recientemente, un grupo musical en La Paz que desgraciadamente desapareció, se llamaba WARA, que quiere decir estrella, intercalaban música andina con música electrónica, combinando guitarras eléctricas con zampo-

* Este texto fue presentado en una conferencia dictada en Berkeley, California, en octubre de 1989.

ñas y tocaban en los amaneceres en el Altiplano o tocaban los días de solsticio en La Puerta del Sol. Cantaban un poema a la coca que dice: "Esa hoja verde y divina la coca es, santa y clara lucidez, que en principio la vida te enseña a llevar a tu esencia has de llegar, hoja por hoja. Con nuestras garras has de subir en paz y ciencia tienes que aprender, humildemente todo has de ser. Esa hoja verde y divina la coca es, a tu esencia te va a llevar, hoja por hoja, santa y clara lucidez." Fíjense lo que significa como elemento de reafirmación de una identidad cultural.

Pero por otro lado, sabemos que el consumo de la cocaína propiamente tal, puede inclusive, por la dependencia sicológica, producir la desintegración de la estructura de la personalidad. Y se ha probado que, si bien no provoca, acentúa las tendencias "esquizofrénicas" tan relacionadas con la pérdida social de temporalidad cultural moderna y con la vivencia cotidiana de un presente continuo postmoderno. Entonces, fíjense, estos dos mundos tan distintos a través de un sólo fenómeno, uno ligado a una planta natural y el otro a una planta química…

Entonces el tema es, qué hay entre un acto y otro acto. Y de eso es de lo que yo quiero hablar ahora.

Entonces, para decirlo rápidamente, yo creo que este hecho puede ser captado desde tres perspectivas relacionadas: 1. Como un hecho multisincrético; 2. como un hecho instersticial; 3. y como un hecho internacionalizado.

Y sobre estas tres aproximaciones quiero hablar, sobre todo referirme al último punto, que es importante en esta coyuntura internacional.

Cuando digo que es un *hecho multisincrético*, estoy diciendo que en el hecho en sí de la producción de la coca y la elaboración de la cocaína, hay una cadena de relaciones económicas y culturales muy grande que incluye desde el campesino colonizado productor de coca, el consumidor consuetudinario, el comerciante de la hoja de coca, el que transforma la hoja de coca, el que genera el traslado de la hoja de coca hasta los mecanismos oligopólicos y de distribución y el consumo de cocaína. Entonces, la coca une por un lado una red de relaciones sociales muy mutantes, en un extremo y en el otro, un mecanismo oligopólico de comercialización de alto rendimiento, como cualquier otro tipo de producto del mercado internacional. Entonces, por eso es sincrético. Podríamos decir –casi parafraseando palabras– que es un hecho, (si uno lo ve no desde la economía sino desde la filosofía), que integra la pre modernidad con la post modernidad; el campesino vin-

culado a la tierra y a un tipo de producción y a un gerente norteamericano, Wohovic, vinculado a una transnacional. Se puede desglosar mucho más este acto sincrético desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, de cómo la cocaína integra en sí estos elementos. Yo no quiero detenerme mucho en esto.

El otro elemento que yo decía es que era un *hecho intersticial*. Esto quiere decir que se coloca en lugares y en espacios fundamentales que vinculan procesos políticos y socioeconómicos entre sí. Voy a dar siete ejemplos en relación a esto, más que definir conceptos.

Uno creo que es en relación al perfil del consumidor. Ustedes saben que el perfil del consumidor es común sobre todo en los países desarrollados y especialmente en USA. Varía entre 17 y 29 años. Y hay además dos tipos de consumidores de caocaína: unos, aquéllos que están metidos en los sectores de punta de la transformación económica y cultural de estos países (hay algunas investigaciones y algunos datos que dicen que la gente más "in" consume cocaína para aumentar la productividad); estos se dividen fundamentalmente en tres categorías: técnicos de alto nivel, deportistas y artistas. Hay un estudio que ha hecho un profesor aquí en Berkeley (se llama Edward), que incluso señala una "enfermedad" que se llama "Unigueness", el lema sería: "para ser el único en el campo de deportes y mejorar tu productividad deportiva, consume cocaína". Lo mismo, parece ser que hay una relación alta entre la edad de consolidación de un status socioeconómico, la productividad y el consumo de cocaína, esto entre los 30 y los 40 años. Por otro lado, también es más generalizada la imagen de que el consumo de cocaína, sobre todo la cocaína fina, está relacionado con la productividad en el mundo artístico. Por lo tanto, parecer ser –y habría que ver, pero hay algunos indicadores que permiten decir– que el perfil del consumidor, de estos jóvenes consumidores, está situado en estos grupos altamente "in" y en una gran masa de gente "out", es decir, que están fuera del sistema o son muy periféricos al sistema, y que oscilarían entre la gente que está en la franca anomia social o conducta desviada y el desempleo de los jóvenes.

Probablemente, y esto lo hemos trabajado en algún momento, esto esté relacionado, y esto es un elemento fundamental, con la crisis de la familia nuclear en las sociedades desarrolladas. Entonces, la familia como lugar de socialización y espacio de reproducción de valores y de producción de cuadros para la vida social, por los efectos de la modernización de

la familia, no tiene capacidad de lograr esa reproducción, esa socialización reproductora. Entonces, en realidad lo que estaría en crisis es una forma familiar de vivir, que se paliaría de esta manera. Entonces, en realidad desde esta perspectiva, desde este intersticio, el problema del consumo de la cocaína es un problema cultural, no es ni económico ni político. Es un problema cultura hipermoderno que tiene que ver con la crisis de la familia[1].

También se inserta la cocaína, creo yo, entre los procesos de acumulación de capital y crisis que existen sobre todo en América Latina. Cuando hay una crisis del modelo de acumulación o del modelo de desarrollo económico por vía de la transformación o del ajuste estructural, un elemento netamente compensatorio e impulsor, es los ingresos que provienen por la exportación o por la intermediación de cocaína. Entonces, palia o regula o se inserta dentro de los procesos, la crisis de los procesos de acumulación[2] (3).

Otro elemento intersticial importante, ya más mirado en las "sociedades periféricas", directamente relacionado con las estructuras de las relaciones sociales, consistiría en que el núcleo de relaciones que tiene el campesino está dado por la relación que tiene con el Estado y la relación que tiene con el mercado. Y esa relación está estructurada por comerciantes –medianos, pequeños y ahora grandes–. Entre este productor y este comerciante se ha superpuesto este procedimiento de comercialización de la coca, produciendo tanto en el campesino como en el comerciante un proceso de diferenciación.

Pero también tiene puntos intersticiales a otro nivel. Por ejemplo, en el sistema político, el hecho se coloca entre el sistema político y el poder judicial, mediante sistemas de corrupción y de control del poder judicial. Otro ejemplo político: se coloca entre las fuerzas armadas y las guerrillas, o la policía, las fuerzas armadas y las guerrillas. Vamos a contar más adelante algunos ejemplos, sobre todo los casos peruano y colombiano. Se coloca también dentro de la política de represión de los Estados de los países Centrales, que es

1 Véase Calderón, Fernando y Gaustein, Laura, "La coca y el modo de vida americano o de cómo para vivir es necesario suicidarse", *Le Monde Diplomatique* edición en español, noviembre/diciembre 1987.

2 Véase Castells, Manuel y Laserna, Roberto, "La nueva dependencia. Cambio tecnológico y reestructuración socio-económica en Latinoamérica". En *David* y *Goliath*, nº 55, julio 1989, Buenos Aires.

una política sobre todo de efecto, y también se coloca en los procesos de la acumulación de capital multinacional. Yo siempre me digo: si yo pudiera hacerle una pregunta al presidente Bush, quisiera preguntarle qué pasa con los aproximadamente cuarenta y cinco mil millones de dólares que se quedan en Estados Unidos al año por la venta de cocaína. ¿Cómo se blanquean, dónde van? que me cuente qué pasó con eso, y qué consecuencias trae para la economía norteamericana.

Para terminar con estos ejemplos de lugares intersticiales, la coca se coloca entre la ética protestante y el mercado. La ética protestante demanda un incremento de la productividad, un éxito económico, pero al mismo tiempo esto tuvo que ver con la corrupción de la especulación. Y este éxito económico hoy día está viabilizado para muchos por la cocaína.

Bueno, esos eran aspectos que a mi juicio hay que analizarlos y desarrollarlos más y trabajar mucho. Ahora bien, recién podemos entrar al tema éste de la internacionalización de la política.

Yo creo que el boom de la cocaína, si bien tiene antecedentes históricos en la década del 70 y aún antes, es importante notar que América Latina tiene una expansión notable –y esto no es casual– en el proceso de crisis y reestructuración de la economía latinoamericana y su reinserción en la economía mundial. Y paradójicamente en el proceso de democratización. De alguna manera los mayores niveles o los mayores índices de producción de cocaína guardan relación –habría que probar cómo es esa relación, yo no la sé, pero por lo menos aparentemente hay una relación muy alta– entre el proceso de crisis y depresión de las economías latinoamericanas y el boom de la cocaína. Y además quizás esto se da en un contexto de democratización como el que vive la región. O sea, en la década del 80 la productividad de cocaína aumenta brutalmente en el mercado internacional, lo mismo que el consumo. El año 82 es el momento donde se declaró oficialmente la crisis de la economía latinoamericana y paralelamente la década del 80 marca un proceso de democratización en la región.

Entonces, ese es el marco en el cual se tiene que entender esta experiencia de la cocaína, pero también como parte de un proceso de internacionalización de la política. Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la política norteamericana. La internacionalización de la política es parte de la definición de lo que llamamos los actores fundamentales del escenario internacional, esto es el Fondo, el gobierno norteamericano y otras agencias y bancos en la

definición de la relación entre ajuste y democratización. Uno podría decir que esta política ha tenido cuatro fuentes, que no tienen la misma racionalidad ni la misma consistencia. La primera fuente, la más racional y la más consistente de estos actores fundamentales, es la hegemonía militar y la racionalidad militar. Hay una estrategia de seguridad a nivel mundial de Estados Unidos que según muchos análisis y estudios muestran cómo es la racionalidad más coherente y organizadora del resto de las racionalidades políticas y económicas. O sea, las estrategias militares de seguridad a nivel mundial y en este caso latinoamericano, constituyen el elemento ordenador del imperio en sus relaciones con América Latina y el resto del mundo.

Por otra parte, la estrategia de democratización política es muy inconsistente y está subordinada a la primera. Hay un trabajo muy interesante de Lawrence Whitehead sobre esto[3].

Si que sobre la consistencia de las políticas de actores internacionales, Estados Unidos y Europa principalmente, sobre la democracia en América Latina. En general en USA se tiene más bien una visión muy instrumental de la democracia que está subordinada a la política de seguridad militar. El autor muestra la inconsistencia de distintas situaciones y actores, donde un factor fundamental es cómo incide sobre la sociedad civil y la sociedad política norteamericana esa política de democratización.

Una tercera política norteamericana, ya directamente ligada con el narcotráfico, es la represión policial y jurídica hacia el narcotráfico, que actúa tanto interna como externamente, y que a mi juicio actúa más sobre los efectos de la cocaína, que sobre las causas. Donde el elemento fundamental es la coacción. Finalmente están las políticas económicas ligadas con el proceso de reestructuración, sobre todo para los países productores de coca, de la economía internacional. O sea, yo no podría entender el problema de la expansión de la producción de coca en Bolivia si no es en relación al crac del estaño.

En este hecho de la internacionalización uno puede diferenciar situaciones según el tejido social-cultural, la estabilidad política y la racionalización de la reconversión económica. O sea, esos tres factores como que me permitirían clasificar o tipificar las diferentes situacio-

3 O'Donnell, Guillermo et. al. *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Tomo I: Europa meridional. Tomo II: América Latina. Tomo III: Perspectivas comparadas. Tomo IV: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Biblioteca Estado y Sociedad. Paidos, Buenos Aires, 1989.

nes con relación a este proceso de internacionalización derivado de la producción y el consumo de cocaína. Entonces en esa lógica por lo menos tentativamente podríamos tipificar cuatro situaciones. La peruana, la colombiana, la boliviana y la norteamericana.

Hay una situación, como la situación del Perú en la coyuntura, donde se superponen una crisis de la gobernabilidad del Estado, (incapacidad sobre todo del ejecutivo de organizar las propias reglas del juego político al interior del Estado, fundamentalmente con el legislativo y el poder judicial), un sistema político subordinado y escasamente representativo, un fraccionamiento y una crisis de los actores sociales fundamentales de la sociedad peruana, fundamentalmente el movimiento obrero y el movimiento campesino, un desarrollo de anti movimientos sociales ligados a la fragmentación, como es el caso de Sendero Luminoso. En este dinamismo la cocaína actúa como un acelerador de la descomposición social. La política en este marasmo tiende a ser definida como de enfrentamiento y de destrucción. Entonces se producen una serie de yuxtaposiciones; parece ser que en el norte de Perú, la relación entre los procesos de exclusión social, la emergencia de la guerrilla y Sendero Luminoso han hecho una alianza entre excluidos, narcotraficantes y guerrilleros. Ahora, no todo Sendero Luminoso es así; eso solamente ocurre en el norte del Perú. En otras partes Sendero Luminoso actúa solo como grupo terrorista, en otras partes actúa como movimiento campesino, sobre todo en Puno, ligado a tomas de tierras y a movimientos de masas. Entonces, tampoco hay que identificar absolutamente sendero-narcotráfico. Pero, de todas maneras lo fundamental de esto es que actuaría como acelerador de la descomposición social.

El caso colombiano, es muy distinto. En el caso colombiano se asienta por así decirlo, un proceso de acumulación salvaje, una estabilidad económica de largo plazo, y una exclusión socio-política intensa. En Colombia, ustedes saben, las tasas de crecimiento económico en los diez últimos años son altas, pues han oscilado entre 6 y 10%; la economía colombiana es una de las economías de mayor potencialidad de inserción en la economía mundial, que todos sabemos que es clave en la determinación de las posibilidades de los países de América Latina en el mercado mundial. No solamente por su exportación de productos, desde petróleo, café, diamantes y cocaína, sino también por su cierto grado de desarrollo industrial y de reconversión industrial que se ha plasmado relativamente en Colombia. Y esto expresado

regionalmente y expresado urbanamente, se combina con un proceso de exclusión socio-política muy intenso. Entonces, es como una acumulación salvaje yuxtapuesta con una exclusión socio-política muy intensa. Colombia es un país que probablemente sobresale en América Latina o por lo menos en Sudamérica, por sus escasas reformas sociales, además por una tradición de violencia muy alta, y de un proceso gatopardista de transformación de sus élites muy consitente –que produce una alta conflictualidad sin canales reales de institucionalidad representativa– lo que redunda en un proceso de deslegitimidad o legitimidad del régimen democrático creciente.

Probablemente el tema de la soberanía nacional vinculado al poder judicial, es el tema de coyuntura vital en el caso de Colombia. En este sentido, el narcotráfico actúa como multiplicador de los procesos de acumulación, pero también como multiplicador de conflictos socio-políticos de exclusión. A mí me dá la impresión que de hecho se producen una serie de fenómenos, sobre todo si uno sigue la prensa ahora en el caso de Colombia, que cruzan temas de soberanía nacional hacia afuera con temas de gobernabilidad política interna. Ustedes saben que el conflicto entre el ejecutivo y el poder judicial es muy intenso. El ejecutivo, por compromiso con Estados Unidos, decidió extraditar a narcotraficantes; sin embargo, parte del poder legislativo, (el candidato del partido liberal a la presidencia de la República, y parte de los jueces y los partidos) se oponen a esta extradición porque dicen que va contra la soberanía nacional, y esto probablemente es así. Pero eso deslegitima externamente al régimen de una manera brutal. Y de hecho genera un plano de intereses compartidos entre los grupos sociales y políticos o se va a resolver por un aceleramiento de la guerra y el terror. Las guerrillas, otro actor clave en la política colombiana, parece que llaman a una negociación. En todo caso en esta situación tenemos un fenómeno donde se pretende combinar represión, enfrentamiento y negociación; en el escenario del narcotráfico están las tres figuras. Y cuando digo represión digo combinación, porque todo sistema político hoy día está tan destruido, todas las relaciones de orden hoy día están descompuestas en Colombia que los mecanismos de coacción lo dan grupos privados. O sea, el monopolio de la violencia ya no es exclusivo del Estado, sino que se expresa en una cantidad inconmensurable de grupos paramilitares, y casi a nivel individual. Cuentan anécdotas que en Cali y Medellín, acerca de un “mercado de pistole-

ros" uno sabe que puede comprar la vida de uno o de otro en determinados lugares de la ciudad simplemente con determinado monto de dinero. Entonces hay una generalización de una destrucción societal del orden total. Hasta dónde va a estirarse la razón de Estado para regular, negociar o no esta situación, esto no se sabe, pero todo esto está íntimamente interrelacionado, y su solución también tendrá que ser compleja e internacional.

Para recapitular, en el caso de Perú entonces la cocaína actuaría como acelerador del proceso de descomposición social. En el caso de Colombia, como multiplicador de conflictos y de acumulación. En el caso de Bolivia, el hecho del narcotráfico tuvo situaciones diferentes en el gobierno de la UDP (el año 83/85) actuó antes como desestabilizador económico, fue factor fundamental de la hiperinflación, no olviden que Bolivia tenía una tasa de inflación anual de 23.000%, (fundamentalmente dada por la entrada de dólares y la regulación de esos dólares en la economía interna), pero hoy día la situación no es así, hoy día actúa y es funcional al ajuste racionalizador y fue relativamente funcional a la estabilidad política y económica. Entonces actuó como mecanismo de compensación económica pero también como mecanismo que merma el orden, además de ser factor de desintegración de valores ético-políticos de soberanía nacional. La relación política internacionalizada se da entre negociación y represión. No hay, por el momento, enfrentamiento, como en el caso de Colombia o en el caso de Perú.

En Estados Unidos, la cocaína funciona como acelerador de mecanismos de acumulación de capital y como cuestionador de valores éticos centrales. Su funcionamiento produce por parte del Estado represión explícita y negociación implícita. Es el mercado donde se realizan las ganancias, y es además el lugar donde se plasman la situaciones 1, 2 y 3 que les conté y las otras que puede haber. Entonces es el espacio donde se plasma la realización de la ganancia y donde se plasma políticamente el narcotráfico. ¿Cómo funcionan los procesos oligopolíticos? ¿Cuáles son los sistemas de estructuración de la distribución de la cocaína? ¿Cuánto empleo genera? ¿Cómo es ese empleo? Se supone que alrededor de 300.000 personas tiene trabajo temporal en este país por la venta de cocaína. Se supone que hay 45.000.000 de jóvenes en este país que prueban una vez al año la cocaína. ¿Cuáles son los límites de esto? ¿Cómo se va a resolver esto económica y políticamente? Estados Unidos tuvo una política tra-

dicional respecto a la droga y relativamente consistente durante los últimos 10/15 años. Antes catalogaba a la droga y los peligros de la droga como un producto del sistema de oferta que venían de otros países. Hoy día la admnistración Bush ha aceptado por primera vez, y seguramente por presiones internas, que esto tiene que ver con la estructura de demanda y de un sistema de intereses internos. La respuesta a la doble relación, parece ser que sigue siendo la represión, sea una represión educativa, sea una represión policial. No existe una visión en términos de relaciones sociales, de producción, de crisis de la familia, de roles de socialización, de producción de valores, etc.

Para cerrar esta introducción a la discusión podríamos sacar tal vez tres conclusiones que uno las podría colocar como preguntas.

En primer lugar que la producción y el consumo de coca y de cocaína es funcional a los procesos de reestructuración a la economía mundial y de concentración de capital.

Segunda cosa que uno puede decir, que éste es un producto sistemático que a la larga tiende a negar el funcionamiento del sistema y que produce autodestrucción societal, esto quiere decir una producción de relaciones sociales sin sentido, sin valores.

Y finalmente la característica es que las políticas represivas centradas en los efectos del narcotráfico reproducen el sistema.

Los movimientos sociales frente a la crisis*

I. La sociedad no es una estructura

Los análisis predominantes de las Ciencias Sociales en América Latina en cualquiera de sus corrientes interpretativas han dejado de lado de alguna manera la comprensión de los movimientos sociales y de otras formas de la acción colectiva.

Las llamadas teorías desarrollistas elaboradas sobre todo en la década de los '50 y a principios de los '60 hicieron hincapié en los procesos de modernización, industrialización y aculturación. Su interés fundamental giraba en torno de la evolución de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, expresada a través de un continuo societal; allí la noción de cambio connotaba una secularización creciente, con conflictos y asincronías de las estructuras sociales y políticas. Así el desarrollo era concebido como el lúcido destino de la acción racional victoriosa.[1]

* Este trabajo fue presentado originalmente en el seminario sobre Movimientos Sociales, realizado del 29 al 31 de mayo de 1985 en la sede de DESCO, Lima, Perú, en el marco del proyecto "Los movimientos sociales frente a la crisis en Sudamérica", patrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).

1 Véase, por ejemplo, Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1971.
Germani, fuertemente influenciado por Parsons en su teoría de la acción social, vislumbra la acción social de grupos e instituciones de las sociedades en transición como un sistema de alternativas de elección que conducirán a la modernidad, siempre y cuando las acciones racionales aventajen a las tradicionales utilizando las normas preestablecidas y se adecuen a las condiciones sociales posibles. Estos elementos lo condujeron en su tipología de evolución del sistema político a la elaboración de etapas políticas que se iniciaban en procesos de dictaduras militares y terminaban en sistemas democráticos de participación total. Pero piénsese, más allá de los aportes conceptuales del autor, los procesos concretos que luego vivió la región.

Mientras se formaban estas construcciones teóricas, introduciendo la problemática de la modernización y la industrialización en América Latina, sucedían movimientos nacionales que, si bien promovían cierto desarrollo económico y cierta modernización social, por otra parte provocaban nuevos conflictos y finalmente, una nueva dependencia de los países capitalistas centrales, siendo además portadores de formas "irracionales", confusas y difusas, de acción social: los populismos.[2]

La década de los '60 se caracterizó en gran medida por la crítica al desarrollismo, tanto en el plano de sus resultados fácticos, como en el de sus análisis teóricos, emergiendo desde distintas versiones la llamada "escuela de la dependencia". Nociones como desarrollo del subdesarrollo (Franck), situación dependiente (Cardoso-Faletto), dependencia y marginalidad (Quijano-Weffort), condición dependiente (dos Santos), subimperialismo y formas de acumulación de capital subordinadas (Ruy M. Marini), constituyeron análisis críticos a las teorías anteriores desde las estructuras latinoamericanas.

Más allá de la crítica histórica y de la relativa inadecuación nacional de estos análisis, aquí interesa resaltar que en estas "escuelas" los movimientos sociales fueron poco estudiados, concebidos como reflejos voluntaristas o como acciones determinadas por el orden económico o estatal, o por la acción partidaria. De alguna manera el Estado era visualizado como el productor de sociedad, y las élites o burguesías dependientes, como las fuerzas malignas sustentadoras del orden social dependiente; al proletariado, en varias de estas versiones, le correspondería cumplir sus metas históricas preestablecidas, su práctica de alguna manera ya estaba escatológicamente concebida, sólo había que alcanzar la conciencia necesaria.

Tal vez es posible distinguir dos supuestos implícitos en estas teorías.

Por una parte, conciben a los movimientos sociales como prácticas subordinadas a los partidos, al menos en dos sentidos. Para unos la acción colectiva se subordinaría a la acción consciente del partido-vanguardia; para otros, esta acción colectiva se caracterizará por combinarse y yuxtaponerse con el partido (partido-movimiento), donde el líder, el gran conductor

2 Existen pocos textos teóricos sobre el populismo en América Latina. Véase para un análisis del discurso, Laclau, *Política e ideología de la teoría marxista*, Siglo XXI, España, 1978. Para un análisis sociopolítico, Quijano-Weffort (compiladores), *Populismo, marginalidad y dependencia*, Costa Rica, 1973.

nacional, interpretaría y sintetizaría los intereses de los movimientos sociales. Así, para unos y otros, los partidos serían en definitiva los que podrían interpretar la estructura, producir sociedad y, en definitiva, hacer la historia. Ciertamente, aquí no pretendemos negar la importancia histórica de los partidos de vanguardia (leninistas) ni de los partidos-movimiento (populismos) en América Latina —sus efectos sociológicos han sido y son muy importantes en la región—, sino que deseamos resaltar que esta visión partidaria altamente elitista impidió visualizar globalmente las características particulares de los movimientos sociales; sus intereses, sus oposiciones, sus identidades, sus sueñso y deseos, sus mismterios y su propia producción societal.[3]

Por otra parte, varias de estas concepciones dependentistas contenían cierto reduccionismo estructural de las relaciones de clase, que los inhibía de analizar las prácticas sociales.

Explícita o implícitamente se suponía que los sujetos sociales sólo son sujetos de clase mientras que, paradójicamente, varios estudios concretos probaron que en América Latina no existen clases puras, plenamente constituidas, que los sujetos sociales están adscriptos a múltiples posiciones que corresponden a diferentes capas sociales que se jerarquizan y ordenan según los conflictos y las luchas sociales, culturales y étnicas vividas. Tal vez ejemplos más claros son los de las oligarquías y del campesinado.[4] Otro aspecto importante es que, aunque todo actor está formando parte de relaciones de clase, también existen otras formas de relación: étnicas, juveniles, religiosas, regionales, de género, etcétera, que son

3 Para una visión recuperadora de las orientaciones de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina, véase Touraine, Alain, *Las sociedades dependientes*, Siglo XXI, México, 1978, sobre todo págs. 209 en adelante. Para una visión crítica del marxismo latinoamericano véase J. Aricó, *Marx y América Latina*, Alianza Editorial Mexicana, México, 1982. Véase también para un análisis crítico concreto J. Malloy, *The Incompleted Revolution*, Pittsburg University Press, Pittsburg, 1968.

4 Véase, por ejemplo, Cotler, J., *Clases, Estado y nación en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1978; González Casanova, Pablo, *La democracia en México*, ERA, México, 1982; E. Fischer, *Estado, clases e industria*, Editorial El Conejo, Quito, 1983; Cardoso, Fernando E., "Régimen político y cambio social", en *Estado y política en América Latina*, Edit. Siglo XXI, México, 1981; varios autores, *Ecuador agrario*, El Conejo-ILDIS, Quito, 1984; en particular trabajos de A. Guerrero sobre haciendas y S. Pachano sobre diferencias entre burguesía agraria y burguesía rural.

esenciales para entender la acción y la conciencia de los grupos sociales.

Incluso en textos como los de Cardoso y Faletto,[5] su valiosa tipología sobre las situaciones dependientes no alcanza a incluir un análisis dialéctico entre movimientos sociales, Estado, grupos dominantes e imperialismo; allí, en realidad, se analizan bloques de clases y alianzas donde el Estado y el modelo de desarrollo económico son el resultado de dichas alianzas; el mismo Estado es visualizado como puente o pacto de dominación entre las clases dominantes nacionales y el capitalismo internacional; para los autores, los movimientos sociales en realidad cumplen un papel complementario a alianzas paraestatales o estatales.

En fin, se podrán desarrollar muchos argumentos en este sentido, pero aquí se desea revelar sólo una hipótesis: para el conjunto de los pensamientos señalados y otros no analizados, lo movimientos sociales fueron percibidos y analizados de manera secundaria. Los análisis de la "estructura" y su racionalidad cubrían el escenario social de la realidad latinoamericana. Quizá los análisis no podían comprender (o se negaban a hacerlo) el conjunto complejo, viscoso, ambiguo y creativo de las relaciones sociales y sus mutuas interacciones y con ellas, las capacidades de acción de la sociedad sobre sí misma. Tal vez los movimientos sociales de manera latente o implícita o subconscientemente eran percibidos como "lo irracional", lo no explicable.

¿Dependencia teórica de un modo de pensar racional y eurocéntrico? ¿Positivismo mecánico producido por la creciente industrialización? ¿Realismo mágico sólo visible para García Márquez? ¿Diversidad e interpenetración de actores sociales y políticos con estructuras de clase no consolidadas? ¿Presencia de pensamiento partidario, elitista y totalitario que absorbe a los movimientos sociales? ¿Ausencia de demandas sociales de autopercepción? ¿Dificultades metodológicas inherentes a la ciencia social para entender "lo irracional"?, etc. etc. Las preguntas son ejemplos de una problemática más amplia y las respuestas probablemente tendrán que ser complejas, críticas y colectivas.

Toda esta incipiente crítica no puede dejar de mencionar, sin embargo, la presencia de varios e

5 *Dependencia y desarrollo económico*, Siglo XXI, México, 197X. Véase también post Scriptum *Desarrollo Económico*, núm. 66, julio-setiembre 1977. Una interesante crítica de la visión del Estado a estos autores, véase en Tilman Evers, *El Estado en la periferia capitalista*, Siglo XXI, México, 1981.

importantes estudios sobre movimientos sociales que se hicieron en la región. Efectivamente, son varios los estudios sobre movimientos campesinos, estudiantiles, nacionales, sobre sindicalismo obrero u otros;[6] aquí no se desea, ni mucho menos, negar su importancia y su actual utilidad, sino solamente ponderar sus consecuencias, en tanto no constituyeron ejes analíticos básicos de las sociedades latinoamericanas.

Por otra parte, la actual crisis que sacude a la región, concomitantemente con la emergencia de procesos democráticos o de redemocratización ha tenido en el corazón de su razón de ser la emergencia de movimientos sociales, que en gran medida exigen o demandan a los analistas entender "lo irracional" para poder visualizar no sólo la crisis y sus opciones, sino a las mismas sociedades latinoamericanas.

Con la crisis de los modos de industrialización y del sistema cultural que los acompaña, los nuevos comportamientos, de viejos y recientes actores sociales, de alguna forma están redefiniendo sus mutuas interacciones y sus relaciones con el Estado y la política; en este sentido tal vez no sea muy atrevido hipotetizar que los movimientos sociales, en su diversidad y complejidad, sean potencialmente portadores de un nuevo orden social.

Sin embargo, se debe entender que la emergencia de movimientos sociales configura una amplia panorámica, un horizonte muy diverso. Lo que existe es un abanico de movimientos sociales multicolores, multiformes y heterogéneos. Tal vez éstos hayan roto, o estén provocando la ruptura de algunas concepciones totalizantes, excluyentes y únicas del destino de América Latina.

Parecería ser que los mismos movimientos sociales, más que las interpretaciones analíticas, van mostrando un horizonte de posibilidades a través de sus conflictos, del fracaso o creciente descomposición de los autoritarismos, y en la búsqueda de un cambio de la condición social de gran parte de las sociedades latinoamericanas.

Como se pudo apreciar en la década del setenta,[7] estudios realizados a lo largo y ancho

6 Piénsese en varios estudios sobre la revolución mexicana (Womack, Worman) o sobre sindicalismo y protesta obrera (Touraine, Di Tella, Toller, Delich, etcétera), o sobre sindicalismo campesino andino (Dandler, Albo), sólo para hacer referencia a algunos estudios realizados en la década del sesenta. En la década del setenta la producción concreta fue mucho mayor.

7 Sólo para apreciar un grupo de estudiosos sobre el tema, véase a) *Participación*: UNRISD, Ginebra, Suiza,

de Latinoamérica, nuevos conflictos nacionales, de clase, regionales, urbanos, de género, étnicos, de violencia revolucionaria, juveniles, burocráticos, etc., empiezan a plantear desde su misma lógica, formas de identidad y conflictualidad qua trastocan tanto visiones unidireccionales, economicistas y tecnocráticas de la crisis, como las meramente estatistas o partidarias, y de alguna manera los nuevos movimientos, con mayor o menor intensidad, apuntan a la emergencia de un nuevo orden democrático y a la elaboración de nuevas formas de pensar la sociedad, la política y el desarrollo.

En este sentido, la idea central del presente estudio es que en gran medida los movimientos sociales viven un momento de inflexión entre sus orientaciones y características tradicionales (por ejemplo de modernización, de liberación social y/o nacional) y la emergencia de nuevas prácticas y orientaciones, tanto en los actores clásicos (obreros, campesinos, etc.) como en las nuevas prácticas y movimientos sociales (género, juventud, derechos humanos, etcétera).

La pluralidad de estos movimientos tendería a caracterizarse por prácticas particularistas, reactivas y defensivas frente a la crisis, y sus identidades también tenderían, al menos inicialmente, a encerrarse sobre sí mismas, desconectándose en un primer momento de las nuevas lógicas abstractas pero reales del dominio mundial, que también está en pleno proceso de reestructuración y ampliación. Es decir que existiría una especie de distorsión entre el sistema de oposiciones percibidas como reales por los movimientos sociales y la materialidad en construcción de una nueva economía política mundial (revolución tecnológica, militarización del consumo, internacionalización del capital, destrucción o disminución del Estado de bienestar, etc.); ésto no quiere decir que exista un problema de falsa conciencia de la nueva lógica del poder por parte de los movimientos sociales (al FMI se lo percibe ajeno y abstracto), sino una inadecuación temporal entre oposiciones reales y factores de poder.

Sin embargo, aquí se sustenta que en estos espacios de resistencia pequeños, cotidianos y culturales, comienzan a emerger valores y formas sociales colectivistas, de autogobierno, de

1981, serie de publicaciones sobre participación social; b) "Movimientos sociales y participación popular", Seminario UNRISD-CLACSO, en *David y Goliath* núm. 46, enero-diciembre 1984, Buenos Aires; c) Camacho-Menjíbar, *Movimientos sociales en Centroamérica*. FLACSO-UNU-IISUNAM, San José, 1985.

solidaridad, de autogestión, etc., que probablemente puedan reconstituir el sistema de oposiciones y viabilizar la reconstrucción de sujetos históricos.

El texto que sigue, sólo pretende ser un instrumental preliminar, crítico y teórico, para comprender estos procesos.

II. LA VOZ CON HUELLAS

El análisis teórico de los movimientos sociales en América Latina es por el momento limitado y está más bien en construcción.

Es muy fácil caer en la repetición o adecuación mecánica de desarrollos teóricos realizados en Francia, Italia o Estados Unidos, que obedecen a dinámicas nacionales distintas. Así la generalización excesiva sobre el o los movimientos sociales o el historicismo genérico de la acción social son tan peligrosos como la pura descripción local detallada; sin embargo, de alguna manera es necesario construir un cuerpo teórico generalizable, pero condicionado y alimentado por los procesos concretos de las prácticas sociales en la región.

Tal vez dos parámetros puedan servir como punto de partida para enmarcar este propósito: uno referido a los largos y conflictivos procesos de formación nacional[8] y el otro al sistema de relaciones sociales y su articulación en los diferentes espacios nacionales, donde si bien las relaciones de clases y las potencialidades de cambio son vitales, éstas no cubren ni explican otras relaciones también muy importantes como las regionales, las étnico-culturales, las de género, etc.; el problema consiste en poder captar la dinámica del conjunto de estas relaciones, pero también sus especificidades en el contexto internacional.

Pero las relaciones sociales no son sinónimo de movimientos sociales, ni todo lo que se mueve en la sociedad es un movimiento social; si bien éstos son los productos y el reflejo de la misma, se producen cuando los distintos actores, cualesquiera sean, actúan y se orientan para recrear y transformar las relaciones en cuestión.

En este sentido, quizás una característica propia de América Latina es que no existen movimientos sociales puros o claramente definidos, dada la multidimensionalidad no sólo de las relaciones sociales, sino también de los mismos sentidos de la acción colectiva; por ejemplo, un movimiento de orientación clasis-

8 Los estudios nacionales en este texto dan cuenta de ello.

ta probablemente esté acompañado por sentidos étnicos y de género, que lo diferencian y asimilan a otros movimientos de orientación culturalista con contenidos clasistas. Así, los movimientos sociales se ven nutridos por múltiples energías que incluyen en su constitución desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural, hasta modos de transformación y participación cotidiana de autoproducción societal, como la forma real de hacerse sujetos, donde la lógica polivalente de los conflictos vividos permiten visualizar la totalidad nacional o regional en la cual estos movimientos se desenvuelven.

De alguna manera se trataría de entroncar los diferentes conflictos puntuales de determinados movimientos con la sociedad analizada, y muy específicamente con las relaciones sociales que están en juego, lo que de suyo además implica explicar la formación de las prácticas de los movimientos, sus efectos institucionales, su creación de formas sociales y valores culturales y cómo se constituyen en ellos nuevas identidades y nuevas orientaciones societales.

Una pregunta que vale la pena formularse en cada situación, es acerca de cómo se construyen estas formas identificatorias, tanto en términos de recreación de experiencias del pasado presentes en la memoria colectiva del sujeto —donde por lo general se redefinen de acuerdo al tipo de enfrentamiento vivido y a los mitos construidos–, como en términos de las formas psicológicas de autoafirmación colectiva. Los momentos de crisis parecen tener la virtud de mostrar con más claridad estos fenómenos, pero de manera paradójica. "La crisis libera al mismo tiempo las fuerzas de la muerte y las fuerzas de la regeneración; de allí su ambigüedad radical". "Puede tener un resultado regresivo y progresivo".[9]

En este sentido, conviene analizar toda acción colectiva también en términos culturales y psicosociales, ya que estas acciones no siempre son explícitas y a veces sólo pueden leerse "entre líneas". Sin embargo, creemos que el sentido de toda acción debe buscarse en dos planos: en el de la acción propiamente tal y en el del sentido de la misma.[10]

9 Morin, Edgar, "Para una crisiología", en R. Starn, Freund y otros, *El concepto de crisis*, Ediciones Megalópolis, Buenos Aires, 1979, pág. 293.

10 En este sentido parecería importante extrapolar algunas hipótesis de la teoría lacaniana en términos de la relación entre el imaginario colectivo y la creación de la imagen especular, pues un imaginario colectivo establecido puede cambiar si la relación de imágenes

Lo importante entonces es poder entender el (o los) sentidos de los movimientos, pero teniendo presente que éste puede ir mutando en el tiempo, marcando los diferentes momentos que recorre el movimiento. Así, es importante tratar de no quedarse con una única imagen o una explicación racionalmente cristalizada de este sentido, sino más bien interpretarlo acompañado de los cambios ocurridos, en función de su propia historia, de sus huellas, que van definiendo y redefiniendo al movimiento.

La dinámica de los movimientos sociales puede tener como referencias fundamentales cuatro tipos diferentes de campos de desarrollo.[11]

En primer lugar, todo movimiento social posee una estructura participativa, como consecuencia de su propio objeto y experiencia de organización y lucha. Las formas, los niveles y los tipos de participación en un movimiento, definen en gran medida las fortalezas de las metas de éste. Un aspecto central que conlleva este campo es el carácter piramidal o restringido de la participación, y sus formas democráticas o expansivas. Aquí la problemática de la "pequeña política" o de la cotidianeidad vivencial del movimiento cobra especial importancia.

En segundo lugar, todo movimiento social tiene su propia temporalidad, en gran medida definida por su acción frente al sistema de relaciones históricas. Por lo tanto, aunque todo movimiento posee su propia continuidad histórica y su cotidiana vivencia existencial, los momentos de crisis y conflicto agudo son los que definen su cualidad. De esta manera, la combinación del "tiempo" diacrónico y sincrónico del movimiento son fundamentales para su compresión.

Aquí, la visualización de la actual crisis latinoamericana y nacional cobra una importancia vital en la medida en que, en sus múltiples expresiones y sentidos, está presente en las vivencias y acciones de los movimientos sociales; sobre todo si asumimos que estos son portadores en alguna medida —aunque preliminarmente— de un nuevo orden social, demandantes de un "nuevo modelo" de desarrollo económico y de una cierta visión política del conjunto de la sociedad. Claro está que esto no niega que el cambio dependa relativamente de

---

le exige transformaciones, en razón de que la imagen especular no puede contener más ese imaginario colectivo original.

11 Una visión preliminar sobre estos aspectos fue elaborada conjuntamente con J. Dandler. Véase *La fuerza histórica del campesinado*, Editorial CERES-UNRISD, Cochabamba, 1985.

las relaciones económicas, que organizan endógenamente a la sociedad.

En tercer lugar, los movimientos sociales se desarrollan en forma multilateral y heterogénea en el espacio, en función del desarrollo desigual de la conciencia, la organización y la economía de una localidad o región determinadas. Por ejemplo, un movimiento social de liberación nacional puede incluso llegar a tener características y significados distintos en diversos contextos geográficos. Los movimientos sociales, aunque ellos puedan plantearse, no tienen fines teleológicos predeterminados, los redefinen en el propio conflicto.[12]

Un último elemento global que debe tomarse en cuenta para el estudio de las prácticas colectivas es el relativo a los efectos sociales específicos de estos movimientos sobre las relaciones sociales y sobre la sociedad, pero no solamente como el producto de la acción del sujeto, sino muy especialmente como producto de un campo de conflicto donde los actores involucrados en la acción se modifican a sí mismos por la interacción recíproca y compartida para obtener un fin, para lograr una meta. Esta relación es la que puede introducir además modificaciones específicas y generales en la sociedad, tanto en términos de transformaciones en las relaciones de poder —piénsese en la revolución mexicana o boliviana por ejemplo– como de efectos específicos sobre determinados órdenes sociales – piénsese en la reforma agraria de esas mismas revoluciones. Pero también los movimientos sociales pueden introducir sobre la base de las relaciones sociales que los recrean, culturas cotidianas de un nuevo orden que modifica

12 A. Touraine señala que "la particularidad de un movimiento social es la de no estar orientado hacia valores conscientemente expresados. Porque él se sitúa al nivel del sistema de acción histórica, él se define por el enfrentamiento de intereses opuestos, por el control de las fuerzas de desarrollo y del campo de experiencia histórica de una sociedad. Un movimiento social no es la expresión de una concepción del mundo. No es posible hablar de un movimiento social si no se puede definir, en ese mismo momento, el contra movimiento al que él se opone" (traducción de F. Calderón). *Production de la société*, Editions du Seuil, París, 1973, pág. 360. Véase también *La voix et le regard*, Editions du Seuil, París, 1978, particularmente págs. 108-127, y la colección de sociología permanente sobre movimientos sociales. El mismo autor define movimiento social como el nivel de acción más elevado y se caracterizaría por la combinación de un principio de identidad, oposición y totalidad. En un sentido más amplio el movimiento social sería un actor de un campo de acción histórica.

la vida de los hombres: hábitos, costumbres, valores, etc. Por todo esto, los movimientos sociales pueden ser considerados como motores de la historia.

Dicho todo lo anterior, parece necesario aclarar y enfatizar algunos aspectos conceptuales claves acerca de la constitución de los movimientos sociales, tanto en términos de reduccionismo clasista como respecto de su adecuación para la región.

Los científicos sociales tendemos a olvidar demasiado a menudo que el concepto de clase social es un concepto analítico que sirve para describir las estructura social en términos de un modelo teórico, pero que difícilmente pueda ser observado como tal en la realidad empírica que nos toca analizar.

Cuando nos dirigimos a la realidad social en busca de los actores sociales agentes del cambio, no vemos clases conformadas actuando orgánicamente como tales (ya que la "clase en sí" no es motor del cambio social y la "clase para sí" es más bien una expresión de deseos que forma parte de la utopía revolucionaria). En cambio, sí vemos una mulplicidad de actores sociales agrupados en una heterogeneidad de movimientos sociales, con diferentes grados de capacidad de cuestionamiento del sistema social global.

Probablemente es cierto que, al decir de A. Melucci,[13] lo sincrónico dirige a lo diacrónico, es decir, el cambio depende de la estructura y tiene una causa endógena, estructural, en la exigencia que tiene un sistema de clase para mantenerse y controlar el conflicto, siendo éste una dimensión estructural del sistema.

Para el perspicaz italiano, el análisis marxista ha ignorado los procesos de formación de la acción colectiva, las redes de relaciones y el modo del pasaje de las formas elementales de la revuelta a la acción de clase organizada. Para él, la acción colectiva es el fruto de complejos procesos de interacciones, mediados por redes de pertenencia. Por otra parte, como ya se dijo, en Latinoamérica las relaciones sociales en gran medida no están consolidadas, los actores sociales mutan permanentemente; de alguna manera son clases metamorfósicas, con características estamentales en sociedades patrimoniales.[14] La categoría "pueblo", por

13 Melucci, Alberto, "*L'azzione ribelle. Formazione e struttura del movimenti sociaIi*", en MeIucci, *Movimenti di rivolta*, Etas Libri, Milano, 1976.

14 Para una discusión sobre patrimonialismo-corporativismo puede consultarse: a) Malloy editor, *Authoritarianism and corporativism in Latin America*, University of Pittsburg Press. Véanse artículos Malloy, y b)

ejemplo, puede explicar más un cambio revolucionario que la pura visión obrerista de una revolución liberadora.[15]

Por su parte, Guy Bajoit[16] sostiene que aun cuando todo actor esté formando parte de relaciones de clase, existen otras formas de relación que a veces son más determinantes de la "conciencia de sí" de un grupo social determinado que la conciencia de clase, lo que no necesariamente significa alienación en el sentido marxista del término. Ejemplos de esto serían la mayoría de los movimientos sociales que nos ha tocado analizar en este trabajo: movimientos étnicos, de mujeres, de jóvenes, movimientos urbanos, regionales, etc. Las relaciones sociales forman a la vez actores "en sí" y "para sí". Toda relación tiene un sentido, una orientación, no es arbitraria.

Para Alain Touraine, con razón. "…no hay clase sin conciencia de clase. La idea de que pueda haber una clase en sí y que sean los organismos políticos o sindicales los que dan conciencia de sí misma y por lo tanto capacidad de actuar a una clase dominada, debe ser totalmente descartada".[17]

Sin embargo, a pesar de los aportes de estas ideas para el análisis latinoamericano, ¿es posible acercarse a la heterogeneidad de movimientos sociales que nos ofrece nuestra realidad latinoamericana, con esquemas analíticos como los de Bajoit o Melucci, con clasificaciones que diferencian las acciones de masas, las acciones conflictuales reivindicativas, las acciones conflictuales políticas, los movimientos reivindicativos y los movimientos políticos, los movimientos de clase y los movimientos políticos de clase, a partir de los cuales es posible establecer graduaciones en los niveles de conciencia y de capacidad de lucha por la apropiación y/o la destinación de los recursos o valores sociales, según sean capaces o no de atacar a la estructura de las relaciones de clase?

Incluso en este tipo de análisis subyacen pre-

Cardoso-Faletto post scriptum, ob. cit.; las aseveraciones del texto se apoyan en las críticas al corporativismo que realizan estos últimos autores.

15 Véase Coraggio, J. L., *Revolución y democracia en Nicaragua*, Cuadernos de pensamiento propio, Publicación INIES, Managua, 1984. También puede consultarse Camacho, Menjíbar, coordinadora, ob. cit.

16 Bajoit, Guy, *Esquisse d'un instrument d'anaIyse pour les mouvements populaires*, Universidad de Lovaina, 1984, trabajo mimeografiado.

17 Touraine, A., y otros, *Mouvements sociaux d'aujourd'hui*, *acteurs et anaIystes*, Les éditions ouvrières, París, 1982.

supuestos teleológicos racionalistas, en los que se prescribe un "destino" manifiesto y deseable para la evolución de los movimientos sociales y que abandonan con demasiada ligereza la pregunta acerca de cuál será en definitiva la voluntad y la dirección de los cambios que nuestras sociedades se prescriben a ellas mismas.

De hecho, parece demasiado simplista establecer una pirámide de movimientos sociales, en cuya encumbrada cúspide sólo estarían aquellos que manifiestamente se dirigen hacia la lucha por la apropiación de los medios de producción, el control social y el poder y en cuya difusa base se ubicarían todos aquellos movimientos sociales que hacen de su objetivo la lucha por cambios en la cultura, en la reproducción o distribución de los servicios, o por una nueva forma de encarar las relaciones sociales la centralización del poder, la participación social, etcétera.

Incluso en la conceptualización que hace Touraine de lo que él llama "sistema de acción histórica latinoamericano", donde se estaría estructurando un nuevo sistema de acción en base a la simplificación y racionalización progresiva de las características de la acción social colectiva, la especificidad de cada segmento social implicaría que los movimientos sociales pugnen por la distribución del ingreso y las fuerzas políticas, por el poder del Estado; para el francés, los actores sociales en Latinoamérica van "detrás" de su constitución como clase, en cuanto a la estructura social, pero van "por delante" de su constitución como clase en términos de movilidad social y de participación política y cultural.[18]

¿Qué significa este estar "detrás" o "delante" de su constitución como clase? Tal vez esto haga referencia a la debilidad de los actores sociales, a su falta de organicidad, a su pendularidad; pero más bien, en Latinoamérica ¿no son las clases dominantes (la falta de una burguesía industrial consecuente y asentada), las que resultan débiles políticamente y dependientes económicamente y que, al no generar acciones homogéneas ni hegemónicas, impiden también la conformación de oposiciones claras y orgánicas? En nuestras sociedades, más o menos industrializadas, penetradas por el capital financiero internacional, por una compleja red de multinacionales que eligen, sus políticas con relativa independencia de las relaciones sociales, en las que ora se asientan, ora abandonan

18 Para una síntesis de este pensamiento véase "Una tentativa de construcción global: las nuevas pautas de acción colectiva en América Latina", en David y Goliath núm. 46, CLACSO, Buenos Aires, agosto 1984.

según intereses ocasionales, los movimientos de clase centrados en la producción encuentran enormes dificultades para desarrollar una acción coherente darse formas de organización duraderas y evolutivas; más bien en muchos casos sus orientaciones de clase se han integrado a orientaciones de liberación nacional o a pactos de dominación.

Surgen a la vez múltiples prácticas sociales centradas más bien en la lucha por la distribución de servicios, en cuestiones étnicas y grupales o reivindicativas. Pero concomitantemente, hay procesos culturales que se internacionalizan y que atraviesan las formaciones económico-sociales aun cuando no siempre se corresponden con su grado de desarrollo económico o político. Conflictos que son una reacción, por ejemplo, a los mecanismos más sutiles de dominación social en las sociedades urbano-industriales, a la manipulación de las necesidades (se ve la serie Dallas de la TV norteamericana, pero también se bailan las salsas de Willy Colon.[19]

La relativa superación de las diferencias entre lo público y lo privado, la extensión de los conflictos hasta terrenos considerados hasta ahora como privados (como las relaciones sexuales, el cuerpo, las relaciones interpersonales, la identidad biológica, etc.), provocan una readecuación de la energía polivalente de los movimientos sociales más clásicos.

Así se constituyen identidades que van más allá de la producción económica y de las relaciones políticas, identidades culturales que tienen que ver con los rechazos a la fragmentación individual y a la soledad colectiva de este mundo que habitamos.

Estos rechazos favorecen de extraña manera nuevos comportamientos colectivos, desde la anomia, el rito sacrificial, la acción terrorista hasta el comunitarismo cristiano y la reivindicación ciudadana[20] entre otros, basados en la

19 El interesante artículo de Angel Quintero, "La cimarronería como herencia y utopía (II): Bases populares de una cultura democrática alternativa en el Caribe", en *David y Goliath* núm. 48, Buenos Aires, diciembre 1985, da cuenta de la salsa como una práctica popular emergente y democrática, sobre todo se recomienda oír: Isadora Duncan.

20 Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, muchos obreros, artesanos y comerciantes urbanos se empiezan a asumir también como aymaras. Véase F. Calderón, *Urbanización y etnicidad*, Ed. CERES, Cochabamba, 1984; véase también O. Ianni, "Raza y pueblo", Brasil, San Pablo, 1984, trabajo mimeografiado. Se calcula que solamente en el Brasil existen aproximadamente cien mil Comunidades Eclesiales de Base. Según Frei Betto,

creación o el recrecimiento de redes de relaciones sociales organizadas en torno a nuevas demandas y liderazgos abiertos, comportamientos estos al decir de Nun, que se salen del lugar asignado en el coro.[21]

Pero como se apreciará más adelante, este divorcio, esta distinción entre estos enigmas y el sistema político, de algún modo reafirman la necesidad de redemocratización de la sociedad y de reconstitución y generación de actores históricos.

Por otra parte, estos procesos abren un terreno de conflictos que ya no es el mismo ámbito restringido e institucionalizado de la política partidaria o estatal; es tal vez el reclamo de un nuevo tipo de relaciones sociales que no sólo cuestionan el control y la propiedad de los medios de producción, sino también muy especialmente la cotidianeidad existencial de nuestras sociedades. Tema éste que abre el debate sobre las relaciones entre movimientos sociales, Estado y partidos políticos (o mejor dicho y política), es decir entre legitimidad y representación social.

III. CAMINOS TRUNCOS Y CONFLICTOS ABIERTOS

La crisis ha tenido la propiedad de revelar con claridad el alto grado de interdependencia asimétrica entre la economía y la política de los países capitalistas centrales y las de las sociedades periféricas, donde es factible observar una autonomía cada vez menor de estas últimas sociedades con respecto a las primeras.

De manera específica, la situación que vive la región latinoamericana es el producto simbiótico entre cierto proceso de integración de la economía internacional que data de la Segunda Guerra Mundial, que generó fuertes mecanismos de transnacionalización, y de los distintos dinamismos de desarrollo capitalista que vivie-

son grupos compuestos por personas surgidas de las clases subalternas, reunidas en función de una motivación religiosa que presenta, en esta capa social creyente y oprimida, una visión del mundo en la que se expresa una manera de ver la vida, el hombre y la historia. "Las Comunidades Eclesiales de Base", en *Amérique Latine*, núm. 18, CETRAL, París, abril-junio 1984.
Respecto de la emergencia de la anomia y el rito sacrificial en la acción colectiva, véase E. Valenzuela, *Los jóvenes y la crisis de modernización*, ILET, Santiago, Chile, 1985, trabajo mimeografiado.
En relación con el terrorismo, véase C. I. Degregori, *Sendero Luminoso: los hondos y mortales desencuentros*, DESCO, Lima, Perú, 1985, trabajo mimeografiado.

21 Nun, José, "La rebelión del coro", en Revista *Punto de Vista*, núm. 20, mayo de 1984, págs. 6 a 11.

ron los países de la región.[22] Varios estudios y discusiones actuales permiten deducir que dichos procesos y el modelo keynesiano (neo) que los avalaba se encontrarían ya agotados y que en la década del '80 se verá emerger una nueva reestructuración económica mundial, como también, muy probablemente, nuevos conflictos y nuevas formas de acción colectiva.

El proceso de transformación e integración capitalista que vivió la región pasó por varios momentos y asumió distintas especificidades; la literatura producida al respecto es extensa y variada; aquí, a título introductorio a la temática que atañe al texto, sólo se desean resaltar algunas características de su evolución.

Desde los años '40 y durante la década del cincuenta, merecen destacarse tres aspectos. En primer lugar, la emergencia o reemergencia, en algunos casos, de Estados-Nación que buscaban organizar el dominio interno en función de valores propios. Desde entonces el Estado, a pesar de sus múltiples variaciones, pasó a ser el articulador y, en muchos casos, el actor principal de la economía y las sociedades latinoamericanas, al menos en América del Sur.

En segundo lugar, la emergencia de un conjunto de valores, prácticas y proyectos nacionalistas, modernizantes e industrialistas, que buscaban afirmar a la nación en el contexto internacional.

En tercer lugar, el desarrollo de un particular proceso de industrialización que generó parcialmente cierta sustitución de importaciones y la expansión de un mercado interno, y que además provocó intensos procesos de movilidad y diferenciación social.

Hacia mediados de la década del '60 estas orientaciones económicas, políticas y sociológicas, se empezaron a transformar y a desdibujar, fundamentalmente por la orientación de su producción económica al mercado externo y la subordinación progresiva al capital internacional. En alguna medida, los altos índices de crecimiento económico registrados en varios países de la región fueron producto de una mayor integración de la industria al capital internacional.[23]

22 Ferrer especifica este proceso señalando que entre 1945 y 1970 se formó el Sistema Trilateral que implicaba vínculos estrechos entre EE.UU., Europa Occidental y Japón. El sistema se convirtió en el núcleo dominante de la división internacional del trabajo y desplazó al tradicional convenio Centro-Periferia. En "Nacionalismo y Transnacionalización", *Revista Pensamiento Iberoamericano*, núm. 3, enero-junio, España, 1983.

23 El libro de varios autores: Jaguaribe, Ferrer, Wionczek, y dos Santos, *La dependencia político-económica*

En la década del '70 el impacto de la crisis del petróleo a nivel internacional fue importante para los procesos socioeconómicos internos de la región;[24] salvo los países petroleros, el resto experimentó un gran deterioro en los precios de intercambio, que se expresó drásticamente por el incremento de los costos de importación de manufacturas y tecnología. Paralelamente, la liquidez de la banca comercial internacional y la alta oferta financiera provocaron un gran endeudamiento de los países de la región.[25]

Por otra parte, en los países desarrollados se experimentaban fuertes desequilibrios monetarios, incrementos vertiginosos de su déficit fiscal, aumento del desempleo, afianzamiento del proteccionismo interno, disminución de políticas de bienestar social y, en definitiva, orientaciones nacionales y externas de corte liberal.

Así, éstos y otros dinamismos provocaron una aguda situación de crisis en la región, que si bien se expresa en múltiples y conocidos indicadores de monto de la deuda y sus intereses (altas tasas inflacionarias, bajos niveles de salarios y aumento del desempleo, fuertes déficits fiscales, exportación de capitales, porcentajes negativos de productividad industrial, disminución de la calidad de vida y de las condiciones sociales de la población, incremento de huelgas y protestas, crisis de gabinetes, etcétera), más bien son figuras que muestran la crisis del ciclo económico iniciado en la postguerra, es decir, la crisis del modelo de transnacionalización, que cuestiona a las sociedades, las políticas y las economías de la región.

Ciertamente, los impactos, procesos y situaciones no son iguales, dependen de las características socio-históricas de cada caso. En Brasil, y en menor medida en México, el endeudamiento provocó a la vez cierta reindustrialización transnacional que incrementó la capacidad exportadora de ambos países, y un fuerte proceso de polarización y marginación sociopolítica. En Ecuador se operó un proceso de

de América Latina, Siglo XXI, México, 1984 (14a. edición) trata esta problemática.

24 Véanse por ejemplo los estudios del presente libro; en ellos se podrán visualizar las características específicas de los impactos de dicha crisis en sus economías. Para una visión de la crisis en los países desarrollados y sobre todo en EE.UU. véase *La crisis económica mundial y el capitalismo americano*, Editorial Laia, Barcelona, 1978.

25 Para una visión global de la evolución de la economía latinoamericana véase *Crisis y desarrollo en América Latina*, CEPAL, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.

industrialización y modernización importante, en Bolivia, luego de inducir un importante crecimiento económico, la dinámica de la crisis casi aniquiló la economía formal, y en países como Argentina, Uruguay y Chile, el desarrollo de políticas monetaristas antiindustriales, acompañadas por órdenes despóticos, afectó seriamente sus estructuras productivas y sus relaciones sociales.

En fin, la situación es variada; empero, de una u otra manera los países en su globalidad tienen que afrontar los problemas de la deuda y el círculo vicioso que implica su crecimiento, el mercado internacional y el deterioro creciente de los precios de intercambio, la disminución neta de su actividad productiva y, muy especialmente, afrontar las políticas sobre el déficit fiscal y el proteccionismo, así como los vaivenes del mercado laboral de las economías centrales, particularmente de Estados Unidos, y más aun, las revolucionarias implicaciones que acarrean las transformaciones tecnológicas.[26]

La panorámica ciertamente no es halagüeña; varios estudios prospectivos muestran una mayor contracción económica para la región. El Banco Mundial, por ejemplo, diseñó dos escenarios de simulación: uno alto, positivo, y el otro bajo, negativo, en función de la interacción de dos bloques de variables. Las primeras, propias de los países desarrollados (EE.UU.), proteccionismo, equilibrio monetario fiscal y mercado laboral; los segundos, propios de los países en desarrollo: precios económicos, tipo de cambio y políticas comerciales de ahorro interno, es decir, más o menos, la aplicación de los paquetes económicos propuestos por el F.M.I. En ambas situaciones los intereses de la deuda cumplirían un papel central: el curso de los mismos influiría determinantemente en los resultados de la economía regional.

Es decir que si el comportamiento de las

26 Véase Alzamora, Carlos, e Iglesias, Enrique, "Bases para una respuesta de América Latina a la ciencia económica internacional", en *Revista de la CEPAL*, núm. 20, Santiago de Chile, agosto 1983. Para un análisis de la deuda externa en América Latina; véase Schvarzer, J., "La perspectiva del deudor", en *David y Goliath*, núm. 47, agosto 1985, Buenos Aires.
La relación de los precios de intercambio varió considerablemente entre 1975 y 1983 (más adelante, las cifras son aun más crudas). En estos años (índice: 1970: 100 y tasas anuales de crecimiento) América Latina pasó de un índice de 114 en 1975 a 98 en 1983, y la tasa anual de crecimiento pasó de 4.2 en 1978 a –7.2 en 1983. Fuente: CEPAL, citado por *Economía de América Latina*, núm. 12, México, 2do. trimestre de 1984, pág. 38.

variables fuese óptimo, América Latina recuperaría sus niveles de crecimiento de la década del '60, pero aun así los ingresos per cápita seguirían disminuyendo; por el contrario, en la simulación baja se prolongarían los niveles de decrecimiento que vive la región. Así, los países de ingresos medianos tendrán que resistir contracciones de importaciones, reducción de inversiones, y no se esperaría crecimiento para la última década del siglo; el mismo Banco afirma: "los resultados económicos proyectados para los países plantean la duda acerca de la capacidad de la estructura sociopolítica de muchos de ellos para resistir tales presiones persistentes. La crisis de desarrollo de muchos países de ingresos medianos se agudizaría";[27] según esto, las tendencias para los países más pobres, sobre todo en las hipótesis más pesimistas, serían francamente catastróficas.

En este orden, no se debería dejar de lado en el análisis el desarrollo y fortalecimiento de nuevos procesos de producción, reproducción y organización social operados en todos los países de la región, especialmente en los más pobres; así, el crecimiento de economías llamadas sumergidas o informales, la proliferación de extrañas estrategias de supervivencia, el desarrollo de economías familiares diversificadas, etcétera, como también en varios casos la producción y comercialización de cocaína o marihuana, indican de alguna manera nuevas formas de resistencia popular y de desarrollo perverso del capital frente a la crisis que vivimos.

En todo caso, desde una óptica global parece que las variables determinantes del curso de la crisis para la región estarían relacionadas con el tratamiento de los déficits fiscal-monetarios y de la cuenta corriente de la balanza de pagos en Estados Unidos; ambos tratamientos, además, estarían relacionados e influenciados por el pago o no al servicio de la deuda latinoamericana.[28] Las implicaciones teóricas y políti-

27 Banco Mundial, informe sobre el desarrollo mundial 1985. *El capital internacional y el desarrollo económico. Indicadores claves del desarrollo mundial*, Editorial Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, Washington D.C., 1985, pág. 163. Véase parte IV.

28 En otro estudio prospectivo, Sánchez Arnau señala como conclusión que "resulta difícil imaginar escenarios que puedan implicar un mejoramiento sustantivo de la situación presente y que conlleven la esperanza de que América Latina encuentre rápidamente la senda del desarrollo en escenarios de mediano plazo para el futuro desarrollo de América Latina". Instituto Italo Latinoamericano, Roma, 1985, trabajo mimeografiado.

cas de estas tendencias serán retomadas en el último acápite.

En síntesis, la crisis de América Latina es muy heterogénea y vasta, pues expresa el agotamiento de los modelos capitalistas de desarrollo, atrasados y deformes, basados en la asociación entre el capital financiero internacional, los Estados Nacionales y los procesos de industrialización, que directamente afectan al conjunto de las relaciones sociales que se dan en las distintas sociedades. Las transformaciones operadas en los últimos 30 años en América Latina, no sólo se relacionan con los cambios ocurridos en la industria, la diferenciación campesina, la urbanización acelerada o la innovación tecnológica, sino también con la constitución y reconstitución de nuevos actores sociales y, muy principalmente, con la emergencia de un nuevo tipo de Estado, no sólo organizador y reproductor de relaciones de dominación, sino también actor productivo y social fundamental en todas estas sociedades. La crisis parece haber afectado a la totalidad de estas relaciones y produjo, además, nuevos campos de conflicto y orientación de los actores afectados por ella.

Es decir que la crisis latinoamericana consiste en un conflicto que concierne al conjunto de las relaciones societales, y que probablemente provocará modificaciones en las relaciones humanas, tanto en términos de los aspectos cotidianos de la vida, como en términos de relaciones societales más amplias. Pero la crisis, si bien es un momento de decisión, no tiene un destino preestablecido; depende de múltiples factores, como sociológicamente señala Freund:[29] "La crisis es una situación colectiva caracterizada por contradicciones y rupturas, plena de tensiones y desacuerdos, que hace que los individuos y los grupos vacilen acerca de la línea de conducta que deben adoptar, porque las reglas y las instituciones ordinarias quedan en suspenso o inclusive algunas veces están desfasadas en relación con las nuevas po-

Asimismo, el Centre d'Etudes Prospectives et Informations Internationales (CPII) de París, elabora tres escenarios futuros, donde la situación de los países del tercer mundo e incluso Europa aparecen y continúan deteriorados. "*Configurations Prospectives de l'économie mondiale*", París, 1985, trabajo mimeografiado. Véanse también para las perspectivas del comercio mundial artículos de Berthelot y Calderón, en *David y Goliath*, núm. 48, Buenos Aires, 1985.

29 Freund, J., "Observaciones sobre dos categorías de la dinámica prolegómena. De las ciencias al conflicto" en Morin, Storm y otros, *El concepto de crisis*, ob. cit., pág. 190.

sibilidades que ofrecen los intereses y las ideas que surgen del cambio, sin que sea posible, sin embargo, pronunciarse claramente sobre la justeza y la eficacia de las nuevas vías."

En este sentido, la pregunta global que nos formulamos es ¿cuáles son los movimientos sociales que cumplen un papel importante en la crisis y qué rol jugarían en probables sociedades emergentes? ¿Es posible pensar en un modelo teórico global de la acción social latinoamericana en su conjunto? ¿Cómo se expresan y definen los diferentes campos de conflicto, qué orientaciones están en pugna y qué tendencias de articulación nacionales y regionales es posible prever? El resto del texto apunta a responder preliminarmente a algunos aspectos de estas preguntas, más en términos de conflictos y sus tendencias que en términos estrictos de la relación crisis-movimientos sociales.

De alguna manera, los campos de conflicto son el conjunto de acciones construidas por los diferentes movimientos sociales que expresan sus identidades, intereses, producciones y orientaciones, y que hacen mención a las relaciones sociales involucradas y a los intereses de poder en juego.

Obviamente, los campos de conflicto particulares cobran sentido en el contexto nacional en el que se hallan involucrados. No obstante, con el objetivo de tener una visión regional de las diferentes orientaciones de la acción colectiva y como reflejo parcial de los conflictos nacionales, hemos detectado cinco grandes campos de conflicto en los cuales se encuentran involucrados los diferentes movimientos sociales en América del Sur.[30]

A. Industrialización y condición obrera

Indudablemente, la crisis afecta a los procesos de industrialización en la región, en algunos casos limitando o estancando su crecimiento, en otros desindustrializando el país, pero siempre mostrando la fragilidad de la independencia industrial nacional y afectando en su totalidad y de muy diversas maneras a la condición obrera.[31]

30 Los campos de conflictos señalados en el trabajo provienen de una síntesis y análisis realizados de los 56 estudios de caso; en realidad se elaboró muy rápidamente una tipología construida a partir de las tendencias empíricas básicas de dichos trabajos; obviamente la responsabilidad de las síntesis e interpretaciones de dichos trabajos sólo son atribuibles al autor de este texto. Para un análisis del valor relativo de tipologías construidas, véase Mc Kinney, J., *Tipología constructiva y teoría social*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1968.

31 América Latina pasó de un crecimiento industrial de 6-5 entre 1950-1983 a –3.1 entre 1980 y 1983, re-

Parecería que la tendencia global del capital multinacional será fomentar los llamados procesos de industrialización en sectores de punta y desindustrializar el resto de las economías.[32] Frente a esto, en el seno del movimiento obrero se generan distintas formas de reacción y de respuesta ante la crisis, así como la formulación, en algunos casos, de criterios para una futura reconstrucción industrial. Estos últimos aspectos de la discusión en el seno de la clase trabajadora y de sus organismos sindicales son por el momento muy incipientes.

En realidad, la pregunta no sólo abarca las respuestas defensivas a la crisis, sino también a qué tipo de industrialización se operará en el futuro y quién controlará o dirigirá dicho proceso. Los intereses y fuerzas en juego son múltiples y variados; aquí sólo se observarán algunas de las acciones obreras visualizadas como importantes.

Pese a los diferentes niveles de desarrollo y calidades de la industrialización, que van desde países francamente industrializados como Brasil, Colombia o Argentina, hasta países débilmente industrializados como Bolivia o Paraguay, las clases obreras en su conjunto han reconocido como factor precipitante de la crisis a fuerzas externas: el acelerado endeudamiento, las políticas de negociación del FMI, las experiencias monetaristas, etcétera. Sin embargo, las orientaciones de la acción social y las definiciones de los campos de conflicto han variado de país a país.

Groso modo, es posible percibir tres grandes orientaciones. Una primera tendencia es hacia la pervivencia de un sindicalismo paraestatal, hiperinstitucionalizado, basado en acuerdos nacionales y/o fuertes clientelismos entre las estructuras sindicales y el Estado, cuyos comportamientos sólo se dan en términos de negociación, en el mejor de los casos, de precios, sa-

---

gistrándose los niveles más altos de decrecimiento para los últimos años en Uruguay, –10.0; Costa Rica –7.1; Chile 0.1; Perú 6.1 y Bolivia 6.2. Fuente: CEPAL, citado por *Economía de América Latina*, ob. cit., pág. 43.

32 Para una visión global del proceso industrial véase Economía de América Latina, ob. cit., particularmente el artículo de R. Villarreal; allí señala "que las problemáticas de fondo que enfrentan la industria y el comercio exterior en los países de la región son dos: la que corresponde a la estructura misma de la producción y a la organización industrial, y la que se deriva de la peculiar relación entre los agentes de la industrialización", pág. 40. Véase especialmente Hirschmann, Albert, *"DesenvoIvimento por efeitos em cadeia: uma abordagem generalizada"*, en *Economia e movimentos sociais na América Latina*, varios autores, Editora Brasiliense, San Pablo, 1985.

larios y algunas condiciones sociales. Orientaciones de este tipo se encuentran en Venezuela y Colombia. Sin embargo, hemos encontrado una orientación subordinada que se caracterizaría por la emergencia de una acción obrera independiente, comunitaria, con luchas aisladas y con orientaciones de renovación y democratización sindical; incluso en el Paraguay se visualizan algunas acciones de este tipo.

Otra tendencia significativa es la de los movimientos obrero-sindicales que de alguna manera cuestionan el orden estatal y las políticas económicas que de ellas emergen; allí la relación Estado-empresariado-sindicatos es muy compleja y se caracteriza por conflictos constantes y de variados tipos. En el interior de estas orientaciones existirían variadas tendencias –como las del sindicalismo obrero boliviano, que propugna metas de poder político y económico— hasta mecanismos de reciente constitución nacional organizada, como en el caso de Brasil y Ecuador donde el movimiento obrero pugna por independencia, democratización y unidad sindical. Por otra parte, en el interior de estos movimientos es posible encontrar tendencias y oposiciones distintas; por ejemplo, entre búsquedas de concertación u oposiciones radicales, dependencia e independencia partidaria, etcétera. Entre estas dinámicas se encontrarían los movimientos obreros chileno y uruguayo, y, en alguna medida, el argentino, aunque este último viviría una situación especial en razón de su entronque con el justicialismo, su oposición democrática al gobierno actual y su acentuado verticalismo burocrático interno, coexistiendo también en su seno fuertes tendencias democratizadoras.

Finalmente, una orientación tal vez común a todos los movimientos sería cierta dispersión y heteronomía en su acción más puntualmente empresarial que nacional; incluso empezaría a cuestionarse la nueva condición obrera como forma de identidad que alimenta la acción; parecería que en el Perú esta tendencia ha cobrado mayor fuerza.

Pero más vale plantear casos específicos.[33]

• El movimiento obrero boliviano expresado en la Central Obrera Boliviana (COB) se caracteriza por una fuerte presencia sociopolítica en

33 El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: H. Palomino, R. Mayorga, R. Calla Ortega, R. M. Marini, J. R. Tagle, M. Romero, J. León y J. P. Pérez, R. Céspedes, J. Parodi, G. Cosse, E. Lander, realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

la historia del país, especialmente en la revolución del '52, la Asamblea Popular de 1971 y el proceso de democratización iniciado en 1978.

Frente a la crisis, la COB se caracterizó por plantear planes económicos alternativos, aplicar la cogestión obrera mayoritaria en las minas nacionalizadas y por variadas formas de participación en los problemas de abastecimiento alimenticio y control de la especulación. El punto culminante de la acción de la COB constituyó la demanda, en agosto de 1983, de un cogobierno tripartito entre la Unidad Democrática y Popular (UDP), la Confederación Campesina y la COB. Este órgano de poder obrero (la COB), según Calla Ortega, es un organismo fundamentalmente político, con clara orientación hacia el poder del Estado, la democratización del mismo y, el control de los procesos económicos;[34] pero también autonomista frente a los partidos políticos y renuente a otro tipo de representación que no sea la democracia directa.[35] La COB tiene una dirigencia que se asimila a una minoría consistente en torno al liderazgo carismático de Juan Lechín.

No obstante, la COB también posee variadas contradicciones, tendencias y limitaciones en su acción, como la asociación entre asalarialismo e izquierdismo de fines, ausencia de un amplio pluralismo ideológico, tendencia a arrogarse toda la representatividad nacional, renuncia a toda concertación y cierta lógica reduccionista en sus planes de acción.[36]

Hoy en día, el fraccionamiento interno de la COB y la crisis del sistema político impiden a la clase obrera jugar un rol ofensivo en el juego político democrático.

• La democracia en Uruguay tuvo como componente central a la movilización sindical impulsada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Las demandas del movimiento obrero, basadas no sólo en una rica experiencia pasada, apuntaron directamente al proce-

34 Calla Ortega, Ricardo, *La encrucijada de la COB: temas del movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática*, CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado.

35 Mayorga, René A., *Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la COB*, CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado.

36 Mayorga, ídem. Para una visión complementaria de estas pautas, véase Whitehead, "Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia", en *Revista Mexicana de Sociología*, IISUNAM, México, diciembre 1980, y también G. Sandoval, *Los mil rostros del conflicto minero*, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado.

so político vivido: amnistía, reposición de los destituidos, relegalización de los partidos, elecciones, salarios, mejoras en el nivel de vida, etcétera.

En Uruguay, según Cosse,[37] en ciertas conyunturas el movimiento obrero y popular se adelantó a los partidos tradicionales. Por ejemplo, el paro nacional de enero de 1984 fue un éxito gracias a los gremios y sindicatos. Así, pese a la presión desmovilizadora del régimen militar, la CNT logró persistir en la clandestinidad y aun renovar sus direcciones.

Respecto de la crisis, su impacto implicó un rápido incremento de las tasas de desocupación y del cuentapropismo, así como un deterioro de los niveles de vida; empero, parecería que, al decir de Cosse, esto no afectó a la clase obrera industrial como para poder afirmar que ha cambiado su conformación estructural.

El movimiento sindical emergió del período autoritario con fortaleza y legitimidad renovada, habiendo logrado el reconocimiento nacional como un actor político central. Tal vez una característica peculiar del movimiento obrero uruguayo sea su interés y capacidad de concertación social adecuada a las circunstancias políticas y económicas; probablemente, del desarrollo autónomo de esta lógica dependerán en parte, no sólo el curso de la democracia uruguaya, sino también el futuro papel de la clase obrera y de la menoscabada industria nacional.

• La presencia de un modelo económico liberal en crisis y la permanencia de un sistema despótico defensivo han generado en Chile una sociedad que tiende a fragmentarse y polarizarse socialmente, donde la lógica del terror dificulta permanentemente la emergencia de principios de integración nacional y de articulación contractual. El Estado cumple una función de regulación negativa del orden social.

Frente a esta situación, el movimiento obrero chileno, a pesar de su obligada debilidad organizacional, tiene una influencia considerable en el conjunto de la sociedad, dada su capacidad de convocar y aglutinar no sólo a la clase obrera sino también a otras fuerzas, sobre la base de orientaciones antiautoritarias y prodemocráticas.

> "En Chile hubo un fuerte proceso de desindustrialización a partir del modelo neoliberal que se impuso a partir de 1973 y que provocó una grave crisis en el sector industrial. Esta tercerización

37 Cosse, Gustavo, *Clase obrera, autoritarismo y democracia*, CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.

> de la economía chilena constituyó un cambio estructural que afectó duramente al movimiento sindical. No obstante, los trabajadores industriales siguen ocupando un rol central en la producción, sobre todo en las grandes empresas, relativamente menos afectadas por la crisis".[38]

Dado lo anterior, el movimiento obrero puso énfasis en los últimos años en hechos y acciones en defensa de la industria nacional, el desempleo y la estabilidad laboral, y en un mayor vínculo con las organizaciones poblacionales.

En síntesis, el movimiento obrero ha sido capaz de desencadenar una serie de acciones muy significativas en el proceso político chileno y además ha demostrado poseer cierto poder combativo que trasciende a sus propias bases organizacionales y abarca a toda la sociedad.

Actualmente es posible percibir dos tendencias en su interior: una más "culturalista", que pretende fomentar la democracia, la solidaridad interna y la autonomía de la clase obrera, y otra más "instrumentalista", que busca alianzas y negociaciones desde los partidos políticos.

En todo caso, el desarrollo de estas potencialidades del movimiento obrero chileno está condicionado por la apertura democrática.

• En Brasil, después de transitar por varios momentos de subordinación, oposición y orientación estatal, la clase obrera se encuentra ahora ante la crisis del modelo propuesto por el "milagro brasilero" y ha asistido al comienzo de una etapa de crisis profunda de los modelos económicos propugnados desde el Estado.[39]

Ante esta crisis –y con la experiencia y memoria históricas acumuladas[40] (las huelgas de 1978 y 1979)–, según Marini se perfilan actualmente dos tendencias: una, más combativa y clasista, ligada políticamente al PT y capaz de cuestionar al sistema en su globalidad; la otra, de corte más reivindicativo-sindical y negociadora, ligada al PMDB y a otras fuerzas. Sin embargo, en ambas existen tendencias autonomistas de organizaciones partidarias.

38 Ruiz Tagle, Jaime, *El movimiento sindical chileno y la crisis del capitalismo autoritario*, ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado, pág. 9.

39 Marini, Ruy Mauro, *O movimento operário no Brasil*, FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

40 Para un análisis de la huelga de mayo del '78, antecedente histórico básico para visualizar los nuevos comportamientos obreros, véase A. Moroni, *A estrategia da recusa*, Brasiliense, San Pablo, 1982.

A partir de estas dos vertientes contradictorias en el sindicalismo brasilero, según el autor mencionado, se podría percibir el nivel y la capacidad de generar alternativas y propuestas de acción: este nivel es ambivalente, pues, por una parte, subsiste la tradición sindical más negociadora y clientelista y, por otra parte, nuevas tendencias democratizantes en el seno del movimiento obrero son capaces de influir sobre capas sociales como las clases medias asalariadas, proletariado de profesionales, o como el campesinado representado en las Ligas Agrarias, los trabajadores de la agricultura, etcétera. Se perfilan también importantes tendencias a modificar la relación entre bases y dirigencia sindical, una presión incrementada pugnando por la participación creciente de las bases en la toma de decisiones sindicales y también una revalorización de las acciones de masas en busca de ciudadanía política.

Sin embargo, un hecho que se destaca en la clase obrera brasilera con respecto al resto de América Latina es la complejidad de sus distintas formas de comportamiento socio-político, tanto en términos de su relación con el sistema democrático nacional, como de los procesos internos de democratización, unificación e independencia sindical, sumado a una creciente preocupación clasista de la búsqueda de un modelo de industrialización nacional relativamente independiente. Quizá también habría que agregar su búsqueda de un sistema de interrelaciones más complejo con el conjunto de las fuerzas sociales de la sociedad brasileña, donde las temáticas de las orientaciones meramente clasistas como las de concertación social constituyen ejes sustanciales de sus oposiciones internas.

Recientes estudios muestran las características complejas y fragmentadas del sindicalismo brasilero donde, si bien se visualizan aspiraciones de unidad sindical y autonomía con respecto al Estado, también se dan, como afirma Regis de Castro, perplejidades y así "el deseo de autonomía es acompañado por un temor a la orfandad".[41] En síntesis, los trabajadores brasileros se encuentran aún buscando definiciones sobre variados temas, como las elecciones directas, la organización en los lugares de trabajo, la democratización de la vida, la autonomía sindical de partidos y Estado, y la relación democrática con las fuerzas políticas; en definitiva, la elaboración –como señala Roque Aparecido da Silva– de un nuevo proyecto

41 de Castro, Regis, "Introducción", en varios autores, *Sindicatos em uma época de crise*, CEDEC-VOZES, San Pablo, 1984, pág. 10.

sindicalista en el que se materialicen valores de unidad, autonomía y democracia.[42]

• En Ecuador, la principal expresión del actual movimiento sindical está representada en el FUT (Frente Unitario de Trabajadores) cuya primera acción importante data de 1975, año de una huelga general que tuvo carácter eminentemente político, de apoyo a la política reformista del gobierno de Rodríguez Lara. En 1977 se celebró otra huelga que respondió a la política de austeridad del régimen autoritario instalado desde 1976, lo que generó una feroz represión contra las organizaciones laborales y populares en general. Posteriormente se produjo un reflujo de las luchas populares que mantuvo la desmovilización popular hasta 1981. Desde la reinstauración del régimen democrático, desde agosto de 1979 hasta finales de 1980, la movilización popular fue mínima.

En esta etapa, las movilizaciones fueron, por ejemplo, la marcha del FUT a la Cámara Nacional de Representantes donde se denunció la política gubernamental en lo que se refiere al endeudamiento externo, al congelamiento de salarios, al aumento de precios, etcétera.[43]

Vemos entonces que el movimiento sindical ecuatoriano tuvo claros avances y retrocesos en relación con los cambios políticos de la sociedad global. Después de su reflujo en 1983 y su opacamiento durante el último proceso electoral, las dos huelgas nacionales en los primeros cinco meses del actual gobierno de Febres Cordero expresan una revitalización del movimiento sindical. En resumen, según los autores, las reivindicaciones del FUT apuntan a una comprensión de la crisis como fenómeno internacional, intentando encarnar lo nacional ante un gobierno calificado como "títere" del imperialismo.

Otro polo de referencia para el discurso del movimiento sindical lo constituye "lo democrático".[44] La postura mayoritaria considera que este tipo de régimen ofrece mejores condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones laborales. Desde esta perspectiva se valora la reinstauración de un

42 Aparecido da Silva, Roque, *Representatividad, Democracia y Unidad en el Sindicalismo Brasilero*, Varios autores, *Sindicatos em ums época de crise*, ob. cit.

43 Véase León, J., y Pérez Sáinz, J. P., *Crisis y movimiento sindical en Ecuador: las huelgas nacionales del FUT (1981- 1983)*, CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

44 León, J., y Pérez Sáinz, J. P., ídem, pág. 32.

régimen democrático. El FUT disputó primero lo popular, luego lo nacional y finalmente lo democrático, visualizando como adversarios al mismo gobierno y al FMI.

En relación con otros movimientos sociales, el FUT puede ser acusado de "obrerista"; aún tiene una visión etnocentrista y quiere supeditar los antagonismos étnicos a los de clase (la condición de indígena se subordina a la de campesino). Los sectores de pobladores fueron los grandes protagonistas en las dos últimas huelgas, a pesar de lo cual el sindicalismo no logra percibir que para los sectores populares urbanos, incluidos los obreros industriales, el referente de comportamiento social es muchas veces la ciudad y no la fábrica. Esto impide una alianza sólida con los sectores de pobladores.[45] Sin embargo, las transformaciones del movimiento obrero ecuatoriano han sido notables en estos últimos años.

• En Argentina, el proceso de democratización social trajo aparejada una profunda demanda de democratización también en el seno del movimiento obrero y de los organismos sindicales.

Junto a las consuetudinarias prácticas simbióticas estatales, sindicales y partidarias dominantes en la Confederación General del Trabajo (CGT) en sus tres vertientes: las 62 organizaciones, el grupo de los 25 y el Grupo de Gestión y Trabajo, ligadas al Partido Justicialista y a orientaciones verticalistas y burocráticas, surgieron obras orientaciones en el mismo peronismo o fuera de él, que ya se habían manifestado en etapas anteriores (CGT de los Argentinos, Cordobazo, etcétera). Estas nuevas tendencias sindicales se conocen como el "sindicalismo de base" y constituyen algo así como un frente antiburocrático.

El sindicalismo de base, aunque dominantemente peronista, hace confluir a numerosos sectores de diferentes tendencias ideológicas y políticas, en tanto los sindicalistas ortodoxos se "disputan una herencia común".[46]

No obstante el control, la CGT sigue en manos del "sindicalismo peronista"; la crisis del partido justicialista y del movimiento peronista deja un espacio al cuestionamiento de lo que antes fuera un organismo corporativo monolí-

45 León, J., y Pérez Sáinz, J. P., ídem, pág. 33.

46 Véase Palomino, Héctor, *El movimiento de democratización sindical*, CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

tico, ligado al Estado o al Partido Justicialista, de manera heterónoma.

Por otra parte, el sindicalismo de base es más permeable a la relación con otros sectores de la sociedad civil, como por ejemplo los organismos de derechos humanos. Sus consignas pueden expresarse como: "independencia del gobierno, de los partidos y de los patrones, una CGT no partidista, pluralismo en el seno del movimiento obrero".[47]

En resumen, el movimiento obrero en Argentina ha salido del período de la dictadura militar, con cierta recomposición de sus orientaciones, antes más homogéneas y monolíticas, pero también más burocráticas y heterónomas. La crisis del peronismo tradicional parece dar lugar a la emergencia de otros sectores combativos y politizados que, primero por la fuerza del movimiento peronista y su vertiente sindical, y luego por la represión de la dictadura militar, no habían tenido oportunidad de ensayar un sistema alternativo de alianzas y opciones frente a la conducción cerrada de la CGT.

A pesar de que el gobierno radical intentó desde el Estado, una "democratización sindical de 'arriba hacia abajo'" con el objeto de relativizar la monolítica oposición de los sindicatos peronistas y abrir el juego, la demanda de democratización no es heterónoma al movimiento sindical, sino que es hondamente sentida por él en esta etapa.

Actualmente, el juego de relaciones de fuerzas dentro del movimiento obrero está precondicionado por la crisis económica, las políticas del Estado, las pugnas en el interior del peronismo y, muy especialmente, por la capacidad del llamado sindicalismo de base para impulsar una participación interna —sobre todo en los sindicatos tradicionalmente más fuertes—, negociar y movilizar demandas obreras exitosas en el marco de la legitimidad democrática, y proponer orientaciones más totalizadoras al conjunto del movimiento.[48]

No obstante, las prácticas y protestas sindicales impulsadas por la CGT constituyen la principal fuerza de convocatoria de la clase obrera argentina, que no necesariamente se

47 Palomino, H., ídem.

48 Para una visión global del sindicalismo argentino, véase Jelin, Elizabeth, y Torre, Juan Carlos, "Los nuevos trabajadores en América Latina. Una reflexión sobre la tesis de la aristocracia obrera", en *Revista Desarrollo Económico*, Vol. 22, núm. 85, abril-junio 1982, y de Delich, Francisco, "Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical", en *Revista Crítica y Utopía*, núm. 6, Buenos Aires, marzo 1982.

identificará con las tácticas e intereses del oficialismo justicialista.

• En Paraguay, en parte debido a condiciones estructurales por las que este país no ha desarrollado una industria que propicie una clase obrera en condiciones de movilizarse, y en parte a causa de la presión desmovilizadora de la dictadura militar, actualmente no es posible hablar de movimiento obrero en sentido estricto.

Los diversos organismos "sindicales" son en realidad órganos subsidiarios del partido en el poder, que representan más bien una parodia de central sindical, alimentada por vínculos clientelistas y por "lealtades verticales al partido y al caudillo, en lugar de identificaciones horizontales de clase, y al actor colectivo, el sindicato".[49]

En especial la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT) está controlada por la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido gobernante, el IADSL, escuela sindical ligada a una central norteamericana y la Juventud Obrera Católica (JOC) que se han opuesto al sindicalismo clasista con una prédica ideológica explícitamente anticomunista.

Por su parte, es de notar la ausencia de líneas progresistas en el movimiento obrero, ya que el Partido Comunista centra sus tareas en el sector campesino y es destruido sistemáticamente por la represión.[50]

No obstante, es posible detectar dentro del marco de escasísima movilidad política y sindical, flujos y reflujos en la movilización sindical:

– una etapa de flujo, iniciada a comienzos de la década pasada y que culmina en setiembre de 1982 con la victoriosa huelga de Coca Cola; esta etapa de flujo corresponde a un período de crecimiento económico acelerado del Paraguay, a causa de la represa de Itaipú y la demanda internacional de granos, acompañados por la reducción del desempleo, el desarrollo capitalista de la agricultura y una mayor urbanización. A esta etapa corresponden los intentos más importantes de creación de un movimiento sindical autónomo y se producen protestas espontáneas;
– una etapa de reflujo (1982-84), caracterizada por recesión, inmovilismo político y retroceso en el movimiento sindical. El autor men-

49 Céspedes, Roberto L., El movimiento laboral paraguayo ante la crisis, CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado, pág. 9.

50 Céspedes, ídem, pág. 27.

> cionado atribuye la desmovilización al grave desempleo y a la represión patronal y policial que "no permiten la sindicalización".[51]

Dentro del bloque político dominante no se dan conflictos de significación. "La crisis paraguaya es una recesión económica, no una crisis política".[52]

El movimiento laboral está latente en los sindicatos independientes de la CPT y en las bases de muchos gremios. Las orientaciones predominantes del movimiento laboral son: la clasista y la nacionalista. El nacionalismo es manipulado ideológicamente por el partido gobernante. Aparentemente, las consignas más movilizadoras deben combinar orientaciones clasistas y orientaciones nacionalistas, como en el caso de la huelga de Coca Cola contra una empresa multinacional.

En resumen, el aparente éxito en la consecución de un bloque dominante sin fisuras y la generación de diferentes tipos de hegemonía ideológica por parte del partido dictatorial gobernante, inmovilizan y desmovilizan al actor obrero en Paraguay mediante diversas fórmulas: represión, hegemonía ideológica, penetración cultural, desocupación y recesión. No obstante, hay elementos potenciales a los que la clase obrera aún no ha recurrido, como alianzas con otros sectores sociales: los campesinos y la izquierda. En el caso paraguayo, es potencialmente posible una relación más estrecha con los partidos políticos, a fin de generar alianzas capaces de ofrecer alternativas al régimen en una posible coyuntura futura de "sucesión", coyuntura que tal vez presentará una fisura al bloque dominante. Estas alianzas podrían orientarse hacia lo clasista y hacia lo nacional, teniendo en cuenta la tradición ideológica de la cultura política paraguaya.

• En el Perú, a pesar del acelerado proceso de desindustrialización Y de deterioro de los salarios, sumado a la desocupación, el movimiento obrero no ha logrado organizarse en esta etapa para luchar por sus reivindicaciones. Esto resulta aun más sorprendente cuando se considera que en la década pasada, en el tramo final del gobierno militar, el nivel de acción fue tal que los paros nacionales obligaron a buscar una salida por la vía electoral. En la década pasada y durante el gobierno militar de Velasco, el movimiento obrero logró grandes niveles de organizaciones y movilización con la participación

51 Céspedes, ídem, pág. 38.

52 Céspedes, ídem, pág. 43.

de los partidos de izquierda. "El gobierno de Velasco ofreció estabilidad laboral, participación en la gestión, propiedad y utilidades en las empresas estatales, pero todo ello no impidió que se agudizaran las movilizaciones. El movimiento sindical logró, además, un importante nivel de acción conjunta, y en 1977 y 1978 se hicieron dos paros nacionales que congregaron masivamente a los trabajadores, aun a los no organizados.

Después de convocar a las movilizaciones populares que dieron fin al gobierno militar, las organizaciones sindicales sufrieron duros golpes: tras el paro nacional de 1977 fueron despedidos unos 5 mil dirigentes, las remuneraciones siguieron cayendo y se observó una tendencia a la inflexibilidad frente a las demandas obreras del nuevo gobierno. Esto debilitó mucho a las organizaciones sindicales entre 1977 y 1979. Se introdujo el miedo y perdieron la confianza los trabajadores en sus posibilidades de acción organizada.[53]

El gobierno de Belaúnde aplicó políticas altamente recesivas como parte de los requisitos del programa del Banco Central de Reserva para reducir la inflación, en coordinación con el FMI. Para ello, el gobierno aplicó aumentos por debajo de lo ofrecido por las empresas en su trato directo con el sindicalismo. Esta política estatal hizo muy difíciles las presiones de los obreros al empresariado.[54]

En la coyuntura democrática, el desafío para los sindicatos era ya no la protesta antigubernamental, sino la ampliación de una legalidad conquistada por el mismo movimiento sindical en su lucha contra la dictadura.

Se observa una atomización del sindicalismo, en la forma de división entre los sindicatos fuertes y los pequeños, en función de su capacidad desigual para presionar y obtener reivindicaciones. Por su parte, quedan fuera de toda capacidad de presión y organización los desocupados o aquellos trabajadores temporarios que no estén sindicalizados y que son la gran mayoría de los trabajadores despedidos.[55]

Los partidos políticos han fomentado una concepción de la política como protesta, plasmada en los paros nacionales en los que el movimiento obrero no consigue nada. El papel de los partidos, que intentan capitalizar política-

53 Véase Parodi, Jorge, *La desmovilización del sindicalismo peruano*, DESCO, Lima, 1985, trabajo mimeografiado.

54 Véase Parodi, J., ídem.

55 Véase Parodi, J., ídem.

mente al sindicalismo y a sus acciones radicalizadas, contribuye aun más a la falta de integración de los sindicatos.

La crisis no ha servido para alcanzar una mayor integración, sino para desmoralizar al obrero y diluir la identificación de clase, propiciando la búsqueda de salidas individuales. Esto se refuerza por la informalización de la clase obrera y el cuentapropismo. Se evidencia en la indiferencia por el sindicato, la baja asistencia a las asambleas, la falta de pago de las cuotas sindicales, el desinterés por ocupar cargos sindicales, etcétera.[56]

La huelga, principal arma de lucha sindical, no tiene ninguna eficacia ante una amenaza de cierre o de baja productiva. El número de huelgas ha descendido sensiblemente en los últimos dos años.

No obstante, y en contraposición con este panorama sindical deprimido, hubo acciones espontáneas aunque esporádicas de las bases, como tomas de fábricas ante intentos de reducción del personal. Pero la acción sindical "dentro de la fábrica" tiene límites muy estrechos. Hay luchas aisladas pero no existe convergencia en las orientaciones ni en los tiempos; es notable la falta de unidad del movimiento obrero.

En resumen, el movimiento obrero peruano, que conoció en la etapa política anterior momentos de gran movilización y notable unidad de acción, hasta el punto de ser el principal actor social que desencadenó, mediante su acción combativa y contestataria, la ruptura del régimen militar, en esta etapa democrática está desmovilizado y su tendencia actual muestra una clara atomización y dispersión.

El conjunto de la historia del movimiento obrero peruano nos hace pensar que más bien está atravesando por una "impasse" histórico que tenderá a disolverse para dejar resurgir las tradicionales tendencias del movimiento sindical, pero seguramente reformuladas, rescatando la experiencia del régimen de Velasco, y tal vez pergeñando estrategias políticas de mayor extensión a nivel nacional que las planteadas hasta ahora, ya que es evidente que los niveles de movilización alcanzados no tardaron en diluirse en sistemas de gobierno no propicios a ellos, a pesar de tratarse de una "democracia".

Esto deberá dejar como saldo de experiencia histórico que no hay simplismos adecuados en política: no todo régimen democrático es necesariamente más propicio al movimiento obrero y los logros obtenidos a través de la lu-

56 Véase Parodi, J., ídem.

cha no tardan en perderse cuando se deja de luchar para sostenerlos y ampliarlos más allá de la mera "protesta antigubernamental" ensayada hasta ahora.

• En Venezuela, la carencia de una adecuada representación autónoma de los intereses del sector obrero se evidencia por la existencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), central sindical que es un instrumento político-organizativo bajo el control de la Acción Democrática y que a pesar de la existencia de otras tres centrales sindicales y de algunos sindicatos independientes, es cuantitativamente la principal organización obrera del país.

Se trata de una estructura burocrática y se la considera como "pieza institucional esencial del sistema político conocido como la Venezuela democrática".[57] En efecto, luego de la derrota de la dictadura perez-jimenista y cuando la izquierda prioriza la lucha armada (1958), la dirigencia sindical de la Acción Democrática, con el respaldo del gobierno, derrota a la izquierda (PC de Venezuela y MIR) dejando el campo libre para una completa hegemonía de la Acción Democrática sobre el movimiento sindical organizado.

Los conflictos obreros más importantes que se desarrollaron en el período de la Venezuela democrática se produjeron principalmente como parte de un enfrentamiento a la burocracia sindical ceterista (huelga de obreros de Sidor, 1971, y paros de obreros textiles, más de 25.000 trabajadores de todo el país, en 1980).

La crisis actual es la más profunda que experimentó el país desde el inicio de la explotación petrolera y data de los primeros años de la década del ochenta.

La crisis se caracteriza por el aumento del desempleo y el subempleo, el crecimiento del sector informal urbano y la agudización de la pobreza crítica.

La crisis se atribuye a las concepciones económicas neoliberales monetaristas y al reinado de los organismos financieros internacionales, que llevan a renegociaciones leoninas de la deuda pública externa, y a exigencias y presiones de las instituciones financieras internacionales con respecto a las políticas salariales y económicas.

El gobierno consiguió una especie de equilibrio entre represión y hegemonía, sumado a prácticas clientelistas y al fomento de la co-

57 Lander, E, y Arconada, S., *La Confederación de trabajadores de Venezuela (el mito del movimiento obrero en Venezuela)*, CENDES, Caracas, 1985, trabajo mimeografiado.

rrupción sindical mediante la cual ha logrado la desmovilización y el quietismo de los intereses de clase de los trabajadores.

En resumen, desde 1958 Venezuela vive una especie de exitoso pacto social en el que se ha logrado un equilibrio del bloque de poder gobernante. En este contexto, y alimentada por el auge petrolero, la corrupción y las prácticas hegemónicas exitosas, la clase obrera no ha logrado darse formas de organización y lucha alternativas al organismo que les fuera impuesto desde el gobierno como presunta central representativa: la CTV. En el contexto de la crisis en que se encuentra el país a raíz de su dependencia de organismos internacionales, se intenta afinar aun más los argumentos de "solidaridad nacional" dirigidos a la clase trabajadora con el objeto de "superar la crisis", obviamente a fin de deshacer los efectos movilizadores y revulsivos del deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana en la coyuntura de crisis. No obstante, con la nueva fase económica parecen comenzar a expresarse alteraciones en el régimen político dominante y una pérdida de legitimidad debido a la impotencia del Estado para continuar otorgando concesiones que mantengan controlada a la organización sindical. Esta coyuntura puede presentar un frente vulnerable del sistema, para la acción futura del movimiento obrero.

• La acción obrera en Colombia puede analizarse en el contexto de un largo proceso político de democracia restringida, y un modelo económico industrial y agroexportador que excluye fuertemente la ampliación de espacios de participación social y concertación política, procesos ambos que en alguna medida entran en crisis a causa de la disminución de la actividad productiva agropecuaria, la relativa desindustrialización y la deuda externa, pero también por los conflictos y demandas por parte de una serie de actores sociales como el campesinado, los paros cívicos, las demandas urbanas y la misma guerrilla.

En el pasado, el sindicalismo colombiano fue parte del pacto social iniciado en 1957 y debido a esta aceptación se desarrolló un movimiento obrero hiperinstitucionalizado, fuertemente captado por el Estado a través de un complejo sistema de clientelismo y prebendalismo socioeconómico. Así, el Frente Nacional le otorgó al sindicalismo obrero la representación popular; sin embargo, esta relación consistente fue perdiendo fuerza y se empiezan a visualizar importantes distancias y cuestiona-

mientos latentes desde las bases a las direcciones sindicales.[58]

Tal vez se esté desarrollando un tipo de organización obrera más comunitaria, más relacionada con el lugar de vivienda que con el espacio de la fábrica, organización que daría lugar a la discusión y búsqueda de alternativas para una revitalización del movimiento obrero colombiano, fenómeno también reclamado por otras fuerzas sociales como las de pobladores urbanos, asalariados de pequeñas empresas y campesinos.

En síntesis, el panorama del movimiento sindical mencionado en estas páginas muestra de alguna manera un comportamiento obrero bastante diverso, cuyas orientaciones dependen de las condiciones sociales de trabajo y de la situación política nacional. En este sentido, regionalmente no existe una clase obrera homogénea; incluso en todos los casos específicos se perciben fácilmente fuertes diferencias y oposiciones entre orientaciones e intereses sociales de diferentes líneas políticas, oposiciones entre direcciones y bases, oposiciones y ambivalencias en el interior de un mismo sindicato, etcétera.

En este sentido, en la mayoría de los casos las prácticas obreras son principalmente defensivas del puesto de trabajo, de los salarios y los beneficios sociales. Los efectos del estancamiento industrial o los procesos de desindustrialización parecen condicionar estos comportamientos y, posiblemente, con excepción relativa de la COB boliviana y de la CUT brasilera, el movimiento obrero sudamericano pierde aparentemente centralidad en la política y en la economía latinoamericanas, impugnando más a los gobiernos y a los ministerios de trabajo que al capital, sea éste nacional o internacional; la dirección industrial de la sociedad no está en cuestión para los obreros.

Sin embargo, en estos espacios también es posible visualizar demandas de autonomía estatal, de independencia política partidaria y de democratización interna que probablemente reconecten al movimiento obrero, de manera muy distinta a la del pasado, con el sistema real de oposiciones capitalistas que empieza a vivir la región.

B. CALIDAD DE LA VIDA, CONSUMO COLECTIVO Y DESCENTRALIZACIÓN

Uno de los rasgos básicos del proceso de urbanización en la región es la creciente inconsistencia entre las demandas de consumo colec-

58 Véase Romero, Mauricio, *Los asalariados y el movimiento sindical en Colombia*, CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.

tivo y calidad de la vida en general, versus las débiles posibilidades de satisfacerlas por parte del Estado o del capital.[59]

La presente crisis agudizó esta tendencia, pues los impactos sobre la industria y sobre el Estado provocaron una disminución significativa de los procesos de reproducción social en general. Así, el Estado disminuyó sus presupuestos orientados a satisfacer las necesidades de consumo colectivo para racionalizar sus políticas internas y atender a las negociaciones con el FMI. Por otra parte, la desindustrialización, el despido de trabajadores, la nueva inseguridad del empleo, la disminución de salarios y de beneficios sociales coadyuvan a un panorama caótico del mundo urbano.

Dentro de este marco se desarrollan en todas las ciudades de la región economías informales y estrategias de resistencia a la crisis que contemplan, desde formas familiares de acción, hasta organizaciones comunitarias, protestas y rebeliones urbanas; las ciudades se convierten en frágiles refugios de los pobres y de los sectores medios para enfrentar de múltiples maneras –cogestionariamente algunas veces, anómica y desesperadamente otras–, las carencias sufridas.[60]

Estas características suscitan un alto grado de homogeneidad regional en lo que hace a la emergencia de luchas y movimientos sociales urbanos que se instituyen en el centro de la protesta y de la acción política urbana.

Así, al tiempo que emerge una serie de luchas y demandas por el consumo colectivo y la tierra urbana, se desarrollan organizaciones comunitarias que, tratando de superar el cooperativismo paraestatal y dependiente del poder de turno, demandan medidas de descentralización estatal y democratización local y en algunos casos; además, juegan un papel vital en las oposiciones a dictaduras y políticas autoritarias vividas, llegando a constituirse en verdaderos epicentros de la lucha popular.

A grandes rasgos, al lado de las prácticas urbanas tradicionales, e incluso en ellas mismas, se han desarrollado recientemente cuatro formas de acción colectiva.

59 Véase para una visión teórica, M. Castells, *Crisis urbana y cambio social*, Siglo XXI, España, 1981, págs. 107-189, y también Calderón, F., *La política en las calles*, Editorial CERES, Cochabamba, 1983.

60 Para una visión panorámica de estos procesos véase Walton, Chase-Dunn, Langer y otros, *Ciudades y sistemas urbanos*, CLACSO, Biblioteca de Ciencias Sociales núm. 10, Buenos Aires, 1984.

La primera, de fortalecimiento de unidades productivas o reproductivas de pequeña escala: talleres artesanales, pequeños comercios, unidades o asociaciones de consumo, pequeñas unidades productivas diversificadas en espacios urbanos y/o rurales, etcétera, que de alguna manera buscan ideologías y formas de organización autogestionarias.

La segunda implica el desarrollo de distintas organizaciones sociales urbanas, juntas de vecinos, comités de abastecimiento, centros cívicos, etcétera, que generan demandas de descentralización barrial de las políticas y acciones municipales, y que, en alguna medida, sustentan reclamos de ejercicio del derecho ciudadano. Asimismo, en varias regiones y en distintos países comenzaron a compaginarse, desde el ámbito urbano, luchas por la descentralización del Estado en términos de obtención de mayores recursos económicos y políticos. En gran medida, los habitantes urbanos se han vuelto buscadores de un nuevo orden democrático en la "pequeña política".

La tercera consiste en demandas de renovación urbana, que implican tanto transformaciones en las relaciones socio-culturales, como impugnaciones al orden espacial y ecológico de nuestras ciudades; en esta orientación se destacan los movimientos tendientes a mejorar el cuadro de vida protagonizados fundamentalmente por sectores medios.

Una cuarta acción colectiva se refiere a las luchas urbanas que se convierten en espacios de comunicación plurisocial y cutural entre diferentes grupos humanos, rompiendo la inmersión urbana del pasado; así se escuchan demandas de alianzas de clases, solidaridad nacional y cultural, en un pequeño ambiente de resistencia callejera donde conviven grupos sociales étnicos, etarios, etcétera.

Probablemente, la crisis productiva, la contracción del mercado de trabajo y en muchos casos los regímenes coactivos han incidido en el fortalecimiento de este tipo de acciones colectivas que en lo cotidiano se expresan en la calle, el barrio o la barricada de la esquina, y que permiten espacios de protesta más amplios y menos controlados que las fábricas. Además, la crisis genera para grandes sectores populares la pérdida de un ámbito de trabajo y de relación que altera también la posibilidad de protesta. La calle se vuelve para los desocupados, los marginados de la producción y para todo el mundo urbano sumergido el único espacio posible de encuentro, resistencia e identidad.[61]

61 El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: Daniel García Delgado y Juan

El campo de conflicto de las organizaciones urbanas en Buenos Aires se caracterizó a la vez por una búsqueda de un espacio de reconocimiento democrático y de satisfacción de demandas colectivas, referidas a la calidad de la vida, la tierra urbana, la vivienda y la ciudadanía.

Son tres las tendencias que pueden registrarse en la Argentina en relación con los movimientos vecinales. Uno, más tradicional y con antigua raigambre está constituido por el "fomentismo";[62] tiene una vieja trayectoria institucional y de relación con el Estado. Mantuvo estilos organizativos durante décadas; pero en la coyuntura de la etapa democrática actual se plantea el desafío de superar el modelo tradicional y de redefinir sus objetivos a fin de concebir de manera más amplia la lucha por la calidad de vida.

Otro, aparentemente coyuntural, que emergió del seno de la última etapa del régimen militar después de la guerra de Malvinas, fueron los "vecinazos",[63] bajo la forma de acciones espontáneas en las que la población se autoorganizó para protestar contra los abusos impositivos del régimen, el agio, los negociados y la malversación de los fondos públicos invocando a la Constitución, y que presenta la situación como un estado de atropello a los principios de la ciudadanía. El movimiento vecinal se enfrentó activamente al poder municipal y amenazó con extender su acción contra el gobierno provincial, pero su actuación pública fue efímera.

Por último, los "asentamientos", como el de San Francisco Solano[64] fueron formas espontáneas y organizadas de responder activamente al problema de la carencia de viviendas para amplios sectores de la población, optando por

Silva, María I. González, Luis Fara, Roberto Laserna, Pedro Jacobi, Vania Bambirra, Vicente Espinoza, Javier Giraldo y Santiago Camargo, M. Unda, Simón Pachano, Luis A. Galeano, Teresa Tovar Samanez, Narda Henríquez, Patricio Rodé, Javier Marsiglia, Enrique Piedra Cueva, Omar Ovalles, Eduardo Matute, R. P. Arturo Sosa S.J., realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

62 García Delgado, Daniel, y Silva, Juan, *El movimiento vecinal y la democracia. Participación y control en el Gran Buenos Aires*, CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

63 González, María Inés, *Protestan los barrios (el murmullo suburbano de la política)*, CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

64 Fara, Luis, *Luchas reivindicativas urbanas en un contexto autoritario*, CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

recuperar tierras fiscales en desuso. Esta última forma obtuvo del gobierno constitucional la legitimación de sus demandas mediante la promulgación de leyes que les otorgaban la posesión legal de los terrenos y establecían formas adecuadas de pago. El triunfo obtenido abre una nueva historia en lo referente a los movimientos urbanos, ya que sienta precedentes en la posibilidad de que "la democracia sea capaz de asumir, incluso de institucionalizar las formas de organización autogestionarias que los sectores populares se fueron dando para reclamar por sus derechos en un contexto autoritario".[65]

En conclusión, por una parte todas las formas de acción comunal emprendidas por las poblaciones tuvieron un grado de eficacia que dependió, en gran medida, de la coyuntura en la que emprendieron las acciones y de la forma en que supieron presionar para negociar sus reivindicaciones. Es sintomático que los asentamientos, que en definitiva fueron la acción más exitosa, hayan tenido su última etapa de negociación en el contexto preelectoral del radicalismo y que la promulgación de las leyes que los beneficiaron fuese uno de los primeros actos de gobierno que la administración hizo públicos.

Por otra parte, es posible que estas formas de organización vecinal evolucionen hacia formas participativas más amplias de poder local y de demandas de consumo colectivo.

• En Brasil y más específicamente en Río de Janeiro y San Pablo, a partir de mediados de la década del '70, coincidiendo con la crisis de legitimidad del régimen, los movimientos sociales urbanos se multiplicaron. A partir de 1980, con la agudización de la crisis económica y de desempleo, el marco de referencia de los movimientos sufrió significativas transformaciones. Las movilizaciones se concentran alrededor de las cuestiones del desempleo y la vivienda, además de las habituales demandas por mejorías en las condiciones de vida.[66]

Movimientos de desocupados, de moradores, de mutuarios, de usuarios de transportes colectivos se caracterizan por una dinámica concentrada en la demanda por derechos de ciudadanía vinculados a la dimensión de lo cotidiano y de lo local.[67]

65 Fara, Luis, ob. cit.

66 Jacobi, Pedro, *Movimentos sociais urbanos e a crise: da explosão social a participação popular autonoma*, FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

67 Idem.

Actualmente, la liberalización política del régimen posibilitó un mayor grado de asociativismo de los movimientos ciudadanos —primero de aquellos sectores más excluidos y, recientemente, de la clase media—, que representan una forma de cuestionar el excesivo centalismo del Estado.

En todas estas demandas está en juego el tema de la dignidad pública de los marginados de la producción y del consumo. Se trata de la lucha por una cualidad nueva de la ciudadanía.[68]

El campo del conflicto es un espacio nuevo, en el que la ciudadanía exige directamente, sin mediaciones, que el Estado dé cabida a la participación de los sectores marginados en la gestión de la cosa pública, desde la interpelación al Estado en la forma de diálogo con los gobiernos municipales, hasta las acciones directas de masas.

En otras vertientes, los movimientos de "favelados"[69] han sido instrumentos de organización para la autodefensa de la población favelada. Tienden a agruparse en Federaciones de Favelas por Estados, y muchas veces están sujetos a las prácticas clientelistas de los partidos de turno (Brizolismo, Chaguismo). Por su parte, la Iglesia emitió varias "pastorales de favelas" en la década del '70, a través de las comunidades de base. Estas evolucionaron hacia opciones partidarias como el Partido de los Trabajadores (PT). También los partidos de izquierda actuantes en el PMDB ejercieron cierto control de las Asociaciones. La inmediatez de las demandas y urgencias de la población favelada hace que puedan caer bajo proteccionismos paternalistas partidarios. Asimismo, la heterogeneidad de la población favelada dificulta la creación de formas orgánicas de resistencia que vayan más allá de lo reivindicativo.[70]

68 Idem.

69 Bambirra, Vania, *Favelas e movimentos de favelados no Estado do Rio de Janeiro*, FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

70 Para complementar esta visión brasileña, véase José Lavaro Moisés, Lucio Kowarick y otros, *Cidade, povo e poder*, co-ediçoes CEDES/Paz e Terra, San Pablo, 1982. El estudio de Evers, Tillman, y otros, "Movimientos de barrio y Estado: luchas en la esfera de la reproducción en América Latina" integra una visión teórica del problema que se está tratando. Un aspecto que revela este trabajo es su papel de opositor a las protestas urbanas. "El nivel de consumo individual está en gran medida determinado por el Estado. En América Latina el Estado asume la cualidad de representante directo de los intereses capitalistas, fijando salarios, decretando las condiciones de trabajo, prohibiendo los sindicatos, aumentando los precios, y actuando como

• En Montevideo, los movimientos de pobladores de Uruguay se inscriben en la crisis económica que genera desocupación, caída del salario, etcétera, de los últimos doce años de proceso dictatorial. En este contexto de pauperización de los sectores populares, temas como la salud, la alimentación y la vivienda se vieron extremadamente agudizados en sus carencias. Ante esta situación, diversas iniciativas populares intentaron paliativos, dándose diversas formas de organización y cooperación.[71]

Los Servicios de Salud Populares Privados (SSPP) que se dieron formas de agrupación entre los años 1982 y 1983, y que generaron un encuentro en 1984, en su discurso explícito van mucho más allá de medidas paliativas. Lograron generar una conciencia política en el sentido de que el Estado no se hacía cargo —ni había perspectivas de que lo hiciera— de la situación de la población. Se expresaba claramente la voluntad de un "cambio hacia un modelo de sociedad donde se haga efectivo el derecho a la salud como derecho humano fundamental."[72]

Por su parte, los Clubes de Compra, las ollas populares, etcétera, se dieron formas de coordinación interbarrial creando Mesas Coordinadoras que intentaron afianzar el espacio social conquistado por separado por los Clubes y las ollas.

El Movimiento Pro-Vida Decorosa (MOVIDE), a través de la Comisión pro-viviendas decorosas, reuniendo comisiones de cantegriles o barrios humildes, reclamaron lo que prometía la Constitución uruguaya de 1967 (que el Estado colabore para que cada integrante de la sociedad tenga una vivienda decorosa). Según su declaración: "no se pide algo nuevo".[73]

Aparentemente mediante estas instancias de autoorganización popular, se ha pasado de enfoques reivindicativos o reformistas a otros más amplios. En sus declaraciones acerca de los políticos sostienen que "los políticos nos utilizaron y nos engañaron siempre". Una vez más, a partir de la experiencia de autoorganización y lucha, el actor popular descubre su soledad y la necesidad de autosuficiencia,

propietario de un gran número de empresas lucrativas". Traducción L. Gaustein. Véase también Kowarick, Lucio, *Expoliação urbana*, Paz e Terra, San Pablo, 1979.

71 Rodé, Patricio; Marsiglia, Javier y Piedra, Enrique, *Experiencias recientes de movilización urbana en las áreas de la salud, nutrición y organización barrial*, CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.

72 Idem.

73 Idem.

al menos en una primera instancia de lucha. Dos rasgos son comunes a estas formas de movilización: la exigencia de acción eficaz por parte del Estado y el deseo de preservar la independencia del movimiento frente a posibles cooptaciones. Sin embargo, es notable la participación de sectores cercanos a los actores populares, como en el caso de los Servicios de Salud y de ciertas capas de la Iglesia Católica. Por otra parte, es de notar la ausencia de la izquierda, por su alejamiento o inadecuación a las problemáticas reivindicativas y de supervivencia de los actores populares, que tiende a priorizar su relación con el movimiento sindical y estudiantil.[74]

• En el caso de Chile,[75] el análisis de los movimientos de pobladores debe verse como el resultado de un brutal proceso de descomposición, fragmentación y polarización social de la sociedad chilena y, a la vez, como un cuestionamiento del sistema autoritario por parte de los pobladores, y de una afirmación de su identidad social.

Los procesos sociales anteriormente citados generaron en el mundo de los pobladores el desarrollo de una serie de estrategias de subsistencia de orden colectivo (como las ollas comunes, las economías familiares diversificadas) e individual (como aquéllas que involucraron una serie de comportamientos anómicos). Este tipo de situaciones implicó una serie de demandas reivindicativas, sobre todo de tierra urbana y tomas de terreno, así como de mejoramiento de las condiciones de existencia.

El conjunto de esas demandas y de esas necesidades estuvo asociado con la emergencia de protestas colectivas masivas en Santiago, que desde la acción rebelde cuestionaron el poder despótico del Estado, y que de manera más espontánea que orgánica lograron una convocatoria propia frente a la sociedad chilena que los lleva a constituirse en protagonistas sociales, aunque probablemente exista una oposición entre su fuerte capacidad movilizadora y la elaboración de propuestas políticas totalizadoras.

El conjunto de estos nuevos comportamientos urbanos tal vez pueda explicarse porque gran parte de las demandas de las ciudades chilenas y latinoamericanas pasaron de la órbita de la producción y del trabajo a la órbita de la reproducción y el nivel de vida. Incluso es

74 Idem.

75 Véase Espinoza, Vicente, *Los pobladores en la política*, ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.

posible pensar que las limitaciones orgánicas de la acción obrera fortalecen, en el campo y en el espacio de la residencia, las acciones colectivas urbanas. Es decir, que es posible afirmar que existe cierto grado de simbiosis en la capacidad de convocatoria de la clase obrera y su movimiento sindical en determinados momentos de crisis y protesta social, que cobran vida y fuerza por la incorporación masiva de los pobladores urbanos que desde los barrios, las calles y las esquinas cuestionan la legalidad vigente. Y viceversa, los pobladores necesitan de la centralidad y de la tradición obrero-sindical para llevar adelante sus movilizaciones.[76]

• La peruana Teresa Tover[77] diferencia las actitudes de los pobladores en etapas de crisis económica y política (años 1976-1979) en que los pobladores se movilizan en la esfera de la producción por pedidos de mejoras salariales, y etapas en que la crisis es solamente económica y generadora de fuerte recesión, pero no política, como la etapa '80-84, en la que, debido a la recesión, los actores populares intentan estrategias de supervivencia, defensa del empleo, etcétera, y donde lo particular y sectorial avanzan sobre lo colectivo.

Recientemente, los pobladores se movilizan por motivos muy diferentes: el Programa del Vaso de Leche, el plan de Emergencia del Agua, el apoyo para comedores populares, la visita del Papa en 1983, etcétera. Las reivindicaciones se encuadran en tres aspectos: a) nivel de vida, b) ordenamiento capitalista de la ciudad, c) democracia y cultura (voto, participación, organización, etcétera).[78]

Las formas de movilización también cambiaron: de marchas y protestas callejeras se pasó a Cabildos Abiertos y Asambleas populares. Se trata de un nuevo horizonte donde el movimiento de pobladores tiene que llegar a sintetizar distintos componentes económicos, estructurales, sociales y culturales de la identidad de "vecino", a fin de lograr presencia y legitimidad en el panorama político. En la coyuntura actual, después de intensos años de crisis política, parece diluirse la capacidad de protagonismo popular, y es justamente ahora

76 Idem.

77 Véase Tovar Samanez, Teresa, *Vecinos y pobladores en la crisis (1980-1984)*, DESCO, Lima, 1985, trabajo mimeografiado. Para una visión global E. Henly, *La escena urbana*, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1978.

78 Tovar, Teresa, ídem.

cuando el movimiento popular debe formular alternativas frente a la crisis, en relación con otras fuerzas que aparecen: APRA, Izquierda Unida, Sendero Luminoso, etcétera.

• En Quito,[79] en los últimos quince años, hubo importantes cambios en la organización de los moradores de barrios populares. Se expresan en el explosivo incremento organizativo (multiplicación) de todo tipo de asociaciones creadas por los vecinos (comités pro-mejoras, grupos juveniles, asociaciones femeninas, comunidades cristianas, federaciones de barrios populares, cooperativas de viviendas, etcétera).

Hay tres aspectos en los que se expresan tendencias renovadoras en los barrios y en todas estas organizaciones:

1. organicidad de las asociaciones,
2. ampliación y diversificación de las reivindicaciones,
3. tendencia a la unidad mediante agrupaciones de tipo barrial popular.[80]

Estas transformaciones se enmarcan en el proceso de modernización capitalista experimentado por la sociedad ecuatoriana, que se tradujo en la urbanización de la economía y de la población.

Las nuevas tendencias surgidas en los barrios populares son fruto, en buena parte, de la crisis de la economía nacional, cuyos primeros efectos surgieron hacia fines de la década de 1970. Son una manera de enfrentar la crisis, para lo cual el ámbito de la organización se extiende de la calle al hogar y del barrio a la ciudad.

Otro elemento importante en estas tendencias renovadoras es la democracia entendida como posibilidad organizativa: 1) en cuanto al reconocimiento de la legitimidad social de la población, y 2) en cuanto a la posibilidad de independencia frente al Estado y a los partidos políticos de las clases dominantes.[81]

La organización vecinal suele generar una suerte de dependencia frente al Estado, frente a las instituciones de gobierno y frente a los intermediarios visibles, los partidos, etcétera, sobre la base de relaciones "clientelares". Pero

79 Unda, M., *La organización barrial entre la democracia y la crisis*, CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

80 Idem.

81 García y col., ob. cit. Véase también J. García, *Las organizaciones barriales de Quito*, ILDIS-CIUDAD, Quito, 1987.

últimamente se agudizó la contradicción entre estas tendencias tradicionales, clientelistas, de la organización barrial, y las tendencias renovadoras.

• En Bolivia, la organización territorial tiene hondos antecedentes en las culturas andinas. No son novedosas en la sociedad boliviana las formas de lucha urbanas y regionales. Pero, en los últimos años, formas organizativas como los Comités Cívicos lograron construir y controlar espacios políticos e ideológicos con gran poder de convocatoria y de legitimación.[82]

En muchos casos, el llamado regionalismo respondió a objetivos particularistas y a prácticas de sectores dominantes. No obstante, grupos integrantes del campo popular sentaron su presencia en las luchas regionales y en los Comités, con relativo éxito.[83]

Por su parte, las Juntas Vecinales, antiguas formas organizativas, protagonizaron en las últimas décadas acciones colectivas frente al proceso de urbanización boliviano, aglutinando a habitantes de barrios o de zonas urbanas con el objeto de luchar por su hábitat.

Durante los años del autoritarismo ganaron campos de acción y de representatividad y partiparon en la demanda de democratización social, de lucha contra la dictadura y el centralismo estatal. Su relativo aislamiento de otras formas de organización social, bajo la forma de prejuicios desde la izquierda o desde las organizaciones sindicales, los han enfrentado a veces a situaciones en las que se los polarizaba desde afuera con otras formas de movilización popular.

Ello no quita el gran potencial transformador de las organizaciones territoriales que se proponen, en definitiva, la reforma del Estado, la construcción de una nueva institucionalidad y el reconocimiento de una sociedad en toda su heterogeneidad, contribuyendo así a crear una posibilidad para solucionar la crisis de representatividad del Estado boliviano.[84]

No obstante, cabe destacar que no hay conciencia acerca de las posibles orienta-

82 Laserna, Roberto, *La protesta territorial (la acción colectiva regional y urbana en una coyuntura de crisis y democracia)*, CERES, Cochabamba, 1985, trabajo mimeografiado, y Flores, Gonzalo, *El movimiento regional cruceño*, CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado; este último analizará el desarrollo de un movimiento social regional: el cruceño.

83 Flores, G., ob. cit.

84 Laserna, R., ob. cit.

ciones y cierta dependencia del Estado que, tomado como adversario en las luchas, no llega a constituirse en un verdadero antagonista, subyaciendo una concepción del Estado como "protector". Se trata más bien de luchas dirigidas *hacia* el Estado que *contra* el Estado.[85]

De la cronología de eventos registrados desde 1982 se desprende la vigorosa capacidad y vocación de lucha de estas asociaciones territoriales, tal vez con ritmos y frecuencia más sostenidos que en la mayoría de las sociedades de América del Sur.[86]

• En Colombia, los paros cívicos son formas de protesta cívica originados en reivindicaciones comunes a diversos sectores sociales; por lo tanto, son policlasistas. Generalmente se relacionan con el consumo masivo o con el desarrollo regional. Implican la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una localidad o región, como forma de presión sobre las autoridades que pueden dar satisfacción a las demandas.

A partir de 1957 la modalidad del Paro Cívico comienza a constituir una forma frecuente de la lucha reivindicativa. Entre agosto de 1982 y agosto de 1984 (los dos primeros años de gobierno de Betancur) se realizaron 58 paros cívicos.[87]

Más que movimientos sociales, los autores colombianos señalan que se trata de "luchas sociales" centradas en problemas relativos al equipamiento urbano: ampliación de servicios de acueducto, energía eléctrica, alcantarillado, vías; transporte, educación y salud, reducción del alza desmedida de las tarifas de los servicios, distribución más equitativa del presupuesto nacional o regional.

Estas reivindicaciones quedan enmarcadas dentro de una problemática sectorial que no toca los fundamentos de la sociedad vigente. Sin embargo, de una manera indirecta pesan sobre el papel del Estado develando la contradicción por la cual el Estado trata de asegurar, por una parte, la rentabilidad del capital, y, por otra, un equipamiento urbano no rentable, pero necesario para la legitimación social del Estado mismo.

85 Flores G., y Laserna, R., ob. cit.

86 Véase en este mismo texto el trabajo de Laserna, R., *La acción social en la coyuntura democrática*.

87 Camargo, Santiago, y Giraldo, Javier, *El movimiento cívico en Colombia*, CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.

Además, cuando estas reivindicaciones locales pasan a ser formuladas por movimientos cívicos coordinados, se generan reivindicaciones más radicales que ya apuntan a la racionalidad económica del sistema vigente: estatización del transporte público, municipalización de la tierra urbana y creación de bancos de tierras en las principales ciudades del país, con la participación de organizaciones autogestionarias de vivienda popular, legalización de asentamientos populares, nacionalizaciones de fábricas, nacionalización del sector financiero, etcétera.[88] Otras son de importancia para el diseño de una sociedad alternativa: control popular de determinados servicios, fiscalización del Estado y control de sus mecanismos de administración.

Hay dos tendencias en los tipos de actores involucrados: en las grandes ciudades, donde las relaciones de clase prevalecen sobre los vínculos familiares, vecinales o semifeudales, la población participante tiende a pertenecer a las franjas más oprimidas de la sociedad.[89]

Cuando se trata de movimientos más estables y bien organizados, no tan espontáneos, la convocatoria incluye a otras capas sociales. Pero, en general, este tipo de movimientos se caracteriza por su policlasismo. El adversario, el blanco de la protesta cívica es el Estado, en cuanto administrador y garante del equipamiento colectivo.

Por último, cabe señalar que estas formas de organización y de movilización son generadoras de conciencia y posibilitan experiencias colectivas que tienden a evolucionar. Son un tipo de lucha social que no puede caracterizarse como un verdadero movimiento social, pero que contiene sus posibles gérmenes.

Tal vez convenga aquí mencionar a los movimientos regionales que presentan algunas características similares en Perú, Ecuador y Bolivia;[90] en dichos países las diferencias y conflictos regionales del pasado en cierto modo se reconstituyeron en función de demandas puntuales y de impugnaciones al centralismo estatal, haciéndose eco de viejos valores regionalistas.

En Ecuador, como señala Pachano,[91] los procesos de reestructuración regional implicaron

88 Idem.

89 Idem.

90 En la actualidad, el CERES, el IEE y CISEPA se encuentran realizando un importante estudio empírico sobre la problemática.

91 Pachano, Simón, *Movimientos sociales regionales en el Ecuador*, CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

procesos de diferenciación social que mostraron conflictos en el interior de la región. Más que movimientos auténticamente regionales –no obstante la reestructuración de procesos económicos en varias subregiones (Esmeralda, el Triunfo, etcétera)– se expresaron en demandas contra el Estado central; estas demandas también implicaban un reclamo de incorporación al sistema político.

En Perú la situación parece más compleja, pues las luchas y demandas regionales tuvieron una experiencia más reciente en el norte y especialmente en el sur del país; se realizaron paros y demandas (por el costo de vida, electricidad, irrigaciones, etcétera) que planteaban, además, orientaciones de transformación de las relaciones de poder. Recientemente fue clave el papel de los municipios provinciales que, con características pluriclasistas y culturales, protestaron por injusticias regionales. Como señala Narda Henríquez,[92] las demandas regionales son heterogéneas, pero el opositor —el Estado— es homogéneo.

—En el caso de Bolivia, los procesos cívicos tendrían las mismas características de demandas regionales puntuales, pero, a diferencia de las tendencias señaladas hasta ahora, sobresale la presencia de un auténtico movimiento social regional: el cruceño. Este, a través de grupos dirigentes locales, logró cierta hegemonía regional y mediante variadas formas de lucha busca el poder del Estado y la dirección de la sociedad nacional. El trabajo de G. Flores analiza con precisión las características de este movimiento.[93]

Como sea, en el conjunto de estos países andinos parecería que tanto las demandas puntuales como las orientaciones descentralizadoras globales de las sociedades locales se relacionan con los procesos de constitución nacional en cada país; así, el problema de la formación nacional sigue siendo uno de los problemas clave en estas sociedades.

• En Venezuela, los movimientos sociales de "cuadro de vida" engloban al movimiento vecinal y al movimiento ecologista. En el marco de una sociedad desproductiva que vive de la renta petrolera, modelo actualmente en crisis, surgen fenómenos como el desempleo, la delincuencia, el desabastecimiento, el alto costo de vida, etcé-

92 Henríquez, Narda, *Notas y tesis sobre los movimientos regionales en el Perú*, DESCO, Lima, 1985, trabajo mimeografiado.

93 Flores, Gonzalo, ob. cit.

tera, y junto a estos fenómenos negativos surgen también nuevas formas de lo político que defienden los espacios vitales amenazados por el espacio económico. El movimiento vecinal orientado a la obtención de reivindicaciones, como los servicios públicos, la tierra, el agua, etcétera, se ha combinado y potenciado en su relación con el movimiento ecologista en la lucha contra el urbanismo salvaje por mejores niveles de calidad de vida, por una ciudad diferente.

Más allá de las reivindicaciones puntuales, estos movimientos emprendieron una acción con sentido más global, como la impugnación –desde la ecología– al paradigma del progreso indefinido, el cuestionamiento a la centralización estatal, las demandas de democratización de la sociedad civil y del Estado. La descentralización es fuertemente apoyada también por el movimiento regionalista. No obstante, la reforma del Estado se plantea de arriba abajo y se genera contradicción entre la deseada y propuesta reforma política de democratización estatal; por otro lado, se reactiva un aparato industrial por y para un Estado centralista.[94]

Una amplísima gama de propuestas que van desde la autoproducción y el cooperativismo de la salud, el consumo, la autoconstrucción, la agricultura orgánica, etcétera, y tendencias como el cooperativismo, el movimiento vecinal y el movimiento ecologista se combinan y apoyan mutuamente, enriqueciéndose.[95]

Cabe destacar que estas iniciativas empiezan donde los problemas de empleo, salario, alimentación, salud o servicios públicos no son tan graves, tal vez porque en situaciones críticas, planteos como el ecologista no son todavía muy potables. No obstante, en la "ciudad de los campesinos" las propuestas de autonomía no parecen demasiado extrañas, cuando el movimiento campesino tiende a sustraerse lo más posible de la economía de mercado.[96]

En este contexto, los partidos parecen estar en crisis y permanecer ajenos a todas estas cuestiones. Por su lado, el movimiento teme perderse dentro de una estructura partidaria. El autor del trabajo sobre los movimientos de cuadro de vida en Venezuela sugiere que estos movimientos, que coinciden en numerosos te-

94 Ovalles, Omar, *Movimientos de cuadro de vida en la Venezuela urbana actual: posibles actitudes para enfrentar la crisis*, CENDES, Caracas, 1985, trabajo mimeografiado.

95 Idem.

96 Idem.

mas, tienden a la unidad, y que la ecología está llamada a establecer la síntesis.

• En Asunción, los dos estudios de casos acerca del movimiento de pobladores en Paraguay pertenecen sintomáticamente al período de auge de la economía paraguaya, 1972-1981, década en la que variados factores de tipo económico (Itaipú, ingresos de importantes masas de capital extranjero, colocación favorable en el mercado internacional de su producción agrícola, etcétera) produjeron un giro en las condiciones económicas y sociales que generaron un desarrollo y una urbanización, mayor y radicalmente diferente del que tuvo lugar en el período de lento crecimiento precedente.[97]

Uno de los casos, la ocupación del barrio de Nuestra Señora de la Asunción, se extendió como conflicto desde 1975 hasta 1983, período excepcionalmente prolongado, y fue coronado por el éxito de los actores populares al lograrse la legalización de la propiedad de los terrenos ocupados, donde actualmente viven alrededor de 1500 familias.[98]

El caso Hidrosil, más breve en el tiempo (marzo a julio de 1979), puede caracterizarse como una lucha social alrededor de la protesta por los desmedidos costos de la obra de alcantarillado llevada a cabo por la empresa ganadora de la licitación. En este último caso fracasaron las tentativas por vía legal de los actores populares, pero finalmente se retiró la obra de manos de la empresa, aunque la suspensión de las obras, en definitiva, perjudicó a la población involucrada.[99]

Ambos conflictos coinciden en una serie de factores que es válido enumerar: 1) la heterogeneidad de los actores populares involucrados, 2) el liderazgo de los "ex-combatientes de la guerra del Chaco", 3) la participación favorable y decisiva de la Iglesia Católica como mediadora, 4) la recurrencia en algún momento al recurso jurídico legal, 5) la soledad de los pobladores en esta instancia de lucha y su falta de relaciones con otras fuerzas sociales y 6) el aparente "apoliticismo" de las demandas, expresado en el discurso de los pobladores.[100]

En una sociedad desmovilizada a la fuerza como la paraguaya estas luchas adquieren

97 Galeano, Luis A., *Entre la protesta y la lucha urbana: dos estudios de casos*, CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.

98 Idem.

99 Idem.

100 Idem.

una relevancia especial, ya que sientan precedentes de experiencia de lucha, organización, solidaridad, triunfo y fracaso, que a pesar de un contexto represivo y desmovilizador como el actual, se han inscrito en la memoria colectiva. De los rasgos comunes de estas luchas podemos deducir que para los actores populares en Paraguay en esta etapa de aislamiento de otras fuerzas sociales, resulta indispensable la recurrencia a instancias legitimadoras como la Iglesia Católica y las asociaciones de ex-combatientes, que no pueden ser tachadas fácilmente de subversivas del orden existente. A la vez, quedó clara la voluntad de los sectores populares de mantenerse al margen e independientes de las instituciones políticas oficialistas (como el partido en el poder) y la inoperancia de las instituciones judiciales como mediadoras del conflicto.

Para el actor popular resultó evidente la corrupción, la arbitrariedad y los intentos de capitalización de todos los estratos e instancias relacionados con el orden político imperante, así como las tradicionales relaciones de patronazgo de los caudillos (el abogado defensor del caso Hidrosil utilizó el prestigio ganado para liderar una nueva corriente en el Partido Colorado). Por el contrario, resaltó la importancia de la consecuencia en la unidad y la lucha en el campo popular.[101]

En síntesis, es fácil constatar la proliferación de cientos de conflictos urbanos que recorren América del Sur, conflictos que desde luego tienen diferente intensidad según las situaciones nacionales, pero que expresan en lo fundamental nuevas formas de acción y organización social urbanas. Correlativamente a estas múltiples y espasmódicas protestas callejeras, en el interior de las organizaciones y de los movimientos sociales, no sin conflicto, se producen cambios cotidianos en torno de la solución comunitaria de sus problemas específicos, recreando experiencias del pasado –muchas de ellas campesinas.

Así, protesta hacia afuera y solidaridad hacia adentro se constituyen en espacios de resistencia fragmentados pero comunes en las ciudades sudamericanas. Resistencias que, además, en ámbitos restringidos, permiten el encuentro y la comunicación de diversos y heterogéneos grupos humanos afectados por la crisis.

101 Idem.

C. Tierra, mercado, etnicidad y Estado[102]

Los campos de conflicto del campesinado son relativamente heterogéneos y están directamente relacionados con la profundidad y extensión de la Reforma Agraria aplicada en cada uno de los países estudiados.

Ciertamente influyen también otros factores, como los antecedentes históricos de organización y lucha, el carácter del sistema político y los procesos de diferenciación campesina, el nivel de desarrollo del mercado y el grado de penetración del capital en las agriculturas sudamericanas.[103]

En este marco, sólo el Estado y sus políticas agrarias constituyen los parámetros comunes de la acción campesina, el resto de las acciones es múltiple y dispersa; así, pues, varias prácticas se centran sobre el problema de la tierra o la explotación mercantil a la que están sometidos los mismos campesinos.

Sin embargo, a pesar de los diferentes campos y acciones, parecen ser comunes las orientaciones más o menos consistentes de demandas de organización autónoma y democratización nacional. Un hecho que resalta en la región es la reemergencia de movimientos campesinos con contenidos étnico-culturales que cuestionan no sólo las relaciones de explotación a las cuales están sometidos, sino también los procesos de degradación cultural y discriminación racial. De alguna manera, es factible pensar que tres tipos de orientaciones y combinaciones están presentes, real o potencialmente en la acción campesina: una orientación de reivindicación y organización clasista, otra de liberación y autonomía nacional y una última de autonomía cultural.[104]

102 El texto que sigue se base en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: Silvia Rivera Cusicanqui, María Conceiçao D'Inção, Gonzalo Tapia Soko y Gonzalo Vio Grossi, Isauro Suárez, Manuel Chiriboga, Ramón Fogel, E. Caballero Carrizoza, Diego E. Piñeiro, en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

103 Para un análisis reciente de las relaciones sociales campesinas y de la agricultura latinoamericana, véase E. Havens, "Transformaciones de la Agricultura: la acumulación de capital y el Estado", en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. 7, núm. 2, mayo-agosto 1984, y también los artículos de Leal, Dandler para Bolivia, Chiriboga para Ecuador en Vol. 7, núm. 3 de la misma revista; véase Crispi para Chile y Samaniego para el Perú, setiembre-diciembre de 1984.

104 Un análisis teórico-histórico de estos aspectos puede consultarse en Calderón-Dandler, *La fuerza histórica del campesinado*, Cap. 1.; véanse especialmente aspectos teóricos págs. 203-217 del artículo de Dandler

• El movimiento campesino boliviano tiene su expresión orgánica en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en Bolivia (CSUTCB). Esta fue el resultado de un largo proceso de luchas democráticas, de recuperación de identidades autóctonas y de constitución de formas organizativas autónomas, que lleva a cabo, desde fines de la década de los '60, sobre todo un grupo de aymaras denominados kataristas.

Esta larga lucha significó, como señala Rivera, "la incorporación superación del horizonte histórico de 1952".[105] Las acciones llevadas a cabo en estos 20 años incluían oposiciones contra los comerciantes intermediarios y el Estado, y sobre todo contra una estructura sindical campesina paraestatal, subordinada a los regímenes militares de turno. Es así como con el correr del tiempo, la Confederación logró articular en sus acciones orientaciones de democratización, de liberación nacional y de autoafirmación étnico-cultural, acciones que además incluyen un sistema de comunicación y lucha con la clase obrera y otros grupos sociales y políticos, y que culminó con la incorporación de la Confederación a la Central Obrera Boliviana (COB).

Ahora bien, si es cierto que no se puede comprender la actual democracia boliviana sin tener en cuenta la participación campesina y las metas de poder político a las que apuntaba, no es menos cierto que el mismo proceso democrático iniciado hace tres años desarrolló y generó nuevas oposiciones y conflictos entre el Estado y el movimiento, así como dentro del movimiento mismo. Estos conflictos le impiden convertirse, conjuntamente con otras fuerzas populares, en una alternativa de poder nacional.[106]

Dos fases permitirán entender la aseveración anterior. Primero, la de la crisis económica y su correlato político en la sociedad boliviana que, en relación con el campesinado, significó no sólo el deterioro de su nivel de vida sino una serie de conflictos con el

sobre el "Campesinado y Reforma Agraria en Cochabamba", Edit. UNRISD-CERES, Cochabamba, 1985. Véase también O. Ianni, Revolucão e Cultura, Ed. Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 1983.

105 Rivera Cusicanqui, Silvia, *El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática*, CERES, La Paz, 1985, trabajo mimeografiado. Véase también Rivera Cusicanqui, S., *Oprimidos pero no vencidos*, Hisbol-CSUTCB, Editorial Acuario, La Paz, 1984.

106 Rivera, Silvia, ob. cit.

Estado y los partidos gobernantes que limitaron su desarrollo. El campesinado articuló sus acciones en torno de demandas participativas en las más variadas esferas de las actividades económicas, políticas y culturales, demandas que culminaron en agosto de 1983 con la proposición del cogobierno COB-CSUTCB y UDP. Estas reivindicaciones fueron rechazadas, manipuladas o no procesadas por el Estado, que a su vez vivía una aguda crisis de gobernabilidad. Esta primera fase se caracterizó por la debilidad o ausencia de espacios de concertación social entre la sociedad y el Estado.

En una segunda fase, a raíz de la pérdida global del proyecto integrativo, comenzarán a generarse una serie de conflictos y oposiciones en la misma Confederación, sobre todo por conflictos entre un ala "clasista" (movimiento de campesinos de base) y otra "culturalista", los kataristas. También se desarrollará una serie de demandas fraccionadas y sectoriales de los campesinos por todo el país, que junto con otros conflictos –analizados par Rivera[107]– debilitaron y aislaron la acción de la Confederación.

La crisis política de la sociedad boliviana parecería responder a la debilidad y limitación de las actuales formas de representación estatal, partidaria y sindical; cada una de ellas posee rasgos monádicos y excluyentes, donde la articulación intrasocietal no será viable si no se promueve un cambio cualitativo en la interacción en y entre los actores del mismo movimiento campesino.

• En la actualidad, la agricultura colombiana vive una dura crisis en razón del receso de la actividad industrial y una disminución de los precios internacionales de los productos agrícolas de exportación, llegando incluso a tener que importar alimentos y materias primas para el mercado interno.[108]

Por otra parte, el grueso de la producción alimentaria colombiana se mantiene gracias a la pequeña y mediana producción agrícola. Este último sector es el más empobrecido y afectado por la crisis de la sociedad; apenas controla el 12% de la tierra

107 Idem.

108 Véase Suárez, Isauro, *Trayectoria y actualidad de las luchas agrarias en Colombia*, CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado, y Rojas, Fernando, en este mismo libro, *Los movimientos sociales frente a la crisis en Colombia*.

disponible y concentra un 83% de las exportaciones.[109]

Esta situación provocó una serie de movilizaciones por tomas de tierra a lo largo y ancho de toda Colombia para influenciar al Estado hacia una modificación del sistema de tenencia y de la Reforma Agraria.

Sin embargo, estas acciones y demandas campesinas se encuentran dispersas y atomizadas y no alcanzan a expresar un movimiento campesino nacional y unificado, fenómeno probablemente condicionado por el fracaso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUNC) en la década pasada y la política clientelista y coactiva del Estado.[110]

Tres son los procesos de organización campesina que parecen destacarse: por una parte, la del campesinado pobre (asalariados, pequeños y medianos propietarios) que a través de una serie de acciones espontáneas, dispersas y aisladas llevaron a cabio tomas de tierras en terrenos baldíos y en las de propietarios ausentistas, cuestionando el orden legislativo vigente. Probablemente, como afirma Isauro Suárez, en estos grupos "se retoman los más claros gérmenes de reorganización campesina autónoma frente al Estado y los partidos tradicionales".[111]

Por otra parte, el proletariado rural, en razón de la disminución de los salarios, la calidad de vida y el desempleo, intenta fuertemente el acceso a la tierra; sin embargo, estas demandas no coinciden con su capacidad organizativa, fenómeno probablemente relacionado con el fracaso de las experiencias de la década pasada y también con el status social disperso del sector, ya que un grupo puede ser asalariado, otro a medias, con fuerte relación con la producción parcelaria, y un tercero, temporalmente ligado a las empresas agrícolas.[112]

Finalmente, el movimiento campesino indígena arrastra consistente y coherentemente una serie de luchas por la recuperación de sus tierras que fueron punitivamente apropiadas por terratenientes. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), iniciado en 1971, es la organización de este grupo, que orienta sus acciones en torno de demandas clasistas y étnico-culturales, mediante una estructura democrática cohesionada.[113]

109 Suárez, Isauro, ídem, pág. 7.

110 Ibíd.

111 Ibíd.

112 Idem.

113 Idem.

En términos de futuro es probable que las orientaciones para transferir la tenencia de la tierra persistan e incluso pasen a organizar un proceso creciente de unificación del campesinado colombiano, en la medida en que se consoliden las organizaciones locales, interactúen regional y nacionalmente, y, concomitantemente, se produzca una ampliación del sistema político colombiano en su conjunto.

• La historia del campesinado en Chile siguió un proceso de diferenciación orientado a su constitución como actor social, privilegiando la lucha por "el reconocimiento social" por parte de la sociedad y del Estado.

La Reforma Agraria constituye el hito fundamental de su reconocimiento como sujeto social y político, aunque su accionar esté mediatizado fundamentalmente por los partidos políticos: situación que, por cierto, es revertida por el gobierno militar de 1973 que enfrenta al movimiento campesino a una nueva encrucijada.

Haciendo una retrospectiva del movimiento campesino podemos ver la fuerte influencia que tuvo la estructuración económica de la agricultura y su inserción en una clase económicamente poderosa a nivel nacional. También ha sido fundamental el origen y la composición del campesinado, que desde sus inicios amalgamó una rica experiencia sindical y política. Esta progresiva proletarización excluyó siempre al movimiento mapuche, que resume reivindicaciones étnicas y nacionales que van más allá del campesinado. Las demandas que inicialmente fueron reivindicativas tradicionales, cambiaron esencialmente luego de la Reforma Agraria asumiendo un carácter revolucionario en la medida en que se exigía la expropiación y tenencia de la tierra.

El nuevo régimen militar provocó una situación de quiebra en este Devenir político del movimiento campesino. Junto al fuerte cambio en las relaciones económicas derivadas de los productos de la tierra, se produjo en lo político una brutal represión y una vuelta atrás de la reforma agraria (devolviendo la tierra a sus antiguos dueños o a nuevos propietarios ligados a los intereses del gobierno). Se minimizaron drásticamente las organizaciones campesinas; los trabajadores rurales y los campesinos se vieron empujados a una situación de subproletarización y cesantía donde algunas acciones del gobierno, como el empleo mínimo, constituyeron el único sostén económico posible, generando cambios en la organización interna de los trabajadores del agro. Como consecuencia de este excesivo empobrecimiento

surgieron algunas iniciativas de organización y agrupamiento basadas principalmente en las necesidades de subsistencia de estos sectores marginados, limitándose a conservar un carácter estrictamente regional y de supervivencia y donde la posibilidad de empleo permanente constituye la reivindicación central.[114]

De todas formas, en este desolado panorama habría que destacar el hecho de que las Confederaciones Campesinas hayan logrado sobrevivir y tengan presencia en varias regiones del país. También consiguieron articularse con otros movimientos sociales. Otro hecho notable es la cada vez más importante significación que empezaron a tener las mujeres y los jóvenes en este tipo de movimientos, situación que proviene aparentemente de su inserción en el empleo mínimo y su derivación de manejo económico dentro de una familia en extremo pauperizada.[115]

La Reforma Agraria aún existe como reivindicación futura, obedeciendo más a principios de dignidad que a posibilidades de acción política inmediata.

• La crisis económica del Paraguay, que no tiene correlato con el sistema político dictatorial, afectó a la producción agropecuaria e incidió en el desempleo; este último fue particularmente acelerado por la desocupación de mano de obra que suscitó la terminación de la represa de Itaipú.

Este proyecto absorbió mano de obra rural, sobre todo de campesinos pobres de la pequeña producción agrícola que luego se vieron sin empleo, proceso que precondicionó la emergencia de tomas de tierras en áreas de colonización en Alto Paraná y Canindeyú, emergiendo así un movimiento campesino que se enfrentó al Estado y a empresas agrícolas transnacionales propietarias de las tierras, que en la mayoría de los casos eran de "engorde". Así, entre 1983 y setiembre de 1984 se produjeron 47 ocupaciones por parte de 8.568 familias. Lo nuevo de estas movilizaciones, al decir de Fogel,[116] estuvo dado por su intensidad, su carácter masivo y la creciente violencia implicada.

El Estado legitimó su represión, afirmando que los campesinos eran rebeldes empujados por la subversión comunista internacional,

114 Tapia Soko, Gonzalo, y Vio Grossi, Gonzalo, *El problema de la recomposición de los actores campesinos en una perspectiva redemocratizadora*, ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.

115 Idem.

116 Fogel, Ramón, *Las invasiones de tierras: una respuesta campesina a la crisis*, CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.

mientras que los campesinos legitimaban su acción a través de normas de la Constitución y de la reforma agraria paraguaya (la tierra es para quien la trabaja), reivindicándose a sí mismos como paraguayos pobres con derecho a la tierra. Así, la identidad campesina incluyó una identidad nacional sobre la base de la oposición frente al capital extranjero —sobre todo brasileño—; es decir, que se trata de una afirmación nacional desde el campesinado, referida a la apropiación extranjera de la tierra.[117]

En este sentido, no es aventurado afirmar que este tipo de acciones tal vez embrionarias en la sociedad paraguaya, cuestionan el orden social y las condiciones de dominación y dependencia. Sin embargo, una vez realizadas las tomas, la organización disminuye y no alcanza a concretarse, como en el caso de las ligas agrarias, en organismos de autogestión campesina. Probablemente esto esté determinado por la represión política y la prohibición explícita por parte del gobierno de la existencia de organizaciones sindicales; empero, en la medida en que el sistema político se vaya abriendo por éste y otros tipos de conflicto, es probable que se dé una recuperación de estas experiencias colectivas.

• Una de las características básicas de la crisis de la economía uruguaya radica en el largo estancamiento productivo del sector agropecuario, principalmente el ganadero, que es quien crea por excelencia los excedentes de la economía nacional; en este sentido, Piñeiro deduce que "es lógica entonces la explicación de que los conflictos sociales se desatan con mayor intensidad cuando los distintos sectores deben luchar por un comercio que no crece."[118]

Como quiera que sea, dado que la ganadería es la actividad económica más importante del país, su análisis y alternativas de transformación atañen al conjunto de la sociedad uruguaya, sobre todo en términos de modificar la forma de producción estanciera.

Tres son los componentes más importantes que configuran las relaciones sociales en la agricultura: los mismos estancieros, con una lógica de reproducir las relaciones tradicionales, los asalariados agrícolas, que no tienen ningu-

117 Idem.

118 Piñeiro, Diego E., *El plenario de pequeños y medianos productores; un intento de crear un movimiento de agricultores familiares*, CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.

na organización, y los agricultores familiares; estos últimos en un embrionario proceso de organización y acción colectiva, sobre todo en el período autoritario, que potencialmente los puede convertir en un sujeto de cambio social.

La posibilidad de que estos grupos se constituyan en un movimiento social está condicionada por su unidad de acción, pues son muchas y dispersas las organizaciones de pequeños y medianos productores rurales; recién en 1984, en medio del proceso de negociación para la transición a la democracia, comenzóia gestarse un movimiento unitario.[119]

Debido a la demanda de la multipartidaria que convocó a campesinos y a otras fuerzas sociales del país para proponer y discutir la concertación futura en el Uruguay, la Federación Rural y la Asociación Rural elaboraron documentos que evidenciaban su clásica posición liberal, posición que fue fuerte y rápidamente rechazada por la Asociación de Colonos del Uruguay y la Intergremial Lechera que convocaron al conjunto de los gremios de pequeños y medianos productores a partir de una política social más amplia de fuerte contenido democrático.[120]

Y si el conflicto estalló, no obstante, pasado algún tiempo, estas posiciones confrontadas se superaron temporalmente por el peso de la concertación política nacional, activada principalmente por la acción de los partidos políticos. En todo caso, es probable que el conflicto persista, se manifieste de múltiples maneras y potencie el desarrollo del movimiento.

La problemática de la discriminación étnico-cultural y las luchas y los movimientos relacionados con ella aparecen a menudo ligados a los temas y luchas del campesinado. Aunque son múltiples sus puntos de contacto, sobre todo cuando se trata de países cuya principal forma de producción y fuente de ingresos es agrícola y cuya población es fundamentalmente campesina y descendiente de grupos étnicos nativos, estas dos orientaciones no llegan a confundirse. Conviene complementar este panorama introduciendo algunos casos y aspectos de la problemática étnico-cultural en función de las respuestas colectivas de los grupos discriminados.

De los trabajos de los tres países que han estudiado específicamente movimientos étnicos en este programa[121] (Ecuador, Chile y Brasil)

119 Piñeiro, Diego, ob. cit.

120 Idem.

121 El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de los siguientes autores: Manuel Chiriboga, Cristian Vi-

surgen a la vez rasgos comunes y peculiaridades distintivas en las modalidades de sus luchas, reivindicaciones y estrategias, y en las características de sus escenarios.

En efecto, en dos de ellos (Ecuador y Chile) se trata de contextos fundamentalmente rurales y las luchas étnicas; sobre todo en Ecuador, aparecen íntimamente ligadas a la problemática campesina, si bien el movimiento étnico no se confunde, sino que se yuxtapone y se combina con el movimiento campesino.[122]

En Chile, aunque los medios de vida de la comunidad india provienen fundamentalmente de sus actividades agrícolas, no se puede decir que movimiento étnico y movimiento campesino se homologuen, ya que la importancia numérica de los grupos étnicos dentro del campesinado no es tan relevante como en Ecuador, Bolivia o Perú, sino que forman más bien un "pueblo minoritario en el interior de la nación chilena".[123] Por otra parte, la campesinización de la comunidad india fue reciente y prácticamente forzada. "…La compulsión legal a 'reducirse' a espacios físicos concretos y delimitados de terreno, que se inició el siglo pasado en Chile, obligó al mapuche a transformarse en agricultor. A partir de la 'pacificación' de la Araucanía, al mapuche se le campesiniza a la fuerza, siendo así hoy día principalmente un campesino, un productor agrícola directo…".[124]

Para el mapuche, la tierra no ha sido tradicionalmente un bien de cambio, sino un bien de uso, ya que en épocas anteriores a la colonización no existía la propiedad individual de la tierra; el trabajo se encaraba más bien como un trabajo comunitario, donde instituciones de colaboración mutua (mingaco, keluwn, vuelta de mano, etcétera) eran las formas habituales de la organización del trabajo.

En Brasil, en cambio,[125] el movimiento negro, que data de la década del treinta, fue eminentemente urbano. Con etapas de auge y de reflujo, tuvo en un principio (1931-1945) una

ves y Joel Rufino dos Santos, realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

122 Véase, Chiriboga, Manuel, *Crisis económica y movimiento campesino e indígena*, CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.

123 Vives, Cristián, *El pueblo mapuche: elementos para comprenderlo como movimiento social*, ILET, Santiago, 1985, pág. 2, trabajo mimeografiado.

124 Vives, Cristián, ídem, pág. 3.

125 Véase Rufino dos Santos, Joel, *O movimento negro e a crise brasileira*, FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.

estrategia integracionista que apuntaba a ganar para la población negra urbana un lugar en la sociedad, sin cuestionarla. En tiempos del populismo, hubo lugar para la utopía de la democracia racial y recién en la década del setenta, una vez muerto el sueño del "milagro brasilero" y sus posibilidades de movilidad social para los negros, el movimiento negro comenzó a cuestionar a la sociedad global y a sus paradigmas de desarrollo; empezó a cobrar cuerpo una ideología más radicalizada, influida en parte por el movimiento negro norteamericano.[126] La población negra, predominantemente urbana, comparte y se entremezcla con la cultura ciudadana, haciendo sus propios aportes: música, religión, ritos, danza, etcétera y se manifiesta en gran número de expresiones como: terreiros de candomblé (religiosas), clubes de negros (recreativas), Grupo de Danza Afro (artísticas), centros de investigación y políticos (como el MNU), acciones de movilización política, de protesta, acciones de masa, etcétera. Dentro del movimiento existe cierto policlasismo que va desde la clase baja hasta la clase media alta, intelectuales, etcétera, cosa que difícilmente ocurre en las comunidades étnicas indias en Ecuador, Chile, y otros países.

No obstante las evidentes diferencias, hay elementos en común que asemejan a los diferentes movimientos étnicos estudiados. Su interlocutor es siempre el Estado, y su problemática intenta ser definida por los actores como una *problemática nacional*, de integración e interés nacionales. En efecto, en sus etapas "nacionalistas" o "populistas", los diferentes movimientos étnicos sudamericanos han vivido la promesa de la democracia participativa, de la inclusión de su comunidad racial en el nivel nacional, de plena e igualitaria participación con inclusión expresa de sus problemáticas sectoriales en los temas nacionales. Pero en casi todos los casos esta promesa no se cumplió.

En lugar de la deseada integración hubo asimilación y las consignas y plataformas se usaron como formas de captación masiva de votos en etapas preelectorales, o para obtener consenso político. Más que intentos serios de modificar tendencias racistas y marginadoras seculares hubo formas de instrumentalización de la voluntad de los movimientos étnicos.

Los diferentes movimientos étnicos sudamericanos se caracterizan también por una pendularidad en sus estrategias que van des-

126 Idem.

de el abroquelamiento y sectarismo defensivo, cerrado a los posibles pactos y acuerdos con otros actores populares, hasta una politización radicalizada que a menudo se basa en consignas heterónomas al movimiento mismo. Los movimientos indios, ligados al campesinado, tienden a radicalizarse acompañando al movimiento campesino. El movimiento negro ha tomado consignas de los movimientos negros de otros países (por ejemplo EE.UU.) y su intelectualidad de izquierda manifiesta cierto teleologismo o finalismo que coloca en la cúspide la utopía de un movimiento negro politizado, radicalizado y clasista, que tenga una expresión político-partidaria monolítica. No obstante, entre ambos polos surgieron intentos de pactos y acuerdos con otros sectores, como en Ecuador, con organizaciones sindicales, y en Brasil, con los partidos políticos.

Como ya señalamos, existe una tensión entre autodefinirse como movimiento de clase o bien como movimiento étnico cultural, que es común a todos los movimientos étnicos examinados. En Chile, por ejemplo, la organización AD-MAPU se expide en noviembre de 1982 por una forma de organización escindida y diferenciada del resto del campesinado (no mapuche), y al año siguiente, luego de un cambio de directorio la Asamblea Nacional del organismo, declara que "…nuestra lucha está directamente ligada a los intereses de los trabajadores y de la inmensa mayoría del pueblo chileno en general…"[127]

En cuanto a la crisis, ésta ha profundizado la atomización de los diferentes movimientos étnicos al generar demandas cada vez más heterogéneas.

La historia de la lucha de los movimientos étnicos registra en todos los casos una discusión a nivel de la legislación nacional de temas como la propiedad de la tierra, la preservación de la comunidad, y de sus formas y estilos tradicionales de producción y organización, de su acceso pleno a los derechos de ciudadanía, etcétera. Vale decir que el Estado ha sido el adversario e interlocutor por excelencia, y que la lucha se dio en un terreno político y cultural, el de los mecanismos ideológicos discriminatorios de la cultura dominante, que se traducen muchas veces en leyes velada o abiertamente marginadoras.

El intento de los movimientos étnicos apunta a mostrar y a difundir ideológicamente que la cuestión étnica no es una problemática "de minoría", sino que ésta es constitutiva de la na-

127 Vives, C., ob. cit., pág. 38.

cionalidad y de la ciudadanía mismas. Es una problemática nacional que debe plantearse en el campo de toda la sociedad nacional.

Retomando algunos aspectos generales de la temática analizada en este capítulo, podemos señalar, por una parte, que la tierra, el mercado y la organización campesina constituyen las demandas mínimas del mundo agrario. Pero también emergen intereses y orientaciones del campesinado que apuntan a incidir en espacios nacionales y políticos más amplios, conjugando a la vez orientaciones clasistas, nacionales y culturales. Dos hechos coexisten en la región: la presencia de fuertes y organizadas confederaciones nacionales de campesinos con características autónomas pero capaces de establecer compromisos con otras fuerzas sociales, compromisos a veces lábiles e insuficientes para constituir proyectos nacionales compartidos; por otra parte, organizaciones sociales campesinas atomizadas en sindicatos locales que aún persiguen de alguna manera procesos de unidad nacional. Un hecho que se destaca en la última década es la presencia en varios países de la región de organizaciones campesinas que van más allá de sus demandas clasistas y que a un mismo tiempo se estructuran en el rechazo a prácticas discriminatorias raciales, revalorizando a través de su memoria histórica prácticas vernaculares, para finalmente tratar de proyectarse como fuerzas culturales alternativas en las sociedades capitalistas-criollo-mestizas.

Por otra parte, se destacan en las prácticas analizadas las demandas étnico-culturales, por una incorporación ciudadana y nacional a partir del reconocimiento de la identidad de los grupos discriminados; no obstante, esta observación quedaría inconclusa si no se señalara que varios de los movimientos estudiados en este texto incluyen tensiones y demandas internas de carácter étnico-cultural que probablemente constituyan elementos explicativos e importantes de la acción colectiva analizada, elementos que hasta el momento han sido poco estudiados.

D. LA LIBERTAD, EL GÉNERO Y LA CULTURA[128]

Los movimientos de derechos humanos apelan, como principio aglutinador de su práctica

128 Los textos que utilizamos para realizar esta síntesis son los siguientes:

• *Derechos Humanos:* Sondereguer, María, *El movimiento de Derechos Humanos en Argentina (1976-1983)*, CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.

política, a un sistema de valores fundamentales: la vida, la verdad, la justicia, planteando exigencias éticas de fundamentos humanitarios.[129] En principio, en etapas de dictadura y de autoritarismo de Estado han sido intentos defensivos ante situaciones de agresión a los derechos humanos elementales.

Aunque su lógica es defensiva, su potencialidad reside en la capacidad de desnudar, desde una ética fundamentalista, la lógica de la dominación. Así, a partir de una estrategia defensiva se va estructurando lentamente en la sociedad un consenso social sumamente amplio y capaz de convocar a sectores muy amplios y heterogéneos que cuestiona y descalifica la legalidad de la dominación dictatorial. Pero se trata en principio de prácticas *expresivas*, no instrumentales, que necesitan mantenerse equidistantes de todas las mediaciones políticas partidarias para poder seguir generando un amplio consenso.[130]

Esta representatividad responde en parte a la existencia de un "vacío político" que frente a la desmovilización popular genera una utopía profundamente movilizadora y con un fuerte potencial democratizador. En efecto, en buena parte de la región los movimientos de derechos humanos fueron (y son, en Chile y Paraguay) la

• *De Género:* Feijóo, María del Carmen, y Gogna, Mónica, *Las mujeres en la transición a la democracia*, CEDES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.
Saffloti, Heileth, y Ferrante, Vera, Formas de participação da mulher em movimentos sociais, FESP, San Pablo, 1985, trabajo mimeografiado.
Escobar, Cristina, *Movimientos de mujeres*, CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.
Prieto, Mercedes, *Notas sobre el movimiento de mujeres en el Ecuador*, CERLAC, Quito, 1985, trabajo mimeografiado.
Corvalán, Graziella, *La acción colectiva de las mujeres urbanas en el Paraguay*, CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.
Prates, Suzana, y Rodríguez V., Silvia, *Los movimientos sociales de mujeres en la transición a la democracia*, CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.
• *De cultura juvenil:* Vila, Pablo, *El movimiento de rock nacional: crónicas de la resistencia juvenil*, CE DES, Buenos Aires, 1985, trabajo mimeografiado.
Valenzuela, Eduardo, *Los jóvenes y la crisis de modernización*, ILET, Santiago, 1985, trabajo mimeografiado.
Rodríguez, Ernesto, *La juventud como movimiento social. Elementos para el estudio del caso uruguayo*, CIESU, Montevideo, 1985, trabajo mimeografiado.
Laterza Rivarola, Gustavo, *El movimiento estudiantil independiente en el Paraguay (1960-1984)*, CPES, Asunción, 1985, trabajo mimeografiado.

129 Sondereguer, María, ob. cit., pág. 1.

130 Idem, pág. 2.

brecha por la cual comenzó a renacer el movimiento popular, recuperando la *memoria histórica de las luchas populares*, en la medida en que frente a un discurso dictatorial aniquilador de lo político supieron generar una revalorización de aquellos valores de lucha que suele enarbolar la juventud: el proyecto de liberación y transformación social que los padres y familiares de los presos, perseguidos y desaparecidos asumen, en buena medida, sin declinar en ningún momento.[131]

Los derechos humanos surgen junto con una revalorización de la democracia como construcción, no ya como algo dado y preexistente. Todos aquellos valores que eran obvios y que conformaban algo así como un conjunto mínimo de normas éticas que se daban por sentadas y más allá de las cuales se dirimían las luchas políticas y sociales, tuvieron que ser reconstruidos, replanteados y revalorizados a partir de la experiencia de su violación sistemática por los gobiernos dictatoriales.

Así, aquellos valores (la democracia política, el respeto a las garantías constitucionales, el respeto a la vida humana, etcétera) que en la Argentina de los años '60 carecían por completo de valor como demanda o consigna política para amplios sectores de la población juvenil y politizada, en los '80 fueron los únicos recursos capaces de abrir una brecha en el oscurísimo panorama social y político nacional, capaces de aglutinar a las diferentes capas de la sociedad, más allá de las múltiples identidades políticas.

La problemática de los derechos humanos comienza a sentirse ya no como un drama particular, circunscrito meramente a las familias de los desaparecidos y detenidos, sino que gana legitimidad como problema de la comunidad nacional toda y es allí donde reside su potencialidad como movimiento social.[132]

En contraste con sus comienzos, signados por el aislamiento, la indefensión y la soledad política, los movimientos de Derechos Humanos comenzaron a aglutinar adhesiones de organismos internacionales, de instituciones como la Iglesia Católica y, paulatinamente, de los partidos políticos y los movimientos sociales. Así fue posible generar espacios relativamente protegidos que permitieron una mayor participación y movilización popular capaces de enfrentar a la represión.[133]

131 Idem, pág. 3.

132 Idem, pág. 16.

133 Idem, pág. 20.

Pero, ¿cuáles son los potenciales democratizadores de estos movimientos, y cuál será su papel en la próxima etapa democrática, una vez que el adversario más visible, el Estado autoritario-militar, cedió paso al gobierno democrático?

En esta instancia el movimiento de Derechos Humanos probablemente intentará redefinir sus relaciones con la sociedad civil, el sistema político y el Estado. Tratará de exigir, de esta democracia en construcción, contenidos explícitos mucho más profundos que los que *per se* promete una democracia parlamentaria. Toda esta experiencia popular, todo aquel sufrimiento y martirologio de los actores populares habría servido entonces para profundizar los significados de la democracia y para constituirse en principio unificador y fundador de un nuevo Estado democrático a partir de una revalorización de la democracia, ya no solamente como sistema formal, sino como construcción sustancial, llena de sentido y que necesita de la participación, de la profundización y aun de la defensa permanente de los valores de vida y de paz, frente a las continuas tensiones y luchas a las que está sometida. Se trataría de un retomo y vuelta a partir del origen ético del concepto de democracia, más todos los contenidos rescatados de la memoria histórica popular.

No obstante, los movimientos de derechos humanos dejaron pendiente su formulación positiva, concreta –ya no sólo fundamentalista y ética– de un proyecto político posible.[134]

• La acción colectiva más elevada entre los movimientos de Derechos Humanos y aun del conjunto de movimientos sociales de la Argentina fue el Movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Este movimiento jugó un papel vital en la descomposición del autoritarismo y actualmente juega un rol central en la construcción de los valores de la democracia argentina.

El Movimiento de las Madres, a diferencia del resto de los movimientos sociales, no plantea metas de poder; por el contrario, su fuerza simbólica reside en el cuestionamiento, desde una lógica de fines últimos, a la lógica del poder vigente en el país. Sus fines consisten en lograr el retorno con vida de los hijos desaparecidos, o bien el castigo para los culpables de acuerdo con la ley y la justicia. Esta demanda cuestiona la razón de Estado y en alguna medida la política; respecto de lo primero, por absolutizar una responsabilidad moral, y respecto de lo segundo porque no se cumpliría la exigencia de

134 Idem, pág. 25.

evaluar la posibilidad de realizar los fines y de ponderar las fuerzas que poseen los intereses en juego.

Como sea, esta impugnación trágica y justa, más allá de su realización, es la que le da cohesión y fuerza moral al movimiento, para juzgar y criticar a la sociedad en su conjunto.[135]

El género[136]

• En la problemática de los movimientos de género en América del Sur, cabe hacer una diferencia entre aquellos movimientos protagonizados principalmente por mujeres, pero que se estructuran alrededor de demandas muy diversas como los derechos humanos, la calidad de vida, el consumo, la vivienda, la salud, etcétera, que podemos llamar movimientos "femeninos", y aquellos otros que levantan consignas que se refieren a la problemática específica de la mujer, que llamaremos "feministas".[137] Esta distinción es analítica, porque frecuentemente ambas dimensiones se complementan y entremezclan dentro de una misma agrupación femenina.

Los primeros parecen ser una extensión activa, parcialmente politizada en el sentido más amplio de lo político, del ámbito de lo doméstico y del papel central que juegan las mujeres en las múltiples actividades reproductivas demandadas para el mantenimiento social. En etapas de cierre de los canales políticos lo social se politiza; las demandas sociales adquieren potencialidades cada vez más cuestionadoras del orden político. Son formas de participación ancladas en los "roles tradicionales" femeninos, pero que al extenderse toman inusitadas connotaciones capaces de cuestionar el orden global. En sus prácticas muestran una capacidad de democracia y participación internas que no son usuales en otras formas de organización política, tales como los partidos, los sindicatos, etcétera. Un pluralismo abierto, un apoliticismo explícito que intenta preservarse de toda heteronomía, son rasgos comunes de estos movimientos femeninos.

En ellos se lucha por derechos relativos a la familia, los niños, los hombres y las mujeres de los sectores populares: derechos al consumo, derechos de ciudadanos, derechos a la salud y a la vivienda. Surgen en gran par-

135 Para un análisis teórico de los derechos humanos y la democracia en América Latina, véase Ansaldi, Waldo (comp.), *La ética de la democracia*, CLACSO, Buenos Aires, 1985.

136 Véanse trabajos de Gogna, M., y Feijóo, M. del C.; Saffioti, H., y Ferrante, V.; Escobar, C.; Prieto, M.; Corvalán, G.; Prates, S., y Rodríguez, S., ob. cit. cita 131.

137 Idem.

te como respuesta a la crisis, al subconsumo, al desempleo, y son protagonizados por mujeres de extracción fundamentalmente popular, aunque muchas veces ostenten un amplio policlasismo.[138]

Las segundas, las luchas femeninas que encaran el problema de la mujer, no responden puntualmente a la crisis sino que pueden rastrearse desde el siglo pasado y principios de éste, desde aquellas primeras sufragistas cuya lucha era obtener para las mujeres una participación plena en los derechos de ciudadanía y que continúan ininterrumpidamente, pero con flujos y reflujos, hasta las actuales organizaciones feministas que reivindican el derecho sobre el mismo cuerpo (anticoncepción, aborto, maternidad voluntaria), la igualdad de oportunidades y de remuneraciones, y que cada vez más hacen de la cultura su campo de lucha privilegiado.

En general, por el nivel de abstracción de sus demandas, éstas no surgen directamente de situaciones puntuales de crisis, sino que son demandas permeadas culturalmente a nivel internacional, demandas que históricamente fluyeron de los países desarrollados a los subdesarrollados y desde las clases altas y medias hacia las clases bajas. Cada vez más, sus reivindicaciones encuentran eco en las mujeres de los sectores populares y muchas veces organizaciones "femeninas" evolucionan hacia reivindicaciones "feministas".

Siendo su campo de batalla principal la cultura y la ideología, los movimientos feministas contienen la potencialidad de cuestionar el orden social de una manera global, orden definido muchas veces por ellas como el binomio modo de producción capitalista/patriarcado, cuyos términos son mutuamente interdependientes y se refuerzan. Por ello, al cuestionar las prácticas y tendencias paternalistas en la sociedad, el feminismo ha encontrado un cuño capaz de profundizar en las fisuras del orden social y político existente.[139]

Los movimientos etarios

Una de las características comunes de varias de las sociedades latinoamericanas es la alta correspondencia entre las relaciones de poder y las estructuras etarias de la población, donde ingentes masas de jóvenes ven limitadas sus posibilidades de acceso al poder y la au-

138 Idem.

139 Idem.

toridad, al prestigio, a los beneficios económicos y al reconocimiento societal, en suma, a la participación social. Esta tendencia se ha visto particularmente reforzada bajo regímenes dictatoriales, cuyas políticas no sólo suprimen los derechos ciudadanos de la juventud, sino que han hecho de ésta su víctima privilegiada. Lo joven solamente es valorizado cuando rinde tributo al orden y al poder.[140]

Por otra parte, los comportamientos juveniles se hacen comprensibles en su referencia a las dimensiones simbólicas de la vida social. De alguna manera, la juventud se caracteriza por su tendencia hacia orientaciones fundamentalistas con arreglo a valores, de orden más cultural que económico.

En Chile, por ejemplo [141] el autoritarismo neoliberal ejercido sobre la juventud produjo el efecto contrario: dispersión y no disciplinamiento social. Los jóvenes aparecen fuera de las jerarquías y de los mecanismos institucionales de control social. Exclusión y atomización en el plano de las relaciones sociales (los jóvenes están usualmente fuera de las instituciones sociales y participan dentro de espacios normativamente poco estructurados, de escasa solidaridad y comunicación colectiva), y extrañamiento y desintegración cultural en el nivel de las orientaciones culturales (escasa identificación con las metas culturales del Estado y la sociedad, y poca capacidad de comunicación y creación cultural propia), son características innegables del divorcio existente entre los jóvenes y las instituciones sociales.

De esta manera, el mundo de los jóvenes queda conformado como un espacio de conductas desorganizadas y de crisis de identidad, donde la acción se propone reproducir aquellas conductas que la modernización quiso desterrar: las orientaciones hacia el placer inmediato, el refugio comunitario, la agresión anómica y la reaparición de mitos sacrificiales (el allendismo) como principio de identidad colectiva, en un intento de refutar la lógica del mercado como principio de integración social y de identidad cultural.[142]

• En Uruguay, el autoritarismo militar y la experiencia monetarista crearon, por reacción, las condiciones para un incipiente de-

140 Vila, Pablo, ob. cit.

141 Valenzuela, E., ob. cit.

142 Idem., ob. cit.

sarrollo de movimientos sociales, entre ellos el juvenil.[143]

Sin embargo, a diferencia de lo ya mencionado para Chile y de lo que veremos más adelante al tratar a Paraguay y Argentina, se afianzan formas ya probadas de canalización de la oposición juvenil (movimiento estudiantil, sindical y político) en lugar de surgir nuevas propuestas y formas de acción. Sólo el movimiento juvenil cooperativo adquirió alguna gravitación durante la etapa de la dictadura y fue capaz de mantener instancias de encuentro y socialización autónomas.

• En Paraguay, por el contrario, el Movimiento Estudiantil Independiente (MEI) adquiere relevancia política en el sector estudiantil a partir de la constatación de la consolidación de la dictadura de Stroessner, que conlleva correlativamente la disgregación y debilidad progresiva del único partido con suficiente caudal popular como para representar una alternativa. Esta alternativa de lucha contra el sistema totalitario a partir de un movimiento no vinculado a partidos políticos (novedad absoluta para la juventud paraguaya) fue una respuesta a la situación precaria de las principales fuerzas de oposición. Las propuestas del MEI abarcan tanto aspectos de política nacional (lucha contra la injusticia social y económica, exigencia de implementar una política de desarrollo nacional, promoción para la creación de un ordenamiento político participativo, etcétera) como reivindicativa estudiantil y, en ambos casos, ubican al Estado como a su contradictor. Esto le vale ser considerado, por parte del gobierno, como un sector más fuera del control oficial y, consecuentemente, es hostigado en el mismo nivel que los demás movimientos sociales no oficialistas.

Por otra parte y tal como ocurre en Chile y Argentina, los miembros del MEI entienden su organización como un sistema en el que las relaciones afectivas de sus integrantes predominan sobre el régimen de normalización y disciplina.[144]

• Por último, el proyecto político autoritario inaugurado en Argentina en 1976 intentó redefinir la identidad de los actores colectivos tradicionales, imponer la lógica articuladora del mercado y accionar represivamente sobre

143 Rodríguez, E., ob. cit.

144 Laterna, Rivarola, G., ob. cit.

el estrato juvenil a partir de la estigmatización del "joven sospechoso". En este contexto, amplios sectores de la juventud conformaron como ámbito de sostén de su identidad un movimiento cultural, el "rock nacional", que pasó a convertirse (ante la desaparición del movimiento estudiantil y de las juventudes políticas) en el principal ámbito de constitución del "nosotros".[145] Es en los innumerables recitales masivos de la época donde el movimiento se festeja a sí mismo y corrobora la presencia del actor colectivo cuestionado.

De esta manera, los recitales aparecen como rituales a partir de los cuales se constituye una colectividad y son también ámbito privilegiado de comunicación entre los jóvenes. Más adelante, pasada la etapa inicial, defensiva, el movimiento se convierte en uno de los principales contradictores del Proceso, a través de las letras y temáticas de las canciones, y de la conducta del público en los recitales.

Por lo tanto, se puede sostener que el movimiento de "rock nacional" desempeñó un papel sumamente importante en la socialización y resocialización de amplios sectores de la juventud argentina durante la dictadura militar, restaurando la comunicación e información veraces acerca del país real, rescatando el sentido de la vida de un contexto de terror y consolidando a un actor colectivo como forma de contrarrestar un modelo de vida individualista, contraponiendo la acción solidaria a la primacía del mercado y a un proyecto de transformación global de los actores colectivos, etcétera.

El contenido altamente contestatario de las canciones, la actitud frontalmente cuestionadora de los asistentes y el encuentro en recintos comunes para expresar su oposición al régimen militar fueron algunas de las características que hacen de este movimiento juvenil una de las pocas alternativas contestatarias en un régimen política y socialmente cerrado.[146]

Los movimientos juveniles latinoamericanos con origen en fenómenos estructurales e históricos similares –reflejo de la situación transicional que compete al joven en toda sociedad– tienen, sin embargo, características nacionales bien diferenciadas.

No obstante, expresiones tan disímiles como "Morir, luchando, de hambre ni cagando" (coreada por los jóvenes chilenos más radicalizados y que es un buen símbolo de la

145 Vila, Pablo, ob. cit.

146 Vila, Pablo, ob. cit.

dimensión sacrificial del allendismo)[147] y "… el MEI es político pero no partidista ni sectario porque intervendrá en toda política que afecte a la Nación, sin entrometerse en las destructivas rivalidades de partido" (parte de un "ideario" del MEI paraguayo) o "Mi arma es la paz, mi partido es el rock y mi eterno fin es el amor" (escrita por un rockero argentino en su mochila),[148] son ejemplificadoras de movimientos sociales que indudablemente fueron, para amplios sectores juveniles, refugio, ámbito de resistencia y canal de participación en el contexto de una sociedad autoritaria, cerrada y en crisis.

E. La guerra y la política [149]

Los movimientos de acción revolucionaria se caracterizan por su lucha contra el Estado y el sistema de dominación dependiente mediante la acción violenta. Allí, el campo del conflicto coincide con el campo de batalla; esto conlleva complejas connotaciones sociológicas.

Nadie puede negar la presencia de este tipo de acción en la historia de América Latina; sus orientaciones fueron muy variadas: republicanos, nacionalistas, socialistas, anarquistas y bandidismo social; sus formas de lucha han sido, entre otras, montoneras, republiquetas, guerrillas rurales, guerrillas urbanas y guerras de liberación nacional.

El problema consiste en detectar los distintos sentidos sociológicos de esta acción política y su viabilidad societal en los distintos contextos nacionales y regionales, puesto que varias veces lograron transformaciones sociales y otras, las más, la consolidación o reemergencia de sistemas políticos altamente despóticos. Sin embargo, de alguna manera se autodefinen como los sujetos del cambio, que arrastran tras de sí al resto de la sociedad, monopolizando el Estado y la política.[150]

• En el caso de la guerrilla colombiana, ésta puede comprenderse en el marco de cierta tradición política y social de violencia nacional.

147 Valenzuela, E., ob. cit.

148 Vila, Pablo, ob. cit.

149 El texto que sigue se basa en síntesis de los trabajos de Naranjo, Gilberto, y Degregori, Carlos I., realizados en el marco del proyecto "Los movimientos sociales ante la crisis en Sudamérica", UNU-CLACSO, 1985.

150 Véase Touraine, *La voix et le regard*, ob. cit., pág. 119-124. Hobsbawn, *Bandidos*, Ariel, 1976, en especial capítulos I y VII. Para una discusión teórica de la relación entre acciones políticas violentas izquierdistas y totalitarismo, véase F. Furet y col., *Terrorisme et democracie*, Fondation Saint-Simon, Fayard, París, 1985.

Como referencia general, se puede apuntar la década que va de 1947 a 1957, que culminó con el pacto entre conservadores y liberales. Más adelante, en los años '60 se instauró la guerrilla inspirada en el modelo foquista cubano, luego de la guerra popular de orientación china y, más recientemente, de la acción guerrillera urbana en el marco de las luchas de liberación nacional. Actualmente, en razón de la llamada tregua o pacificación nacional, este tipo de acción gira en torno de la búsqueda de frentes populares más amplios, lo que le da especificidad propia a este tipo de movimiento.

Dos hechos condicionaron su orientación: por una parte, la búsqueda del gobierno y el liderato de Betancur, de nuevas formas de unidad y reconciliación nacional, con el fin de relegitimar las instituciones democráticas y de disminuir la polarización cada vez más crítica del conflicto social, por otra, la demanda por parte de la sociedad y de los grupos populares de pacificación y participación en el sistema político. De todas maneras es indudable que el Estado reconoció en la guerrilla un hecho político de singular importancia y, en este sentido, tal vez formalizó el rompimiento del bipartidismo Conservador-Liberal.[151]

151 Nzranjo, Gilberto, *El movimiento guerrillero*, CINEP, Bogotá, 1985, trabajo mimeografiado.

La guerrilla buscó legitimar su existencia en el sistema político nacional; probablemente, una de las variantes virtuales que está en juego detrás de este conflicto y de esta tregua sea la entrada o no en la escena política formal de la misma sociedad colombiana.

El movimiento guerrillero se incorporará al sistema político nacional y acompañará un proceso de democratización, con toda la gama de problemas que ello implica, o retornará a la acción violenta. Esto depende lógicamente de varias fuerzas como el Estado, las clases dirigentes y las mismas opciones guerrilleras que hoy debaten estas alternativas; lo contrario será la reemergencia de la violencia y, probablemente, de la llamada "guerra sucia".

• La guerrilla de Sendero Luminoso en el Perú es tal vez uno de los movimientos revolucionarios más complejos en la historia de América Latina, pues guarda relación no sólo con las luchas de liberación nacional, sino muy especialmente con estructuras socio-culturales de origen colonial y, a la vez, es un movimiento cuya voz se expresa única y exclusivamente por la acción violenta; de allí que comprender sus significados y significantes resulta extremadamente difícil. Sin embargo, después de los trabajos de Degre-

gori y Fabré [152] entre otros, y varias conversaciones y discusiones, es posible hipotetizar varios aspectos.

Hay dos lecturas interdependientes de la evolución de Sendero. Primero, la historia particular de un grupo de líderes intelectuales y estudiantiles, sobre todo de provincia, inspirados en el pensamiento maoísta y que después de múltiples fraccionamientos y conflictos culmina en el grupo dirigente de Sendero. Segundo, las características socioculturales e históricas de la formación de la nación peruana, y más particularmente del mundo andino o del Perú profundo, como diría Arguedas.

Este grupo guerrillero tiene como epicentro de actuación a la provincia de Ayacucho, una de las regiones siempre más pobres e históricamente más conflictivas del Perú;[153] pero esto no niega su impacto en varios nichos de pobreza andina a lo largo y a lo ancho del país. Así, Sendero Luminoso se yuxtapone y se hace eco de una serie de demandas regionales, sociales, étnicas y nacionales, iniciando su acción de influencia y reclutamiento, primero en la Universidad, luego entre la Federación de maestros y barrios pobres de Ayacucho, y posteriormente en comunidades campesinas de Puna y Valle. La articulación de éstas y otras áreas de demandas y conflictos es poco conocida, pero progresivamente van marcando un amplio espectro de múltiples oposiciones: contra el mercado y el dinero, contra el Estado y la democracia, contra el imperialismo norteamericano y ruso, contra la izquierda tradicional, contra grupos y personas que detentan los poderes locales o comunitarios, y contra los valores comunitarios tradicionales; en definitiva, contra todo aquello que se les opone o no se les subordina.

Todo esto es expresado a través de un discurso mesiánico, internamente muy cohesionador y externamente absolutista, donde los fines últimos subordinan a los medios que cada vez más se organizarían en torno de acciones punitivas y violentas: de alguna manera, aspiran a capturar al Perú. Obviamente, esta acción en sí no se explicaría si no es en relación con la reacción del Estado y el ejército, es decir, con la lógica de la guerra sucia.[154]

Pero esta lógica donde "nadie y todos son culpables" produce una serie de efectos socio-

152 Degregori, Carlos I., ob. cit.; H. Fabré, *Sendrier Lumineux*, *Horizons obscurs*, R. Dokleus A. Latine, París, 1984.

153 Degregori, Carlos I., ídem.

154 Idem.

lógicamente perversos, ya no sólo en lo relativo a los derechos humanos en sentido extricto, sino a las mismas dinámicas sociales, como, por ejemplo, la revitalización de rivalidades comunales e intracomunitarias, el fraccionamiento y los conflictos familiares, y el retraimiento comunitario frente a la sociedad nacional.[155]

En términos de efectos sobre la política, la acción senderista, tal vez a diferencia de la guerrilla colombiana, cierra el espacio de la política pues considera al adversario como un enemigo al que hay que aniquilar, acción coincidente con las fuerzas regresivas que cierran el círculo de la guerra y que crecientemente involucran o pretenden involucrar obligatoriamente a toda la sociedad en un campo de batalla donde sólo existen amigos y enemigos, y que tienen además el efecto perverso de generar confusión entre los actores sociales.

Probablemente el grito de Sendero no sólo expresa la lógica del terror, sino más bien la tragedia de la pobreza que no sólo afecta a la sociedad sino, por sobre todo, a la vida, y cuyos efectos y causas todavía estamos lejos de entender, pero que de seguro nos obligarán a ver y a soñar nuestra sociedades de diferente manera.

155 Idem.

Porque ocurre que la guerra como instrumento político, aun cuando se trate de una guerra de liberación, una guerra de los oprimidos contra los opresores, carga de violencia hasta las relaciones más cotidianas, lleva a una serie infinita de mutuas represalias cuyo poder destructivo sólo puede ser evaluado por la historia, pero indudablemente subvierte y pone en cuestión a toda una cultura. "…decir basta a la guerra, esto es, rechazar la agresividad allí donde se manifiesta, en sus consecuencias más mortíferas, constituye una buena salida para la superación de una lógica que cree poder resolver los problemas de la vida con la muerte…"[156]

IV. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ANTE LA CRISIS

Las tendencias que hemos encontrado en los diferentes campos de conflicto nos permiten realizar una primera elaboración hipotética explicativa sobre las características y el curso de los movimientos sociales en formación, principalmente en relación con la dinámica de la crisis.

156 Ravaioli, C., *Il quanto e il quale, la cultura del mutamento*, Ed. Laterza, Roma, 1982, pág. 179.

En primer lugar, la crisis y los conflictos estudiados pueden ser leídos en clave teórica. Parecería que la crisis encontró en los países desarrollados tendencias de resolución en el sentido de la reemergencia de un nuevo sistema de poder y de acumulación mundial. Así, para Petras,[157] EE.UU. sería una potencia que reemerge con más fuerza a través de una nueva concentración de poder. Por otra parte, Castells subraya el desarrollo de una mayor concentración de capital y de la gestión a escala mundial, donde las decisiones de las multinacionales estarían cada vez más centralizadas en EE.UU. No se trata, afirma el español, "de que el capital no se dirija a cada Estado en particular. Sino que al realizarse el equilibrio del sistema a nivel mundial, es preciso –además de los Estados particulares– un Estado imperial, que hoy no puede ser otro más que el Estado Americano…"[158]

Los procesos de reestructuración de la economía implicarían cambios en la relación capital/trabajo, con el fortalecimiento superlativo del primero gracias a las interacciones entre capital financiero y revolución tecnológica, donde el capital constante y la acumulación basada en su productividad tendrían amplios y nuevos horizontes que condicionarían, por otra parte, un Estado altamente consumidor de tecnología y recursos militares. Asimismo, esta dinámica implicaría una nueva escala de internacionalización de la economía.

Este proceso daría origen a una nueva división internacional del trabajo donde los países más industrializados, con fuerte presencia de empresas en cadena y de producción complementaria, tenderían a monopolizar la producción y el mercado mundial, mientras que los países subdesarrollados, y especialmente los menos industrializados, quedarían muy re-

157 Petras, J., *"Critical perspectives on imperialism and social class in the Third World"*, en *Monthly Review Press*, Nueva York y Londres, 1979. H. Brochier en una visión maniqueísta, señala que la crisis es una estrategia para el mantenimiento del poder. Véase Brochier en *El concepto de crisis*, ob. cit.

158 Castells, Manuel, *La crisis económica mundial y el capitalismo americano*, pág. 325, Edit. Laiz, Barcelona, 1978. Véase también de M. Castells, "Cambio político versus cambio social. Cambio social versus cambio político. Testimonio de una trayectoria intelectual: Manuel Castells", entrevista en Revista *David y Goliath*, núm. 48, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 1985.

ducidos en su participación en la producción y el comercio internacional.[159]

Es decir que estaría emergiendo un sistema de poder multidimensional, hiperabstracto y de difícil comprensión, cuya dirección estaría altamente concentrada en élites cada vez más reducidas de los países desarrollados y minorías consistentes, emergentes en los países atrasados. El control del poder se caracterizaría por la organización de múltiples redes de conexión tecnológico-financieras, donde lo central de una economía o de una empresa ya no sería solamente la producción en sentido estricto, sino su *capacidad* productiva; en este extraño espectro, la revolución tecnológica, y más particularmente la de la informática, cumplirían un papel central.

Por otra parte, los movimientos sociales vivirían actualmente un momento de transición entre antiguas y nuevas prácticas colectivas. Las orientaciones seculares de la acción colectiva latinoamericana en términos de modernización, industrialización o liberación nacional o social, tenderían a perder vigencia de no ser que en las prácticas de los movimientos sociales y de otros agentes de la acción social se produzcan mecanismos de renovación y autotransgresión colectiva. Pero por el momento, una lectura preliminar indicaría que no hay actores históricos claramente definidos que se opongan al poder emergente; en sentido estricto, no existirían movimientos sociales, sino más bien expresiones embrionarias de los mismos.

Actualmente, lo que es posible observar en los movimientos sociales es que constituyen –unilateralizando y simplificando grandes significantes de la acción colectiva– un universo múltiple, heterogéneo y disperso de prácticas reactivas de distintas características.

En este conjunto de prácticas colectivas, puede ser que coexistan casi irreductiblemente un particularismo obrero centrado en sus condiciones de trabajo con espacios de resistencia urbana defensivos de sus condiciones de vida, un conjunto de prácticas campesinas fragmentadas en necesidades y orientaciones diversas, y una serie de movimientos culturales, etarios, étnicos, etcétera de orden más fundamentalista que cuestionador de las relaciones de poder.

Puede haber, incluso, situaciones de multi o pluri pertenencia a estas prácticas, pero aun en este caso es posible que se reproduz-

159 Véase artículo de Berthelot, Yves, "Perspectives 1985-1990: Inquietudes", y de Calderón, F., "Entre la desorganización nacional y la creatividad social: notas sobre el impacto de la crisis en Latinoamérica", Revista *David y Goliath*, núm. 48, noviembre de 1985.

can tendencias a conductas irreductibles. Este conjunto de atributos generaría una cualidad monádica generalizable para el conjunto de la acción colectiva sudamericana. Es decir que, aparentemente, la adscripción a una o más identidades, a uno o más movimientos sociales no significa que se esté en condiciones de combinar y complementar estas luchas con vistas a crear un actor histórico con capacidad de disputa por la hegemonía.

Otra característica central de estas prácticas colectivas emergentes consistiría en una atomización intensa y asimétrica que varía según las características, los espacios y los tiempos de cada país concreto. Vistos en conjunto y perspectiva, semejan una galaxia en formación, incandescente y embrionaria, y cuyas partículas aún permanecen distantes entre sí, espasmódicas, incapaces de fusionarse y de tomar una sola órbita común; serían energías dispersas que no alcanzan a transformarse en estrellas.

En este contexto de desencuentro entre una lógica, la del poder, abstracta y difícilmente aprehensible pero sólida, y la otra lógica, atomizada y puntual de las múltiples luchas sociales, por el momento sólo el Estado o lo paraestatal estén en condiciones de reconocer esta nueva lógica sistémica. El Estado se ve presionado a enfrentar estas racionalidades opuestas; por una parte debe oponerse y negociar con la nueva lógica capitalista y, a la vez, reprimir y conciliar una multiplicidad de acciones colectivas, lo que probablemente condicionará una mayor concentración de poder en él.

Sin embargo, es importante recordar que en América Latina el Estado es también parte de las relaciones sociales, y que su constitución y desarrollo están indisolublemente ligados a las relaciones sociales que lo involucran, no sólo en tanto que actor en procesos productivos y reproductivos, sino como regulador de procesos político-culturales más amplios. Precisamente por esto la interacción Estado y sociedad será probablemente una de las temáticas centrales de la reconstitución del campo del conflicto histórico de nuestras sociedades y del sistema mundial de dominación.

Pero todas estas reflexiones, ¿implicarían un proceso de fragmentación de la acción colectiva al infinito, es decir, un proceso de destrucción definitiva de los actores históricos?, ¿o es que en las prácticas analizadas pueden encontrar elementos nuevos de gestación de actores históricos?

Un primer fenómeno a señalar es que parecería no haber un sentido unidireccional, ni un epicentro, que regulen el comportamiento absoluto de nuestras sociedades. En

este sentido, no hemos encontrado un único principio que explique el funcionamiento y el cambio de los movimientos sociales; más bien, encontramos una diversidad de comportamientos que reaccionan, se adaptan y proponen de distinta manera variadas opciones sociales, y aunque esto no niega que existan tendencias recurrentes, enfatiza que los movimientos sociales no tienen una sola causa, ni un único destino.

Por otra parte, una alternativa límite para muchos movimientos sociales sería un proceso de descomposición y desintegración social crecientes, donde los actores no alcancen a constituirse plenamente, y el dinamismo de la violencia, el caos o el totalitarismo se impongan a la sociedad; en suma, una alternativa que pase por la ausencia de principios de integración y articulación consensual. Otra alternativa límite sería que estos movimientos sociales fueran portadores de un nuevo orden social, de un nuevo modelo de desarrollo, que tuvieran efectos específicos de producción de formas sociales y de valores, y que a su vez fueran condicionantes de nuevas utopías.

En este sentido, en estos movimientos específicos es posible detectar cinco pares de orientaciones coexistentes en el interior de las prácticas colectivas estudiadas; cada uno de los pares expresa una tensión entre posibilidades antagónicas.

En primer lugar, de búsqueda y consolidación cuidadosa a partir de una intensa valoración ética de la democracia y, particularmente, de los derechos humanos como portadores de un orden político moralmente distinto, versus formas de verticalismo y autoritarismo e intolerancia dentro de los movimientos.

En segundo lugar, de aceptación y, en alguna medida de valorización de la diversidad societal en el sentido más amplio del término, donde los distintos actores en formación empiezan a reconocer a los otros y buscan interactuar con ellos, versus la tendencia al reduccionismo y a la monopolización de la representatividad de la acción social, excluyendo e invalidando el discurso y la acción del otro.

En tercer lugar, de afirmación y autonomía de los mismos movimientos sociales respecto de organizaciones e instituciones externas a ellos (principalmente tendiendo a buscar una autonomía de los partidos y el Estado, pero también de toda forma de acción percibida como manipuladora), versus heteronomía, clientelismo y dependencia.

Una cuarta orientación detectada sería hacia el hallazgo de formas de producción y reproducción societal independientes en gran

medida, externas o complementarias al Estado y a la economía formal, es decir, hacia la búsqueda de nuevas formas de cooperación, de gestión, de auto o cogestión progresiva de las dificultades impuestas por la crisis, que de algún modo revitalizan la relación sociedad civil –economía, versus la reproducción de las viejas formas cristalizadas de dependencia estatal y del sistema productivo capitalista.

Una quinta orientación sería la emergencia de nuevos valores de solidaridad, reciprocidad y comunitarismo muy puntuales y específicos, que cada vez más apelan al trabajo solidario y a la decisión colectiva, versus el individualismo, la lógica del mercado y la competencia.

En fin, es posible que de la fricción entre estas tendencias antagónicas surjan formas revalorizadas de la acción social que puedan reagruparse y, a partir de la evolución de sus conflictos, constituir nuevos actores históricos que disputen las nuevas formas del poder.

En este contexto es posible que las identidades, particularmente las de los movimientos sociales, busquen un nuevo imaginario colectivo[160] en la aceptación y el reconocimiento de la diversidad señalada y se generen nuevas identidades societales compartidas a partir de la experiencia y memoria históricas de los actores y que, en definitiva, se recomuniquen y se opongan a la nueva y distinta forma de poder, tal vez como la única forma de hacerse sujetos, es decir, actores de su propia historia, de su propia sociedad.

En este sentido, el clamor que hoy escuchamos en la esquina es el olor a universo de mañana…

160 Para una mayor elaboración de esta problemática, véase F. Calderón y Mario dos Santos, "Movimientos Sociales y gestación de cultura política", ponencia presentada en el seminario sobre Cultura política y democratización, del Grupo de trabajo sobre teoría del Estado y la política, CLACSO, Bs. As., 1985, trabajo mimeografiado.

Usted tiene en sus manos la *Antología esencial* de Fernando Calderón Gutiérrez, uno de los más lúcidos y prolíficos intelectuales bolivianos. Leer la realidad nacional y regional a través de su obra es recorrer los meandros de las múltiples formas que adquieren la conflictividad, los movimientos sociales, la acción colectiva y la institucionalidad democrática en nuestra Latinoamérica.

Por ello hemos querido inaugurar con esta obra la colección "Pensamiento Político y Demodiversidad", con la cual el Órgano Electoral Plurinacional pretende contribuir al impulso del pensamiento político boliviano en el marco de la construcción del Estado Plurinacional y de la Democracia intercultural y paritaria; con sociedades que fortalezcan los mecanismos democráticos y de diálogo permanente con inclusión e igualdad social, con pluralismo y diversidad, con interculturalidad y paridad democrática, con horizonte emancipatorio.

La *Antología esencial* de Calderón está dividida en dos tomos: el primero enfocado en los desafíos de la *política y el desarrollo*, y el segundo enfocado a la *política y los movimientos socioculturales*; en ambos casos se recoge la reflexión intelectual de cuatro décadas, que oscila entre lo global, lo nacional y lo regional.

Esta publicación es fruto de un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) –del que Calderón fue Secretario Ejecutivo entre 1984 y 1991– para desarrollar y promover la difusión del debate y el pensamiento crítico regional.

CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales